

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**Minería y derechos de los pueblos indígenas en América
Latina: la disputa por el territorio en Raposa Serra do Sol**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Luis Ventura Fernández

Director

Heriberto Cairo Carou

Madrid, 2018

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA
ADMINISTRACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

**Minería y derechos de los pueblos indígenas
en América Latina: la disputa por el
territorio en Raposa Serra do Sol**

Luis Ventura Fernández

Directores de Tesis

Heriberto Cairo Carou
Jaime Preciado Coronado

Madrid, 2016

Minería y derechos de los pueblos indígenas en América Latina: la disputa por el territorio en Raposa Serra do Sol

Tesis presentada por Luis Ventura Fernández para la titulación
de Doctor por la Universidad Complutense de Madrid

Las minas son manantial efectivo de riqueza, pero no abren su seno sino con el dolor y el sudor del trabajo humano.

Bartolomé de las Casas. *Historia de las Indias*, libro I.

Sabemos que as leis do Brasil dizem que o subsolo da terra pode ser explorado. Mas queremos garantir nosso direito de escolher o que é melhor para nós.

Nota Pública “Posição da Hutukara sobre a Mineração em Terras Indígenas”, 20/05/2014

A arena da oposição entre o mercado – que singulariza – e a sociedade civil – que generaliza – é o território, em suas diversas dimensões e escalas.

Milton Santos

Este trabajo está escrito a muchas manos. Algunas son más conscientes que otras, pero lo cierto es que en el camino ha habido muchas personas que lo han hecho posible y a todas ellas expreso mi más profundo agradecimiento.

Cuando estaba concluyendo en 2010 los cursos de post-grado en *Estudios contemporáneos sobre América Latina* conocí a Heriberto Cairo y a Jaime Preciado en una semana de trabajo grupal en la Universidad de la República, en Montevideo. A partir de entonces, tuve la suerte de que me orientasen en el trabajo de Máster de Investigación y fueron ellos también los que me animaron a continuar un camino que no había previsto ni imaginado en principio. Les agradezco enormemente a ambos, a Heriberto y a Jaime, por haber creído en la intuición de este proyecto, por el incentivo y por la confianza que siempre me han transmitido. Y por haberme ayudado a organizar la mirada sobre un territorio que ya me había cautivado en lo personal: América Latina.

En Brasil, han sido muchos los amigos y compañeros de camino y de vida que, de una u otra forma y tal vez sin saberlo, han contribuido con este trabajo que ahora concluyo. Con su interés, sus preguntas, sus aportes, su cercanía y su apoyo me han ayudado a mantener y alimentar una de las cosas más importantes en este tipo de empeños: su sentido y su por qué. Elaine, Liza, Dom Roque, Paulo, Chico, André, Maria Jose, Nelita, Gilmara, Jaci Guilherme, Fernando, Dário, Marizete, Vanilsa, Enzo y muchos más nombres que saben, porque están cerca, de la necesidad de seguir contribuyendo con la realidad concreta de la que hablo en este trabajo.

Quiero agradecer a los Misioneros de la Consolata por todo lo compartido y todo lo facilitado. Por la oportunidad que me dieron de haberme asomado durante estos años a la realidad de los pueblos indígenas de Roraima y por haber disponibilizado buena parte del material que utilicé para esta investigación.

De un modo particular, un agradecimiento profundo y mi reconocimiento a Carlo Zacchini, una de las personas que se ha aproximado con más sensibilidad y competencia al mundo indígena. Carlo ha sido un amigo y un maestro, un compañero y una antorcha y me ha regalado muchos momentos de diálogo y de aprendizaje. Gracias, Carlo, por todo.

Si dedicar es ofrecer algo, entonces quiero dedicar este trabajo, que no fue pensado para mí.

A las comunidades indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, por su perseverancia y su creatividad política, por hacer de la unión la fuerza más incontestable. Por su lucha, y por su sonrisa en la lucha. A través de ellas, lo dedico también a todas aquellas comunidades indígenas y campesinas que viven en la tierra y con la tierra; la significan y la defienden y, defendiéndola, nos abren a todas nuevas posibilidades.

A Rafael y María Luisa. Siempre me habéis animado a vivir la vida que me dísteis con intensidad; a vivirla adrede. Este trabajo es totalmente vuestro. Solamente ensancha el caudal del río que comenzasteis hace 55 años, como uno más de los incontables frutos que habéis dado, simplemente, amando.

A Mayu, Anai, Irén e Iara, por la vida que me regaláis cada día y por el tiempo que este trabajo os ha restado. Desde que llegasteis todo tiene otro sentido y otro horizonte. Cada paso que doy y cada palabra que escribo dejaron de ser solamente míos. El futuro posible que reivindico en este trabajo os pertenece a vosotros más que a nadie, a los de vuestra edad y a la posibilidad que tengáis de abrazar lo diverso.

Y sobre todo para ti, Ester. Por la vida compartida y por la lucha acompañada, por ser testigo de lo que aquí cuento. Por todo lo que has dado y ofrecido para que este trabajo fuese posible y porque, a pesar de ello, no has dejado nunca de animarme y de creer en esto. Porque sos pueblo y porque en el día a día somos mucho más que dos.

Índice

Introducción	23
<i>Problema de investigación y estrategias metodológicas</i>	<i>27</i>
<i>Presentación del problema de investigación</i>	<i>28</i>
<i>Procesos y estrategias metodológicas</i>	<i>33</i>
PRIMERA PARTE. DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA A LA ECOLOGÍA POLÍTICA: HACIA UN MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA	
Capítulo 1	
Hacia un proyecto teórico de referencia	53
1.1 De la fragmentación del conocimiento al diálogo de saberes.....	53
1.2. Referencias teóricas para el análisis.....	58
1.2.1. Geografía Política y análisis de sistema-mundo	58
1.2.2. Geografía Nueva	60
1.2.3. Antropología de la Territorialidad	60
1.2.4. Ecología Política en América Latina.....	61
Capítulo 2	
La mundialización de los territorios.....	67
2.1. El sistema-mundo como unidad de análisis.....	68
2.2. Historicidad de la economía-mundo: de la perspectiva de lo global al discurso desarrollista	70
2.2.1. El surgimiento de la economía-mundo y la sociedad moderna	71
2.2.2. Sistemas históricos y sistemas técnicos: una propuesta dialógica entre dos perspectivas teóricas	75
2.2.3. Simultaneidad y acumulación desigual de los tiempos	81
2.2.4. El desarrollo y la fuerza semántica del proyecto moderno.....	84
2.3. La economía-mundo y la re-configuración de los espacios	92
2.3.1. Centro, periferia y semiperiferia	92
2.3.2. División territorial del trabajo.....	94
2.3.3. Nuevas metáforas espaciales	100
2.4. Sistema escalar: del lugar de la experiencia al lugar de las decisiones.....	105

Capítulo 3

Crisis ambiental y procesos de resistencia social.....	111
3.1. <i>Globalización ecológica, casa común y la insustentabilidad de lo “normal”: la fractura del relato moderno</i>	<i>113</i>
3.2. <i>Crisis ambiental y de modelo: la naturaleza revisitada</i>	<i>118</i>
3.2.1. <i>La lógica del dominio y la negación de la naturaleza</i>	<i>118</i>
3.2.2. <i>Abordajes teóricos y políticos hacia una superación de la crisis.....</i>	<i>122</i>
3.3. <i>Economía extractivo-exportadora y crisis ambiental</i>	<i>128</i>
3.3.1. <i>Actividades y tipología de la economía extractivista.....</i>	<i>129</i>
3.3.2. <i>Economía de carácter cíclico y centrípeto</i>	<i>133</i>
3.3.3. <i>Extractivismo, conflictos socioambientales y re-configuración territorial.....</i>	<i>139</i>
3.4. <i>Actores, estrategias y narrativas en la economía extractivista.....</i>	<i>145</i>
3.4.1. <i>De la legitimidad a la extrahección: la comunión de intereses entre lo público-instrumental y lo privado</i>	<i>146</i>
3.4.2. <i>Movimientos socio-territoriales.....</i>	<i>150</i>
3.4.3. <i>Pueblos indígenas y los derechos colectivos sobre la tierra.....</i>	<i>152</i>

Capítulo 4

Territorio, territorialidad y territorialización	158
4.1. <i>Más allá del Estado territorial</i>	<i>159</i>
4.2. <i>Territorio, territorialidad y territorialización. Conceptos para el análisis</i>	<i>161</i>
4.2.1. <i>Territorialidad: el espacio habitado, significado y normatizado</i>	<i>161</i>
4.2.2. <i>Territorio como construcción social e histórica, material y simbólica</i>	<i>166</i>
4.2.3. <i>Territorio, localidad y saberes: una aproximación a la percepción de los pueblos indígenas sobre el territorio.....</i>	<i>168</i>

SEGUNDA PARTE. RAPOSA SERRA DO SOL, LOCALIDAD Y GLOBALIDAD

Capítulo 5

Territorio y bienes naturales de América Latina para el sistema-mundo....	182
5.1. <i>Minería y extractivismo en la historia del proyecto colonial sobre América Latina</i>	<i>183</i>
5.1.1. <i>Minería, territorios y esclavitud.....</i>	<i>184</i>
5.1.2. <i>Estados independientes, economías dependientes: del colonialismo interno al neoliberalismo</i>	<i>188</i>
5.2. <i>Nuevo ciclo extractivista y re-primarización en los albores del siglo XXI</i>	<i>192</i>
5.2.1. <i>Características del nuevo ciclo expansivo 2002-2014 en América Latina.....</i>	<i>197</i>

5.2.2. <i>La participación de China en la nueva fase expansiva del mercado global en América Latina</i>	203
5.3. <i>(Neo) extractivismo: la encrucijada entre las nuevas dinámicas globales y la confluencia de gobiernos “populares”</i>	205
5.3.1. <i>(Neo) extractivismo y retorno del Estado</i>	206
5.3.2. <i>Contradicciones, tensiones y límites en un Estado disputado</i>	215
5.4. <i>Conflictos socioambientales, movimientos sociales y estándar de derechos</i>	221
Capítulo 6	
Amazonia, territorio habitado	234
6.1. <i>Amazonia, socio-diversidad y territorialidad(es)</i>	235
6.1.1. <i>Población, diversidad e inter-relaciones</i>	238
6.1.2. <i>La construcción social e histórica de la(s) territorialidad(es)</i>	246
6.2. <i>Tres pilares para el proyecto colonial en la Amazonia</i>	249
6.3. <i>(Neo) extractivismo y Amazonia</i>	254
6.3.1. <i>Agricultura y ganadería</i>	258
6.3.2. <i>Combustibles fósiles: petróleo y gas natural</i>	261
6.3.3. <i>Hidroeléctricas en la Amazonia</i>	264
6.4. <i>Minería y Amazonia</i>	269
6.4.1. <i>Tipos de actividad minera</i>	269
6.4.2. <i>Minería ilegal: balsas, barrancos y corruptelas</i>	273
6.4.3. <i>El crecimiento de la minería en la Amazonia</i>	280
6.5. <i>La construcción de una agenda propia entre dos imaginarios externos</i>	282
Capítulo 7	
Brasil, construcción de un Estado	288
7.1. <i>Formación del Estado brasileño, pueblos indígenas y lucha por la tierra</i>	289
7.1.1. <i>Claves de la política indigenista en la formación del Estado brasileño</i>	290
7.1.2. <i>De las drogas del sertão y la madera que llora: colonización y territorialidad en la Amazonia brasileña.</i>	29091
7.2. <i>Brasil en el contexto (neo) extractivista de inicios del siglo XXI</i>	303
7.2.1. <i>Brasil y la brújula del crecimiento acelerado</i>	306
7.2.2. <i>Expansión y especialización primaria del comercio exterior brasileño</i>	309
7.2.3. <i>Acumulación de capital en el campo como política de Estado: crecimiento y centralidad del agronegocio</i>	314
7.2.4. <i>Grandes obras de Infraestructura: el Estado inversor y financiador</i>	318
7.3. <i>Minería y perspectivas de crecimiento en Brasil</i>	321

7.3.1. 2000-2030: tres décadas confiadas al subsuelo	322
7.3.2. Marco normativo de la actividad minera	332
7.4. Tierras indígenas, derechos y minería en Brasil.....	341
7.4.1. Del desarrollismo del régimen militar a la Constitución Federal de 1988	342
7.4.2. De la Constitución de 1988 al (neo) desarrollismo del siglo XXI	353
Capítulo 8	
Raposa Serra do Sol, territorio en disputa	368
8.1. A los pies del Monte Roraima: territorialidad(es) indígena(s).....	369
8.1.1. “A la cual los geógrafos llaman Guyana”	374
8.1.2. República Cooperativa Guyana: el Essequibo como territorio indígena	380
8.1.3. El lugar de los Tepui: la gran sabana venezolana	386
8.1.4. Del lado de Brasil: la cuenca del Río Branco	393
8.2. De río a río. Proceso histórico de territorialización en Raposa Serra do Sol.....	401
8.2.1. Relaciones, ambiente y organización social y política en Raposa Serra do Sol.....	401
8.2.2. Fazendeiros, garimpeiros, Estado y comunidades indígenas: la defensa de la tierra	407
8.2.3. Estrategias de organización comunitaria y emergencia de Raposa Serra do Sol	414
8.3. Actividad minera en Raposa Serra do Sol. Reconstrucción socio-histórica	428
8.3.1. Del Tacutú a Santa Rosa: el recorrido de la minería hasta la década de 80....	428
8.3.2. Décadas de 80 y 90: invasión garimpeira en Raposa Serra do Sol	438
8.3.3. La implantación del Municipio de Uiramutã o la herida abierta del garimpo.	444
8.4. La presión de la minería empresarial sobre los territorios indígenas de Roraima	449
8.4.1. Cincuenta años de avance minero sobre Roraima.....	452
8.4.2. Requerimientos mineros en Raposa Serra do Sol	461
8.5. Posición de las organizaciones indígenas sobre el avance de la minería en sus territorios	466
Conclusiones	470
Anexos.....	498
Bibliografía y documentación	512

Siglas

ABRAE – Áreas Bajo Régimen de Administración Especial [legislación Venezuela]

ACD – Alianza Cívica por la Democracia

ANM – Agência Nacional de Mineração [prevista en el nuevo Código Minero de Brasil]

ACR – Associação Comercial de Roraima

BID – Banco Interamericano de Desarrollo

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

CAAAP – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica [Perú]

CEDI – Centro Ecumênico de Documentação e Informação

CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL – Comisión Económica para América Latina

CF – Constitución Federal

CFEM – Compensação Financeira pela Exploração do Mineral

CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDSE – Cooperación Internacional por el Desarrollo y la Solidaridad

CIMI – Conselho Indigenista Missionário [Brasil]

CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista

CINTER – Conselho Indígena do Território de Roraima

CIR – Conselho Indígena de Roraima

CLAES – Centro Latinoamericano de Ecología Social

CNPI – Comissão Nacional de Política Indigenista [Brasil]

CNPM – Conselho Nacional de Política Mineral [prevista en el nuevo Código Minero de Brasil]

CODESAIMA – Companhia de Desenvolvimento de Roraima

COIAB – Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

COIAM – Coordinadora de Organizações Indígenas de la Amazonia, [Venezuela]

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento

CONAGE – Coordenação Nacional de Geólogos

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

CUT – Central Única dos Trabalhadores

DOU – Diário Oficial da União

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral

EID – Eje de Integración para el Desarrollo

EPE – Empresa de Pesquisa Energética

ESEC – Estação Ecológica

FLONA – Floresta Nacional

FMI – Fondo Monetario Internacional

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração

IEA – International Energy Agency

IIRSA – Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica

IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária

ISA – Instituto SocioAmbiental

LOPCI – Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, [Venezuela].

MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MME – Ministério de Minas e Energias

MPF – Ministério Público Federal [Brasil]

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PAC – Plano de Aceleração do Crescimento [Brasil]

PIN – Programa de Integração Nacional [Brasil]

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio

PNGATI – Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena [Brasil].

PNM – Plano Nacional de Mineração

PNPB – Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis, [Brasil]

PNUMA – Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

PT – Partido dos Trabalhadores [Brasil]

RADAM – Projeto Radar na Amazônia [Brasil].

RAISG – Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.

RESEX – Reserva Extractivista.

SIGMINE – Sistema de Informações Geográficas da Mineração, [Brasil].

TF – Taxa de Fiscalização

TH – Taxa por Hectare.

TLC – Tratado de Libre Comercio

UC – Unidade de Conservação [Brasil].

Índice de imágenes

Mapas

Mapa 1. Mapa de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en destaque sobre el mapa de Roraima y de Brasil.....	28
Mapa 2. Mapa de los Ejes de Integración y Desarrollo de la Iniciativa IIRSA	195
Mapa 3. Mapa del EID Amazonas, dentro de la iniciativa IIRSA	254
Mapa 4. Mapa del EID Perú-Brasil-Bolivia, dentro de la iniciativa IIRSA	255
Mapa 5. Mapa del EID Escudo Guayanés, dentro de la Iniciativa IIRSA.....	256
Mapa 6. Lotes petroleros en Amazonia por fase de actividad	261
Mapa 7. Zonas mineras em Amazonia según fase de actividad	281
Mapa 8. Área <i>circum</i> -Roraima	369
Mapa 9. Rio Cotingo, em la TI Raposa Serra do Sol	372
Mapa 10. Localización del Macizo Guayanés en relación al margen izquierdo del rio Amazonas	375
Mapa 11. Región <i>circum</i> -Roraima en la República Cooperativa Guyana	380
Mapa 12. Mapa de la República Cooperativa Guyana dividida en Regiones	381
Mapa 13. Trazado de las carreteras BR-174 y BR-210 e impacto en los territorios indígenas Waimiri-Atroari, Yanomami y Raposa Serra do Sol	395
Mapa 14. Territorios indígenas, proyectos de asentamiento rural y áreas de preservación ambiental en Roraima	398
Mapa 15. Área de mayor invasión garimpeira en las décadas de 80 y 90, TI Raposa Serra do Sol	439
Mapa 16. Requerimientos mineros en activo afectando tierras indígenas en el Estado de Roraima	451
Mapa 17. Localización de requerimientos mineros en la TI Raposa Serra do Sol	461

Cuadros de contenido

Cuadro 1. Matriz relacional entre los sistemas históricos (Wallerstein) y los sistemas técnicos (Santos)	80
Cuadro 2. Procesos de mundialización de los territorios según Milton Santos	96
Cuadro 3. Tipos de extractivismo. Eduardo Gudynas, CLAES	131
Cuadro 4. Ciclo de acumulación por desposesión en la economía extractivo-exportadora. 143	
Cuadro 5. Acuerdos de Colaboración entre la República Popular China y Venezuela	204
Cuadro 6. Secuencia de deforestación en la Amazonia relacionando el sector maderero y el sistema agropecuario	258
Cuadro 7. Explotación petrolera en el Parque Yasuní, Ecuador	262
Cuadro 8. Explotación petrolera y gasífera en el Proyecto Camisea, Perú	263
Cuadro 9. Características del sistema de extracción del caucho en la Amazonia brasileña, siglo XIX	299
Cuadro 10. Auge de la minería ilegal en la Amazonia brasileña en la segunda mitad del siglo XX	302
Cuadro 11. Regulación de la actividad garimpeira en la normativa brasileña	334
Cuadro 12. Procedimiento para la autorización de exploración y explotación minera	

conforme el Código Minero vigente en Brasil	335
Cuadro 13. Dispositivos Constitucionales sobre Minería y Tierras Indígenas, CF 1988	351
Cuadro 14. El <i>Tepui Roraimá</i> en la narrativa mítica de los pueblos pemón y kapon	371
Cuadro 15. Minería, BR-174 e hidroeléctricas en el territorio de los Waimiri-Atroari	436
Cuadro 16. Minería en el territorio Yanomami	438

Gráficos

Gráfico 1. Evolución de los precios de productos minerales principales, 2005-2011	192
Gráfico 2. Exportaciones de productos primarios y manufacturados según su participación en el total de las exportaciones nacionales. Año 2011	197
Gráfico 3. Ingresos fiscales provenientes de productos primarios	198
Gráfico 4. Hidroeléctricas proyectadas en la Amazonia según fase de ejecución	264
Gráfico 5. Hidroeléctricas en la Amazonia según su capacidad proyectada de generación de energía	265
Gráfico 6. Evolución del PIB y PIB <i>per cápita</i> . Brasil, 2000-2009	305
Gráfico 7. Saldo entre las exportaciones y las importaciones. Brasil, 2000-2009	310
Gráfico 8. Composición de la cartera exportadora de Brasil, 2000-2010	311
Gráfico 9. Proyectos con participación de financiamiento por parte del BNDES en 2011 ..	319
Gráfico 10. Composición de las exportaciones del sector minero en Brasil, 2012	322
Gráfico 11. Previsión de producción, exportación y consumo de hierro (Mt)	327
Gráfico 12. Previsión de producción, exportación y consumo de oro (Mt)	328
Gráfico 13. Previsión de producción, exportación y consumo de tantalio (Mt)	328
Gráfico 14. Previsión de extracción de minerales metálicos y metalurgia (Mt)	329
Gráfico 15. Previsión de extracción de minerales no-metálicos (Mt)	329
Gráfico 16. Donación de dinero de empresas mineras para la campaña electoral de 2014 en Brasil	340
Gráfico 17. Situación general de las Tierras Indígenas en Brasil, diciembre de 2013	353
Gráfico 18. Número de Tierras Indígenas homologadas por períodos de gobierno, 1985-2013	354
Gráfico 19. Áreas mineras en la cuenca del Orinoco según la fase de explotación	390
Gráfico 20. Evolución de los requerimientos mineros en Roraima 1965-2014	453
Gráfico 21. Crecimiento acumulado del número de requerimientos mineros en Roraima 1965-2014	453
Gráfico 22. Distribución por fecha de protocolo de los requerimientos mineros actualmente en activo dentro de la TI Raposa Serra do Sol	462

Figuras

Figura 1. Imagen de comunidad ribereña amazónica, en la orilla del Río Purús, Estado Amazonas/Brasil	241
Figura 2. Imagen de barrio fluvial de la ciudad de Tapauá, en el curso medio del río Purús, Estado de Amazonas	243
Figura 3. Trabajador de la empresa Palmaplan, dedicada a la producción de biodiesel a partir de la palma aceitera, en la región sur del Estado de Roraima, Brasil	260
Figura 4. Área de <i>várzea</i> . Plantación de maíz en la orilla del río Purús	266
Figura 5. Garimpeiro utilizando la bateia para <i>lavar</i> la tierra	273
Figura 6. Minero utilizando agua a propulsión para excavación en terreno seco	275

Figura 7. Minero <i>buceador</i> , responsable por colocr la maraca en el fondo del agua	276
Figura 8. Caja resumidora	276
Figura 9. Carta de encabezamiento del Informe Figueiredo	295
Figura 10. Tabla sobre la situación de requerimientos de pesquisa minera incidentes en tierras indígenas, enero-marzo 1986	346
Figura 11. Propuesta de Enmienda Popular al Proyecto de Constitución, Capítulo de los Pueblos Indígenas	349
Figura 12. Panorámica del <i>Tepui Roraimâ</i> , conocido como Monte Roraima	371
Figura 13. Panorámica de región de campos con islas de mata en Venezuela	386
Figura 14. Vista panorámica de la región serrana, al norte de Raposa Serra do Sol	401
Figura 15. Imagen de la II Feria de Semillas Tradicionales en el Centro Indígena de Formación y Cultura Raposa Serra do Sol	402
Figura 16. Dibujo realizado en tejido que muestra la subdivisión territorial de la región Serras e diversos sub-centros	405
Figura 17. Proyecto-ganado bovino de la comunidad	421
Figura 18. Comunidad Indígena de Maturuca preparándose para Asamblea	422
Figura 19. Panorámica de la comunidad Maturuca preparándose para acoger la Asamblea Estadual	423
Figura 20. Escultura que representa el mapa de la TI Raposa Serra do Sol, en el centro de la aldea de Maturuca	426
Figura 21. Garimpo de diamante	428
Figura 22. Lavando la grava en el garimpo	431
Figura 23. Placa en la céntrica Praça das Águas, Boa Vista, honrando a aquellos que “modelaron co suor y sangre” el perfil de la sociedade roraimense	432
Figura 24. Monumento al Garimpeiro, localizado en la Praça do Centro Cívico, en Boa Vista	433
Figura 25. Construcción BR-174 entre Manaus y la frontera com Venezuela	435
Figura 26. Carretera BR-174 en la actualidad, atravesando el territorio indígena Waimiri-Atroari	435
Figura 27. Área del territorio Waimiri-Atroari inundada por impacto de Hidroeléctrica de Balbina construida en la década de 70	436
Figura 28. Área de Minería Taboca, iniciada en 1979 en el interior del territorio Waimiri-Atroari	436
Figura 29. Mapa de Uiramutã dibujado por los indígenas macuxi en 2003	445

Introducción

Vivimos un momento de la historia en el que la perspectiva de lo global parece habernos acercado, al mismo tiempo, a la singularidad de cada rincón del planeta. De este modo, el análisis de la globalidad de los acontecimientos termina siendo un modo de aproximarnos a la experiencia del lugar; y, en la dirección inversa, la observación de los fenómenos en la escala local nos permite relacionar, tejer e hilar una mirada amplia y coherente de la realidad en su conjunto. Todo parece estar conectado y uno de los principales desafíos para las ciencias sociales puede residir en esa capacidad de dar cuenta de las conexiones y las explicaciones que interactúan entre la escala del lugar y la del sistema-mundo moderno. En cierto sentido, una mirada sobre un territorio y una comunidad local específica es una reivindicación de su *lugar* en la historia de todos, del derecho-a-ser-con-el-mundo desde una perspectiva de alteridad y diversidad.

Toda intención investigativa tiene su propia génesis o modo de nacer y este trabajo no es diferente. En mi caso, he tenido la oportunidad de vivir durante nueve años en una posición privilegiada de proximidad que me ha permitido comprender y observar uno de los procesos de lucha territorial más significativos en Brasil: la demarcación y homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. A esta experiencia en lo local le debo la curiosidad investigativa que se expresa, en parte, en este trabajo. Si el lugar, como tendremos oportunidad de exponer, es el espacio donde es posible el acontecer solidario, la experiencia y la cotidianidad, al mismo tiempo y por ese motivo se convierte en terreno abonado para el conocimiento.

A semejanza de cualquier trabajo artesanal, la investigación también vive un proceso en el que autor y obra se van amasando y formando juntos. El producto final lleva en sí una parte de experiencia propia que no siempre se consigue o se puede expresar de modo palmario. El resultado siempre tendrá un carácter único y cuando el trabajo concluye, como sucede en este caso, lo hallado tiene más de punto y seguido – de nuevas ventanas abiertas – que de final de un texto.

La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada en el Estado de Roraima, al norte de la región amazónica de Brasil, se ha convertido en uno de los territorios indígenas más emblemáticos en el contexto de las luchas territoriales ocurridas en el país durante las

últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los conflictos que en él se han producido, la oposición de intereses antagónicos con una inequidad manifiesta entre los actores, la persistencia y genuinidad de la acción de las comunidades y la conclusión de todo ese proceso con la garantía de los derechos constitucionales han configurado este caso como uno de los más simbólicos y representativos.

En abril de 2005, el Gobierno Federal de Brasil culminó el proceso de reconocimiento de Raposa Serra do Sol como tierra indígena, conforme la obligación que le imprime la Constitución Federal de 1988. Habían transcurrido más de treinta años desde que las comunidades indígenas de la región comenzaran a articularse y promover iniciativas por la retomada integral del espacio que habitaban; y diecisiete años desde que el país se dotase a sí mismo de una nueva Constitución que, recogiendo la trayectoria jurídica anterior, reconocía y confirmaba los derechos territoriales de los pueblos indígenas como derechos originarios. Al culminar el proceso administrativo, el Estado garantizaba el derecho de las comunidades de Raposa Serra do Sol al usufructo exclusivo de los bienes naturales existentes en su territorio y a determinar libremente su propio proyecto de vida, según sus propios modelos de organización social y cultural.

Las fuertes presiones procedentes de grupos de poder económico y político – regionales y nacionales – contra este reconocimiento territorial derivaron en una judicialización del proceso homologatorio de Raposa Serra do Sol que obligó en los años 2008 y 2009 a la intervención del Supremo Tribunal Federal, máxima instancia del Poder Judicial del país. Estos grupos, entre los que destacaban el propio Gobierno del Estado de Roraima, aducían que la declaración de Raposa Serra do Sol como tierra indígena dañaba los intereses económicos de la región, para la cual defendían una vocación económica orientada para la explotación agroindustrial y la exportación de bienes forestales - como la madera - de *commodities* agrícolas - como la soja - y de recursos minerales. En 2009, después de acalorados debates jurídicos y políticos, el Supremo Tribunal decidió mantener la Homologación del territorio indígena, ordenando la salida del resto de ocupantes y haciendo valer el derecho territorial reconocido en la Constitución y en el marco internacional vigente.

Como en muchos otros casos, la garantía definitiva de que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas serían respetados había asumido un perfil profundamente jurídico, con un tecnicismo estratégico con el cual unos y otros pretendían apropiarse de la interpretación de la norma. Pero más allá de la disputa técnico-jurídica – que acabó siendo fundamental - lo que estaba en juego era una cuestión mucho más profunda: la tensión entre la imposición de la territorialidad hegemónica del Estado, con sus lógicas económicas y de soberanía, frente a las diversas territorialidades que en él se dan y, con ellas, la extraordinaria sociodiversidad que persiste dentro de los proyectos homogeneizadores de los Estados-nación. En ese horizonte disputado sobre el territorio de Raposa Serra do Sol, los intereses económicos y políticos enfocaban, entre otras, las riquezas minerales.

La minería ha estado presente en Raposa Serra do Sol desde los primeros años del siglo XX. La existencia de oro y diamantes en la cuenca del Rio Branco siempre fue un factor de atracción con el que grupos de poder económico y político movilizaron a millares de personas, originarias de otros puntos del país, para emprender supuestamente nuevas oportunidades de vida alimentadas por el valor de las piedras preciosas. La implantación de modo ilegal del sistema de extracción minera conocido como *garimpo* tendría lugar en diversos rincones de la región de Roraima, en los diferentes territorios indígenas y, también, en Raposa Serra do Sol. Los impactos de esta actividad minera han sido muy importantes desde los diversos puntos de vista económico, social, cultural y ambiental.

Además de la expansión de la minería ilegal, parte de la élite política y del sector minero han librado una lucha en Brasil por la regulación de la minería empresarial a media y gran escala dentro de los territorios indígenas. Durante las tres últimas décadas, varias iniciativas legislativas circulan en el Congreso Nacional con el fin de abrir las tierras indígenas, territorios de derechos colectivos, a la entrada de la iniciativa privada de la minería. Diversos estudios coinciden en la presencia de riquezas minerales estratégicas en el Macizo de las Guayanas, región a la que pertenece el Estado de Roraima. Para la lógica de acumulación del capital minero, la apertura de las tierras indígenas, como Raposa Serra do Sol, a la extracción de minerales para el mercado nacional o la exportación significaría un escenario excepcionalmente atractivo y de grandes ventajas competitivas; sin embargo, para la lógica de quien habita y significa el lugar, las comunidades indígenas, el horizonte posible dejaría de pertenecerles plenamente.

Nos encontramos, así, en un escenario en que intereses contradictorios se sobrepone en un mismo espacio. La actividad minera se configura como una especie de *frontera perenne* sobre el territorio de Raposa Serra do Sol, comprometiendo las perspectivas propias de vida de las comunidades indígenas. La habilidad para resolver estos campos sociales donde lo antagónico se reproduce con dureza puede conducirse, básicamente, desde dos perspectivas: la geopolítica de la mediación y el equilibrio o la precedencia del derecho. En la primera senda, las desiguales relaciones de poder consustanciales a los procesos políticos suelen terminar imponiendo sus lógicas bajo fórmulas aparentes de diálogo y acuerdo; en la segunda vereda, las sociedades consiguen tornarse más creíbles y posibles delante de ellas mismas y de las generaciones siguientes.

En todo caso, lo local siempre se sitúa en un espacio que es mayor que él, lo contiene y lo significa. No desde una perspectiva determinista, sino dialéctica. Localidad y contexto, lugar y globalidad, se construyen mutuamente. Por eso, la posibilidad de comprender y resolver un conflicto en el lugar puede requerir una perspectiva más amplia. La situación que se vive alrededor de Raposa Serra do Sol es similar, aunque en términos diversos, a la de otros territorios indígenas de Roraima - particularmente la Tierra Indígena Yanomami - como se aprecia en los relatos que se presentan una y otra vez en las diversas asambleas indígenas de Roraima. De igual modo, la misma presión sobre los recursos minerales es una realidad también en las tierras indígenas localizadas del otro

lado de las fronteras nacionales de Guyana y Venezuela. Este conjunto de situaciones se presentaba delante de mí como una realidad que sobrepasaba lo estrictamente local y asumía un perfil, cuanto menos, regional en el imponente escenario de las Guayanas.

Más adelante tuve la oportunidad de conocer cómo este contexto de disputa por el territorio que se daba en la región donde vivía tenía una réplica aún mayor y más integrada en el espacio amazónico. Comunidades indígenas, campesinos, pescadores y comunidades tradicionales de toda la Amazonia libraban, al mismo tiempo, muy parecidas batallas en la defensa de los territorios que habitan, ante el avance de nuevos frentes económicos: la diseminación de proyectos petroleros, gasíferos o minerales; la expansión de una agricultura y una ganadería dirigidas a la exportación; la permanente sangría de la deforestación y la retirada de madera; o la construcción de grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas o carreteras. La interacción - compleja pero explícita - que existe entre estos diversos frentes económicos, inseridos claramente en planificaciones económicas de gran escala como la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en Suramérica - IIRSA¹ o el Plan de Aceleración del Crecimiento- PAC en Brasil, apuntaba a la emergencia de una nueva fase del modelo de acumulación capitalista, reproduciendo los patrones de primarización de las economías locales a través de la exportación masiva de bienes naturales. Su necesidad de disponer del control de los territorios y del acceso a estos bienes desencadenaba un nuevo ciclo de disputas por el lugar, protagonizadas por pueblos indígenas, campesinos y comunidades tradicionales.

Mi universo de análisis se había ampliado en una dirección que iba de lo local a una perspectiva regional y, posteriormente, a una escala global. Me resultaba transparente el hecho de que la presión mantenida sobre Raposa Serra do Sol por grandes intereses económicos pudiera explicarse dentro de un contexto más amplio y de dinámicas y decisiones políticas y económicas que trascendían la localidad, aunque era allí donde se implementaban. Describir y explicar esas complejas relaciones que se producen en las diversas escalas que van de lo local a lo global - entendidos como polos de un entramado mucho más denso - se iba definiendo para mí como un desafío y una búsqueda. Fruto de todo este proceso nació la propuesta de investigación que ahora presento.

Siempre tuve el convencimiento de que las oportunidades investigativas ancoradas en el mundo académico tienen una responsabilidad ética de contribuir significativamente con los fenómenos sociales y políticos que se producen en el entorno. Allí donde se enfrentan las lógicas y los proyectos de vida de los diversos actores del conflicto, la contribución académica puede darse en la forma de tentativas de explicación que consigan congrega la perspectiva histórica, la densidad del presente y, en cierto sentido, el horizonte de una sociedad justa y plural; de una sociedad posible.

¹ Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional de Sur-América. Actualmente hace parte del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento-COSIPLAN, órgano de UNASUR.

Problema de investigación y estrategias metodológicas

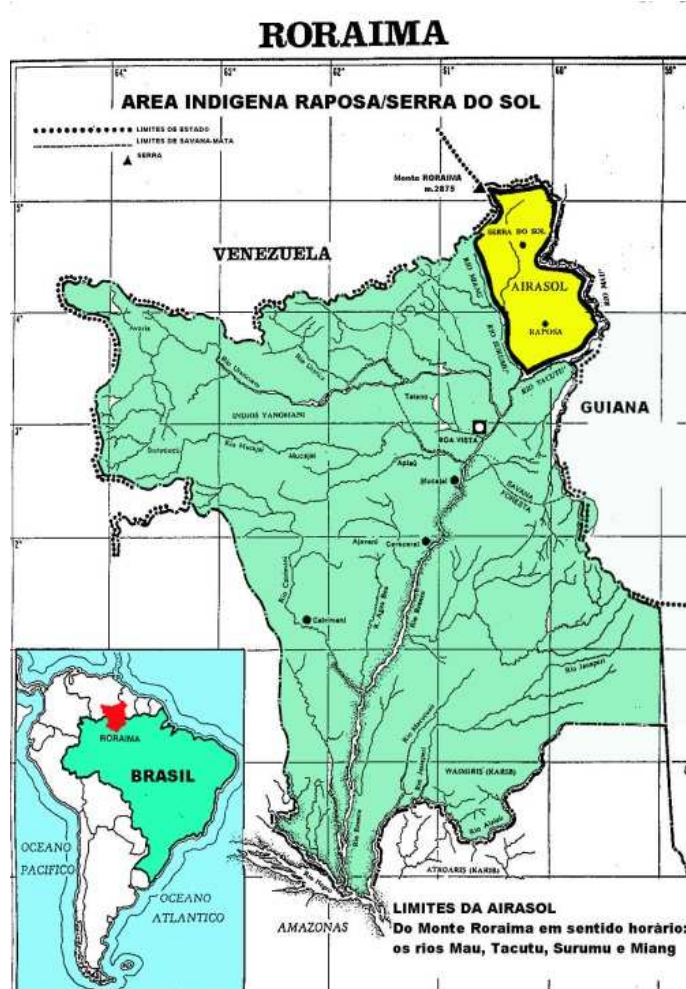
“Meus planos de viagem interessam a todos, naturalmente, e são discutidos com entusiasmo, com os mapas à mão. Alguns passageiros não acreditam muito em minha missão até os índios bravos e estão firmemente convencidos de que quero procurar ouro e minérios nas serras inexploradas. Dizem que há muitos cristais bonitos no Tacutu”.
Notas de Theodore Koch-Grünberg en Manaus, al iniciar viaje hacia el Rio Branco, Roraima, el 16 de junio de 1911

La investigación que presentamos en este trabajo se encuadra dentro de la trayectoria de la ecología política y la geografía política en América Latina y enfoca la cuestión del conflicto entre la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la expansión del extractivismo minero.

Para abordar esta problemática, se hacía necesario proponernos un recorte social y geográfico donde operar el trabajo investigativo. Nuestro recorte corresponde a la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, situada al norte de la Amazonia brasileña, en el Estado de Roraima, en el límite con las fronteras de los Estados de Guyana Inglesa y Venezuela (*ver Mapa 1*).

A pesar de la necesidad de este recorte socio-geográfico, debemos aclarar desde el inicio que esta investigación no está concebida como un estudio específico de caso o una etnografía de lo local en el sentido más convencional. Ambos abordajes serían absolutamente interesantes y necesarios y de hecho ya han producido trabajos de relevancia, algunos de los cuales fueron fundamentales en nuestra investigación. Pero con nuestra opción investigativa pretendemos incorporar otros niveles de articulación y de análisis que sobrepasan lo local, de modo que consigamos situar la problemática concreta de Raposa Serra do Sol en el contexto de las luchas territoriales que se dan hoy en toda la región amazónica por causa de la expansión de la frontera extractiva y minera.

Se trata, en este caso, de un estudio de naturaleza multiescalar, en el cual intentaremos que el análisis de lo local nos muestre las dinámicas que se producen en una esfera más amplia - regional, nacional o global - al mismo tiempo que el análisis de lo global nos ayude a explicar la naturaleza del conflicto particular. Podríamos decir que el recorte geográfico propuesto no tiene una intencionalidad concluyente en sí: nos sirve, más bien, para comprender la problemática en una dimensión mayor y, de este modo, comprender también mejor lo que sucede en la esfera específica de ese territorio. Nuestro propósito es que esta permanente circulación entre las diversas escalas se refleje en el conjunto de la investigación.



Mapa 1. Mapa de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en destaque sobre el mapa de Roraima y de Brasil.

Presentación del problema de investigación

Como hemos comentado, la problemática de la minería no es una realidad exclusiva de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. También se da en otros territorios indígenas próximos, dentro del propio Estado de Roraima; así como también se extiende de modo acelerado sobre buena parte de la Amazonia brasileña, afectando directa o indirectamente a una diversidad de espacios sociales como tierras indígenas, reservas extractivistas, áreas de comunidades afro-descendientes o de pescadores artesanales.

Si continuásemos ampliando la perspectiva, descubriremos fácilmente que la expansión de las actividades mineras, a diferente escala, opera en toda la región pan-amazónica y lo hace del mismo modo en la mayor parte de los Estados de América del Sur y América Central. Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno que se produce en una escala continental y que puede ser explicado desde una perspectiva *inter-escalar*.

Por otro lado, también observamos que la expansión de la actividad minera no es un fenómeno aislado, sino que va de la mano de otras fronteras económicas como la exploración y explotación de hidrocarburos o la ocupación de grandes extensiones de tierra para monoculturas de exportación o ganadería extensiva. Estas fronteras económicas, en su conjunto, se benefician de grandes proyectos de infraestructura en el sector energético o de transporte que les son funcionales. Todos estos sectores están aumentando su área de operación y el volumen de sus activos en la región amazónica y en toda América Latina. Aparentemente, nos encontramos delante de una convergencia e interdependencia de intereses que confirman un nuevo ciclo expansivo del modelo extractivo-exportador en toda la región.

En definitiva, la problemática que nos ocupa – la expansión de la actividad minera - se da en diversas escalas espaciales (local, regional, nacional, global) y dentro de una malla de relaciones con otros sectores económicos que representan un modelo de uso del territorio y de los bienes naturales. Es por ello que nos resulta necesario ampliar nuestra perspectiva de análisis aunque, al mismo tiempo, sea imprescindible hacerlo a partir de una delimitación geográfica, como es nuestro caso.

La otra cuestión que nos parece clave en la identificación de la problemática es la relación entre la expansión minera y las comunidades locales, con el consecuente aumento en número e intensidad de los conflictos socioambientales. Es cierto que el modelo extractivo y sus dinámicas de presión sobre los bienes naturales y los territorios habitados no es una novedad de nuestra época, sino que ha sido permanente en la historia política de América Latina a partir del proceso de colonización europea. Sin embargo, entendemos que los ciclos extractivos ocurridos en el último tercio del siglo XX y los primeros compases del siglo XXI se han deparado con un escenario que sí está permeado políticamente por la novedad: la conquista de un espacio político singular por parte de los pueblos indígenas y otras comunidades y el desarrollo normativo de los derechos colectivos de estos grupos en los marcos jurídicos nacional, continental e internacional. Esta constatación se convierte en una de las hipótesis de partida de nuestro trabajo.

Es decir, si antes la empresa extractiva encontraba la resistencia física de las comunidades y actuaba contra ellas con la fuerza de la violencia o la disuasión y con el apoyo del poder político, hoy ambas agencias – empresas y Estados - continúan deparándose con esta misma resistencia local, pero ahora aliada a la exigibilidad de derechos colectivos que han sido consagrados en las constituciones nacionales y en los marcos jurídicos de nivel regional e internacional como resultado, precisamente, de la fuerza política y organizativa de los pueblos indígenas y otros grupos sociales. Esta realidad cuenta, además, con un genuino dinamismo en las articulaciones multiescalares de estos grupos locales con otros movimientos sociales y organizaciones.

Estos tres elementos – resistencia en los territorios, exigibilidad de derechos colectivos y articulación dinámica con otros movimientos a nivel multiescalar – tienen como uno de los sujetos fundamentales en América Latina a los pueblos indígenas y configuran, en nuestra opinión, el nuevo ciclo de conflictos socioambientales y luchas por el territorio. Este escenario encuentra en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol un ejemplo representativo, como tendremos oportunidad de demostrar.

Debe decirse que el caso de Raposa Serra do Sol tiene su particularidad en relación al problema de la minería. No estamos delante de un conflicto latente entre una determinada empresa minera operando dentro del territorio indígena y un conjunto de comunidades oponiendo resistencia o estableciendo marcos de diálogo o negociación con la empresa o con el Estado. El análisis de la actividad minera en Raposa Serra do Sol nos obliga a incorporar la dimensión histórica: de un lado, sobre lo que ya sucedió, y de otro lado sobre el horizonte que se proyecta sobre este territorio.

El momento presente, que es el tiempo de la investigación, se convierte así en un punto de inflexión que, a pesar de no registrar actividades mineras sistemáticas dentro del territorio, contiene una tensión que pertenece al conflicto y lo escala en una perspectiva temporal más amplia. Y ello por dos motivos: de un lado, porque en el presente operan aún los impactos de la minería que asedió el territorio hasta hace unos pocos años; y de otro lado, porque es en el presente que se pugnan las disputas por un futuro con o sin minería.

Tratamos, por tanto, de abordar la problemática desde una perspectiva histórica, en la cual pasado, presente y futuro no significan etapas de un seguimiento lineal. De ese modo, la minería no es un conflicto del pasado o una amenaza del futuro, aparentemente imaginario en el presente; más bien, representa una frontera perenne o un conflicto latente por la disputa del territorio, del significado y de la posibilidad-de-ser.

Como tendremos oportunidad de exponer con más detalle, la actividad minera dentro de Raposa Serra do Sol solamente se ha dado hasta ahora de forma ilegal y bajo el sistema conocido como *garimpo*. En las proximidades de los lechos de los ríos donde se encontraban principalmente diamantes y oro, se establecieron campamentos improvisados en precarias condiciones a modo de barracos protegidos por frágiles lonas de plástico. A lo largo de los años, los garimpeiros, venidos de fuera, fueron adensando su red de relaciones y se fueron creando algunos puntos de apoyo y de abastecimiento. Irían surgiendo así pequeños núcleos de casas, extrañas al modelo tradicional de la aldea indígena, y que fueron llamadas *vilas*. En ellas encontraban los suministros básicos para garantizar temporadas más largas de permanencia dentro de la región: alimentación, ropa, combustible, los rudimentos necesarios para el trabajo en el garimpo y alcohol. La relación que los garimpeiros establecieron con las comunidades indígenas estuvo marcada desde el inicio por el conflicto y las *vilas* les sirvieron para ejercer un cierto

dominio espacial, actuando además como foco para la diseminación del consumo de bebida alcohólica.

La otra agencia que representaba un proceso de ocupación territorial ilegal sobre el espacio de las comunidades indígenas era la *fazenda*, dirigida por terratenientes propietarios de ganado que se habían ido asentando en la región con el apoyo de las élites agrarias regionales y sometían a las comunidades a un patrón relacional marcado por el dominio: explotación de la mano de obra, fragmentación de la organización social en las aldeas, captación de jóvenes para el trabajo, diseminación de la bebida alcohólica o explotación sexual contra las mujeres. La doble agencia de la *fazenda* y el garimpo generó serios impactos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales a lo largo de todo el siglo XX, y particularmente en los últimos treinta años.

La movilización de las comunidades indígenas a partir de los años 70 para la retomada de su territorio y por el reconocimiento formal por parte del Estado brasileño culminó con la salida de todas las *fazendas* y acabó con la actividad de los garimpos. A lo largo de nuestro trabajo analizaremos con mayor detalle este proceso histórico e intentaremos mostrar el modo en que ambas agencias consiguieron impregnar la realidad de la región y mantener su influencia más allá del término de sus actividades. Aún se producen denuncias de las comunidades indígenas sobre presencia de grupos de garimpo dentro de Raposa Serra do Sol, pero se caracterizan cada vez más por ser puntuales y esporádicas. Aparentemente, estaríamos delante de una actividad ya concluida; al menos, en los términos de ocupación territorial que significó hace unos años.

No obstante, otros elementos nos dicen que la minería no se ha marchado del todo de la realidad social y cultural de la región. La posible regulación de la actividad minera dentro de territorios indígenas, en trámite dentro del Congreso Nacional, abre el escenario para una previsible expansión del capital minero de media y gran escala concebido para la exportación. Desde los años 70 y 80, muy diversos actores vienen trabajando sobre la posibilidad de legislar la actividad minera dentro de las tierras indígenas, algo que aún hoy no es permitido pero que está en las manos del Congreso Nacional.

La posibilidad de explotación minera en la zona ha permeado todos los debates y confrontaciones en torno a la demarcación y homologación de los territorios indígenas en Roraima hasta nuestros días. Grupos de poder económico y élites políticas locales han mantenido siempre la idea de la necesidad y la inevitabilidad de la explotación minera como principal motor de desarrollo del Estado. En este trabajo, recordaremos cómo la cuestión de la propiedad de los bienes del subsuelo y la posibilidad de su explotación en territorios habitados por comunidades indígenas fue uno de los debates más acalorados durante el proceso constituyente que se dio en Brasil entre 1987 y 1988. La Constitución Federal finalmente dejó la cuestión en abierto, al reconocer el usufructo

exclusivo de los pueblos indígenas sobre los bienes naturales existentes en la superficie de los territorios ocupados tradicionalmente por ellos y mantener, al mismo tiempo, la propiedad de los bienes del subsuelo bajo titularidad pública y sometida al escurridizo interés general. Con esa premisa, determinó que la posible liberalización de la explotación minera en territorios indígenas debería ser regulada a través de una eventual ley complementaria.

La posible explotación minera dentro de los territorios indígenas de Brasil, y particularmente dentro de Raposa Serra do Sol, se ha mantenido a lo largo de los casi 30 años que nos separan de la Constitución Federal dentro de la estrategia pública de determinados grupos políticos y empresariales. Incluso, la defensa del garimpo y de la minería empresarial ha sido utilizada políticamente por las élites locales para situar a una parte de la población roraimense en contra de los intereses de las comunidades indígenas, a las que se ha tachado de constituirse en obstáculos y entorpecer el futuro y el desarrollo del conjunto de la sociedad.

En 1996 un Senador roraimense, Romero Jucá Filho, presentó en Brasilia el Proyecto de Ley 1610/96 que dispone sobre la regulación de la actividad minera dentro de los territorios indígenas de Brasil. A pesar de no tratarse de una ley complementaria, esta iniciativa nació con la pretensión de desarrollar el articulado constitucional en esta materia y permitir, finalmente, la explotación minera en las tierras ocupadas por pueblos indígenas.

Veinte años después, el PL 1610 continúa en estudio y tramitación dentro del Congreso Nacional, como tendremos ocasión de mostrar. Junto a él, otras iniciativas legislativas han ido naciendo con el propósito de afectar los territorios indígenas en los términos como son reconocidos en la Constitución Federal de 1988, favoreciendo y regulando el desarrollo de actividades económicas dentro de ellos bajo la argumentación del interés público del país. En los últimos ocho años, el PL 1610 ha tomado una nueva fuerza, una vez que se produce una confluencia entre sus objetivos y los intereses de la política minera del Gobierno Federal encampada en la última década. Habiendo coincidencia en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la oposición de las comunidades indígenas solo parece encontrar eco en el Poder Judicial, en el marco internacional de derecho y en el entorno de organizaciones sociales y movimientos populares.

No es difícil darse cuenta de que cualquier actividad de explotación a media-grande escala sobre los recursos naturales del subsuelo afectará grave e irreversiblemente los bienes existentes en la superficie, la formación del territorio y la vida de las comunidades que allí habitan. Por lo tanto, el debate abierto actualmente en torno al PL 1610/96 y otras iniciativas legislativas afines reabre las discusiones que se sucedieron en el proceso constituyente y crea un escenario en el que la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es seriamente puesta en cuestión. Esto obliga a las organizaciones

indígenas a mantener una estrategia de movilización e incidencia política junto al Estado y la sociedad civil.

Por tanto, nos encontramos delante de un escenario en el que la actividad extractiva minera se relaciona:

- Con un pasado reciente, marcado por la extracción de oro y diamantes bajo el sistema del garimpo y sus impactos sociales, culturales, económicos y ambientales sobre las comunidades y su entorno;
- Con un futuro aún disputado, marcado por la posibilidad de la regulación de la actividad minera dentro de territorios indígenas;
- Con un presente en el cual no existe ningún conflicto minero activo pero que está explícitamente permeado por las secuelas de la minería ilegal de los días pasados y por la necesidad de movilización de las comunidades y organizaciones indígenas para disputar el futuro con grupos de interés económico y político fuertemente instalados en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

El contexto que se nos dibuja es complejo y todas las claves posibles de análisis y de búsqueda de soluciones no tendrán eco solamente en la realidad específica de Raposa Serra do Sol, sino que reflejan un conflicto presente en muchos otros territorios indígenas de Brasil y de otros países. Entendemos que, más adentro del nuevo ciclo de lucha por el control del lugar y del territorio, están en juego también la propia sobrevivencia de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las sociedades latinoamericanas y la ecuación de la ética política y el derecho sobre la lógica unívoca del desarrollo económico.

En definitiva, nos proponemos formular el problema de investigación con dos enunciados que permitan reflejar la dimensión espacio-temporal del fenómeno. Así, este trabajo pretende enfocar como problema de investigación

La relación de conflictividad que se establece en América Latina entre el avance del extractivismo minero y la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, a través del análisis de la afectación que se produce en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en el Estado de Roraima, Brasil.

Procesos y estrategias metodológicas

Como decíamos al inicio, pretendemos que esta investigación se encuadre dentro de la trayectoria de la ecología política en América Latina. Esto debe reflejarse,

necesariamente, en la formulación del procedimiento metodológico y las estrategias y técnicas que hemos empleado para acceder a la información.

La ecología política se preocupa por la naturaleza de los conflictos socioambientales, preguntándose por sus causas estructurales, e intenta articular cuatro dimensiones analíticas complementarias o integradas (Del Cairo *et al.*, 2014: 16):

- a) Una dimensión *multiescalar*, localizando el análisis del fenómeno local en el entramado de interdependencias con otras escalas geopolíticas;
- b) Una dimensión *multitemporal*, que intenta dar cuenta de la interacción entre la historización estructural de los conflictos y su expresión coyuntural;
- c) Una dimensión *multisituada*, atenta a continuidades y discontinuidades en las formas como se reproducen los conflictos;
- d) Una dimensión *multiagente* o multiactorial, que atiende las relaciones de los diversos actores entre sí y con otros en los diversos niveles y escalas.

Estas cuatro dimensiones no aparecen en la realidad de forma desagregada sino conectada. De este modo, el reto para los investigadores sociales consiste en “mantener el enfoque multiescalar de la ecología política pero comprender que hay agencia en o dentro de cada escala, y hacer investigación etnográfica que sea multiescalar y multisituada, de manera que podamos tener una comprensión más rica de los procesos transnacionales” (West, citado en Del Cairo *et al.* 2014: 17),

Paul Little identifica tres principios (2006: 91) que, según él, hacen parte del núcleo duro del paradigma ecológico y que se aplican a la naturaleza de las investigaciones en este campo:

- El foco central de la investigación ecológica son siempre relaciones, y no objetos sustantivos, lo cual exige abordar los conceptos en forma relacional;
- Utiliza análisis de contexto con el objetivo de visualizar las relaciones dentro de su respectivo marco histórico y ambiental;
- Utiliza metodologías procesuales, acompañando los movimientos e identificando su dinámica interna.

En el mismo texto, Paul Little afina sobre las tareas imprescindibles de una investigación que tenga como foco los conflictos socioambientales y las describe así: identificar los distintos actores sociales y los recursos ambientales implicados en el conflicto; analizar a los actores en interacción entre sí; y levantar las reivindicaciones de cada grupo y sus respectivas cotas de poder formal e informal.

Pues bien, nuestro propósito es que la investigación que presentamos en este trabajo se alinee con los principios metodológicos que los trabajos de Carlos Del Cairo y sus compañeros, así como el de Paul Little, proponen. El foco central de nuestra investigación trata de una relación: la que se establece entre dos hechos sociales contradictorios – y los actores que los viven - que se presentan en el territorio concreto

generando conflictos por la apropiación de los bienes y de los sentidos de lugar y de convivencia.

De un lado, nos interesa conocer los elementos objetivos que caracterizan la expansión de la actividad minera y de la economía extractiva en el contexto de la realidad política y económica de América Latina en nuestros días, y que se refieren a cuestiones como: cambios en los marcos regulatorios; comportamiento de las políticas exportadoras de los países; dinámicas en los sistemas de precios y de intercambio; volumen de recursos naturales que está siendo explotado; o impacto en las economías latinoamericanas.

De otro lado, nuestra principal intención es problematizar este fenómeno económico en relación con otras dimensiones irrenunciables como la exigibilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para ello necesitamos identificar los actores implicados y describir de las interacciones entre ellos, así como las lógicas discursivas y de horizontes de sentido que se elaboran en torno a la defensa de los derechos colectivos y de los territorios y en torno a la actividad económica minera.

Nuestra investigación va a dedicar un esfuerzo sustancial en la elaboración de un análisis contextual de la problemática, con una intencionada dimensión espacio-temporal. “O estudo das lutas contemporâneas planetárias sobre os recursos naturais, como a ecologia política propõe fazer, aumenta a importância de incorporar outros níveis de articulação e análise” (Little, 2006: 95). Es decir, atenderemos al proceso histórico en el que la minería opera y se relaciona con dinámicas de ocupación territorial, uso del suelo y despojo o desposesión. Y profundizaremos también en el contexto espacial multiescalar en el que la minería y las resistencias sociales actúan. No elaboramos análisis contextual exclusivamente para enmarcar, sino porque entendemos totalmente necesario el análisis escalar y temporal de la problemática para explicarla en su complejidad, incluso en su relación con dinámicas globales como la crisis socioambiental y del modelo productivo-energético que afecta en nuestros días a todo el planeta.

A pesar de emplear una perspectiva histórica amplia, entendemos que los primeros años del siglo XXI han significado un nuevo ciclo expansivo del modelo económico extractivo-exportador, en términos generales, y de la actividad minera en particular. Este nuevo ciclo económico ha desencadenado también un nuevo ciclo de conflictos socioambientales, recreando las condiciones históricas y acentuando el conflicto en el presente. Por ello, para el análisis del actual ciclo expansivo nos centraremos en el período 2002-2014.

Si estas son las informaciones que nos interesan, las estrategias metodológicas nos deben ayudar a acceder a ellas. Como la información y los protagonistas se localizan y operan en diversas escalas, el abordaje metodológico para acceder a información va a tener que contemplar diversas estrategias y técnicas. Éstas se hacen concretas, y fiables, en la medida en que responden a la relación posible. “Esto implica que en el trabajo de campo etnográfico las verdaderas ‘técnicas’ de recolección de datos sólo son tales si

surgen de la relación entre investigador y población en cuestión (...)” y cuando la persona que investiga se convierte “en un ser significativo (y por eso ‘confiable’) en el mismo discurrir cotidiano objeto de su propia investigación” (Guber, 2011: 88-89).

Si en la escala local es posible priorizar el desarrollo de técnicas como la Observación Participante o la recogida de información directa a través de entrevistas, en los otros niveles escalares tendremos que priorizar la consulta de datos, noticias y bibliografía competente.

Los trabajos de Little (2002) y Del Cairo apuntan a la importante contribución que el método etnográfico puede traer a las investigaciones centradas en el análisis de conflictos socioambientales, aunque para abordar los problemas que interesan a la ecología política se hace necesaria una reformulación respecto de sus enfoques más convencionales de investigación antropológica (Del Cairo, 2014: 18).

La etnografía clásica, en el sentido tradicional del término dentro de la Antropología Social y Cultural, se demarca como “el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de la comprensión global de la misma” (Aguirre, 1995: 3). Aplicada a los problemas socioambientales necesita un trabajo de reformulación. Una de las dimensiones que necesariamente debe ser repensada es la vinculación del proceso etnográfico clásico con ambientes locales social y geográficamente delimitados y pretendidamente autónomos.

Del Cairo *et al.* insisten en cuatro perspectivas metodológicas y de observación que, asociadas a las dimensiones citadas anteriormente, deben ser consideradas cuando aplicamos la metodología etnográfica al análisis de los conflictos socioambientales. Estas perspectivas son: histórica, política, económica y de subjetividades.

La perspectiva *histórica*, en la que confluye el nivel estructural y el coyuntural. “Se trata de una estrategia para comprender procesos de larga duración con aquellos que son más efímeros y que guardan relaciones entre sí a pesar de esas diferencias en sus escalas temporales (...) permite historizar las condiciones que alientan y dan forma a los conflictos socioambientales” (2014: 19). Para ello, estrategias y técnicas como las historias de vida o la reconstrucción de trayectorias biográficas y sociográficas pueden convertirse en instrumentos privilegiados, asociados a la búsqueda de información escrita.

La perspectiva *política* que nos permitirá establecer nexos entre las condiciones políticas que operan en la escala local, donde se produce el conflicto, y la densa red de articulaciones y políticas multiescalares en que las decisiones se producen. Esto nos exige buscar los argumentos y la forma de contar las conexiones entre las macroesferas y las microesferas.

La perspectiva *económica* fortalece en el proceso etnográfico el análisis de las condiciones físicas y económicas que describen el conflicto en cuanto intereses antagónicos por el control y acceso a bienes materiales y territoriales. Esta perspectiva incluye la comprensión de las racionalidades diversas implicadas en el conflicto, asociadas a los diversos actores que participan.

La perspectiva de las *subjetividades* que aborda la dimensión simbólica y de significados que cada actor está representando en el conflicto concreto en referencia a los valores dados a los bienes naturales, al desarrollo, a la calidad de vida o al futuro deseado.



La aplicación del proceso etnográfico en el análisis de conflictos socioambientales, como el que nos ocupa, se enmarca dentro de los estudios cualitativos o metodologías de investigación cualitativa. Dichos estudios no impiden el uso de datos estadísticos, informaciones cuantitativas o percepción de relaciones a través de las cifras. Por el contrario, suelen contemplarlos.

En nuestro caso, el análisis de datos procedentes de fuentes oficiales nos será imprescindible para adentrarnos en la perspectiva económica de los problemas socioambientales y para dimensionar las características de la actividad minera que avanza en América Latina y, particularmente, hacia los territorios indígenas.

Los estudios cualitativos, según Mariane Krause (1995), “comienzan con una pregunta amplia (...) La pregunta inicial luego se va desglosando en preguntas más específicas, llamadas ‘preguntas directrices’, las que guiarán la implementación del estudio” (1995: 29). En la concepción de nuestro proyecto de investigación, en lugar de establecer

hipótesis a ser verificadas, adoptamos la formulación de una serie de preguntas investigativas, o directrices, que tratamos responder a lo largo del trabajo.

Proponemos cinco preguntas centrales, de las cuales se pueden desprender otras en mayor detalle.

Preguntas de investigación

1. ¿De qué modo se desarrolló el modelo de economía extractivo-exportadora a lo largo del proceso de colonización y cuáles son las características del nuevo ciclo expansivo de la economía extractivo-exportadora en las diversas escalas espaciales consideradas en la investigación: América Latina, Amazonia, Brasil y Raposa Serra do Sol?
2. ¿Cuál es la naturaleza del espacio político y del estándar de derechos colectivos consolidado en América Latina y en Brasil a partir de la acción de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios?
3. ¿Cuáles son las dinámicas de los conflictos socioambientales ocasionados por la actividad minera en territorios indígenas y cuál es la posición de los diversos actores implicados?
4. ¿Cómo se relaciona la realidad de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en cuanto escala local, con los procesos políticos y económicos que se dan en las escalas de Brasil, Amazonia y América Latina?
5. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto entre la actividad minera y el proceso histórico de reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol? ¿Quiénes son los actores y a través de qué procesos han actuado y siguen actuando en el conflicto?

Estas cinco preguntas estructuran el trabajo de investigación, cuyas conclusiones intentarán arrojar luz descriptiva y explicativa sobre cada una de ellas. A partir de ellas y de su desarrollo, una serie de preguntas secundarias nos ayudarán a aproximarnos a las respuestas:

- i. Con la homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol ¿ha concluido definitivamente la influencia de los impactos originados en el sistema de minería informal de garimpo ejercido en el territorio durante el siglo XX? La posible regulación de la actividad minera empresarial en los términos del PL 1610/96 ¿afectaría el ejercicio pleno por parte de las comunidades indígenas de sus derechos territoriales? ¿En qué sentido?
- ii. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda por concesiones de permisos para explotación minera en los territorios indígenas de Roraima en las últimas décadas?
- iii. En el caso de conflictos de intereses entre los derechos de las comunidades y los derechos de los emprendedores, ¿existen criterios jurídicos y políticos estipulados para su resolución?

- iv. ¿Cuál es la posición de las comunidades y organizaciones indígenas de Roraima frente a la minería dentro de sus territorios?
- v. ¿Se ha producido en Brasil, en los países amazónicos y en el conjunto de América Latina, durante el período 2002-2014, un aumento de la economía extractiva para exportación, sea por el tamaño de área ocupada o por el ritmo y volumen de bienes naturales extraídos?
- vi. ¿Cuáles serían los principales sectores económicos vinculados a este ciclo económico y cuál su comportamiento? ¿Cuál es la dimensión del nuevo ciclo de conflictividad socioambiental con base territorial?

A continuación, detallamos las estrategias que hemos empleado durante el trabajo de investigación para la recogida, registro y sistematización de la información.

Observación Participante

Como indiqué en la Introducción a este trabajo, he tenido la oportunidad de vivir durante nueve años, divididos en dos etapas², en el Estado de Roraima. En determinados momentos de este período, he desarrollado tareas relacionadas con el ámbito de la educación indígena³. Estas condiciones de proximidad y vecindad con la fase final del proceso de homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol me han permitido la experiencia de la observación participante.

El hecho de haber permanecido durante este período de tiempo en Roraima, me ayudó a avanzar en la comprensión de los fenómenos sociales que se estaban dando, así como tener una relación de cercanía y confianza con muchas comunidades indígenas y muchos de sus dirigentes. A lo largo de este período, he tenido la oportunidad de participar en diversos espacios de la organización indígena y testimoniar las dinámicas y procedimientos que en ella se tejen. Es en este contexto relacional previo donde surge el proyecto de investigación en cuanto interés por comprender, desde una perspectiva multiescalar, la problemática que escuchaba contar a dirigentes indígenas y representantes de organizaciones.

Como afirma Bruce Albert, el proceso de organización de los pueblos indígenas como sujeto político y los mecanismos de auto-objetivación cultural a los que acudieron para sustentar sus movilizaciones en defensa de la tierra transformó las condiciones de aquello que en la investigación social se identifica como el “campo” y estableció las condiciones de posibilidad de relación entre el discurso etnográfico y la necesidad de los grupos étnicos de visibilizar sus propios proyectos (Albert, 2002: 246).

Al mismo tiempo, el proyecto de investigación ha ocupado solo una parte del contexto general de mi convivencia con el territorio. La investigación ha estado acotada a los tres

² Febrero 2002 a mayo 2008 y enero 2012 a diciembre de 2014.

³ Colaboración en el proceso pedagógico del Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, entre los años 2002 y 2006.

últimos años de estancia y a la temática específica que abordó: los conflictos derivados de la actividad minera sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol. Por ello, en el trabajo de campo incluí exclusivamente lo que observaba en referencia específica a esta problemática, en lo que Bárbara Kawulich registra como “observación selectiva”, recogiendo el concepto de Angrosino y DePérez (Kawulich, 2005). La convivencia con el espacio social y político de campo me ha permitido, en fin, ser un observador participante, más que haber utilizado la observación participante como herramienta operacional (Guber, 2011: 72).

La observación participante ha sido tradicionalmente vinculada a la investigación en el ámbito de la antropología social y empleada, a veces, casi como un sinónimo del trabajo de campo (Guber, 2011; Kawulich, 2005). Desde la perspectiva de Franz Boas y Bronislaw Malinowsky, a los que se les considera figuras fundamentales en la emergencia del proceso etnográfico, la convivencia prolongada en el entorno de los grupos que estaban estudiando les permitió avanzar en propuestas teóricas que superaron el paradigma evolucionista que había impregnado durante el siglo XIX y alguna parte del XX la teoría antropológica (Carozzi, 1995: 41)⁴. En otras perspectivas, la observación participante se define como la metodología que permite comprender o, al menos, aproximarse a la perspectiva o el punto de vista del otro; lo que Kenneth Pike y Marvin Harris llamaron en momentos diversos la perspectiva *émica*.

Kawulich recoge diversas definiciones convencionales de la observación participante en el mundo de la antropología (2005): como una descripción sistemática de eventos que suceden en el escenario social elegido para ser estudiado; como una especie de “fotografía escrita”; como un proceso/habilidad por el cual el investigador se incorpora a la dinámica y la vida de la comunidad, haciéndose casi uno de ellos, para intentar comprender la perspectiva de los sujetos y la dimensión holística de los fenómenos sociales. En este sentido la observación participante, aún con sus fragilidades, dotaría, según esta perspectiva, las conclusiones del investigador de una mayor validez y contextualización. María Teresa Anguera Argilaga coloca el acento de la observación participante en la relación de conocimiento previo entre observador y observado y la aceptación mutua del intercambio de informaciones (Aguirre, 1995: 73).

Todas estas definiciones y perspectivas se mantienen en el campo de la etnografía convencional, entendida como el estudio de un grupo local o un sistema cultural específico. Bajo esta perspectiva se preserva la lógica de objetivación del campo de estudio, formado por el otro y su sistema cultural, acentuándose la rigurosidad de los

⁴ Franz Boas, antropólogo norteamericano, es considerado como el padre del particularismo histórico, que argumentaba que cada grupo étnico y su sistema cultural debían ser comprendidos en su especificidad histórica y no en la linealidad reiterativa de los planteamientos evolucionistas. Malinowsky, representante de la corriente funcionalista, defendía que los sistemas culturales eran compuestos de instituciones propias en interrelación. Ambos autores cuestionaron, así, al uso del método comparativo en los estudios culturales y la pretensión de hallar leyes universales a todas las culturas.

sistemas de registro, sistematización y codificación de las informaciones a partir de categorías propias del mundo del investigador. Este no es, pues, el tipo de observación participante que he desarrollado en mi trabajo.

Afirma Rosana Guber (2011) que en la antropología post-moderna o post-estructuralista se ha generado un movimiento reflexivo hacia la observación participante en cuanto elemento sustancial del proceso etnográfico, situando el trabajo de campo “en la interfase que garantiza la interlocución entre la teoría social y la alteridad, permitiendo a la vez que la teoría social se reconozca a sí misma en una postura de alteridad posible” (2011: 62). Esta perspectiva puede contribuir a reducir el espacio que muchas veces se da entre lo académico y lo experiencial: no como dos dimensiones diferentes de la vida, sino como dos fuentes complementarias, e integradas, de conocimiento.

La recuperación de lo relacional y lo reflexivo (2011: 63) en el proceso de investigación contribuye a superar la sobreobjetivación del conocimiento (Leff, 2004) y permite al investigador reconocer que el problema de investigación sobre el que se depara se insiere en un contexto – social, político, económico, simbólico – del cual él también hace parte. Esto es fundamental en el análisis de conflictos socioambientales en la perspectiva de la ecología política, al menos, en dos sentidos.

Primero porque la perspectiva de multiescalas y multiactores ya nos substrahe de lo específicamente local y grupal. Más que buscar la perspectiva *émica* del totalmente-otro, nos proponemos buscar la dimensión de significados que, en el conflicto, cada actor pone en juego respecto a la vida social, la tierra, los bienes naturales, la propiedad o las decisiones sobre el propio desarrollo.

En segundo lugar, porque se visibiliza la dimensión relacional e intersubjetiva del investigador en el llamado “campo”, lo cual tiene consecuencias en el proceder metodológico. “La justificación etnográfica de la metodología es que no descansa en un conjunto de técnicas *per se*, sino en una relación entre lo que hace el investigador en tanto que investigador, y lo que sucede en este campo en particular” (Guber, 2011: 71).

El hecho de estar y de convivir, pasando de “observador participante” a “participador observante” (Albert, 2002: 246), dio entidad a mi posibilidad de acceder a la información en el caso de los actores indígenas implicados en el conflicto socioambiental que quería describir. No toda mi presencia en terreno fue pautada por la dinámica de participador observante, pues la relación establecida no se ceñía a la investigación. Del otro lado, no todo lo observado responde a lo que registré y sistematicé: hay espacios relacionales premeditadamente no estructurados (Guber, 2011: 79), cuyo valor relacional es incalculable pero en los cuales no intervienen técnicas de registro (escrito o fotográfico) para preservar, justamente, la esencia relacional de esos espacios.

En todo caso, la posibilidad de actuar como “participador observante” me permitió recoger información sobre los procesos sociales y políticos con que las comunidades y

organizaciones indígenas se relacionaban con el fenómeno de la minería. La participación en encuentros, asambleas indígenas y otros diversos espacios públicos ha creado un escenario en el que, claramente, investigador y contexto de investigación se influyen mutuamente (Aguirre, 1995). El uso de Diario de Campo o Cuaderno de Notas para el registro de las informaciones se convirtió en el principal instrumento de recogida de la información. El principal objetivo era adquirir más y mejores elementos de comprensión del fenómeno que estábamos estudiando, principalmente en la elaboración discursiva de los actores indígenas frente al fenómeno de la minería.

Entrevistas semi-abiertas y en profundidad

Una segunda estrategia para la recogida de información ha sido la realización de entrevistas a diversos actores y siguiendo técnicas diferenciadas. Silvia Aguirre define en términos generales la entrevista como “una técnica, dentro de la metodología cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un cuestionario o guión” (Aguirre, 1995: 172).

Las entrevistas requieren una aceptación previa por parte de las personas, lo cual también remite a la capacidad relacional que el investigador tenga con los actores del entorno o, en su caso, a la posibilidad de acceder a ellos.

En estudios multiescalares y multiactoriales, como es el proceso investigativo que hemos seguido en este caso, la diversidad de actores y de las escalas donde ellos interactúan limita el uso de las técnicas de entrevistas a una parte de esos agentes, normalmente vinculados a la escala local. Así mismo, en el caso de los actores relacionados con el sector minero empresarial, nos deparamos con una realidad que nos limitaba: las informaciones sobre las personas físicas y jurídicas vinculadas al sector minero son precarias y, en muchos casos, adolecen de poca transparencia. El acceso a ellos se vuelve un ejercicio muy complejo, por lo que se deben buscar otras fuentes de información diferentes al contacto personal requerido en la entrevista.

Existen varias formas de clasificar los tipos de entrevista. Uno de las formas más empleadas distingue los tipos de entrevista en función del tipo de preguntas que haya sido acordada. Así, una entrevista *estructurada* se caracterizará por una serie de preguntas acotadas y objetivas que conducen a respuestas más o menos reducidas sobre informaciones, en cierto sentido, precisas. La entrevista *abierta* posee una direccionalidad con una serie de preguntas que nortean la conversación, pero afecta más a la dimensión subjetiva de la persona entrevistada y a la construcción del relato. Se deja más tiempo para que responda o incluso interrelacione con otros temas, previstos o no previamente. La entrevista *semi-estructurada* tendría características intermedias, con preguntas semiabiertas que permiten al entrevistado responder con densidad pero teniendo acotados los temas sobre los que se va a conversar y el número de cuestiones que interesan.

Durante el trabajo de campo, realicé un conjunto de 39 entrevistas abiertas y en profundidad, consiguiendo un total de 30 horas de grabación⁵. Estas entrevistas se desarrollaron entre mayo de 2012 y marzo de 2014. La mayor parte de ellas fueron grabadas en audio y una parte también importante fue grabada en vídeo. Las entrevistas abiertas y en profundidad fueron realizadas con dirigentes indígenas de Raposa Serra do Sol que comenzaron sus trabajos como tuxauas o consejeros a finales de la década de 70.

La mayor parte de las conversaciones fueron con el Tuxaua Jacir José de Souza, dirigente indígena reconocido a nivel nacional e internacional, y una de las principales figuras políticas de la movilización indígena por la retomada de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Junto a Jacir de Souza conseguí oír en estas entrevistas a otros 11 dirigentes indígenas que protagonizaron la organización de las comunidades en las décadas de 80 y 90 y participaron en la fundación del Consejo Indígena de Roraima/CIR.

Hubo dos tipos de entrevistas: *personal*, normalmente con el Tuxaua Jacir; y *grupal*, en la que participaban entre 2 y 5 personas al mismo tiempo. En las entrevistas grupales, por decisión de las personas entrevistadas, cada uno de ellos exponía, sin ser interrumpido, fragmentos de la historia reciente en los que había participado. En ciertos momentos, otras personas podían auxiliarle en lo que se refería a precisión de información (fechas concretas, nombres de personas o locales), haciéndolo en voz baja y sin interrumpir el proceso narrativo. Al final de la participación de todas las personas, se abrían posibilidades espontáneas para diálogos entre ellos.

Cuatro de los dirigentes indígenas entrevistados utilizaron en el encuentro la lengua macuxi para expresarse. En algunos de estos casos, otro dirigente traducía después al portugués lo que había sido explicado. En el caso del dirigente más anciano de los entrevistados, Tuxaua de la Comunidad Indígena de Caraparú I, procedimos posteriormente a la traducción transcrita de la grabación por parte de un profesor indígena macuxi.

Las entrevistas abiertas y en profundidad pretendían trabajar con información sociográfica o de memoria social colectiva. En ellas, los dirigentes hicieron una reconstrucción del proceso de retomada de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol desde inicios de la década de 70 hasta la definitiva homologación en 2008, describiendo también las heridas que han quedado aún dentro del territorio indígena.

El formato de entrevistas era con preguntas muy abiertas que iniciaban localizando en el tiempo o en el espacio algún acontecimiento real, previamente acordado con los entrevistados, y a partir de ahí discurría una narrativa histórica que iba enlazando temas, algunos de los cuales se reiteraban en otras entrevistas con mayor profusión de detalles.

⁵ En este trabajo, empleo la transcripción literal solamente de algunas de las entrevistas - que aparecen al final de la Bibliografía – aunque todas ellas me sirvieron como información global.

A partir de esta reconstrucción histórica del proceso de retomada de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en el testimonio de un grupo de personas que participó de la dirigencia del proceso, pudimos re-configurar elementos fundamentales para nuestro trabajo, como: ocupación del territorio por parte de la minería ilegal, gestación del proceso organizativo de las comunidades indígenas, creación de los núcleos semi-urbanos en el territorio indígena, relación entre las comunidades y la organización indígena con otros actores (Estado, Iglesia, otros movimientos sociales, fazendeiros, garimpeiros o fuerzas armadas, entre otros).

Parte de estas informaciones han sido recogidas en otros espacios por otras personas y para fines diferentes. Aparte de registros orales realizados por otros investigadores, también es común que estudiantes indígenas de Educación Secundaria o Educación Universitaria realicen entrevistas biográficas a algunos de los dirigentes más ancianos de sus comunidades. Por otro lado, la transmisión de lo que sucedió en el proceso de retomada de la tierra hace parte de las fiestas y celebraciones de la comunidad, empleando técnicas orales o de dramatización para su transmisión a las generaciones más jóvenes.

Sin embargo, la diferencia del material que nosotros conseguimos junto a este grupo de 11 dirigentes indígenas estriba en el volumen de información y el registro de horas grabadas, así como en la re-construcción colectiva del relato, lo que lo convierte en un material de enorme importancia.

Junto a estas entrevistas abiertas y en profundidad, dirigidas al registro de la memoria reciente, realizamos otras entrevistas:

- Entrevista semi-estructurada a uno de los dirigentes estatales del Consejo Indígena de Roraima/CIR, participante también en los foros y espacios de representatividad indígena para el seguimiento de la Política Nacional de Gestión Ambiental y Territorial Indígena/PNGATI. Nos interesaba en esta entrevista conocer la posición de la organización indígena sobre aspectos relacionados con la territorialidad indígena y la actividad minera, así como las posibilidades de influencia desde los espacios de acompañamiento de las políticas públicas.
- Entrevista abierta a Funcionario de la Delegación del Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM. No conseguí una entrevista formal con el Superintendente del DNPM en Roraima. No obstante, en la entrevista con el funcionario que fue delegado para recibirme, tuvimos ocasión de mantener una conversación abierta en la medida en que me iba facilitando en formato digital toda la información que le requería.
- Entrevista semi-estructurada con un Empresario y Abogado del sector minero que opera en Roraima, con activos mineros en algunas regiones del Estado y ofreciendo servicios profesionales de asesoría a empresarios del sector minero y garimpeiros

interesados en la formalización de su actividad como personas físicas o bajo la fórmula de Cooperativas garimpeiras.

- Entrevista semi-estructurada con dos representantes del Comité Nacional de Afectados por la Minería, con sede en Brasilia.

Consulta documental

Finalmente, la tercera estrategia para la recogida de información ha sido la consulta documental, escrita y audiovisual. Nos referimos a consultas diferentes en función del tipo de documentos hallados y examinados.

Hemos tenido la oportunidad de consultar *documentos primarios y secundarios* que se encuentran en el Acervo Documental del Instituto Misionero de la Consolata y en el Acervo Documental de la Diócesis de Roraima, ambos archivos con sede en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Entre los documentos primarios hemos trabajado con diversos tipos de fuentes:

- Fuentes escritas: cartas, informes, declaraciones, comunicados oficiales, actas de encuentros y asambleas, Oficios de organismos públicos, transcripciones de discursos por parte de representantes políticos y otros. Muchos de estos documentos son inéditos;
- Fuentes de imágenes y audios: fotografías y grabaciones en vídeo que hacen parte del Acervo Documental del Instituto Misioneros de la Consolata.

Entre los principales documentos secundarios, destacamos el Archivo de Periódicos que posee el Centro de Documentación del Instituto Misioneros de la Consolata, aunque aún se encuentre en fase de organización. Se dispone de abundante prensa escrita de la década de 80, algunas de ellas organizadas en recortes de noticias que tienen relación con la cuestión de la tierra indígena y de la actividad minera.

Por otro lado, hemos desarrollado un amplio ejercicio de consulta bibliográfica relacionada con la temática, de modo que nos permitiese elaborar el estudio contextual, histórico y multiescalar, que nos habíamos propuesto.

Por último, hemos recurrido a la consulta de datos de organismos oficiales y entidades privadas, en las diversas escalas, para confrontar y alinear los datos, principalmente aquellos que nos permitían dimensionar las características de la actividad económica extractivo-exportadora, en términos generales, y de la minería en particular.

Primera Parte

De la Geografía Política
a la Ecología Política:
hacia un marco teórico
de referencia

“Descripción y explicación son inseparables. Lo que debe estar en el fundamento de la descripción es la voluntad de explicación, que supone la existencia previa de un sistema”.

Santos, 2000: 16

Los impactos que la minería ilegal ha dejado, y continúa dejando hasta nuestros días, en los territorios indígenas del Estado de Roraima han sido muy severos. Trascienden la realidad de las comunidades indígenas y de sus territorios e impregnan parte de la historia reciente y de la formación social, cultural y política de esta región del norte de Brasil. Si a ello unimos la probabilidad de una regulación de la explotación minera empresarial en los territorios indígenas, se estaría abriendo un nuevo escenario de impactos y profundas transformaciones sociales que marcarán la vida de las comunidades indígenas, la realidad del Estado de Roraima y, posiblemente, de la región de las Guayanas en términos generales.

Describir estos fenómenos, como se ha dicho, incluye varias tareas al mismo tiempo y de forma complementaria: analizar los procesos políticos y económicos que están implicados; identificar los diversos actores sociales que intervienen en este proceso de transformación; reconocer las diversas territorialidades implicadas; o representar las relaciones que se establecen entre los diversos actores, sus reacciones y estrategias (discursivas y territoriales, simbólicas y políticas). Componer ese cuadro en su complejidad tendría como resultado una descripción del proceso que está en marcha en la región.

Al mismo tiempo, es nuestra intención que la descripción se vincule a un esfuerzo explicativo, como expresa Milton Santos en la cita destacada al inicio de la página. Explicar obliga a un ejercicio más profundo, con la intención de situar este fenómeno, con sus múltiples dimensiones, en un contexto mayor de dinámicas, relaciones y procesos económicos en el que se desarrolla. Como hemos explicitado en la presentación de la metodología, el ejercicio descriptivo-explicativo que nos proponemos intentará, además, traer hacia dentro del análisis los elementos históricos y espaciales que intervienen en la relación conflictiva minería-derechos de los pueblos indígenas. Historia y espacio, tiempo y lugar – en una perspectiva multiescalar – son necesariamente convocados para que el análisis resultante obtenga una comprensión más apurada. Para todo ello precisamos de referencias teóricas que nos ayuden.

En esta primera parte del trabajo, nos disponemos a recoger un marco teórico de referencia que nos ofrezca herramientas e instrumentos de análisis para abordar mejor la naturaleza de nuestro problema de investigación. Haremos esto en los próximos cuatro capítulos.

En el primer capítulo, esbozaremos las principales líneas del marco teórico y epistemológico que hemos adoptado. Apuntaremos las cuatro fuentes teóricas de las que pretendemos servirnos como guía de análisis y nos aproximaremos a los principales autores de cuyo pensamiento extraemos los conceptos y categorías clave para nuestro análisis, elaboraciones y comprensiones. Por tanto, en este primer capítulo quedará expuesto nuestro marco teórico de referencia. A partir de él, proponemos en los dos siguientes capítulos los dos anclajes de nuestro análisis.

El primer anclaje analítico lo trazaremos en el segundo capítulo, conducidos por la perspectiva estructural de la economía-mundo y de la mundialización de los territorios bajo la égida del Mercado global. Entendemos que esta perspectiva es la que nos puede ayudar a situar la actividad minera y el modelo extractivo-exportador en su conjunto dentro de las coordenadas globales que lo explican. Nos ayudaremos del análisis de sistema-mundo propuesto por Immanuel Wallerstein y el trabajo de Peter Taylor y Colin Flint, así como de las aportaciones del geógrafo brasileño Milton Santos. Intentaremos, así, un ejercicio de diálogo entre ambas propuestas teóricas que nos ayuden a aproximarnos a la dinámica sistémica de funcionamiento de la economía-mundo y sus consecuencias sobre la apropiación y configuración de los territorios. Concluiremos el capítulo con un análisis de la perspectiva multiescalar del sistema-mundo y presentaremos los cuatro niveles espaciales o escalas que vamos a utilizar en la segunda parte del trabajo: América Latina, Amazonia, Brasil y la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol.

Con el segundo anclaje analítico, ya en el tercer capítulo, intentaremos comprender la participación del modelo extractivo-exportador, con acento puesto en la minería, en el conjunto de la crisis socioambiental que refleja, a su vez, una profunda encrucijada civilizacional y también epistémica. A la luz de la Ecología Política, estableceremos referentes teóricos y analíticos que permitan explicar los conflictos socioambientales con base territorial y la relevancia de las posturas y lógicas encontradas, dedicando un mayor espacio a la consolidación de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con un espacio político propio en las sociedades latinoamericanas actuales.

Por último, en el cuarto capítulo, abordaremos la tríade de categorías que hemos juzgado como clave para la construcción de nuestro análisis: territorio-territorialidad-territorialización y los conceptos relacionados con ellos. Pensamos que el territorio, los esfuerzos de territorialidad y de territorialización configuran la encrucijada fundamental donde se encuentran todos los elementos que intervienen en nuestra investigación. Es en el territorio donde se encuentran y desencuentran (conflictividad) intereses

divergentes, pero también lógicas sociales y racionalidades diversas, en fenómenos como la expansión del extractivismo sobre territorios comunitarios. El territorio es disputado en este tipo de conflictos; una disputa que enfrenta no solo intereses por el control de su base material (acceso a bienes naturales y fuentes energéticas) sino también lógicas discursivas y de tenencia/uso de la tierra que se presentan como antagónicas. Entendemos, por tanto, el territorio, configurado y comprendido de modos diversos, como el espacio privilegiado para comprender el conflicto y las posibilidades de *alter*-nativas o soluciones generadas en un escenario de megadiversidad.

Capítulo 1

Hacia un proyecto teórico de referencia

No es difícil convenir en que la realidad de la expansión de la minería y su impacto sobre la garantía de la vida y de los derechos territoriales de las comunidades indígenas es un fenómeno de carácter multidimensional. Sobre él, o en él - o a partir de él - confluyen muchas dimensiones en juego: económica, política, étnica, cultural, territorial, productiva,... Estas diferentes dimensiones del mismo fenómeno no se mantienen aisladas unas de otras en la realidad, sino que co-existen en una interrelación permanente y compleja.

Esta constatación tiene consecuencias fundamentales en el modo como pensamos la realidad y cómo generamos conocimiento sobre ella. Nos exige un análisis basado en la naturaleza compleja de las cosas que, al tiempo que nos permita una comprensión del metabolismo de las relaciones sociales, no nos distraiga de la necesidad de un pensamiento dialéctico que exponga las dimensiones de poder implicadas en el conjunto.

1.1. De la fragmentación del conocimiento al diálogo de saberes

Diversas áreas del conocimiento científico están, de hecho, comprometidas con el mismo fenómeno que nos ocupa: el de la minería y los territorios sociales. Disciplinas como geografía, historia, economía, geología, ingeniería, ciencias políticas, biología, sociología o antropología, entre otras, podrían contribuir con abordajes teóricos específicos y desarrollar conceptos y sistemas explicativos propios sobre la misma cuestión. Si consultásemos, de un lado, a un geólogo y, de otro, a un historiador o un antropólogo sobre la realidad de la minería en el Estado de Roraima y en los territorios hasta hoy ocupados por comunidades indígenas, posiblemente obtendríamos no solo

conocimientos muy diversos entre sí, sino también lógicas y ópticas diferentes. Complementarias y coincidentes en unos puntos; y claramente encontradas en otros.

Incluso dentro de cada una de las disciplinas enunciadas, graduales subdivisiones acotarían aún más no sólo el campo de investigación, sino también los enfoques, las metodologías y las propias técnicas investigativas. Superar esta disección de la realidad, reconocer la permeabilidad de las fronteras epistémicas y construir un proyecto teórico de naturaleza compleja es el primer esfuerzo al que nos enfrentamos: “(...) creemos que hay que superar las barreras, establecerse en las zonas intermedias como mejor modo de lograr avances en el conocimiento” (Cairo, 1993: 197).

El desarrollo de la ciencia occidental ha impregnado su explicación de la realidad de una progresiva especialización del conocimiento; una fragmentación que se ha ido afinando cada vez más a lo largo de la historia de la ciencia. Immanuel Wallerstein (2006) refiere que fue en el periodo liminar entre los siglos XVII y XVIII cuando tuvo lugar el primer punto de inflexión de esta historia reciente – y occidental - del conocimiento. En ese momento se habría producido una especie de divorcio en el campo del saber que separaba lo que se comprendió como el ámbito de la filosofía – después humanidades - y el ámbito, emergente, de la ciencia. Se trataba de un período histórico en el que premiaba la necesidad de un profundo cambio tecnológico y de conocimiento y ello precipitó, según Wallerstein, la ruptura de la “unidad del saber” que hasta ese momento parecía instalada. “Surgió, como consecuencia, la necesidad de saber cómo sabemos y debatir acerca de cómo debemos saber” (2006: 6).

Este primer distanciamiento entre la filosofía - ahora identificada con la búsqueda de lo bueno y lo bello - y la ciencia - constituida para la búsqueda de la verdad - permitió la génesis de argumentos que atribuían a las Humanidades una pretendida incapacidad de discernir la verdad, al tiempo que consagraban la supuesta neutralidad de los científicos frente a los valores (2006: 7). Objetividad y subjetividad resultaron diseccionados en campos diferentes.

Continúa Wallerstein describiendo que, después de esta primera disociación, surgieron las primeras divisiones en el lado de las ciencias sociales con la configuración de la historia, la economía, las ciencias políticas y la sociología. A su vez, la preocupación por el *otro* encontraba su desarrollo en la antropología y el orientalismo. Se profundizaba así un proceso cada vez más tendente a la especialización y la auto-referencia de cada una de las disciplinas científicas. Se ponía en valor el abordaje especializado y se consolidó como sinónimo de precisión y veracidad, más intensamente aún en el campo de las llamadas ciencias naturales. Para muchos, no obstante, una de las consecuencias de este proceso ha sido la fragmentación del conocimiento y, por tanto, la parcelación de la realidad con vistas a su comprensión y explicación. Según Aguirre Rojas, Wallerstein piensa que la raíz de la crisis actual de las ciencias sociales está, precisamente, en “el hecho mismo de haber *fragmentado* y *parcelado* el estudio de lo

social-humano en distintas disciplinas (...)” (2007: 48; destaque en el texto original). “Los compartimentos estancos de análisis – lo que en las universidades se denomina disciplinas – son un obstáculo” (Wallerstein, 2006: 4).

La especialización técnica ganó terreno al saber sapiencial y pretende imponerse desde entonces como saber universal o, al menos, hegemónico. Emerge así como una forma de dominio, epistemológico y político, presentándose como el modo de conocimiento más completo y sometiendo otras matrices de conocimiento en un intenso proceso de *colonialidad*. “Assim, o pensamento moderno europeu coloca-se a si próprio como um saber superior no mesmo movimento que qualifica todos os outros saberes como locais, regionais ou provincianos” (Porto-Gonçalves, 2002: 217-218). Esa pretensión de erigirse como saber universal y no un saber “histórica e geograficamente situado, isto é europeu”, como nos recuerda Porto-Gonçalves, se va a construir necesariamente sobre la negación y colonización de otras lógicas y matrices. Esto limita extraordinariamente las posibilidades de una epistemología plural, creativa y dialógica, capaz de esbozar horizontes colectivos posibles.

Cada vez son más las voces que alertan hacia la necesidad de superar la fragmentación del conocimiento científico. El desafío se enuncia como la necesidad de buscar campos analíticos compartidos y ampliar la capacidad epistémica y de comprensión de los fenómenos en su complejidad: percibir, en definitiva, que los límites y las fronteras entre disciplinas son más porosos de lo imaginado (Porto-Gonçalves, 2002: 217). Ahora bien: cómo llevar a cabo esta tarea no es algo sencillo.

Uno de los caminos más recorridos ha sido la búsqueda de procesos *inter* o *trans*-disciplinares que convocan para un mismo ejercicio analítico a diversos campos del conocimiento - diversas “disciplinas” - manteniendo la autonomía de cada uno de ellos. Si esta reflexión vale para el análisis de fenómenos sociales en general, mucho más necesaria resulta cuando abordamos cuestiones como la expansión de la empresa extractiva y de los proyectos mineros, que están necesariamente asociados a una crisis ambiental global y, por tanto, civilizatoria. Según Enrique Leff, “a complexidade dos problemas sociais associados a mudanças ambientais ao nível global abre caminho para métodos interdisciplinares de investigação” (citado en Moraes, 2009: 183). Estas búsquedas han conseguido dar pasos importantes en el sentido de superar algunos reduccionismos; sin ninguna duda, la capacidad de circular por lo *inter*-disciplinar es una competencia absolutamente necesaria y saludable en nuestros días. Sin embargo, posiblemente nos encontramos delante de un desafío epistémico aún mayor y más exigente.

Otros autores han postulado la existencia de un saber general que trascendería los diversos saberes específicos sin renunciar a ellos, en lo que podría parecer una reivindicación de la unidad del saber preexistente. “El mundo es uno solo. Es visto a través de un determinado prisma, por una determinada disciplina pero, para el conjunto

de disciplinas, los materiales constitutivos son los mismos (...) Una disciplina es una porción autónoma, pero no independiente, del saber general. Así se trascienden las realidades truncadas, las verdades parciales” (Santos, 2000: 17).

El desafío fundamental, por tanto, sería no perder la unicidad de la realidad, pues como recuerda Milton Santos citando a Georges Gurvitch “no existe un paralelismo riguroso entre las esferas de lo real y las ciencias que lo estudian” (2000: 17). Ese saber general o “metadisciplina”, como la propone Santos, debe ser el que defina los objetos y la pertinencia de cada disciplina en sí, y no al contrario. No obstante, no está demostrado que un único saber holístico pueda ser identificado con una realidad total, como alerta Enrique Leff, pues esa tentativa de la totalidad del conocimiento – retorno a la unidad del saber – podría conducir a una nueva homogeneidad impidiendo la “productividad de lo heterogéneo” (Leff, 2004: 61).

Subyace a todos estos esfuerzos la búsqueda por dar cuenta de la naturaleza compleja de la realidad. Immanuel Wallerstein, como ya hemos apuntado, mantiene también una posición muy crítica con la organización del saber establecida en el sistema actual de los conocimientos científicos (Aguirre, 2007) e incorpora un cuestionamiento sobre la división entre saberes “científicos” y saberes “populares” que, en su opinión, estaría representando y consumando una oposición entre culturas hegemónicas establecidas y culturas populares y subalternas. Esta reflexión de Wallerstein ya sugiere una mirada más amplia y profunda, porque permite una apertura a otras matrices de conocimiento consideradas hasta ahora al margen de las ciencias.

De este modo, parece evidente que la explicación de la realidad no solo no se conseguirá en su densidad recurriendo a estrategias que se queden en lo *inter*, *pluri* o *trans* [disciplinar], sino que enfrentamos una cuestión de base mucho más profunda y ambiciosa. Es la propia organización fragmentada del conocimiento y al mismo tiempo la exclusión de *saberes-otros* lo que nos dificulta organizar un sistema explicativo coherente con la complejidad de los fenómenos sociales. Se incorpora en el proceso de conocimiento el “*fin de las certidumbres* epistemológicas sobre las cuales construimos todos nuestros saberes actuales” (Aguirre Rojas, 2007: 53).

Enrique Leff formula el desafío de la construcción del conocimiento desde una perspectiva más transformadora y consigue elaborar una propuesta ambiciosa hacia una nueva racionalidad. Somos conscientes de que el proyecto teórico de Leff sobrepasa, en mucho, los objetivos de este trabajo investigativo, pero las bases de su pensamiento pueden ayudarnos significativamente en esta búsqueda de un proyecto teórico coherente. Leff, al abordar la crisis ambiental que vivimos a una escala planetaria, la explica como una crisis civilizacional de la cultura occidental, de la racionalidad moderna que ha gobernado la economía en el mundo globalizado y del modo de construcción el

conocimiento sobre el mundo, que lo ha objetivado y cosificado (Leff, 2004)⁶. La crisis ambiental es, de este modo, “la crisis del *efecto del conocimiento sobre el mundo*” (Leff, 2004: ix). “La voluntad de conocimiento engendrada por la epistemología ha generado un exceso de objetividad del mundo. El afán de iluminar el mundo por medio de la razón hasta hacerlo transparente (...) ha engendrado una realidad omnipresente en el horizonte de la existencia humana. Esta *hiperrealidad* ha dislocado el orden simbólico” (2004: 88-89). Por eso, Leff apunta a una racionalidad teórica profundamente nueva, a la necesidad de iniciar un nuevo “campo del saber y del conocimiento” al que denomina saber ambiental (2004).

No se trata aquí, según Leff, de conseguir únicamente una acertada articulación entre conocimientos científicos, sino de ir más allá: asumiendo los límites del propio conocimiento científico, propone el *diálogo de saberes* y la racionalidad ambiental como “produções discursivas e práticas sociais que não teriam preocupações maiores com qualquer tipo de ruptura epistemológica ou com qualquer tipo de pureza científica, pois trata-se de inaugurar um campo de saber e de conhecimento com articulações intra (disciplinares) e extracientíficas (culturais)” (citado en Floriani, 2004: 117). Un campo del saber que toma entidad como consecuencia de disponer para el encuentro “os núcleos de racionalidade das ciências e o campo do saber ambiental” (Leff, 2000: 319). Y esto frente a una racionalidad científica y económica hegemónica que, desplazando y sometiendo a la naturaleza, no permite encontrar soluciones a los graves conflictos sociales y ambientales que devienen de una crisis ecológica evidenciada en las últimas décadas.

Las reflexiones recogidas hasta aquí de modo breve sobre el modo como pensamos la realidad nos invitan a adoptar como proyecto teórico de referencia aquel que nos permita:

- circular en las zonas intermedias del conocimiento;
- aprehender una comprensión de la complejidad y de las interrelaciones existentes entre las diversas partes de la realidad sin incompatibilizarlo con el pensamiento dialéctico que revela la oposición de fuerzas e intereses en la apropiación social de la naturaleza⁷;
- incorporar una densidad histórica y espacial a nuestro análisis;

⁶ En este mismo sentido se posiciona Carlos W. Porto-Gonçalves, para quien lo que está en juego con la emergencia de la cuestión ambiental no es algo periférico o colateral, relativamente sencillo de resolver, sino que coloca en jeque todo el proyecto civilizatorio de origen europeo. La crisis confronta la racionalidad economicista que sustenta este sistema moderno; “trata-se de um debate epistémico e político a uma só vez” (Porto-Gonçalves, 2012: 20).

⁷ “El pensamiento complejo provee un esquema heurístico para analizar procesos interrelacionados que determinan los cambios socioambientales, mientras que la dialéctica, como pensamiento crítico, ilumina el camino interminable de realización – una revolución permanente en el pensamiento y de transformación social – que moviliza a la sociedad para la construcción de una nueva racionalidad social” (Leff, 2004: 63)

- recuperar la dimensión ambiental y
- atender a categorías y matrices de conocimiento emergentes e implicadas en el fenómeno que estudiamos.

Esto quiere decir que las referencias teóricas - sistemas de análisis y autores - por las cuales hemos optado, y que ahora vamos a presentar, intentan responder a este proyecto. Sin negar la existencia de algunas diferencias entre las propuestas teóricas que escogemos, colocamos mucho más en valor lo que comparten en sus propias zonas intermedias.

1.2. Referencias teóricas para el análisis

Identificamos cuatro referencias teóricas principales con las que queremos avanzar en el conocimiento y explicación de los problemas de la minería y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. A continuación, haremos una breve aproximación a cada una de ellas.

1.2.1. Geografía Política y análisis de sistema-mundo

En primer lugar, acudimos a la Geografía Política, una disciplina intermedia capaz de “contribuir con la renovación teórica y metodológica en el campo de la Geografía y la Ciencia Política” (Cairo, 1993: 197). Por tanto, lleva en sí misma la habilidad de la intersección entre saberes sociales diversos.

Dentro de la Geografía Política, ponemos nuestra atención en la contribución específica de la Geopolítica Crítica como *subcampo* dentro de la primera. La Geografía Política más tradicional había limitado sus categorías de análisis a las relaciones sociales que se daban en el ámbito del Estado, identificando prácticamente el Estado con aquello que podíamos entender como “lo político”. Esto es lo que John Agnew describe como la *trampa territorial*: “... es decir, el pensar y actuar como si el mundo estuviese enteramente constituido por Estados que ejercen su poder sobre bloques de espacio y de este modo se constituyen en el único referente geográfico-político de la política mundial” (Agnew, 2005; 60).

Claude Raffestin coincide con esta crítica a la geografía política tradicional que se convertiría, prácticamente, en una Geografía de Estado, como recoge Heriberto Cairo en el prólogo a la obra de Agnew. Según Cairo (prólogo a Agnew, 2005; XII), el proyecto de la Geopolítica Crítica aprovecha el camino abierto por las perspectivas más radicales dentro de la Geografía y consigue proponer un análisis que aborda la dialéctica entre las “prácticas espaciales” y las “representaciones del espacio”. En el mismo sentido, Jaime Preciado y Pablo Uc (2010) sitúan la propuesta teórica de la Geopolítica Crítica en el terreno del cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con la imaginación del Estado,

sus mitos de origen y mecanismos de homogeneización social. Alertan los autores que la proyección de un tiempo-espacio único vinculado al Estado-nación y las prácticas espaciales propias de la geopolítica clásica hacen parte, en América Latina, de la matriz colonial e impiden el reconocimiento de otras geografías extra-estatales o contra-representaciones del espacio.

En el campo de la Geopolítica Crítica, nos serviremos particularmente del enfoque de la economía política y el análisis de los sistemas mundiales (Cairo, 1993), con su abordaje de la economía-mundo y el aparato conceptual y analítico que se elabora a partir del pensamiento de Imanuelle Wallerstein. Lo haremos de la mano del propio Wallerstein y de las contribuciones de Peter J. Taylor y Colin Flint. El análisis de los sistemas-mundo, además, nos ofrecerá una oportunidad para dotar a nuestro trabajo de la densidad teórica e histórica que nos proponemos a la hora de abordar la problemática socioambiental. “Una de las ventajas de la adopción del enfoque de los sistemas-mundo es que nos permite ser mucho más explícitos respecto a la teoría que subyace tras la historia que exponemos”. (Taylor y Flint, 2000: 14).

Wallerstein defiende que el análisis de sistema-mundo representa, por sí mismo, “una nueva perspectiva acerca de la realidad social” (Wallerstein, 2006: 5) y una ruptura con el conocimiento fragmentado; en sus propias palabras, porta en sí mismo “una falta de respeto por las fronteras tradicionales en las ciencias sociales” (2006: 19).

La génesis del análisis de sistema-mundo en la segunda mitad del siglo XX, explicado por el propio Wallerstein, ya expresa su composición plural. Él reconoce cuatro debates previos - y contemporáneos en su tiempo - que sirvieron para la formación de su propuesta teórica (2006: 13). De estos cuatro debates previos queríamos detenernos particularmente en dos:

- a) El concepto centro-periferia, desarrollado en América Latina por la CEPAL en el contexto de la “teoría de la dependencia”, con destaque para la figura de Raúl Prebisch. La descripción que esta teoría desarrollaba sobre el desigual intercambio gestado en el comercio internacional explicaba la existencia de países económicamente más poderosos que otros. Para explicar la situación de desventaja que América Latina vivía en el ecuador del siglo pasado, Prebisch defendía que existían muchas diferencias entre los centros económicos del sistema mundial y las economías periféricas, entre las que se encontraba las de América Latina. Los *centros* se caracterizaban por disponer de economías homogéneas, con formas de producción diversificadas, complejas y modernas. Mientras tanto, las *periferias* se caracterizaban por ser más heterogéneas y poco diversificadas en su producción, favoreciendo un patrón económico de especialización en dos o tres productos dirigidos para la exportación a los centros económicos. Así mismo, se desarrollaba una crítica de las políticas económicas puestas en práctica por los países más potentes y las grandes corporaciones privadas.

- b) El debate sobre la “historia total” en la Escuela de los Annales en Francia. Esta propuesta, cuyo mayor exponente ha sido Fernand Braudel, defendía que la historiografía debía ser total, “es decir, debía lograr una imagen integrada del desarrollo histórico en todos los ámbitos sociales” (Wallerstein, 2006: 16). De Braudel, el análisis de sistema-mundo recogió dos ideas que serían fundamentales: a) el concepto del tiempo estructural o de larga duración; es decir, estructuras básicas que subyacen a los sistemas históricos; y b) la unidad de análisis, que iría más allá de la tradicionalmente asumida como el Estado-nación y que Braudel ya había descrito como la economía-mundo.

A partir de estas referencias, Wallerstein desarrolló un conjunto explicativo en el que va a proponer una nueva unidad de análisis - el sistema-mundo - y una estructura básica - centro-periferia-semiperiferia. En su conjunto conceptual y explicativo profundizaremos en el segundo capítulo de nuestro trabajo.

1.2.2. Geografía Nueva

En segundo lugar, y en un ámbito más global de la Geografía, recurriremos a las contribuciones del brasileño Milton Santos en el análisis de la producción del espacio, de los sistemas técnicos y del medio técnico-científico-informacional que caracteriza el actual momento de globalización y de división territorial del trabajo. Adoptamos el término de “geografía nueva” para referirnos a esta nueva perspectiva en el ámbito de la Geografía, pues es el título de una de las principales obras del geógrafo brasileño⁸, y expresa la intención renovadora que el legado de Santos dejó para toda la Geografía.

La obra de Milton Santos ha sido una lúcida e intensa contribución a una revitalización de la Geografía (Bosque, 1996), siempre desde una defensa de la ruptura de fronteras epistémicas y de la necesidad de superar el aislamiento en el que se había auto-recluido la propia disciplina geográfica. Santos ofrece categorías importantes para nosotros como las de objetos/acciones, lugar, totalidad, tecnificación del paisaje, horizontalidad y verticalidad, medio natural y medio técnico o el retorno del territorio. Su abordaje del momento actual de la historia, en lo que llama el período científico-técnico-informacional, nos ofrece una lucidez extraordinaria sobre el modo en que las instancias de la economía global inciden en la vida de los territorios locales.

1.2.3. Antropología de la Territorialidad

Nos serviremos también de las referencias de la Teoría Antropológica de la Territorialidad del modo que es enunciada por Paul Little (2002a: 3). La posibilidad de una renovada Antropología de la Territorialidad nace a partir de la concepción de la conducta territorial como algo que hace parte de todos los grupos humanos. El autor nos ofrece un análisis complejo de los procesos de territorialización relacionados con las

⁸ Santos, Milton (1990). Por una geografía nueva. Madrid: Editorial Espasa-Calpe S.A.

fronteras de expansión del capital y las resistencias de las comunidades locales, elementos que son esenciales para nuestro problema de investigación.

La extraordinaria diversidad que caracteriza la sociedad latinoamericana, y particularmente la sociedad amazónica, se traduce también en una singular diversidad en las formas de uso y tenencia de la tierra. Los diversos grupos étnicos establecen diferentes formas de inter-relación con el espacio que habitan. A pesar de esta diversidad, y sin renunciar a ella, afirma Paul Little (2002) que es posible analíticamente formular una teoría antropológica de la territorialidad, cuyo campo de análisis estaría centrado en la cuestión territorial presente, de modo semejante, en la realidad de diversos grupos humanos: pueblos indígenas, campesinos, pescadores, comunidades tradicionales y extractivistas.

Desde la antropología de la territorialidad, Little también nos ayuda a conceptualizar la tríade de categorías que nos hemos propuesto como claves de análisis en nuestro trabajo: territorio-territorialidad-territorialización. Además, nos ofrece un conjunto amplio de otras categorías y conceptos que nos resultan fundamentales: fronteras de expansión, cosmografía, regímenes de propiedad ..., así como una perspectiva histórica necesaria para la comprensión de los conflictos socioambientales: “A história das fronteiras em expansão no Brasil é, necessariamente, uma história territorial, já que a expansão de um grupo social, com sua própria conduta territorial, entra em choque com as territorialidades dos grupos que residem aí” (2002a: 4). También adoptamos de Paul Little su perspectiva de poder en los procesos antagónicos de territorialidad, pues las disputas por el territorio se dan entre actores muy desiguales.

Paul Little es uno de los principales referentes teóricos en la actualidad en lo relacionado al “espacio público panamazónico” (Little, 2014b) y a los conflictos socioambientales inherentes a este momento.

También desde la Antropología, en una conexión muy estrecha con la ecología política, nos ayudaremos también en el trabajo del colombiano Arturo Escobar. De modo particular, en la contribución que realiza en la crítica al desarrollo como proceso homogéneo y la búsqueda de alternativas, así como la reflexión que nos ofrece sobre la recuperación posible de la defensa del *lugar* en un contexto de globalidad como el que vivimos.

1.2.4. Ecología Política en América Latina

La Ecología Política se ofrece, al igual que las referencias anteriores, como un espacio de conocimiento plural y transfronterizo, adoptando una naturaleza epistémica prácticamente híbrida. Digamos que es un espacio compartido y un espacio, al mismo tiempo, en construcción. Paul Little la define como “fruto de um diálogo intenso entre as disciplinas da biologia, da antropologia, da geografia, da história e da ciência política,

criando um espaço transdisciplinar próprio dentro das ciências naturais e sociais” (2006: 86).

Enrique Leff también define que la ecología política construye su campo de estudio y de acción en la confluencia de diversas disciplinas, principalmente de aquellas perspectivas que se van configurando en el campo del pensamiento crítico. “Allí colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética política” (Leff, 2004: 255). Delgado Ramos, finalmente, identifica diversas fuentes teóricas de las que bebe la Ecología Política: la economía ecológica crítica y la ecología marxista, junto con los análisis de la geografía crítica, la historia ambiental, la antropología social, la sociología política y los estudios de tipo sociocultural (2012: 52).

La Ecología Política se centra en el análisis de los llamados conflictos socioambientales (Little, P., 2006; Moraes Muniz, 2009), también definidos como los “conflictos pela reapropriação da natureza e da cultura” (Leff, citado en Floriani, 2004) o los “conflictos ecológicos distributivos”, entendiendo por distribución ecológica “los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida” (Martínez Alier, 2005: 104).

Es por ello que la Ecología Política puede ayudarnos a abordar la cuestión de la expansión de la minería sobre territorios sociales, pues es la dimensión de conflictividad – en su multidimensionalidad – la que nos interesa describir y explicar.

Resulta fundamental acentuar la naturaleza multidimensional de estos conflictos. Hay una disputa evidente por la base material de los territorios pero también por las bases política y simbólica relacionadas con ellos. Es una lucha por los modelos de significación de esos territorios; por los modelos de territorialidad, como veremos más adelante. Es por ello que Paul Little pone en valor la aportación específica de la antropología y la etnografía a la conceptualización del conflicto “para incorporar elementos cosmológicos, rituais, identitários e morais que não sempre são claramente visíveis (...) Um olhar antropológico pode enxergar conflitos latentes que ainda não se manifestaram politicamente” (2006: 92).

En términos generales, conflictos ambientales son aquellos relacionados con el acceso a los bienes naturales, el control del territorio, los daños causados y la asimetría o desigualdad social, espacial y económica en el uso humano de los recursos y en los impactos negativos. Al mismo tiempo, se trata de conflictos en los que se produce una disputa por el sentido y la significación, por el orden simbólico y las concepciones de la vida, la sociedad, la democracia, la naturaleza, el territorio y el bien común. Son esos conflictos ambientales que “se plantean en términos de controversias derivadas de

formas diversas – y muchas veces antagónicas – de significación de la naturaleza (...). De allí surge esa extraña politización de ‘la ecología’” (Leff, 2004: 256).

La Ecología Política es, de ese modo, la política de la reapropiación social de la naturaleza (2004: 270). “ (...) como não há apropriação material que não seja ao mesmo tempo simbólica, o processo de apropriação da natureza é acompanhado, ao mesmo tempo, por uma tensa e intensa luta pelos sentidos a ela atribuídos” (Porto-Gonçalves, 2012: 34). O, como afirma Maristella Svampa, la disputa se da también acerca de lo que los diversos actores sociales entienden por desarrollo o por democracia.

Afirma Arturo Escobar que la Ecología Política se encuentra en ese marco teórico post-desarrollista que puede ayudar a reincorporar una dimensión basada en el lugar, “talvez até para articular uma defesa do lugar” (2005: 2).

De acuerdo con Carlos W. Porto-Gonçalves (2012) existe una contribución específica de América Latina al debate teórico-político impulsado por la Ecología Política. Por este motivo, optamos por tomar como referencias teóricas principales las de autores latino-americanos como el propio Enrique Leff, Maristella Svampa, Eduardo Gudynas y autores como el propio Carlos Walter Porto-Gonçalves – que procede del campo de la geografía – o Arturo Escobar – desde la Antropología, como habíamos indicado anteriormente.

La búsqueda de la Ecología Política se relaciona abiertamente con la propuesta de Leff de una nueva Racionalidad Ambiental, como ya hemos enunciado brevemente en el apartado anterior y como desarrollaremos con mayor profusión en el Capítulo 3 de nuestro trabajo. Desde esta perspectiva, además de ofrecernos un proceso metodológico de estudio y análisis de conflictos de naturaleza socioambiental, nos dispone también una profunda reflexión teórica.

Para Leff, la posibilidad de recomponer el mundo fragmentado pasa por un pensamiento de la complejidad construido a partir de una articulación de ciencias y un diálogo de saberes “abierto hacia el conocimiento no científico – una hibridación entre ciencias, técnicas y saberes” (2004: 92). Lo que él denomina *programa fuerte de sociología del conocimiento* requiere “nuevas bases epistemológicas, en tanto que la problemática ambiental genera nuevos objetos de conocimiento (...) [y] A su vez promueve nuevas metodologías (...)” (2004: 237).

La necesaria Racionalidad Ambiental vendrá informada por un saber ambiental que no se reduce a un método interdisciplinario, ya que surge “de una problemática social que desborda a los objetos del conocimiento y al campo de racionalidad de las ciencias” (2004: 232). Es necesario des-construir conceptos y métodos de diversas ciencias. Dice Leff que las disciplinas que resultan más profundamente cuestionadas y re-elaboradas son aquellas que se posicionan más cerca de las relaciones entre sociedad y naturaleza, destacando la geografía, la ecología y la antropología. Precisamente, el *corpus* del referencial teórico que hemos venido describiendo hasta aquí en las páginas anteriores.

El saber ambiental incorpora temas al debate sobre el proceso económico global, del cual el modelo extractivo-exportador constituye un pilar fundamental, y de las disputas que se generan y los intereses en conflicto. Entre los temas que incorpora insistimos en la recuperación de los saberes locales y las prácticas tradicionales, así como la existencia de un marco jurídico de los nuevos derechos. Dos cuestiones que resultan claves para nuestro trabajo.

Con el primero de los temas, el de los saberes locales, el saber ambiental recupera una ética de la otredad. La racionalidad económica y científica ha conducido a un proceso de unificación y homogeneización de la diversidad. Frente a esto, la racionalidad ambiental sitúa la diversidad cultural y la diversificación de estilos de desarrollo como las estrategias de resistencia frente a la lógica destructiva de la producción – incluyendo la extracción de bienes – en gran escala para el mercado global (Leff, 2004: 187). Leff reivindica los saberes locales como la expresión de la relación entre el conocimiento y la vida, defendiendo la *encarnación* y el *arraigo* del conocimiento (Leff, 2004: 263ss; Escobar, 2005: 4). El interés por lo que Arturo Escobar denomina “prácticas basadas en el lugar” o los modelos locales de naturaleza (2005) ha llevado a que muy diversas disciplinas hayan demostrado “que muitas comunidades rurais do Terceiro Mundo ‘constróem’ a natureza de formas impresionantemente diferentes das formas modernas dominantes; eles designam, e portanto utilizam, os ambientes naturais de maneiras muito particulares” (2005: 3).

Frente al conocimiento tecnocrático que lo invade todo con sus aparentes certezas tecnológicas, “los saberes ambientales arraigan en la tierra a través de nuevas prácticas políticas, sociales y productivas” (2004: 265). Esta convicción es la que alimenta un proyecto teórico que camine hacia un diálogo de saberes y, al mismo tiempo, hacia una superación de los conflictos socioambientales derivados del proceso económico hegemónico.

Respecto a la segunda temática, la existencia de un marco jurídico de los nuevos derechos, es uno de los tres grandes ejes que, como hemos explicado anteriormente, configuran el escenario actual en los conflictos socioambientales con base territorial. Pero además, la consolidación progresiva de un nuevo marco de derechos colectivos a lo largo de las últimas cuatro décadas, operando en los marcos constitucionales de los Estados y en el marco internacional, nos informa de la genuinidad y profundidad de la lucha que están protagonizando pueblos indígenas, comunidades campesinas y grupos tradicionales. Estamos delante de reivindicaciones por tierra, identidad y autonomía⁹ que el marco de los derechos ya ha recogido, superando y transformando la propia

⁹ “Una nueva política del lugar, de la identidad y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del ser y del tiempo en las luchas actuales por las identidad, por la autonomía y por el territorio” (2004: 127).

concepción individual de los derechos humanos, instalada y acoplada en la racionalidad económica de la modernidad.

Concluimos este capítulo recordando lo que nos proponíamos con él: dar razón de las opciones teóricas que hemos escogido para dotarnos de un marco – conceptual y metodológico – que nos permita abordar del mejor modo posible nuestro tema de investigación. El proyecto teórico del que nos servimos está situado en el campo de confluencia que existe entre las diversas referencias teóricas que hemos enunciado. A partir de esta encrucijada de saberes y perspectivas, nos proponemos en los siguientes capítulos dilucidar dos anclajes analíticos y las categorías que vertebran este análisis:

- Primer anclaje analítico: la perspectiva de cómo los territorios son mundializados dentro de la lógica del sistema-mundo moderno-colonial (Capítulo 2).
- Segundo anclaje analítico: el modo como el modelo extractivo-exportador (con énfasis en la minería) y los conflictos socioambientales que de él se derivan se relacionan con la crisis ecológica y civilizacional de nuestro tiempo y con el nuevo escenario de luchas territoriales y enfoque de derechos (Capítulo 3);
- Categorías que vertebran el análisis en su conjunto: la tríade territorio-territorialidad-territorialización (Capítulo 4).

Capítulo 2

La mundialización de los territorios

La presencia de la minería ilegal de oro y diamantes en los territorios indígenas de Roraima y la perspectiva de abrir estos espacios sociales a la actividad minera empresarial es fuente de una intensa conflictividad, como ya hemos enunciado. Del mismo modo, en los últimos años se han multiplicado los conflictos socioambientales con base territorial en los diversos rincones de América Latina, relacionados también con la expansión de la economía extractiva de bienes naturales orientada a la exportación.

Muchos de los análisis que se han elaborado sobre la naturaleza de los conflictos socioambientales con base territorial son contruidos desde la racionalidad economicista que suele presentar los hechos como algo normal e irreversible (Taylor, 2000). En este tipo de argumentaciones, la expansión del modelo extractivo se muestra como un fenómeno imprescindible para alimentar un crecimiento económico y tecnológico y un estilo de vida del que, en realidad, la mayor parte de la Humanidad continúa quedando fuera. En los propios países donde la economía extractiva tiene un mayor peso, su expansión es defendida como un camino irrenunciable para garantizar los ingresos necesarios que permitirán, precisamente, sostener determinadas políticas públicas como la de educación, salud o combate a la desigualdad. Estos abordajes, sin embargo, dejan fuera del análisis o evitan otras dimensiones que son fundamentales para la vida de las personas, las comunidades o para la propia gobernabilidad social y que no son tomadas en consideración.

Lo que planteamos es adoptar una perspectiva sistémica para el análisis de estos fenómenos que consiga, además de incorporar otras dimensiones que van más allá del cálculo economicista, recuperar para el análisis dos elementos que consideramos fundamentales:

- De un lado, la *historicidad* de los procesos sociales y económicos o condiciones históricas en las que estos fenómenos se originan y se desarrollan;
- De otro lado, la *espacialidad* de los fenómenos que nos permite observar, y explicar, las consecuencias que la dinámica del conjunto del modelo económico ejerce sobre las partes; en este caso, sobre los territorios.

Para recuperar esta dimensión espacio-temporal nos apoyaremos en la propuesta teórica del análisis de sistema-mundo que ya hemos avanzado anteriormente y del cual el mayor exponente es Immanuel Wallerstein. Al mismo tiempo, recogeremos elementos fundamentales del proyecto teórico de Milton Santos, el cual nos ofrece categorías y perspectivas explicativas del funcionamiento de la actual sociedad global.

2.1. El sistema-mundo como unidad de análisis

La primera cuestión clave que Wallerstein introduce en el debate tiene que ver con la unidad de análisis. Como hemos visto anteriormente, la Geografía Política venía utilizando de modo convencional al Estado-nación como unidad de análisis privilegiada. Wallerstein afirma que esta unidad no es válida para comprender, por sí sola, el funcionamiento y la dinámica del mundo moderno y que la nueva unidad de análisis “no puede ser otra que la del sistema-mundo considerado siempre en su *totalidad*, es decir, en su más vasta dimensión geográfica” (Aguirre Rojas, 2007: 22). En esta unidad de análisis, las diversas sociedades nacionales no son sino partes de un todo mayor.

Preocupado por conseguir explicar la naturaleza del cambio social, sugiere Wallerstein que cualquier cambio debe ser comprendido y analizado en este contexto amplio del sistema-mundo moderno (Taylor e Flint, 2000: 6) y no solo desde la perspectiva reducida de los Estados nacionales. “La realidad social en que vivimos y determina cuáles son nuestras opciones no ha sido la de los múltiples Estados nacionales de los que somos ciudadanos sino algo mayor, que hemos llamado sistema-mundo” (Wallerstein, 2006: 4). Las consecuencias de adoptar la unidad de análisis que nos propone Wallerstein son relevantes.

Si abordásemos, por ejemplo, la cuestión de la desigualdad económica instalada entre las diversas regiones del planeta, nos dice Wallerstein que “el hecho de que algunos países sean ricos y otros sean pobres no se debe simplemente a que recorren con diferente ritmo un supuesto camino universal que conduce a la opulencia: al contrario, ricos y pobres forman parte de un único sistema y experimentan distintos procesos en el seno de ese sistema” (2000: 11). El planteamiento es, claramente, un legado de la teoría de la dependencia desarrollada en América Latina. Como afirman Composto y Navarro, “existe una ‘unidad constitutiva’ entre el mundo hegemónico y el subordinado, ya que ambos han surgido y se han consolidado en el mismo proceso histórico de constitución del sistema-mundo capitalista como un todo integrado” (2014: 40).

Se rompe así la línea de argumentación que defendía que existe un camino único de progreso que debía ser transitado por todos los países para llegar a un determinado nivel socioeconómico de bienestar (Taylor y Flint; 2000). Quienes adherían esta teoría de los estadios “presuponían que las unidades individuales – ‘sociedades nacionales’ – se desarrollaban todas fundamentalmente de la misma manera (...) pero a ritmo distinto (...). Este truco de ilusionismo tenía a su vez un costado práctico. Implicaba que el Estado ‘más desarrollado’ podía ofrecerse como modelo para los Estados ‘menos desarrollados’” (Wallerstein, 2006: 12). La lógica lineal impresa en el concepto de desarrollo está presente en el ideario que defiende el modelo extractivo-exportador como una oportunidad para que los Estados ricos en bienes naturales se incorporen a las posibilidades globales.

Esta geografía del desarrollo, que clasifica a los países en tres grupos - desarrollados, en desarrollo o subdesarrollados -, se ha mantenido hasta nuestros días como explicación válida, concediendo a unos lugares del mundo un dominio político, económico y cultural sobre otros lugares. Es lo que Porto-Gonçalves denomina la “geografía imaginaria”, relato simbólico-espacial que dispuso a los diferentes pueblos y culturas en una trayectoria lineal que iría de la naturaleza a la cultura, de las Américas y África hacia el ideal eurocentrista. “A invenção do europeu civilizado é, ao mesmo tempo, a invenção do selvagem e, assim, a invenção da modernidade é inseparável da invenção da colonialidade” (2002: 218).

El enfoque crítico de Wallerstein abre la puerta para encontrar conexiones que expliquen la relación de los patrones de crecimiento y bienestar económico de determinadas regiones del planeta con territorios concretos que, sin haber crecido significativamente en calidad de vida, han contribuido con sus bienes naturales y su fuerza de trabajo al crecimiento de las primeras. Acoger como unidad de análisis el sistema-mundo se torna condición necesaria para poder dar cuenta de la explicación de estas conexiones.

Al tratarse de un enfoque sistémico, podemos decir que detrás de la propuesta de análisis de sistema-mundo hay una idea de *totalidad* que caracteriza el conjunto como un todo. Esta idea de totalidad también la encontramos en Milton Santos, con una intencionalidad direccionada más explícitamente a los intereses de la disciplina geográfica. Santos atribuye esta noción a un legado de la filosofía clásica; según esta idea, todo lo que existe en el Universo conforma una unidad y “(...) cada cosa no es nada más que parte de la unidad, del todo, pero la totalidad no es una simple suma de las partes. Las partes que forman la Totalidad no bastan para explicarla. Al contrario, es la Totalidad la que explica las partes” (2000: 97).

Para Milton Santos, la totalidad está en permanente transformación y dinamismo, contrariamente a la ilusión de un permanente equilibrio. Todo conjunto está en constante proceso de cambio o de totalización, en camino siempre hacia una nueva

totalidad. Santos coincide con el análisis de sistema-mundo en que los cambios sociales tienen una naturaleza global y estructural. A pesar de que se expresan físicamente en determinados territorios, ocasionando en ellos profundas transformaciones, esos lugares de la localidad cumplen simplemente un papel funcional, mientras que la naturaleza de los cambios responden a la “sociedad total” (2000: 97).

Estas afirmaciones nos permiten ya una primera aproximación a la relación que existe entre territorio y globalidad, así como a la naturaleza de los cambios sociales que se gestan en un ámbito global pero se *geo-grafían*; se inscriben en territorios concretos. Conduciéndolo hacia la realidad social que nos proponemos investigar en este trabajo, la implantación de una estrategia extractivo-minera, de pequeña o gran escala, en una determinada sociedad regional provocará las condiciones necesarias para profundos cambios sociales, económicos y culturales, y de estos cambios nacerá una nueva realidad social en esa región. Lo que se configura en interés investigativo para nosotros es:

- primero, describir el proceso político y económico que conduce estos cambios, ya que “el proceso de totalización conduce de la antigua a la nueva totalidad y constituye la base de conocimiento de ambas” (Santos, 2000: 101);
- segundo, los cambios que se han producido en la vida de las personas y comunidades y en los territorios por la expansión de la actividad minera y si en estos cambios se producen agresiones a derechos humanos constituidos y reconocidos;
- y, finalmente, el modo en que estos cambios experimentados localmente responden, en realidad, a transformaciones cuyo origen y naturaleza se generó en lugares distantes a ese territorio y esa comunidad.

2.2. Historicidad de la economía-mundo: de la perspectiva de lo global al discurso desarrollista

El sistema-mundo que Wallerstein propone como unidad de análisis y a partir del cual se explicarían los conflictos socioambientales con base territorial no es una institución que haya existido siempre ni se ha originado como un fenómeno natural. Por el contrario, se conforma bajo condiciones históricas concretas que deben ser consideradas.

Cada grupo humano va transformando y elaborando su percepción de lo que es el mundo a partir de su propia experiencia histórica, de la generación de nuevos conocimientos y de la interacción con otros grupos y lugares. Si es así, ¿cómo y cuándo surge la perspectiva que hoy tenemos del espacio global, premisa para poder hablar de un sistema-mundo?

La tesis que acogemos de Wallerstein y de Peter Taylor y Colin Flint es que la comprensión del sistema-mundo actual está relacionada estrechamente con dos acontecimientos histórico-espaciales concretos: el surgimiento de la sociedad moderna y de la economía-mundo capitalista. La condición previa para que ambos acontecimientos tuviesen lugar en un determinado momento de la Historia fue la transformación de la percepción del espacio global, que sólo fue posible a partir del proceso de colonización europeo sobre el territorio de las Américas. Detengámonos en este asunto.

2.2.1. El surgimiento de la economía-mundo y la sociedad moderna

La intención de conocer el espacio total ha sido una constante en las diversas sociedades humanas, cada una de ellas dentro del universo espacial que le permitían sus condiciones tecnológicas, sociales y económicas. Cada vez que una sociedad ampliaba su conocimiento del espacio global pensaba haber llegado al conocimiento definitivo, a cerrar el círculo de lo cognoscible (Santos, 2000).

Nos dice John Agnew que el mundo de la modernidad sólo tiene condiciones de germinar a partir de la capacidad de contemplar el mundo como un todo, como una sola entidad aunque dividida, y ese ejercicio de imaginación geopolítica resultaba imposible “antes del encuentro de los europeos con el resto del mundo, que comenzó a finales del siglo XV e inicios del XVI” (2005: 17).

Según Jerry Brotton (2014), el desarrollo a lo largo del siglo XV de la navegación y la cartografía, los relatos de grandes viajeros como Marco Polo y otros pilotos y navegantes más anónimos, así como la instalación del comercio de especias y tejidos entre Europa y Asia - que incluía el rodeo oceánico por el litoral del continente africano - habían creado en la sociedad europea el caldo de cultivo para imaginar nuevas rutas que ampliaran su conocimiento del espacio-todo¹⁰. Esto es lo que posibilitó claramente la empresa de Cristóbal Colón que culminó con su llegada a las costas americanas y el inicio de la colonización de estas tierras. Es en este momento que se produce un salto impar en el camino hacia una comprensión global del espacio-mundo (Taylor, 2000), con

¹⁰ En su obra “Historia del mundo en 12 mapas”, Jerry Brotton elabora una extraordinaria descripción de la sociedad de la época y del desarrollo de la cartografía que daría pie a iniciativas como la de Cristóbal Colón. Brotton analiza el mapa del mundo titulado *Universalis cosmographia*, datado en 1507 y atribuido al cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, considerado como el primer mapa “que nombra y representa a ‘América’ como una masa continental separada de Asia” (2014: 187). Según Brotton, Waldseemüller reconoció su deuda con “una serie de cartógrafos anteriores, incluidos tanto los mapas y proyecciones teóricos y académicos de Ptolomeu como los portulanos, las cartas de navegación y los mapas, más prácticos, producidos por pilotos y navegantes contemporáneos que desde comienzos del siglo XV trataban de determinar cómo navegar más allá de las costas europeas” (2014: 194). El mapa de Waldseemüller, según Brotton, transformó la perspectiva de lo global que se tenía hasta el momento y ello originó profundos cambios en la sociedad del momento y en la propia Historia de la humanidad: “rompía la cosmovisión ptolemaica clásica, al introducir un cuarto continente en la conciencia geográfica europea y planteando así una serie de nuevas cuestiones religiosas, políticas, económicas y filosóficas que ocuparían la atención de los eruditos en las generaciones siguientes” (2014: 196).

una precisión de lo real ya pretendida anteriormente pero nunca alcanzada hasta entonces.

Esta nueva perspectiva de lo global transformó profundamente la concepción del *todo* y, por tanto, incorporó nuevas relaciones e interacciones entre las partes ahora “encontradas” entre sí con una evidente inequidad de poder. Europa se asume, claramente, como centro del tablero de la nueva globalidad. “El cosmógrafo moderno presentaba una serie de diferencias con respecto al antiguo. La primera tenía que ver con la percepción del espacio, que ya no era algo totalmente abstracto. El horizonte podía cruzarse (...) El mundo podía ser pensado y experimentado como si fuera un conjunto (...) un lienzo sobre el que podía pintarse el mundo moderno, cuyo centro era Europa. Descubrir no era tanto comprender el nuevo lugar, sino compilar y acumular conocimiento para traducir la variedad del mundo a categorías familiares para la mentalidad europea” (Agnew, 2005: 22-23).

El proceso colonizador de asentamiento europeo en América, acompañado de una aguda empresa extractiva y esclavista, respondió claramente y por primera vez a estrategias globales y generó, al mismo tiempo, conflictos locales y globales. Se inauguraba así la perspectiva de economía-mundo capitalista y, con ella, la emergencia de la sociedad moderna.

Wallerstein retoma el concepto de economía-mundo de Fernand Braudel para hablar de “una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos o esenciales así como un flujo de capital y trabajo” (Wallerstein, 2006: 21). Se trata además no de cualquier intercambio, sino de un intercambio de naturaleza capitalista¹¹; de hecho, “un sistema capitalista no puede existir dentro de cualquier marco sino sólo dentro de una economía-mundo” (2006: 22).

La economía-mundo, en esta concepción sistémica y estructuralista, favorece la transferencia de bienes y riquezas desde los espacios *periféricos* del sistema hacia los *centros* económicos, ampliando permanentemente las distancias entre ellos al tiempo que aumentan las relaciones de inter-dependencia (Wallerstein, 1979; 1998; 2006).

Las principales metrópolis europeas adquirieron una nueva dimensión de lo global que transformó absolutamente el marco vigente de intercambio que habían establecido con la región de Oriente. Ahora, el interés explícito de los principales centros económicos para disponer de acceso directo a los bienes naturales y a las fuentes de energía se percibía como una posibilidad real.

Las oportunidades que se abren, desde la perspectiva del colonizador, son mayúsculas. De un lado, un vasto territorio rico en recursos que pueden ser extraídos y transportados

¹¹ Wallerstein afirma que el capitalismo no es la mera existencia de personas o empresas que producen y venden en el mercado para obtener algún tipo de ganancia, algo que ha existido siempre. Lo que caracteriza un sistema capitalista es el hecho de priorizar “la incesante acumulación de capital” (2006: 22).

hasta Europa. En el sentido contrario, la posibilidad de desplazar algunos procesos productivos manufactureros a los nuevos territorios-yacimiento. Para ambas pretensiones eran necesarias férreas medias de control: de las travesías navales y el arte de la cartografía; de la mano de obra local, sometiéndola a condiciones de esclavitud; y de los territorios. Esta última condición será clave hasta nuestros días.

Composto y Navarro (2014) aseguran que era parte sustancial de la lógica de la modernidad/colonialidad incorporar a América Latina al sistema-mundo en una condición de mero recurso a ser explotado. “Ecosistemas enteros fueron apenas concebidos como plataforma de tierras explorables, incorporadas al espacio hegemónico europeo por su enorme rentabilidad” (2014: 42).

Boaventura de Souza Santos reflexiona sobre el concepto de “justicia histórica”, referido precisamente a la deuda que el colonialismo moderno creó para pueblos enteros y que colocó “gran parte del mundo al servicio del desarrollo económico, capitalista (...)” (citado en Granovsky, 2014: 242).

Junto con la economía-mundo capitalista nace la sociedad moderna en la segunda mitad del siglo XV. Lo que vale decir que “los orígenes de la Modernidad están relacionados con la expansión geográfica del poder europeo” (Taylor y Flint, 2000: 4). La idea de Modernidad, cuando es desprovista de su condición histórica, se instala en el imaginario y el pensamiento de nuestras sociedades como algo natural y, simbólicamente, bueno y deseable. Por eso, demarcar históricamente el inicio de la sociedad moderna no es un ejercicio prescindible para el conjunto de nuestro análisis.

Con frecuencia se relaciona el inicio de la Modernidad con la irrupción histórica de la Revolución Industrial [1760 hasta mediados del siglo XIX]. “De hecho, la sociedad moderna y la sociedad industrial se suelen utilizar como si fuesen sinónimos. Lo que estamos intentando es invalidar este legado. Las sociedades modernas adoptan muchas formas, de las que la sociedad industrial es solo una, aunque sea muy importante” (Taylor e Flint, 2000; 382).

Hoy resulta difícil mantener la identificación de sociedad moderna y sociedad industrial, una vez que “una de las características de la globalización contemporánea es que la producción industrial está relativamente dispersa como resultado de la ‘desindustrialización’ de muchos de los países más ricos del mundo (...) Tener una planta siderúrgica ha dejado de ser un signo de modernidad como ocurría en el pasado” (Taylor y Flint, 2000; 4)¹².

La Modernidad nace antes de la Revolución Industrial y precisamente crea las condiciones para que ésta se dé y se desarrolle hasta nuestros días. Es indudable que la

¹² En nuestros días observamos que algunos procesos extractivos y/o productivos/fabriles, aquellos que incluyen mayores impactos sociales y ambientales, son desplazados desde los centros de poder económico hacia otros lugares. Grandes corporaciones desarrollan modos de extracción y/o producción en lugares del mundo que no podrían desarrollar en sus países de origen.

Revolución Industrial introdujo profundas transformaciones que re-configuraron el sistema de economía-mundo a partir de nuevas dinámicas productivas, distributivas y de consumo y de nuevas relaciones de trabajo. Así como el actual periodo científico-técnico-informacional, caracterizado comúnmente como Globalización, imprime en el sistema nuevos elementos e interacciones particulares de nuestro tiempo, relacionadas con nuevas percepciones de la globalidad y del ecumene. Es decir, todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos quinientos años ha ido configurando y re-configurando esta percepción de lo global y de los procesos económicos que se dan en la globalidad; pero ésta solamente es inaugurada con la colonización europea sobre las tierras de las Américas. Todos los procesos posteriores se generan en el seno de la sociedad moderna que nace a partir del siglo XVI.

Desde el punto de vista ideográfico, la imagen de modernidad se vincula a los discursos actuales que justifican y fundamentan emprendimientos extractivos como la minería, pues a ellos se les atribuyen las características del progreso. Si la inversión del capital extractivo en una región gana la batalla simbólica de lo que es deseable o bueno, cualquier contestación u oposición será percibida como señal de retroceso, estancamiento y obstáculo. De este modo, reducida la cuestión a esta falsa dicotomía entre lo novedoso y lo arcaico, la primicia y lo obsoleto, se impide percibir con claridad la naturaleza de las relaciones de poder que hay implicadas.

Los bienes naturales y la fuerza de trabajo necesarias en un proyecto extractivo como el de la minería no necesariamente generan mejores condiciones de vida en los territorios, ni siquiera en las sociedades del entorno regional, pero sí en las economías de destino. “Assim, nos é possível ver que aquilo que até aqui tem sido considerado mundo moderno, centrado na dinâmica europeia, estadounidense e japonesa, é indissociável da colonialidade, pois da América Latina e Caribe, da África e da Ásia é que proveio grande parte da energia que move esse mundo seja na forma da matéria petróleo, seja do ouro, da prata, das riquezas minerais ou agrícolas que sabemos, nunca é só matéria mas, também, trabalho (e não há trabalho sem energia) servil, escravo ou sub-salariado” (Porto Gonçalves, 2002: 234).

Milton Santos afirma que la percepción de lo global se ha ido perfeccionando hasta conseguir sus mejores definiciones solamente en las últimas décadas. Según el geógrafo brasileño, a partir de la llegada europea a América, “se amplía el horizonte geográfico de la humanidad, y ese proceso se va desarrollando hasta que, en esta segunda mitad del siglo [XX], gracias al desarrollo superlativo de la ciencia y de la tecnología, el conocimiento del Universo se torna más complejo (...) Esto nos conduce hoy a la cognoscibilidad del planeta. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el planeta se torna enteramente susceptible de conocimiento, conocimiento global y conocimiento local (...)” (Santos, 1996: 17-18). Se trata de procesos de totalización que condujeron a nuevas totalidades. Pero todos estos períodos hacen parte de un período

más amplio, el moderno, caracterizado por la perspectiva de globalidad y por la división territorial del trabajo.

2.2.2. Sistemas históricos y sistemas técnicos: una propuesta dialógica entre dos perspectivas teóricas

Si bien el sistema-mundo moderno es la unidad de análisis propuesta por Imanuel Wallerstein para explicar los cambios sociales en la actualidad, éste no ha sido el único sistema social que ha existido en la historia de la Humanidad. Por eso, para comprenderlo mejor necesitamos entender primero el concepto de *sistema histórico* que propone el mismo Wallerstein.

Un sistema histórico es, para Wallerstein, un sistema social, económico y político, constituido por partes que se relacionan entre sí. Este sistema nace, se desarrolla y decae en un determinado período histórico que lo hace posible (Taylor y Flint, 2000).

Todo sistema histórico es definido, fundamentalmente, por su modo de producción, “que Wallerstein concibe, en términos generales, como la organización de la base material de una sociedad” (Taylor y Flint, 2000; 7). Acentúan Taylor y Flint que ésta es una definición más amplia que la utilizada por los autores marxistas, pues incluye las decisiones que una sociedad toma sobre todo el proceso económico en sus diversas fases: extracción, procesamiento, distribución y consumo, acumulación o descarte.

Wallerstein sugiere que han existido múltiples sistemas históricos a lo largo del tiempo y que todo y cualquier sistema histórico es único en sí mismo. Sin embargo, a pesar de esta pluralidad, el autor propone que todos los sistemas históricos que han existido se pueden agrupar en tres tipos principales (Taylor, 2000): mini-sistemas, Imperio-mundo y economía-mundo.

- a) *Mini-sistemas*. En este tipo, Wallerstein incluye los diversos sistemas caracterizados por la producción primaria y con poca especialización de las actividades, donde la reciprocidad ejerce una función de cohesión social. Normalmente serían protagonizados por grupos sociales pequeños, con relaciones internas de cohesión y pautadas por el parentesco. Tendrían una identificación territorial local y sus actividades económicas estarían relacionadas predominantemente con la caza y pesca, agricultura en escala familiar o extractivismo de bienes naturales ofrecidos por el entorno.

El modo de producción de los mini-sistemas se estructura en actividades locales, territorializadas, y esto es lo que los diferencia de los otros dos sistemas históricos siguientes, los cuales incluyen elementos que van más allá de lo local.

- b) *Imperio-mundo*. Es el primero de los sistemas-mundo. Se trata de un modo de producción redistributivo tributario en el cual existe un grupo amplio de productores agrícolas que generan excedente productivo. Esto permite el mantenimiento de un

grupo social menor de productores especializados no agrícolas y el surgimiento de una clase administrativa dominante.

La Revolución Neolítica, con la expansión de la agricultura y la domesticación de animales, habría generado las condiciones de producción necesarias para esta configuración social. La tributación engendra en sí misma el surgimiento de la desigualdad material, fenómeno poco frecuente en los mini-sistemas analizados anteriormente.

- c) *Economía-mundo*. Es el actual sistema histórico y se refiere básicamente al modo de producción moderno capitalista. En este modo de producción, la acumulación del excedente de capital se convierte en el motor del sistema y es el mercado el que controla la competencia entre las partes. El concepto de economía-mundo de Braudel incorpora la clave de que el cambio social se extiende cada vez a más lugares aunque no tiene una génesis en la propia experiencia local, que va perdiendo autonomía y control sobre lo que sucede en su interior (Santos, 2000: 111).

Los dos últimos sistemas históricos, el Imperio-mundo y la economía-mundo, no solo abandonan una perspectiva localista sino que asumen, intencionalmente, una dinámica globalizadora. En el esquema de Wallerstein, no obstante, será el sistema-mundo moderno-capitalista el que logre imponerse sobre los otros a partir de finales del siglo XV y mantendrá su hegemonía hasta nuestros días. Es en el sistema-mundo donde operan las decisiones que terminan afectando la vida de las personas y las comunidades locales, así como de los propios Estados¹³.

En una lógica que puede confluir con los sistemas históricos que propone Wallerstein, Milton Santos sugiere el concepto de *sistema técnico*: “Los sistemas técnicos comprenden formas de producir energía, bienes y servicios, formas de relación entre los hombres, formas de información, formas de discurso e interlocución” (Santos, 2000: 150).

Para Santos, la técnica es la categoría clave para el análisis social, histórico y espacial “incluidas las técnicas de la propia acción. No se trata, pues, de considerar solamente las denominadas técnicas de producción, o como otros prefieren, las ‘técnicas industriales’, (...) Sólo el fenómeno técnico en su total comprensión permite alcanzar la noción de espacio geográfico” (2000: 33). “La principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza, o mejor, entre el hombre y el medio, viene dada por la técnica” (2000: 27).

¹³ También podemos establecer un vínculo entre los planteamientos de Wallerstein y la propuesta realizada anteriormente por el historiador económico húngaro Karl Polanyi. Polanyi sugería una distinción entre tres formas de organización económica (citado en Wallerstein, 2006: 17): reciprocidad, redistribución y mercado. Cada forma de organización económica podría reflejarse en los respectivos sistemas históricos de Wallerstein.

A partir del análisis de las técnicas, Santos habla de tres tipos de medios: natural, técnico y científico-técnico-informacional.

- a) El *medio natural* sería aquel caracterizado por una baja influencia antrópica. El desarrollo de técnicas por parte de los grupos sociales en este medio tiene un impacto leve que no produce grandes transformaciones. En el medio natural se dan las condiciones para una “sociedad territorial” que controla el proceso de creación y de limitación del uso de las técnicas, creando con su entorno una armonía socioespacial.

Los sistemas técnicos que estos grupos emplean carecen de grandes objetos técnicos, sino más bien se provocan transformaciones sobre la naturaleza a través del trabajo, como es el caso del surgimiento de la domesticación de plantas y animales. Es posible relacionar este concepto espacial con el tipo de mini-sistemas históricos de Wallerstein.

- b) El *medio técnico*, que es también concebido como *período técnico*¹⁴, ya es un escenario donde lo “natural” y lo “artificial” asumen una densidad mayor. La incorporación de objetos técnicos y mecanizados “unen a la razón natural su propia razón, una lógica instrumental que desafía las lógicas naturales y crea, en los lugares afectados, mixtos o híbridos conflictivos” (Santos, 2000: 200).

Se generan las condiciones para que el ser humano se crea equipado con nuevos poderes capaces de controlar y transformar las fuerzas de la naturaleza. Siguiendo a Taylor, con el medio técnico ya estaríamos en la sociedad moderna, en la economía-mundo en su fase inicial.

En este medio técnico las lógicas productivas se dirigen más al intercambio que al consumo local. Las motivaciones de uso cada vez tienen menos relación con los intereses de las comunidades locales. La instalación de sistemas técnicos eficaces es lo que aparentemente garantiza el éxito; y garantizar eso, la presencia de los nuevos sistemas técnicos, es algo que ya no depende de las condiciones preexistentes en el territorio: ambientales, pero también sociales, culturales, económicas y políticas.

- c) Actualmente, Milton Santos dice que estamos viviendo un tercer período que define como *técnico-científico-informacional*. Período que inicia después de la II Guerra Mundial, con el proceso de descolonización y estatización de los territorios coloniales en América y África, aunque se va a acelerar en la década de 70. “El medio técnico-científico-informacional es la cara geográfica de la globalización” (2000: 202). La irrupción de este nuevo período es marcada por la profunda interacción entre técnica y ciencia, una unidad que se va a dar “bajo la égida del Mercado” (Santos, 2000). El Mercado se convierte, gracias a la técnica y a la ciencia, en definitivamente global.

¹⁴ La intencionalidad de Santos de proponer un análisis en que las categorías de espacio y tiempo estén estrechamente relacionadas conducirá su trabajo intelectual.

La tecnificación del paisaje es mucho más ambiciosa y omnipresente, en la medida en que el Mercado inunda la mayor parte de los territorios, reduciendo el medio natural a una realidad-refugio. La “naturaleza natural, allí donde todavía existe, vive una regresión violenta” (Santos, 2000: 202).

La sofisticación y gigantismo de los objetos técnicos al servicio de los nuevos flujos de bienes y personas camina en concordancia con la dimensión de sus efectos. “Los presentes sistemas técnicos incluyen lo que se denomina macrosistemas técnicos (...) promueven grandes obras (embalses, vías rápidas de transporte terrestre, aeropuertos, telecomunicaciones,...)” (2000:150). Objetos modernos y actores hegemónicos están estrechamente asociados, imponiendo sus lógicas a los territorios concretos y las sociedades que los habitan.

Es razonable relacionar este último período propuesto por Santos con la última fase de la economía-mundo propuesta por Wallerstein, y en esa encrucijada podemos posicionar el término extendido de Globalización. Según Santos, la Globalización constituye “el estadio supremo de la internacionalización, la introducción en el sistema-mundo de todos los lugares y de todos los individuos, aunque en diversos grados” (1993: 69).

Todos los lugares son alcanzados por la primacía técnico-científica. Esto se intensifica de modo extraordinario con las políticas de grandes obras de integración física e infraestructura que se desarrollan complementariamente al modelo económico extractivo-exportador. Si anteriormente el imperio de la técnica se manifestaba exclusivamente en los medios urbanos, ahora también abarca el mundo rural, porque es el territorio rural el que interesa por la existencia de bienes naturales de interés para el Mercado global.

Al mismo tiempo, se dan transformaciones importantes en los procesos de trabajo, y con ello nos aproximamos a la afirmación de Enrique Leff: “la revolución científico-tecnológica está operando una transformación del proceso de trabajo e interviniendo a la naturaleza” (2004: 34).

Esto no tiene consecuencias solamente físicas en el espacio, sino también en su significación. Los espacios locales pasan a atender ahora “a los intereses de los actores hegemónicos de la economía, de la cultura y de la política y se incorporan plenamente a las nuevas corrientes mundiales (...). La diferencia, en relación a las formas anteriores del medio geográfico, proviene de la lógica global que acaba imponiéndose a todos los territorios y a cada territorio como un todo” (2000: 202).

Imanuelle Wallerstein y Milton Santos nos ofrecen conceptos y categorías significativos que nos ayudan a situar el análisis de lo que hoy sucede dentro de una perspectiva

histórica. Somos conscientes de que entre ambos abordajes hay diferencias¹⁵, pero creemos que también se dan importantes confluencias. Y es sobre ellas que avanzamos nuestra reflexión teórica.

Ambos autores nos presentan un cuadro tripartito en el que recogen los diversos sistemas sociales que se han dado en la Historia. Wallerstein, con su planteamiento de los sistemas históricos agrupados en tres tipos: mini-sistemas, imperio-mundo y economía-mundo. Santos, con su propuesta de sistemas técnicos y su descripción de los medios natural, técnico y técnico-científico-informacional. Ambos planteamientos tienen la virtud de recuperar las dimensiones histórica, geográfica y estructural.

Wallerstein y el análisis de sistema-mundo coloca el acento analítico en la perspectiva de lo global y en la prioridad que la acumulación de capital representa en el sistema-mundo moderno-capitalista: son éstas las condiciones de posibilidad del actual sistema histórico al que denomina economía-mundo. Ya Milton Santos construye su análisis desde la centralidad de la técnica. Son la historia y la distribución espacial de la técnica, como medio y mediación de la relación del ser humano con el ambiente, las que definen los diversos períodos y generan las condiciones para la formación del actual tiempo técnico-científico-informacional.

Los dos cuadros presentados por Wallerstein y Santos no coinciden plenamente en la categorización, conceptualización y separación de los tiempos; sin embargo, creemos que es posible poner la luz de nuestra reflexión sobre aquellos nudos de confluencia entre ambas propuestas, y eso es lo que proponemos hacer en la siguiente matriz.

En el cuadro inferior derecho reunimos las categorías, a nuestro juicio, confluyentes con las que Wallerstein y Santos describen y explican el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad. O dicho de otro modo, el punto de confluencia entre el sistema-mundo moderno-capitalista (categoría de Wallerstein) y el medio técnico-científico-informacional (categoría de Santos). La mundialización de los territorios, o incorporación del *lugar* a la lógica global del mercado, se sirve de la tecnociencia y tecnocracia para hacer circular bienes naturales del territorio al centro económico, generando condiciones de erosión democrática y agresión a derechos fundamentales, además de una grave crisis ambiental.

¹⁵ Encontramos en Milton Santos, por ejemplo, comentarios críticos sobre las propuestas de análisis de sistema-mundo, que atribuye primero a Braudel y después a Wallerstein (Santos, M. 2000; 95).

Cuadro 1. Matriz relacional entre los sistemas históricos (Wallerstein) y los sistemas técnicos (Santos).

Elaboración por el autor.

		Tipos de sistemas-históricos. I. Wallerstein		
		Mini-sistemas	Imperio-Mundo	Economía-Mundo
Tipos de Medios. Milton Santos	Medio natural	<ul style="list-style-type: none"> • Modos de producción vinculados a lo local y al autoconsumo. • Impacto moderado y local de las técnicas sobre el medio natural. • Cohesión social y armonía socioambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformación de la naturaleza a través del trabajo humano. • Domesticación agricultura y ganadería. • Sistema de organización social y política que induce para un excedente productivo. 	
	Medio técnico		<ul style="list-style-type: none"> • Medios híbridos. Razón natural y técnica. • Perspectiva de lo global – división social del Trabajo. • Sofisticación técnica. • Dominio técnico sobre el medio natural. • Producción para el intercambio y la manutención de clases dominantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de colonización. • Modelo extractivo para exportación a las metrópolis. • División territorial del trabajo • La imposición de objetos técnicos es autónoma de las condiciones preexistentes en el lugar. • Revolución Industrial • Urbanización
	Medio técnico-científico-informacional			<ul style="list-style-type: none"> • Tecnociencia bajo la égida del Mercado. • Globalización multidimensional. • Acumulación del capital como prioridad. • Erosión territorial y democrática. • Incorporación al sistema-mundo de todos los territorios y todas las personas.

2.2.3. Simultaneidad y acumulación desigual de los tiempos

Creemos necesario abordar, siquiera brevemente, la cuestión de la multiplicidad de los tiempos en el actual sistema-mundo moderno-capitalista, consolidado en el medio científico-técnico-informacional. Al acoger las propuestas de Wallerstein y Santos, que incorporan la dimensión histórica al análisis social, surge la problemática de la simultaneidad de procesos diferentes y de sus lógicas simbólicas, modos de producción y *alter*-saberes en una misma coordenada espacio-tiempo. Es decir, el conflicto que se produce entre actores comprometidos con una economía extractiva minera para la exportación - Estado y empresas, fundamentalmente - y actores comprometidos con el territorio nos permite preguntarnos si existen también temporalidades antagónicas y cuál sería la naturaleza de la relación entre esas temporalidades divergentes.

Como hemos señalado anteriormente, la perspectiva lineal del tiempo es una de las características del pensamiento moderno. Es en este nicho epistemológico donde se ancla el argumento de que pueblos indígenas y comunidades tradicionales deberían abrazar las conductas económicas y sociales que se presentan como banderas del progreso para caminar, así, la aparentemente irreversible senda de la integración. Con ello, se ciega la oportunidad que nos ofrece la diversidad de la experiencia humana. O como afirma Porto-Gonçalves, la visión unilineal del tiempo “silencia outras temporalidades que conforman o mundo simultâneamente” (2008b: 38).

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: los diversos sistemas históricos y técnicos, ¿se imponen definitivamente y substituyen sistemas pre-existentes en ese mismo territorio, siguiendo así una lógica lineal del proceso histórico? O, por el contrario, ¿podemos hablar de simultaneidad de tiempos diversos en un mismo espacio social e histórico, abriendo así la posibilidad de soluciones diversas a los problemas del presente?

La respuesta del análisis del sistema-mundo sugiere que la economía-mundo se ha expandido y ha eliminado al resto de los sistemas, conduciéndonos hacia el supuesto de una “sociedad única” (Taylor y Flint, 2000: 10). Imanuel Wallerstein argumentaba que los múltiples mini-sistemas habían ido siendo substituidos e integrados en sistemas-mundo mayores (Taylor y Flint. 2000: 8). Esta expansión de la economía-mundo y la substitución de los mini-sistemas se habrían dado por cuenta de la conquista violenta y el carácter hegemónico y totalizante de la economía-mundo, más que por procesos progresivos de cambio social.

En palabras de Taylor, se trataría de un cambio social bajo la forma de la incorporación. “La incorporación es la transformación que ocurre como consecuencia de un proceso externo. Los imperios-mundo, a medida que se iban extendiendo, conquistaban e incorporaban minisistemas. Estos grupos conquistados eran reorganizados para que pasaran a formar parte de un nuevo modo de producción mediante la entrega de tributos a los conquistadores. Asimismo, la economía-mundo al extenderse ha

incorporado minisistemas e imperios-mundo, cuyas poblaciones pasan a formar parte de este sistema". (Taylor e Flynt, 2000: 9)¹⁶.

Milton Santos propone otra salida a esta cuestión. Afirma que en un mismo territorio conviven y coexisten subsistemas técnicos "diferentemente datados" (Santos, 2000: 37) y que este fenómeno se da por la desigual distribución y propagación de las técnicas, originándose así una "acumulación desigual de los tiempos".

Enrique Leff pone el acento, no ya en la conflictividad de los tiempos dentro de un territorio disputado por intereses antagónicos, sino en el territorio como posibilidad de la diversidad de tiempos social y culturalmente contruidos, fundamentales para la búsqueda de soluciones a los problemas socioambientales que nos preocupan. "En el territorio se precipitan tiempos diferenciados donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas. Es el lugar donde convergen los *tiempos de la sustentabilidad*" (Leff, 2004: 126; destaque en cursiva en el texto original).

En su determinación por recuperar la dimensión simbólica del pensamiento y de la realidad, Leff insiste en la necesidad de liberar la Naturaleza de la reducción metafísica y de la asfixia economicista para devolverle su lugar en la cultura; y eso configura los tiempos diversos que confluyen en un mismo territorio de modo simultáneo. "Cada cultura define sus tiempos a través de sus cosmologías y sus sistemas simbólicos. El tiempo no es sólo la medida de eventos externos (...), sino que se entreteje a través de la historia en las formas culturales de significación de sus mundos de vida, en la actualización de *identidades étnicas y seres culturales*" (Leff, 2004: 126; destaque en cursiva en el texto original). Concluye Leff que el proceso de globalización de la economía ha disuelto el mundo de coexistencia de la diversidad; pero lejos de mostrarlo como algo definitivo o determinista, defiende la existencia de una "política de resistencia de la cultura a ser englobada por el mercado y la razón económica" (2004: 129).

Podemos decir, por tanto, que la economía-mundo contempla sistemas técnicos e históricos diversos en permanente interacción, colaborativa o conflictiva; no necesariamente los ha incorporado, integrado, substituido o eliminado, aunque permanentemente ésta pueda parecer su lógica. La coexistencia tampoco significa, en sí misma, una total autonomía de los sistemas entre sí, sino más bien un nuevo conjunto de interacciones que responden a la heterogeneidad social en su profunda complejidad. Es posible que esta coexistencia se dé más explícitamente en aquellos territorios menos ocupados por la hegemonía moderna; pero también es posible que a la dinámica de conquista y hegemonía totalizante de la economía-mundo se hayan opuesto otras

¹⁶ El propio Taylor sugiere no hacer "mucho hincapié en la importancia que tiene este supuesto para nuestro análisis" y, de hecho, continúa con una acertada crítica a la perspectiva desarrollista y lineal sugerida por la ciencia social moderna (2000: 10).

lógicas organizativas diferentes que han conseguido mantenerse resistientemente hasta nuestros días. Son estas nuevas interacciones, y las formas como se regulan, garantizan y experimentan, donde nos jugamos, a nuestro juicio, las posibilidades de superación de los problemas socioambientales.

Carlos Walter Porto-Gonçalves afirma que la situación instaurada después de la II Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas - lo que inauguraría el período técnico-científico-informacional según Milton Santos - se asemejaría a una especie de “caos sistémico”¹⁷. Una de las características de este caos sistémico sería, precisamente, la coexistencia de configuraciones territoriales divergentes como el Estado-Nación o el Imperio¹⁸ junto a una multiplicidad de actores locales (campesinos, indígenas, mujeres, ambientalistas, trabajadores asalariados), los cuales “r-existem com/contra essas diferentes ordens e que são portadores de múltiplas territorialidades potenciais” (Porto-Gonçalves, 2000: 237). Este caos sistémico puede ser, precisamente, la condición de transformación de las lógicas del sistema-mundo moderno-colonial.

Esta discusión es fundamental para nosotros y para nuestro tema investigativo. Si constatamos que en los territorios coinciden simultáneamente diversas temporalidades, y también diversas territorialidades, estaremos contra-argumentando el imaginario de que un tiempo-identificado-con-lo-moderno - representado por grandes objetos técnicos y proyectos extractivos para la exportación - ha venido para imponerse de modo irreversible. A lo que asistimos es a una simultaneidad de lógicas espacio-temporales que, presentándose como antagónicas entre sí, despiertan un conflicto primeramente social, seguidamente ambiental y, definitivamente, epistémico y simbólico.

La realidad nos devuelve testarudamente la constatación de que modos de producción de bajo impacto ambiental y con fuerte cohesión social no siempre han desaparecido ni han sido substituidos definitivamente por otros modos de producción. Aunque evidentemente, la mayor parte de ellos se encuentre hoy en una interacción con el sistema-mundo y con el medio técnico-científico-informacional dominante; es más, estos diversos eco-sistemas históricos, siendo contemporáneos, son parte por igual de la realidad compleja de nuestro tiempo, de la cual deben salir las soluciones para resolver los dilemas a que nos enfrentamos. Cómo se resuelva la coexistencia entre sistemas históricos y técnicos diferentes-y-contemporáneos es una de las principales preguntas que debemos resolver al analizar conflictos socioambientales como los producidos por la minería en los territorios comunitarios. Y aquí, obviamente, las perspectivas de los diversos actores son divergentes: “La forma en que se combinan sistemas técnicos de diferentes edades va a tener una consecuencia sobre las formas de vida posibles en aquella área. Desde el punto de vista específico de la técnica dominante,

¹⁷ Porto-Gonçalves toma este concepto de *caos sistémico* de Giovanni Arrighi.

¹⁸ Porto-Gonçalves utiliza el término *Imperio* como la pretensión de un orden global supranacional.

la cuestión es otra: verificar cómo los residuos del pasado son un obstáculo para la difusión de lo nuevo o cómo juntos encuentran la manera de permitir acciones simultáneas” (Santos, M. 2000: 38).

La cuestión no es simplemente promover una actitud de respeto a los sistemas técnicos propios de pueblos indígenas y comunidades tradicionales “mientras éstos permanezcan”, como si éstos tuviesen la fecha de caducidad y la efeméride determinadas. Porto-Gonçalves invoca la necesidad de superar este legado de la colonialidad del saber y del poder que ve al otro, el diferente, como inferior, dejándonos como consecuencia lo que Milton Santos denominó “el desperdicio de la experiencia humana” (citado en Porto-Gonçalves, 2012:31). Lo que emerge como una posibilidad real es el hecho de que las diversas temporalidades simultáneas pueden significar, no solamente un modo de resistencia defensiva, sino también una fuente de potencialidades y respuestas a los graves problemas socioambientales que vive actualmente la mayor parte de nuestro mundo. “Para enfrentar os problemas modernos, requerem-se soluções não modernas, diz Boaventura dos Santos (sic)”¹⁹. Esto sitúa el análisis de los problemas en una perspectiva profundamente diferente de la que han apuntado normalmente los supuestos de la racionalidad económica o de la metafísica ecológica.

Por último, conseguimos contra-argumentar también la idea de que existan algunos sistemas técnicos e históricos situados en el pasado y otros en el presente y en el futuro. La coexistencia de ambos en el mismo espacio-tiempo es un signo de simultaneidad y contemporaneidad; ambos coexisten en el mismo período moderno y globalizador. Tampoco se sostiene la idea errónea de que existan sistemas dinámicos y abiertos - identificados con la modernidad capitalista - y sistemas estáticos y cerrados - identificados muchas veces con las comunidades tradicionales. Todos los sistemas culturales son dinámicos en sí mismos; se re-crean permanentemente. Otra cosa es que este dinamismo sea impuesto desde fuera violentamente, aceleradamente y con el único fin de incorporar hacia dentro del sistema hegemónico la fuerza de trabajo de esos grupos y los bienes naturales de sus territorios.

2.2.4. El desarrollo y la fuerza semántica del proyecto moderno

La primacía del sistema moderno-capitalista es evidente en el plano de la economía - productiva y financiera - y de la tecnociencia y la investigación. Pero también la acción política es hoy significada de modo singular por la modernidad, que la dotó de la responsabilidad de regular las reglas de juego del Mercado; un Mercado que impone sus

¹⁹ Citado por la activista y ambientalista colombiana Tatiana Roa Avendaño, en entrevista publicada en IHU On-Line:
<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3450&secao=340>. Último acceso: 16/09/2015.

propias normas, consistentes - he aquí la paradoja - en la responsabilización del espacio público y la liberalización para el espacio privado.

Ya hemos señalado anteriormente que el sistema moderno-capitalista y el proyecto epistemológico de la modernidad impusieron una severa fractura entre lo real y lo semántico, ocasionando un desplazamiento del orden simbólico (Leff, 2004). Este desplazamiento era una consecuencia del exceso de objetivación de la realidad causada por el modo como la conocemos y pensamos.

Pero al mismo tiempo, la racionalidad económica tiene una extraordinaria eficacia simbólica en la producción de los sentidos sociales. Consigue conectar con elementos subjetivos del grupo social: la percepción sobre el futuro, la concepción de lo que es deseable o lo que constituye el interés común, las opciones individuales y la unicidad de los horizontes de sentido que construimos socialmente. Esto es así porque la racionalidad económica, que está presente en el imaginario más cotidiano, consigue someter todo a la primacía de lo económico; recodifica “todos los órdenes del ser en términos de valores económicos” (Leff, 2004: 40). Las diversas dimensiones de lo social, las actitudes y los comportamientos, individuales y colectivos, responden a los estímulos de un mecanismo económico que se ancla en una semántica que identifica bienestar con consumo e intercambio de bienes.

Esta apropiación de lo simbólico al servicio del proyecto moderno ejerce un poder extraordinario. Sólo así se puede naturalizar la idea de que existe un único camino posible, ocultando o negando la diversidad de opciones y de alternativas con las que, en realidad, convivimos. Y sólo así se puede ganar lo que podemos denominar la batalla de la normalidad: lo que se identificaría con lo que es *normal* y, por tanto, accesible y deseable por todos (Taylor y Flint: 2000).

La eficacia simbólica del proyecto moderno ha sido posible por la apropiación de algunas narrativas que han sido, y continúan siendo, fundamentales para comprender esta forma de dominación. Entre estas narrativas, destacamos las de progreso, desarrollo y crecimiento.

La concepción de progreso, en su originalidad, no se limitaba exclusivamente a la dimensión material. Hacía referencia también al arte, el acceso al conocimiento o la institucionalidad política vinculada al Estado. Tenía un carácter polisémico y, en cierto sentido, una vocación emancipadora de las capacidades humanas. En la literatura política, la condición *progresista* es la que se identifica con avances sociales y se opone a posturas consideradas conservadoras en áreas relacionadas con los derechos y las responsabilidades sociales. El progreso surge y se configura como un horizonte de sentido en sí mismo, complejo, justamente en un momento revolucionario en el cual remitía a posibilidades de libertad (López Soria, 2013: 2).

Sin embargo, a lo largo del tiempo la semántica que fue prevaleciendo en el imaginario colectivo vinculó el progreso con determinadas condiciones materiales y tecnológicas relacionadas, a su vez, con la sociedad moderna. En cada época, la imagen del progreso se asociaba a un conjunto diferente de objetos disponibles y por eso tantas veces hemos identificado progreso con la disponibilidad de bienes materiales determinados, desde electrodomésticos concretos hasta infraestructuras físicas o sistemas de comunicación. Cuando se han dado importantes descubrimientos tecnológicos, éstos han sido identificados como impulsores del progreso.

Bajo esta concepción de progreso, todas las sociedades debían aspirar por igual a estas condiciones materiales y hacia ellas debían dirigirse aplicando las mismas reglas de juego que las sociedades nacientes de la Revolución Industrial. Trascendía, pues, a la noción de *progreso* la percepción de linealidad temporal.

El progreso pasó a ser considerado como sinónimo de movimiento, mientras que su antónimo se relacionaría con el estancamiento o incluso el retroceso. El progreso es lo que camina con el tiempo, mientras que lo contrario al progreso es aquello que se quedó atrás, en el pasado, sin capacidad de innovación o de crecimiento y condenado a la caducidad. La ideología del progreso fue colonizando la esfera económica en la misma medida en que ésta colonizaba el resto de las esferas de la vida social y política.

En la secuencia de esta narrativa emerge con gran fuerza durante el siglo XX la idea de desarrollo. Este concepto se ha filtrado en las ciencias sociales y políticas con una capacidad extraordinaria, incluso entre los sectores críticos del capitalismo (Porto-Gonçalves, 2008). A pesar de convivir con él desde hace poco menos de un siglo, parece que haya existido siempre en la historia de la Humanidad. Pero fue a partir de la II Guerra Mundial, con la consolidación de la hegemonía estadounidense (Porto-Gonçalves, 2008) y el proceso de independencia de los Estados africanos, que el desarrollo emerge como un paradigma que se definía como necesario y universal para satisfacer las necesidades humanas y resolver las desigualdades sociales, sea en la escala local como en la internacional.

Diversos autores han desarrollado un análisis crítico sobre el concepto de desarrollo. Nosotros nos serviremos de los planteamientos de José Ignacio López Soria, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Enrique Leff, Maristella Svampa, Mira Antonelli y Paul Little. El punto de partida fundamental y compartido por estos autores es la naturaleza histórico-geográfica del concepto de desarrollo y su carácter colonial.

Porto-Gonçalves nos ofrece una clarividente metáfora a partir del término portugués *desenvolvimento* (desarrollo) (2008: 2): este llamado *desarrollo* representa precisamente el *des-envolvimento* o *no-envolvimento* con los lugares y los territorios, con los saberes y la experiencia, con las comunidades locales y con sus derechos a definir y concebir su propio camino. En ese sentido, dice Porto-Gonçalves, *des-envolver* es des-territorializar. “El desarrollo es una idea colonial en el sentido más preciso de la palabra

(...) La tercera colonialidad, bajo hegemonía estadounidense, sobre todo en la post-guerra, se afirmó en nombre de la idea del desarrollo” (Porto Gonçalves, 2008).

López Soria afirma que el desarrollo ha supuesto una reducción expresiva del polisémico concepto de progreso, siendo el principal responsable por la reducción a la dimensión material y económica y orientándolo única e irrenunciablemente a la idea del crecimiento o *crecimentismo*. “ ... el desarrollo, hijo legítimo pero disminuido del progreso, es nieto del patrón del poder y del saber que, recogiendo tendencias anteriores, se puso en marcha material y simbólicamente con los llamados descubrimientos, las conquistas y las colonizaciones, y que, en general, conocemos como proyecto de la modernidad (2013: 3).

A nadie se le escapa que el discurso político actual está permeado por este concepto de crecimiento económico como una perspectiva aparentemente homogénea, ilimitada y alcanzable. Su capacidad simbólica ha conseguido que dejen de ser categorías de naturaleza electiva, decisonal o política y se transformen en categorías normativas y naturalizadas. La acción de la política institucionalizada se reduce, cada vez más, a la gestión del crecimiento como fenómeno indecible, y esta imagen se instala en la subjetividad social independientemente de que existan, objetivamente, condiciones o no – ambientales, sociales, culturales – para su implementación o su sostenibilidad.

Porto-Gonçalves recupera de Manfred Max-Neef la idea de que la economía es un subsistema de un sistema mayor, la biosfera, que además es un sistema finito: por tanto, la idea de crecimiento permanente es imposible (2012: 21). También Delgado Ramos insiste en que, siendo imposible un crecimiento económico infinito en un planeta que es finito, “resulta ineludible el replanteamiento del propio concepto de desarrollo tradicional, de tinte utilitarista, una cuestión que demanda preguntarse para qué y para quiénes se piensa tal o cual esquema de desarrollo y bajo qué modalidad de metabolismo social” (2012: 59).

López Soria afirma que las prácticas vinculadas a la narrativa del desarrollo, ahora del crecimiento, responden a las estrategias de liberalización y de modernización. *Liberalización*, no entendida como el proyecto emancipador de libertad, sino en la perspectiva de flexibilización normativa para que sea posible el proyecto modernizador. Y *modernización* en el sentido de la razón instrumental aplicada a la producción, el mercado y la administración pública.

Nos interesa comprender el modo en que el concepto de desarrollo ha ocupado el imaginario simbólico de nuestra época con semejante eficacia simbólica y resiste, no solo al paso del tiempo, sino a las evidencias de sus contradicciones. López Soria (2013) describe tres dinámicas que pueden explicar este fenómeno:

- a) El desarrollo hecho discurso – desarrollismo - ha conseguido revestirse de un carácter de universalidad que ha sido extremadamente eficaz, porque lo separa de su

carácter histórico y geográfico. Se ha presentado, así, como una categoría global aparentemente ahistórica.

- b) Se revistió de legitimidad con argumentos de origen - es propio de la naturaleza humana progresar y desarrollarse - y de finalidad - es el único camino creíble para satisfacer nuestras necesidades y llegar a la abundancia. En este sentido funciona con una teleología en el sentido de finalidad lanzada hacia el futuro (Antonelli, 2009: 52).
- c) Por último, ante las contradicciones y los impactos del discurso desarrollista, la estrategia ha sido la de adjetivar el sustantivo sin renunciar a él. Dicho de otro modo: en las últimas décadas han surgido diversos conceptos compuestos, entre los cuales destaca el de desarrollo sostenible, que han tenido la capacidad camaleónica o híbrida de insertarse en los relatos de actores tan diversos como Estados, empresas, organizaciones sociales, ONGs ambientalistas, académicos y organismos internacionales.

Este último elemento de la adjetivación del desarrollo nos interesa de modo particular, pues se incorpora con eficiencia al discurso de la racionalidad extractivo-exportadora con términos como desarrollo sostenible o minería sostenible. Porto-Gonçalves cataloga el desarrollo sostenible como “nova forma de colonização/exploração” (2012). Enrique Leff, por su parte, nos ofrece una densa y lúcida crítica a lo que denomina la “nueva geopolítica del desarrollo sostenible” (Leff, 2004). Para Antonelli, se trata de “una retórica temporal dominante” en la que se articula el mundo-cantera (2009: 53).

El concepto se fue extendiendo a lo largo de las décadas de 80 y 90, particularmente después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992. El desarrollo sostenible²⁰ era aquel proceso que “permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras” (Leff, 2004: 103).

La intención del concepto de desarrollo sostenible ha sido buscar caminos intermedios que consiguiesen conciliar los intereses económicos con las exigencias ecológicas. Viene al encuentro del propósito del discurso neoliberal de mostrar que no existen contradicciones entre la protección al medio ambiente y el crecimiento económico. “Las políticas del desarrollo sostenible buscan reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el medio ambiente y el crecimiento económico” (Leff, 2004: 109). Pero esta es la cuestión clave: el desarrollo sostenible continúa postulando el crecimiento sin límites (2004: 98).

Dice Leff que, mientras que en la década de 70 la crisis ambiental dejaba claro que había que pensar en frenar el crecimiento para no caminar hacia un colapso, ya durante los

²⁰ El término desarrollo sostenible, cuando traducido en diversas lenguas, termina mostrando su propia naturaleza ambigua. Así, puede traducirse como *sustentable* (que incorpora las condiciones ecológicas) o *sostenible* (que perdura en el tiempo) (Leff, 2004: 103).

años 80 el pensamiento neoliberal proclamó que no hay más contradicciones entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental. “En la perspectiva neoliberal desaparecen las causas económicas de los problemas ecológicos. La crisis ambiental ya no es efecto de la acumulación de capital, sino del hecho de no haber otorgado derechos de propiedad (privada) y asignado valores (de mercado) a los bienes comunes” (2004: 105)

Bajo la ideología del desarrollo sostenible se han reconfigurado las estrategias de apropiación de los bienes naturales. “El discurso del desarrollo sostenible ha llegado a afirmar el propósito de hacer sostenible el crecimiento económico a través de los mecanismos del mercado²¹, asignando valores económicos y derechos de propiedad a los recursos y servicios ambientales” (Leff, 2004: 103 y 105). No se rompe con la primacía de mercado; se reinventa el Mercado para incorporar a la Naturaleza en el proceso de acumulación a través de la asignación de valores económicos a los bienes comunes.

Desde la perspectiva de dominio sobre el orden simbólico o de producción de sentidos, parece evidente que la narrativa y la “geopolítica del desarrollo sostenible” se han ido estableciendo en el discurso oficial y en el lenguaje común. Estados, organismos multilaterales, empresas, algunos movimientos ambientalistas y algunos sectores de la sociedad civil comparten la mesa de discusiones y las estrategias del desarrollo sostenible. Por tanto, ha conseguido una capacidad de incidencia en el orden simbólico de la sociedad sin haber renunciado a los postulados básicos de la racionalidad económica capitalista. En definitiva, “la geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de las contradicciones entre economía y ecología; propone la reconversión de la biodiversidad en colectores de gases de efecto invernadero (principalmente bióxido de carbono) y establece nuevos derechos transables de contaminación. De esta manera, deja en manos del mercado el balance posible entre economía y ecología (...)” (Leff, 2004: 116).

Maristela Svampa sirviéndose del planteamiento de Joan Martínez Alier (2005), afirma que la ideología del desarrollo sostenible se sitúa dentro de una de las corrientes del llamado “ecologismo”: aquella que denomina ecoeficientismo. Según esta corriente, las nuevas tecnologías serán capaces de resolver los principales problemas derivados de la crisis socioambiental e incluso crearán las soluciones a sus propios impactos. Por ello, en las narrativas pro-extractivas el lenguaje tecnocrático, con su poder coercitivo y de dominio, desplaza el lenguaje político y descarta el conocimiento local. Es a la tecnocracia, que ya habíamos encontrado en el análisis de Milton Santos, a la que se confía la creatividad para resolver problemas, en muchos casos, inherentes a ella misma. “Así las cosas, los males producidos por la tecnología se resolverían tanto a partir de la aplicación de mayor tecnología, al tiempo que implicarían la promoción de una ‘acción

²¹ Se incluyen entre estos mecanismos las estrategias de reducción de gases de efecto invernadero con las iniciativas REDD y REDD+, los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL, la compra de derechos de emisiones de gases o los pagos a comunidades por “servicios ambientales”.

socialmente responsable' tanto de los Estados como de las empresas" (Svampa, 2008: 6).

La eficacia simbólica de este discurso es que se presenta como solución de dilemas enmascarando relaciones de dominio. Se apropia de los conflictos dialécticos entre intereses antagónicos, de los cuales forma parte, devolviendo a la sociedad una retórica aparentemente capaz de anular todas las contradicciones, convirtiéndose así en una especie de macro-narrativa social concluyente en sí misma. "El discurso técnico atraviesa estratégicamente las relaciones entre capitalismo y democracia, por un lado, y entre ecología y extractivismo, por otra" (Antonelli, 2014: 75). "

En el caso de la minería, el concepto de minería sostenible o responsable también se ha ofrecido en la misma lógica conciliadora. La retórica seductora de esta "nueva" minería se construye en las "sedes y redes trasnacionales promovidas por las mayores empresas minero-metalíferas" con el objetivo de imponer la agenda del desarrollo gracias a la eventual minería responsable (Antonelli, 2009: 54).

César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina – OCMAL, asegura que "las empresas han tenido que desarrollar estrategias intentando convencer a las poblaciones que son una buena opción de desarrollo"²². Lo cierto es que el significante "minería responsable" se integra en lo que Mira Antonelli denomina el *discurso-fórmula* del desarrollo sustentable, engrosando el diccionario de las "nuevas palabras del poder" (Antonelli, 2014: 74)

Maristella Svampa señala que la minería a gran escala se ve obligada a hacer un esfuerzo para inscribirse "en las significaciones del presente modelando visiones del futuro" (2008: 18). Así, las promesas vinculadas a la generación de empleo en la región – dimensión del presente – y el dinamismo económico que la minería va a traer – dimensión proyectada en el futuro – actúan como inhibidores de los celos o las resistencias que se pueden encontrar y neutralizadores de la conflictividad (Antonelli, 2014). Al mismo tiempo, presentada como fruto de un consenso irrevocable e irrenunciable que convoca principales actores económicos – Estado y empresas - consigue incidir en los horizontes de deseabilidad de la población, incluso cuando se dispongan de datos que niegan estas bondades en otros territorios donde se haya instalado.

Este aparente consenso vincula la narrativa del desarrollo con la figura del interés público, interés nacional o interés general que, paradójicamente, son utilizados preferentemente por encima de otros como el de Bien Común. El interés público parte del principio de una idea de aparente universalidad sobre determinadas prácticas económicas. La regulación jurídica de lo que se entienda por interés público o interés

²² César Padilla en declaración en el documental *Iglesias y Minería en América Latina*, producido por JUPIC-SVD/BRN y accesible en <<https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck>>.

general, competencia del Estado, se convierte en una arena de conflicto o de evidente disputa. Cuando las comunidades o grupos humanos se oponen a determinados proyectos económicos, ellos son identificados como contrarios al progreso, al desarrollo y al interés nacional, socavando la legitimidad de sus posicionamientos.

De este modo, el dominio semántico del concepto de desarrollo oculta las posibilidades de otras perspectivas, de diversas matrices y racionalidades. Al mismo tiempo, son estas otras perspectivas las que formulan la confrontación crítica más densa al modelo de desarrollo que se impone como monólogo: “Vocês, brancos, dizem que nós, Yanomami, não queremos o desenvolvimento. Falam isso porque não queremos a mineração em nossas terras, mas vocês não estão entendendo o que estamos dizendo. Nós não somos contra o desenvolvimento: nós somos contra apenas o desenvolvimento que vocês, brancos, querem empurrar para cima de nós. O desenvolvimento que vocês falam em nos dar não é o mesmo que conhecemos: vocês falam em devastar a nossa terra-floresta para nos dar dinheiro, falam que somos carentes, mas esse não é o desenvolvimento que nós conhecemos. Para nós desenvolvimento é ter nossa terra com saúde, permitindo que nossos filhos vivam de forma saudável num lugar cheio de vida”²³.

Los conceptos aquí enunciados de un modo muy sistemático no existen de modo autónomo entre sí, sino que se retroalimentan y constituyen juntos el cuerpo discursivo del que estamos hablando. Progreso, desarrollo, crecimiento; liberalización y modernización; interés público o interés general: el resultado es una narración cohesionada que acompaña y legitima el modo de funcionamiento del sistema de economía-mundo.

Creemos que cualquier análisis sobre conflictos socioambientales que se deriven del avance de la minería sobre territorios comunitarios se va a encontrar con la dimensión simbólica de estas categorías y este discurso. Los emprendimientos mineros y las obras de infraestructura que le sirven van a identificarse con las perspectivas de progreso, desarrollo y crecimiento económico para una región; van a promover medidas liberalizadoras que permitan la modernización asociada al emprendimiento; y serán revestidos de la naturaleza de interés general.

²³ Davi Kopenawa Yanomami, presidente de Hutukara Associação Yanomami/HAY. Nota Pública “Posição da Hutukara sobre a Mineração em Terras Indígenas”, 20/05/2014. Accesible en: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7536>>

2.3. La economía-mundo y la re-configuración de los espacios

“El espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado por sistemas de acciones igualmente imbuidos de artificialidad, y cada vez más tendentes a fines extraños al lugar y a sus habitantes”.

Santos, 2000: 54

Hemos analizado hasta aquí el proceso histórico de formación del sistema de economía-mundo. Nos interesa ahora comprender también su dimensión territorial y cuáles son las nuevas narrativas y metáforas espaciales que nos pueden ayudar a comprender mejor su funcionamiento.

2.3.1. Centro, periferia y semiperiferia

En el análisis del sistema-mundo, Imanuelle Wallerstein sugiere tres conceptos: *centro*, *periferia* y *semiperiferia*. Como fue destacado anteriormente, el par centro-periferia aparecía ya en la contribución teórica de Raúl Prebisch y los teóricos de la dependencia de América Latina. Imanuel Wallerstein reconoce la influencia de estas corrientes en su pensamiento, aunque su abordaje tenga matices diferentes.

En general, los conceptos de centro y periferia han sido frecuentemente utilizados en la ciencia social para definir la posición de un lugar dentro del sistema. “Hay una lógica polarizante del sistema, que tiende a la generación de una dialéctica centro-periferia, regida por la configuración de relaciones asimétricas e intercambios desiguales entre las distintas áreas desde la acumulación originaria” (Composto y Navarro, 2014: 40). En el ámbito del análisis de las relaciones internacionales y del mercado global, es común relacionar el concepto de centro con los países que detentan un fuerte poder económico, político y militar, determinando con este poder su relación con el resto de países: Estados Unidos y Canadá, los países de la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, principalmente. El resto de las regiones estaría agrupada en el concepto de periferia, por su relación de dependencia estructural respecto del centro.

Podríamos inferir algunas semejanzas entre estas tesis y otros conjuntos de términos como Norte/Sur o la tipología de Primer, Segundo y Tercer Mundo que surge después de la II Guerra Mundial. Estas perspectivas tienen el valor de representar de modo sencillo y muy gráfico las desigualdades sociales y económicas que se producen dentro de nuestro mundo entre diversas regiones y países. Sin embargo, en poco tiempo fueron descubriendo sus propios límites analíticos al percibir que al interno de todo centro se podían descubrir zonas periféricas y viceversa; que en las regiones periféricas había situaciones cuyas características las asemejaban más a los procesos vividos en el llamado centro del mundo. O que, finalmente, la división del planeta en tres mundos exigía, al menos, reconocer la existencia de un Cuarto Mundo que representaba los

sectores sociales excluidos del bienestar económico de los países más fuertes; y que, en todo caso, sólo había un mundo en el que explicar la diversidad de las situaciones que en él se daban.

Además, en el corto camino que hemos recorrido sobre el siglo XXI se ha hecho evidente que este análisis espacial que sitúa unos países en el centro y otros en la periferia ha quedado corto. El escenario actual de las relaciones internacionales es mucho más convulso y complejo. Algunos países han experimentado un crecimiento económico vertiginoso que les ha colocado en los primeros lugares de la economía-mundo en un plazo de tiempo muy corto: Brasil, China, India o Sudáfrica, por ejemplo. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha experimentado la peor crisis social y económica de su historia como comunidad política. En definitiva, todo apunta a que la realidad de los hechos es algo más compleja.

En el análisis de los sistemas-mundo, centro y periferia no son solo dos referencias posicionales o geográficas (Preciado, J. 2008). Wallerstein no pretende hablar de espacios que son centro y espacios que son periferia. Lo que propone es identificar los procesos de centro y de periferia que configuran un determinado espacio, lo estructuran y le dan significado. “Una economía-mundo capitalista estaba marcada por una división axial de labor entre los procesos de producción centrales y los procesos de producción periféricos, lo cual daba como resultado un intercambio desigual favoreciendo a los involucrados en los procesos de producción centrales” (Wallerstein, 2006: 18). O dicho de otro modo, una región se convierte en “central” o en “periférica” porque en ella predominan los procesos caracterizados de centro o periferia. Por tanto, aunque ciertamente existen relaciones de explotación, “las zonas no se explotan unas a otras; la explotación se produce debido a que en las distintas zonas operan procesos diferentes” (Taylor y Flint, 2000; 21).

De ese modo, el análisis del sistema-mundo incorpora las categorías defendidas por Raúl Prebisch aunque dando énfasis en su naturaleza de proceso productivo y no necesariamente geográfico. Aunque se percibe una tendencia de localización de estos procesos, agrupándose en determinadas áreas geográficas, interesa a Wallerstein recordar que “eran los procesos de producción y no los Estados los que eran centrales o periféricos. En el análisis del sistema-mundo el centro-periferia es un concepto *relacional*, no un par de términos reificados, esto es que tienen sentidos esenciales separados” (2006: 18).

Los procesos de centro se caracterizan por relaciones que combinan salarios relativamente altos, producción diversificada y tecnología moderna. En el lado contrario, los procesos de periferia se definen por concentrar salarios bajos, producción más simplificada y desarrollo tecnológico más precario (Taylor y Flint, 2000; Preciado, 2008). Así, encontraremos polos más dinámicos de acumulación que absorben una

mayor parte de los beneficios globales y espacios periféricos que permanecen estructuralmente dependientes.

A lo largo de la historia de la economía-mundo podemos encontrar zonas que han alimentado el sistema produciendo o extrayendo la misma materia prima pero que han tenido comportamientos diferentes. Taylor y Flint citan el ejemplo de India y Australia a finales del siglo XIX; ambas suministraban algodón a la industria textil del mercado mundial, pero las consecuencias fueron muy diferentes para una y para otra. “Não devemos conceber como homogêneos e estruturalmente determinísticos os processos, os efeitos e os destinos das regiões ou países ricos em recursos naturais” (Nunes y Monteiro, 2007: 29). Podríamos deducir, con cierta prudencia, que el producto en sí no es lo que determina irreversiblemente el resultado. Son las relaciones sociales, de centro y periferia, las que configuran el espacio como un espacio de centro o de periferia.

En un sentido diferente, el tercer término de Wallerstein, la semiperiferia, pretende apuntar zonas geográficas determinadas - regiones, provincias, Estados- donde no dominan ni los procesos de centro ni los de periferia, sino que ambos están presentes y se combinan (Taylor y Flint, 2000).

Las zonas semiperiféricas son las más dinámicas del sistema-mundo. En épocas de recesión económica, son ellas las que pueden transformar su estatus pasando a ser centro o periferia en un nuevo ciclo de auge económico. Digamos que cada “nuevo centro” que lidera un período de crecimiento económico ha sido semiperiférico antes y ha aprovechado las condiciones del momento de depresión económica para crecer y aumentar sus capacidades tecnológicas. Esto podría ayudarnos, en cierto sentido, a comprender el fenómeno de los países emergentes en la primera década del siglo XXI, cuyo crecimiento económico ha sido fundamental para explicar el momento de intensificación del modelo extractivo-exportador en toda América Latina²⁴.

2.3.2. División territorial del trabajo

Como ya ha sido destacado, la incorporación de todos los territorios, progresivamente, a la perspectiva de lo global bajo la égida del Mercado, operando en la división social y territorial del trabajo, es la característica fundamental del sistema de economía-mundo (Santos, 2006). Este fenómeno desencadena, de un lado, un conjunto de profundas transformaciones en los modos de extracción y explotación, producción, distribución, acumulación y consumo. Pero también se operan, de otro lado, profundos cambios en la significación de los territorios. Ambos tipos de transformaciones tienen,

²⁴ En este campo conceptual analizamos en nuestro trabajo, por ejemplo, las transformaciones económicas que ha experimentado Brasil en la primera década del siglo XXI como una semiperiferia con aspiraciones de potencia global (Preciado, 2008). Nos preguntamos en el capítulo 7 de este trabajo si Brasil es más un Estado semiperiférico que emergente.

evidentemente, un efecto explícito y real en la vida de todas las personas y comunidades.

Milton Santos relaciona la división social del trabajo con el proceso natural que denomina diversificación de la naturaleza, siguiendo la terminología de Whitehead (Santos, 2000). Si la Naturaleza es una *totalidad* de elementos en permanente interacción e intercambio de energías y, por tanto, una totalidad dinámica y en transformación continua, la división social del trabajo atribuye, en cada momento, “un nuevo contenido y una nueva función a los lugares” (Santos, 2000: 110), haciendo del mundo social una totalidad también en permanente transformación.

En el contexto de las economías-mundo de naturaleza capitalista, la diversificación social operada sobre la Naturaleza adquiere dimensiones globales. La dificultad de la gobernanza de lo global, al menos desde una institucionalidad política consensuada, se resuelve a través de una división escrupulosa del trabajo. La participación de los territorios periféricos en el proceso de acumulación que mueve la economía-mundo es determinada por la especialización que se le impone, incluso bajo la hipótesis de sus ventajas comparativas. En palabras de Immanuel Wallerstein, “una economía-mundo y un sistema capitalista van de la mano. Puesto que las economías-mundo carecen del cemento unificador que es una estructura política o una cultura homogénea, lo que las mantiene es la eficacia en la división del trabajo. Y esta eficacia es función de la riqueza en constante expansión que el sistema capitalista provee” (Wallerstein, 2006: 22).

Stephen Bunker apunta hacia una explicación a esta dispersión espacial de la producción. Según Bunker, la reproducción del capital exige cada vez una mayor variedad y un mayor volumen de materias primas; la economía productiva crece, por tanto, de manera exponencial. El acceso y transporte de este volumen de materias primas en expansión requerirá mayores inversiones en una macro-arquitectura de energía y transportes. Este dinamismo tenderá a crecer, paradójicamente, en una primera fase, por el agotamiento previsible de algunos de los bienes naturales, obligando a empresas y actores financieros a ampliar su búsqueda de yacimientos.

De este modo, “a acelerada exaustão das fontes mais próximas de cada tipo de matéria-prima aumenta a necessidade de encontrar novas fontes ao longo do espaço expandido, criado pelo aumento do consumo. As economias industriais precisam, portanto, encontrar matérias-primas que estão a distâncias cada vez maiores. O aumento do custo em relação à distância incentiva os países, empresas e agentes financeiros a desenvolver meios de transporte mais eficientes em tecnologia e infra-estrutura” (Bunker, 2007: 66-67). Es lo que configura una economía de escala en la cual, cada aumento de escala acelera el agotamiento de los bienes naturales en juego e incentiva la búsqueda de nuevos yacimientos o de bienes alternativos.

Milton Santos explica la naturaleza de este proceso de división internacional del trabajo como un proceso paralelo a la mundialización de todos los territorios y su incorporación

subordinada a los procesos globales. La perspectiva del espacio global, premisa de la sociedad moderna, adopta ahora una mayor densidad (1993:69). “El proceso de globalización entraña la mundialización del espacio geográfico” (Santos, M. 1993: 70). Este proceso de mundialización se expresa a través de siete fenómenos, a los que les dedicaremos un breve análisis.

Cuadro 2. Procesos de mundialización de los territorios según Milton Santos.



En primer lugar, los territorios nacionales se convierten en espacios nacionales de la economía internacional y los territorios locales pasan a ser administrados desde fuera. Esto parece tornarse evidente cuando la gestión del territorio nacional responde a dinámicas de integración en el mercado global, provocando cambios profundos en el uso del suelo y el subsuelo.

Aquí entran las políticas desarrollistas de incentivo a la economía extractiva minera o de hidrocarburos o la dedicación de grandes superficies de territorio destinadas al sistema agroindustrial de alimentación. Este tipo de emprendimientos económicos atrae hacia sí buena parte de la inversión pública y privada para los sectores de infraestructura física relacionados con el transporte, la energía y la conectividad. Los espacios locales son (re)configurados, con la participación de la política estatal, para responder a demandas formuladas en el tablero de la globalidad y no de la economía próxima. Las grandes corporaciones han ejercido una extraordinaria influencia sobre los Estados, instaurando una situación de aparente gestión externa de los territorios (Santos, M. 2000: 206).

El Mercado supera las fronteras nacionales e incorpora cada territorio en una malla reticular extremadamente funcional. Si esto sucede desde la perspectiva del territorio nacional, mucho más en el ámbito de los múltiples territorios locales. Cada territorio deja de ser en sí mismo y se convierte ahora en nudo de una compleja red productiva, distributiva y de acumulación. Por ello, se habla de una progresiva *des-territorialización*

y de un capitalismo sin fronteras, que vendría acompañado de un aumento de la movilidad humana. Los territorios son administrados y significados desde fuera, externamente.

El segundo proceso activado es que se intensifica la especialización productiva del espacio para el intercambio. Esta es una consecuencia de lo anterior y representa la gráfica más evidente de la división territorial del trabajo. Desde el inicio de la expansión geográfica de Europa sobre los territorios de América, África y Asia, los espacios han ido re-significándose en función de la especialización productiva a la que eran sometidos. Esto no disminuye en la fase de Globalización; al contrario, se adensa, porque también se complejiza el funcionamiento del sistema-mundo.

Si antes cada territorio funcionaba como una unidad en una escala social y económicamente posible, ahora se configura como una parte de un todo mucho mayor, haciendo más espesa la interdependencia entre lugares antes no conectados. Con la especialización productiva se consolida la idea de la producción para el intercambio y no para el uso; para la exportación y no para el consumo local. En la medida en que los territorios se especializan en virtud de sus ventajas comparativas para producir tal o cual bien, aumenta la necesidad de intercambiar con otros.

La especialización productiva genera, de este modo, un primer movimiento de reducción de las áreas destinadas al primer impulso productivo, lo cual solamente es posible por el aumento de la productividad de cada lugar, como veremos en el tercer proceso. Al mismo tiempo, hay un segundo movimiento que se caracteriza por una ampliación del espacio de referencia, pues cada territorio se ve obligado a intercambiar bienes necesarios con otros lugares más o menos distantes. Este doble movimiento, según Milton Santos, es lo que Marx denominó “reducción de la arena” y ampliación del área” (citado en Santos, 2000: 203) y que él retoma con el concepto de “ampliación de los contextos” (2000: 214).

Cabe preguntarnos si no estamos asistiendo a una nueva forma de determinismo, no provocado ya por las características bio-físicas del territorio sino por la significación a él asignada en el contexto de un Mercado global y de las transformaciones operadas sobre él. Dicho de otro modo y enfocando el objeto de nuestro trabajo: lo que determinaría la economía de una región minera ya no es tanto, o al menos no fundamentalmente, la existencia efectiva de reservas minerales en su subsuelo, sino el valor estratégico dado a estos recursos por el Mercado en un determinado momento, la incorporación de objetos técnicos para su viabilidad y la especialización productiva del lugar convirtiéndola en una *provincia* minera.

Así lo expresa el propio Milton Santos, que sugiere una nueva noción de productividad espacial generada a partir de las condiciones creadas técnicamente sobre el territorio. “Así como se reconoce la productividad de una máquina, de una plantación, de una empresa, podemos también hablar de productividad espacial o productividad

geográfica, noción que se aplica a un lugar pero en función de una determinada actividad o conjunto de actividades. Esta categoría se refiere más al espacio productivo, es decir, al ‘trabajo’ del espacio. Sin minimizar la importancia de las condiciones naturales, son las condiciones artificialmente creadas las que sobresalen, en tanto expresión de los procesos técnicos y de los soportes geográficos de la información. ¿Estaremos ante un nuevo tipo de determinismo, un neodeterminismo del espacio artificial?”. (Santos, 2000: 209)

El tercer proceso se refiere a la tendencia a una producción cada vez más intensiva y con aumento en la productividad de cada espacio. Cada lugar debe ser productivamente eficaz y rentable; lo que interesa es la máxima productividad de un espacio al menor coste de capital y de tiempo. Hablamos de la aceleración de los ritmos productivos para conseguir mayores beneficios, incorporando para ello soluciones técnicas. La intensificación del ritmo de extracción o explotación se relaciona directamente con el ritmo de agotamiento de los bienes, la crisis ambiental, la aceleración de las transformaciones sociales en la región y los cálculos economicistas de logros y pérdidas por parte de empresas y Estados.

Para lograr la máxima productividad de un espacio intervienen variables, endógenas y exógenas, las cuales difícilmente se sitúan bajo el control de la comunidad local o, incluso, el poder local: calidad del producto, cantidad de la producción por medida de espacio, facilidad de retirada y transporte hasta los puntos de distribución o transformación, coste de la mano de obra, densidad de la legislación social o ambiental y de su aplicación efectiva, etc ...

Por causa de estas variables no controlables localmente, la productividad de un espacio no es permanente ni garantizada; puede subir o bajar en función de otros elementos como la pérdida de calidad, agotamiento de los recursos, aumento de costes de producción o, simplemente, el surgimiento de otro espacio con mejores condiciones de producción para el mismo bien. Se incorpora, por tanto, una cuestión clave de competitividad espacial. Así como las empresas buscan los mejores lugares para su actividad económica, también los lugares pretenden atraer, o retener, inversiones productivas y población consumidora. Es lo que se ha venido a llamar “la guerra de los lugares”: la competencia abierta entre lugares para ofrecer mejores condiciones a la inversión de capital productivo, a costa muchas veces de flexibilizaciones severas en derechos humanos y sostenibilidad ambiental. “El dogma de la competitividad no se impone sólo en la economía, sino también en la geografía” (Santos, 2000: 210).

El cuarto proceso hace referencia a la primacía de los objetos técnicos y artificiales sobre los objetos naturales; la tecnificación del medio natural, cada vez más reducido y agredido. Es la primacía técnico-científica que Santos identifica como característica fundamental de este periodo de Globalización. Si este proceso era ya evidente en el mundo urbano, ahora pasa al mundo rural en una especie de urbanización de la vida

social, pues las mismas producciones materiales e inmateriales, los mismos objetos técnicos y simbólicos se implantan en todos los espacios.

El quinto proceso describe el tiempo actual como un período de unicidad técnica (Santos 1993:70). Si al inicio de la historia de la humanidad existía una pluralidad técnica, pues existían tantos sistemas técnicos como lugares y minisistemas, ahora lo que se produce es una disminución y unificación técnica acelerada por la economía-mundo capitalista. Esta homogeneización no debe confundirse con una suerte de democratización técnica que coloca herramientas y conocimientos a disposición de todos en condiciones de igualdad. Por el contrario, la unicidad técnica se acompaña de un fenómeno de acumulación de conocimientos técnicos, de recursos y de capital.

La velocidad de la técnica y de la información ha aproximado tanto los lugares entre sí, ha densificado tanto sus relaciones, que la mundialización de todos los individuos y lugares es mucho más intensa. Al mismo tiempo que desigual; los nuevos componentes tecnocientíficos e informacionales no se distribuyen de igual modo en todos los espacios “sólo los actores hegemónicos se sirven de todas las redes y utilizan todos los territorios” (1993:71).

El sexto proceso se refiere a la aceleración también en las formas de circulación, convirtiendo el espacio en un espacio de flujos. Como hemos señalado anteriormente, cada territorio produce para lugares más distantes, mientras que es obligado a importar lo necesario de lugares igualmente externos. El espacio se torna así, cada vez más, en un espacio de conexiones, de fluidez, de transporte, de movilidad de productos. Un espacio de nadie; un espacio del Mercado. Un espacio privatizado, incluso aunque esté repleto de objetos técnicos de naturaleza pública - carreteras, caminos, ferrovías, puertos - pues estos se orientan a los intereses particulares de la distribución. Es por esto que afirmamos que buena parte de la inversión en infraestructuras no es concebida para la conectividad regional, sino para la viabilidad del espacio de flujos.

Por último, el séptimo proceso habla de la tensión creciente entre lo local y lo global en la medida en que el proceso globalizador avanza. Tanto es así que la relación que se establece entre objeto técnico y los actores hegemónicos es mucho más intensa en este período y pocos territorios escapan a esa lógica. Es más, cuando los sistemas técnicos hegemónicos se instalan en toda parte, normalmente pretenden desalojar los sistemas autónomos o incluirlos en su lógica (Santos, 2000: 152).

La tendencia del sistema-mundo, desde su origen, es la expansión geográfica y lo hace “agravando, por lo general, las contradicciones ya presentes. El actual sistema técnico dominante se convierte en invasor si no puede ejercer su tendencia al autocrecimiento pretendiendo imponer su ley a los sistemas técnicos vecinos. (...) ¿En qué medida cada sociedad local podrá incorporar los vectores verticales sin rehusar su participación en el mundo ni sin comprometer la realización de su propio *telos*? Esta es la verdadera

cuestión moral y política planteada por el proceso y las realidades de la globalización” (Santos, 1993: 75-76)

2.3.3. Nuevas metáforas espaciales

“Caminhamos, ao longo dos séculos, da antiga comunhão individual dos lugares com o Universo à comunhão hoje global: a interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território”. Santos, 2005: 255.

Como expresa tan lúcidamente en esta cita Milton Santos, la comunión de los territorios individuales con el Universo, con la totalidad, es hoy global e interdependiente. Los territorios están conectados. Hemos visto que esta mundialización de los territorios se produce bajo la lógica de la economía-mundo y la división del trabajo. De esta nueva realidad surgen nuevas relaciones territoriales y, por tanto, nuevas *grafías* y narrativas de lo espacial. A continuación nos proponemos analizar algunas de esas nuevas metáforas semánticas que nos ayudan a comprender mejor la naturaleza de este proceso de mundialización.

1. Horizontalidades y verticalidades. Más allá de las redes y las mallas

Consideramos muy sugerentes los conceptos de *horizontalidad* y *verticalidad* que propone Milton Santos (2000, 2005).

La horizontalidad se refiere a todos los procesos que están relacionados por una continuidad espacial y en el ámbito de lo cotidiano. Aunque en un mismo espacio haya actividades diversas - agricultura, servicios, transporte, industria - podemos percibir entre ellas un determinado nivel de asociación y complementariedad. Así mismo entre los centros urbanos, semi-urbanos y rurales se puede percibir una relación cotidiana y de cierta reciprocidad, aunque estén permeadas por relaciones de poder espacial: concentración de los servicios públicos y de la información en las ciudades, disparidad en los servicios de energía o transportes y otras.

En la continuidad espacial priman las relaciones marcadas por la extracción/producción entendida como la primera fase del proceso económico global. También es el ámbito de las relaciones cotidianas y directas, donde las políticas públicas asumen un rostro de localidad y proximidad que facilita el control social y la participación.

La verticalidad apunta ya a la agrupación de puntos geográficos, discontinuos, situados en diversas escalas y a veces muy distantes. Estas relaciones son las que se producen entre el lugar de la extracción y explotación, los canales de transporte, los lugares de procesamiento y producción, los centros urbanos distribuidores y consumidores, los objetos técnicos para la distribución masiva - puertos, aeropuertos, ferrovías, puestos fronterizos - y los grandes centros económicos globales. En ellas, la participación activa

y el control social se difuminan, así como la capacidad de incidencia en las políticas públicas, lo que determina la erosión democrática a la que ya hemos hecho referencia anteriormente.

La verticalidad es la gramática de las economías de escala. A la verticalidad le corresponde, según Santos, el dominio de las redes y de la relación jerárquica. Es en la verticalidad donde se produce la concentración de la información privilegiada y de la tecno-ciencia como prestigio y poder. Afirma Santos que la actual fase de la Modernidad se expresa como un espacio reticular, en el que la existencia de redes - Claude Raffestin recurre al concepto de malla, semejante al de red (Raffestin, 2013) - toma una perspectiva más global: las redes de transporte, de energía, de comercio o de información (Santos, 2000). En nuestros días, la intencionalidad de las redes ya no es, exclusivamente, ocupar territorios, sino conectarlos, activando puntos ya existentes o creando nuevos. ¿Qué otra explicación podría tener la reproducción en nuestros días de grandes proyectos de infraestructura en sistema intermodal concebidos para el transporte y exportación de materias primas hacia los centros globales?

Esta verticalidad es la que incide desde fuera en el cotidiano de la gente. El control de la parcela política de la producción se hace a distancia, como un control remoto, a partir de ciudades mundiales y macro-centros de distribución y consumo (Santos, 2005). Y uno de los resultados de esta verticalidad jerárquica es la aceleración del proceso de alienación de los territorios y las personas, lo que provoca, entre otras cosas, la enorme movilidad humana actual.

El modelo extractivista, también en su faceta del (neo) extractivismo, pertenece al ámbito de la verticalidad. “El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas” (Svampa, 2012; 34).

Esta verticalidad produce relaciones desiguales de dependencia entre los territorios de extracción y los espacios de acumulación económica y tecnológica. “La verticalidad crea interdependencias (...) Esas interdependencias tienden a ser jerárquicas y su papel de ordenamiento conlleva un control. La jerarquía se realiza por medio de órdenes técnicas, financieras, políticas, que constituyen la condición de funcionamiento del sistema (...) Un incesante proceso de entropía deshace y rehace contornos y contenidos de los subespacios, a partir de las fuerzas dominantes, y así impone nuevos mapas al territorio. El creciente proceso de homogeneización se realiza a través de una progresiva jerarquización” (Santos, M. 2000:240).

Es característica de las técnicas actuales su indiferencia en relación al medio en que se instalan (Santos, 2000:153). “A unidimensionalidade dos que tomam as decisões se contrapõe a multidimensionalidade da vida inscrita na geografia de cada dia” (Porto

Gonçalves, 2002: 234). Dicho de otro modo, cada vez más las decisiones que afectan a los territorios y sus comunidades son tomadas en lugares totalmente ajenos a ellos. De ahí la necesidad de operar una distinción entre la escala de la realización de las acciones y la escala de su mando. Esa distinción es fundamental en el mundo actual: muchas de las acciones que se ejercen en un lugar son el producto de necesidades ajenas (...) es lo que se podría llamar alienación regional o alienación local (...). Se impone distinguir entre los actores que deciden y los demás” (Santos, 2000:70)

La racionalidad de las redes es una racionalidad gobernada, comandada, disciplinada por el Mundo. “Quando se fala em Mundo, está se falando, sobretudo, em Mercado que hoje, ao contrário de ontem, atravessa tudo, inclusive a consciência das pessoas. Mercado das coisas, inclusive da natureza; mercado das ideias, inclusive a ciência e a informação; mercado político. Justamente, a versão política dessa globalização perversa é a democracia de mercado. O neoliberalismo é o outro braço dessa globalização perversa, e ambos esses braços – democracia de mercado e neoliberalismo – são necessários para reduzir as possibilidades de afirmação das formas de viver cuja solidariedade é baseada na contiguidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartilhado” (Santos, 2005: 259).

Horizontalidades y verticalidades son componentes esenciales hoy para hablar del espacio geográfico, mundializado y globalizado; es la representación gráfica de la economía-mundo desde una perspectiva espacial. Las regiones ya no se explican a sí mismas por sí mismas, en función de sus relaciones orgánicas y de complementariedad interna, sino que son significadas en el conjunto global del sistema-mundo. Los procesos verticales son los que determinan las condiciones políticas y económicas de los procesos horizontales; es en función de las relaciones de verticalidad que se definen las inversiones y la ordenación y regulación del espacio regional.

Esto es lo que le permite a Milton Santos afirmar que la *arena* donde se produce la confrontación entre el Mercado y la sociedad civil es el *territorio*, en sus diversas dimensiones y escalas.

2. *Visibilidad e invisibilidad*

Nos resulta también muy sugerente la dimensión esbozada, entre otros, por Paul Little sobre la visibilidad e invisibilidad de los territorios (2002). Ambos procesos pueden responder a estrategias conscientes de los grupos locales – lo que haría parte de su conducta de territorialidad - o, por el contrario, a procesos concebidos e impuestos desde fuera de la comunidad.

La *invisibilidad* de un territorio puede relacionarse con la decisión de un grupo para garantizar su sobrevivencia. En este caso, destacamos la situación de los pueblos indígenas que mantienen poco o nulo contacto con otros grupos o con la sociedad que les rodea. Estas comunidades han recibido diversos nombres, todos ellos permeados de

una compleja dificultad y, en muchos casos, cargados de perspectivas y lógicas propias de la sociedad occidental y/o nacional²⁵. Nosotros optaremos por acuñar los términos de “pueblos libres”, “pueblos aislados” o “pueblos en aislamiento voluntario”, reconociendo las limitaciones de estos conceptos²⁶.

Cuando la actitud de aislamiento voluntario se convierte, como afirma Saulo Feitosa, en “uma forma de resistência planejada” (Loebens y Neves, 2011: 41), entonces podemos afirmar que estamos delante de un proceso decisorio de auto-invisibilidad para garantizar la propia vida del grupo en territorios que, hasta ese momento, son también invisibles para los intereses de las fronteras de expansión económica. Esta actitud de resistencia al contacto agresivo con la sociedad colonial podría crear el espacio necesario para la condición de libertad, condición que para la antropóloga Rita Segato “talvez lhes possibilite melhores condições para sobreviverem à crise planetária em curso, decorrente do atual modelo de desenvolvimento econômico” (citado en Loebens y Neves, 2011: 44).

En una línea próxima, aunque diferente por su especificidad, Paul Little cita los trabajos en Brasil de Carvalho (1996) y Almeida (2000) en referencia a las comunidades *quilombolas*²⁷. La sobrevivencia de los territorios quilombolas tomados a partir de las fugas de esclavos, o incluso a través de la apropiación efectiva por parte de los esclavos de las grandes haciendas y propiedades fallidas, fue posible a lo largo de los años por la estrategia de invisibilidad simbólica y social desarrollada por las propias comunidades quilombolas.

Pero en otras situaciones, la invisibilidad puede ser un fenómeno social que no depende de la decisión de la comunidad local. Diversos grupos sociales y sus territorios pueden aparecer como invisibles para el sistema económico por encontrarse en los intersticios de los centros decisorios (Little, 2002a; 5). Sobre ellos, el sistema no ejercerá ninguna presión mientras no signifiquen para él una nueva oportunidad de mercado. En esta invisibilidad podemos encontrar desde áreas periféricas de ciudades o zonas rurales, hasta regiones menos exploradas y conocidas por la sociedad mayoritaria.

²⁵ Sobre la complejidad relacionada con los nombres otorgados a estos grupos indígenas, leer Loebens y Neves, 2011.

²⁶ Los pueblos aislados o en aislamiento voluntario son aquellos grupos que, por decisión propia o por causa de la presión de las fronteras económicas sobre sus territorios, decidieron refugiarse en zonas de floresta y de difícil acceso “na tentativa, muitas vezes desesperada, de evitar o contato com as populações regionais e/ou com as frentes de expansão da sociedade colonial, impulsionadoras daquilo que no mundo moderno se convencionou chamar de ‘desenvolvimento’” (Loebens y Neves, 2011: 50). A pesar de que la información que sobre ellos disponemos es, evidentemente, precaria, algunas fuentes hablan de cerca de 140 grupos indígenas en esta situación, concentrados de modo particular en la región amazónica situada entre Brasil y Perú.

²⁷ Término que en Brasil hace referencia a las comunidades de afro-brasileñas, descendientes de los grupos negros que fueron sometidos a esclavitud en el país durante las etapas de colonización e Imperio, hasta finales del siglo XIX.

Esta invisibilidad puede ser una buena o una mala noticia para la comunidad local, en la medida en que su “exclusión” de los circuitos territoriales gobernados por el mercado puede significar para ellos oportunidad de calidad de vida - soberanía alimentar y control territorial - o exclusión de servicios fundamentales como educación o salud.

El fenómeno de la visibilidad opera con una dinámica similar. Un territorio puede ganar visibilidad para el modelo económico hegemónico en la medida en que pasa a representar el acceso a determinados bienes naturales en un determinado momento. El “descubrimiento” de yacimientos naturales importantes de recursos estratégicos como minerales, hidrocarburos o potencial hidroenergético trae un territorio hacia el centro del tablero económico con una velocidad extraordinaria, independientemente de las comunidades que allí residan. Esto no siempre es una buena noticia para la población local; lo cierto es que, muy posiblemente, su vida ya no volverá a ser igual y su capacidad de controlar esos cambios será muy precaria y frágil. Los territorios visibilizados son incorporados a la lógica de Mercado y sobre ellos avanza un nuevo frente de territorialidad, abriéndose el camino para un confronto entre territorialidades y significaciones materiales y simbólicas del espacio.

En otros casos, la visibilidad de un territorio puede ser una conducta intencional de la población local. Sucede así cuando autoridades locales intentan mostrar las potencialidades de su territorio en ámbitos como, por ejemplo, el turismo, para incorporarse a la dinámica del Mercado, atraer inversiones o generar transformaciones económicas en su territorio.

Ahora bien, en estos procesos dialécticos de visibilidad e invisibilidad podemos encontrarnos situaciones contradictorias y complejas, pues se trata en sí de procesos de confrontación en los que la mayor parte de las veces las diversas partes implicadas no coinciden en sus intereses.

Una de esas situaciones contradictorias puede ser definida como la *política de la negación*: un proceso intencional, de parte de actores económicos o políticos, que pretende distorsionar o disminuir la efectiva presencia de comunidades en territorios atractivos a la lógica global. La política de la negación puede actuar desconsiderando la existencia de comunidades locales o privándolas de sus derechos colectivos cuando esto pueda suponer una paralización o ralentización del emprendimiento económico. Existen casos en los cuales Estados y empresas niegan, o exigen pruebas, de la existencia de comunidades indígenas en aislamiento voluntario dentro de las áreas de impacto de emprendimientos mineros, hidrocarburíferos o de mega-construcción civil, ya que la aceptación de la existencia de estos grupos detendría los avances de la obra. Sin embargo, el marco jurídico existente no obliga a que la existencia de estos grupos sea demostrada con pruebas físicas y contundentes; al contrario, se defiende que la simple constancia de que en ese territorio pudiera haber presencia de grupos humanos debería paralizar, por sí misma, las obras.

En sentido contrario, tiene lugar la llamada *política de identidad* ejercida por las comunidades. Esto se produce cuando la comunidad, delante de un proyecto de envergadura que puede impactar irreversiblemente en su territorio - como una hidroeléctrica - se organiza para dar visibilidad a lo que no era conocido. Por ejemplo: informa sobre la presencia de comunidades en la zona; identifica lugares sagrados para la comunidad que serían destruidos con la obra; describe impactos no previstos por los informes técnicos en cuanto a rupturas de cadenas alimenticias o migración forzada de especies fundamentales para el funcionamiento del ecosistema.

Por último, otra de las graves contradicciones en este proceso la podríamos denominar como la *política de la discontinuidad*. Afirma Paul Little que “dados os bruscos fluxos no interesse do mercado capitalista por diversos recursos naturais e mercadorias, as terras que não estão mais na mira das forças econômicas hegemônicas de uma época, podem ser salvas da cobiça pelos seus recursos, mesmo se antes estivessem no epicentro de interesse” (Little, 2002: 5). Al mismo tiempo, puede estar aparejado a zonas abandonadas por el emprendimiento económico sin más diversificación productiva y con la problemática de un aumento poblacional extraordinario estimulado en muy poco tiempo por la migración de trabajadores que ahora deben buscar nuevas oportunidades. “Esse enfoque nos espaços intersticiais e nos distintos tipos de invisibilidade, não deve ocultar um fato inegável: desde uma macro-perspectiva fundiária, o resultado geral do processo de expansão de fronteiras foi a instalação da hegemonia do Estado-nação e suas formas de territorialidade” (Little, 2002: 6).

2.4. Sistema escalar: del lugar de la experiencia al lugar de las decisiones

El concepto de *escala* es angular para la comprensión del funcionamiento actual del sistema-mundo pues se trata, en definitiva, de un sistema histórico *multi*-escalar. Es decir, está conformado por diversas escalas espaciales que interactúan entre sí. Identificar y definir cuáles y cuántas son esas escalas no es tan sencillo y representa un ejercicio que es, a la vez, un acto metodológico y un “acto político” (Taylor e Flint, 2000: 406).

Podríamos escoger una red de escalas que estuviese compuesta por una gran densidad de elementos: desde la propia casa y familia, el barrio, la comunidad, el territorio, la región y el Estado-nación, alcanzando otras identificaciones trans-nacionales hasta llegar a la escala global (Cairo, 2001: 32). O, por el contrario, podríamos resumir todas ellas en dos escalas, lo global y lo local, en lo que sería un ejercicio de concentrar las opciones intermedias en los dos campos más polarizados. A ello ha contribuido, por ejemplo, buena parte del movimiento ambientalista contemporáneo con lemas tan conocidos como “piensa globalmente, actúa localmente”.

El análisis de sistema-mundo (Taylor y Flint, 2000) propone la configuración de tres *escalas* que resultan fundamentales para comprender el actual patrón de economía-mundo. Según Taylor y Flint existe:

- La escala global, que definen como el ámbito de la realidad. Para Taylor, esta es la escala determinante, pues es en ella donde se toman las decisiones sobre la producción, el intercambio y el consumo/acumulación. Se trata de la escala donde anida la estructura del Mercado Mundial, las grandes corporaciones y el sistema inter-estatal.
- La escala intermedia, que corresponde al Estado-nación o Estado-territorial y que Taylor y Flint caracterizan como el ámbito de la ideología.
- La escala local haría referencia al ámbito de la cotidianeidad, el hogar y el trabajo; la esfera de la experiencia.

Milton Santos (2000: 228) propone otra estructura que reconoce del mismo modo tres tipos o niveles de solidaridad a las que también denomina *totalidades*:



Ambos ejercicios escalares comparten algunas de sus intuiciones. De un lado, atribuyen a la escala local la naturaleza de espacio de la cotidianeidad y del acontecer solidario, de la contigüidad, la diversidad y la experiencia. De otro lado, mantienen la comprensión de que la espacialidad/territorialidad del Estado-nación continúa siendo la mediación privilegiada entre lo local y lo global, donde residen las fuerzas del mercado.

Ahora bien, el sistema mundial se nos aparece hoy con un nivel de complejidad que, sin retirar del Estado su función articuladora en el esquema, nos devuelve una imagen algo más densa de la red. Es decir, entre la escala global, la intermedia y la local emergen nuevos espacios que también deben ser considerados. En palabras de Jaime Preciado,

nos encontramos en la actual coyuntura de América Latina con una “sobreposição de escalas espaciais que atuam de maneira paralela, dando uma particular complexidade à configuração da América Latina e Caribe no sistema-mundo contemporâneo. É fundamental considerar ou acionar tais escalas, que ultrapassam a especialização *tripartite* tradicional” (2008: 10; destaque em cursiva em texto original). Este nível intersticial de algunas escalas nos desafía, al mismo tiempo, a elaborar nuevos esquemas para la Geografía Política (Preciado y Uc, 2010)

En la misma línea, Heriberto Cairo también aborda la emergencia de “conglomerados interestatales de diferente alcance y extensión” (2003: 31) como nuevas representaciones del espacio anidadas en los nuevos procesos de integración regional. Asistiríamos así a un proceso de regionalización del mundo o asociación de Estados en una escala mayor; es aquí donde “se inscriben las panregiones” (2003: 34).

Nos estaríamos refiriendo hasta ahora a la emergencia de espacios transnacionales o agrupaciones regionales de Estados, entre los que podríamos identificar en América Latina el Mercosur, la Unasur o la iniciativa ALBA; en Europa, la Unión Europea; y en el escenario de las relaciones internacionales podríamos identificar otras dinámicas como las derivadas de las alianzas Sur-Sur, por destacar algún ejemplo.

Estas escalas intersticiales o panregiones son promovidas y protagonizadas por Estados que, en una acción colaborativa, construyen nuevas institucionalidades político-económicas y, en torno a ellas, nuevos relatos identitarios. Transforman la forma de construir políticas y regulan una voluntad compartida con la intención de alcanzar un determinado perfil de integración común en el mercado mundial o, por el contrario, de constituirse como “contraespacios”. Desde el punto de vista territorial, mantienen la lógica de la territorialidad estatal aunque la agregan colectivamente, definiendo nuevos *panterritorios* y fronteras en cuyo seno rigen normas, leyes y políticas comunes. Estos nuevos espacios escalares ejercen claramente como mediadores entre la localidad y el lugar del Mercado, que es la escala global.

Por otro lado, creemos que la complejidad de los procesos actuales apunta también hacia otras experiencias territoriales que, pudiendo ser supra o sub-nacionales, no necesariamente son protagonizadas por los Estados - o no solamente por los Estados - aunque interactúen políticamente con ellos. “Há uma tensão territorial de novo tipo em curso e já não se trata mais do territorial confundido com a escala do Estado (mono) nacional” (Porto-Gonçalves, 2012: 38).

Nos referimos, por ejemplo, a territorios sociales reivindicados por pueblos indígenas, comunidades campesinas, pescadores o afrodescendientes en una perspectiva de autonomía que no niega al Estado sino que lo posiciona claramente como interlocutor. En otros casos, estos mismos grupos pueden articularse en espacios trans-nacionales que consideran comunes a partir de lógicas diferentes – como las cuencas hidrográficas, por ejemplo - rompiendo las fronteras políticas de los Estados sin dejar de considerarlos

como los interlocutores principales. Este sería el caso del espacio público panamazónico (Little, 2014b).

También los Estados y el Mercado configuran estas espacialidades trans-nacionales no estatales - aunque reguladas con la participación de los Estados - en función de intereses económicos o de integración regional. Vease el caso de la definición de los Ejes de Integración y Desarrollo-EID en el seno de la Iniciativa IIRSA, hoy anidada en Unasur (ver Mapa nº 2, en la página 195) o la concepción de proyectos de infraestructura de conexión inter-oceánica. Los diversos EIDs son figuraciones territoriales que, traspasando las fronteras nacionales, con incluyen la totalidad de los territorios-nación, porque so contruídos desde una lógica de *espacio de flujos* que tiene más que ver con las características naturales y la oportunidad de conectividad física.

La construcción social de estos espacios - y las *panideas* identitarias que los vertebran - responden a lógicas que operan en la realidad de las personas y las comunidades y que se relacionan, al mismo tempo y fundamentalmente, con la institucionalidad estatal en cuanto agente de políticas públicas y de participación social. Entendemos que también estos espacios actúan en el entramado tejido entre la localidad y el Mercado global, con lo cual la sobreposición de escalas que apuntaba Jaime Preciado sobresale como una evidencia.

Como hemos señalado anteriormente al hablar de la simultaneidad y acumulación de los tiempos, siguiendo a Porto-Gonçalves, tal complejidad semántica de escalas y territorios parece conducirnos a un caos sistémico que puede configurarse, paradójicamente, en condición de transformación. Lo que esta complejidad nos confirma es que en la estructura escalar propuesta por el análisis de sistema-mundo las escalas no son autónomas entre sí y los actores implicados – mercado, instituciones internacionales, Estados y sociedad - no actúan exclusivamente a una u otra escala, sino que operan en todas ellas y lo hacen con una lógica espacial.

Efectivamente, cada uno de los actores implicados en la problemática que nos ocupa en este trabajo – extractivismo minero y derechos territoriales de los pueblos indígenas – va a actuar, con mayor o menor destreza, en cada uno de los niveles escalares que se describen, partiendo cada uno del nivel escalar donde desarrollen mayor eficacia política. “Uma empresa transnacional, por exemplo, pode ser muito eficaz no plano global, mas não conseguir implantar suas metas produtivas no plano local. Uma comunidade indígena, para tomar outro exemplo, pode ter uma presença política significativa numa federação étnica regional, mas não ter muita expressividade no plano nacional” (Little, 2006: 96). En todo caso, unos y otros van a cuidar de utilizar estratégicamente cada una de las escalas como fuente de legitimidad y de consolidación de su capacidad de incidencia.

Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, en tanto nuevos actores y sujetos políticos, conquistan condiciones para expresarse en los niveles supralocales,

supranacionales y a escala internacional (Porto-Gonçalves, 2012: 16). Los movimientos sociales consiguen romper el monólogo estatal y empresarial y convertirse ellos también en protagonistas de los grandes debates regionales y globales, adensando y complejizando el escenario político y la configuración de redes en busca de prácticas de globalización contrahegemónica (Cairo y Bringel, 2010).

A efectos de nuestro trabajo y del objetivo de describir/explicar la relación entre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la expansión de la economía extractiva minera, optamos por identificar cuatro escalas espaciales, sobre las cuales estructuraremos el análisis de los datos de la investigación, como se verá en la segunda parte.

La primera escala o escala de la localidad, la proximidad y la continuidad, será la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, que está situada al norte del Estado de Roraima-Brasil. Como definiremos más adelante, este territorio ya lo comprendemos dentro de la categoría territorial de *circum*-Roraima, que se refiere a un espacio de habitación indígena continua y que se extiende a los pies del Monte Roraima. El espacio *circum*-Roraima está actualmente dividido por tres Estados nacionales: Brasil, Guayana Inglesa y Venezuela. Como el territorio Raposa Serra do Sol se localiza dentro del Estado brasileño, a él nos referiremos de un modo más explícito como principal interlocutor estatal de las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol.

La segunda escala, por tanto, de carácter nacional, es el Estado de Brasil, donde se regula la figura territorial de *terra indígena* que afecta a estas comunidades y donde se dilucidan también las políticas domésticas de explotación minera y de reconocimiento de derechos.

Al mismo tiempo, esta realidad debe ser explicada en su relación con un tercer nivel escalar, que para nosotros es el territorio panamazónico al que también pertenece Raposa Serra do Sol. Paul Little sugiere que, en el caso del análisis de conflictos socioambientales, se hace necesaria atender a las condiciones de delimitación bio-geográfica. “Para nossos fins, gostaria de resgatar o nível intermediário da ‘região’ como uma delimitação estratégica para explorar essas relações” (2006: 96). Ha sido mucho más común hasta ahora, nos recuerda Paul Little, que los debates y análisis sobre la Amazonia se tejiesen a partir de un plano nacional, dando lugar a la Amazonia ecuatoriana, brasileña, boliviana y otras (Little, P., 2014b: 406)²⁸. Optamos aquí por una escala, si se prefiere, pan-amazónica y a ello nos mueven dos motivos.

²⁸ Es necesario reconocer que los abordajes de la cuestión amazónica en el plano nacional han permitido una comprensión extremadamente importante de la interacción existente de esta región con otras realidades sociales limítrofes, como las zonas montañosas y/o de litoral (en el caso de los países andinos o de Guyana) o las regiones de expansión agrícola y urbana (en el caso de Brasil).

El primero es la percepción que Paul Little nos sugiere de que el nuevo momento de expansión del capital extractivo-exportador tiene un grado de coordinación amazónica no visto anteriormente, para lo cual la integración física de las infraestructuras de energía y transportes cumple un papel funcional estratégico. El segundo, porque pensamos válido, desde el punto de vista analítico, el concepto de la Amazonia como un territorio continuo, con características socio-naturales propias, articulado por una de las mayores cordilleras montañosas del continente y una de las mayores cuencas hidrográficas del mundo - con todos los atributos bio-físicos que ambos datos revelan - y por una diversidad de grupos humanos que modelaron, históricamente, modos de adaptación y de vida en este ambiente de ríos, florestas, sabanas, montañas y valles. Una cuenca hidrográfica es “simultaneamente uma entidade geográfica que contém distintos ecossistemas, uma área onde diversos grupos sociais, com suas respectivas instituições socioeconómicas, constroem um modo de vida particular” (2006: 97). Amazonia cobra un significado central para la economía global por el volumen de bienes naturales que acoge, visibilizados a los intereses del Mercado, y por el imaginario construido sobre ella a lo largo de los dos últimos siglos.

Berta Becker también insiste en la necesidad de abordar de un modo integral los procesos que se dan en la región amazónica, “ejemplo vivo” de la nueva geopolítica, por medio de tres hipótesis (Becker, 2005: 72-73): a) el nuevo significado geopolítico de la Amazonia en el ámbito global como gran frontera de bienes naturales; b) el nuevo lugar de la Amazonia en Brasil; y c) la urgencia de una nueva política para la región.

Y por último, una cuarta escala más amplia que nos permita comprender la relación del modelo extractivo-exportador con la inserción de América Latina en el sistema-mundo. Estas cuatro escalas se refieren a cada uno de los cuatro capítulos de la segunda parte de nuestro trabajo.

Capítulo 3

Crisis ambiental y procesos de resistencia social

“La crisis ecológica global es la tensión definitiva entre el lugar y el espacio, entre hacer de la Tierra un hogar habitable y explotarla como espacio de recursos”.

Taylor y Flint, 2000: 409.

En el capítulo anterior hemos recogido referencias teóricas que nos permiten comprender de qué modo la expansión de las actividades extractivas – y entre ellas la minería - sobre territorios indígenas se insiere dentro de un contexto más amplio de decisiones políticas y económicas. Este sistema-mundo moderno-colonial ha mundializado todos los territorios, llevándonos a una situación en la cual las decisiones sobre los lugares - las cuales afectan directamente la vida de las personas y las comunidades - son tomadas en lugares cada vez más distantes y por motivos cada vez más ajenos a la sociedad local. La extracción de bienes naturales alimenta un modelo productivo y de consumo que se muestra hegemónico en nuestros días y que tiene sus raíces histórico-espaciales claramente definidas.

Ahora nos proponemos dar un paso más en el análisis de este fenómeno. El creciente ritmo e intensidad con que se viene dando esta explotación de bienes naturales, y que habíamos descrito anteriormente como aceleración y aumento de la productividad espacial, es el responsable por el aumento de la presión ejercida sobre los diversos ecosistemas y sobre el conjunto del planeta en lo que se ha venido a definir como una profunda crisis ecológica global.

En ámbitos académicos, políticos y sociales se consolida la consciencia de que el actual modelo económico a escala mundial está ocasionando impactos - algunos de ellos irreversibles - sobre la biodiversidad de nuestra casa común, el equilibrio ecológico, el

clima y la propia capacidad de recuperación y regeneración del ambiente. “Nunca hubo un ataque a la naturaleza como se está haciendo hoy en todo el mundo. Eso es crecimiento, pero no es desarrollo” (Boaventura de Sousa Santos en Granovsky, 2014: 244). Al mismo tiempo, aumentan los niveles de contaminación del agua, la tierra o el aire y de generación de todo tipo de residuos. “La crisis ambiental ha sido el gran aguafiestas en la celebración del triunfo del desarrollismo”, afirma irónicamente Enrique Leff (2004: 181)

Pero la crisis no tiene exclusivamente una dimensión ecológica. La degradación ambiental camina acompañada y acompañando una degradación social, ética y política, en la medida en que los mayores impactos ambientales afectan directamente a los grupos humanos que menos han contribuido a producirlos. Sobre sus condiciones de vida y sobre los lugares donde habitan quedan los resultados, expresados en tierras desnudas por el modelo de explotación, aguas contaminadas, reducción de la biodiversidad en la zona o alteración del equilibrio sistémico por la progresiva tecnificación del paisaje. “La degradación ambiental y el avance de la pobreza se han convertido en los signos más claros de la crisis social de nuestro tiempo” (Leff, 2004: 420). Queda también la ausencia de dinamismo económico independiente de la actividad extractiva, la aglomeración en núcleos urbanos poco preparados y un conjunto de problemáticas sociales no fácilmente recuperables. “La cuestión ambiental es una problemática eminentemente social” (Leff, 2004: 200).

En palabras de Patricia Gualinga, dirigente indígena del pueblo Sarayaku, en la Amazonia ecuatoriana, “cuando las industrias extractivas, como petroleras, mineras, madereras, ingresan a los territorios de selva primaria generan los peores impactos, no solamente ambientales sino sociales y culturales, todo va de la mano. No es solo ambiental. Antes hablábamos de impactos sociales, ahora hablamos de impactos ambientales, pero no hay que olvidar que nosotros vivimos en ese ambiente, es decir es impacto al ser humano, entonces es una integralidad por la que hay que luchar”²⁹.

En esta línea, se ha ido haciendo fuerte en América Latina la idea de justicia ambiental, que supone una resignificación de la propia cuestión ecológica tal y como había sido conceptualizada al principio, pues incorpora la temática del medio ambiente a dinámicas socio-políticas tradicionalmente relacionadas con la justicia social (Acseirad, 2010). El enfoque de la justicia ambiental “identifica a desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica que faz que a acumulação de riqueza se realize tendo por base a penalização ambiental dos mais despossuídos” (2010: 110), lo cual se relaciona estrechamente con las condiciones de uso y tenencia de la tierra: con la disputa por el territorio.

²⁹ En entrevista publicada en: <<http://signalc.org/noticia/iglesia-debe-ser-aliada-defensa-derechos-naturaleza-patricia-gualinga>>. Último acceso 18/03/2016.

En este capítulo vamos a abordar esta cuestión de la crisis global - ambiental, económica, energética, epistémica, política - asociada a la expansión del sistema de economía-mundo. En un primer momento, analizaremos el modo como la dimensión ecológica de la globalización ha introducido percepciones, más o menos compartidas, sobre los graves problemas sociales y ambientales que se están evidenciando en los últimos 40-50 años, socavando algunas de las certezas que el relato moderno del crecimiento ilimitado mantiene en los imaginarios sociales de nuestro tiempo.

En un segundo momento, intentaremos analizar, de la mano de la ecología política, la relación entre la actual crisis socioambiental y la racionalidad economicista hegemónica, apuntando brevemente algunos de los intentos teóricos de abordar esta crisis.

En tercer lugar, describiremos los mecanismos de funcionamiento de la economía extractivo-exportadora y su relación intrínseca con la expansión de los conflictos socioambientales. Por último, abordaremos las diversas estrategias narrativas y políticas que ponen en juego los diversos actores implicados en la economía extractivo-exportadora, con destaque para los agentes privados, el Estado y los movimientos socio-territoriales: entre ellos el movimiento indígena en particular.

3.1. Globalización ecológica, casa común y la insustentabilidad de lo “normal”: la fractura del relato moderno

Si de un lado la crisis ecológica - que es crisis civilizacional - tiene sus expresiones particulares en cada uno de los territorios, donde se pueden reconocer sus impactos sociales y ambientales, de otro lado, a lo largo de estas últimas décadas, ha ido creciendo una conciencia ecológica global que pone en cuestión la sostenibilidad misma del propio modelo desde una perspectiva mundial. “A pesar de que el crecimiento económico ha dominado y domina aún el escenario de la política real (...) paulatinamente se desarrollaron preocupaciones respecto a la protección del medio ambiente, fruto a su vez de la transformación de las relaciones internacionales en su contexto global” (Acosta y Machado, 2012: 73). La dimensión planetaria de los conflictos sociambientales y de sus impactos requiere, cada vez más, esfuerzos políticos globales y una percepción generalizada de que pertenecemos, todos, a una misma comunidad de destino³⁰.

³⁰ Este campo ambiental global es claramente revestido de contradicciones (Porto-Gonçalves, 2002; 241 ss) y reúne en sí mismo intereses antagónicos. No es el objeto de este trabajo analizar estas contradicciones internas. Sí nos interesa destacar que en las últimas décadas la preocupación por cuestiones que se derivan de los impactos ambientales ha llegado a personas, grupos y colectivos de todos los lugares del mundo y que algunos consensos académicos sobre temáticas determinadas (como el cambio climático) fortalecen socialmente la legitimación de reivindicaciones de movimientos sociales hasta ahora periféricos o ninguneados. Ello abre, a pesar de todas las contradicciones internas, un campo de debate donde la lógica acumulativa y los impactos del sistema de economía-mundo pueden ser más evidenciados y donde la exclusión de la naturaleza, los territorios y, sobre todo, los pueblos y culturas puede ser más combatida.

Además, la extrema y resistente desigualdad operante a nivel mundial, donde el consumo de la mayor parte de energía y materias primas se concentra en poco menos del 20% de la población mundial, revela que es el sistema en sí el que genera desequilibrios que difícilmente se pueden aceptar como inevitables. “É toda a ordem moderno-colonial que se acha, assim, em xeque – princípio de igualdade por exemplo – na medida que seu modo de vida é impossível de se generalizar para todo o planeta” (Porto-Gonçalves, 2002: 242).

Peter Taylor y Colin Flynt desarrollan al inicio de su trabajo (2000) un análisis sobre la multidimensionalidad del fenómeno que comúnmente hemos denominado como Globalización. Afirman los autores que se pueden identificar, al menos, ocho dimensiones diferentes de la Globalización: financiera, tecnológica, económica, cultural, política, geográfica, sociológica y ecológica. En las últimas páginas del libro, Taylor y Flint argumentan que, entre todas estas dimensiones, la globalización ecológica es cualitativamente diferente de las demás. Esto sería así por dos motivos fundamentales.

El primero, porque las inquietudes por las cuestiones ambientales y ecológicas aparecieron unos años antes que la tesis sobre la Globalización. El segundo motivo, porque “desde un punto de vista geográfico la ecología constituye la forma principal de representar lo global como un lugar” (2000:409); es decir, un lugar para vivir y que representa nuestro hogar o casa común. Las otras dimensiones de la globalización representan el mundo de un modo diferente, como un espacio para la acción. Dediquemos a esta cuestión un análisis un poco más detenido.

La lógica acumulativa de la Globalización - dimensiones financiera, tecnológica, económica y geográfica, al menos - requiere normas que regulen la acción en este espacio global. Aunque estas normas son creadas en diferentes niveles y escalas, Milton Santos afirma que las normas globales - inducidas por organismos supranacionales - tienden a configurar las normas locales, mientras que las normas de mercado condicionan las normas públicas (Santos, 2000: 213). Se produce así un movimiento de arriba hacia abajo y desde la esfera de lo privado hacia lo público. O lo que es lo mismo: las normas de juego se establecen para permitir la acción del mercado en un espacio global.

Esta explicación que propone Santos sobre quién y cómo establece las normas de juego nos ayuda en nuestro análisis de la economía extractivo-exportadora de bienes naturales. Como afirma el propio Santos, “la búsqueda de plusvalía a nivel global hace que la primera sede del impulso productivo (que es también destructivo, para usar la antigua expresión de J. Brunhes), sea apátrida, extraterritorial, indiferente a las realidades locales y también a las realidades ambientales. Precisamente por eso la llamada crisis ambiental se produce en este período histórico, donde el poder de las fuerzas desencadenadas en un lugar supera la capacidad local de controlarlas, en las condiciones actuales de mundialización y de sus repercusiones nacionales” (2000: 213).

La primacía de la normatización global se impone sobre las posibilidades de control que puedan existir en lo local.

Pero también incide gravemente sobre las normas públicas, enunciadas en este caso a partir del Mercado. Pensemos en los grandes objetos técnicos modernos, desde una central hidroeléctrica hasta un crecimiento urbano acelerado o una malla multimodal de transportes que garantice la salida de bienes naturales extraídos. Se trata de infraestructuras fundamentales para la economía extractivo-exportadora y para el conjunto de la economía-mundo. Estos objetos técnicos modernos son implantados territorialmente de un modo cada vez más anárquico de modo que pueda servir realmente a los intereses de las nuevas fronteras económicas localizadas en la competitividad del mercado. Terminan convirtiéndose en “elementos centrales en la producción de lo que se convino en llamar la crisis ecológica” (2000: 213). Pero además, ejercen un peso importante sobre las diversas políticas públicas de inversión, concesión de derechos de explotación, regulación territorial o protección de derechos sociales y ambientales.

Si de un lado la localización del primer impulso extractivo y productivo puede desencadenar en un determinado momento un mayor compromiso de inversión pública, de otro lado ello no garantiza necesariamente un crecimiento sostenible y cualitativo en la sociedad local. “La inversión pública puede aumentar en una región determinada, al mismo tiempo que los flujos de plusvalía resultantes van a beneficiar a algunas firmas o personas, que no son necesariamente locales. Esa contradicción entre flujo de inversiones públicas y flujo de plusvalía consagra la posibilidad de asistir al aumento de la dotación regional de capital constante al mismo tiempo en que la sociedad local se descapitaliza” (2000: 214). O, añadimos nosotros, permite la posibilidad de transferir, indirectamente, recursos financieros públicos a intereses particulares no necesariamente locales que pueden salir del territorio una vez que hayan rentabilizado su actividad en términos de acumulación de capital. Se produce, al mismo tiempo, una *des*-territorialización del capital y una territorialización de la vulnerabilidad ambiental y de sus impactos.

Volviendo a nuestro argumento, este es el modo como representa el espacio la dimensión económico-financiera-tecnológica de la Globalización. Es un espacio global comprendido como un campo para la acción, necesitado de normas que permitan la libertad del mercado. Frente a esto, defienden Taylor y Flint que la globalización ecológica incorpora una percepción cualitativamente diferente del espacio global como un lugar y un hogar común. Y esto abre un escenario posible para la confrontación de la racionalidad economicista. “De un lugar, nos preguntamos ¿es sostenible? De un espacio, nos preguntamos ¿es eficiente?” (2000: 409).

De algún modo, podemos decir que, si el sistema-mundo moderno-colonial originó un proceso de mundialización de todos los territorios al servicio de la lógica de acumulación

y en función de sus bienes naturales disponibles, la globalización ecológica puede ser un escenario para la reivindicación de los territorios - desde una perspectiva ya global - en cuanto espacios de diversidad y de resistencia al modelo hegemónico, generando una consciencia de comunidad de destino que consiga transformar el sistema económico. Y si lo global deja de ser un espacio para la acción homogeneizadora y pasa a configurarse como un espacio de la diversidad y la alteridad, también se fractura el relato de la “normalidad”.

Taylor y Flint afirman que, a lo largo de estos 500 años, se dieron al menos tres formas fundamentales de modernidad (2000: 382): la modernidad *mercantil* encabezada por los holandeses, la modernidad *industrial* encabezada por los ingleses y la modernidad *consumista* encabezada por los Estados Unidos. Las tres modernidades tienen elementos comunes:

- Se originan en lugares determinados que acabaron por representar en el imaginario social lo que se entendía en cada momento por moderno;
- Cada una de ellas hace hincapié solamente en una de las etapas del proceso de producción: en la modernidad mercantil se focaliza el intercambio; en la modernidad industrial, la producción; y en la modernidad consumista, el consumo; ninguna de ellas pone el foco en la etapa de la extracción de los bienes naturales y sus consecuencias sobre las políticas de tenencia de la tierra;
- Las tres modernidades, cada una en su momento histórico de hegemonía, se representaban culturalmente a sí mismas como la imagen de la *normalidad*; en palabras de Taylor y Flint, la modernidad normal (2000: 385).

Es decir, a través de las representaciones culturales de cada momento (pintura, literatura, cine, música,...) se inoculaba en el imaginario social la idea de que lo que esas modernidades significaban era vivido cotidianamente por la gente normal y corriente. En el caso de la modernidad consumista y su representación en buena parte del cine norteamericano “su mensaje subliminal era que la buena vida, la vida en los barrios residenciales, era posible para todo el mundo” (2000: 385). La realidad social era y es claramente otra, pero se conseguía revestir el proyecto hegemónico del momento con el ropaje de lo que era en ese momento normal y, por tanto, propio de la gente normal y corriente. Algo accesible y deseable para todos.

Pues bien, esta modernidad normal está actualmente cuestionada de un modo muy intenso y a ello han contribuido la conciencia ciudadana emanada de la dimensión ecológica de la Globalización y la expansión informacional. Para explicar esta nueva realidad, Taylor y Flint acuden a lo que Ulrich Beck ha denominado la “modernidad reflexiva”. Según Beck, hay una consciencia creciente de los peligros e incertidumbres que se generan, para todos, a partir de problemas globales como el cambio climático, la contaminación o las catástrofes ambientales. Habría una sensación de vivir en una sociedad de riesgo, según Beck, que “nos obliga a cuestionar las instituciones de la

sociedad industrial (...) el cuestionamiento de los fundamentos subyacentes a los negocios pone en entredicho la ideología del progreso que antes era universal” (2000: 386). Cada vez hay mayor evidencia de que la modernidad consumista imperante en nuestra época no es, claramente, una modernidad de la gente normal, y que genera por sí misma graves procesos de exclusión social y pobreza; y, al mismo tiempo, crece la consciencia de que el modo de producción en sí genera impactos ambientales que trascienden lo local y asumen dimensiones globales. En definitiva, que lo que se nos representa como “lo normal” resulta insostenible.

Aparentemente, el planteamiento de Ulrich Beck sobre la sociedad de riesgo nos transmite la idea de que son el miedo y la incertidumbre los que actúan como móviles de esta nueva consciencia sobre los impactos de la economía-mundo en el planeta y en la humanidad. Miedo e incertidumbre que se accionan en la medida en que una sociedad entiende que sus propios intereses, su seguridad y su calidad de vida también pueden ser afectados por estos impactos, que dejan ya de ser una cuestión que solo afecta a otros. Se podría cuestionar si estos móviles serían capaces o no, por sí solos, de generar transformaciones significativas en el sistema económico y político, o sin más serían caldo de cultivo para nuevas soluciones de mercado que tranquilicen los miedos de las sociedades de consumo e inventen nuevas seguridades.

Por ello, en nuestro trabajo queremos poner en valor que, aparte de esta consciencia de riesgo que se va consolidando en las sociedades centrales, el nuevo escenario permite visibilizar otras lógicas *alter*-nativas que vienen fortaleciendo sus luchas territoriales y protagonizan, desde los espacios de la periferia, una confrontación del sistema económico que es de naturaleza política, epistémica y antropológica. En esta confrontación reside la posibilidad de una nueva racionalidad. “Una cuestión fundamental en este debate se refiere a la posibilidad de globalizar y extender la racionalidad económica hacia todas las comunidades y espacios de sociabilidad, es decir la capacidad de universalizar la razón económica frente a las limitaciones que le impone la naturaleza (...) es necesario plantearse la posibilidad de *otra racionalidad*, capaz de integrar los valores de la diversidad cultural, los potenciales de la naturaleza, la equidad y la democracia” (Leff, 2004: 185). “Nos deja perplejos la aparente incapacidad por parte de desarrollistas y pensadores eurocéntricos de imaginar un mundo sin y más allá del desarrollo y la modernidad (...) Ya no puede pensarse la modernidad como la Gran Singularidad (...). Por el contrario, la ‘modernidad y sus exterioridades’, si se quiere (y la noción de postdesarrollo busca al menos visibilizar estas exterioridades) deberían tratarse como una verdadera multiplicidad donde las trayectorias son múltiples” (2005b: 30).

Digamos que la fractura del relato moderno sobre la normalidad se produce a partir de dos movimientos aparentemente desconectados. Por un lado, desde lo global, la globalización ecológica que nos representa el mundo como un hogar común, como proponen Taylor y Flint. Pero, por otro lado, y al mismo tiempo, este cambio de la

percepción de lo global coincide con la emergencia de luchas territoriales que, esta vez desde lo local, reincorporan lógicas emancipatorias. Son las luchas por el territorio y por la reapropiación social de la naturaleza, protagonizadas por comunidades indígenas y campesinas, las que representan un mayor cuestionamiento al sistema de economía-mundo en la actualidad. Por ello entendemos que es fundamental situar en este escenario cualquier intento de análisis sobre la relación entre la economía extractivo-exportadora, particularmente la economía minera, y los territorios comunitarios de los pueblos indígenas.

3.2. Crisis ambiental y de modelo: la naturaleza revisitada

El sistema de economía-mundo moderno-capitalista está llevando al planeta a una situación extremadamente delicada al transformar la naturaleza en una fuente de recursos “aparentemente inagotables” (Acosta y Machado, 2012: 71).

La intensificación en el ritmo y volumen de uso de los bienes naturales para alimentar el actual modo de producción está llevando a la Tierra a un desequilibrio agudo y a extrapolar sus propios límites. “Duas das mais importantes forças contemporâneas são a vertiginosa aceleração, no último meio século, do processo da globalização e a crescente gravidade da crise ambiental no plano mundial” (Little, 2006: 87). En palabras de Milton Santos, la velocidad es por sí misma un conflicto (Santos, 2000: 287).

Enrique Leff reconoce que las diversas cosmovisiones y formas de conocimiento siempre han creado y transformado el mundo a lo largo de la historia, y de las más diversas formas; así como el proyecto científico de la modernidad ha conseguido escudriñar las esferas más íntimas de la naturaleza. Sin embargo, “lo inédito de la crisis ambiental de nuestro tiempo es la forma y el grado en que la racionalidad de la modernidad ha intervenido al mundo, socavando las bases de sustentabilidad de la vida e invadiendo los mundos de vida de las diversas culturas que conforman a la raza humana, en una escala planetaria. El conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas, degradado el ambiente, desnaturalizado a la naturaleza” (2004: Prólogo, x).

Estas constataciones, si bien están cada vez más demostradas y generan mayores consensos en la comunidad científica y en la sociedad en general, encuentran aún reacciones muy lentas al interno del sistema económico. Y esto nos conduce, evidentemente, a una cuestión de intereses encontrados y antagónicos; pero también nos refleja la necesidad de superar determinados paradigmas que alimentaron, hasta hoy, la racionalidad dominante.

3.2.1. La lógica del dominio y la negación de la naturaleza

La década de 60 es identificada por diversos autores como un momento de apertura a nuevos horizontes epistémicos y también como el inicio de una puesta en evidencia de

que estábamos viviendo una fuerte crisis ambiental (Moraes Muniz, 2009: 182; Acosta y Machado, 2012: 73, Leff, 2004: 100). “En esta óptica, y pese a la fuerte desconfianza de las izquierdas clásicas, los movimientos ecologistas que se desarrollaron a partir de los años ’60, especialmente en Europa y Estados Unidos, lograron alcanzar un carácter altamente precursor y ejemplar, desarrollando una respetable influencia en sus sociedades” (Svampa, 2008: 2).

La llamada “cuestión ambiental” toma cuerpo institucional con la publicación en 1972 del Informe “Los límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma en 1970 al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y que dará pie a la I Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente, realizada ese mismo año en Estocolmo. “Desde então a idéia de que há limites para a intervenção humana na natureza ganha força” (Porto-Gonçalves, 2012: 18). La incorporación de la idea de límites es fundamental y se desencuentra necesariamente con el paradigma hegemónico hasta nuestros días del crecimiento ilimitado.

La cuestión clave es que la racionalidad economicista del sistema-mundo moderno opera desde la ausencia de los límites o desde la convicción de que éstos pueden ser superados con la técnica. Tales seguridades se construyeron a partir de un distanciamiento progresivo del ser humano respecto de la naturaleza, pautado por una lógica estructural de dominio y negación; ambas dimensiones caminan juntas.

Como afirma Porto-Gonçalves, la cuestión ambiental “coloca em xeque o desdobramento produtivista (tanto na sua vertente liberal como socialista) de um projeto civilizatório de origem europeia que tem na ideia antropocêntrica de *dominação da natureza* um dos seus pilares” (2012: 19; destaque em cursiva en el texto original). Y dominio “é, sempre, em algum grau, a negação do outro, o que é valido tanto para povos, para etnias, para grupos e/ou classes sociais como para a natureza” (2012:21).

Afirma Enrique Leff que “en la dialéctica de la historia, el capitalismo rompe con la unidad entre sociedad y naturaleza; la sociedad se separa de su organicidad originaria y el modo de producción instauro la racionalización del dominio de la naturaleza” (2004: 30). En esta misma línea, argumentan Alberto Acosta y Denio Machado que el ser humano se fue situando, figuradamente, *por fuera* de la naturaleza, llegándola a conceptualizar “sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla” (2012: 68). La misma lectura nos la ofrece Milton Santos: “A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo”. (1995: 697).

El sistema económico desplaza la naturaleza a la condición de almacén de recursos y eso interfiere en nuestra capacidad de comprensión de sus propios procesos, en nuestra

forma de conocerla y en nuestra relación con ella. “Todo ser que é dominado não é respeitado em seu próprio ser, nas suas virtualidades e potencialidades, porquanto é considerado somente nas suas qualidades que podem servir ao dominador” (Porto-Gonçalves, 2012: 21). La fragmentación del conocimiento con la separación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y la dicotomía naturaleza/cultura ha contribuido singularmente a este distanciamiento-desplazamiento-dominio. Por eso insistimos en que el debate es económico a la vez que político y epistémico también.

Estamos delante de lo que algunos han descrito como la segunda contradicción del Capitalismo (O’Connor, citado en Composto y Navarro, 2014). Si el modo de producción capitalista opera una primera contradicción entre capital y trabajo, también existe una segunda contradicción entre el capital y la naturaleza. “Dado que los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital, se suscita necesariamente una contradicción entre el dominio de aquel y los ciclos biológicos del planeta” (Composto y Navarro, 2014: 49).

Percibimos, por tanto, cómo la idea ilusoria de ausencia de límites y la de dominación se retroalimentan y necesitan mutuamente. La ideología del progreso, el desarrollo y el crecimiento, que hemos analizado en el capítulo anterior, se topa con la constatación de la ley límite de la naturaleza, que es lo efectivamente real, frente al desvarío de un crecimiento sin límite (Leff, 2004: 98). La llamada ley de la entropía, que “vincula el proceso económico con las leyes de la naturaleza dentro de nuestro planeta vivo” (2004: 142), supone un cuestionamiento claro a buena parte de las ideas liberales que resisten en el imaginario político contemporáneo en forma de categorías irrenunciables o incuestionables, como la del crecimiento permanente e ilimitado.

La racionalidad económica combate la idea de límite, directa o indirectamente, de diversas formas. Una de ellas es la confianza que proyecta en la capacidad del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, como ya hemos destacado anteriormente de la mano de Milton Santos y Maristela Svampa. Se extiende la idea de que los progresivos adelantos tecnológicos conseguirán, en todo momento, encontrar soluciones a los posibles límites que impone la naturaleza y a la recuperación de los “daños colaterales” que la actividad económica genera.

Esta fe ciega o “acrítica” (Porto-Gonçalves, 2012: 22) en el desarrollo científico-técnico, principalmente cuando su control está concentrado en pocas manos³¹, genera algunas consecuencias preocupantes: reduce la sensación de riesgo, disminuye la capacidad de oposición al sistema económico, mantiene la percepción de dominio y aplaza, irresponsablemente, la toma de decisiones necesarias.

³¹ Carlos W. Porto-Gonçalves alerta, de un modo particular, para la captura de la ciencia por parte de la lógica financiera (2012: 23 y ss).

Esta cuestión está presente en los más diversos dilemas socioambientales de carácter global que hoy se discuten en los foros internacionales. Desde la búsqueda de soluciones para los cambios evidentes en el clima del planeta hasta las propuestas para garantizar supuestamente la seguridad alimentaria en un mundo en el que cerca de 1.000 millones de personas continúan sufriendo por el hambre y la desnutrición. Pareciera que la solución de estos y otros dilemas globales pasaría por un desarrollo tecnológico - de la biología a la nanotecnología, del control de semillas a la llamada agricultura climáticamente inteligente- que precisamente está en las manos exclusivas de determinados centros económicos del planeta. De este modo, el conocimiento se transforma en poder; el propio sistema-mundo moderno pretende responder, con su misma lógica de acumulación, a los desequilibrios que él mismo genera sin necesidad de transformar su propia condición.

Al mismo tiempo, esta relación de dominación tecnocrática sobre la naturaleza tiene también severas consecuencias sobre las comunidades y grupos humanos que habitan determinados territorios que se tornan visibles a los intereses del capital acumulativo. Y podríamos decir que para toda la sociedad en su conjunto. Afirma Porto-Gonçalves (2002), retomando un planteamiento de Serge Moscovici, que dejar fuera a la naturaleza significa también dejar fuera todo un conjunto de lugares y de sus pueblos y comunidades que forjaron allí matrices de racionalidad, prácticas y significaciones elaboradas en una relación con-la-naturaleza y no contra-la-naturaleza. “Insistimos que a ideologia e o imaginário conformados em torno de uma presumida superioridade epistêmica, cultural e religiosa europeia tende a deslegitimar essas populações tratando-as como inferiores e como estorvo ao seu progresso e ao seu desenvolvimento, assim como tratam a natureza como algo a ser dominado” (Porto-Gonçalves, 2009b: 3).

Por último, entendemos con Porto-Gonçalves (2012: 20-21), que en esta idea ilusoria de ausencia de límites, interviene un componente antropológico evidente de cómo el ser humano se comprende a sí mismo. Porto-Gonçalves lo describe con la distinción entre extractores y productores. Considerarnos como seres productores alimenta la percepción de dominio sobre la naturaleza, pues aparentemente seríamos capaces de producir todo aquello que necesitamos utilizar. Sin embargo, en esta idealización productivista de las capacidades del ser humano obviamos, y por tanto negamos, el principio fisiocrático de que la naturaleza participa significativamente del proceso de creación de la riqueza, pues solamente ella crea riqueza líquida³². “Nenhum país, nenhuma sociedade produz ferro, petróleo ou água” (2012: 20). Esos bienes se dan en la naturaleza y las propiedades que aprovechamos de ellos son innatas, no producidas por el intelecto humano.

³² Porto-Gonçalves pone el ejemplo de que una semilla puede producir miles de semillas o es la energía contenida en las moléculas del carbón la que lo convierte en una fuente energética que terminó siendo fundamental para el desarrollo industrial.

La cuestión fundamental, según Porto-Gonçalves, es que pasar de una concepción del ser humano como productor al ser humano como extractor implica reconocer que extraemos algo que no producimos nosotros y ello nos obliga a pensar nuestra relación con la naturaleza y descubrir la existencia de límites en los procesos ecosistémicos. Cualquier país o sociedad, independientemente de su desarrollo industrial o intensidad de consumo, más allá de cualquier indicador de su economía, depende de la naturaleza tanto como los otros.

En definitiva, hay una condición económica, política y epistémica en la crisis global que se ha puesto en evidencia en las últimas cuatro décadas. Lo que inicialmente pudiera ser comprendido como una crisis de carácter ecológico o ambiental se va desvelando como una crisis mucho más enraizada y que afecta al sistema de economía-mundo como un todo.

3.2.2. Abordajes teóricos y políticos hacia una superación de la crisis

Una de las consecuencias de la negación de la naturaleza ha sido la invisibilización de los impactos socioambientales de la actividad productiva. La economía-mundo ha concebido tradicionalmente todos estos impactos como externalidades al proceso de producción y, por lo tanto, no computables en los costes ni tampoco en las responsabilidades. La evidencia de la crisis ambiental deja en difícil posición este posicionamiento clásico de la economía. Y emerge el interés también teórico y político por abordar esta cuestión. Aquí vamos enunciar algunos de ellos, sin pretender una descripción exhaustiva.

Desde una perspectiva estructuralista y marxista, destaca el surgimiento del campo teórico de la Economía Política de los recursos naturales (Harvey, Bunker, Soja) y la Economía Ecológica que, en palabras de Leff, realmente contribuyeron con “una mirada crítica sobre la degradación ecológica y energética resultante de los procesos de producción y consumo, intentando situar el intercambio económico dentro del metabolismo general de la naturaleza” (2004: 100).

La Economía Ecológica surge como un discurso crítico con la racionalidad instrumental, a la que denuncia por haber fragmentado los sistemas económico, social y ambiental, sometiendo todo al primero de ellos. Precisamente la búsqueda del equilibrio entre estos tres espacios – económico, social y ambiental – es un elemento que se ha incorporado mayoritariamente en los discursos de los más diversos actores a lo largo de las últimas décadas, desde dentro y desde fuera de la racionalidad económica hegemónica, lo que permite alertarnos sobre la elasticidad de la propuesta en sí misma.

La Economía Ecológica plantea que los costes que ocasiona, en el ambiente y en la comunidad local, extraer y transportar los bienes naturales deben ser asumidos por las empresas. Y esto al final se reflejaría en el precio final de mercado - se cargaría sobre el consumidor y su capacidad de compra - o en el cómputo de los beneficios reales de la

empresa. Pero sobre todo, y esta es una de sus principales contribuciones, influiría en la valoración de si una actividad es rentable o no. Es decir: muchas de estas actividades podrían no resultar rentables si efectivamente fuesen contabilizados los destrozos ambientales generados en el acceso a los bienes naturales necesarios, los impactos sociales provocados en los territorios-yacimiento o la manutención de estándares de derecho en las relaciones de producción con los trabajadores en los lugares de origen.

En una línea de pensamiento próxima, encontramos lo que Joan Martínez Alier denominó “ecología popular”. La ecología popular coloca el acento en los conflictos socioambientales, en la expansión de las fronteras económicas sobre los territorios y en la desigual distribución de beneficios y perjuicios (Svampa, 2008: 7). En este contexto se propuso la idea de deuda ecológica (Martínez Alier, 2005)³³, considerada un concepto económico que calcularía la destrucción de la base de los bienes naturales que las actividades de las grandes empresas dejan sobre la población local y sobre el territorio. Unido al concepto de deuda ecológica ha ido ganando difusión el de pasivos ambientales, “que surge en América Latina de casos concretos de contaminación por la minería o por la extracción de petróleo” (2005: 271), y que se referirían a la destrucción ambiental dejada en el territorio-yacimiento durante o a la conclusión de la actividad extractiva.

Estos abordajes han significado una contribución importante en la línea de visibilizar la problemática y el orden de las responsabilidades. Pero al mismo tiempo, se revisten de algunas fragilidades que les impiden avanzar más en términos de transformación de la realidad y abren otra serie de interrogantes teóricos. Profundizan en la necesidad de reincorporar la naturaleza al proceso productivo, pero no consiguen desconstruir la propia racionalidad económica que guía ese proceso o formular una nueva teoría de la producción. En sus planteamientos “la producción sigue estando guiada y dominada por la lógica del mercado” (Leff, 2004: 100), como ya habíamos descrito también en el caso de la categoría desarrollo sostenible.

Por otro lado, al proponer un cómputo económico de los procesos naturales siguen también las lógicas de valor de la racionalidad establecida y entran en conflicto con, al menos, dos realidades concretas: a) el hecho de que los bienes naturales son inmensurables desde un punto de vista económico; y b) las consecuencias éticas de lo que podríamos llamar *hipereconomización* de la vida. “La equidad a través del intercambio es imposible porque éste supone forzar el valor de mercado como unidad de medida, con lo cual se pierde el valor ecológico y cultural de la naturaleza, que

³³ Según Martínez Alier, el concepto de deuda ecológica se propuso por primera vez en 1985, en Alemania, en el contexto eco feminista representado por el Partido Verde alemán. En 1990 era discutida también en el Instituto de Ecología Política de Chile y en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) uno de los textos alternativos introdujo el concepto en contraposición al de deuda externa.

irremediablemente se desustantiva y desnaturaliza para ser codificada en valores económicos” (Leff, 2004: 123).

Esto hace que estos abordajes, si no contribuyen, al menos no entran estructuralmente en conflicto con las políticas de desarrollo que están siendo adoptadas en términos de lo que se ha venido a llamar la mercantilización de la naturaleza, o procesos por los cuales elementos de la naturaleza se convierten en mercancías ficticias (Becker, 2005: 77). Consiguen rescatar a la naturaleza de la condición de objeto, pero pasa a ser codificada en términos de capital – capital natural (2004: 112).

Desde una perspectiva liberal, más endógena a la racionalidad económica, también emergen algunas perspectivas teórico-metodológicas, como las analizadas críticamente por Nunes y Abreu (2007), entre otros. Una de las tesis es la de la progresiva “desmaterialización” de la economía productiva moderna. Esta tesis defiende que, con los avances tecnológicos, cada unidad producida requiere cada vez menos cantidad de materia y energía, lo que resolvería los conflictos ocasionados por su explotación. Esta hipótesis es fuertemente contestada desde otros sectores. Porto-Gonçalves afirma que, incluso reduciendo la cantidad de materia y energía empleada en cada unidad de producto, la insostenibilidad está en la pretendida extensión de niveles de consumo como el de la media de Estados Unidos; además, los datos nos devuelven el hecho de que la demanda por bienes naturales aumenta porque crece el volumen de producción pretendido (2012: 22) y esto lo demostraremos en el Capítulo 5.

En el mismo sentido, Nunes y Abreu afirman que “se é verdade que houve um processo generalizado de redução de *inputs* materiais por unidade de mercadoria produzida, não se pode deduzir, automaticamente, que a essa redução correspondeu uma retração dos fluxos de matéria-prima no comercio mundial, especialmente dos minérios” (2007: 42). Argumentan los autores que la economía moderna continuará recurriendo a crecientes montantes de energía y materia, transportadas a distancias cada vez mayores.

Otra de las perspectivas teóricas que encontramos, y que podríamos alinear también en una perspectiva liberal, defiende que la entropía causada por el actual modelo productivo podrá ser incorporada por los propios mecanismos de mercado. Esta tesis acoge la posibilidad de internalizar las “externalidades ambientales” sin perjudicar la formación de los precios y que es posible encontrar fórmulas para mensurar niveles “aceptables” de contaminación. En este abordaje, se sitúan soluciones de mercado ya aceptadas por Gobiernos y empresas, como el Mercado de Carbono o los Mecanismos de Desarrollo Limpio, vinculadas a la llamada “economía verde” o “nueva economía de la naturaleza”³⁴. Estas medidas permiten mantener la estructura del sistema económico.

³⁴ Existe un debate muy intenso y crítico dentro de algunos sectores de la Academia y de los movimientos sociales sobre las estrategias de la Economía Verde, la cual ha sido adoptada como orientación general para las discusiones y deliberaciones de algunos de los últimos grandes eventos internacionales, como la Cumbre Rio+20 (Rio de Janeiro, julio de 2012) o la COP20 (Lima, diciembre de 2014), entre otras. Un

Lo que había surgido como una necesidad de incorporar la Naturaleza excluida por la racionalidad económica - y al incorporarla se acoge la constatación de límites a un crecimiento que sí tiene límites - termina siendo apropiado por el Mercado para mantenerse vivo y con su racionalidad intacta. “El capital clona identidades para asimilarlas a una lógica, a una razón, a una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza como medio de producción de la racionalidad económica” (Leff, 2004: 108).

Milton Santos describe este fenómeno como una progresiva objetivación artificial de los objetos naturales. Es decir: en un primer momento, se produce una progresiva incorporación de objetos técnicos sobre el ambiente, una tecnificación del paisaje; pero en un segundo momento, lo que ocurre es que los propios objetos naturales pasan a ser concebidos cada vez más como objetos artificiales y como medios de producción, transformando su naturaleza. El agua, la floresta, el subsuelo, los objetos minerales e incluso el aire adquieren una dimensión objetiva en la lógica del mercado en función de sus potencialidades y utilidad en un momento dado de la historia humana; en función del desarrollo económico de determinadas regiones del sistema-mundo. Como afirman Claudia Composto y Mina Lorena Navarro, la dinámica del capitalismo global busca *“transformar la naturaleza en un mero medio de producción y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías”* (Composto y Navarro, 2014: 34).

Un efecto perverso, y poco discutido, de estas medidas es la ampliación del concepto de “primarización de las economías locales”. Es decir, se abre un proceso por el cual algunas regiones del planeta se convertirían, no sólo en suministradoras de materias primas, sino ahora también en prestadores de servicios ambientales funcionales a la continuidad del modelo. Lo que describíamos anteriormente como fruto de la división internacional del trabajo, con la territorialización de determinados factores de producción al servicio del mercado global, ahora se complementa con una división internacional de la gestión de la crisis socioambiental global, en la cual unos territorios mantienen parte de sus bienes intactos para facilitar que otros puedan continuar el mismo ritmo de contaminación. La transferencia de recursos de los países industrializados hacia los países de la periferia en términos de mercado de carbono – protección de (algunos) bosques tropicales³⁵, por ejemplo – no obliga a disminuir la emisión de gases por parte del modelo hegemónico, excesivamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los principales agentes de la economía global han incorporado todas estas preocupaciones a sus estrategias productivas. Entre otras cosas, porque son conscientes de que sus intereses también pueden ser dañados, sea en términos de imagen de

análisis más específico del tema: Serrano y Martín, 2011; Fatheuer, T., 2014; Veloso dos Santos, 2011; Kill, J. *et al*, 2012; o CIMI, 2014.

³⁵ Resulta evidente que la protección de áreas de bosque tropical afectaría a aquellas sobre las cuales aún no se han evidenciado intereses económicos contradictorios. Estas políticas de protección conviven en las mismas regiones tropicales (Amazonia, por ejemplo) con políticas de grandes emprendimientos que implican necesariamente la destrucción de ecosistemas importantísimos.

mercado, de accesibilidad real a bienes naturales que están en proceso de agotamiento, de que los impactos lleguen hasta sus propias poblaciones o de las evidencias de la producción de entropía por una economía dependiente de combustibles fósiles.

De este modo, en muchas de las políticas de desarrollo actuales se confunden todos los conceptos que habían nacido para superar la grave crisis ambiental y social que vive el planeta. Parecería que la sostenibilidad, la cooperación al desarrollo, la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, la deuda ecológica o la protección de (algunos) ecosistemas fuesen reunidos y contemplados en estas políticas de mercantilización de la naturaleza, que operan, una vez más, como un meta-relato total que disipa las contradicciones³⁶.

El efecto, sin embargo, es precisamente el contrario. “La mercantilización de la naturaleza bajo la geopolítica económica-ecológica emergente ahonda las diferencias entre países ricos y pobres bajo los principios del desarrollo sostenible. La nueva globalidad justifica las ventajas comparativas entre los países del Norte y los países del Sur, que se ven constreñidos a valorizar la capacidad de sus suelos, sus bosques y su biodiversidad para absorber los excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero de los países ricos (...) Las diferencias entre países centrales y periféricos ya no sólo resultan del pillaje y la sobreexplotación de los recursos” (Leff, 2004: 119). Aparentemente, a la artificialización de la vida en los países industrializados se oponería la economía natural de los países periféricos; sin embargo, detrás de esta atractiva imagen se esconde la perpetuación de las bases del sistema de economía-mundo.

Por lo tanto, aún queda abierto el desafío definido por Enrique Leff de “formular una nueva economía que funcione sobre la base de los potenciales ecológicos del planeta, del poder del saber, la ciencia y la tecnología, y las formas culturales de significación de la naturaleza” (2004: 191). Esta nueva formulación supone hoy en día, sin duda, un desafío para el pensamiento crítico latinoamericano. En palabras de Escobar, nos preguntamos si el mundo “puede ser redefinido y reconstruido desde la perspectiva de múltiples prácticas culturales, ecológicas y sociales encarnadas en modelos y lugares locales” (citado textualmente en Leff, 2004: 265).

A partir de la segunda mitad de los años 80 e inicios de los 90 surgen algunos abordajes teóricos acerca del concepto “postdesarrollo” (Escobar, 2005b). El concepto se enmarca en un contexto de crítica post-estructuralista del desarrollo que no pretendía tanto proponer otras versiones de desarrollo, sino poner en cuestión toda la arquitectura conceptual e institucional que existía en el momento en nombre del desarrollo, valorizando la contribución de nuevos actores locales.

³⁶ Esta lógica es claramente perceptible en el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el contexto de la COP-21.

Se aproximan estas propuestas teóricas a un intento de pensar *desde fuera* de la racionalidad económica hegemónica, más que buscar alternativas o soluciones internas. “¿Es posible pensar fuera de los paradigmas establecidos?” (2005b: 27). Para ello, Escobar recoge el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos de que se requiere superar el paradigma de la modernidad en un doble sentido: epistemológico, disminuyendo el dominio de la ciencia y abriéndonos a una pluralidad de formas de saber; y socio-político, acogiendo la naturaleza de los nuevos sujetos políticos encarnados en movimientos populares o en eventos globales como el Foro Social Mundial.

Maristella Svampa nos propone algunas líneas de pensamiento que se han ido enunciando a partir de este planteamiento de postdesarrollo (Svampa, 2012: 45-46) y que configurarían tres ejes-desafíos fundamentales:

- a) Una agenda posible de transición hacia el postextractivismo, idea que está siendo trabajada particularmente por Eduardo Gudynas y el Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES. Para diseñar este camino de transición, Gudynas y el equipo de investigación del CLAES proponen una categorización que permite hablar de dos etapas: i) pasar del Extractivismo Depredador al Extractivismo Sensato, responsable social, económica y ambientalmente y respetuoso con el marco legal vigente; ii) pasar posteriormente del Extractivismo Sensato a una fase de “extracción indispensable” o Postextractivismo³⁷.
- b) El segundo desafío propuesto por Svampa tiene que ver con la necesidad de registrar y reconocer, a escala local y regional, experiencias concretas de *alter*-desarrollo que se originan, necesariamente, en otras racionalidades económicas.
- c) Por último, un tercer gran desafío se sitúa en la transformación de los “horizontes de deseabilidad” en términos de calidad de vida y que han sido colonizados simbólicamente por las ideas de progreso, como vimos en el capítulo anterior. “Hoy, la definición de qué es una ‘vida mejor’ aparece asociada a la demanda por la ‘democratización’ del consumo, antes que a la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural respecto del consumo y la relación con el ambiente” (Svampa, 2012: 46)

Enrique Leff, en su propuesta de nuevo saber ambiental, insiste en que la problemática ambiental es de naturaleza social y que tenemos por delante el desafío de un abordaje socioambiental. “O caráter limitado e parcial do conhecimento disciplinar, ao não apreender as conexões entre o social e o natural, restringiu-se a internalizar normas ecológicas e tecnológicas, deixando de lado a análise do conflito social, bem como a dimensão política que perpassa o campo ambiental” (2004: 122). De ahí la necesidad de

³⁷ Eduardo Gudynas. Conferencia “Economía política y ecología política del extractivismo”. Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 18/04/2013. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=geAtIA4Y71M>>. Último acceso, 11/10/2014.

una sociología ambiental, con categorías y métodos investigativos propios, capaz de abordar las relaciones de poder que atraviesan la cuestión ambiental.

La búsqueda de una nueva racionalidad, una racionalidad ambiental, solo es posible si se produce este “encuentro de racionalidades – de formas diferentes de pensar, de imaginar, de sentir, de significar y de dar valor a las cosas del mundo” (2004: 209). Este encuentro, prosigue Leff, es la confrontación con la parte de la realidad que normalmente es dejada al margen.

3.3. Economía extractivo-exportadora y crisis ambiental

A lo largo de nuestro trabajo vinculamos la actividad de la minería, en sus diversas formas, con un fenómeno más amplio al que denominamos extractivismo o modelo extractivo-exportador. Esta economía extractivo-exportadora se refiere, en definitiva, a la primera fase del impulso productivo: la que está relacionada directamente con la localización, exploración y extracción de bienes naturales estratégicos y su transporte en gran escala hasta los centros de procesamiento industrial y de consumo. La mayor parte del volumen de bienes naturales extraídos es direccionado a la exportación.

La naturaleza acumulativa del capital exige cada vez una mayor disposición de bienes naturales, en diversidad y en volumen, lo que exige que fase extractiva y la circulación de estos bienes se convierta en elemento fundamental para el funcionamiento de la economía global. “El metabolismo del capitalismo global no es comprensible sin el consumo creciente de recursos de todo tipo (...), en concreto materiales y energía que son obtenidos de la Naturaleza” (Acosta y Machado, 2012: 75).

Posiblemente esta primera etapa del ciclo de acumulación sea la más invisible de todas³⁸. A partir de la definición que Marx propone de la acumulación originaria como “el proceso histórico de escisión entre productores y medios de producción” (citado en Composto y Navarro, 2014: 35), fue ganando terreno una interpretación, cuya mayor exponente es Rosa Luxemburgo, que ponía el énfasis en que esta fase de apropiación tenía un carácter original o pre-capitalista; por tanto, extra-capitalista.

Es decir, la retirada de los bienes naturales de la tierra era una condición de posibilidad para el modo de producción capitalista, pero le precede y, por ello, se consideraba extra-

³⁸ Ya lo vimos anteriormente cuando llamamos la atención sobre el hecho de que las tres modernidades históricamente hegemónicas, según Taylor y Flint (mercantil, industrial y consumista), obviaban, en cierto sentido, esta primera fase de acumulación en la cual nosotros ponemos el acento. La apropiación de los bienes naturales y su disposición para el ciclo productivo es algo que parece darse por hecho. Todo indicaría que el proceso económico comienza a partir de lo que producimos y cómo lo producimos. Esta idea alimenta nuestra imagen de dominio sobre la naturaleza, como ya hemos comentado también anteriormente de la mano de la reflexión de Carlos W. Porto-Gonçalves.

radio al propio sistema. Nuevos trabajos³⁹ han intentado superar este enfoque de acumulación “originaria” o “primitiva”, para defender que ella no es anterior sino parte inherente dentro del modo de producción capitalista.

En palabras de Raúl Zibechi, los procesos que viven “los pueblos del sur” no caben en el concepto de acumulación originaria de Marx, pensado para la realidad europea. “En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados por la fuerza de su continente” (2014: 79).

David Harvey, en la tentativa de proponer un concepto diferente al de acumulación originaria, propone el de “acumulación por desposesión”. Lo hace a partir de una relectura del propio Marx y describe los diversos procesos que se dan en esta fase originaria. “Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc. – en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; (...)” (Harvey, 2005: 113).

Nos proponemos en este apartado enunciar las principales actividades que se vinculan a la economía extractivo-exportadora – con especial énfasis en la minería –, algunas de las características y condiciones del de esta economía extractiva, sus lógicas discursivo-simbólicas y la generación de conflictos socioambientales con base territorial.

3.3.1. Actividades y tipología de la economía extractivista

En principio, cualquier actividad relacionada con la extracción de un recurso natural, desarrollada de modo permanente como una estrategia adaptativa y económica, puede incluirse en una concepción amplia de extractivismo.

Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y de pescadores artesanales, entre otros muy diversos grupos humanos que implementan sus modelos de convivencia y de sociedad en permanente relación con el entorno, se sirven, cotidianamente, de actividades de extracción y aprovechamiento de bienes naturales. Este tipo de extractivismo contribuye significativamente a configurar la relación de una comunidad con el medio en el que habita⁴⁰.

³⁹ Composto y Navarro (2014) recorren algunas de las principales contribuciones a este debate a partir de autores como John Holloway, Werner Bonefeld, Massimo De Angelis o David Harvey, a quien atribuyen una capacidad de síntesis de los anteriores.

⁴⁰ Sería difícil y exhaustivo completar una lista de los diversos usos que estos grupos hacen de los recursos que el ambiente les ofrece. Desde reunir leña para hacer fuego o cocinar hasta la obtención de madera para pequeñas o grandes construcciones (casas, depósitos, puentes o canoas, por ejemplo) o para

Las actividades realizadas interactúan con las condiciones de reproducción de los bienes disponibles y con el resto de la comunidad biótica, los elementos climáticos y astrológicos. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales han incorporado las condiciones ecológicas de su ambiente a sus propios modos de organización social y productiva, así como a sus formas de significación de la vida, permitiéndoles optimizar las potencialidades del entorno sin afectar severamente sus ritmos y ciclos. Al calor de esa interacción se sistematiza colectivamente, no solo un conocimiento tecnológico, sino fundamentalmente una conducta de territorialidad, íntimamente relacionada con el modelo de organización social y el sistema de significados simbólico y espiritual.

Todo este conjunto de tecnologías y conocimientos, prácticas y significados, están estrechamente relacionados con el aprovechamiento, a través de técnicas extractivas, de los recursos disponibles en el entorno, y esto caracteriza un tipo de extractivismo. De hecho en algunos países como Brasil el término extractivismo es utilizado para identificar, precisamente, las estrategias económicas y la identidad colectiva de muchos de estos grupos, reconocidos como comunidades o poblaciones extractivistas (Little, P., 2002:9).

Pero existen otros tipos de extractivismo que difieren sensiblemente de este primero y algunos de ellos entran en franca colisión con él. Se trata de actividades extractivas de recursos naturales, renovables y no renovables, concebidas y planificadas desde fuera del ambiente a partir de actores sociales y lugares distantes. Su relación con el territorio está mediatizada por la disponibilidad de determinados bienes que en un momento determinado son demandados en otros espacios.

El objetivo principal de este tipo de extractivismo es el de desplazar estos recursos, extraídos *in loco*, hacia los lugares-de-demanda para consumo o como insumos incorporados en procesos de producción manufacturera o industrial. Se trata, por tanto, de una extracción hacia fuera, y esta es su característica más sustancial.

fabricación de instrumentos; la retirada de hojas de palma para coberturas o de fibras vegetales para la producción de artesanía o de tejidos; la colecta de semillas y de frutos silvestres alimenticios, medicinales o utilizados para pinturas corporales y fabricación de artefactos; el aprovechamiento del barro y la arcilla para la fabricación de objetos; la búsqueda de raíces de plantas, resinas, hojas o la arena de las orillas de los ríos ... Todos estos bienes y muchos más se encuentran disponibles en el ambiente bajo unas condiciones determinadas de reproducción y de frecuencia por unidad de área y de acceso. Y cuando extraídos, son direccionados normalmente a funciones como el propio consumo de la familia o comunidad, relaciones de intercambio, troca o inserción en mercados locales y regionales, fiestas, ceremonias simbólicas y otros usos que varían a partir de la especificidad cultural del grupo.

El aprovechamiento de estos recursos exige de la comunidad una permanente creatividad tecnológica y estos conocimientos se van acumulando y son re-significados y transmitidos de un modo también permanente. Nos encontramos así con un patrimonio tecnológico importante y un conjunto amplio de conocimientos acumulados por estos grupos sobre el ambiente en el que viven y la diversidad de especies que lo componen, de sus propiedades, características y comportamientos.

Esta especie de des-conexión o des-compromiso con el territorio reduce drásticamente las posibilidades de acumular conocimientos precisos sobre el medio - característica fundamental de los modelos locales de naturaleza - y multiplica las condiciones de desequilibrio y sobreexplotación. En muchos casos, el desarrollo científico y tecnológico ha pretendido superar esta distancia física y epistemológica con el territorio y ha desarrollado mecanismos a los que se atribuyen las condiciones de precisión y objetividad. Paradójicamente, cuanto menos conocimiento acumulamos sobre el ambiente más crece nuestra percepción ilusoria de dominio sobre él. Sin embargo, este conocimiento es sensiblemente limitado.

El Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES, coordinado por Eduardo Gudynas, ha propuesto una clasificación de los diversos tipos de extractivismo⁴¹. Esta clasificación la representa Gudynas en la siguiente tabla conceptual:

Cuadro 3. Tipos de extractivismo. Eduardo Gudynas, CLAES

Destino Comercial	Volumen/Intensidad de la extracción		
	Bajo	Medio	Alto
Local	Cultivo campesino de alimentos para autoconsumo	Tala de bosque nativo para obtener leña	Captura de agua para riego local y doméstico
Nacional	Fibras vegetales para cestería, techos,...	Frutas y verduras convencionales para mercados nacionales	Arenas para construcción
Exportación	Alimentos orgánicos	Flores de invernadero	Minería, hidrocarburos, monocultivo de exportación, madera, turismo de masas.

En función de dos variables – destino comercial y volumen o intensidad de la extracción - Gudynas propone una clasificación de las diversas formas de extracción. Solamente el cuadro de la esquina inferior derecha, sombreado intencionalmente, y que reúne las actividades destinadas a la exportación y con una intensidad alta de extracción, es lo que ellos van a llamar la economía extractivista vinculada a la globalización. “Igual vamos

⁴¹ Eduardo Gudynas. Conferencia “Economía política y ecología política del extractivismo”. Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 18/04/2013. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=geAtIA4Y71M>>. Último acceso, 11/10/2014.

a precisar de una palabra para ese específico apartado”, afirmaba Gudynas. En nuestro trabajo, optamos por el término de economía extractivo-exportadora.

La economía extractivo-exportadora de nuestros días incluye, por tanto, un conjunto diverso de actividades, que agrupamos en los siguientes sectores:

- Actividades extractivas tradicionales, relacionadas con minerales y combustibles fósiles⁴², como el petróleo y el gas. El modelo productivo global es severamente dependientes de estos bienes que, precisamente, no disponen de una condición de regeneración natural. Se trata de bienes que se encuentran en el subsuelo, lo que condiciona estructuralmente lo que suceda en la superficie⁴³.
- Extractivismo de bienes forestales. La competitividad por el acceso a la biodiversidad de las florestas primarias y secundarias alimenta mercados e industrias como las de la madera, la cosmética o la farmacéutica. Todas las normas creadas en torno a las patentes, la protección de los conocimientos tradicionales, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas o la preservación de áreas ambientalmente estratégicas, entre otras, hacen parte también del campo de disputa entre los diversos actores locales y globales.
- Actividades ligadas al nuevo sistema agroalimentario, que comportan la concentración de grandes extensiones de tierra para producción de monoculturas, nuevas *commodities agrícolas*, que se incorporan al mercado global en los circuitos agroalimentarios industriales o en la expansiva industria de agrocombustibles. Este sistema agroindustrial de la alimentación va aparejado, precisamente, a la pérdida de soberanía alimentaria para muchas comunidades (Svampa, 2012: 32) o la disminución de la variedad de semillas y se le responsabiliza del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
- Finalmente, aquellos megaproyectos de infraestructura de energía o de transportes y comunicación que se tornan necesarios para la actividad de extracción y transporte de estos bienes. De un modo particular hablamos de las grandes centrales hidroeléctricas y de los sistemas multimodales de transporte que permiten asociar diversas vías - fluvial, terrestre, aérea - para garantizar la contigüidad del transporte en áreas estratégicas como la Amazonia.

Estas diversas actividades económicas mantienen entre sí claros intereses comunes; no es únicamente una sumatoria de acciones autónomas. De hecho, cada vez son más las grandes corporaciones empresariales que diversifican su cartera de proyectos para atender a diversos sectores extractivos al mismo tiempo. Los sistemas multimodales de

⁴² Las actividades vinculadas a los combustibles fósiles están directamente relacionadas con los mayores impactos socioambientales, por la envergadura de sus operaciones, y con la emisión de gases de efecto invernadero causantes del llamado calentamiento global.

⁴³ Es por este motivo que la titularidad del subsuelo, diferenciada de la titularidad de la superficie terrestre, se convierte en un elemento clave en la disputa entre empresas, sociedad civil y Estados, que son los que se atribuyen formalmente la tenencia de estos bienes.

transporte o la generación de energía hidroeléctrica son concebidos, así, en un escenario de articulación de sectores extractivos que, al beneficiarse por igual de los nuevos objetos técnicos, afianzan sus relaciones de alianza económica y política.

3.3.2. Economía de carácter cíclico y centrípeto

Una de las características y condiciones estructurantes de la economía extractivo-exportadora se refiere a su carácter cíclico de los emprendimientos extractivos. Los territorios-yacimiento viven ondas de expansión extractiva que se producen a cada cierto tiempo y que se mantienen también durante un determinado período. Estas ondas son normalmente seguidas de períodos inter-ciclos caracterizados por una caída, recesión o simplemente estancamiento social y económico de la región.

Los periodos expansivos son normalmente descritos como momentos de auge, “boom” o “fiebre”. El inicio de un ciclo expansivo puede darse por diversas causas, relacionadas o no entre sí⁴⁴:

- Una de las causas suele ser, por ejemplo, el aumento de la demanda de uno o varios bienes primarios a nivel nacional o mundial. Este aumento expresivo de la demanda procede normalmente de centros que están experimentando en ese momento un auge económico importante. Cuando esas condiciones se transforman, se superan o desaparecen, la actividad extractiva disminuye, pudiendo llevar a la región afectada a un tiempo de declive y abandono, o se re-configura necesariamente buscando nuevas alternativas.
- Una segunda causa posible, que puede estar o no relacionada con la demanda, es el aumento de los precios globales de determinados productos. Este aumento puede ocasionarse por la escasez y/o dificultad de acceso a un determinado bien estratégico; o puede estar relacionado con el aumento de la demanda de ese bien, que activa el comportamiento de los precios.

El comportamiento de los precios también puede reflejarse en el sentido contrario; es decir, en una reducción de su valor. Y esto incluso cuando la demanda se mantiene alta, en cuyo caso el desequilibrio viene por un exceso de oferta⁴⁵.

⁴⁴ Avances tecnológicos o en la democratización del acceso a tecnología digital y de comunicación provocarán alza de precios en minerales estratégicos implicados en la fabricación de productos tecnológicos, por ejemplo. El desarrollo de la industria siderúrgica y metalúrgica al servicio de una expansión de la construcción civil, por ejemplo, ayudará a que el precio del aluminio o del hierro se revalorice. Este ha sido, precisamente, uno de los hechos sobresalientes de los inicios del siglo XXI y que ha contribuido a la actual onda expansiva extractiva en América Latina: el aumento del consumo y de la construcción civil en países emergentes y en los principales centros económicos, a pesar de la crisis mundial identificada a partir de 2008.

⁴⁵ Pensemos por ejemplo en la caída del precio del petróleo en los últimos meses de 2014 y primeros de 2015. Especialistas lo acusaron al exceso de producción en los países petroleros. En países cuya estructura productiva está marcada principalmente por el petróleo, con poco nivel de diversificación, como sería el caso de Venezuela, hay una exigencia de ejercicio diplomático para mantener el equilibrio entre la demanda, la oferta y la incidencia política en el comportamiento de los precios.

- Por último, un tercer factor que puede disparar un nuevo ciclo expansivo extractivista es el descubrimiento de nuevos yacimientos de recursos estratégicos en lugares donde se pensaba que ya se habían agotado o en los que hasta ahora no se habían desarrollado procesos sistematizados de localización de recursos. Este factor es clave para las empresas y para los Estados. De hecho, unos y otros dedican permanentemente recursos especializados a la búsqueda de nuevos manantiales de recursos no renovables, principalmente aquellos que se encuentran en el subsuelo. Las previsiones económicas de la empresa y del Estado se reajustan a las nuevas previsiones⁴⁶.

Cabe destacar que la búsqueda de nuevos yacimientos, es una cuestión clave en el funcionamiento de la industria extractiva. Prueba de ello, como veremos en otros capítulos de este trabajo, es que algunas de las principales divergencias entre el Estado y las empresas del sector a la hora de avanzar en reformas de los marcos normativos reside, precisamente, en el control de la actividad de monitoreo.

Este conjunto de desencadenantes que hemos agrupado en tres fenómenos - demanda, precios y nuevos yacimientos - están estrechamente inter-relacionados y son inter-dependientes. Cuando entran en acción pueden iniciar, o mantener por más tiempo del previsto inicialmente, un período extractivo-exportador expansionista. Habrá un aumento de la inversión de empresas, nacionales y transnacionales, y se implementarán mecanismos de planificación de políticas de transporte, energía y comunicación.

Del mismo modo, el declive de un ciclo expansivo se debe a la inversión de estos factores. Si hubiese una caída de la demanda se frenará la dinámica extractiva. Si lo que ocurre es una caída de los precios, igualmente, reducirá las condiciones de competitividad y el interés del capital extractivo en determinados territorios.

En relación a los territorios-yacimiento, podemos encontrar dos situaciones que activan o desactivan un ciclo expansivo:

- a) En la primera, puede darse un agotamiento de los recursos explotados, principalmente cuando estos no eran renovables - como es el caso de hidrocarburos o minerales - o cuando el ritmo de explotación ha sido superior al ritmo necesario de regeneración de la materia. Este agotamiento de recursos puede haber sido previsto previamente, de modo que muchos emprendimientos extractivos conocen a priori el tiempo de vida que la explotación de ese producto va a tener en esa determinada región. En otros casos, el agotamiento de los recursos acontece mucho antes de lo previsto por el proyecto inicial. En este caso, puede que hubiese errores graves en los estudios previos que se realizaron para justificar la empresa extractiva;

⁴⁶ Pensemos, por ejemplo, en los importantes descubrimientos de gas obtenidos por la empresa Repsol YPF en la región del Bloque 57, en la Amazonia peruana, dentro del campo conocido como Kinteroni, ya explotado por la empresa; o los descubrimientos de petróleo en el fondo marino de aguas brasileñas en los últimos años conocidos como Pré-sal, a partir de los cuales se generaron graves debates en el Congreso Nacional y en la sociedad sobre el uso de esos recursos, tan estratosféricos como “imprevistos”.

o, como ya apuntamos anteriormente, puede que el ritmo extractivo haya sido mucho mayor del que sería sustentable.

- b) La segunda situación es que se producen descubrimientos de nuevos yacimientos en otros lugares con mejores condiciones de extracción, provocando que se cierre un ciclo expansivo en un lugar para abrirlo en otro. Este fue uno de los motivos del declive de la extracción del caucho en la Amazonia brasileña.

Otra de las condiciones o características de la economía extractivo-exportadora sería su condición centrípeta y poco sinérgica. Es decir, la instalación en una determinada región de proyectos extractivos de minerales, hidrocarburos o monocultivos para exportación obligaría, normalmente, a que los otros sectores socioeconómicos se orienten hacia estas actividades estructurantes.

Algunos de los movimientos que pueden observarse en una región donde llega un emprendimiento extractivo hacen referencia a las políticas habitacionales o de transporte, que pueden seguir las dinámicas espaciales de los emprendimientos extractivos, construyendo núcleos habitacionales próximos a los locales de operación y transformando sustancialmente los centros urbanos de la zona. La oferta de formación profesional y universitaria en la región se direccionará, normalmente, a los sectores tecnológicos relacionados directamente con el emprendimiento, en la perspectiva de que éste tendrá la capacidad de estructurar la economía regional y de “fijar” a los más jóvenes en el territorio, ofreciéndoles una salida laboral. El sector comercial y de servicios se reestructurará para poder atender con calidad la demanda del sector extractivo (maquinaria, vehículos de transporte, insumos, ...) que se convertirá en ese período en el principal y más dinámico sector económico.

La Administración Local deberá reajustar su composición, creando secretarías o departamentos especiales para atender su papel público en la regulación del sector minero, petrolero o de agroexportación. Esto atraerá técnicos especializados que ocuparán plazas de funcionariado público. La propia Banca verá en estos sectores en expansión nuevos campos crediticios o de otros productos financieros.

En definitiva, la empresa extractiva reúne a su alrededor y en función de ella a los principales sectores socioeconómicos de la región. Sin embargo, ella no consigue generar, por sí misma, condiciones estables de crecimiento o de bienestar en las regiones donde se encuentran los territorios de extracción. Es decir, tiene poca capacidad sinérgica, no contribuye a diversificar la matriz económica de una región.

La combinación de estas dos condiciones – naturaleza centrípeta y poco sinérgica – pueden resultar fatales al término del ciclo expansivo. Cuando el sector entra en recesión o las inversiones se dirigen hacia otro lugar, el escenario resultante es muy complejo. Una economía poco diversificada; un sector comercial y de servicios que necesita urgentemente reconvertirse; una Administración Pública poco preparada;

proyectos de infraestructura que se tornan obsoletos rápidamente; núcleos urbanos con grande concentración de población; y pasivos ambientales extraordinarios.

Estos argumentos son normalmente utilizados para caracterizar los emprendimientos extractivos como propios de una economía de enclave, concepto que ya fue empleado por los teóricos de la dependencia en la década de 70⁴⁷ y que ha acompañado hasta hoy al análisis de la economía extractivo-exportadora. “Os enclaves econômicos seriam, portanto, núcleos de atividades primárias controladas de forma direta pelo exterior” (Nunes y Abreu: 2007: 51). Así lo define también Maristella Svampa, que asocia estos proyectos a una lógica colonial, generando escasos encadenamientos productivos endógenos y una fragmentación social y regional relevante (2012: 35). Si hacia fuera, las empresas establecen alianzas con instituciones, administraciones o Universidades, ofreciendo una imagen de empresa responsable, hacia dentro, en su relación con las comunidades, se convierten en una especie de *actor social total* (2008:19). Disipan los impactos sociales y ambientales que generan con estrategias de negociación desigual por la cual asumen responsabilidades que corresponden al terreno de las políticas públicas de los Estados: educación, atención sanitaria o equipamientos sociales.

Luiz J. Wanderley afirma que las regiones mineras se vuelven rehenes de las empresas y están hipotecadas al declive una vez que el mineral se agota “já que não há políticas preventivas quanto ao fim da mineração. Com o fim dessa atividade comercial muitas localidades se tornam cidades fantasmas (...)”⁴⁸.

Otros autores (Nunes Coelho *et al.*, 2007; Mathis *et al.*, 1997) proponen otro abordaje teórico sobre las llamadas economías de enclave, tomando como ejemplo el caso de la minería industrial en la Amazonia. Coinciden estos autores en la idea del carácter cíclico de este tipo de economía: “a efemeridade dos processos extrativos (...) implicaram freqüentemente na quase sempre baixa relação entre extração de recursos naturais e desenvolvimento industrial regional ou localmente auto-sustentado” (2011: 32). Sin embargo, creen que el concepto de enclave no da cuenta de la complejidad de las transformaciones espaciales que el emprendimiento extractivo deja instaladas en el local.

En principio, la idea de enclave o “provincia de sentido” (Mathis *et al.*, 1997) describiría un proceso económico hermético y aislado, gobernado por lógicas ajenas al territorio y sin ninguna vinculación con la economía local. Estos autores argumentan que la incorporación de la minería extrapoló la naturaleza de aislamiento del enclave y trajo consigo profundos cambios sociales y estructurales que se quedaron instalados y aún

⁴⁷ Para análisis del concepto de “enclave externo” en la teoría de la dependencia, ver: Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, E. (1970). *Dependência e desenvolvimento na América Latina. Ensaio de interpretação sociológica*. Rio de Janeiro: Editora Guanabara.

⁴⁸ Entrevista al geógrafo Luiz Jardim de Moraes Wanderley, en <<http://amazonia.org.br/2012/10/minera%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-alvo-do-mercado-especulativo-entrevista-especial-com-luiz-jardim/>>. Acceso 3/10/2012.

están en curso en la Amazonia. La configuración de polos de crecimiento o de lo que Luis Tapia denomina “aglomerados sinérgicos” (Tapia, 2004: 30) tienen la capacidad de re-configurar y condicionar el desarrollo histórico-económico-social de un territorio de modo permanente, aunque sea de un modo desarticulador o generador de dependencias. Lo cierto es que sus impactos y los recursos e infraestructuras que invierte permanecen en el territorio después del declive de la onda expansiva y son parte de las nuevas condiciones socio-espaciales y socio-económicas del lugar.

En este intento de nuevo abordaje teórico del extractivismo-exportador y, particularmente, la minería, Nunes Coelho y Monteiro proponen retomar la teoría de los sistemas complejos y dinámicos “lejos del equilibrio”. Dicen los autores (2011: 53) que un sistema cuenta con algunas determinaciones, pero que éstas no lo convierten en previsible. Aproximándose a la idea de Milton Santos sobre las totalidades en permanente transformación, Nunes y Monteiro describen cómo en un sistema la estructura funciona como un imán en la trayectoria del conjunto. Pero la estructura puede cambiar; el surgimiento de un nuevo elemento estructurante – como puede ser un proyecto minero de gran escala – transforma la trayectoria del sistema, funcionando como “uma força matriz para a acumulação de capital e como fonte de reestruturação de formações sociais”.

Según los autores, la minería en la Amazonia contribuyó a ampliar el escenario de desigualdad económica y política, alimentó la expansión de la ocupación en las regiones de interior llevando hasta estas zonas los problemas de salud y educación procedentes de los núcleos urbanos. Al mismo tiempo, atrajo nuevos objetos técnicos - puertos e hidroeléctricas - que funcionaron como vía de exportación y, al mismo tiempo, de importación. Durante una determinada época, la actividad minera generó ingresos económicos a los Estados amazónicos en Brasil y contribuyó, finalmente, a cambiar la economía regional (2007: 31). Ello probaría que no se trata de una economía de enclave, en el sentido de “economías separadas das economías locais” (2007: 50) sino que sus impactos permanecieron después de la actividad pues contribuyeron a re-significar social y territorialmente la Amazonia.

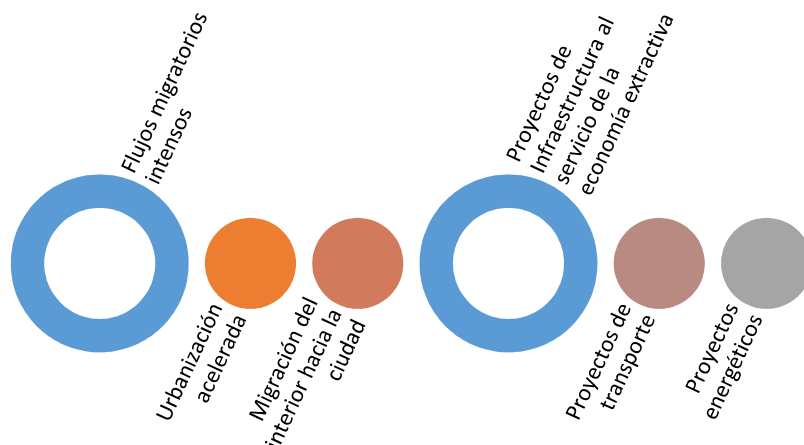
En el nivel local, la instalación de operaciones de extracción minera o de hidrocarburos, por ejemplo, o la ocupación de extensas áreas superficiales para emprendimientos de monocultivo para exportación, cada una de ellas en su especificidad, ocasionan transformaciones sociales, físicas, ambientales, económicas y culturales que afectan irreversiblemente los territorios. Estos emprendimientos, normalmente, vienen acompañados de algunas dinámicas como:

- Flujos migratorios, más o menos planificados, hacia el lugar donde se expande la acción extractiva. Estos flujos responden a expectativas de trabajo y de cambios de calidad de vida, dos fotografías frecuentemente utilizadas para fundamentar la actividad extractiva en el territorio.

- Estos flujos migratorios producirán a corto o medio plazo procesos complejos y acelerados de urbanización. La nueva red urbana incluirá desde los núcleos creados para acoger a los trabajadores de la nueva industria, las pequeñas ciudades de interior con los servicios mínimos y los puntos de abastecimiento y, finalmente, un número pequeño de grandes ciudades que atraerán en sí la mayor parte de las inversiones y de los recursos.
- El crecimiento vertiginoso de estas grandes ciudades también atraerá buena parte de la población del interior, liberando así extensos territorios para la expansión extractiva. Al mismo tiempo, difícilmente será un crecimiento planificado, generando problemáticas agudas en lo que se refiere a políticas fundamentales de vivienda, educación, salud, saneamiento básico, transporte público o empleo. Este fenómeno ayudará al aumento de problemas socio-urbanos como el aumento de la inseguridad o los problemas ambientales derivados de la sobreocupación.
- Los poderes locales, con apoyo de las administraciones de escala superior, promoverán e implementarán proyectos de infraestructura principalmente en los sectores de transporte y energía, dos de las principales condiciones del extractivismo exportador. Nuevas carreteras o reformas de los antiguos caminos, puertos, aeropuertos o ferrovías serán construidas para facilitar el acceso de la industria extractiva a los recursos y la facilidad de transportar hacia fuera el recurso extraído.
- Al mismo tiempo, se buscarán vías para aumentar la oferta energética a través del incremento de termoeléctricas, la proyección de centrales hidroeléctricas o la expansión de líneas de transmisión. Estas infraestructuras mueven, por si solas, importantes volúmenes de recursos (económicos, técnicos, humanos)⁴⁹.

Todos estos procesos terminan configurando y significando el espacio de un modo determinante. Encierran en sí complejos procesos socioculturales causados por la inmigración inicial, con flujos a veces muy superiores a lo que el territorio está preparado para acoger, y por la migración interna hacia núcleos urbanos. Estos cambios culturales llevan consigo, igualmente, profundas transformaciones en el uso del territorio, en el nivel tecnológico, en la convivencia con el ambiente y en la modificación física de éste. Si de un lado aumentan los conflictos por el control territorial en el interior, por otro lado se recrudecen también las condiciones espaciales en las ciudades. Las nuevas infraestructuras de transporte permitirán nuevas dinámicas de movilidad y una mayor interacción entre los núcleos poblacionales, revestidas en todo caso de las condiciones de desigualdad inherentes a los procesos acelerados de transformación social y espacial.

⁴⁹ Como veremos en los capítulos 6 y 7, encontramos numerosos ejemplos en los proyectos de infraestructura implementados por el Gobierno militar en Brasil durante la década de 70, particularmente en la región amazónica. Obras como la red viaria - con protagonismo para la carretera conocida como Transamazónica - o de energía - hidroeléctricas de Tucuruí o Balbina - movilizaron cientos de miles de personas que dejaron sus tierras en regiones del nordeste del país para emprender nuevos proyectos de vida en la región amazónica, al calor del trabajo y la tierra prometida.



Analistas y representantes de organizaciones sociales alertan hacia una cuestión que no es trivial. Las infraestructuras originadas en la onda expansiva extractivista, sean de transporte, energéticas o habitacionales, no benefician directamente a las comunidades más próximas o más afectadas por los emprendimientos extractivos. Así, podemos encontrar regiones donde nuevas carreteras han atraído importantes capitales con el objetivo de facilitar las vías de comercialización hacia fuera, mientras que las carreteras comarcales y secundarias, fundamentales para la comercialización local de productos comunitarios, permanecen en el abandono. Más trágico aún es el caso de comunidades cuyo territorio fue irreversiblemente afectado por la construcción de una mega-hidroeléctrica a menos de 10 Km y después de 20 años permanecen sin suministro eléctrico⁵⁰.

En definitiva, nos encontramos delante de una economía que, por su carácter cíclico y centrípeto, genera sin lugar a dudas transformaciones profundas en la región donde se instala sin que estos cambios signifiquen, en sí mismos, posibilidades de una economía más diversificada a la conclusión de la actividad extractiva.

3.3.3. Extractivismo, conflictos socioambientales y re-configuración territorial

La economía extractivo-exportadora va asociada a una intensa y creciente conflictividad socioambiental caracterizada por la profundización de la dinámica de acumulación por desposesión de la que hablaba David Harvey. Se traduce en el despojo de tierras, recursos y territorios (Composto y Navarro, 2014; Svampa, 2012: 32) y tienen “por

⁵⁰ Intervención de una persona que trabajó en la construcción de la Hidroeléctrica de Tucuruí y recientemente volvió al local. Fue recogida por el autor en el Cuaderno de Campo durante un Encuentro de sensibilización sobre la Hidroeléctrica de Bem Querer, que tuvo lugar en enero de 2014 en la ciudad de Iracema/Roraima, Brasil.

protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas” (Svampa, 2012: 39). El despojo, en muchas ocasiones, sigue siendo “un punto ciego, no conceptualizable” (2012: 37); muchas veces invisible y negado.

Si la desposesión y despojo de las tierras se expresa como una lucha por el control de los bienes naturales y de los sentidos asignados, en el fondo es también una condición para la reproducción del modelo capitalista y sus relaciones sociales (Composto y Navarro, 2014: 34 y 35). Según Porto-Gonçalves, con la desposesión y el acaparamiento de tierras se separa a los hombres y mujeres de sus condiciones materiales de vida pero también del carácter comunitario de su modo de vida y de producción; de ese modo, “com homens e mulheres individualizados de um lado, e com a natureza sem gente de outro, uns e outros podem se tornar em mercadorias” (2012: 34).

En nuestro trabajo, venimos hablando de conflictos socioambientales *con base territorial* porque queremos enfatizar que estamos hablando de conflictos que conllevan una disputa por el control del territorio y el acceso, tenencia y usufructo de los bienes naturales en él existentes (Porto-Gonçalves, 2012: 34)⁵¹. No es posible separar la disputa por el acceso para explotación de los bienes naturales de lo que es una disputa por el control del territorio, pues ambas condiciones van estrechamente unidas (Wanderley, 2008: 3).

Para Maristella Svampa (2012: 39) hay tres características fundamentales en este tipo de conflictos: el acceso y control de los bienes naturales y el territorio; la existencia de intereses y valores divergentes en torno de ellos; y el contexto de una gran asimetría de poder para gestionar estas divergencias.

“El capitalismo necesita nuevos territorios y acelera los tiempos de producción” (Martínez Alier, 2005: 268). La cuestión es que la intensificación, en ritmo y volumen, de las actividades extractivo-exportadoras sólo es posible si se consigue el control y apropiación de los territorios, sea para asegurar el uso de su suelo y subsuelo o sea para garantizar vías de transporte o de producción y distribución energética necesarias al emprendimiento extractivo. Los territorios pasan a ser interés principal para el capital extractivo y también para los Estados, que ven en la actividad extractiva una fuente expansiva de ingresos. En esta confluencia reside la base para una alianza de intereses entre ambos actores.

El conflicto es también el espacio donde se configuran los procesos de resistencia local y donde se enuncia la crítica más radical al modelo global. “Los sujetos se constituyen a través del aprendizaje de la lucha” (Ceceña, 2008: 16). En la misma línea, Wanderley afirma que el grupo se reafirma e intensifica su identidad común en un contexto de

⁵¹ Con ello queremos acotar el tipo de conflictos del que estamos hablando, para diferenciarlos de otros conflictos socioambientales que expresan igualmente la crisis ecológica-civilizacional que estamos viviendo: contaminación en grandes núcleos urbanos, acumulación de residuos o consecuencias del cambio climático en zonas costeras, entre muchos otros.

conflicto con un actor externo. “Os vínculos identitários com o espaço, sendo estes a identidade territorial, se apresentam como uma importante territorialidade para manter o controle sobre territórios usados e significados” (Wanderley, 2008: 14).

Es en el conflicto donde buscamos también, dice Ana Esther Ceceña, las explicaciones más trascendentales y esenciales, porque es el terreno del ¡Ya basta!. “Quizá (...) porque la desposesión alcanza ya los niveles de la esencialidad de la vida, las resistencias de este inicio del siglo XXI se erigen desde las memorias profundas que permiten vislumbrar mundos organizados y concebidos desde perspectivas no capitalistas” (Ceceña, 2008: 26). El conflicto se convierte en el espacio donde las resistencias se convierten en “saberes, en políticas, en elementos significantes de las estrategias y los sentidos de la vida (Ceceña, 2008: 18); el lugar donde emergen nuevas lógicas en el contacto con epistemes diferentes y, a veces, antagónicas (Porto-Gonçalves, 2008: 47).

Dice Maristella Svampa que no es extraño que en el escenario de re-primarización de la economía que vive América Latina en los inicios de siglo XXI, y al que le dedicamos nuestro Capítulo 5, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra de la mano de los movimientos indígenas y campesinos a la vez que emergen nuevas formas de participación ciudadana preocupadas por la cuestión ambiental. Todo ello “va diseñando una nueva cartografía de las resistencias, al tiempo que coloca en el centro de la agenda política la disputa por lo que se entiende como ‘desarrollo sustentable’” (Svampa, 2008: 5).

En el caso de la minería de gran escala, la *des*-territorialización forzada y compulsoria es un proceso común a la actividad extractiva; “a simples idealização no papel de um grande projeto econômico inicia transformações no espaço pré-existente (...) Quando se territorializam, isto é, ao se concretizarem de maneira material e territorial, os projetos suscitam conflitos” (Wanderley 2008: 5). Según el mismo autor, el emprendimiento minero en sí significa una territorialización de objetos, que van desde la cantera de la mina – la cual debe ser vedada al acceso de otros -, los campamentos o pequeños núcleos urbanos creados en las proximidades, las vías de transporte (carreteras, ferrovías, mineroductos) y todos esos nuevos objetos artificiales evidentemente representan, y exigen, un dominio pleno sobre el territorio y una cierta racionalidad en el ordenamiento territorial que garantice el desarrollo del proyecto (2008: 16).

La cuestión de la minería implica siempre una cuestión de conflicto territorial (Nunes y Monteiro, 2007: 31) que inicia ya con los mecanismos de concesión, por los cuales el Estado cede derechos a una empresa para los estudios de viabilidad o para la propia explotación. Se trata de procesos políticos, y como tales, sujetos a manipulación y a alianzas entre Estado y empresas. Las cuestiones socioambientales que pudieran suponer un impedimento al proyecto, en lugar de concebirse como cuestiones fundamentales, se convierten en fases de un procedimiento marcado que necesitan ser

superadas con la mayor celeridad posible⁵². Frente a eso, la lucha indígena cuestiona desde la base la propia competencia del Estado de conceder el uso sobre la tierra (Leff, 2004: 435).

La minería de pequeña escala y la minería ilegal también intervienen en la configuración territorial, aunque sea con unas expresiones diferentes. El garimpo supone una forma de ocupación del territorio que establece nuevas dinámicas que afectan los sistemas de vida de las comunidades locales. Los impactos sociales y ambientales que ocasiona generan conflictos con las comunidades o terminan exigiendo el desplazamiento de éstas hacia lugares más seguros.

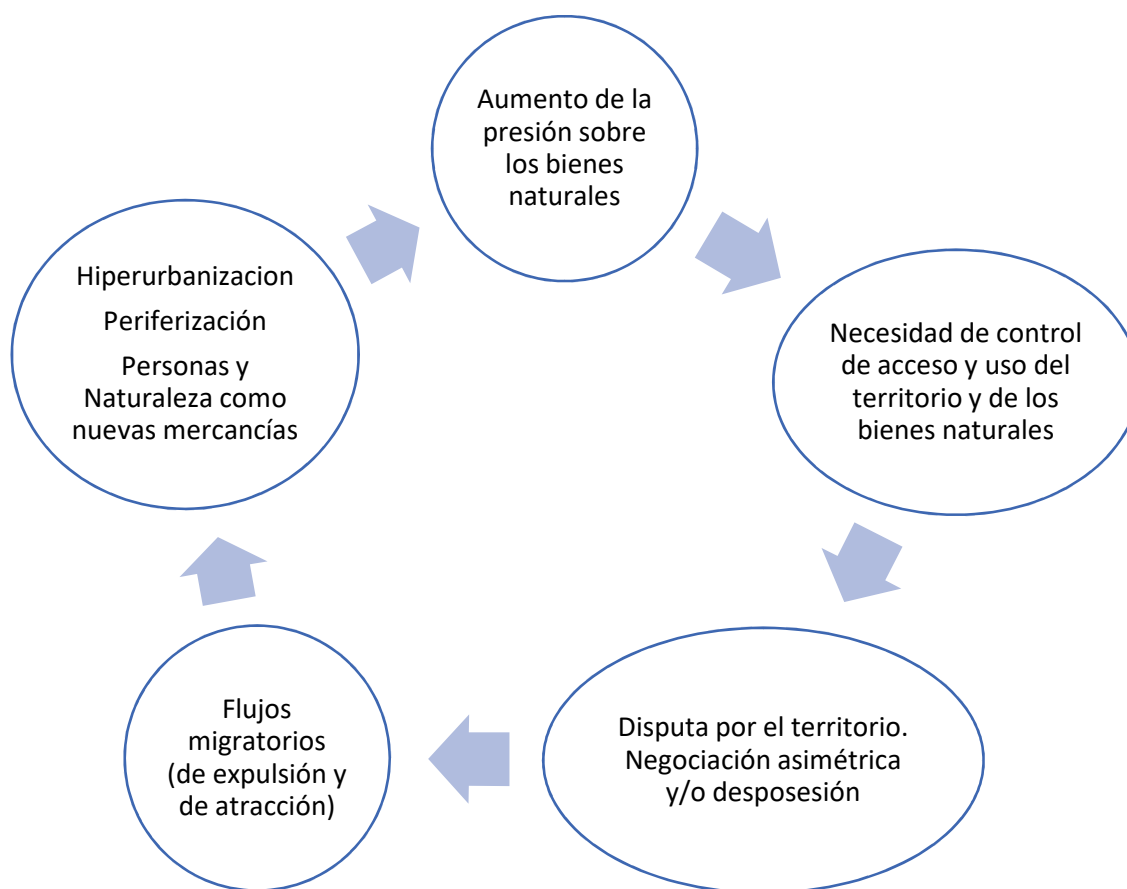
A pesar de que su modo de explotación no necesita de un equipo muy numeroso de personas en cada local de explotación, esto no significa que estemos hablando de un frente de ocupación pequeño. Como veremos en la segunda parte de nuestro trabajo, en un mismo territorio pueden adentrarse miles de personas, distribuidas en diversos campamentos a lo largo de las vías fluviales o en las zonas de tierra firme. Una ocupación informal y diseminada de este volumen termina ejerciendo un impacto territorial muy severo, aunque los campamentos donde se alojen, considerados individualmente, sean aparentemente improvisados y rudimentarios.

Entendemos, por fin, que la dinámica de acumulación por desposesión que es inherente a la economía extractivo-exportadora, y que la conecta en términos locales y globales a la crisis socioambiental, opera como un ciclo que reflejamos en el gráfico siguiente:

⁵² Eso puede desprenderse, al menos, de los cambios que se introducen en los marcos legislativos, como tendremos oportunidad de apreciar en la segunda parte de este trabajo.

Cuadro 4. Ciclo de acumulación por desposesión en la economía extractivo-exportadora

Elaboración por el autor



El ciclo comienza con la constatación de que el actual modelo económico exige una mayor presión sobre los bienes naturales, en diversidad y volumen de explotación, que se expresa en la expansión de la economía extractivo-exportadora.

La segunda fase del ciclo es representada por el hecho de que la extracción de bienes naturales requiere del control, acceso y dominio de estos bienes y de los territorios donde se encuentran, sea para uso directo del suelo y subsuelo o como espacio de flujos, transporte y garantías de agua y energía.

De este fenómeno, se sigue la tercera fase, caracterizada por la presión ejercida sobre las comunidades locales que habitan y significan los lugares. Se enfrentan intereses divergentes y lógicas de sentido muy diferentes, como venimos describiendo, y surge lo que hemos denominado en nuestro trabajo como la disputa por el territorio. Este litigio, como veremos más adelante, puede tomar diversas formas que, en términos generales, las agregamos en tres posibilidades: la resistencia de las comunidades locales y la movilización por la defensa, protección y exigibilidad de derechos; la negociación asimétrica entre Estado y/o empresa y la comunidad local; o la expulsión, desplazamiento y desposesión de la comunidad. “O debate em torno do território se dá,

portanto, imerso num tenso e intenso processo expropriatório, desterritorializador” (Porto-Gonçalves, 2012: 33).

Al despojo le siguen normalmente movimientos importantes de población, que es la cuarta fase. Prestamos atención, al menos, a dos fenómenos diversos de movilidad humana que pueden darse al mismo tiempo:

- Salida de las familias y comunidades de los territorios que habitan, “en nombre de la expansión de las ‘fronteras’” (Svampa, 2008: 8). Se pueden dar salidas con carácter colectivo, como el caso de un desplazamiento de la comunidad hacia otro lugar; o, lo que es más común, salidas más desagregadas hacia los medios y grandes centros urbanos. Estos desplazamientos pueden darse como resultado de la expulsión directa, de la imposibilidad de mantener sus sistemas de vida en el mismo lugar o por empuje de las propias empresas o del propio Estado con sus políticas compensatorias⁵³;
- Llegada al territorio, en un período de tiempo muy corto, de grandes contingentes de trabajadores procedentes de otras regiones como ya hemos analizado anteriormente, como ya hemos indicado anteriormente. Al tratarse de empleos de corto o medio plazo, pasado este tiempo una parte de este contingente de trabajadores puede retornar a su lugar de origen mientras que otros pueden establecerse en el territorio o dispersarse por la región próxima.

En algunos casos, las estrategias de resistencia y exigibilidad de derechos por parte de las comunidades locales puede incorporar la posibilidad del reasentamiento del grupo en otro local debido a los impactos ambientales que el emprendimiento económico ya ha dejado en el territorio – y que dificultan una mínima calidad de vida para los moradores – o debido a la dificultad de paralizar proyectos extractivos macizos ya implantados en el local. En estos casos, la comunidad transforma su lucha hacia la exigibilidad de derechos en ese reasentamiento, reivindicando titulación de tierras en otro lugar y apoyo de políticas públicas para recomenzar, sin renunciar en ningún momento a la denuncia de la dinámica de expolio de la economía extractivo-exportadora⁵⁴.

Por último, el ciclo se cierra con un proceso caracterizado por la hiperurbanización y periferización de los principales centros urbanos de la región, que terminan acogiendo buena parte de esos movimientos de población y lo hacen sin contar con estructuras

⁵³ Muchas de las políticas indemnizatorias que los Estados y empresas asumen consisten en la dotación de un pequeño capital a la familia por la desapropiación de su vivienda, en términos muy precarios que no les permitirán crear las condiciones de estabilidad social en las ciudades donde son desplazados.

⁵⁴ Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Piquiá de Baixo, en el Estado de Maranhão/Brasil, afectada durante años por los impactos del complejo minero-industrial de Carajás. <http://www.piquiadebaixo.justicanostrilhos.org/>.

mínimas para ofrecer condiciones de empleo, vivienda, salud, educación o saneamiento básico en los cinturones que se van creando.

El crecimiento urbano es contabilizado, en muchas ocasiones, como un indicador por sí mismo de desarrollo regional. Sin embargo, la hiperurbanización acelerada se caracteriza por condiciones de vida en las periferias que no garantizan mínimamente los derechos humanos fundamentales. “As dinâmicas do crescimento econômico geram um processo de exclusão territorial e social, levando à periferização de grande massa de trabalhadores nas cidades; e no campo impulsiona ao êxodo rural para os grandes centros urbanos” (Moraes Muniz, 2009: 188).

Al mismo tiempo, se produce una urbanización del interior, con la creación de pequeños núcleos poblacionales que agrupan otra parte de la población en movimiento, dedicándolos fundamentalmente a tareas nuevas de funcionariado administrativo o al comercio regional destinado a suministrar las zonas explotadas.

3.4. Actores, estrategias y narrativas en la economía extractivista

La economía extractivo-exportadora, como economía de escala, incorpora una compleja red de actores en la cadena, la cual trae inscrita en sí misma la inequidad y desigualdad en las relaciones y en el reparto de los beneficios del proceso.

El papel de la comunidad local es cada vez menor y más subordinado; incluso cuando consiguen permanecer en el local, sus mecanismos de organización social y productiva se ven alterados, mientras algunos individuos se incorporan al proyecto extractivo como mano de obra precaria o con bajos salarios y condiciones de temporalidad.

Más allá de la comunidad local es donde surgen los otros actores del proceso: nuevos perfiles profesionales especializados; redes comerciales de suministro de equipamientos; empresas constructoras responsables por la apertura de caminos, carreteras, hidrovías, puertos, aeropuertos o canteras de obra; usinas, refinerías, hornos y fábricas; redes de transporte; agentes comerciales intermediarios con las principales redes de distribución; grupos empresariales nacionales y transnacionales que son los que terminan apropiándose del proceso completo, desde la extracción hasta la venta del producto refinado en los lugares más distantes.

Acogemos la agrupación de actores que proponen Acosta y Machado (2012) en tres principales agencias - las compañías extractivas⁵⁵, el Estado⁵⁶ y las comunidades locales - aunque somos conscientes de que la densidad de la red actoral es mayor.

3.4.1. De la legitimidad a la extrahección: la comunión de intereses entre lo público-instrumental y lo privado

Es frecuente encontrar una comunión de intereses entre el Estado y las empresas, pues ambos actores tienen interés explícito en el desarrollo de la actividad extractiva. Es evidente que también se producen divergencias entre ellos en cuanto a los mejores procedimientos a ser utilizados, las condiciones de concesión de derecho extractivo o el volumen del beneficio que debería quedar en cada uno de los lados. Del mismo modo, la coincidencia en los intereses podrá variar si nos referimos a pequeñas o grandes empresas, a empresas nacionales o transnacionales e, incluso, a consorcios con participación o no de empresas estatales. Pero por encima de estas diferencias, queremos colocar en destaque la coincidencia fundamental sobre la efectiva realización de la actividad extractiva.

Esta comunión de intereses se expresa, estructuralmente, de diversos modos. Uno de ellos es la unidad de narrativas y semánticas que ambos actores elaboran y pretenden comunicar a la sociedad.

Por ejemplo, en referencia a la concepción de los territorios, es común que ambas agencias coincidan en las imágenes que proyectan sobre los espacios que precisan ocupar para la actividad económica. Una de las estrategias es la de inscribir en la opinión pública la imagen de territorios vacíos o sub-habitados. Territorios con una baja densidad de población y con una riqueza importante en bienes naturales serían susceptibles de ser ocupados económicamente. “La expansión de nuevos emprendimientos productivos fue instalando la idea de que existen territorios vacíos o “socialmente vaciables”, con el fin de poner bajo el control de las grandes empresas una porción de los bienes naturales presentes en dichos territorios” (Svampa, 2008: 8). Es lo que se ha venido a denominar como territorios-sacrificio.

En el caso que nos ocupa de la minería, el relato del desarrollo minero representa una perspectiva de territorialidad que le concede al emprendimiento minero la habilidad y capacidad para dinamizar y revitalizar un lugar en oposición a lo que se transmite como la fragilidad de las territorialidades ya existentes. “El discurso (no siempre explícito) de las empresas transnacionales y los gobiernos, suele desplegar una concepción binaria

⁵⁵ Veremos más adelante que hay diversos actores incluidos, al mismo tiempo, dentro de esta categoría que describiría, fundamentalmente, al actor privado con intereses económicos en los territorios y sus bienes naturales.

⁵⁶ Del mismo modo, bajo la figura del Estado podemos encontrarnos diversos niveles administrativo-territoriales del poder público, agencias y organismos estatales o, incluso, empresas y bancos públicos implicados en el conflicto. Por tanto, bajo la categoría del actor público, el Estado, encontramos una diversidad de protagonistas, a veces enfrentados entre sí.

del territorio, sobre la base de la división viable/inviable, que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de ‘territorio eficiente’; por otro, la de ‘territorio vaciable’ o en última instancia, ‘sacrificable’” (2008: 7-8).

Esta narrativa amplía su presentación de la vulnerabilidad presente de los territorios caracterizándolos como espacios marcados por la pobreza y la exclusión social. En esos casos, la medición de las condiciones de vida en estas comunidades se realiza en función de parámetros de consumo e indicadores “estándares”, contruidos desde la perspectiva de centros urbanos. Estas imágenes que venimos enunciando de territorios vacíos, sacrificables y/o de exclusión social con escaso aprovechamiento de su potencial natural, divulgadas individualmente o asociadas entre sí, actúan con gran eficacia simbólica como legitimadores del discurso desarrollista.

Al mismo tiempo, la oposición manifiesta por comunidades locales es considerada por empresas y Estados como actitudes contrarias al imaginario del progreso y el desarrollo, inculcado eficazmente en la sociedad urbana. Ello puede generar incluso tensiones entre los diversos sectores sociales, principalmente desde la sociedad urbana hacia la sociedad del interior. La conexión entre los movimientos indígenas y campesinos y buena parte del sindicalismo urbano, por ejemplo, se convierte muchas veces en una distancia grande, lo que “reenvía también a la presencia de un fuerte imaginario desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades” (2012: 44).

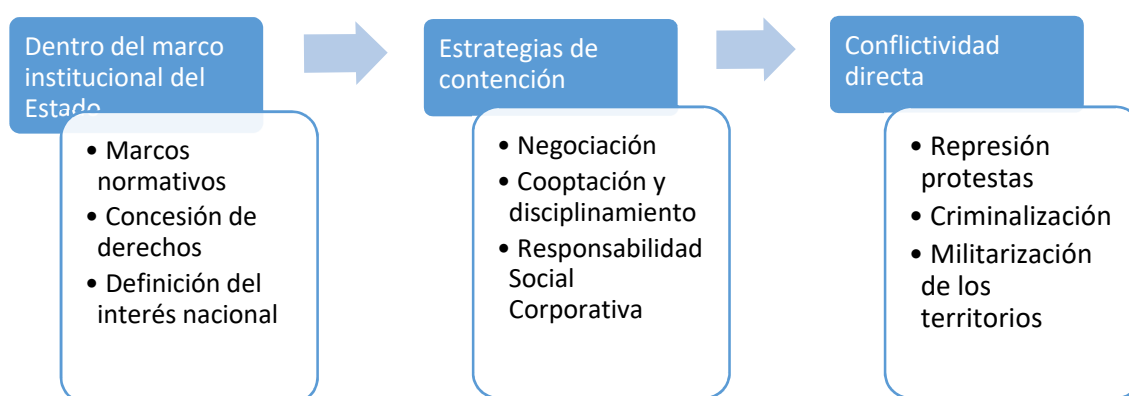
También dentro de los territorios sociales, se puede generar un escenario de divergencias entre comunidades que defienden el derecho al control sobre el territorio y aquellas otras que acogen las perspectivas de desarrollo productivo que el emprendimiento extractivo sugiere. Estas divergencias, legítimas desde una mirada inicial, pueden estar imbricadas, en realidad, dentro de la red de relaciones que Estado y/o empresas construyen en el interior de los grupos, como veremos unos párrafos más adelante cuando hablemos de las estrategias de contención empleadas por Estados y empresas.

Aparte de la acción sobre las narrativas, otro grupo de estrategias que reúne también al poder público y empresas se relaciona con las políticas de reordenamiento territorial y definición de usos del suelo, como las iniciativas conocidas de macro-zoneamiento Económico-Ecológico conducidas por las administraciones regionales o los informes elaborados para Eje de Integración y Desarrollo dentro de la iniciativa IIRSA. Estas políticas se tornan instrumentos eficaces para la incorporación de la racionalidad economicista globalizadora a la división espacial de una pequeña comarca o una región.

La planificación económico-ecológica confirma e institucionaliza en forma de políticas públicas la espacialidad productiva de un territorio en dirección al comportamiento que de él espera el conjunto de la economía-mundo. La especialización productiva del espacio se disuelve en la retórica de la “vocación regional” o las “ventajas

comparativas”, que actúan como variables independientes del proceso de desarrollo que se impone; es decir, inciden sobre las dinámicas sociales y la realidad sociocultural y no al contrario, ni siquiera en reciprocidad. Se convierten así en una expresión más de la mundialización de cada territorio en lo que Leff denomina el orden económico-ecológico globalizado (Leff, 2007: 18).

Composto y Navarro defienden que las estrategias empleadas por Estados y empresas en las economías de fuerte acento extractivo-exportador se orientan, fundamentalmente, a la desmovilización social de la protesta (2014: 58). Las autoras hablan de un “desgarramiento de los territorios” y agrupan las diversas estrategias de Estados y empresas en tres bloques.



Dentro del marco institucional del Estado, se incluyen aquí las estrategias legítimas de la legalidad institucional y del consenso. En ellas, el Estado se presenta como garante del bien común y de los intereses generales de toda la ciudadanía, dando marco legal y legitimidad a los proyectos extractivos dentro de sus políticas públicas y su aparato jurídico. Aquí caben las medidas relacionadas con la aprobación de marcos regulatorios⁵⁷, la definición de la “utilidad pública”, la concesión administrativa de permisos para exploración y explotación o la compraventa de tierras⁵⁸.

Estaríamos dentro de un espacio público y legítimo de acción, en el cual, sin embargo, las normas del mercado parecen condicionar las normas públicas, como vimos

⁵⁷ Sea sobre las actividades económicas y del capital privado, sobre las condiciones de protección y preservación ambiental, sobre el interés público o sobre los distintos regímenes de tenencia de la tierra, entre otros.

⁵⁸ Resulta evidente que el fenómeno de compra y venta de tierras, incluso con la participación garantizada de la Administración Pública, no siempre contiene las garantías mínimas de legalidad y equidad. Según Delgado Ramos, en América Latina “solo de 2008 a 2010 se realizaron acciones de compraventa de tierras –u otros tipos de acuerdos – por unos 45 millones de hectáreas a escala mundial, la gran mayoría sin un adecuado proceso de consulta a la población local (previo, informado y culturalmente adaptado) y, en el mejor de los casos, con compensaciones deleznales” (2013: 50).

anteriormente. Las empresas se limitan a cumplir las normativas básicas exigidas y legitimarse como actores económicos que traen el progreso y el desarrollo a la región.

El segundo tipo de estrategias van dirigidas a la contención del desacuerdo y la protesta y presuponen la oposición inicial de las comunidades locales al tipo de emprendimientos que se proyectan sobre sus territorios. Estas estrategias se desarrollan ya en espacios no necesariamente públicos o a través de mecanismos menos transparentes. Se trata de responder con medidas eficaces y aparentemente difusas a los procesos de resistencia social que emergen desde los territorios.

Se incluyen aquí estrategias como la cooptación de dirigentes comunitarios o el disciplinamiento. La cooptación consiste en la construcción de lealtades personales mediadas por el intercambio de favores o beneficios. Caben aquí también algunas de las iniciativas empresariales de buen relacionamiento con la comunidad o de responsabilidad social corporativa, como veremos más adelante. Es decir, empresas y Estado se alían para debilitar y fragmentar la movilización social de resistencia a través de tácticas persuasivas o de intentar incorporar a las comunidades a los beneficios que el proyecto generaría. Estas medidas a veces se formulan bajo la figura de procesos de diálogo o negociación en los cuales las desiguales cotas de poder – económico, informacional o político - juegan un papel fundamental.

Por último, nos encontramos con estrategias de conflictividad directa. Composto y Navarro incluyen aquí las figuras de la criminalización, la represión y la militarización de los territorios. “La implementación del modelo tiende, por ende, a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social. En este sentido, la megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema (...)” (Svampa, 2008: 17). Representan la peor cara del Estado y suponen el uso de la fuerza policial y militar para viabilizar los proyectos extractivos reduciendo las capacidades de resistencia activa de las comunidades locales.

Eduardo Gudynas y el CLAES proponen el concepto de *extrahección* - extraer arrancando - para definir este modo de extractivismo de apropiación violenta, que agrede explícitamente los derechos de las comunidades y los derechos de la Naturaleza. Afirmo Gudynas que la extrahección no es una consecuencia colateral sino “una condición de necesidad” para poder llevar adelante la actividad extractiva⁵⁹.

En el Capítulo 5, al analizar el fenómeno del (neo) extractivismo en América Latina durante la primera década del siglo XXI, nos preguntaremos cuál es la naturaleza del Estado que resulta de estos procesos de legitimidad, contención y extrahección.

⁵⁹ Eduardo Gudynas. Conferencia “Economía política y ecología política del extractivismo”. Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 18/04/2013. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=geAtIA4Y71M>>. Último acceso, 11/10/2014.

3.4.2. Movimientos socio-territoriales

La intensificación de los conflictos socioambientales con base territorial se ha visto acompañada en América Latina por la emergencia de nuevos actores colectivos, protagonistas del nuevo ciclo de luchas por la tierra (Porto-Gonçalves, 2012; Svampa, 2008 y 2012; Schmink y Wood, 2012). Nos referimos a pueblos indígenas, campesinos, pescadores, comunidades extractivistas o afro-descendientes, entre otros.

Afirma Porto-Gonçalves que la emergencia política de estos actores - o mejor, su retorno a la escena política - es un fenómeno imprescindible y transformador, pues son ellos los que “recolocam a ágora, isto é, o lugar da política novamente em debate” (2002: 223). Representarían, según el propio Porto-Gonçalves, la novedad protagónica que sucedió entre la Conferencia de Estocolmo, de 1972, y la Cumbre de la Tierra, de 1992 (2012: 27).

Estos grupos representan una extraordinaria diversidad étnica y social. Sin embargo, desde la perspectiva del análisis de los conflictos socioambientales con base territorial, es posible identificar elementos comunes en sus luchas que, a su vez, los diferencian de otros movimientos convencionales. Las nuevas reivindicaciones territoriales de pueblos indígenas, quilombolas y otras comunidades representan “uma resposta a novas fronteiras em expansão, respostas que vão muito além de uma mera reação mecânica para incluir um conjunto de fatores próprios da nossa época” (2002a; 12). Este espacio de confluencia ha permitido, en muchos casos, que grupos diversos que conviven un mismo espacio de contigüidad puedan establecer entre ellos alianzas estratégicas.

Desde la Ecología Política, Maristella Svampa (2008) ha propuesto una serie de elementos que son comunes a los diversos grupos sociales que mantienen luchas locales implicadas en conflictos socioambientales.



- 1) La clave de la movilización es el territorio “concebido doblemente como hábitat y comunidad de vida”. A partir del territorio configuran su agenda de reivindicación de los derechos colectivos y cuestionan los pilares de la racionalidad economicista, “incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo monocultural y destructivo, y la exigencia de la desmercantilización de los llamados ‘bienes comunes’” (2008: 11)⁶⁰.
- 2) Adoptan estrategias articuladas que combinan la acción directa “no convencional y disruptiva” en el territorio con iniciativas de carácter institucional. Es común encontrar movilizaciones de la comunidad en su propio territorio manifestando su oposición a la llegada del proyecto económico a través de cortes de carretera u ocupaciones de canteras de obras, por ejemplo. Estas acciones en la base, posibilitadas por un intenso sentido de solidaridad y de organización comunitaria, pueden suceder al mismo tiempo que otros dirigentes de la misma comunidad se manifiestan en el centro urbano más próximo, para dotar de visibilidad a la reivindicación, o que un pequeño equipo de líderes comunitarios mantiene reuniones con autoridades del Estado o representantes de la empresa o el emprendedor. Se trata, por tanto, de estrategias articuladas entre sí y operando al

⁶⁰ La expansión de las actividades extractivo-exportadoras se ha convertido en el escenario propicio para que estos diversos actores colectivos activen nuevas dinámicas de articulación social y política. Es el caso de los diversos movimientos socio-territoriales que se articulan en el Movimento Xingu Vivo para Sempre, <<http://www.xinguvivo.org.br/>> que ha protagonizado la oposición al proyecto hidroeléctrico de Belo Monte del gobierno brasileño. Para Paul Little (2012), es esta identificación con el territorio que habitan y la centralidad de la cuestión territorial en sus luchas locales y en su fortalecimiento identitario lo que nos permite hablar de un actor político colectivo.

mismo tiempo en diversas escalas; abren varios frentes de reacción, desde el frente negociador o de diálogo político hasta el de defensa física del territorio. “Hoje a luta indígena é com força popular na estrada, no Congresso e fazendo denúncias no Brasil e internacionalmente”⁶¹.

- 3) Desarrollan formas de deliberación y decisión que priorizan la participación de las comunidades en sistemas políticos que siguen la lógica-de- abajo-hacia-arriba. Los temas y las estrategias son discutidos inicialmente en las pequeñas comunidades, cuyas deliberaciones serán transmitidas a niveles de articulación más amplios a través de sus representantes⁶².
- 4) La concreción de un horizonte político actúa como motor de la movilización social. Ese horizonte común pasa por adquirir mayores niveles de autonomía y autogobierno (Svampa, 2008; Porto-Gonçalves, 2008). La demanda de la autonomía se construye sobre tres ejes, a menudo superpuestos (Svampa, 2008: 15):
 - a) el eje de la memoria larga, que articula las ideas de resistencia y de derechos colectivos en la perspectiva cosmológica de los pueblos;
 - b) el eje de la memoria mediana, que expresa la crisis de representación política y la desconfianza de los pueblos hacia los modelos representativos convencionales;
 - c) y el eje de la memoria corta, vinculada al carácter antineoliberal que marcó el actual ciclo de luchas sociales en América Latina.
- 5) Multiescalaridad, que, como ya ha sido analizado anteriormente, representa un complejo entramado de relaciones por las cuales los pueblos indígenas y otros movimientos socio-territoriales encuentran alianzas en otros actores sociales en los diversos niveles local, regional, nacional o internacional.

3.4.3. Pueblos indígenas y los derechos colectivos sobre la tierra

Entre los movimientos socio-territoriales destaca la naturaleza de la movilización indígena en defensa de la tierra y de los derechos colectivos. En la segunda parte de nuestro trabajo, vamos a detenernos con mayor precisión en esta cuestión. Sin embargo, dentro de este análisis teórico sobre la actual crisis socioambiental y las resistencias sociales, nos parece oportuno apuntar ya algunos elementos de análisis relacionados con los pueblos indígenas de América Latina. Como dice Porto-Gonçalves, la lucha de estos grupos étnicos nos permiten “um novo horizonte de sentido para a vida (...) onde a cultura é politizada através da luta pelo território” (2010).

El movimiento indígena, tal y como lo conocemos actualmente, con sus fragilidades y fortalezas, se ha consolidado en el último tercio del siglo XX e inicios del siglo XXI como un actor político singularmente relevante en el continente. En este período de poco más

⁶¹ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

⁶² Algunos autores, como Svampa (2012) y también Composto y Navarro (2014), hablan del modelo de “asamblea” como uno de los ejes paradigmáticos de la forma política de estos movimientos.

de 40 años han provocado, con sus procesos propios de movilización, cambios sustanciales en las sociedades latinoamericanas y en la concepción del derecho.

Los pueblos indígenas han incidido en la mayor parte de los procesos constituyentes que los Estados latinoamericanos vivieron después de la época de los regímenes militares. El carácter de plurinacionalidad, tan caro a la concepción tradicional del Estado nacional, ha conseguido encontrar espacio en el debate político y en los marcos constituyentes de países como Bolivia o Ecuador. Aunque el nivel de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas varía en referencia a cada uno de los Estados, en términos generales no se pueden negar avances substantivos⁶³ que sólo fueron posibles por la determinación de la movilización de estos grupos a partir de sus territorios y por la compleja y densa red de alianzas que consiguieron establecer en las diversas escalas espaciales y políticas. Avances que adquieren un valor aún más extraordinario si consideramos que tuvieron que enfrentar – y aún tienen que enfrentar – intereses y resistencias de grupos tradicionales con fuerte incidencia y poder político, económico y mediático. A nivel internacional, durante las tres últimas décadas se materializó un estándar de instrumentos de derechos colectivos a los que les dedicaremos un análisis particular en el Capítulo 5.

Todos estos avances se han articulado claramente a partir de la lucha por la tierra. Si en todos los movimientos socioambientales el factor territorial ha sido la clave de movilización en los procesos de lucha, en el caso de los pueblos indígenas esto resulta evidente y adquiere otras connotaciones. Esto conecta con lo que Maristella Svampa afirma en el sentido de que es a partir de la lucha por la tierra que se amplía y radicaliza el discurso incorporando nuevas cuestiones como el enfrentamiento del modelo de desarrollo que se impone o la exigencia de desmercantilización de los llamados “bienes comunes” (Svampa, 2008: 11). La lucha por la tierra en el caso de los pueblos indígenas adopta una significación diversa a la de condición física para la existencia, representándose en muchas ocasiones con una gramática simbólica más densa: “Con la madre tierra no tenemos solo una relación material, con ella tenemos también una relación espiritual”⁶⁴.

⁶³ En los contextos nacionales, los marcos legales domésticos profundizaban en el reconocimiento de elementos fundamentales: las formas propias de organización social y cultural; el derecho a una educación pautada por las propias necesidades históricas de cada pueblo; reconocimiento de los procesos propios para la resolución de conflictos internos; la implementación de sistemas de atención en salud diferenciada que reconocían la contribución de los saberes propios; o la participación activa en procesos decisorios sobre políticas públicas que afecten directamente la vida de las comunidades y de sus territorios. Estos son solo algunos ejemplos de los profundos avances que la movilización indígena ha conseguido alcanzar en las últimas décadas, aunque insistamos en que la forma de reconocimiento – y principalmente de implementación – varíe sustancialmente de un Estado a otro.

⁶⁴ En entrevista publicada en <<http://redamazonica.org/2015/11/indigena-cocama-coincidimos-con-la-iglesia-en-la-defensa-de-la-vida-y-la-naturaleza/>>, accesible con fecha 25 de marzo de 2016.

La relación entre el grupo y el ambiente, entre el ser humano y la Naturaleza, se formula de un modo completamente diferente. “Esta cosmovisión no podría comprenderse sin los sentidos simbólicos y materiales que nutren su vínculo con la tierra, el territorio y la naturaleza, cuya apropiación social para la reproducción de la vida es un aspecto vital para garantizar la subsistencia” (Composto y Navarro, 2014: 64). Podemos decir, así, que los pueblos indígenas reincorporan a la discusión política la dimensión de lo simbólico. Eduardo Viveiros de Castro sugiere que el pensamiento indígena recorre un ideal de conocimiento que “se encuentra por varias razones en el polo opuesto de la epistemología objetivista favorecida por la modernidad occidental. En esta última, la categoría del objeto nos proporciona el *telos*: conocer es objetivar; es poder distinguir en el objeto lo que le es intrínseco de lo que pertenece al sujeto cognoscente (...) Conocer, así, es des-subjetivizar, explicitar la parte del sujeto presente en el objeto, de modo que se pueda reducir a un mínimo ideal (...) El chamanismo amerindio parece guiado por el ideal inverso. Conocer es personificar, tomar el punto de vista de aquellos que deben ser conocidos” (2004: 43).

Es común encontrar análisis que ponen el acento en la confluencia que aparentemente se produjo entre el movimiento indígena y el movimiento ambientalista en las décadas finales del siglo XX, lo que Svampa denomina de “giro ecoterritorial”. Según estas tesis, ambos movimientos habrían encontrado en el otro un aliado perfecto para legitimar sus reivindicaciones y alcanzar mayor espacio político y de incidencia en el imaginario social, principalmente en los centros económicos. Esto convertiría a indígenas y ambientalistas en aliados naturales delante de la crisis socioambiental que ya se volvió evidente para todos. En realidad, la cuestión no es tan sencilla; de hecho, podemos afirmar que la relación no ha sido siempre la más próxima. Y des-construir esta simbiosis aparente nos permitirá comprender mejor la naturaleza de la contribución específica de los pueblos indígenas a la crisis civilizacional de nuestro tiempo; una contribución que ahonda mucho más allá de los postulados del ecologismo convencional.

Entre otros autores que han abordado esta cuestión, Paul Little (2002; 15-17) analiza los desencuentros que históricamente se han dado entre el movimiento indígena y una determinada vertiente del movimiento ambientalista de carácter proteccionista. Este ambientalismo conservador, al que Little define como “preservacionismo territorializante”, fue el precursor de la creación de los territorios ambientales, áreas naturales que se protegen negando ciegamente la interacción que ya se daba con las comunidades humanas que habitaban estos espacios y desarrollaban en él modelos de convivencia sostenibles.

Para Little, el foco unívoco que esta corriente ambientalista puso en la creación de territorios protegidos - parques nacionales, estaciones ecológicas, reservas biológicas - terminó siendo funcional a los modelos desarrollistas y representaron un tipo específico de territorio que “(...) – seguindo as definições de Quijano - caberia dentro da noção de razão instrumental do Estado” (2002: 16). Los territorios ambientalizados, preocupados

exclusivamente en la protección de los ecosistemas excluyendo el factor humano, contribuyeron a la negación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y al vaciamiento de estos territorios, cuando precisamente la presencia de estos grupos étnicos había sido la principal garantía de sostenibilidad ecosistémica en esos espacios.

Una segunda vertiente del movimiento ambientalista, definida con el término socioambiental, va a ser la responsable de un cambio en los paradigmas de las luchas ecologistas convencionales, incluyendo de hecho el protagonismo de las comunidades locales en la defensa y protección del medio ambiente a través de sus propios saberes, conocimientos y usos del espacio. Esta transformación en el campo de la agenda ambientalista propició un mejor y más denso espacio de confluencia con el movimiento indígena. Aún así, ambas agencias mantienen su genuinidad en la discusión sobre la cuestión socioambiental.

Por otro lado, la identificación en el imaginario occidental del indio con la cuestión ecológica y con la Naturaleza en su estado más puro forma parte, paradójicamente, de la propia racionalidad occidental cuya *sobre*-objetivación del mundo ocasionó la ruptura civilizatoria, dominante, del ser humano con el entorno en el que la vida le es posible. Es decir: tanto la imagen de territorios-totalmente-naturales, como proponía el ambientalismo conservador, como la de los grupos humanos *naturalizados*, proyectada sobre los pueblos indígenas, funciona en el mismo código de objetivación del pensamiento moderno. Ambas concepciones de la Naturaleza comparten las mismas premisas que, en realidad, resultan “antagónicas às concepções indígenas” (Albert, 2002: 257). Es común encontrar perplejidad, si no rechazo, en dirigentes indígenas cuando deparan con concepciones proteccionistas de la Naturaleza que inhiben, prácticamente, cualquier interacción con ella.

La conquista de un espacio político por parte de los pueblos indígenas los colocó en un nuevo campo intercultural y es en ese espacio donde los pueblos indígenas tienen que formular su palabra y sus proyectos de vida en interacción con otros actores: “a auto-representação dos atores interétnicos constrói-se na encruzilhada da imagem que eles têm do outro e da sua própria imagem espelhada no outro” (Albert, 2002: 241). Es decir, la arena política es un campo de construcción dialéctico. En esa mediación que se da en los contextos interculturales se dan las condiciones de posibilidad “de um campo de negociação interétnica em que o discurso colonial possa ser contornado ou subvertido” (2002: 241). En definitiva, si la confluencia de las estrategias del socioambientalismo y de los pueblos indígenas ha funcionado con un efecto movilizador, éste no agota ni explica, siquiera superficialmente, la naturaleza compleja de los procesos de afirmación étnica y territorial de los grupos indígenas.

La lucha por la tierra de los pueblos indígenas es una lucha genuina, con acentos propios y únicos que conducen a una crítica profunda a la racionalidad del sistema-mundo moderno-colonial y a la razón instrumental que guía las políticas monolíticas de los

Estados nacionales. Es por ello que algunos autores, como Enrique Leff, reconocen que en muchos casos la lucha por la tierra parece predominar sobre la lucha por la reappropriación de los bienes naturales o por la transformación del modelo productivo, terminología más relacionada con la discursiva socioambiental global. “La expresión de las demandas sigue planteando en primer término los derechos tradicionales por la tierra (...) Los principios ecológicos de la producción sustentable parecerán quedar relegados a segundo término de la contradicción y la reivindicación social” (2004: 407). En otros términos, Luiz Wanderley constata algo parecido cuando se refiere a los conflictos socioambientales: “Parecem estar mais para conflitos fundiário-territoriais do que para conflitos no campo da mineração ou no âmbito ambiental” (2008: 1).

Más que un cierto orden estratégico en la formulación de las reivindicaciones, entendemos que existe una jerarquía interpretativa que corresponde a las lógicas epistémicas de los pueblos indígenas, según las cuales la comprensión del entorno tiene una mayor densidad cosmológica.

Finalmente, entendemos que los pueblos indígenas consiguen circular con gran habilidad por los entramados conceptuales propios de estos campos interétnicos y posicionan en el centro del debate político y económico cuestiones fundamentales como el Bien Común o el concepto de *Buen Vivir*. La noción de bienes comunes se refiere a la necesidad de superar la omnipresencia del mercado como mediación de valor, identificando otras lógicas posibles vinculadas a bienes que aquellos bienes que pertenecen a todos en la medida en que todos pertenecemos y nos debemos también a ellos.

Capítulo 4

Territorio, territorialidad y territorialización

Con este Capítulo concluimos la primera parte de nuestro trabajo, aunque más que punto de cierre lo entendemos como un punto de llegada. Hasta ahora hemos analizado el modo en que el sistema-mundo moderno-colonial ha incorporado todos los territorios y lugares, progresivamente, a la perspectiva de lo global bajo la égida del Mercado. Ello tiene un efecto concreto y real en la vida de las personas y comunidades que ven sus territorios solicitados, concedidos y ocupados por emprendimientos extractivos de diversa índole. También hemos analizado que es en los territorios donde se produce realmente la disputa global por el control de determinados bienes naturales y su disponibilidad al mercado mundial. Por eso afirma Luiz Wanderley que la Geografía debe analizar la dimensión espacial de estos conflictos utilizando como concepto clave el de territorio (2008: 12).

Es sobre cada uno de los territorios que se despliega una intensa agenda económica liderada por las empresas y el sector público. Berta Becker afirma que los flujos y las redes de la dinámica globalizadora “*não eliminam o valor estratégico da riqueza localizada, in situ; eles sustentam a riqueza circulante do sistema financeiro, da informação, mas a riqueza localizada no território também tem seu papel e seu valor*” (Becker, 2005: 74). El avance extractivo-exportador necesita ejercer el control sobre el territorio para desarrollar su actividad; al mismo tiempo, es también en el territorio donde se articulan las estrategias de resistencia y de afirmación de las comunidades que allí habitan y que protagonizan un nuevo ciclo de luchas locales.

Esto nos lleva a la conclusión de que es la *tríade* territorio-territorialidad-territorialización (Little, 2002a; Porto-Gonçalves, 2002) la que mejor nos puede ayudar a describir y explicar las relaciones que se dan en el avance del extractivismo minero sobre territorios indígenas, donde confluyen, y se confrontan, las diversas lógicas de territorialidad (Svampa, 2012: 43). Este núcleo representa el conjunto de conceptos y categorías claves en los que pretendemos fundamentar nuestra tesis.

Como afirma Heriberto Cairo, el concepto de territorialidad “aparece en el vértice de conjunción de múltiples disciplinas de las Ciencias Sociales e, incluso, de las Naturales” (2001: 30). Podríamos decir que este conjunto conceptual - territorio-territorialidad-territorialización - funciona como el espacio de encrucijada, la plaza de confluencia, o al menos una de ellas, de las diversas perspectivas teóricas que hemos contemplado en los dos capítulos anteriores. No sólo porque se trata de conceptos utilizados por las diversas perspectivas, sino porque ellos condensan en sí mismos la posibilidad de describir, explicar y comprender lo que nos hemos propuesto. “La definición de lo que es territorio, más que nunca, se convierte así en el *locus* del conflicto” (Svampa, 2008: 9).

4.1. Más allá del Estado territorial

El concepto de territorio ha estado atrapado durante mucho tiempo bajo la idea del Estado-nación, que se constituyó en la forma hegemónica de control territorial. Porto-Gonçalves (2002: 223 y ss) recuerda que esta institución del Estado Territorial Moderno se origina en el siglo XVII, en la llamada Paz de Westfalia (1648), y nace como instrumento de dominación hacia dentro de cada territorio gobernado por un rey, pero también como modelo de una nueva orden internacional que se transformó “radicalmente com a inundaç o de metais preciosos que fez explodir a orden mercantil pelo mundo com a explora o da natureza – ouro, prata, especiarias varias, assim como o a  car entre outras mat rias (...)”. La forma política del Estado-nación sólo llega a la región de las Am ricas en los inicios del siglo XIX, pero impone r pidamente su hegemon a.

Es por ello que, incluso dentro de las ciencias sociales, el concepto de territorio se vincul  directamente a la pr ctica territorial del Estado-naci n homogeneizador, ocultando otros tipos de territorios preexistentes, como los que Paul Little llama “territorios sociales” (Little, 2002a; 6).

La elaboraci n de una ideolog a territorial vinculada al Estado-naci n relaciona el territorio con el ejercicio de la soberan a, categor a simb lica y normativa que pasa a pautar la acci n de los principales actores pol ticos y econ micos del Estado. Hasta nuestros d as, la resistencia de los poderes del Estado a reconocer la autonom a y legitimidad territorial de pueblos ind genas, campesinos y comunidades tradicionales se construye sobre una supuesta afronta a la “integridad” de la (mono)naci n y a la soberan a pol tica del Estado.

Esta ideolog a territorial dificulta enormemente la capacidad de los Estados-naci n para lidiar con la existencia de la diversidad territorial, social y  tnica dentro de sus propios l mites (Little, 2002a). El Estado impone la fuerza de su aparato normativo y militar para someter, en nombre de la soberan a nacional, los diversos territorios - subnacionales o

supranacionales - tratándolos en su relación con él mismo. La Razón Instrumental que rige la acción de los Estados opera en sentido contrario a la Razón Histórica de los pueblos de las Américas y mantiene sus sociedades “presas a esquemas que não correspondem às necessidades de seus diversos membros” (Little, 2002a; 7). La concepción territorial del Estado-moderno es superada en el cotidiano de las sociedades latinoamericanas, aunque aún es en el interior de esos “contenedores de poder” (Porto-Gonçalves, citando a Giddens, 2002; 224) que se dan las luchas sociales.

Las luchas territoriales de pueblos indígenas, campesinos y comunidades tradicionales trascienden los límites de la ideología territorial del Estado, entre otras cosas porque muchos de los territorios originales de estas comunidades fueron divididos aleatoriamente por fronteras políticas “inventadas” durante el proceso de creación de los Estados. Con ello, emergen semejanzas y articulaciones posibles entre estos actores más allá del encorsetamiento de las identidades nacionales hegemónicas. Lo que está en juego es el fortalecimiento de nuevas gramáticas espaciales, nuevas configuraciones – materiales y simbólicas – de lo territorial, guiadas por la Razón Histórica y rebeldes a los paradigmas del sistema-mundo homogeneizador. Pero al mismo tiempo, estas diversas luchas territoriales mantienen sus rostros y dinámicas propias en función de los marcos normativos y políticos que se dan en cada uno de los Estados.

Tomando como universo de análisis el Estado de Brasil, y siguiendo el análisis de Paul Little, encontramos un régimen de propiedad de la tierra dividido, prácticamente, en dos categorías básicas: la propiedad privada, guiada por la lógica capitalista e individualista que concede al dueño de la tierra el usufructo exclusivo de sus bienes; y la propiedad pública, según la cual la tierra pertenece a todos los ciudadanos del país y es el aparato estatal al que se atribuye la competencia de normatizar, gestionar y determinar el destino de esas tierras – supuestamente en beneficio de todos. Este binomio público-privado representa para Aníbal Quijano (citado en Little) una expresión clara de la Razón Instrumental del Estado moderno.

Esta lógica público-privado es sobrepasada por las lógicas territoriales de otros actores sociales que incorporan la perspectiva comunitaria a la tenencia y uso de la tierra. Los regímenes de propiedad común, guiados por la Razón Histórica, desbordan los consensos normativos establecidos por las élites económicas y políticas. Y así, el Estado se ve impelido a crear nuevas figuras jurídicas que nombren y regulen las diversas territorialidades pujantes: tierras indígenas, reservas extractivistas, asentamientos de reforma agraria o quilombos, entre otros. “Os povos tradicionais se sentiram obrigados a elaborar novas estratégias territoriais para defender suas áreas. Isto, por sua vez, deu lugar à atual onda de territorializações em curso. O alvo central dessa onda consiste em forçar o Estado brasileiro a admitir a existência de distintas formas de expressão territorial – incluindo distintos regimes de propriedade – dentro do marco legal único do Estado (...)”. Little, P, 2002: 13

Estas nuevas lógicas territoriales incorporan elementos que podrían ser relacionados con la propiedad pública – se trata de bienes de uso colectivo – sin ser tutelados por el Estado; al mismo tiempo, incorporan elementos que podrían ser relacionados con la propiedad privada – se trata del derecho a uso exclusivo de los bienes que se encuentran en esa tierra – sin ser incorporados a la lógica de mercado. Lejos de constituir una especie de híbrido, representan por sí mismas concepciones territoriales históricas que escapan a la razón homogeneizadora del Estado Territorial Moderno.

4.2. Territorio, territorialidad y territorialización. Conceptos para el análisis

É indispensável insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, mediante o tratamento analítico desse seu aspecto fundamental que é o território (o território usado, o uso do território).

Milton Santos, 2005

El concepto de territorio ha sido empleado con múltiples sentidos y enfoques desde las diversas áreas de conocimiento. Desde la Geografía, ha sido común el énfasis empleado sobre la materialidad del territorio; desde la Ciencia Política se ha puesto mayor atención a las relaciones de poder que comporta la territorialidad; ya algunas corrientes de la Economía o la Antropología acentuaban la base productiva o simbólico-identitaria del territorio. Es un significante amplio, problematizado y, en cierto sentido, disputado; pero, insistimos, es también un concepto de confluencia, por lo que se torna el más válido para este tipo de trabajos.

Rogério Haesbaert ofrece una sistematización de las varias nociones de territorio encontradas en las diversas corrientes académicas (Haesbaert, 2007). En su esfuerzo de síntesis, desgrana los varios enfoques o énfasis que las distintas perspectivas teóricas han ofrecido sobre el territorio, sea aquellas cuyo acento se sitúa en las bases materialistas del territorio o aquellas que lo hacen en las bases simbólicas o idealistas. Al final, dedica un espacio propio a lo que denomina una perspectiva integradora, “que envuelve la lectura de territorio como un espacio que no puede ser considerado ni estrictamente natural, ni únicamente político, económico o cultural. Territorio solo podría ser concebido a través de una perspectiva integradora entre las diferentes dimensiones sociales (y de la sociedad con la propia naturaleza)” (2007:29).

4.2.1. Territorialidad: el espacio habitado, significado y normatizado

Una de las principales contribuciones en la recuperación de la perspectiva integral del espacio – que permite posteriormente la conceptualización del territorio - ha sido la de

Milton Santos. Santos dedicó buena parte de su empeño intelectual en intentar reconstruir el corpus explicativo de la Geografía en un tiempo de profundos cambios (1996: 22).

A lo largo de su trayectoria académica e intelectual, el geógrafo brasileño ha propuesto diversas descripciones del concepto espacio - algo que él mismo reconoce (Santos, 2000) – aunque las diferentes clasificaciones comparten la misma intuición y, particularmente, la misma estructura binaria o de pares de elementos. Así, Santos ha llegado a definir el espacio como un conjunto de fijos y flujos que interactúan entre sí o como la interacción entre la configuración territorial - material, natural o artificial - y las relaciones sociales que en él se producen y lo transforman permanentemente.

En su obra “La naturaleza del espacio”, propone una definición conclusiva del espacio como un “conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acción” (Santos, 2000:54) que confluyen en una lógica que es, al mismo tiempo, la lógica de la historia pasada y la lógica de la actualidad. En el planteamiento de Santos, *objetos* hacen referencia a toda la realidad material que encontramos en el espacio. Las *acciones* hacen referencia al conjunto de actos a través de los cuales un agente transforma su entorno y se transforma a sí mismo; implican un propósito, un comportamiento orientado y una subjetividad. En definitiva, propone una definición del espacio que explica la relación que se da entre el grupo humano - sujeto-sociedad - y el entorno en el que vive; una relación cuya naturaleza es dinámica, transformadora e interdependiente. Sociedad y naturaleza no son categorías explicativas autónomas, sino que requieren una explicación conjunta (2000:84).

En esta relación, la historia del hombre ha generado una permanente transformación del medio natural a través de la técnica. En el ambiente podemos encontrar objetos de origen natural - como un río, un arroyo o una montaña - junto a objetos de origen técnico o artificial - como un puente o una ferrovía. Cada intervención humana sobre el entorno transforma claramente la naturaleza de ese medio.

Siguiendo a Lefebvre, la transformación técnica del espacio natural para que éste sirva a las necesidades del grupo es lo que caracteriza la dominación y apropiación del espacio (citado en Haesbaert, 2007: 42). El dominio nace del poder político y supone posesión [propiedad] sobre el territorio pero, como concepto, adquiere autonomía cuando se coloca en relación al de apropiación que, como ya fue dicho, implica la transformación del espacio por la técnica para mejor servicio a las necesidades del grupo. El dominio es condición para la apropiación pero, al mismo tiempo, sin ésta carece de sentido más allá de la acumulación de capital [territorial] que caracteriza a muchas grandes concentraciones improductivas de tierras.

Podemos hablar entonces, como ya lo hicimos anteriormente, de un fenómeno de tecnificación del ambiente, definido como el pasaje de un medio natural a un medio técnico y mecanizado por la incorporación cada vez mayor de objetos técnicos sobre el

ambiente. Los objetos artificiales van substituyendo o tomando el lugar de los objetos naturales.

Ya hemos visto que con la división internacional del trabajo en el actual período del sistema-mundo moderno-colonial, los ambientes son tecnificados por motivaciones “crecientemente ajenas a las lógicas locales e incluso nacionales [...] En otras palabras, su presencia se vuelve progresivamente indiferente a las condiciones preexistentes” (Santos, 2000:200). De este modo, la re-configuración de un territorio o región se produce por la interferencia de la técnica pero en función de argumentos autónomos - ajenos, distantes - de ese medio natural y de las sociedades que allí residen. Crece la artificialidad del ambiente en la misma medida que se difumina el compromiso con el espacio concreto, como apuntamos al inicio de nuestro trabajo.

A partir de esa concepción del espacio, fundamental para la Geografía, Milton Santos nos conduce a lo que él identifica como territorio. Para Santos el territorio se explica como el espacio usado y habitado, lo que implica una conducta del grupo. Es la intencionalidad de la acción humana sobre el espacio, el uso que hace de él, lo que hace del territorio objeto de análisis social y no el territorio en sí mismo (2005: 255). Claude Raffestin (2013) afirma también que es el actor quien “territorializa” el espacio con su acción.

Por tanto, el territorio de un grupo se configura como el espacio habitado por ellos, donde se encuentra su base material y donde desarrollan su organización social, económica y política; un espacio que les confiere sentido de pertenencia y de identidad, como también refiere Robert D. Sack (1986), al que retomaremos más adelante. Les permite vivir y hacerlo a través de las referencias culturales que consideran propias, en permanente interacción con otros grupos. “O território não é algo anterior ou exterior à sociedade. Território é o espaço apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por meio dele” (Porto-Gonçalves, 2008b: 42).

En una línea muy similar, Paul Little llega al territorio a partir del concepto de territorialidad. Afirma que la territorialidad es la conducta territorial del grupo, “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’” (Little, 2002: 3). La territorialidad implica, por tanto, una conducta o acción humana, y el territorio es el producto de esa acción.

Por último, según Little, nos queda el concepto de territorialización, que es el fenómeno que se origina en un contexto de choque entre territorialidades. El modo como ese confronto de territorialidades se resuelve es lo que Paul Little describe como “‘procesos de territorialização’ que surgem em ‘contextos intersocietários’ de conflito” (Little,

2002: 4) tomando la idea del antropólogo brasileño João Pacheco de Oliveira⁶⁵. Cuando sobre un mismo territorio se sobreponen diversos procesos de territorialidad simultáneos, opuestos en sus acciones materiales y de significación, se genera un conflicto claro de prácticas, perspectivas e intereses. “Nesses contextos, a conduta territorial surge quando as terras de um grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a defesa do território torna-se um elemento unificador do grupo e, externamente, as pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante moldam (e às vezes impõem) outras formas territoriais” (Little, 2002: 4). El conflicto de territorialidades se resuelve a través de una nueva onda de territorialización, en la cual la participación del Estado suele ser nuclear, y que se puede caracterizar por la creación de nuevas figuras territoriales o por la imposición de unas sobre otras.

Esta reflexión nos permite enlazar con la definición de territorialidad que propone Robert Davis Sack (1986), uno de los principales exponentes en esta temática. Sack define también la territorialidad como actitud e intención del actor social sobre un determinado espacio, con el objetivo de “afectar, influenciar o controlar” personas, fenómenos y relaciones a través de la delimitación de un área geográfica sobre la que se establece el control.

Sack nos está apuntando para un hecho fundamental: la territorialidad implica delimitación, fronteras, demarcación. Al mismo tiempo, ese espacio delimitado solo se convierte en territorio cuando esos límites son utilizados para afectar el comportamiento respecto a otros grupos sociales normatizando el control y el acceso a los recursos y al poder⁶⁶. En los conflictos socioambientales generados en territorios ocupados y significados por pueblos indígenas sobre los cuales avanza un determinado proyecto extractivo, como el de la minería, se coloca en juego esta confrontación por la acción de delimitación del espacio; una delimitación que fije, formalmente, lo que es o no permitido hacer dentro de él o a quién pertenece el usufructo de qué bienes, afectando los comportamientos de unos y de otros.

Distingue Sack entre el ejercicio social de la territorialidad y la acción cartográfica de delimitar o demarcar, sobre un mapa o mentalmente, determinados objetos dentro de un espacio dado. La mera delimitación física sólo transforma el lugar en un territorio cuando los límites son utilizados para afectar las interacciones con los otros, para definir lo que se puede hacer o no dentro de ese espacio y quién lo puede hacer. Es decir, la

⁶⁵ Cf. OLIVEIRA, João Pacheco, 1998. *Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais*. Mana 4(1): 47-48.

⁶⁶ Diversos autores conciben la conducta territorial, o *territorialidad*, desde una perspectiva de relaciones de poder [forma de influenciar y controlar espacios, personas, cosas y relaciones sociales] y/o de dominio [político y técnico] y apropiación [simbólica]. Encontramos estos enfoques en autores reconocidos como Robert Sack, Saquet, Lefebvre o el propio Haesbaert.

territorialidad es fundamentalmente una construcción social y está imbricada en las relaciones y los contextos sociales que la producen.

Para Robert Sack, de la acción de territorialidad se siguen consecuencias y efectos concretos que derivan en lo que él denomina las “diez tendencias de la territorialidad” (1986). De entre ellas destacamos algunas:

- i. implica una forma eficaz de clasificación al definir las normas que rigen sobre los bienes dentro del territorio. Por ejemplo, determina la propiedad o el usufructo, el derecho de uso o de permanencia, la especificidad de políticas públicas determinadas;
- ii. de ese modo, opera la resolución de contradicciones entre grupos sociales a través del establecimiento de las normas que regulan el territorio, que se presentan ante el grupo como algo naturalizado funcionando como mecanismo de control de las tensiones;
- iii. incluye la necesidad de comunicar los límites de forma visual y clara, normalmente a través de objetos técnicos - cercas, puntos fronterizos, marcas visibles, carteles, puestos fronterizos - pero también de objetos naturales - un río, una montaña, ...;
- iv. en este sentido, *reifica* el poder al hacerlo explícito y concreto dentro de unos límites tangibles como ríos, montañas, fronteras o construcciones;
- v. la propia delimitación reafirma el control de un determinado grupo sobre el espacio, siendo ésta una de sus principales funciones. Actúa, así, como un contenedor donde la autoridad y el control operan legítimamente;
- vi. contribuye a la percepción del territorio socialmente vaciable al que habíamos hecho referencia en el capítulo anterior de la mano de Maristella Svampa (2008: 8) y posteriormente lo haremos con Mira Antonelli (2014). Cuando “las cosas que deben ser contenidas no están presentes, el territorio está conceptualmente ‘vacío’”, afirma Sack (1986). Efectivamente, cuando grupos de poder no consideran valioso, desde el punto de vista económico o social, lo que un determinado territorio contiene o el uso que de él se está haciendo en ese momento, se legitima una lógica de espacio vaciable o sacrificable. En un primer momento se separa el territorio de las cosas y las prácticas que lo significan, para posteriormente reconfigurarlo con otros objetos y usos, en un ejercicio de poder que consiste en asignar “lugares a cosas y cosas a lugares”. Este ejercicio, combinado con otras dinámicas, posibilita y nos conduce a lo que Milton Santos describía como el aumento de la especialización productiva de cada lugar y al cual nos referimos en el Capítulo 1 de nuestro trabajo.

En definitiva, el territorio es el producto de la territorialidad en cuanto conjunto permanente de esfuerzos (Sack, 1986) por delimitar el espacio y regular, a partir de esa delimitación, quién tiene o no acceso a él, qué políticas públicas o actividades privadas pueden desarrollarse o no, qué tipo de uso del espacio y de sus bienes es permitido o no.

4.2.2. Territorio como construcción social e histórica, material y simbólica

De todo lo dicho hasta aquí, se deduce que todo territorio de un grupo es también una construcción histórica y el producto de procesos sociales y políticos determinados. De algún modo, el territorio nace con el grupo; no le precede, sino que le es contemporáneo y se transforma con él y con las dinámicas del proceso histórico. Porto-Gonçalves afirma que “cada sociedade é, antes de tudo, um modo próprio de estar-junto (proxemia) o que implica, sempre, que toda sociedade ao se instituir enquanto tal o faz construindo o seu-espaco (...) o ser social é indissociável do estar. A sociedade no seu devir não é a-geográfica” (2002: 229). La percepción del territorio como constructo social obliga a realizar siempre un abordaje histórico para analizar cualquier cuestión territorial (Sack, 1986; Haesbaert, 2007: 31 y Little, P. 2002: 4).

Esta construcción socio-histórica implica una acción que es, al mismo tiempo, material y simbólica (Porto-Gonçalves, 2012: 34)⁶⁷, lo cual nos coloca delante de enormes desafíos porque “(...) não se admite uma distinção, tão cara ao pensamento dualista dicotomizante, entre o material e o simbólico. Consideramos, ao contrário, que os homens e mulheres só se apropriam daquilo que faz sentido; só se apropriam daquilo a que atribuem uma significação e, assim, toda apropriação material é, ao mesmo tempo, simbólica (...) [esta observação] nos coloca diante de enormes desafios tanto teóricos como, sobretudo, políticos. Afinal, não estamos habituados a trabalhar com a complexidade da relação entre o material e o simbólico” (Porto Gonçalves, C. 2002: 230).

Rogério Haesbaert (2004, 2007) también defiende que el territorio implica, siempre, una dimensión simbólica y cultural; ejercemos dominio sobre el territorio tanto para desarrollar funciones - como recurso, como abrigo, como fuente de materias primas - como para producir significados⁶⁸.

Por un lado, hay un ejercicio de ocupar físicamente un espacio, pero en la propia acción de ocupar se implican otras acciones como la de construir y usar ese espacio incluyendo las más diversas intencionalidades: habitación, producción, ocio, protección, defensa, ritualidad y muchas otras. Se trata de conductas que el grupo adopta para cuidar, servirse y transformar las condiciones materiales que el espacio les ofrece.

⁶⁷ En otro momento, Porto-Gonçalves define la territorialidad como la identidad que emerge del propio proceso de apropiación del territorio, una identidad que está inscrita en un proceso histórico y, por tanto, es dinámica y mutable (Porto-Gonçalves, 2002: 230)

⁶⁸ De aquí se desprende que, en cualquier situación de conflicto socioambiental con base territorial (o sea, centrado en el control del territorio y el acceso a determinados recursos), se produce un confronto por la apropiación material y también simbólica del espacio. “Como não há apropriação material que não seja ao mesmo tempo simbólica, o processo de apropriação da natureza é acompanhado, ao mesmo tempo, por uma tensa e intensa luta pelos sentidos a ela atribuídos” (Porto-Gonçalves, 2012: 34).

Al mismo tiempo, la acción es también y fundamentalmente un “proceso de significación”⁶⁹. Por *significación* queremos referirnos a ese proceso complejo de atribución de sentido al espacio y al territorio desde una perspectiva compleja y holística que integra lo material y lo simbólico en una misma experiencia social. Es la significación del espacio, cuanto proceso holístico, o el uso de *sistemas sémicos* en palabras de Claude Raffestin (2013), lo que transforma la organización de ese espacio y lo conduce permanentemente a movimientos de desequilibrio y re-equilibrio.

Esta dimensión encuentra un mayor desarrollo, según Heriberto Cairo, en la corriente de la Geografía política humanística (1993), dentro de la geopolítica crítica. “Se trata de forma especial los problemas de las ideologías territoriales, o si se prefiere, el significado del territorio para los actores políticos, y conceptos como los de ‘sentido del lugar’, ‘territorialidad’ o ‘nacionalismo territorial’ se constituyen en los ejes básicos del análisis” (Cairo, 1993: 207).

En palabras de Enrique Leff, las culturas “al significar a la naturaleza con la palabra, la convierten en acto (...) Sus tierras ‘comunes’ no son tierras libres ni naturaleza virgen; estos espacios han sido significados por la cultura, trabajados, recorridos, transformados (...)” (Leff, 2004: 125). El territorio, así, es lugar de significación de prácticas, pues la relación cultura-naturaleza “se juega en el territorio” (2004: 115).

En este sentido, Paul Little sugiere el concepto de *cosmografía* que define como el conjunto de saberes ambientales e identidades⁷⁰ creados colectivamente en un territorio. Se incluyen el propio régimen de propiedad y uso de los recursos, los vínculos afectivos que se establecen con el territorio específico, la memoria colectiva sobre su ocupación por parte del grupo y hasta las formas de defenderlo y protegerlo. En definitiva, la compleja relación que el grupo establece con el medio. Esto es evidente en comunidades tradicionales que viven en la tierra y de la tierra y que han construido en ella las bases de su proyecto societario; no solamente el que les ha traído hasta los días de hoy, sino la posibilidad de proyectarse en un futuro.

Alguien podría decir que una empresa o un Estado también generan sus propias cosmografías sobre un territorio en la medida en que su acción de territorialidad, expresada a través de obras de infraestructura o proyectos mineros, por ejemplo, significa ese territorio y le permite ocuparlo [dominarlo] y apropiárselo, según la propuesta teórica de Lefebvre.

Conseguimos de este modo una arquitectura base de categorías conceptuales [territorio-territorialidad-territorialización] relacionadas entre sí que nos permiten explicar los previsibles conflictos que pueden originarse en un mismo territorio entre

⁶⁹ Santos también recoge esta dimensión al citar el concepto de espacio propuesto por Lagopoulos como “una conjunción particular de procesos materiales y procesos de significación” (Cit. En Santos, 2000:71)

⁷⁰ Rogério Haesbaert afirma que la identidad social es también identidad territorial cuando el referente simbólico nuclear que permite la construcción de esa identidad parte o pasa por el territorio.

una comunidad que lo habita y un emprendimiento minero. En estas situaciones de conflicto socioambiental con base territorial se produce un choque de territorialidades y una disputa por la delimitación y normatización del espacio que es, sustancialmente, un confronto por la apropiación material y simbólica del espacio. “Como não há apropriação material que não seja ao mesmo tempo simbólica, o processo de apropriação da natureza é acompanhado, ao mesmo tempo, por uma tensa e intensa luta pelos sentidos a ela atribuídos” (Porto-Gonçalves, 2012: 34).

Este bagaje teórico nos permite además - no solamente comprender conflictos particulares, sino - explicar dinámicas globales que producen los conflictos en la localidad. El conflicto que emerge delante nuestra es entre una concepción del territorio como recurso y una concepción del territorio como abrigo (Haesbaert, 2007: 18); entre un territorio habitado y un espacio tenido como almacén de recursos naturales; entre un espacio usado y un espacio de flujos comerciales. En definitiva, existe “um conflito que se agrava entre um espaço local, espaço vivido por todos os vizinhos, e um espaço global, habitado por um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante e que chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los”. (Santos, M. 2005: 259).

4.2.3. Territorio, localidad y saberes: una aproximación a la percepción de los pueblos indígenas sobre el territorio

Ese espacio local al que se refiere Milton Santos como el espacio de la vecindad y la experiencia y que es, al mismo tiempo, *locus* de los conflictos socioambientales de carácter global, también se transforma en el lugar donde se recrean conocimientos y saberes propios, se reafirman identidades y se dan condiciones para otras posibilidades y nuevas racionalidades *alter*-nativas. Es en la evidencia de los conflictos por el territorio que emergen las diversas subjetividades a través de sus diversas territorialidades o formas de vivir, sentir, significar, conocer, nombrar y habitar el territorio. En su defensa frente a otros intereses absolutamente extraños o antagónicos, surge lo *alter*-nativo; son “epistemologías que emergem no contato de epistemes distintas” (Porto-Gonçalves, 2008: 47).

La narrativa hegemónica de la Globalización, asegura Arturo Escobar (2005), desplazó la localidad como herramienta explicativa sometiéndola al espacio. Es el espacio que es vinculado al capital, a la tecnología y a la movilidad, mientras que lo local es relegado al terreno de lo limitado, anacrónico y estático; al ámbito del trabajo y de las tradiciones. Los procesos globales se vinculan conceptualmente a la movilidad y lo transfronterizo.

Sin embargo, según Escobar, es un hecho incuestionable que el lugar, en cuanto experiencia de una localidad específica conectada a la vida real, generadora de enraizamiento e identidad, continúa siendo algo importante para la vida de la mayor parte de las personas. Otros autores coinciden en esta afirmación. “Paradójicamente, mientras más se desmaterializan los procesos de valorización por la preeminencia de la

dimensión financiera, mientras más se desdibujan las figuras de la producción al fragmentarse en maquilas domiciliarias de muy distinto carácter, más la cotidianidad se aferra al territorio como referente físico y simbólico de la vida real” (Ceceña, 2008: 26).

A partir de la seguridad que nos proporciona el lugar donde vivimos estamos en condiciones de abrirnos a la amplitud de la libertad que supone el espacio, y viceversa. De hecho, es porque nos podemos mover entre lugares y a partir de lugares que somos capaces de experimentar e identificarnos con un espacio amplio - un país, una región, un continente - aunque de él tengamos una experiencia directa limitada⁷¹.

Es en la experiencia de *local-izarnos* y de habitar donde se genera el conocimiento; experimentar es, de cierto modo, aprender (Tuan, 1983). Un aprendizaje en el que los sentidos y los sentimientos hacen parte del proceso. Afirma Tuan que la experiencia y el sistema cultural del grupo es el que permite la interpretación del ambiente, del entorno. Y con ello, podríamos decir una vez más, su significación.

La desaparición o fragilización de lo local hace parte de la metáfora nebulosa de la *des-territorialización*, que defendiendo el final del territorio esconde que éste es precisamente el “terreno del conflicto”, como hemos dicho antes. Es en el control del territorio concreto donde se juegan las dinámicas globales del capital, la apropiación del espacio real al servicio de una economía real-real, aunque global. Por eso se hace necesario, defiende Arturo Escobar, superar la trampa de la narrativa global-capitalista y recuperar, epistemológica y políticamente, la dimensión de la localidad; no en el sentido de devolverla a los dominios del esencialismo, sino de recuperar la idea y perspectiva de lo local como un proyecto generador de *alter*-nativas sociales, políticas, económicas, culturales y epistemológicas⁷², donde la sustentabilidad se hace posible en bases ecológicas e identidades culturales.

Un proyecto que no se revela atomizado en la individualidad discontinua de cada localidad específica, sino con capacidad para constituirse en redes, mallas y para articularse en las diversas escalas del *espacio banal*. Permitir la movilidad, al mismo tiempo que el sentimiento de raíz y de pertenencia. Desde el punto de vista de las conexiones, los lugares pueden unirse verticalmente en redes, pero también en la construcción de “nuevas horizontalidades” (Santos, 2005) a partir de sus propias formas de producción y consumo, lo cual permitiría “encontrar um caminho que nos libere da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e nos aproxime das possibilidades de construir uma outra globalização” (Santos, 2005: 260).

⁷¹ “Al interrogar los fundamentos históricos que han definido el concepto de lugar y espacio, resalta la sentencia kantiana que establece que el conocimiento general precede siempre al conocimiento local. Situación frente a la cual, David Harvey, parafraseando a Casey, se pregunta: ‘¿qué tal si las cosas son al revés?, ¿qué tal si la idea de espacio es posterior a la idea de lugar, e incluso deriva de este último?’” (citado en Preciado y Uc, 2010: 72).

⁷² Como afirma Porto-Gonçalves (2008b), “problematizar a relação entre saberes e territórios é, antes de tudo, pôr em questão a idéia eurocêntrica de conhecimento universal”.

La escala local o localidad asume, así, dos dimensiones fundamentales en el nuevo orden global:

- a) Dimensión de la experiencia, el trabajo; la identidad, el hogar y el acontecer solidario. Se configura como la base sobre la cual es posible la sobrevivencia física y cultural de múltiples grupos humanos. Si el territorio es el espacio habitado, la localidad sería aún el territorio vivido, significado, cotidiano, cosmografado. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas, caucheras, pescadoras, quilombolas, ..., que viven en la Amazonia entienden el territorio que habitan como el espacio necesario para su sobrevivencia física y cultural; por ello, trascienden el valor económico y productivo de la tierra impregnado en la lógica de la economía-mundo e incorporan nuevos referentes vitales en relación al territorio y al lugar.
- b) Dimensión del conflicto y de la emergencia de contra-saberes y contra-prácticas. Es desde la política del lugar que se consigue articular un relato político alternativo a la globalización hegemónica que supera la propia defensa del lugar específico. En palabras de Escobar, “É importante tornar visíveis as múltiplas lógicas locais de produção de culturas e identidades, práticas ecológicas e econômicas que emergem sem cessar das comunidades de todo o mundo. Em que medida estas práticas colocam obstáculos importantes e, talvez, originais ao capitalismo e às modernidades eurocentradas?” (2005: 147).

Nos encontramos delante de la posibilidad/necesidad de repensar las categorías de local y global del modo como la narrativa global-capitalista las piensa. Lo local puede no ser el espacio del hermetismo o el esencialismo, sino también el escenario de resistencia social-cultural-política desde donde emergen otras posibilidades y otros sujetos colectivos que reivindican sus posibilidades de existencia y participación a partir de la condición territorial. “O lugar – não importa sua dimensão – é a sede dessa resistência da sociedade civil” (Santos, 2005: 259). Es el caso expresivo de los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas o afro-descendientes, los movimientos de sin-tierra o las comunidades de pescadores.

Arturo Escobar argumenta de un modo muy transparente cómo la fragilización y desplazamiento del lugar está “claramente vinculado a la invisibilidad de los modelos específicos de la naturaleza y de la construcción de los ecosistemas” (2005). La engañosa naturalización de la narrativa global-capitalista como única dinámica social posible somete y niega la existencia de otros sistemas de conocimientos y relaciones no-capitalistas que representan diferentes visiones y explicaciones posibles del mundo. Se trata de la extensión del proyecto de colonialidad sobre el pensamiento subalterno, alter-nativo, aquello que a veces se define como el *conocimiento local*.

De este modo, la discusión sobre el territorio y la permanente reelaboración cosmológica de la realidad que se vive en las situaciones de contacto – marcadas

frecuentemente por el conflicto -, ambas dimensiones articuladas simbólicamente entre sí, son las que gestan la narrativa política indígena en la actual fase (Albert, 2002: 242).

Los pueblos indígenas son detentores de concepciones diferenciadas sobre el hecho territorial, concepciones que normalmente son desconsideradas o negadas incluso cuando se intenta normatizar sobre los derechos territoriales. “Se quisermos compreender como os grupos indígenas se apropriam de um território e nele se organizam espacialmente, temos que nos desprender de certas categorias de representação territorial que bem se aplicam à nossa sociedade, mas que não fazem tanto sentido para outras culturas” (Mauro, 2011: 1).

En el mismo sentido, Preciado y Uc, al hablar de los procesos de autonomía de los pueblos indígenas, se refieren a ellos como “una clara expresión de la relevancia que tiene *el lugar y la localidad*” (2010b, *destaques e cursiva míos*) y de las aportaciones que estos grupos étnicos, definidos por la experiencia local, “generan sobre el tipo de *modelo de desarrollo, gramática democrática*” ofreciendo posibilidades de alternativas sustentables frente al sistema capitalista.

Arturo Escobar analiza la existencia y resistencia de los diversos sistemas de conocimiento local no-occidentales, delineando algunas características comunes que pueden ser encontradas entre diferentes grupos. Entre ellas destaca la superación de la dicotomía naturaleza-cultura, a través de la continuidad existente entre el mundo biofísico, el humano y el no-humano, el de los seres vivos y no-vivos y el mundo de lo sobre-natural. En el mismo sentido se pronuncia Boaventura de Souza Santos, citado en un artículo de Carlos W. Porto-Gonçalves (2002: 220): “O conhecimento do pensamento emergente tende assim a ser um conhecimento não dualista, um conhecimento que se funda na superação das distinções tão familiares e óbvias que até há pouco considerávamos como insubstituíveis, tais como natureza/cultura [...]”.

Lo que la razón occidental separó para someter el control de la naturaleza al dominio irrefrenable del interés sociocultural y económico humano, otros sistemas de conocimiento conciben de un modo conectado, ampliando así el concepto de relaciones sociales. Estos conocimientos locales, que según Escobar responden más a prácticas territorializadas que a sistemas de conocimientos preestablecidos y descontextualizados, consiguen también generar una comprensión del mundo y de la existencia que, en la mayor parte de los casos, entra en contradicción radical con el pensamiento occidental-global-capitalista. “A identificação de lugares sagrados por um grupo determinado representa uma das fontes mais importantes de dotar um espaço com sentimento e significado (Deloria, 1994), porém existe uma multiplicidade de outras (cf. Sack, 1980). A noção de lugar também se expressa nos valores diferenciados que um grupo social atribui aos diferentes aspectos de seu ambiente. Essa valorização é uma função direta do sistema de conhecimento ambiental do grupo e suas respectivas tecnologias” (Little, 2000: 10).

Lo relevante de esta constatación, argumenta Escobar, es que los sistemas de conocimiento local están vinculados y enraizados a un territorio específico, un lugar, que no se constituye solamente como el receptáculo de esa experiencia social y cultural sino que hace parte de ella de un modo dinámico, permanentemente rehaciéndose y reconfigurándose. Por tanto, recuperar la diversidad de sistemas de conocimiento local significa, a un mismo tiempo, un ejercicio de de-colonialidad epistemológica y una oportunidad histórico-política de diversificar las posibilidades de convivencia entre las diferentes formas de vida. Y el lugar se torna una dimensión estratégica y explicativa, una perspectiva de la práctica y una condición de posibilidad del conocimiento.

Los territorios indígenas no se rigen por lógicas de mercado relacionadas con la venta, compra o arrendamiento, tanpreciados por la sociedad de mercado. Incluso podríamos decir que en el caso de los emprendimientos extractivos, como la minería, cuando se orienta la discusión en torno a la parte de beneficio económico (capital) que quedaría en la comunidad (*royalties*) esta discusión no deja de permanecer en la misma lógica de la propiedad privada y del arrendamiento para uso de un tercero.

La concepción amplia de territorio que las comunidades indígenas poseen incluye áreas aparentemente “no ocupadas” o no “habitadas”, pues son todas aquellas necesarias para la movilidad entre aldeas, las áreas de caza y pesca en los diversos tiempos del año o las zonas de disponibilidad de determinados recursos fundamentales (agua, leña, palmas, madera, ...). Así como la comprensión de la comunidad local de que las diversas áreas de un territorio están conectadas y se co-pertenecen.

La percepción que las comunidades locales tienen sobre el territorio puede coincidir o no con la comprensión que se pueda hacer desde propuestas analíticas, jurídicas o políticas pensadas desde fuera. O lo que es lo mismo; aunque los conflictos socioambientales podrían ser explicados a partir de su base material de acceso a recursos, les trasciende también una confrontación de comprensiones que, durante el conflicto, se tornan visibles. Deborah Duprat, Suprocuradora Geral da República en Brasil, al referirse a los conflictos sobre la pose de la tierra que afectan a los pueblos indígenas, alerta que “é preciso que o julgador tenha em mente que o centro do debate está na própria definição de posse e que as partes contrapostas pertencem a comunidades lingüísticas distintas. Para os guaranis, por exemplo, o *tekoha* é uma instituição divina criada por Ñande Ru. Deles desalojados com a chegada do homem branco, procuram ali permanecer, inclusive trabalhando para este nos ervais e em roças” (2013: 19).

Un conflicto de territorialidades se configura como un conflicto entre proyectos societarios; conflicto que, en principio, tiene una dimensión territorial concreta, acotada, localizada, pero que puede transformarse en metáfora del conflicto entre un proyecto societario homogeneizador (economía-mundo) y una multitud de proyectos particular-colectivos que alcanzan con su relato la globalidad de los problemas

planteados. Esto es particularmente relevante cuando hablamos de los diversos grupos étnicos o pueblos indígenas del continente.

Como afirma Paulo Celso de Oliveira, abogado indígena, del pueblo Pankararu, “os povos indígenas atribuem nomes aos lugares, aos rios, às plantas e aos animais. Eles conhecem os mais diversos ecossistemas, classificam os lugares para fim de moradia, realização de atividades econômicas e práticas culturais, bem como para a preservação do meio ambiente” (citado em Mauro, V. 2001). Almiros Machado, del pueblo Kaiowá, en su Tesis de Pos-Graduación en Derecho en 2009, deja en un párrafo su visión sobre la concepción territorial indígena y que recoge una vez más Víctor Ferri Mauro: “O território para o indígena tem a ver com seu espaço existencial [...] onde vive ou tenta viver plenamente a sua cultura, desenvolvendo a sua política, os seus meios econômicos, culturais e religiosos. Não é apenas o lugar que serve para morar, plantar roças, caçar, pescar. É também o espaço da construção de redes e laços de parentesco. É o local onde estão constantemente revivendo os seus costumes, enfatizando aspectos importantes de sua cultura. É onde o mundo natural está carregado de significações, que influencia diretamente nas relações sociais; é nesse espaço físico que são tramados os fios da rede de significados sustentáculos da vida [...] Por outro lado, o território assume as feições da construção social e cultural do povo que o ocupa” (citado em Mauro, 2001: 10).

Esta habilidad *cosmográfica*, sirviéndonos del concepto propuesto por Paul Little, nos conduce hacia una comprensión del territorio por parte de los grupos étnicos que, trascendiendo la reducida percepción del imaginario moderno, coloca el debate sobre el territorio en un escenario mucho más denso que el empleado normalmente por la economía-mundo y sus actores políticos y económicos. En el preámbulo al libro *Urihi a: a terra-floresta yanomami*, de Bruce Albert e William Milliken (2009), el dirigente yanomami Davi Kopenawa relata y describe la percepción étnica sobre la tierra-floresta, a la que llaman *urihi a*. Frente a lo que considera la percepción occidental sobre la selva, como algo muerto y puesto sobre el suelo sin sentido, Davi Kopenawa describe un mundo plenamente vivo debido a la interacción de los diversos seres que lo habitan y de la acción de los espíritus *xapiripë*, auxiliares de los chamáns yanomami. Las hojas brillantes de los árboles, la presencia del agua en la tierra, los perfumes de la selva, la lluvia atraída por la floresta y el soplo vital, *wixia*, que es el que permite a las plantas continuar creciendo; todas esas dimensiones reflejan que la tierra-floresta es un sistema plenamente vivo. “Esse sopro vem do fundo da terra, lá onde repousa seu frescor. Ele também está em suas águas”. Davi Kopenawa describe las consecuencias que sobre la tierra-floresta, y todos sus habitantes, puede tener la acción del que define como *o/ hombre blanco*. Y en esa mediación intercultural, pues sabe que está hablando a un público que no es yanomami, afirma: “O que vocês chamam ‘natureza’ é, em nossa língua, *urihi a*, a terra-floresta (...) A floresta não existe sem razão. Os *xapiripë* vivem nela, e *Omama* quis que protegéssemos suas moradas” (Albert y Milliken, 2009: preámbulo).

Todo esta densidad simbólica, cosmográfica, y todo el bagaje territorial es lo que entra en juego cuando un hecho objetivo, espacio-temporal concreto, como el avance de un frente extractivo - minería, hidrocarburos, infraestructuras - con toda su territorialidad invasiva. La reacción de los Estados modernos no siempre consigue sentar las bases para una convivencia posible; como advierte una vez más Paulo Celso de Oliveira, “uma concepção que tenha a propriedade privada como parâmetro distorce o significado dos territórios indígenas, que são, por excelência, direitos coletivos” (cf. en Mauro, 2012: 2).

El alerta que la Supraprocuradora Geral Deborah Duprat sobre el hecho de que nos situamos delante de sociedades lingüísticamente distintas es un hecho clave, tanto para comprender la naturaleza del conflicto que se cierne sobre el control del territorio, como para aprehender la percepción que sobre él elaboran los grupos étnicos que lo habitan. En el caso del pueblo indígena macuxi, habitante de las regiones de sabanas, campos naturales y sierras que se encuentran entre los valles del río Rupununi y el Uraricoera, y con el que construimos nuestro trabajo de campo, encontramos algunos conceptos en su lengua que nos pueden aproximar a su concepción del ambiente en el que habitan y al que defienden frente a proyectos extractivos.

En el libro *Pemongon Pata* del antropólogo brasileño Paulo Santilli, encontramos el siguiente fragmento: “[...] É este o lugar que os Macuxi, como outros Pemon e os Kapon, denominam ‘pata’ - termo que se pode traduzir, em acepção ampla, por lugar – ou ‘patasek’, lugar preparado, lugar habitado: o espaço, tanto físico quanto social, que constitui uma aldeia. O termo utilizado com maior frequência pelos índios, nas conversas quotidianas, para designar a própria aldeia, isto é, a aldeia de nascimento ou a aldeia em que residem, é ‘upata’, o que se pode traduzir por meu lugar, minha casa ou mesmo lar. No entanto, ao modo do ‘cieng’ Nuer, a noção de ‘upata’ pode adquirir diversas significações, em razão do contexto em que é utilizada, por exemplo, na própria aldeia de quem a profere pode designar a sua residência ou, empregada por alguém muito distante da área em que vive, pode designar a região de procedência, o território tradicional do grupo étnico a que pertence ou, ainda, o país de origem”⁷³ (Santilli, 2001: 29).

Según el lingüista Ronaldo MacDonnell, refiriéndose a los trabajos lingüísticos realizados entre los macuxi a inicios de la década de 80 por Emanuelle Amodio y Vicente Pira, el término *pata* haría referencia a la idea de mundo, mientras que la expresión *pata’sé* reflejaría la localización de un lugar concreto; en términos de Santilli, el lugar habitado, espacio físico y social, que representa la aldea. En todo momento, *pata* se refiere a un lugar donde habitar, donde establecerse considerando la disponibilidad que en él encontramos de agua, leña, madera, caza, pesca, ..., todo lo que hace posible establecer el grupo precisamente ahí.

⁷³ Los destaques en negrita son del autor de este trabajo.

La expresión *Anna Pata* fue empleada por el Consejo Indígena de Roraima/CIR en el contexto de una campaña internacional en 2008 para la defensa de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. El lema de la campaña era “*Anna pata, anna yan; nuestra tierra, nuestra madre*”. La expresión *anna pata* es construida a partir del posesivo “*anna*”, que denota una posesión referente al que habla pero no al interlocutor que escucha. Es decir, significa *nuestra* (pero no tuya o vuestra). Se trata de un posesivo no inclusivo⁷⁴. Entonces *Anna pata*, según MacDonnell, podría ser traducida como “nuestra (pero no vuestra) tierra”, lo que tiene sentido porque es empleada en un contexto intercultural en el que las comunidades pretendían sensibilizar y buscar apoyo de otros sectores de la sociedad. Utilizada en este campo interétnico, la concepción del lugar nos lleva más allá de la aldea y se acerca a la idea que venimos expresando como *territorio*. En todo caso, con énfasis en la dimensión de lo que es sentido como propio y, por tanto, necesario para la vida del grupo y digno de ser defendido.

⁷⁴ La lengua macuxi tiene otro posesivo cuando quiere ser utilizado en sentido inclusivo; es “*u*”.

Segunda Parte

Raposa Serra do Sol,
localidad y globalidad

Iniciamos la segunda parte de nuestra investigación, dirigida al análisis de los datos a partir de una estructura espacio-temporal. Como definimos al inicio del trabajo, nuestra investigación pretende tener un carácter multiescalar y para ello seleccionamos cuatro niveles espaciales: América Latina en el sistema-mundo, Amazonia, Brasil y la escala local, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, donde se realizó el trabajo de campo. Pretendemos que haya así una cierta secuencia que nos aproxime, progresivamente, de lo global hasta la escala de la localidad, atravesando los diversos espacios que contextualizan los hechos y acontecimientos que en ella encontramos.

En todos los capítulos seguiremos una estructura similar, aunque no idéntica, que pretende dar cuenta de las cuatro dimensiones que indicamos en el capítulo metodológico: multiescalar, multitemporal, multiactorial y multisituada. De ese modo, para cada escala proponemos:

- Un breve análisis histórico del modo de operar del modelo extractivo-exportador como expresión de la economía-mundo, intentando siempre un destaque para el sector minero;
- Una aproximación más detallada a las características del nuevo ciclo expansivo del modelo extractivista - y particularmente minero - en los inicios del siglo XXI;
- Un análisis de la actuación, en cada escala espacial, de los actores estatales y supraestatales, así como de las organizaciones y pueblos indígenas;
- Una perspectiva de cómo se han ido configurando y consolidando las reivindicaciones y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El Capítulo 5 lo dedicaremos al análisis de las dinámicas globales y de cómo éstas se manifiestan, en este caso, en la región que denominamos América Latina. La asumimos como realidad territorial que nos ayuda a comprender la lógica de esa escala global, lugar de las decisiones, y del modo como los Estados-nacionales han ejercido su función mediadora e ideológica en el sistema-mundo. Al mismo tiempo, nos ayuda también a percibir las dinámicas generadas por los pueblos indígenas en esa escala también global, conquistando espacios de derechos en el sistema universal de derechos humanos, Naciones Unidas, y en el sistema regional de derechos humanos, Organización de Estados Americanos. En algunos momentos, enfocaremos intencionalmente nuestro análisis, dentro de América Latina, a la región de América del Sur, como parte de un

ejercicio permanente de aproximación geográfica y política hacia la escala local de nuestra investigación.

En el Capítulo 6 nos centraremos en la escala espacial de Amazonia, entendida como todo el espacio articulado por la cuenca fluvial, acunada por la Cordillera andina y que se conduce hasta las aguas del Atlántico, y conformada por territorios de ocho Estados nacionales y el departamento de Guyana francesa. Se trata de una escala espacial transnacional no estatal – en el sentido de que no representa la totalidad de los territorios nacionales implicados – más definida a partir de elementos bio-físicos y socio-culturales aunque totalmente comprometida con las políticas propias que cada uno de los Estados dirige hacia ella, sea individualmente o en común. Como ya explicamos al inicio de nuestro trabajo, consideramos que la escala espacial amazónica es estratégica desde el punto de vista analítico, sea para:

- a) discernir las dinámicas globales de la economía-mundo – por la concentración particular de bienes naturales de interés global y por la elaboración de narrativas globales;
- b) comprender la acción de los Estados implicados;
- c) explicar la naturaleza de los conflictos socio-ambientales-territoriales y el metabolismo político de las organizaciones indígenas de la región.

Los hechos y acontecimientos en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol también se explican, de modo singular, por su pertenencia a los imaginarios y las diversas conductas territoriales que se producen sobre o en la región amazónica.

El Capítulo 7 lo dedicaremos al análisis de la escala propiamente del Estado-nación; en este caso, de Brasil, país donde se encuentra la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Analizaremos la forma como el Estado brasileño ha ido construyendo su relación con su propia socio-diversidad étnica y territorial y con el modelo extractivo-exportador de naturaleza global, de modo particular en su región amazónica. Nos detendremos con un mayor detalle en el análisis del comportamiento del Estado brasileño en esta nueva fase expansiva de la economía-mundo que localizamos en los inicios del siglo XXI, coincidente con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, uno de los episodios políticos más singulares e intensos de la historia reciente del país. En este Capítulo aparece con mayor precisión el contexto próximo de políticas públicas que afectan más directamente a la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en relación a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y la expansión del extractivismo minero.

Por último, en el Capítulo 8 analizaremos la escala de la localidad en nuestra investigación, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Aunque localizada en el Estado de Roraima, al norte de Brasil, conceptualmente la situamos primero en el espacio *circum-Roraima*, territorio continuo de habitación de diversos grupos étnicos y actualmente dividido por los Estados nacionales de Venezuela, Brasil y Guyana Inglesa. Esta especificidad, común en las áreas de fronteras políticas diseñadas en el territorio

amazónico, nos permite considerar, aunque sea brevemente, la presencia de los tres Estados en toda la región *circum*-Roraima para, finalmente, incursionar en la localidad de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol.

Capítulo 5

Territorio y bienes naturales de América Latina para el sistema-mundo

El extractivismo orientado a la exportación, como expresión de la economía-mundo, no es una realidad nueva en la región, sino que tiene una “larga historia en América Latina” (Gudynas, 2009: 187). Para Raúl Zibechi, la expresión actual del extractivismo sería la “actualización del hecho colonial” (Zibechi, 2014: 76). El extractivismo ha permeado y determinado en buena parte las relaciones entre América Latina y los centros de poder político y económico en las diferentes etapas de la Colonización. Ha estructurado también las relaciones sociales que se establecieron al interno de las sociedades coloniales y, posteriormente, de los Estados nacionales.

El extractivismo ha sido elemento fundamental, además, en la configuración territorial del continente hasta nuestros días. Regiones enteras han marcado su desenlace histórico a partir de su disposición en el tablero de intereses del extractivismo colonial. Estos elementos contribuyeron considerablemente a la figuración de la metáfora latinoamericana en el ideario europeo: la nueva tierra de bienes abundantes y disponibles para ser aprovechados. “La incorporación de la naturaleza latinoamericana al sistema-mundo capitalista en condición de inferioridad, como mero recurso a ser explotado, fue parte sustantiva de la lógica de la modernidad/colonialidad” (Composto y Navarro, 2014: 42). En el conocido ensayo “Las venas abiertas de América Latina”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano afirmaba que “América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna” (1970: 16).

El sistema-mundo moderno-colonial ha encarnado en América Latina la contradicción que le es sustancial en cuanto modelo: se ha demostrado permanente en la historia y al mismo tiempo cíclico; tiene un componente estructurador pero también es dinámico. Como no es un fenómeno nuevo en América Latina, es imprescindible que

incursionemos en su proceso histórico; y como es, al mismo tiempo, un fenómeno dinámico, necesitamos también comprenderlo a partir de la especificidad de su manifestación en los días de hoy. Esta es la necesaria dimensión *multitemporal* de los estudios de Ecología Política, a la que nos referíamos en el capítulo metodológico. Nos proponemos, por tanto, seguir en este trabajo los cursos de esta dialéctica entre el fenómeno extractivista como parte del núcleo del proceso colonizador y, al mismo tiempo, como expresión concreta y actual de la coyuntura de nuestros días.

5.1. Minería y extractivismo en la historia del proyecto colonial sobre América Latina

Las minas son manantial efectivo de riqueza, pero no abren su seno sino con el dolor y el sudor del trabajo humano.

Bartolomé de las Casas. *Historia de las Indias*, libro I, caps. 65 y 66

Como ya destacamos en el segundo capítulo, la ocupación y colonización de América Latina dio origen a la actual concepción geográfica y sistémica del mundo moderno, en la cual se establecen relaciones - políticas y económicas - de dominio y subordinación entre las diversas regiones del planeta. En el seno de este sistema-mundo anida el modelo extractivo-exportador, que va a tener una expansión definitiva con el proceso colonizador sobre América Latina.

Hasta ese momento, las relaciones internacionales leídas desde las Cortes europeas se traducían en una necesidad permanente de establecer contactos y rutas directas con las Indias Orientales para reducir los costes de la adquisición de especias codiciadas: pimienta, jengibre, nuez moscada o canela. Los metales preciosos eran utilizados como medio de pago para el tráfico comercial. La posibilidad de encontrar otras rutas adentrándose en el Océano Atlántico animó a Colón a emprender el viaje (Pérez, 1985: 54).

El proyecto naval de Colón encontró en América un territorio tan inesperado para él como real y concreto para los pueblos que allí vivían. A partir de ese momento se produce un giro, no solamente en su viaje, sino en la misma Historia de la Humanidad. Si de un lado asistimos a lo que Todorov definió como “(...) tal vez, el encuentro más asombroso de nuestra Historia” (1982: 14), de otro lado comenzaba una de las iniciativas de ocupación y genocidio más violentas que se han conocido: “povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequência do que hoje se chama, num eufemismo envergonhado, ‘o encontro’ de sociedades do Antigo e do Novo Mundo” (Carneiro da Cunha, 1992: 12).

5.1.1. Minería, territorios y esclavitud

Entra las actividades extractivas desarrolladas excesiva y profusamente por la empresa colonial destacó la minería, implantada desde el inicio en buena parte de la geografía inédita para los europeos. “Uno de los aspectos económicos que relacionan España con sus colonias americanas en la Edad Moderna lo constituye el sector minero” (Pérez, 1985: 53). La actividad minera abarcó una diversidad de sustancias: desde minerales metalíferos, como el oro, la plata, el estaño o el cobre, hasta no metalíferos como la esmeralda, la sal o el azufre (Jara 1966: 40).

La búsqueda de oro asumía, por momentos, características de una verdadera obsesión en la empresa colonial española. “El oro determinará el carácter apresurado de la explotación y de la conquista” (Pérez, 1985: 55). Entre los estremecedores registros del religioso Fray Bartolomé de las Casas encontramos evidencias de este ansia en que se había convertido la búsqueda de oro: “(...) mataban los que querían, e los que tomaban a vida mataban a tormentos porque dijese de otros pueblos de oro, o de más oro de lo que allí hallaban, e los que restaban herrábanlos por esclavos; iban después, acabado o apagado el fuego, a buscar el oro que había en las casas” (Casas, 1985: 12).

Según Tzvetan Todorov, la Corona española, patrocinadora del viaje de Colón, y buena parte de su tripulación, explicitaban un claro interés en la búsqueda de este metal y de otras piedras preciosas en las nuevas tierras ocupadas. Por ello Colón, con el objetivo de mantener su expectativa, no ahorra palabras en sus escritos para garantizar que la abundancia de oro y metales preciosos no decepcionaría a nadie. “El oro, o más bien la búsqueda de oro, pues no se encuentra gran cosa en un principio, está omnipresente en el transcurso del primer viaje. En el día mismo que sigue su descubrimiento, el 13 de octubre de 1492, ya anota en su diario: ‘No me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro’ (15.1.1492). (...) Son también los indicios que cree encontrar de la presencia del oro los que deciden su recorrido. ‘Determiné [...] ir al Sudoeste a buscar el oro y piedras preciosas’ (Diario, 13.10.1492) (...) Así va errando Colón, de isla en isla, pues es bastante posible que en eso hayan encontrado los indios una forma de deshacerse de él” (Todorov, 1982: 18).

En su segundo viaje, entre los 1.500 hombres reclutados para la travesía, se encargó de incluir entre ellos “gente trabajadora ... para sacar el oro de las minas, así como herramientas; al año siguiente se pedía a los Reyes Católicos que enviaran lavadores de oro y mineros de Almadén” (Pérez, 1985: 55)⁷⁵. También Eduardo Galeano repara en

⁷⁵ Almadén es un municipio español que pertenece a la provincia de Ciudad Real, en Castilla La Mancha. Es reconocido hasta hoy por disponer en su suelo de una de las mayores concentraciones de mercurio del mundo. Sus minas son explotadas desde hace 2.000 años y en 2012 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a la ciudad eslovena de Idrija, por poseer las mayores minas de mercurio del mundo y como ejemplos únicos de la explotación de este metal. “El mercurio constituye la base de la obtención de la plata por el método de amalgamación. Se llevaba de España (Almadén) a

esta especie de obsesión presente desde los primeros momentos: “Con despecho escribía Colón a los reyes, desde Jamaica, en 1503: ‘Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especierías,...’” (1970: 14).

El proceso de ocupación territorial y el de extracción minera caminaban de la mano. Pérez Sáenz de Urturi registra las principales áreas extractivas identificadas en la primera fase de colonización en función del mineral explotado:

- Minería aurífera: Antillas, donde se dio el llamado ‘ciclo del oro’ entre 1494 y 1525, y México continental, donde Cortés se hizo con el tesoro azteca; Panamá, llamada la “Castilla del oro”; Ecuador, que verá levantarse la ciudad de Cuenca en 1557 junto al territorio indígena de Tumibamba⁷⁶; Bolivia, Perú o Chile.
- Minería de la plata: con ricos yacimientos en México junto a los cuales se iban construyendo ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Tasco o Guadalajara; virreinato del Perú, especialmente en la zona alta, actual Bolivia.
- Otros minerales. Destacaron los yacimientos de cobre en Michoacán-México, en Cuba o al norte del actual Chile; el descubrimiento de mercurio en diversas zonas de México y del virreinato de Perú (Huancavélica, especialmente, en 1563). Según los registros, la extracción de mercurio en Huancavélica fue una “devoradora de mano de obra” (Jara, 1966: 25);

Muchos de estos lugares han quedado marcados y nos devuelven como espejos algunas de las características que en el capítulo tercero habíamos analizado como propias del extractivismo-exportador: carácter cíclico, potencial configurador de los territorios y condición centrípeta y poco sinérgica.

Uno de estos ejemplos es el Cerro de Potosí, en la región central de la actual Bolivia, y que ya había sido habitado anteriormente por grupos indígenas incas. No obstante, solo cobró visibilidad a partir de 1545 con la llegada de los europeos y el descubrimiento de la veta de plata. Era el colofón a numerosas expediciones frustradas en busca del “cerro que manaba plata”, pues en la comprensión de aquel tiempo las piedras preciosas manaban, nacían, brotaban de algún lugar. En poco más de 30 años, Potosí llegó a tener una población igual o superior a importantes ciudades de la metrópolis castellana como Sevilla (Pérez, 1985: 60). Se convirtió en uno de los principales nodos del imperio.

Difícilmente se podría calcular el volumen, mucho menos el valor, de la plata que salió de las entrañas de Potosí para la metrópolis castellana. Don Quijote de la Mancha lo reflejó e inmortalizó en uno de sus diálogos con Sancho Panza: “Si yo te hubiera que pagar, Sancho – respondió Don Quijote –, conforme lo que merece la grandeza y calidad

América hasta que se descubrió el importantísimo yacimiento de Huancavélica, en Bolivia” (Pérez, 1985: 68).

⁷⁶ Para un análisis más detallado de la relación entre la expansión minera y el nacimiento de nuevos núcleos urbanos, ver Pérez Sáenz de Urturi, Juan-Eusebio (1985: 86 y ss)

deste remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí fueran poco para pagarte (...)"'. Uno de los autores más citados, Alejandro de Humboldt, afirmó que entre 1545 y 1803 salieron de Potosí la cantidad de 1.095.500.000 de pesos (citado en Pérez: 1985).

A mediados del siglo XVII, la plata constituía la práctica totalidad de las importaciones de metales de la metrópolis europea. El historiador y economista Earl Jefferson Hamilton, citado por Galeano por su obra "El Tesoro Americano"⁷⁷, afirmó que entre 1503 y 1660 habrían llegado a Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata: tres veces más que todas las reservas de plata existentes en ese momento en Europa.

Pero del mismo modo que Potosí fue transformada violentamente para mejor servicio a la metrópolis, con la misma rapidez fue cayendo en el olvido a partir del siglo XVII, cuando buena parte de su plata ya había sido arrancada y el cerro se extenuaba. El declive de Potosí se inició a partir de 1640, disminuyendo significativamente la producción extractiva de la plata y el tamaño de su población (Jara, 1985: 60). Con el abandono de la ciudad, la actividad económica en Potosí se recondujo hacia otro tipo de extractivismo minero que, curiosamente, había sido despreciado inicialmente por la metrópolis: las minas de estaño.

André Günder Frank (1965) afirma que las regiones que hoy arrastran una situación de mayor pobreza son aquellas que en el pasado tuvieron lazos más estrechos con la metrópolis y disfrutaron de períodos de auge. "Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y ocho millones de cadáveres de indios" (Galeano, 1970: 29). Por otro lado, la incidencia de la economía minera ha sido un elemento configurador de la sociedad andina centralizada en Potosí. De hecho, según M^a Ángela Comegna (2006), la auto-identificación de la población como indígena en esta región no siempre ha sido bien vista. A partir de 1952, precisamente con la nacionalización de las minas de estaño por la Revolución Nacional, se pasó a una "campesinización" de la población autóctona que, solo recientemente, ha iniciado un proceso de reivindicación étnica.

Del lado de la empresa colonial portuguesa, encontramos un caso similar en la región brasileña de Minas Gerais, la *Potosí de Oro*. También ella ganó una visibilidad no buscada cuando fue descubierto el manantial de oro aluvial en los lechos y bancos de ríos y riachuelos. La extracción portuguesa en Brasil a partir de estos descubrimientos impuso un ritmo singularmente intenso. Solo durante el siglo XVIII, la extracción portuguesa en Brasil superó todo el volumen de oro que España había extraído de sus colonias desde su llegada y hasta ese momento (Furtado, 1974). Afirma Celso Furtado que resulta muy difícil explicar el desarrollo industrial de Inglaterra durante aquella época sin hacer

⁷⁷ Earl J. Hamilton fue uno de los historiadores de la economía más influyentes en el siglo XX, particularmente por su teoría sobre el comportamiento de los precios y la inflación como fenómenos estructurales para explicar los movimientos profundos de la economía moderna. Su obra "El Tesoro Americano", en la cual analiza la evolución económica de la metrópolis española a partir del siglo XVI, fue publicada originalmente en 1934 y la primera versión española llegó más de cuarenta años después.

referencia al oro brasileño, que le permitió pagar importaciones esenciales de otros países y concentrarse en el sector manufacturero.

Aparte de la minería colonial, otras actividades vinculadas con el extractivismo vegetal también marcaron la historia de múltiples rincones del continente latinoamericano, convirtiéndose en ilustraciones clarividentes de la plantación colonial extractivista a servicio de la metrópolis, semillero de la agroindustria actual. A modo de ejemplo: la explotación del azúcar (región del Caribe, Nuevo Mexico, costa peruana y litoral brasileño); el cacao (Venezuela y costa brasileña); el algodón de Maranhão; el café (nordeste brasileño); o las frutas (Colombia, Ecuador, Brasil. Panamá).

De otro lado, la empresa extractiva modeló también las relaciones sociales internas en la colonia. Diversas instituciones sociales y jurídicas desarrolladas desde el inicio de la colonización – de la esclavitud a la encomienda o al sistema de la mita - tenían como objetivo estructurar las actividades de extracción y exportación de productos autóctonos. Para ello no se midieron esfuerzos en el dominio y esclavización de los pueblos indígenas que allí vivían. Álvaro Jara emplea este eufemismo para confirmar una realidad evidente: “Sin la existencia de mano de obra abundante y prácticamente sin precio, otro elemento conformativo de la estructura, no habría sido posible la organización exitosa y productiva de la actividad minera” (1966: 26).

Pérez Sáenz de Urturi recuerda que la institución de la esclavitud indígena⁷⁸ estuvo en vigor, formalmente, hasta mediados del siglo XVI, aunque en la práctica se extendió hasta 1700 (1985: 97) y mucho después. Paulo Santilli registra que en la región de la Amazonia brasileña la esclavitud solo dejó de apoyarse oficialmente en 1755, pero continuó en diversas formas de reclutamiento y explotación hasta los primeros compases del siglo XX (Santilli, 2002).

Particularmente la minería se apoyó en la utilización intensiva de mano de obra esclava, cuya principal consecuencia fue una población diezmada. “Viendo los españoles que tenían cargo de consumir los indios en las minas sacando oro y en las otras sus granjerías y trabajos con que los mataban, que cada día se les hacían menos, muriéndoseles, no teniendo más consideración de a su temporal daño y lo que perdían de aprovecharse, cayeron en que sería bien suplir la falta de los que perecían, naturales desta isla, trayendo a ella de las otras islas a la gente que se pudiese traer” (Casas, 1956: 157). La explotación intensa de la mano de obra indígena hasta la muerte, constitutivo de genocidio, se desarrollaba también en otras actividades extractivas, como la de “sacar o pescar las perlas”, según recoge el mismo religioso Bartolomé De las Casas.

⁷⁸ Nos centramos en nuestro trabajo en la esclavitud indígena, que siguió derroteros diversos de la esclavitud de la población negra arrancada de África.

5.1.2. Estados independientes, economías dependientes: del colonialismo interno al neoliberalismo

La configuración de los Estados latinoamericanos independientes, una vez desfallcidos los proyectos libertarios, no revirtió esta historia. La estratificación social que quedó instalada en las nuevas sociedades nacionales latinoamericanas continuó situando a la población indígena y mestiza en la base social, participando del proceso económico con su fuerza de trabajo precarizada. Las nuevas instituciones políticas mantuvieron las mismas lógicas económicas, espaciales y de fragmentación social que les permitían mantener una relación de intercambio con las zonas económicamente más dinámicas del mundo.

Al mismo tiempo, la historia económica de América Latina nos sugiere algunas transformaciones singulares durante el siglo XIX. La Revolución Industrial provocó una entrada importante de capital inglés al mismo tiempo que una salida, de nuevo extractiva, de importantes cantidades de metales preciosos. Las metrópolis española y portuguesa van perdiendo relevancia y su modelo colonial comienza a ser superado por un nuevo momento marcado por el desarrollo industrial incipiente en Gran Bretaña. Este nuevo escenario convive con los procesos de independencia de algunas de las colonias. Las élites criollas, que van a tomar en sí el legado colonial, trabaron una lucha política que les permitiera, en la nueva situación, mantener vínculos directos y privilegiados con los nuevos centros económicos. Y estos vínculos serán posibles en la medida en que conserven el control y poder sobre los territorios y sobre la producción y extracción orientada a la exportación. O sea, la concentración de tierras y poder en manos de la clase política dominante, encabezada en ese momento por los terratenientes rurales.

Algunos autores reflexionan sobre este momento histórico de América Latina como una aparente, insuficiente y periférica incorporación de América Latina al sistema capitalista mundial. Se integra asumiendo un rol dentro de la división internacional del trabajo: alimentar a los centros económicos de materias primas.

Este rol asumido ahora desde la situación de independencia política representará, en el último tercio del siglo XIX, un momento de expansión exportadora y crecimiento económico *hacia fuera*⁷⁹. El apogeo extractivista provocó reconfiguraciones territoriales y nuevas fronteras del capital en todo el continente. Argentina y Uruguay se especializaron en una pauta exportadora marcada por el cuero, carne, lana y cereales. En Chile aumentó la salida de cobre y en Brasil el latifundio cafetero del nordeste y sudeste fue el responsable del crecimiento económico y urbano en São Paulo. En

⁷⁹ A este periodo corresponde la implementación de la llamada *industria bananera*, principalmente en países centroamericanos. Grandes corporaciones como la United Fruit Company lideraron un sistema de *plantatio* para exportación que ocasionó el desplazamiento de comunidades indígenas y la subordinación de la economía de algunos países (como Costa Rica) hasta finales del siglo XX (Drori, I. y Carvajal, G., 1987)

México, además del café y el cuero, también el ganado o el petróleo. En los países amazónicos, como será detallado posteriormente, el auge del caucho para alimentar la naciente industria automovilística. La inversión directa de los países industrializados en América Latina - Francia, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra - se concentró, de hecho, en las infraestructuras que permitían la salida de los productos básicos, principalmente en las líneas de ferrocarril.

Desde el punto de vista específico de la economía minera, los años posteriores a las guerras de independencia posiblemente supusieron un tiempo de cierta desconexión o contracción económica (Assadourian *et al.*, 1980: 46). Esto no necesariamente quiere decir que la actividad minera se detuvo, aunque estuviese en un proceso de redimensionamiento. De hecho, José Deustua afirma que en las primeras décadas del siglo XIX hubo momentos de auge y de recuperación en algunas de las minas coloniales. En 1840, según los datos que el autor recoge, el 64% de la producción mundial de plata todavía se extraía de minas mexicanas, peruanas, chilenas y bolivianas (Deustua, 1984:83). Defiende Deustua que, mientras en la historiografía oficial, elaborada por la población criolla y las nuevas aristocracias, la decadencia de la actividad minera se da por hecho, en la historia local protagonizada por las bases de la pirámide social la minería continuaba siendo fuente de ingresos y se conectaba con otros sectores como la agricultura o la ganadería.

El siglo XIX también estaba conociendo el despliegue económico de Estados Unidos en el norte del continente. El proceso industrial que vivía EEUU no necesitaba tanto del oro o la plata y sí de otros minerales como el hierro o el carbón. Según José Deustua, las historias económicas de EEUU y de América Latina, ambas coloniales, coincidieron en la explotación y eliminación de las poblaciones indígenas⁸⁰ y en el desgarramiento ambiental producido. Ahora bien, lo que las diferenció durante el siglo XIX fue que el país del norte consiguió integrar su minería incipiente en el aparato económico; sin embargo, América Latina, que disponía de una minería madura, la convirtió en una economía de exportación controlada, principalmente, por compañías extranjeras a final de siglo XIX. “La minería jugó un papel desarticulador de las economías nacionales en vez de integrarlas a un proceso nacional” (Deustua, 1984: 95). Estábamos delante de nuevos países independientes con viejas economías dependientes.

Las estructuras económicas con que las sociedades latinoamericanas llegaron al siglo XX estaban determinadas por todo este proceso colonial. Sin embargo, en la primera mitad de este siglo América Latina va a vivir, una vez más, las consecuencias del declive del momento de auge exportador vivido anteriormente. La caída de los precios a nivel mundial, la substitución de fibras naturales por fibras sintéticas (consecuencia de la

⁸⁰ Sobre la historia de la destrucción de los pueblos indígenas de América del Norte en el siglo XIX, ver Brown, Dee Alexander (2010). *Enterrem meu coração na curva do rio. A dramática história dos índios norte-americanos*. Porto Alegre: L&PM.

progresiva industrialización) y la crisis financiera de 1929⁸¹ colocaron a las economías periféricas latinoamericanas delante de un nuevo escenario de recesión.

En la segunda mitad del siglo XX, y como ya adelantamos en el Capítulo 1 de este trabajo, una serie de investigadores relacionados, de algún modo, con la teoría de la dependencia latinoamericana, van a intentar formular alternativas de políticas económicas que rompiesen con el ciclo perverso de la especialización primaria y la dependencia estructural. Raúl Prebisch⁸² puso en duda la tesis hegemónica en aquella época de que el desarrollo tecnológico simplemente se extendería por todos los lugares de modo automático (Mathis *et al.*, 1997: 25). Prebisch defendía que las relaciones entre centro y periferia en el mundo eran relaciones de dependencia estructural, pues ambos formaban parte de un único sistema económico controlado por el capitalismo internacional⁸³.

La propuesta de Prebisch para superar estas relaciones de dependencia de los centros económicos situados fuera de América Latina pasaba necesariamente por revertir la matriz económica de sus Estados, excesivamente orientada hacia la exportación de materias primas y la importación de manufacturas, perdiendo siempre en las relaciones de los términos de intercambio. Para sustituir las importaciones y diversificar la estructura productiva de las sociedades latinoamericanas, el camino era el desarrollo decidido de la industrialización en la región. Surge así el modelo económico de la Industrialización para Sustitución de Importaciones – ISI, que se extendió por toda América Latina durante las décadas de 50 y 60.

Los años 70 van a suponer un cambio de rumbo importante. La confluencia de gobiernos militares dejó una página oscura en la historia reciente de la región. Desde el punto de vista económico, los gobiernos militares llevaron a sus Estados a un proceso de endeudamiento, público y privado, sin precedentes, en aras de un proyecto desarrollista. La sociedad civil, víctima de la represión y la violencia institucionalizada,

⁸¹ En las primeras décadas del siglo XX Estados Unidos había ido ocupando un papel de actor principal en las relaciones con América Latina. De él procedía la mayor parte de las inversiones directas. La crisis de 1929 vendrá a impactar, fuertemente, por este motivo, las economías latinoamericanas, aunque el declive ya se venía sintiendo unos años atrás.

⁸² Raúl Prebisch, economista argentino, fue Secretario General de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Comisión de las Naciones Unidas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Es una de las referencias de primer nivel del pensamiento económico y político latinoamericano del siglo XX.

⁸³ Este análisis conducía a afirmar que existía una *especificidad histórica* de la situación de subdesarrollo que vivía América Latina, pues su origen estaba en la convivencia dentro de un mismo sistema económico de sociedades nacionales que partían con economías diferentes en su sistema productivo y ocupaban posiciones diferentes en la estructura global del sistema. Autores latinoamericanos como Cardoso, Faletto, Celso Furtado y Theotônio dos Santos desarrollaron el pensamiento de Prebisch en las décadas de 60 y 70.

además de la precarización de las economías domésticas, se articuló en todo el continente en defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Así, la década de 80 en América Latina deberá responder a dos desafíos de calado que ocuparán todas sus energías políticas y sociales: de un lado, la crisis económica, con un endeudamiento externo en progresivo aumento por causa de la política de intereses establecida desde los centros financieros de Europa y EE.UU. y un aumento descontrolado de la inflación; de otro lado, el proceso de redemocratización, con el esfuerzo por la re-institucionalización democrática y la progresiva superación de la hegemonía militar en la vida pública.

Desde el punto de vista económico, EE.UU y Europa asumieron una intervención muy determinada en las economías latinoamericanas, preocupados por la sensación de quiebra que se podría generar en el sistema bancario internacional si los Estados latinoamericanos no devolviesen los préstamos solicitados durante los 70. Ambos proponían una planificación de la economía dirigida al ajuste y la reforma de los sistemas productivos, de modo que las economías latinoamericanas pudiesen obtener de nuevo las capacidades para seguir pagando la deuda con la banca internacional. Estos planes de ajuste se resumían en una batalla de medidas económicas, de corte liberal, que han venido a encuadrarse en el llamado “Consenso de Washington”.

Estas políticas de ajuste estructural no consiguieron generar los procesos prometidos de reducción de la desigualdad social y crecimiento económico sustentado. Al contrario de eso, la desigualdad y la pobreza aumentaron, a la vez que se mantenía o aumentaba la deuda y se perdía control y soberanía sobre los bienes naturales. Las teorías del “sacrificio necesario”, que se extendían a la idea de “territorios sacrificables” (Svampa, 2008: 8), perpetuaban una realidad social insustentable a finales de los años 90, generando progresivas crisis sociales, políticas y económicas.

En la medida en que el neoliberalismo se afianzaba en América Latina, los Estados competían “por la radicación de porciones del capital global en sus territorios” (Composto y Navarro, 2014: 52) o, en otras palabras, por la consolidación de “enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial” (Svampa, 2012: 35). Es lo que Milton Santos describe como la “guerra de los lugares” a la que nos habíamos referido en el Capítulo 2 de este trabajo. Diversos Estados latinoamericanos, detentores de una riqueza importante en bienes naturales, empeñaron grandes esfuerzos para atraer inversiones extranjeras hacia la minería, y uno de los principales instrumentos fue la reforma de sus legislaciones mineras (Saade, 2013).

Durante la década de 90 se produjo un incremento significativo en el volumen de inversiones extranjeras en el continente relacionadas con la industria extractiva. Según datos recogidos por la organización CIDSE, entre 1990 y 2001 cuatro de los diez principales países destinatarios de las inversiones mineras en el mundo se encontraban en América Latina: “Chile, Argentina y Perú se sitúan, por ejemplo, entre los países que

más inversiones concentran en exploración y exportación de minerales” (Padilla, 2009; 7). La inversión minera en América Latina se multiplicó pasando de significar el 12% de la inversión minera mundial a inicios de la década de 90 a representar el 33% de toda la inversión a comienzos de la década de 2000 (ACD, 2009; 102).

La expansión del sector minero en la década de 90 se explica por el contexto de extensión de las políticas neoliberales en el continente, los Planes de Ajuste Estructural y la consolidación del regionalismo abierto. Instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y la propia Comisión Económica para América Latina – CEPAL, a partir de la constatación del aumento de precio del oro en el mercado mundial, incentivaron a los gobiernos latinoamericanos para avanzar en la localización de yacimientos y actualizar sus marcos legales (ACD, 2009, 102). También intervinieron facilitando a las empresas transnacionales del sector créditos a la exportación y facilidades para la inversión. Las principales empresas mineras en este momento ya procedían de América del Norte, principalmente empresas canadienses, mientras que la participación europea se fue concentrando en la banca; Crédit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paris o Société Générale estaban entre los principales inversores de la industria minera en América Latina entre 2000 y 2006 (citado en Padilla, 2009; 15).

5.2. Nuevo ciclo extractivista y re-primarización en los albores del siglo XXI

El extractivismo, en fin, suele llevar a la autodestrucción, aunque su análisis también puede ser un buen bagaje para emprender otros caminos.

Hans-Jürgen Burchardt, 2014: 13

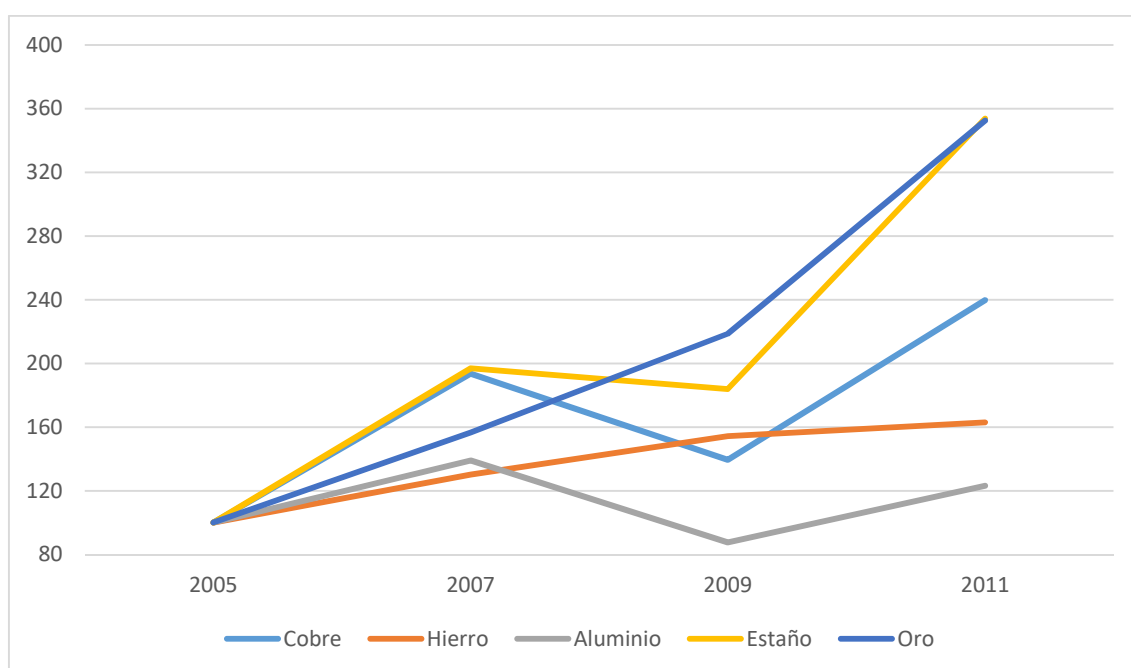
La economía-mundo ha desencadenado un nuevo ciclo de intensificación del proceso extractivo y la circulación de bienes primarios en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, sostenido fundamentalmente por un comportamiento alcista de los precios de bienes primarios fundamentales – como podemos ver en el Gráfico nº 1, que recoge la evolución de los precios para algunos de los principales bienes minerales - y de su demanda a nivel global, así como por la expansión de algunas economías domésticas.

A pesar de la creciente consciencia sobre los límites de los recursos naturales en nuestro planeta y sobre las consecuencias que ya se están produciendo derivadas del modelo económico, la demanda por energías primarias, combustibles fósiles y metales aumentó y va a continuar aumentando en las próximas décadas. Según Maggio y Cacciola (citados

en Burchardt, 2014), hasta 2030 se prevé un aumento del 45% en la demanda mundial por estos bienes. Paul Little relaciona que justamente hasta 2030, de seguir las actuales perspectivas de crecimiento, podrá haber en el mundo hasta 3.000 millones de nuevos consumidores de clase media. La sustentabilidad de este modelo está claramente en tela de juicio, lo cual no ha generado aún grandes cambios ni en las perspectivas de los consumidores ni, como afirman los datos, en el comportamiento de la demanda.

Gráfico 1. Evolución de los precios de productos minerales principales, 2005-2011.

Fuente: CEPAL, 2012. Elaboración por el autor. (Año 2005 = 100%)



Esta expansión de la demanda continúa respondiendo a los enormes y crecientes indicadores de producción y consumo de los países industrializados - incluso en plena crisis económica - aunque este no ha sido el único elemento explicativo. Pero debemos considerar también el extraordinario crecimiento económico experimentado en los últimos quince años por algunos países asiáticos y por los llamados “países emergentes” (Burchardt; 2014; Little, 2014: 409). En 2012 los cinco países reunidos bajo las siglas BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - eran responsables por la producción del 21% del PIB mundial, significaban el 42% de la población mundial y disponían del 42% de la fuerza de trabajo. Si a eso le unimos la relación de liderazgo, político y económico, que cada uno de estos países posee sobre sus entornos regionales, así como el proceso de transnacionalización que han imprimido en muchas de sus empresas, podemos concluir que hemos asistido en estos albores del siglo XXI a un nuevo dinamismo de concentración en el cuadro internacional.

De entre todos estos países destaca de un modo particular China, cuyo crecimiento económico la ha situado, en pocos años, como primera economía mundial, superando la hegemonía estadounidense y europea⁸⁴. En 2010, fue responsable por el consumo del 20% de la producción mundial de energía de origen fósil, el 23% de los productos agrícolas básicos y el 40% de los metales comunes⁸⁵.

Esta nueva fase expansiva del Mercado global se ha manifestado de modo particular en América Latina, como constatan diversos autores e investigadores⁸⁶ y reconocen los propios organismos oficiales (CEPAL, 2012), desencadenando un nuevo momento de primarización de las economías latinoamericanas (CEPAL, 2010: 9). Maristella Svampa ha caracterizado este tiempo para América Latina como el paso del Consenso de Washington al “Consenso de las *Commodities*”; si el primero ponía en valor la economía financiera, el segundo se basa en la exportación de bienes primarios a gran escala (Svampa, 2012).

Composto y Navarro (2014) identifican una serie de dinámicas globales que están transformando todo el escenario económico mundial en referencia al aprovechamiento de bienes naturales y que han afectado al Estado como escala intermediaria entre lo local y lo global. Entre esas dinámicas, los autores destacan cuatro (2014: 51):

- agotamiento y/o escasez de bienes naturales no renovables que resultan estratégicos, como los hidrocarburos y los minerales tradicionales;
- hallazgo de hidrocarburos no convencionales y minerales raros;
- uso intensivo de bienes naturales imprescindibles para la reproducción de la vida – como el agua – tornándolos bienes disputados y/o con dificultades de adaptarse naturalmente al ritmo acelerado de extracción;
- la conversión de bienes naturales en *commodities* sujetos, ellos y la propia tierra, a las lógicas de inversión y especulación de la economía financiera.

Estos nuevos elementos han introducido cambios en el juego de intereses y de estrategias, tanto en las agendas del capital productivo y financiero como en las agendas de las instituciones multilaterales e inter-estatales. Pertenecen a estas nuevas transformaciones: los cambios en el sector energético global, el desarrollo de la industria de los agro-bio-combustibles, el fomento de la hidro-energía como energía

⁸⁴ Durante los años 90 China había conseguido reducir significativamente los niveles de pobreza y exclusión económica, generando nuevas oportunidades y ritmos de consumo, con el consecuente aumento de su demanda.

⁸⁵ En un estudio presentado por la Agencia Internacional de Energía-IEA en diciembre de 2010 se trazaban las principales tendencias y perspectivas en relación a la demanda de energía para el período 1990-2035. En todas las informaciones China jugaba un papel protagónico. De modo particular, entre 1990 y 2010 China ya había duplicado su demanda de energía fósil proveniente del carbón y hasta 2035 aún la aumentaría en un 50% adicional. Liderará también hasta 2035 el aumento de la demanda mundial de gas natural en un 44%.

⁸⁶ Burchardt, 2014; Cardoso y Holland, 2010; Matthes y Crnic, 2012.

limpia, la geopolítica del desarrollo sostenible vinculado a nuevas formas de mercantilización y financiarización de la naturaleza, el descubrimiento de nuevos nichos de mercado en la llamada *economía verde* o la multipolarización de las dinámicas de poder con protagonismo singular para los países emergentes, entre muchos otros fenómenos. Estas nuevas dinámicas globales intervienen en las decisiones y en la capacidad de mediación, siguiendo el esquema del análisis de sistema-mundo, de los Estados-nacionales y de aquellos espacios interestatales de integración regional que los mismos conforman entre sí. Ambos toman medidas que conciben en la perspectiva de una más completa inserción en el mercado internacional o escala global.

En América del Sur, por ejemplo, la expansión de la frontera extractivo-exportadora a inicios del siglo XXI va a caminar claramente articulada con las políticas de integración de infraestructura impulsadas a partir de 2001 por los doce Estados de la región bajo la ya mencionada iniciativa IIRSA. Esta iniciativa es un intento mancomunado de articular proyectos transnacionales e interligados de infraestructura física de modo que los bienes extraídos y producidos en la región puedan circular con más fluidez, alcanzando y conectando las orillas de los océanos Pacífico y Atlántico y pretendiendo “superar” ambientes exigentes como la floresta amazónica o la cordillera andina, en dirección hacia los centros económicos globales. Se constituyó como un foro de diálogo y de planificación cuyo objetivo principal era promover, precisamente, el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión integral.

El resultado es una re-configuración del espacio geográfico de América del Sur para colocarlo al servicio de un proyecto económico subalterno, expresado en la elaboración de un (neo) mapa⁸⁷ que atraviesa en sentido este-oeste-este toda América del Sur a través de los llamados Ejes Estratégicos de Integración y Desarrollo/EID⁸⁸. La selección, delimitación y definición de los EID se efectuaron a través de lo que se denominó *Metodología de Planificación Territorial Indicativa de Largo Plazo*. Se trata de un ejercicio de arquitectura económica y geográfica, apoyada en *Sistemas de Información Geoestratégica* - mecanismos de monitoreo y gestión de la información -, por la cual se relacionan características físicas, geográficas y económicas de los espacios para crear sinergias que les permitan establecer cadenas productivas significativas, con vocación de inserción en la Economía-Mundo.

Para cada uno de los Ejes se elaboró una cartera de proyectos inter-ligados de comunicación – carreteras, puertos, aeropuertos, hidrovías – y de producción energética – hidroeléctricas, fundamentalmente – que permitirían la circulación de bienes primarios en dirección a los principales centros económicos del sistema mundial.

⁸⁷ Antonelli, Mirta Alejandra (2014). “Megaminería transnacional e invención del *mundo cantera*”. En *Revista Nueva Sociedad*, n° 252, 72-86.

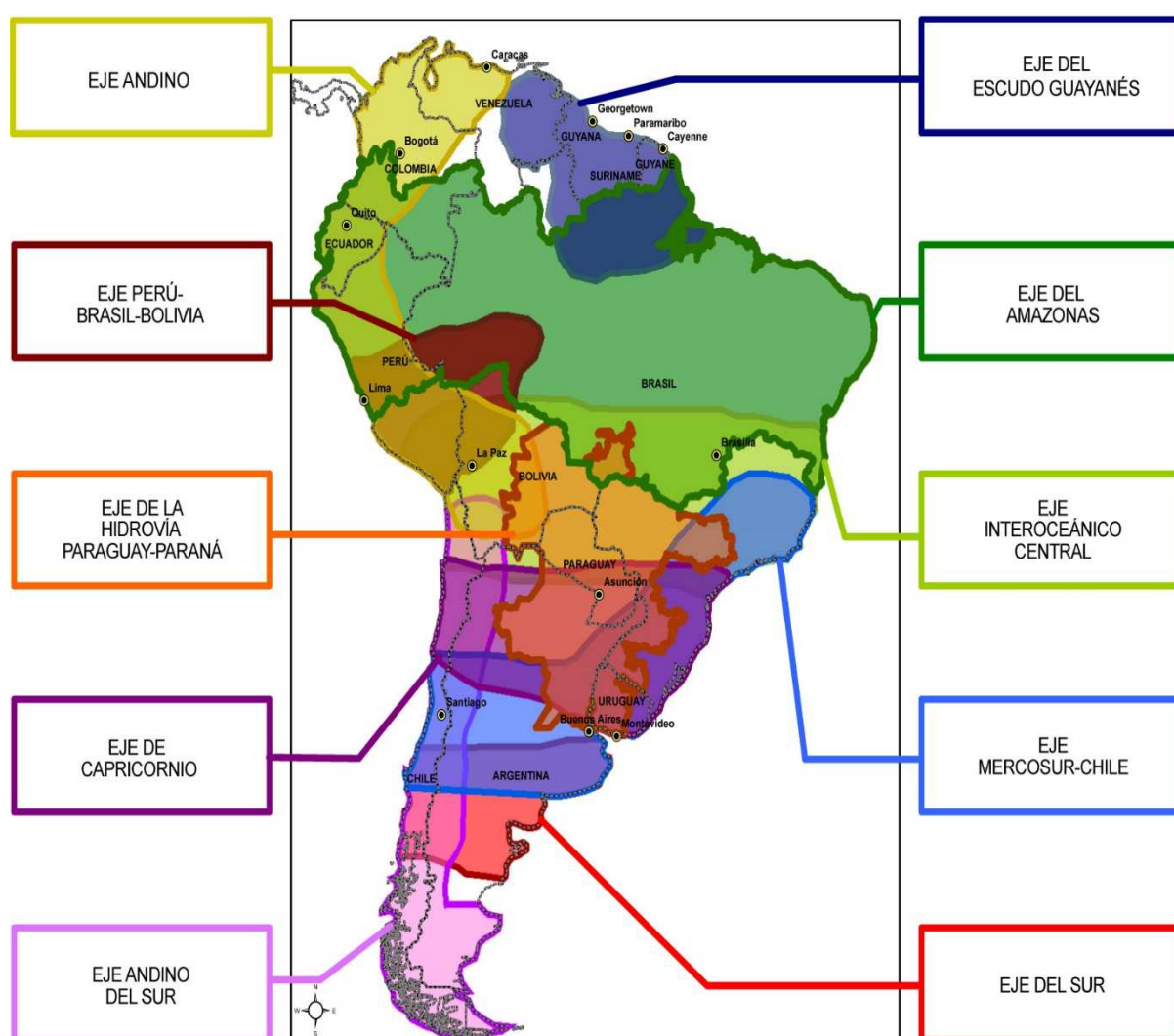
⁸⁸ Más información en: <www.iirsa.org>.

Actualmente, la iniciativa IIRSA contempla una Cartera de 581 proyectos de infraestructura con una inversión estimada en 188.337 millones de dólares.

Como se puede apreciar en la Figura 1, la identificación, delimitación y caracterización de cada uno de los EIDs es producto de una arquitectura geopolítica que concibe cada territorio como un espacio de circulación y de flujo en sentido horizontal –inter-oceánico – o vertical – eje andino -orientando posteriormente las realidades locales a estas dinámicas globales de contenido fundamentalmente económico y marcadas por la demanda externa. Los proyectos de infraestructura física articulados actualmente en la iniciativa IIRSA son fundamentales y estratégicos para comprender la actual fase de integración periférica de la región América del Sur en el mercado global.

Mapa 2. Mapa de los Ejes de Integración y Desarrollo de la iniciativa IIRSA.

Fuente: <<http://www.geosur.info/geosur/iirsa/pdf/es/ejes.jpg>>



5.2.1. Características del nuevo ciclo expansivo 2002-2014 en América Latina

Antes de poder elucidar las consecuencias y dinámicas que este fenómeno pueda estar ejerciendo sobre los territorios y los derechos de los pueblos indígenas de la región, nos interesa comprobar y explicar, con datos concretos, cómo se ha dado este nuevo ciclo. Para ello vamos a recoger y analizar datos situados en el período 2002-2014, aunque en ciertos momentos retrocedamos algunos años atrás para verificar mejor las tendencias.

Hans-Jürgen Burchardt (2014) identifica tres elementos que definirían el fortalecimiento del extractivismo en una determinada región y sobre ellos estructuraremos el análisis de los datos:

1. En primer lugar, verificar el *aumento relativo de las exportaciones de bienes primarios*; es decir, si efectivamente la cartera de bienes primarios ha ganado peso en la estructura exportadora de un país en relación a los otros bienes en un determinado período de tiempo.
2. En segundo lugar, comprobar si ha aumentado también *el peso económico de la exportación de productos primarios en el conjunto de los ingresos* obtenidos por un Estado. Esto suele relacionarse, normalmente, a una mayor especialización de ese país en productos que, a su vez, experimentan un aumento significativo de precio en el mercado global.
3. Y en tercer lugar, cotejar si se ha producido un *aumento absoluto en la explotación y extracción* de esos recursos naturales; es decir, si hubo aumento de las áreas explotadas y del volumen de recursos extraídos.

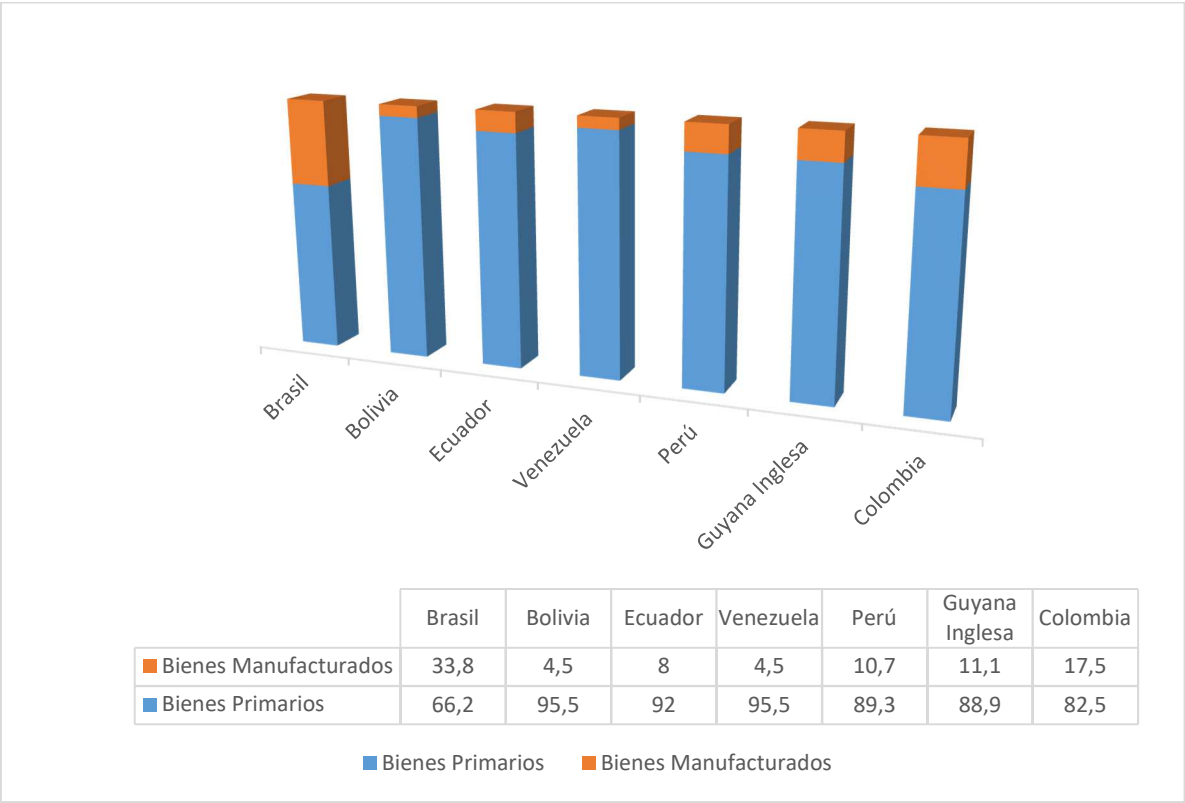
Respecto al primer factor, *el aumento relativo de las exportaciones de bienes primarios*, los Anuarios Estadísticos de la CEPAL confirman esta tendencia. Debe ser destacado que la estructura exportadora de los Estados latinoamericanos ya se caracterizaba a inicios del siglo XXI por una clara *primarización*. Sin embargo, en el último cuarto de siglo XX, y a pesar de las recetas neoliberales, se venía dando una tendencia contraria que se rompe, precisamente, a partir de 2002.

Esto es lo que se desprende del trabajo realizado por Cardoso y Holland (2010). Los autores analizan la evolución de la exportación de productos basados en bienes naturales como porcentaje del total de exportaciones para 10 países sudamericanos - quedan fuera Surinam y Guyana - y para el período 1975-2005. Basándose en los trabajos de Bebczuk y Berretoni, afirman que en los últimos 40 años del siglo XX hubo una mayor diversificación de la pauta exportadora sudamericana con el consecuente decrecimiento del peso de los bienes primarios en el conjunto. De hecho, en todos los países se observa un descenso progresivo, aunque muy moderado, de la importancia de los productos primarios dentro de la pauta exportadora de los países entre 1975 y el año 2000.

Esta tendencia se revierte a partir de los primeros años del siglo XXI en todos los países, con excepción de Colombia, retomando una pauta de especialización exportadora en bienes primarios. Los datos por países vuelven a reflejar que los bienes primarios ocupan la mayor parte de la cesta exportadora. En 2005, en países como Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador algo más del 80% de sus exportaciones respondían por este tipo de bienes. En el Gráfico nº 2, hemos reunido los datos de exportación de los países con territorio amazónico – exceptuando Surinam y el territorio de Guyana francesa – y nos confirman esta tendencia.

Además, y según los datos de CEPAL (2013), se confirma que el 37% de la exportación global de América Latina para el mundo en 2012 se concentraba en una cartera de 10 productos principales: petróleo crudo, vehículo automotor, mineral de hierro, mineral y concentrado de cobre, oro no monetario, cobre refinado, soja, productos derivados del petróleo, camiones y complementos para vehículos automotores. Estos datos confirman a América Latina en un lugar particularmente complejo de la economía-mundo actual y de la crisis socioambiental, relacionándola directamente con los sectores de combustibles fósiles, minería y energía.

Gráfico 2. Exportaciones de productos primarios y manufacturados según su participación en el total de las exportaciones nacionales. Año 2011. Fuente: CEPAL, 2012. Elaboración por el autor.



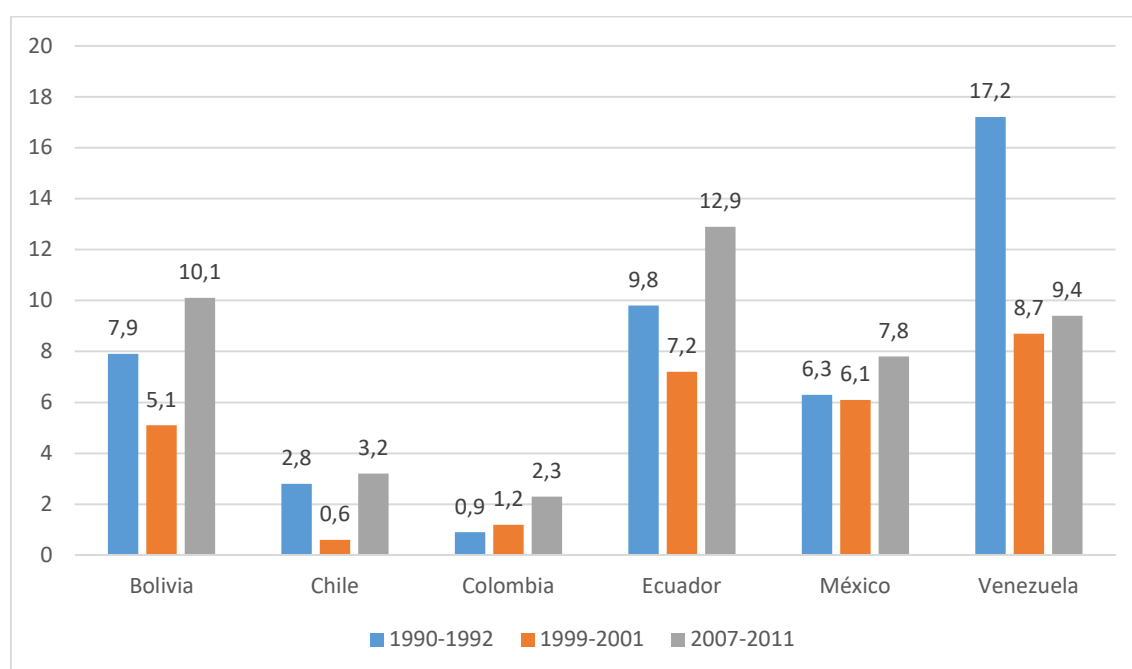
El segundo factor indicado por Burchardt se refería al *aumento, también relativo, de la importancia de los productos primarios en la estructura de ingresos por exportación de*

los Estados. Es decir: en el conjunto de los ingresos estatales un porcentaje creciente procede de los bienes primarios, generando una dinámica en espiral que incentiva una percepción positiva de la especialización exportadora.

Los datos recogidos por la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL (2013: 12) sobre las rentas procedentes de la venta de recursos naturales no renovables en América Latina confirman para el factor ingresos la misma tendencia que habíamos visto en el ítem anterior: hasta 2001, el peso de los ingresos fiscales de bienes primarios iba decayendo pero a partir de la década de 2000 experimenta una nueva expansión, llegando a valores superiores a los de 1990 en la mayor parte de los casos.

Gráfico3. Ingresos fiscales provenientes de productos primarios.

Fuente: CEPAL (2013: 12). (Porcentajes del PIB)



En relación a la renta de los Estados, la División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL publicó en 2008 el Informe “Renta petrolera y minera en países seleccionados de América Latina”. Entre sus conclusiones destacan algunos datos:

- Venezuela triplicó en 2005 el volumen total de su renta petrolera respecto de 1999, gracias al aumento de los precios del crudo.
- Del mismo modo, la renta petrolera de Ecuador, conformada por regalías y participaciones, se ha multiplicado por cinco entre los años 2000 y 2005. Los principales motivos se refieren al precio del crudo, el aumento de la extracción absoluta y la mayor tributación de la explotación proveniente de empresas privadas.

- En Perú, la renta minera se multiplicó por 17 entre el año 2000 y el año 2005.

En un Informe publicado por la organización Oxfam International (2016), en 2013 países como Venezuela o Ecuador se situarían con un nivel de dependencia fiscal de recursos naturales superior al 40% del total de los ingresos públicos; Bolivia estaría en el 35% y Perú alcanzaría el 20%. Cuando el volumen de rentas procedentes de la economía extractiva es significativo dentro del conjunto de ingresos del Estado se habla de un Estado rentista⁸⁹.

Burchardt retoma de Beck un criterio que nos permitiría identificar cuándo podemos hablar de un Estado rentista. Para Beck, existen diversos niveles de intensidad de rentismo: intensidad alta (a partir del 40% del total de ingresos); media (a partir del 30%) y baja (hasta un 20%). Con los datos de CEPAL, algunos países de América del Sur estarían encuadrados dentro de las categorías de rentismo de intensidad media o alta⁹⁰.

El aumento del nivel de ingresos por las rentas de bienes primarios suele estar vinculado bien al aumento del precio de esos bienes en el mercado internacional o bien al aumento de la exportación de estos bienes, en términos relativos o absolutos, por parte de los países; o a ambas dimensiones al mismo tiempo. Todos los datos consultados evidencian un aumento exponencial del precio de las materias primas durante el primer decenio del siglo XXI. Según Paul Little, este crecimiento ha sido del 137% en los últimos 10 años. La relación entre el precio de los bienes primarios y el aumento de indicadores macroeconómicos en la región ha sido establecida por diversos autores (Burchardt, 2014; Little, 2012; CEPAL, 2013).

Según los datos que hemos registrado, tomando como fuente los Anuarios Estadísticos de la misma CEPAL, el comportamiento de los precios de productos metalíferos principales de exportación en la primera quincena del siglo XXI pasó por tres momentos diferenciados:

- Fase de progresivo aumento de precios entre inicios de 2003 y mediados de 2007;
- Entre 2007 y hasta los primeros meses de 2009, hubo claras turbulencias en la estabilidad del precio debido a las primeras señales de la crisis económica de los principales centros de la economía global, con la clara excepción del oro.

⁸⁹ El concepto de Estado rentista surgió en la Ciencia Política a lo largo del siglo XX. Se define como un Estado en el que toda o buena parte de sus ingresos provienen de la exportación o cesión de sus recursos estratégicos (normalmente naturales y no renovables) para usufructo de otros. Autores destacados en este análisis son Hossein Mahdavy, Fareed Zakaria, Hazem Al Beblawi o Giacomo Luciani, entre otros. Normalmente han elaborado sus análisis a partir de la realidad de los países árabes de Oriente Medio exportadores de petróleo y, en general, de los países que componen la OPEP y que emergieron en el escenario internacional con fuerza en la década de 70.

⁹⁰ Hazem Al Beblawi y Giacomo Luciani proponen las siguientes características de un Estado rentista: la economía se basa en una renta externa sustancial, frenando un sector productivo nacional más fuerte; Una pequeña parte de la población activa está efectivamente relacionada con la generación de ingresos; El Gobierno es el principal destinatario de la renta que procede de la exportación.

- A partir de 2009, el importe ha retomado el crecimiento y aumenta progresivamente. En 2011, el precio de algunos metales triplicaba el valor de 2005. Una curva parecida representa la evolución de los precios del petróleo, carbón y gas natural, que tuvo un pico máximo en 2008, cayó estrepitosamente por unos meses y desde mediados de 2009 continuó una línea ascendente hasta los años de 2014 y 2015 en que nuevamente se produce un descenso en el nivel de precios.

A partir de 2012, la evolución alcista de los precios de las *commodities* mineras, hidrocarburíferas y agrícolas en el mercado mundial fue dando señales de desgaste⁹¹. El comportamiento de los precios de las materias primas en el mercado mundial es sensiblemente volátil, lo que implica fuentes de renta también muy oscilantes. Evidentemente esto configuraría un elemento de riesgo para cualquier economía.

En 2014, el FMI hizo público un Informe en el que rebajaba las previsiones de crecimiento económico para América Latina en su conjunto, después de una primera década que había impresionado a propios y extraños. Entre las causas determinadas por el FMI estaría la dificultad de algunos países exportadores de materias primas por el efecto de la caída de los precios⁹². En el mismo sentido se pronunciaba en 2013 el Departamento Nacional de Produção Mineral de Brasil (DNPM, 2013)

Aún nos resta analizar los datos que nos informen sobre el tercer factor indicado por Burchardt y que hace referencia al *aumento o no, en términos absolutos, de la propia explotación de recursos naturales* en América Latina. Es importante destacar que solamente con un aumento en los precios internacionales de las materias primas y cambios en las políticas fiscales ya podríamos tener un incremento de las rentas extractivas en los Estados. Eso podría hacerse sin necesidad, en principio, de aumentar también el volumen de recursos naturales efectivamente explotados y extraídos, lo que sería una opción viable en el caso de un Estado que no quisiera profundizar la naturaleza extractivista de su economía sino exclusivamente aprovechar el movimiento coyuntural de los precios.

Pero no fue así. Los datos nos revelan que también hubo, en estos primeros años del siglo XXI, un crecimiento sensible de la explotación de recursos naturales en términos absolutos. Esto confirmaría que los Estados tomaron una decisión, política y económica, de ampliar la actividad extractiva en sus territorios aprovechando las mejores condiciones coyunturales. “Así, el actual boom de las materias primas en América Latina

⁹¹ En el caso de productos agrícolas como el trigo, la soja o el maíz, los precios se estancaron o comenzaron a bajar desde 2010, motivado, entre otras cosas, por la sobreproducción en todo el mundo, y particularmente en Estados Unidos. “Preço das matérias primas despenca nos países do Mercosul”, publicado con fecha 2/10/2014:

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/01/economia/1412187300_365559.html>

⁹² “América Latina se sigue frenando”, publicado con fecha 7/10/2014:

<http://economia.elpais.com/economia/2014/10/06/actualidad/1412616880_945557.html>

no se debe únicamente a los incrementos de valor de las exportaciones de bienes primarios inducidos por los precios; el crecimiento relativo a las cantidades de materias primas estratégicas indica también la difusión de un modelo de crecimiento extractivo, fosilista y agroindustrial en la región, a pesar de todos los debates sobre los límites ecológicos del crecimiento” (Burchardt, 2014; 6).

Paul Little afirma que en esta nueva fase neo-desarrollista, lo realmente novedoso es “a enorme quantidade de financiamento disponível, o alto número de projetos sendo construídos simultaneamente, e a aparente insaciabilidade da demanda global para um número cada vez maior de commodities. O resultado é uma nova fase de crescimento econômico que inclui o antigo problema de sua insustentabilidade” (Little, P., 2014b:424). En el mismo sentido, Ailton Dias dos Santos alerta para un “processo sem precedentes” de apropiación de la Naturaleza como insumo para la acumulación capitalista debido al alcance y volumen de recursos y proyectos en juego bajo el argumento del crecimiento económico (2014: 344).

El grado de intensidad de las actividades extractivas tienen fuertes efectos sobre los territorios, generando así una nueva geografía “basada en bloques de concesión petrolera o licencias mineras que desplazan a comunidades locales, anulan otros circuitos productivos o rompen con territorios ancestralmente delimitados” (Gudynas, 2012: 133).

Los datos disponibles nos dicen, por ejemplo, que Bolivia triplicó su producción de gas natural entre los años 2000 y 2008. En ese mismo periodo, Colombia incrementó su producción de hulla de 38 a 73 millones de toneladas. En un marco temporal un poco más amplio, se constata que entre 1990 y 2008 la producción de petróleo se expandió en países como Ecuador, Bolivia, México, Venezuela o Brasil en porcentajes que varían entre el 50 y el 100%. En el caso específico de Brasil, entre 2002 y 2010, correspondientes a los dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente de la República, el país aumentó su extracción de bauxita - de 19,3 a 29 millones de toneladas en 2010 - y de hierro - de 263,7 a 370 millones de toneladas en 2010 (Gudynas, 2012).

Cada uno de los tres factores indicados por Burchardt, verificados en el análisis de los datos, generaría por sí mismo sus propios impactos sobre las economías latinoamericanas y sobre la vida de la gente y de las comunidades, sobre la convivencia social y sobre el proyecto societario que se propone. Ahora bien, cuando combinados y articulados entre sí, los tres factores ganan mayor capacidad de impacto.

Podemos concluir que, con base en datos empíricos de fuentes oficiales y en referencia al período 2002-2014 del siglo XXI, los Estados latinoamericanos han aumentado significativamente la presión y extracción de los bienes naturales, renovables y no renovables. Esta presión sobre los recursos ha acompañado una dinámica exportadora en la cual aumentó, de un modo muy intenso, el peso de los bienes primarios en el conjunto de los bienes exportados, indicando en principio un retorno a

comportamientos de especialización y primarización de la economía que habían sido contornados, en cierto sentido, en las décadas anteriores. Este hecho puede explicarse, en parte, por el alza de los precios de determinadas *commodities* en el mercado global que terminó estimulando la dinámica económica de los países y generó un nuevo escenario relacionado con los ingresos y las rentas de los Estados, ahora más dependientes de los productos derivados de los recursos naturales.

5.2.2. La participación de China en la nueva fase expansiva del mercado global en América Latina

La irrupción de China en la economía mundial ha tenido una expresión propia en América Latina. Posiblemente haya sido el país que ha re-elaborado de un modo más estructural su relación con la región. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo-BID (Little, 2014), entre 2006 y 2012 el intercambio comercial⁹³ y de inversiones entre ambos actores fue muy intenso y claramente favorable para China. América Latina invirtió en China en ese período un montante de US\$ 584 millones, mientras que la inversión de China en el continente fue de US\$ 1.440,23 millones.

China ha pasado en pocos años de ser una de las mayores factorías del mundo a convertirse en un actor principal. Hasta no hace mucho tiempo, en China se localizaban procesos fabriles productivos que abastecían muchos mercados con productos de muy bajo precio. Ese modelo se ha transformado en dos décadas. Hoy, China es uno de los principales compradores del mercado mundial. Sus empresas y su sistema financiero han incorporado comportamientos globales en lo que se refiere a procesos productivos, comerciales o crediticios.

Según datos de la OCDE, en 2013 las empresas chinas habían invertido US\$ 73.000 millones en el exterior, 36 veces más que diez años atrás⁹⁴. El perfil inversor de estas empresas es dinámico. Si en un principio se concentró en países emergentes y en productos primarios - tierras, minerales o hidrocarburos - hoy sus operaciones se extienden a Europa y América del Norte y a la financiación de sectores productivos. Incluso destaca la inversión en deuda pública de otros países, lo que ha generado escenarios especulativos incluso en delicadas crisis europeas como la de Grecia respecto de la UE. Aun así, todo este dinamismo no quiere decir que las inversiones industriales han tomado el lugar de las compras de materias primas; la demanda china por hidrocarburos y minerales continúa muy alta, y eso define sus relaciones particulares en América Latina.

⁹³ En el caso de Brasil, en 2009 China ya había superado a EE.UU. como su principal socio comercial. Entre 1998 y 2008, la cota de exportaciones brasileñas hacia China, en relación con el resto de destinos, pasó del 1,5% al 8,5% (Cardoso y Holland, 2010). El 75% de estas exportaciones a China desde Brasil responden a productos primarios.

⁹⁴ "China sale de compras", publicado en 22/06/2014:

<http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/20/actualidad/1403281618_502055.html>.

En la I Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC y China, en 2015, el presidente chino anunció un compromiso de inversión que ronda los 25 mil millones de dólares anuales en la próxima década⁹⁵. Parte de esa inversión se traducirá en la expansión de empresas chinas en la región y otra parte se destinará a áreas estratégicas como energía, infraestructura, agricultura o innovación. Otra de las estrategias chinas de expansión en América Latina es la que se está desarrollando a través de acuerdos bilaterales de financiación entre Gobiernos.

Entre 2005 y 2013 China ha prestado a América Latina un volumen de 100 mil millones de dólares, el 70% de los cuales han tenido como destino a Venezuela, Ecuador y Argentina. Se trata de acuerdos que alivian las tensas arcas públicas de los Estados a cambio de una mayor inserción de empresas chinas en las economías domésticas y de mayores concesiones para explotación de bienes naturales.

Podemos hablar en términos de un nuevo ciclo de endeudamiento público, teniendo como principal acreedor, de esta vez, un Estado independiente y no organismos multilaterales, y condicionando el préstamo a su devolución en uso y aprovechamiento de bienes naturales. Un caso emblemático es el de Ecuador. Ambos países llegaron a un acuerdo para la ejecución de un crédito chino de 2 mil millones de dólares para la construcción de hidroeléctricas en territorio ecuatoriano por empresas chinas. El acuerdo incluía como cláusula la garantía de que US\$ 680 millones del total de ese crédito sería devuelto en venta directa de petróleo⁹⁶. Otro caso sería el de Venezuela, como se aprecia en el Cuadro nº 5.

⁹⁵ “China acelera seus investimentos na América Latina”, publicado en 8/01/2015: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/08/internacional/1420727248_265085.html>

⁹⁶ Para un mayor análisis de la actual relación económica entre Ecuador y China: Chicaiza, Gloria (2014). *Mineras chinas en Ecuador. Una nueva dependencia*. Quito: Ed. Elizabeth Bravo.

Cuadro 5. Acuerdos de Colaboración entre la República Popular China y Venezuela

El Gobierno chino se ha convertido en el principal acreedor de Venezuela a través de la concesión de líneas de créditos entre los años 2008 y 2012 a cambio de concesiones en los sectores de hidrocarburos y minería, coincidiendo con las medidas de nacionalización de la minería de oro en Venezuela, desarrolladas entre los años 2010 y 2014.

Estas negociaciones se concretaron en dos convenios. En el primero de ellos, se concedía la explotación de oro y cobre en uno de los más importantes yacimientos en marcha en la región del Estado Bolívar, la mina de “Las Cristinas”. En el segundo convenio, se concedía al grupo empresarial de Citic Group la elaboración de un mapa de prospección geológica nacional de Venezuela. La elaboración de este mapa minero contemplaba el establecimiento de campamentos exploratorios en el territorio durante los cinco años siguientes a la firma de los convenios. Estos convenios se formalizaron a través de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre ambos gobiernos, sancionada por la Asamblea nacional de la República en julio de 2013.

“En septiembre de 2011 se firma un convenio entre una empresa del gobierno venezolano, INGEOMIN, y una empresa transnacional china, Citic Group. Esta empresa asume la realización de un llamado mapa minero de Venezuela, es decir, una certificación de las reservas mineras de Venezuela al sur del Orinoco. Este mapa minero, o la elaboración de este mapa, implicaba la creación de campamentos de personal chino en distintas zonas de la Amazonia, y en concreto el plan estratégico de acción desarrolla ocho campamentos en el Estado Bolívar y cinco en el Estado Amazonas. (...) todos los campamentos están en tierras indígenas y a ningún pueblo indígena se le ha consultado a través del proceso de consulta previa sobre la imposición de estos campamentos chinos para explorar y después explotar distintos minerales, esta situación es muy grave y viene siendo denunciada por las organizaciones indígenas del Estado Amazonas (...) En Venezuela el convenio 169 de la OIT es una ley interna. Entonces, se está vulnerando todo el ordenamiento jurídico con ese megaproyecto” (I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014. Notas de Campo del autor).

En febrero de 2013, grupos relacionados con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales manifestaron su preocupación ante el hecho de que el estudio y localización de los recursos minerales estratégicos del país hubiese sido confiado a un grupo privado extranjero, la empresa china Citic Group. En el campo de las ciencias sociales, Esteban Emilio Monsonyi, presidente del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela criticaba abiertamente el modelo económico pretendido y que amenazaba con convertir el territorio nacional en una gran cantera de minas sin tomar precauciones respecto al ambiente.

5.3. (Neo) extractivismo: la encrucijada entre las nuevas dinámicas globales y la confluencia de gobiernos “populares”

Nos interesa ahora detenernos en un fenómeno que ha afectado en una parte del continente latinoamericano el papel que el Estado asume como mediación entre la escala global y la local. Aunque la escala de Estado la vamos a analizar en el Capítulo 7,

tomando como clara referencia el Estado brasileño, entendemos conveniente en este Capítulo hacer una referencia general a esta afectación de la acción del Estado, ya que han sido diversos los gobiernos latinoamericanos los que se han visto implicados en lo que se ha venido a llamar (neo) extractivismo.

Las tendencias y dinámicas globales que hemos descrito atraviesan todo el continente y condicionan las respuestas de todos los países de la región, independientemente de la naturaleza política de los grupos que en este momento gobiernan. Pero al mismo tiempo, la confluencia en la primera década del siglo XXI de algunos gobiernos identificados como “progresistas”, principalmente – pero no exclusivamente - en América del Sur, permite identificar una forma particular, y más o menos compartida, de cómo estos Estados han actuado durante esta fase expansiva del extractivismo-exportador. Ese modelo es el que algunos autores, como Eduardo Gudynas y otros, identifican con un (neo) extractivismo, hasta el punto de hablar de “neoextractivismo progresista” para diferenciarlo del extractivismo “clásico”, que sería propio de gobiernos conservadores (Gudynas, 2012; 132).

Nos proponemos, en definitiva, detenernos un poco para comprender la naturaleza de lo que se ha venido a llamar (neo) extractivismo: cómo opera en la mediación con la escala global, cómo entiende la propia acción del Estado y cómo se relaciona con los territorios.

5.3.1. (Neo) extractivismo y retorno del Estado

Durante la primera década del siglo XXI coincidieron en buena parte de los Estados de América del Sur nuevos Gobiernos que fueron identificados o se auto-identificaron como populares o próximos a la izquierda política. Representan este nuevo momento los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chaves y Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, Tavares Vázquez y José Mujica en Uruguay y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Todos estos gobiernos fueron suficientemente legitimados en los respectivos procesos electorales y todos ellos, a pesar de las diferencias de origen y de conformación social, son frutos de procesos sociales de visibilización de sectores hasta el momento poco importantes⁹⁷.

La confluencia de estos gobiernos abrió un escenario diferente en la vida política de América Latina. Una mayor complicidad entre los diversos dirigentes, que afectaba a sus

⁹⁷ Somos conscientes de que cualquier intento de análisis que reúna todos estos gobiernos y grupos políticos dentro de una misma unidad va a cometer claros errores de precisión y de homogenización. Cada uno de estos procesos se explica a partir de las condiciones sociales y políticas propias de cada país y a partir de las particulares historias de los líderes y actores. No obstante, a efectos de nuestro trabajo, asumimos esas limitaciones y acogemos la posibilidad de entender los elementos de unidad que sí existen en este proceso plural y que han favorecido objetivamente algunas dinámicas políticas en la región.

posicionamientos políticos y a las propias relaciones personales entre ellos, permitió durante los primeros años del nuevo siglo un ambiente de mayor cohesión interna. Desde un punto de vista regional, el fortalecimiento político de Mercosur y el nacimiento de Unasur revelan este nuevo campo de intenciones. La región creció en autonomía política respecto a los principales centros económicos del mundo, particularmente EEUU y Europa. A pesar de que se mantuvieron Acuerdos bilaterales entre Estados sudamericanos y estos centros económicos, hubo avances en la búsqueda de respuestas comunes a los desafíos de la región y al papel que ésta podía tener en el escenario internacional.

Por otro lado, estos nuevos gobiernos, en su intento de transformar la realidad socioeconómica de sus países, no han renunciado a la estrategia de la exportación de productos basados en bienes naturales como motor de crecimiento. Esto podría significar que, mientras conquistaban una inserción política de mayor profundidad y autonomía en los espacios multilaterales, retomaban el camino de la inserción económica subordinada a través de un nuevo ciclo de especialización económica en el mercado global⁹⁸. “El actual debate acerca del (neo) extractivismo examina críticamente esta perspectiva” (Burchardt, 2014; 4).

Este escenario, por tanto, guardaría algunas semejanzas o repeticiones con el desarrollismo ya experimentado en las décadas de 1950-1970. Paul Little observa, al menos, algunos elementos que están presentes en ambos procesos desarrollistas:

1. Papel importante del Estado, como financiador y planificador.
2. *Boom* de las *commodities* acompañado de un aumento de grandes obras de infraestructura.
3. Modelo extractivo principalmente de recursos no renovables.
4. Políticas públicas volcadas al apoyo al sector exportador.
5. El ambiente bio-físico es visto como un obstáculo que necesita ser superado.

Al mismo tiempo, hay elementos novedosos en esta retomada del extractivismo-exportador a inicios del siglo XXI, que no puede ser explicada solamente como una repetición mimética de los procesos anteriores.

Uno de los debates más intensos en torno al (neo) extractivismo se formula en referencia al papel del Estado. El extractivismo “clásico” se vincula comúnmente con las políticas de vaciamiento del Estado o con el Estado mínimo (Gudynas, 2009: 195). Un

⁹⁸ La llegada al gobierno de estos grupos ha sido definido por algunos autores como la etapa del *post-neoliberalismo* o de la *gran paradoja latinoamericana*. Los nuevos gobernantes han avanzado realmente en medidas que pretendían romper con algunas de las premisas del período neoliberal, como aquellas que se referían al papel del Estado. Sin embargo, han dado continuidad a otras políticas de ese mismo período anterior, particularmente las que se refieren al modo de inserción económica en el mercado internacional. Ver entrevista a Bruno Milanez, Doctor en Política Ambiental y Profesor en la UFJF-Brasil. Publicada el día 30 de julio de 2014 en: <<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/533720-o-modelo-neoextrativista-e-o-paradoxo-latino-americano-entrevista-especial-com-bruno-milanez>>.

Estado *metarregulador*, desprovisto de más intencionalidad política o utópica que la de regular las condiciones de reproducción social; un Estado aparentemente prescindible como estructura político-territorial clave, como pregona el discurso globalista.

Milton Santos alerta en diversos textos contra este confuso vaciamiento del Estado, pues defiende que, en realidad, el Estado continúa teniendo capacidades instaladas, sea para garantizar el control de sectores estratégicos y los derechos de sus ciudadanos, sea para facilitar el camino a las grandes empresas globales. Para una cosa o para otra, el Estado continúa siendo actor, y esto significa que la sociedad civil continúa teniendo en él mecanismos de participación y de transformación.

Jaime Preciado y Pablo Uc presentan también una afinada deconstrucción de esta enunciada irrelevancia del Estado en el entorno neoliberal: “(...) el ‘retorno del Estado’ se convirtió en la paradójica metáfora del papel protagónico que en todo momento jugaron los Estados centrales durante la implementación del modelo político-económico neoliberal, basado en la apertura de las fronteras de los Estados periféricos, la liberación de los mercados de capitales, mercancías, fuerza de trabajo e inversiones, la privatización de las industrias estratégicas nacionales, la precarización social y la ciudadanía, y la consecuente intensificación de los flujos migratorios” (2010: 72).

Está claro que el Estado tuvo un papel imprescindible y funcional a la agenda neoliberal de las décadas de 80 y 90. Pero, ¿y ahora, delante de este otro escenario protagonizado por gobiernos “progresistas” que reivindican un papel más activo del Estado y de la política en un tiempo de nueva expansión del modelo extractivista? ¿Qué Estado resulta de los tiempos del (neo) extractivismo?

Para respondernos a estas cuestiones, nos detenemos en algunos de los elementos que cobran una fuerza singular en el modelo (neo) extractivista y que se refieren, directa o indirectamente, a la naturaleza del Estado.

1. Soberanía nacional de los bienes naturales.

La llegada al gobierno de sectores sociales que habían acumulado, a lo largo de este tiempo, una capacidad de análisis crítico sobre la imposición de las medidas de ajuste estructural, creaba las oportunidades de revertir algunas de sus bases conceptuales.

La tradición constitucionalista en los países latinoamericanos ya protegía la propiedad del Estado sobre los bienes naturales, incluyendo los recursos del subsuelo. Pero se había abandonado el control sobre su protección y su explotación, dejándolas en las manos del mercado y del capital privado. Ahora se toman un conjunto de medidas en nombre de la soberanía nacional sobre los bienes naturales⁹⁹; medidas que van a variar en cada país pero que responden a las siguientes estrategias similares:

⁹⁹ Algunos autores afirman que ya hubo otros momentos en la historia reciente en que los gobiernos optaron por políticas de nacionalización de los bienes estratégicos. En Bolivia, por ejemplo, en 1952 se

- Nacionalización de la explotación de determinados bienes naturales estratégicos, priorizando el concurso directo del Estado a través de empresas públicas o autarquías - de nueva creación o ya existentes - o a través de su participación mayoritaria en consorcios mixtos. En este conjunto de estrategias contemplamos el caso de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 por el gobierno boliviano o el fortalecimiento de empresas estatales como YPFB en Bolivia o PDVSA en Venezuela. En otros países como Brasil, se fomentará una mayor participación de empresas estatales como Petrobras o Eletrobrás en consorcios público-privado para grandes proyectos;
- Renegociación con empresas transnacionales de los contratos y las condiciones de explotación y uso de estos recursos;
- Modificaciones sustanciales en las políticas fiscales con el objetivo de ampliar la participación del Estado en los beneficios, sea en regalías o en impuestos directos, asegurándose una mayor renta en las arcas públicas. Entre otros posibles ejemplos, está el de Perú, que en septiembre de 2011 creó un nuevo Impuesto Especial a la Minería y un Gravamen Especial a la Minería, que vendrían a sumar a los ingresos ya recogidos normalmente por las regalías y el Impuesto sobre la Renta (Saede, 2013: 21).

El resultado de este conjunto de medidas, en principio, se traduce en dos movimientos claros: una mayor participación estatal en la exploración y explotación de los bienes naturales, con el consecuente aumento del aparato público; y un cambio en las reglas del juego con los inversores privados que resultaría en mayores beneficios económicos para los Estados.

2. *Papel proactivo del espacio público*

“En el neo-extractivismo, el Estado es mucho más activo, con reglas más claras (independientemente si éstas sean buenas o no)” (Gudynas, 2009: 195). Para los gobiernos “progresistas”, “el ‘Consenso de los *Commodities*’ aparece asociado a la acción del Estado como productor y regulador (...)” (Svampa, 2012: 37). Composto y Navarro argumentan que esta retomada del Estado permite abandonar, parcialmente, el rol *metarregulador* que le había asignado el neoliberalismo, “a fin de recuperar sus prerrogativas de intervención directa” (2014: 55) y recuperar un rol múltiple y más diversificado.

Encontramos así un Estado que retoma con intensidad diversas atribuciones:

nacionalizaron los bienes de las tres principales empresas o holdings mineros de la época (Heck, 2014). En el conjunto de los países, durante las décadas de 60 y 70 se produjo una onda nacional-desarrollista de restricciones impuestas por los países propietarios de bienes minerales en el subsuelo, tendencia que se transformó ya en la década de 80 (Mathis *et al.*, 1997: 20).

- Estado inversor. Aquellos países que mantienen una capacidad de inversión pública alta, van a aumentar el volumen de recursos públicos destinados a políticas de fomento de la economía extractiva y/o de grandes infraestructuras públicas;
- Estado financiador, aumentando significativamente sus políticas fiscales y de crédito público a las grandes empresas del sector. Posiblemente el caso más significativo sea el de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y la transferencia de recursos desde el BNDES hacia los principales consorcios productivos del país;
- Estado regulador, modificando sustancialmente los marcos legales de modo que se favorezca y agilice la actividad económica extractiva. En el caso de una actividad extractiva, el Estado no sólo interviene proponiendo reformas en los Códigos que regulan esa actividad específica, sino también en otras legislaciones claramente asociadas: licenciamiento ambiental, ordenamiento territorial, participación ciudadana, política tributaria o regulación de las acciones de protesta social, por ejemplo.

La cuestión de la soberanía nacional sobre los bienes naturales y del papel más activo del Estado en la economía han sido dos argumentos reivindicados en las últimas reformas legislativas que algunos Estados latinoamericanos han implementado sobre la cuestión minera y otras afines. Las reformas normativas se producen en momentos de claras transformaciones socioeconómicas y pretenden adecuar las normas a los nuevos escenarios y los nuevos actores implicados. Ya vimos anteriormente los casos de México, Guatemala y Honduras. En el caso de Colombia, su nuevo Código Minero fue aprobado en 2001 a través de la Ley 685¹⁰⁰.

En los primeros años del siglo XXI, coincidiendo con el nuevo ciclo extractivo y con diversos procesos constituyentes en marcha, países como Bolivia, Chile, Ecuador o Venezuela han introducido sensibles reformas en sus respectivas legislaciones mineras. En dichas reformas se aprecian dos elementos confluyentes, que escenifican bien el contexto que hemos descrito del (neo) extractivismo:

- de un lado, garantizan una mayor participación y control por parte del Estado en las tareas de prospección y concesión de derechos mineros;
- de otro lado, favorecen un escenario atractivo para la inversión privada por la mayor liberalización de la actividad minera y por la reducción o relativización de las salvaguardas que, en algunos casos, habían sido consolidadas en los recientes procesos constituyentes. Veamos algunos casos.

¹⁰⁰ Este Código, aprobado bajo el gobierno de Andrés Pastrana, respondía aún a una lógica de retirada del Estado como actor proactivo. Según algunos analistas, el Código era el resultado de claras interferencias del capital privado. “Desde 1996 la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI apoyó con asistencia técnica al gobierno colombiano en un proyecto para la reforma de la legislación minera” (Martínez *et al.*, 2013: 11). En 2010 el Congreso aprobó un proyecto de reforma del Código Minero, presentado por el gobierno, en el que se modificaban los procedimientos para la concesión de derechos mineros y se definían las zonas con salvaguardas para la actividad minera, entre otras cuestiones.

El Gobierno de Evo Morales, en Bolivia, aprobó en mayo de 2014 la nueva Ley de Minería y Metalurgia. El proceso de negociación había sido bastante polémico. Contó en un principio con la oposición de las cooperativas mineras – tradicionales aliados de Morales –, las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas (OCMAL, 2014: 10). Éstos últimos reivindicaban la inclusión del derecho a la consulta previa, libre e informada, que la ley excluye para las fases de prospección y exploración.

Un mes después de la aprobación del texto, en junio de 2014, la Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales hacía público un posicionamiento colectivo. En el Comunicado, las entidades firmantes del documento, “representantes de organizaciones sociales rurales y urbanas del Territorio Nacional, afectadas por el envenenamiento de nuestros manantiales, bofedales, lagunas, ríos y ciudades” exigían la inmediata abrogación de la ley. También en junio de 2014, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia – CONAMAQ hizo público un documento de repulsa a la nueva ley minera¹⁰¹.

La Constitución Política del Estado boliviano afirma que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano (art. 349º) y que las actividades extractivas de recursos naturales no renovables tendrán carácter de necesidad estatal y utilidad pública (art. 356ª). Es el Estado el responsable por otorgar los derechos mineros (art. 370ª). Posteriormente, el Estado boliviano firmó la llamada Ley de la Madre Tierra, uno de los primeros instrumentos normativos que aborda el reconocimiento y regulación de los derechos de la Madre Tierra. La Coordinadora de Defensa de la Vida afirma, en su documento de junio de 2014, que la nueva Ley de Minería contradice y viola ambas leyes.

El caso de Ecuador presenta algunas similitudes. La Constitución de 2008 y el Mandato Minero que de ella emanó perseguían poner fin a una economía devoradora de bienes naturales. El propio Mandato Minero declaró nulas todas las concesiones que afectaban severamente fuentes de agua, áreas protegidas o de amortiguamiento o que no habían respetado el derecho a la consulta de las comunidades locales (OCMAL, 2015: 55). Sin embargo, la nueva ley minera que se elaboró en 2009 y reformó en 2013 parece responder a un nuevo momento caracterizado por la concesión de derechos de minería a gran escala a empresas de origen canadiense y chino. En ese sentido, mientras la

¹⁰¹ Según los análisis de las organizaciones sociales implicadas, el sector popular que más se benefició de la nueva ley fueron las cooperativas mineras. Después de su inicial oposición al proceso, finalmente estas cooperativas fueron atendidas por el gobierno boliviano y la nueva ley contempla su principal reivindicación: la posibilidad de establecer acuerdos con grandes empresas, nacionales o internacionales. En el comunicado de CONAMAQ, los dirigentes indígenas se dirigen a los cooperativistas en estos términos: “A nuestros hermanos mineros, les recordamos que en las entrañas de nuestra pacha, en las entrañas del cerro Rico de Potosí hemos muerto millones de nosotros, les recordamos que tras el saqueo sólo se deja muerte, desolación, pobreza, tierras abandonadas, familias destruidas, en tanto el oro brilla en los cuellos de los otros, en los bolsillos de los jefes” (CONAMAQ - Pronunciamiento ante promulgación de Ley Minera). Documento accesible en: < <http://www.somossur.net/economia/mineria-en-bolivia/1407-conamaq-pronunciamiento-ante-promulgacion-de-ley-minera.html>>.

Constitución de 2008 limitaba la explotación minera a empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado, la nueva Ley Minera curiosamente amplía esta norma constitucional: podrán ser explotados por personas físicas o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras “en función de los intereses nacionales”.

El proceso constituyente ecuatoriano, así como el boliviano, se proponía buscar nuevas formas de convivencia que permitieran alcanzar el Buen Vivir – *Sumak Kawsay* como principio orientador de la vida social y económica. Reconoció el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación (art. 66º) y declaró la Naturaleza como sujeto de derechos (art. 10º). No es difícil percibir que un proceso de minería a gran escala liberalizado puede violar estos principios constitucionales (Chicaiza, 2014: 7).

Un caso particular es el de Venezuela, que va a afectar directamente a nuestra escala local de investigación, como veremos en el capítulo 8. El Estado venezolano comenzó a dibujar una nueva política minera para el país a partir de 2010 y 2011, después de haber anunciado unos meses antes el descubrimiento de un yacimiento de coltan en la zona norte del Estado de Amazonas y sudoeste del Estado Bolívar, en territorios habitados tradicionalmente por los pueblos piaroa, jivi, curripaco y diversos grupos arawacos (IWGIA, 2011: 137-138).

El 23 de agosto de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez presentó en un mensaje grabado y mostrado en las televisiones de todo el país¹⁰² un nuevo plan estratégico de aprovechamiento de los recursos del subsuelo a lo largo de lo que denominó “Eje Orinoco-Acure”, un curso continuado de agua que recorre todo el país desde el Oeste hasta el Delta del Orinoco.

En la margen izquierda de este Eje, al Norte, se encontraría una de las mayores franjas petrolíferas del mundo. Mientras tanto, en la margen derecha del Orinoco o lado sur, coincidente con toda la región amazónica de Venezuela, se localizaría lo que el propio presidente del país denominó el “Arco Minero”, cuya riqueza estaría en la presencia de oro, diamantes, bauxita y coltan. Ese mismo día 23 de agosto de 2011, el Presidente Chávez aprobó un decreto por el que creaba un órgano administrativo de control del llamado “Arco Minero del Orinoco”.

“Planear toda una estrategia nacional de extractivismo y de rentismo no petrolero y que implicaba el desarrollo de la minería en todo el país. Ese gran proyecto lo llamó el Arco Minero del Orinoco, con el objetivo fundamental de desarrollar la minería como una alternativa al petróleo, diversificar las fuentes de ingresos del país entrando en el extractivismo minero y dejando en funcionamiento el extractivismo de petróleo e

¹⁰² El vídeo grabado el 23 de agosto de 2011 es accesible en
<<https://www.youtube.com/watch?v=XITu4pe2sZQ>>.

hidrocarburos que ha sido la fuente tradicional de ingresos del país”¹⁰³. Esta nueva política minera abre un nuevo escenario de afectación a las tierras y hábitats de pueblos indígenas de la región. Fue concebida durante la ejecución del llamado Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 - Proyecto Nacional Simón Bolívar - cuya premisa era, paradójicamente, superar el modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los bienes naturales. Ya en el II Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar 2013-2019, aparece el papel estratégico de la minería, la nacionalización de la actividad extractiva y el papel de las empresas estatales¹⁰⁴.

3. *Extractivismo y políticas sociales*

Para Burchardt (2014), la relación que se establece entre las rentas procedentes de las políticas extractivas y la financiación de políticas sociales dirigidas a sectores hasta ahora desplazados sería una de las principales características, sino la central, del (neo) extractivismo latinoamericano. “Todos estos gobiernos defienden estas prácticas, y el propio extractivismo, sosteniendo que permiten recaudar fondos que son utilizados en programas de lucha contra la pobreza” (Gudynas, 2012: 134).

Si analizamos los datos generales de la lucha contra la pobreza en los primeros años de siglo, encontramos algunas informaciones que van en esta misma línea. Por ejemplo, en este período la parte proporcional del gasto social en relación con el PIB de muchos Estados latinoamericanos aumentó entre un 20% y un 30% (Burchardt, 2014). Otros estudios revelan que la tasa de pobreza de la mayor parte de los países tuvo una fuerte reducción entre los años 2000 y 2010 mientras que la llamada clase media ha crecido en volumen y en calidad de vida. Según Informe de la organización Oxfam International (2016), entre 2002 y 2012 la pobreza en América Latina descendió considerablemente, cayendo del 44% al 28%.

De modo particular, en diversos países se ampliaron o mejoraron instrumentos de política social que suelen agruparse conceptualmente en las llamadas “políticas de transferencia de renta” o “transferencias monetarias condicionadas”. Se calcula que este tipo de medidas están beneficiando actualmente hasta un 12% de los hogares latinoamericanos, destacando experiencias como la de Chile, México o Brasil¹⁰⁵.

¹⁰³ Declaración realizada por representantes de organizaciones sociales e indígenas en el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014. Notas de Campo del autor.

¹⁰⁴ Para una mejor comprensión del contexto en el que se elabora la nueva política minera venezolana y sus efectos sobre la territorialidad de los pueblos indígenas del país, ver: Bello, Luis Jesús y Tillet, Aimé (2015).

¹⁰⁵ Una de las más conocidas ha sido el Programa Bolsa Familia desempeñado en Brasil desde los primeros pasos del primer gobierno de Lula, en 2003, como eje fundamental de una estrategia emblemática que quedó conocida como Programa *Fome Zero*. Entre sus principales idealizadores iniciales se encuentra el que fue Ministro del primer gobierno Lula y actual Director-Presidente de la FAO, José Graziano da Silva. Otros colaboradores iniciales del programa, como el fraile dominico Frei Betto, acabó distanciándose del

Al mismo tiempo, medidas políticas aplicadas en el ámbito laboral también deben ser consideradas. El aumento progresivo y permanente de los salarios reales y, particularmente, del salario mínimo, ha introducido un mayor sentido de estabilidad y de comportamiento de consumo en los sectores más populares. También algunos países han destacado en el combate a la economía sumergida o empleo informal, aunque en el conjunto de América Latina todavía afecta a 90 millones de personas (Burchardt, 2014).

Por tanto, podemos deducir que la conjugación de políticas de transferencia de renta con los cambios en las políticas laborales y de valorización de los salarios podrían explicar, en parte, los avances en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión social en América Latina en los últimos años.

Ahora bien, la cuestión que nos interesa es la vinculación que se establece en el seno de algunos gobiernos entre las políticas sociales y la continuidad del (neo) extractivismo. “Bajo los gobiernos progresistas poco a poco se está solidificando un nuevo discurso por el cual el extractivismo ahora pasa a ser una condición necesaria para combatir la pobreza” (Gudynas, 2009: 213). Tenemos delante de nosotros un círculo complejo que se cierra, auto-legitimándose y auto-alimentándose, en el cual conquistas sociales importantes se ven vinculadas al éxito del (neo) extractivismo en la forma de aumento de las rentas e ingresos del Estado. En esta especie de círculo vicioso “los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales, que requeriría de futuras compensaciones” (Gudynas 2012: 138).

El resultado es la legitimación del modelo y la aceptación de la lógica del sacrificio y de los territorios vaciables (Sack, 1986) o sacrificables. De modo especial sucede en el caso de la minería y de la construcción del discurso que apela la supuesta “responsabilidad” de la nueva minería del siglo XXI. En esa narrativa neocolonial que continua apropiándose del presente y del futuro, los procesos se ejecutan siempre “en nombre de la ‘lucha contra la pobreza’ y por el ‘derecho al desarrollo’ de nuestros países proveedores de materias primas” (Antonelli, 2014: 81).

Por otro lado, las políticas sociales desarrolladas por los nuevos gobiernos no han resuelto algunas contradicciones y tensiones que se mantienen en las agendas de la sociedad civil y que expresan límites severos del Estado (neo) extractivista. Una de las primeras limitaciones es que las políticas de transferencia de renta no consiguen por sí mismas una redistribución real de los bienes y tampoco contemplan por sí solas el amplio campo de la justicia social.

Gobierno Lula años después por discrepancias sobre el carácter periférico que se concedía a estas políticas sociales en detrimento de la primacía de la política de crecimiento económico.

Burchardt afirma que, en economías extractivistas, el movimiento de ascensión social o de mejora de calidad de vida y de capacidad de consumo que se produce es generalizado en todos los estratos sociales. Esto dificulta percibir que la estructura desigual se mantiene. El aumento de renta en los sectores más populares no ocurre de un modo más relevante que en los sectores de clase media y alta que también vivencian una mejora de su ya envidiable calidad de vida. Incluso en términos proporcionales y absolutos, el aumento de capacidad de consumo tiende a ser hasta mayor en los segmentos sociales más estables que en los sectores populares. Esta sensación de que “todos ganamos” oculta la permanencia de desigualdades y, sobre todo, la vulnerabilidad de la mejora experimentada en los sectores más populares frente a la seguridad evidenciada en los otros.

Un instrumento que nos permitiría analizar mejor el alcance real de los impactos de las políticas de transferencia de renta sobre la estructura de desigualdad social sería la política fiscal de los Estados: de qué modo se redistribuye la riqueza o no a partir de la contribución desigual al erario público. Entre 1990 y 2008, la tasa impositiva para los grandes patrimonios aumentó muy poco, de un 0,3% a un 0,7%; mientras tanto, los impuestos al consumo generalizado, como el caso del IVA, se multiplicaron por tres en el mismo período. Aun así, se consigue instalar en la sociedad un cierto consenso de legitimidad política al modelo y de satisfacción generalizada.

Otra limitación es que las políticas de transferencia de renta han favorecido un proceso de inclusión “por el consumo”, funcional al crecimiento económico productivista, pero no por la garantía de derechos sociales. Esto es claro en el caso brasileño donde los gobiernos del PT confiaron “que a ‘cidadania pelo consumo’ seria suficiente para reverter as desigualdades históricas existentes no nosso país e, de quebra, desmontar a estrutura de poder das elites. Contudo, tal estratégia se mostrou frágil posto que insuficiente para atingir tais objetivos” (Carvalho: 2015). Se aumenta [muy moderadamente] la capacidad de consumo en una parte significativa de la población, potencializando las condiciones de dinamismo de la producción nacional; pero no se garantizan al mismo tiempo derechos constitucionales como el empleo, la educación, la salud, la tierra o el saneamiento básico.

5.3.2. Contradicciones, tensiones y límites en un Estado disputado

Podemos deducir que esta confluencia entre los nuevos gobiernos “progresistas”, particularmente en América del Sur, y las dinámicas globales que caracterizan este nuevo ciclo (neo) extractivista, ha introducido transformaciones importantes en el comportamiento del Estado. Estos cambios proceden de la reivindicación por una mayor presencia del Estado y de un mayor peso de la política en la conducción de lo económico, de lo público sobre la primacía de lo privado, como acabamos de ver.

Por otro lado, estos cambios traían en sí mismos algunas contradicciones y tensiones que se han mostrado evidentes en algunos países. El avance de las actividades

extractivas ha aumentado el volumen de conflictos socioambientales localizados en el territorio, en un contexto en el que las organizaciones sociales venían de un proceso maduro de articulación y habían conquistado un importante espacio de reconocimiento de derechos. A su vez, las élites regionales mantuvieron en muchos lugares el control de los gobiernos de proximidad y las grandes empresas continuaron asumiendo el papel de *actor social total* (Svampa, 2008: 19).

1. Estado compensador y equilibrista

Resulta de este escenario complejo la figura del Estado como un campo disputado por intereses antagónicos que buscan legitimar posiciones a través de su influencia en el espacio público y en el dominio del horizonte social. “(...) es importante identificar la reemergencia del Estado en el centro del debate post-globalización y postneoliberal, como un espacio también de apropiación por parte de los movimientos sociales, y de reformas en la clase política” (Preciado y Uc, 2010b: 18). Mientras los sectores populares y organizaciones sociales actúan para que el Estado asuma sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos fundamentales, los grupos vinculados a las actividades económicas *glocales* ejercitan su influencia sobre el Poder Público para que asuma su papel regulador y facilitador, dejando a ellos la patente del futuro. Por último, el crecimiento de una clase media importante en algunos países incorpora un tercer factor, que muchas veces relega al Estado a un papel de ejecutivo de servicios públicos.

Eduardo Gudynas propone el término de “Estado compensador” (2012) para definir la naturaleza del Estado resultante. Afirma que en estos países no se están reproduciendo, claramente, las lógicas del Estado liberal o neo-liberal de los últimos años del siglo XX y tampoco se camina hacia un Estado de Bienestar al estilo europeo. El Estado que emerge es un actor que va a necesitar gestionar una compleja trama de contradicciones internas y de límites de su propia actuación. El elemento clave del Estado compensador es la búsqueda de equilibrios (2012: 139), que se traduce en dos ejercicios:

- El primer ejercicio tiene que ver con nivelar, de un lado, las concesiones que el Estado ofrece al capital inversor y productivo y, de otro lado, la voluntad de mantener un papel protagónico de lo público con una legitimidad mayor que la iniciativa privada y con capacidad para controlarla;
- El segundo ejercicio consiste en conciliar las dinámicas macro-económicas que generan “confianza” hacia el mercado global – unidas a los intereses de las agencias económicas del modelo extractivista - y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

Ambos ejercicios son extremadamente complejos y frágiles. A pesar de que los nuevos gobiernos “progresistas” acumulaban importantes dosis de apoyo popular y elementos potentes de carisma particular en algunos de sus dirigentes, estos componentes no agotaban por sí mismos la naturaleza contradictoria de los intereses enfrentados. No consiguen abordar los problemas de fondo, aunque pretenden transmitir, interna y

externamente, la sensación de equilibrio posible entre elementos de naturaleza inconciliable, ofreciéndose ellos mismos (carismas personales) o sus gobiernos como oportunidades históricas.

En ese equilibrio ilusionista, las complicidades del Estado con los sectores del poder económico llegan a ser, con frecuencia, más densas y concretas que con los sectores populares. Maristella Svampa habla de un Estado que debe operar en “un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactorial (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, ONG y otros actores), pero en estrecha relación con los capitales privados multinacionales” (Svampa, 2012: 38). Nosotros añadiríamos también con los capitales privados nacionales o multinacionales de origen nacional (véase el caso de Brasil o de Argentina).

En el Estado compensador la cuestión del “interés general” se convierte, al mismo tiempo, en una coartada y en un campo de significación. Gobiernos y poder legislativo buscan mecanismos – jurídicos, simbólicos y económicos – que identifiquen el interés general o interés público con determinados intereses económicos, ligados al extractivismo, inhibiendo así cualquier intento de crítica social sobre el modelo económico. Cuando un megaproyecto o una concesión de derechos de explotación es identificada con este interés común terminan triunfando sobre los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos (Little, 2014b: 416), campos “sacrificables” por el beneficio de la mayoría. Elementos fundamentales de la convivencia social, como los derechos humanos, la diversidad sociocultural, un ambiente sano o las posibilidades de un futuro sostenible, entre muchos otros, son relegados de esta definición de interés general que, una vez más, absorbe el dominio simbólico de lo económico.

Esta apariencia de que existe un consenso generalizado tiene una eficacia simbólica muy grande, “pues alude a la idea de que existiría un acuerdo – tácito, aunque con el paso de los años, cada vez más explícito – acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista (...) La aceptación – tácita o explícita – de tal ‘consenso’ contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la ‘sensatez y razonabilidad’ de un capitalismo progresista, al imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista” (Svampa, 2012: 36).

Un eventual consenso social con estas características nos confronta con dimensiones éticas que deben permear la convivencia social y la acción política, y que el Estado que emerge del (neo) extractivismo no solo no ha conseguido robustecer sino que las ha sometido a un exilio forzado. Burchardt afirma que un consenso basado en la sobreexplotación de los bienes en el tiempo presente no es un acuerdo construido sobre la base de la colaboración social, sino más bien en “una especie de ‘comunidad

depredadora' que apenas conoce mecanismos de compensación y que, en caso de crisis, posiblemente tendría una alta propensión a los conflictos" (Burchardt, 2014: 9).

2. Estado instrumental

Si la primera característica de este nuevo Estado compensador es la búsqueda (frágil) de equilibrios, una segunda característica es la de su vinculación a la razón instrumental. Los gobiernos llamados "progresistas" en América Latina han mantenido e intensificado la primacía del crecimiento económico sobre las relaciones sociales, ahogando las posibilidades de implementar otras políticas estructurales. "(...) es impactante advertir que se sigue apostando al crecimiento económico mediado por exportaciones e inversiones. Y que esto se defiende en el contexto de una recurrente crisis del capitalismo en los países industrializados no deja de ser llamativo" (Gudynas, 2012: 130). Argumenta Dias dos Santos que el llamado neo-desarrollismo se traduce en la práctica en una especie de "pensamiento y de acción política" que, efectivamente, rescata el papel pro-activo del Estado en estrecha relación con el capital privado, compartiendo ambos un horizonte de inserción competitiva en el mercado mundial.

Una de las consecuencias más severas de esta inmersión en la racionalidad instrumental es la pérdida de creatividad y de libertad política, necesarias ambas para impulsar transformaciones de carácter estructural. La creatividad es substituida por la seguridad o por el pragmatismo, en nombre de los cuales se mantienen las condiciones de reproducción social. Podría pensarse que la confluencia de estos gobiernos "progresistas" por un período de años no desdeñable habría permitido las condiciones para transformaciones estructurales más profundas. Lo cierto es que, en muchos casos, la única baza que estos gobiernos han utilizado ha sido la de ensayar pequeñas transformaciones en terrenos que no ponían en riesgo, necesariamente, los procesos de acumulación del capital ni de inserción global (2012: 142).

Las utopías que alimentaron los procesos populares que hay por detrás de estos gobiernos "progresistas" en América Latina tienen una lógica de medio y largo recorrido, que se corresponde con la profundidad de las transformaciones necesarias. Por el contrario, la racionalidad (neo) extractivista asume el corto plazo de la lógica economicista e hipoteca los cambios estructurales a tiempos siempre venideros. En definitiva, nubla la creatividad de imaginar la transición necesaria entre el presente imperfecto que se quería cambiar y el futuro posible que alimentó la utopía política. En un sentido más profundo, la racionalidad instrumental se caracteriza porque son los grandes grupos de poder económico y las grandes corporaciones las que siguen con el control del presente y el dominio sobre el futuro, ofreciéndose como única vía para llegar a él. Sólo una mirada crítica de historiador del presente permite advertir en qué se ha convertido ese, ahora, "futuro pasado" (Antonelli, 2014: 79).

3. Estado de excepción

Una tercera característica del Estado implicado en el (neo) extractivismo es lo que Raúl Zibechi (2014) ha descrito como un Estado de excepción permanente, dimensión que suele traducirse en dos dinámicas concretas.

La primera de ellas es la de un Estado que formula leyes y decretos abusando, con demasiada frecuencia, del carácter de excepcionalidad de las medidas, de manera que no se desestabilicen los proyectos y planificaciones económicas. Esta actitud se ha mostrado en muchas ocasiones relacionada a la viabilidad de grandes proyectos de infraestructura, concesiones de derechos extractivos o normativas de ordenamiento territorial. La modificación de los procedimientos de licencia ambiental – reduciendo los tiempos para que los órganos ambientales se pronuncien sobre la viabilidad o no de un emprendimiento –, la alteración de la delimitación de Unidades de Protección ambiental – para permitir la instalación de los proyectos – o la formulación de medidas cautelares para disuadir protestas sociales en canteras de obras son algunos de los ejemplos de las decisiones que son tomadas con una frecuencia cada vez mayor.

Otros ejemplos se refieren a la interposición permanente por parte de los Gobiernos de recursos contra decisiones judiciales de primera instancia que implicaban la paralización de las obras o de las licencias para megaproyectos o proyectos extractivistas; con ello, se conseguía que la obra continuase mientras el proceso judicial caminaba hacia otras instancias, garantizándose así la política del “hecho consumado”.

La segunda dinámica, y, sin duda, una de las contradicciones internas más profundas en los nuevos Estados (neo) extractivistas, es la criminalización abierta contra los movimientos sociales y las resistencias locales (Svampa, 2013), unido al frecuente uso de la fuerza sobre las comunidades que protestan contra la implantación de proyectos extractivos, lo que podemos caracterizar como una violencia de Estado. Siguiendo el esquema propuesto por Composto y Machado, analizado en el Capítulo 4, nos estaríamos refiriendo a las estrategias de conflictividad directa contra las comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH salió al paso de esta cuestión con el Informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”, publicado en 2016. En el Informe se aborda específicamente el aumento observado “en años recientes” (11) de un uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, con el fin de obstaculizar sus trabajos. Afirma el Informe de la CIDH que este fenómeno se da con mayor frecuencia en determinadas situaciones, entre las cuales destaca:

- El caso de comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de mega-proyectos y la explotación de recursos naturales;

- Contextos de protesta social durante o con posterioridad al desarrollo de una manifestación, bloqueo, plantón o movilización por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en la misma;
- Contextos de defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de líderes y lideresas campesinos, indígenas y afro-descendientes.

El Informe de la CIDH confirma que, entre los actores que operan este uso indebido del aparato penal contra defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran agentes estatales (legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares) y no estatales (empresas privadas, guardias de seguridad privada, personal que trabaja en los mega-proyectos o propietarios de tierra). Las formas de uso indebido hacen referencia a la interposición de denuncias infundadas, aplicación arbitraria de figuras penales no adecuadas - como inducción a la rebelión, terrorismo o resistencia a la autoridad - acogimiento de testimonios sabidamente falsos, formulación de leyes que castigan el derecho de reunión y de libertad de expresión y otros. Esta criminalización también sucede cuando defensoras y defensores de derechos humanos interponen denuncias formales contra violaciones de derechos o indicios de corrupción (47).

Raúl Zibechi afirma que el principal instrumento del modelo de acumulación por desposesión (David Harvey) en la “zona del no-ser”¹⁰⁶ es la violencia contra las comunidades, que reúne a las fuerzas armadas de los poderes estatales y a fuerzas paramilitares o privadas; “la violencia y la militarización de los territorios son la regla” (Zibechi, 2014: 77).

El Conselho Indigenista Missionário-CIMI, en sus Informes anuales sobre la violencia ejercida contra las personas o comunidades indígenas en Brasil, afirma que la violencia institucional puede asumir también otros rostros concretos (CIMI, 2014): omisión y morosidad en la regularización de las tierras indígenas, ocasionando un empeoramiento de los conflictos y de la violencia en los territorios; omisión en las políticas de educación y sanidad dirigidas a las comunidades; formulación de proyectos de ley que reducen, disminuyen o anulan derechos fundamentales de los pueblos indígenas ya reconocidos.

Es evidente que esta deriva hacia un Estado en permanente estado de excepción puede socavar aspectos fundamentales de la vida democrática, como ya habíamos indicado en el Capítulo 2 al describir las consecuencias de los procesos de mundialización de los territorios en el período globalizador actual. Esto se hace especialmente sensible en contextos en los que la economía extractiva ejerce una influencia directa sobre las

¹⁰⁶ Zibechi recoge los términos de zona del ser y zona del no-ser, acuñados por el sociólogo Ramón Grosfoguel, y que se refieren a espacios sociales en los que, dándose igualmente el conflicto social, éste se reproduce y resuelve de modo diferente. En la zona del ser, desde donde la mayor parte de la teoría social crítica es elaborada, la condición humana es reconocida y se abren ciertas condiciones para la negociación; en la zona del no-ser, donde nunca operó la lógica de la inclusión o del bienestar, y en la que Grosfoguel sitúa a indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, trabajadores de las periferias, ..., la lógica del Estado que impera es la de la negación, la exclusión o la violencia.

relaciones entre el Estado y la sociedad. “De este modo, los gobiernos progresistas de América Latina, que llevan más de diez años tratando de aumentar también la participación social en la región mediante la extracción de materias primas, podrían minar a largo plazo la forma de gobierno que los ha devuelto al poder: la democracia” (Burchardt, 2014: 13).

Una contradicción principal que los gobiernos “progresistas” y (neo) neextractivistas no consiguieron superar fue la “apropiación del espacio político” - y por tanto de lo público - por parte del poder económico. Esto se evidencia en la intervención directa del capital privado en los mecanismos representativos democráticos a través del financiamiento de campañas o de partidos o en el aumento de su incidencia directa en los cuadros más altos de gobierno.

El mundo de la empresa ha encontrado en la política latinoamericana un campo de inversión. Burchardt observa, citando a Fernando Coronil, que en el sistema capitalista, en términos generales, se acuña la máxima “*el negocio de la política son los negocios*”; es decir, el papel del Estado es el de regular el marco de las relaciones de modo que se garanticen las condiciones de la acumulación capitalista. Ya en una economía extractivo-exportadora la lógica se profundiza: “*el negocio de los negocios es la política*”. Es decir, como el capital está interesado en ejercer el control de los bienes naturales, en aquellos lugares donde estos bienes estén controlados con mayor intensidad por el Estado - aspiración de los gobiernos “populares” de inicios de siglo XXI en América del Sur – le interesa a este mismo capital acceder al control directo o indirecto del Estado.

La política representativa se convierte, paradójicamente, en un campo atractivo para la inversión de capital y para la especulación a través de financiamiento de campañas y de *lobbys* en aquellos países donde no existe, o es muy limitada, la financiación pública de las campañas electorales.

5.4. Conflictos socioambientales, movimientos sociales y estándar de derechos

La intensificación de las actividades extractivas ha provocado un aumento de los conflictos socioambientales en América Latina en los últimos quince años (Composto y Navarro, 2014: 33). Comunidades indígenas y campesinas han reaccionado por toda la geografía latinoamericana con acciones de resistencia local, movilización ciudadana, cabildeo e incidencia política, a nivel regional, nacional, continental o internacional. Para Maristella Svampa, estamos delante de un momento de “profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios” que, a su vez, ha abierto un nuevo ciclo de luchas centradas en la defensa del territorio y del ambiente (2012: 32).

En el transcurso de la elaboración de este trabajo de investigación, diferentes conflictos socioterritoriales han surgido o se han intensificado en los diversos países

latinoamericanos. Sin pretender ser exhaustivos, sólo como ejemplo de la tensión permanente que se vive en el continente, podemos hacernos eco de algunos de estos conflictos que tomaron visibilidad durante el período de nuestra investigación.

En Guatemala, en mayo de 2014, la Policía expulsó a un grupo de centenares de personas de las comunidades San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que se manifestaban a la entrada de la mina de oro El Tambor de Kappes¹⁰⁷. Ese mismo mes, una movilización de cerca de 12.000 personas se manifestaba en las calles de Montevideo, capital uruguaya, protestando por la instalación del proyecto de minería de hierro Aratirí, en la región de Cerro Chato¹⁰⁸. En Honduras, la activista y dirigente comunitaria Berta Cáceres, del pueblo indígena lenca y coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras/COPINH, fue asesinada en febrero de 2016. En enero de 2015, organizaciones haitianas agrupadas en el Colectivo Justicia en la Minería, denunciaron la Ley de Minería que estaba en discusión en el Parlamento del país y que había sido elaborada con el apoyo del Banco Mundial¹⁰⁹. En Brasil, comunidades indígenas del pueblo Munduruku mantienen una movilización constante contra la construcción de la Hidroeléctrica de São Luiz de Tapajós, en el curso medio del río Tapajós, que hace parte de un complejo hidroeléctrico que afectará toda la cuenca. En el norte amazónico de Perú, comunidades de los pueblos Awajun y Wampis mantienen también una permanente movilización en defensa de su territorio frente a la explotación petrolífera – por la cual ha habido dos derrames petroleros en los últimos años – y la presencia de la minera Águila Dorada en la zona de Cajamarca¹¹⁰. En Ecuador, en territorio shuar, muy próximo a la frontera con Perú, en 2014 comenzaron los desalojos forzados de las comunidades locales en el Proyecto Minero El Mirador, administrado por la empresa Ecuacorriente S.A. con apoyo del gobierno central¹¹¹. En Colombia, familias campesinas se organizan en la vereda Chaparrito, del municipio de Puerto Concordia, para evitar su desalojo por parte de un proyecto de apropiación de las tierras para siembra, producción y explotación vegetal de palma aceitera.

¹⁰⁷ El conflicto se viene dando desde 2012 y las comunidades reaccionan por los impactos que la mina ha traído a la escasez de agua. En: <<http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2014/05/violento-desalojo-de-la-resistencia.html>>

¹⁰⁸ En <<http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=PT&cod=80551>>.

¹⁰⁹ En <<http://cronicasdeldespojo.blogspot.com.es/2015/01/ong-de-haiti-denuncian-ley-de-mineria.html?spref=fb>>. En 2014, la organización Front Line Defenders publicó el Informe “Defensoras y Defensores del medio ambiente en riesgo en Perú”, en el que constataban que cerca de 400 dirigentes comunitarios de las regiones de Cajamarca (42.5% del territorio concedido a empresas mineras) y Cusco (21%) respondían pro procesos judiciales interpuestos por empresas mineras o por el propio Estado peruano.

¹¹⁰ En <<http://larepublica.pe/19-09-2014/indigenas-awajun-y-wampis-exigen-retiro-de-minera>>.

¹¹¹ Para más información sobre este caso, ver: “Informe sobre desalojos forzosos realizado por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor”, realizado y publicado en diciembre de 2015 por las entidades Investigación Acción Psicosocial, Acción Ecológica y people’s Health Movement. Accesible en: <<https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/informe-sobre-desalojo-forzoso.pdf>>.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina-OCMAL, existen registros actualmente de un total de 215 conflictos abiertos solo en relación a la actividad minera. Estos 215 conflictos se refieren a 225 proyectos implicados y afectan a 327 comunidades locales¹¹². La defensoría del Pueblo de la Nación, en Perú, confirmaba en 2009 que el 50% de los conflictos sociales en el país son de carácter socioambiental, y entre ellos el 70% se relacionan con la actividad minera (Svampa, 2012: 22).

La capacidad de movilización y resistencia de las comunidades locales constituye, en la mayor parte de los casos, el único resorte que manifiesta oposición al avance de los proyectos extractivos. Movimientos sociales clásicos como el sindicalismo obrero y la propia izquierda clásica latinoamericana han tenido dificultades para mantener una posición significativa en esta cuestión¹¹³.

Espacios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH o el Foro Permanente para Asuntos Indígenas del Consejo de Asuntos Sociales del Sistema de Naciones Unidas han recibido a lo largo de los últimos años información o testimonios directos de representantes de comunidades cuyos derechos estaban siendo agredidos por causa de proyectos extractivos y obras de infraestructura.

Las luchas por la defensa de la tierra, el agua, el aire o la vida protagonizadas por pueblos indígenas, comunidades campesinas, pescadores o afrodescendientes, les ha colocado en una posición estratégica (Porto-Gonçalves, 2008). No sólo porque pleitean al sistema económico el bien máspreciado – el territorio – sino porque en este conflicto posicionan nuevas matrices de conocimiento y de sociabilidad.

Estas luchas aparentemente locales atraviesan las diversas escalas hasta llegar a la escala global e inter-estatal, donde también consiguen colocar en las agendas globales la cuestión de los derechos colectivos. Como habíamos apuntado en la presentación del problema de investigación, al inicio del trabajo, la resistencia en los territorios asociada a la exigibilidad de derechos conquistados y la habilidad multiescalar de articulación del movimiento indígena, son elementos fundamentales en el actual escenario de conflictos socioambientales y territoriales como consecuencia del ciclo expansivo del extractivismo, junto con una mayor solidez de los movimientos sociales.

Hemos de destacar que se ha profundizado el reconocimiento de los derechos colectivos en los diversos países de la región, como lo demuestran los procesos constitucionales

¹¹² Mapa de Conflictos Mineros en América Latina. En <http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db/>. Último acceso 21/07/2016.

¹¹³ Las izquierdas latinoamericanas, herederas del acento modernista de las izquierdas procedentes de Europa, abrazaban (y abrazan aún) la visión productivista y homogeneizadora del progreso. Difícilmente se encontraba dentro de la izquierda política lugar para “oponerse al irresistible credo del progreso (...) Quizá mucho más que en otras latitudes, las izquierdas – ya sea en su matriz anticapitalista como nacional-popular – se mostraron sumamente refractarias a las corrientes indigenistas y ecologistas que se iban pergeñando a la luz de las diferentes críticas del paradigma productivista” (Svampa, 2008: 3).

que se han dado desde finales de la década de 80 hasta nuestros días, con pocas excepciones, y que han ayudado a consolidar el marco formal de garantía y exigibilidad de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas dentro de los Estados nacionales.

El reconocimiento de estos derechos no significa, hasta ahora, una plena garantía de los mismos. El escenario que se vive en la mayor parte de los países de la región es de un permanente cuestionamiento de estos derechos e incluso intentos de retroceso en sus interpretaciones, conducidos por sectores de la oligarquía regional y del poder económico. Sin embargo, no cabe duda de que el reconocimiento de estos derechos ha introducido cambios profundos en la interacción de los pueblos indígenas con el Estado y con la sociedad en su conjunto y ha abierto un nuevo campo de movilización al que se suman organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de juristas, defensorías públicas u otros agentes.

Por otro lado, y esto es lo que nos interesa detallar en este capítulo, estos avances en los marcos normativos nacionales se vinculan, además, con el avance en las últimas décadas de un marco de derecho internacional que recoge igualmente los derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas, sin menoscabo del goce efectivo de todos los derechos humanos fundamentales de carácter general. El Sistema Universal de Derechos Humanos, orgánicamente inserido en el sistema de Naciones Unidas, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro de la Organización de Estados Americanos, representan, en nuestro caso, los dos ámbitos supra-estatales de reconocimiento, defensa, promoción y exigibilidad de los derechos.

En los sistemas internacionales de derechos humanos, las comunidades locales y organizaciones sociales han actuado con estrategias de incidencia en políticas públicas nacionales, documentación y denuncia de casos de violación de derechos o la promoción de un marco jurídico más favorable y que exija responsabilidades a las grandes corporaciones y empresas (Montgomery y Lyons, 2015: 142). Es precisamente en el campo de la responsabilidad de los actores privados, y de la exigibilidad a ellos del respeto a los derechos humanos, donde menos se ha avanzado en los sistemas internacionales de derechos humanos, más enfocados a velar por las responsabilidades y obligaciones de los Estados, que son las unidades que conforman estos espacios multi-laterales.

El avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es significativo. “Los derechos de los pueblos indígenas se han abierto paso en el derecho internacional, tanto por el activo cabildeo y abogacía indígena, como por el ejercicio cotidiano de las luchas indígenas por sus territorios y su porvenir. Hoy contamos con un corpus

consolidado – un ‘estándar mínimo’”¹¹⁴. Esta constatación nos permite decir que la escala global del sistema-mundo es hoy un espacio disputado entre las dinámicas económicas de acumulación y circulación de capital y la exigibilidad de derechos reconocidos ampliamente.

Los nuevos marcos nacionales y los instrumentos internacionales de derecho reconocen que la particularidad y especificidad social y cultural que representan estos pueblos les hace sujetos de una serie de derechos propios, de disfrute colectivo (Duprat, 2013: 11). La malla de instrumentos normativos del Derecho Internacional que se refieren a la vida y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas es muy densa y se conectan de forma directa con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que inician su articulado con el reconocimiento del derecho de libre determinación de todos los pueblos.

Nosotros vamos a destacar en este momento solamente cuatro de estos instrumentos, de diversa naturaleza, aplicabilidad e institucionalidad e incardinados todos en el amplio conjunto del derecho internacional. En nuestra opinión, estos cuatro instrumentos representan parte del paraguas básico de garantía de derechos sobre el que debe establecerse cualquier análisis político sobre la relación específica entre la actividad extractiva y los territorios indígenas.



Convenio nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989



Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007



Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2016



Informe CIDH sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, 2015

¹¹⁴ Documento inédito. Toledo, Víctor (2008). Políticas públicas basadas en derechos humanos. Un marco conceptual para políticas públicas para pueblos indígenas en América Latina. Santiago de Chile: Seminario Virtual Derechos Indígenas, sesión 5, CLACSO.

1. Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989

El Convenio nº 169 de la OIT, firmado en junio de 1989, ha sido ratificado por la práctica mayoría de los Estados latinoamericanos. Substituye el anterior Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957 y se asienta sobre los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1951). A lo largo de sus 44 artículos, el Convenio enuncia las obligaciones de los Estados y los derechos reconocidos a los grupos étnicos que residen en países independientes y miembros de la organización.

El Convenio nº 169 obliga a reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; para ello, los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para demarcar esos territorios, garantizar la protección de estos derechos y crear los mecanismos jurídicos necesarios para atender a las reivindicaciones territoriales formuladas por estos grupos (art. 14º). Así mismo, los gobiernos deberán proteger especialmente los derechos de estos pueblos a los bienes naturales existentes en sus territorios (art. 15º. 1); en caso de que el Estado sea el propietario de los recursos del subsuelo u otros recursos existentes en estas tierras, deberá consultar a los pueblos interesados y verificar en qué medida serían afectados sus derechos antes de emprender o conceder cualquier autorización de exploración o explotación de los bienes (art. 15º. 2).

El Convenio nº 169 de la OIT ha sido vinculado, con gran frecuencia, al tema de la consulta previa, libre e informada. Además de establecer la obligatoriedad de la consulta en el artículo 15º, el Convenio dedica un artículo propio al tema de la consulta. Dice su artículo 6º que los gobiernos son obligados a:

- a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar;
- b) establecer los medios necesarios para que los pueblos interesados puedan participar efectivamente y a todos los niveles en la adopción de decisiones en aquellos espacios responsables por las políticas públicas que les conciernan.

Finalmente, dice el Convenio que estas consultas deberán ser realizadas de buena fe, de modo apropiado a las circunstancias y con una finalidad: llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de los proyectos considerados.

La consulta deberá ser previa (antes de la concesión o puesta en marcha de cualquier iniciativa), libre (sin coerción a las comunidades ni manipulación) e informada (garantizando que las comunidades son conscientes de todas las informaciones sobre el proyecto y del modo como va a afectar su vida y sus derechos).

La cuestión de la consulta se ha convertido en una de las principales estrategias reivindicativas de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y en la resolución de los conflictos socioambientales causados por actividades extractivas de gobiernos o actores privados. Pese a que todos los Estados latinoamericanos han ratificado el Convenio nº 169 de la OIT, el ejercicio de la consulta previa, libre e informada, con la finalidad de conseguir un acuerdo o un consentimiento, ha sido nulo, inexistente, precario o adulterado, como después confirmará la CIDH.

A nuestro juicio, el Convenio nº 169 debe ser comprendido pensando en el carácter de interdependencia e integralidad de los derechos enunciados en su articulado, más que en la fragmentación de artículos separados. De este modo, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, recogido en el artículo 6º del Convenio, debe ser relacionado al menos con el artículo 7º del mismo texto, en el cual se dice que:

- a) los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera;
- b) los gobiernos deben velar para que se evalúe previamente la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de aquellas actividades de desarrollo que pretenden ser ejecutadas en esos territorios. Los resultados de estos estudios deberán ser criterios fundamentales para ejecutar las actividades;
- c) es obligación de los gobiernos adoptar las medidas necesarias para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan estos grupos.

El derecho a decidir libremente es interpretado a partir de lo explicitado en los sendos Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Civiles y Políticos, los cuales determinan que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”.

Coincidimos con Oscar Espinosa en que el derecho a la autonomía y la autodeterminación es, “posiblemente, el derecho más importante de todos los que se reconoce a los pueblos indígenas en la legislación internacional (...) supone el autogobierno y supone la existencia de territorios indígenas reconocidos y respetados por los Estados modernos” (Espinosa, 2014: 94). No tendría sentido una interpretación exclusivamente consultiva del derecho a la consulta previa, libre e informada, sin intención de respetar la decisión y las salvaguardas de las comunidades locales, cuando se está reconociendo al mismo tiempo su derecho a determinar libremente sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

2. *Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.*

En septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración vino a confirmar, consolidar, profundizar e incluso avanzar en el marco normativo que había establecido el Convenio nº 169 de la OIT.

En particular, destacamos el énfasis con el que aborda el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, siguiendo la interpretación de la Declaración de los Derechos Humanos y de los dos Pactos Internacionales mencionados anteriormente. Esta cuestión fue, sin duda, una de las más polémicas en el complejo proceso de negociación y elaboración de la Declaración durante más de veinte años. Perspectivas estatistas del derecho humano a la libre determinación enquistaron el debate por momentos y aún alimentan las reticencias de algunos¹¹⁵. En concreto, esta nueva Declaración afirma que:

- a) Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (art. 3º);
- b) En el ejercicio de la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en los asuntos internos y locales (art. 4º);
- c) Tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo (art. 23º);
- d) Tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras (art. 32º. 1).

En cuanto al componente territorial, la Declaración de Naciones Unidas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras y recursos que tradicionalmente han poseído y ocupado, y los Estados deberán asegurar el reconocimiento y protección jurídica de estos territorios (art. 26º). Además, tienen derecho a mantener y fortalecer la relación espiritual con la tierra (art. 25º) y a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras (art. 29º. 1).

La Declaración de Naciones Unidas desarrolla aún más la cuestión del derecho a la consulta. Obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas, de buena fe y a través

¹¹⁵ Para un análisis más específico del derecho a la libre determinación en el seno de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ver: Anaya, James (2010). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la Declaración. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA, 194-209.

de sus instituciones representativas, antes de adoptar o aplicar cualquier medida legislativa, buscando obtener su consentimiento libre, previo e informado (art. 19º).

Específicamente en el caso de proyectos que afecten los territorios indígenas y que estén relacionados con la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, los Estados deberán celebrar consulta antes de aprobar el proyecto y con el fin, siempre, de conseguir el consentimiento libre, previo e informado del grupo (art. 32º. 2). “En su explicación de voto en contra de la aprobación de la Declaración por el Consejo de Derechos Humanos, Canadá afirmó (y lo sigue esgrimiendo como argumento), que reconocer este derecho era reconocerles a los pueblos indígenas el derecho a veto sobre las decisiones de los Estados (...) el propósito mismo de la Declaración era dejar plasmados en un instrumento internacional derechos tan relevantes como éste para los pueblos indígenas” (Regino y Torres, 2010: 167).

La Asamblea General de Naciones Unidas también se posicionó sobre la presencia militar dentro de los territorios indígenas, afirmando que no deben desarrollarse actividades militares en estas tierras a menos que lo justifique una razón de interés público; y, en todo caso, la comunidad deberá ser consultada previamente (art. 30º).

Hay una intensa discusión acerca del valor vinculante o no de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en virtud de la diferenciación que el Derecho Internacional establece entre los diversos tipos de instrumentos internacionales; particularmente entre los tratados internacionales y las declaraciones. Esto ha fortalecido que las estrategias reivindicativas de los pueblos indígenas, principalmente en lo referente al derecho a la consulta, se canalicen a través de los mecanismos propios de verificación y denuncia del Convenio nº 169 de la OIT¹¹⁶. Sin embargo, diversos especialistas reivindican la legitimidad y el valor vinculante de la Declaración, orientando a que los diversos Tratados Internacionales sobre la materia hagan un esfuerzo por interpretar sus convenciones a la luz de esta Declaración¹¹⁷.

3. Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas

En el marco institucional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro de la Organización de Estados Americanos, también encontramos instrumentos normativos que recogen y confirman los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estos instrumentos se colocan en coherencia jurídica con los instrumentos del Sistema de Naciones Unidas y fortalecen el compromiso de los Estados miembros con sus obligaciones particulares.

¹¹⁶ La OIT solamente reconoce tres actores como sujetos que pueden participar representativamente en sus espacios y foros, o que pueden hacer uso de sus mecanismos: Estados, empleadores y trabajadores. Esto obliga a las organizaciones indígenas a vehicular sus reivindicaciones a través de organizaciones de trabajadores y sindicatos.

¹¹⁷ Para un mayor análisis de estos argumentos, ver: Claire, 2010b; Rodríguez-Piñero, 2010; Clavero, 2009.

En sesión plenaria del 7 de junio de 1999, la Asamblea General de la OEA “convencida de que la adopción de una declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas fortalecerá el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de estas poblaciones”, estableció un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para “continuar la consideración del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas”¹¹⁸.

El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recorrió un arduo y complejo camino de negociaciones previas antes de ver la luz. En febrero de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos/CIDH había aprobado un Proyecto de Declaración que ya encuadraba en el marco general de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos sobre derechos humanos del derecho interamericano e internacional. Casi veinte años después, en junio de 2016, la Asamblea General de la OEA aprobó definitivamente la Declaración¹¹⁹.

Ya en su preámbulo, la Declaración manifiesta su preocupación por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas por causa de la colonización y de haber sido despojados de sus territorios. Amparándose precisamente en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas, comentadas anteriormente, la nueva Declaración Americana confirma:

- El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, por el cual determinan libremente su condición política (III);
- La obligación de los Estados en reconocer y respetar el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas jurídicos, sociales, políticos y económicos, así como a sus tierras, territorios y recursos (VI);
- El derecho a su patrimonio cultural, tangible e intangible, estrechamente relacionado con sus territorios;
- El derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura (cuestión que será crucial posteriormente, como pretendemos demostrar, a la hora de exigir salvaguardas para las actividades económicas dentro de los territorios indígenas) (XVI);
- El derecho a un medio ambiente sano, a ser protegidos contra la introducción, abandono o depósito de cualquier material peligroso y a la protección de la capacidad productiva de sus tierras (XIX);
- Derecho a la autonomía y autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales (XXI);
- Derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados (XXIV);

¹¹⁸ Resolución AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), aprobada en la primera sesión plenaria, 7/6/1999.

¹¹⁹ Ver en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16>.

- Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización (XXV);
- Se vincula al derecho a la consulta previa, libre e informada con la finalidad de obtener el consentimiento de los pueblos sobre cualquier proyecto o política pública que afecte los territorios de estos grupos (XXIX).
- Por último, introduce la concepción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o de reciente contacto¹²⁰.

4. Informe CIDH sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, 2015.

A pesar de no tratarse de un instrumento de carácter vinculante en lo jurisdiccional, destacamos este Informe de la CIDH por tratarse, posiblemente, del documento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que aborda de un modo más específico y directo la relación entre las actividades extractivas y los derechos de los pueblos indígenas de América Latina. Representa un sentir y una posición legítima y explícita del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, por coherencia institucional, debe orientar la acción de los Estados miembro y las determinaciones, presentes y futuras, de la OEA en estas cuestiones.

La CIDH reconoce que el inicio del siglo XXI se ha caracterizado por un incremento de las actividades extractivas para la exportación en los sectores de hidrocarburos, minerales y monocultivos agrícolas, a los que se deben asociar los grandes proyectos de infraestructura (11 y 12). Con mucha frecuencia, estas actividades de exploración y explotación de bienes naturales se desarrollan en tierras y territorios ocupados por comunidades indígenas y afrodescendientes (16). Como es sabido, este tipo de actividades dejan un amplio abanico de impactos sociales y ambientales (17 y 18) en los territorios y en la vida de las comunidades que afectan directamente el pleno goce de sus derechos fundamentales.

Aunque la CIDH reconoce el derecho de todos los Estados a hacer uso de sus bienes naturales (55), recuerda que los mismos Estados tienen obligaciones ineludibles en el ámbito de los derechos humanos que no pueden ser desconsideradas (4), lo que les

¹²⁰ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos/CIDH publicó en 2013 el Informe *Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos*. Para la CIDH, el principio de no contacto es la manifestación del “derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la libre determinación (...) [que] tiene una relación directa y profunda con los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales” (ítem 22). Por otro lado, en la interpretación del derecho a la consulta previa, libre e informada, claramente difícil en estas situaciones, la CIDH defiende que se consideren a tal efecto las decisiones de los pueblos de “rechazo manifiesto a la presencia de personas ajenas en sus territorios” y de “mantenerse en aislamiento respecto de otros pueblos y personas” (ítem 25).

obliga a adoptar los más efectivos mecanismos de protección y promoción de los derechos. Afirma la CIDH que los derechos humanos nunca deben ser vistos como un obstáculo para el desarrollo, sino como una condición previa para éste (24). Los Estados miembros tienen obligaciones generales en relación con el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos fundamentales y obligaciones específicas relacionadas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La CIDH recomienda a los Estados que establezcan marcos normativos adecuados en cada país que definan sin ambigüedades las obligaciones del Estado y de terceros en la defensa de los derechos humanos, incluyendo los actores privados con interés en las actividades extractivas (67). Recuerda la CIDH que los Estados pueden y deben tener una relación adecuada de colaboración con las empresas, pero sin descuidar sus obligaciones primeras con el respeto y las salvaguardas a los derechos humanos (56).

Corresponde a los Estados la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las actividades extractivas, prevenir y combatir las actividades ilegales (126 y 127) y garantizar que las comunidades locales tengan acceso a toda la información y participen activamente de la toma de decisiones (6). Para ello, debe supervisar el trabajo de las empresas privadas que disfruten de derechos extractivos concedidos por los Estados, verificando que no ocurren agresiones al derecho a la propiedad colectiva, incluyendo los impactos sobre el hábitat y sobre la particular relación (económica, social y espiritual) que las comunidades mantengan con el territorio (102).

La CIDH hace un recorrido sobre los derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas que deben ser garantizados y protegidos por los Estados, incluyendo:

- El derecho sobre sus tierras y territorios, obligando a los Estados a adecuar sus marcos legislativos y abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas que supongan un retroceso en el goce de los derechos territoriales por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes (70, 151).
- El derecho a la protección del medio ambiente (58 y 59).
- El derecho general a mecanismos de participación efectiva, que en el caso de los pueblos indígenas se traduce en el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado (106, 156).
- El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en referencia a cualquier proyecto o medida jurídica o administrativa que afecta la vida y los territorios de los pueblos indígenas (70, 152, 153, 158).

Sobre el derecho a la consulta, la CIDH profundiza dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que alerta para el incumplimiento generalizado de la garantía del derecho a la consulta (173). Se han registrado muchos casos en los que proyectos y medidas jurídicas y administrativas han sido concedidas o decididas sin proceder a la consulta previa, libre e informada (174). En otras ocasiones, los Estados delegan esta responsabilidad en las empresas (178) identificando el derecho a la consulta y al

consentimiento con procesos desiguales de negociación o compensación, o con procedimientos irregulares. Reitera la CIDH que la obligación es del Estado y que debe ser implementada con las garantías necesarias. Se trata de una consulta previa, libre e informada, cuya finalidad es conseguir el consentimiento de la comunidad, acomodándose a las preocupaciones expresadas por la comunidad, ajustando e incluso cancelando un proyecto con base en los resultados de la consulta (179-181).

La segunda cuestión es que la CIDH aborda particularmente las condiciones en las que es obligatorio contar con el consentimiento de la comunidad. Este consentimiento implica que las comunidades conocen los impactos que el proyecto o la medida va a tener sobre sus tierras y el modo como va a afectar sus derechos; el consentimiento también implica que la comunidad informe si aceptan o no, o hasta qué punto o en qué circunstancias (168). La CIDH recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha considerado algunos supuestos en los que se hace obligatorio contar con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad local: “cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio” (183)¹²¹.

La CIDH alerta específicamente sobre los casos de concesiones extractivas que ocupan la práctica totalidad del territorio indígena, poniendo en riesgo la existencia misma de los pueblos (169), así como sobre la autorización de proyectos y de concesiones sobre territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial (170 y ss).

Concluye la CIDH que, al abordar los derechos humanos de los pueblos indígenas, se debe partir de la premisa de que son sujetos del derecho a la libre determinación: a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural de manera que les permita asegurar su existencia y bienestar como pueblos diferenciados (237).

Al final de este Capítulo, hemos posicionado lo que entendemos que es uno de los núcleos de discernimiento político del problema que nos ocupa, junto con el de la cuestión ambiental esbozada en el Capítulo 4. En un escenario de reconocimiento de derechos, con solidez y coherencia en los diversos instrumentos normativos - a nivel nacional, continental e internacional - la garantía de derechos territoriales antecede a las lógicas de instalación económica, lo cual, lejos de suponer una limitación constituye bases posibles para resolver conflictos presentes e imaginar el futuro.

¹²¹ La Corte Interamericana determina lo que entiende por “planes de desarrollo o inversión a gran escala” adoptando la exposición del ex - Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen (185): “proceso de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad sobre la misma, la explotación en gran escala de los recursos naturales incluidos los recursos del subsuelo, la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, refinerías, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares”.

Capítulo 6

Amazonia, territorio habitado

La segunda escala de nuestro trabajo es el territorio amazónico, que ha jugado un papel singular en los diversos ciclos extractivistas que se han desarrollado a lo largo de la colonización sobre América Latina. Sea por las dificultades en su exploración y explotación para agentes extraños a este ambiente; sea por la abundancia y disponibilidad, real o imaginada, de bienes naturales de interés. Esto ha afectado significativamente a las transformaciones socio-territoriales que se han dado, y continúan dándose, dentro del territorio amazónico. Como citamos en el primer Capítulo, Paul Little nos dice que la historia de las fronteras en expansión en Brasil es, necesariamente, una historia territorial y de territorialidades, porque la llegada de un grupo social con su propio imaginario espacial chocaba con las lógicas de los grupos que allí residían (Little, 2002a: 4): esto mismo podría ser extendido a todo el territorio amazónico en su conjunto.

Amazonia también juega un papel particular en los nuevos ciclos expansivos de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Desde las décadas de 60 y 70 se han intensificado en la región amazónica proyectos de inversión en infraestructura física de transportes, energías y telecomunicaciones (Becker, 2005: 73), así como en la sistematización de información geo-referenciada sobre la localización de bienes naturales. El volumen de población urbana ha aumentado de un modo acelerado. Todo ello ha contribuido para crear un escenario que favorecía las inversiones del capital extractivo en la región en un momento en que los recursos de difícil acceso se han convertido en focos de enorme interés.

Ya destacamos, además, el hecho de que diversos de los gobiernos con territorialidad amazónica han compartido entre sí, en estos últimos años, los horizontes políticos de carácter “progresista” que son asociados al (neo) extractivismo, como hemos analizado en el capítulo anterior. En particular, hablamos de gobiernos como los de Bolivia, Ecuador, Venezuela o Brasil, incluyendo de algún modo la afinidad que con ellos pudiese tener en un principio el gobierno de Ollanta Humala desde 2011 en Perú. Buena parte

de las políticas nacionales de estos Estados relacionadas con el (neo) extractivismo se han desarrollado en territorio amazónico, e incluso algunas de las intervenciones han tenido lugar en territorios nacionales contiguos o han contemplado proyectos de cooperación¹²².

Brasil y la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, nuestras dos escalas próximas de investigación, se enmarcan dentro del contexto amazónico, sobre el cual el Estado brasileño ha tenido una influencia particular en la primera década del siglo XXI. En definitiva, la Amazonia se nos presenta como una escala supralocal y supranacional que ejerce un papel de mediación analítica relevante en el abordaje del ciclo (neo) extractivista del siglo XXI.

En este Capítulo pretendemos caracterizar la relación entre las dinámicas globales y el espacio amazónico. Para ello, en primer lugar nos aproximaremos a una descripción del territorio amazónico desde su caracterización social y ambiental, deteniéndonos además en las estrategias y mecanismos de territorialidad que se han configurado sobre la Amazonia a partir de la actuación de las agencias estatales y no estatales.

En un segundo momento, analizaremos muy brevemente el modo como el proceso colonizador sobre la Amazonia ha permitido configurar un imaginario común de la región a partir de premisas que no se sostienen pero que han permeado las políticas desarrollistas sobre ella: la de pensar la Amazonia como un territorio sub-ocupado o vacío y como un territorio, a su vez, con fuentes inagotables de bienes naturales susceptibles de ser explotados.

En un tercer momento, describiremos las dinámicas actuales de la expansión del (neo)extractivismo sobre la Amazonia, dedicando un epígrafe especial a la actividad minera. Por último, concluiremos con un análisis de los diversos actores sociales, y sus agendas, en el espacio público amazónico donde se producen tanto los conflictos como las posibilidades de superación de éstos.

6.1. Amazonia, socio-diversidad y territorialidad (es)

La mayor parte de los datos que describen la Amazonia transmiten una dimensión portentosa¹²³. Su territorio se extiende sobre 7,5 millones de Km². Ocupa el 43% de América del Sur y está compartida por ocho Estados independientes más la Guayana francesa, departamento colonial de ultramar aún dependiente de Francia. Brasil es el

¹²² Acuerdo de Cooperación entre Brasil y Perú de 16/06/2010 para la construcción de 6 hidroeléctricas en territorio amazónico peruano con capital brasileño y consorcios empresariales de este mismo país (Dourojeanni, 2009); Complejo Hidroeléctrico del río Madeira, del Eje de Integración de Desarrollo Perú-Brasil-Bolivia, dentro de la Iniciativa IIRSA.

¹²³ Todos los datos utilizados en esta sección tienen como fuentes: Little, 2014; López, Fernando *e al.*, 2007 [documento inédito]; Veríssimo *et al.*, 2011; RAISG, 2012.

Estado que más territorio amazónico ocupa, representando el 65% del total. Ecuador, por su parte, dispone solamente de algo menos del 2% del territorio amazónico; espacio que, sin embargo, supone prácticamente la mitad de su territorio nacional, 45,1% (Tapia, 2004: 47).

La macro-cuenca del río Amazonas está formada por 12 cuencas principales y más de 1.100 afluentes importantes que llevan en sus cauces el 20% del agua dulce de todo el planeta. Los ríos amazónicos recorren 80.000 kilómetros, de los cuales 25.000 son navegables. Desde el Lago Titicaca, en la frontera Perú-Bolivia, considerada la naciente del río principal, hasta su desembocadura generosa en el Océano Atlántico¹²⁴, en el Estado de Pará/Brasil, hay un recorrido de 6.762 Km, lo que convierte al Amazonas en el río más extenso del mundo.

La aparente homogeneidad que nos devuelven algunas fotografías e imágenes aéreas de la región como una alfombra de floresta densa serpenteada por ríos sinuosos esconde una heterogeneidad impresionante de climas, relevos, tipos de suelo, formaciones geológicas y paisajes. Se habla de Amazonia como un complejo archipiélago de ecosistemas que conviven, coexisten e interactúan entre sí.

La floresta amazónica representa el 34% de las florestas originales que aún existen en el mundo y acoge 1/3 parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Se calcula que cada hectárea de la floresta amazónica puede contener en sí hasta 200 especies diferentes de árboles y se apunta a la existencia aproximada de 40.000 plantas vasculares (de las cuales el 75% son endógenas). Su fauna nos revela casi 400 especies de mamíferos, 1.300 especies de pájaros y 9.000 especies de peces de agua dulce; 2.500 tipos de abejas, 500 especies de arañas o 3.000 de hormigas. Estos datos solo informan de lo conocido; lo aún desconocido encierra una realidad imposible de dimensionar.

Sin embargo, más allá de toda esta impresionante realidad natural, un abordaje sobre el territorio continuo amazónico debe pasar inexorablemente por la extraordinaria socio-diversidad que en él habita. La Amazonia siempre ha sido y continúa siendo un espacio habitado. Según Pacheco de Oliveira (2010), la imagen de la majestuosidad natural de la región amazónica, construida fundamentalmente a partir del siglo XIX que es cuando la expansión colonial se vuelve más intensa, operó en el sentido de consolidar en el imaginario colectivo la idea del *imperio de la naturaleza* y, decorrente de ella, la *ausencia de historia*. La invisibilidad de la presencia humana en la región.

Investigaciones recientes nos ayudan a complejizar esta lectura y la imagen que se había propagado respecto de los pueblos que aquí se encontraban antes de la llegada de los europeos. “La visión creada en las regiones andinas sobre el mundo amazónico como espacio cuasi vacío y ajeno a la presencia humana contrasta con la realidad de un

¹²⁴ Se calcula que en la desembocadura, una inmensa boca de 200 Km que se abre al océano, el Amazonas lanza 220.000 m³ por segundo; es decir, 17 millones de toneladas de agua cada día.

mosaico de ecosistemas plenos de acción humana, con una larga historia de transformaciones de origen antrópico” (Fajardo, 2009: 368). Más tarde tendremos ocasión de explicar el modo como se construyó la imagen sobre los pueblos indígenas en el siglo XIX, precisamente el tiempo histórico en el que las nuevas naciones necesitaban elaborar su propio relato identitario.

Los estudios arqueológicos de la Amazonia aún tienen un vasto campo de investigación por delante. Sin embargo, los nuevos descubrimientos en esta área nos afirman que posiblemente se daban ya en este territorio concentraciones poblacionales que configuraban centros urbanos y espacios dedicados a la agricultura, contra la idea extendida de que sería una región habitada exclusivamente por pueblos pequeños de cazadores-recolectores (Neves, 2006; Pinto Lima y Moraes, 2013; Oyuela-Caycedo, 1999). Lejos de la imagen construida sobre los grupos étnicos presentes en el espacio amazónico antes del proceso colonial como grupos fundamentalmente pequeños y nómadas, las informaciones arqueológicas confirman que la Amazonia fue habitada, en las zonas próximas a los ríos y en las de tierra firme, por sociedades populosas, sedentarias y posiblemente estratificadas (Carneiro da Cunha, 1992).

Pacheco de Oliveira nos recuerda que las primeras crónicas ya habían descrito en parte esta realidad, aunque posteriormente fueron desconsideradas. “O que os primeiros cronistas, Diego de Carvajal e Gaspar de Acuña, relataram (Hagen 1945) sobre a descida do rio Amazonas, respectivamente em 1542 e em 1639, foram populações extensas, aglutinadas em grandes povoações ribeirinhas, praticando diversas formas de cultivo e criação (...). Tratava-se de sociedades complexas e estratificadas, com formas políticas e manifestações religiosas bastante elaboradas” (2010: 24).

Los procesos adaptativos de los diversos grupos humanos, su competencia por recursos y las experiencias que vivieron de acierto-error aún son un campo abierto a la investigación arqueológica y antropológica, excesivamente joven en lo que se refiere a la Amazonia. No obstante, ya se puede afirmar que la socio-diversidad y las diferentes formas de adaptación al medio fueron una constante en la región amazónica hasta nuestros días. “O que sabemos é que estas populações eram muito mais complexas e numerosas e usavam técnicas de manejo bem sofisticadas”¹²⁵.

No sólo la diversidad étnica ha sido dinámica, sino el propio ambiente físico ha sufrido también sus propias transformaciones. Según estudios académicos (Carson *et al.*, 2014) la actividad agrícola de una parte de la población amazónica se desarrollaría sobre áreas de sabana que ocupaban, aproximadamente, 1/5 parte del territorio amazónico entre los años 2.500 a.C. y 500 d. C. Estas áreas de sabana posiblemente fueron drásticamente

¹²⁵ Declaraciones de la arqueóloga Helena Pinto Lima, investigadora del Museo Emilio Goeldi de Pará/Brasil, recogidas en materia divulgada en periódico digital. <<http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/nova+teoria+afirma+que+amazonia+precolombiana+foi+populosa/n1237780376244.html>>. Acceso 20/09/2010.

despobladas con la llegada de los europeos y por causa de la expansión de las enfermedades que con ellos venían, contribuyendo a que nuevas áreas de floresta se propagasen y ocupasen estos espacios donde se desarrolló, al menos, el plantío de maíz.

6.1.1. Población, diversidad e inter-relaciones

En nuestros días, y después de más de cuatro siglos de incursión de sociedades europeas y nacionales en la Amazonia, la diversidad étnica representa aún una multiplicidad de procesos de adaptación, de relaciones, de usos del espacio, de saberes y conocimientos únicos y propios.

1. Pueblos indígenas amazónicos

En la región amazónica viven aproximadamente 33 millones de personas. Se reconoce actualmente la existencia de, al menos, 390 pueblos indígenas, lo que representa de por sí una diversidad étnica extraordinaria. Esta diversidad tal y como la conocemos hoy ha sido, posiblemente, el resultado de dinámicas de contacto, agregación y atomización de grupos étnicos mediatizadas por la Historia, lo que nos ayuda a comprender que la realidad actual no es un tapiz de sobrevivencias de la realidad que existía antes del proceso colonial sobre la Amazonia (Carneiro da Cunha, 1992).

La categoría genérica e histórica de “pueblos indígenas” encierra, en realidad, una pluralidad impresionante de lenguas, cosmovisiones, sistemas simbólicos, conocimientos y saberes; usos del espacio, técnicas y tecnologías, culinaria y artesanía; musicalidad, arquitectura, cultura material; memoria, relaciones sociales, estrategias económicas, sentidos de la propiedad; conceptos del tiempo, el espacio, el clima, el mundo y la vida. Solamente desde el punto de vista de las lenguas, los pueblos indígenas amazónicos son responsables por 240 lenguas diferentes, agrupadas en casi 50 familias lingüísticas entre las que destacan el Aruak, el Karib o el Tupi-Guarani. Este fenómeno convierte al territorio amazónico en uno de los espacios con mayor pluralidad lingüística del planeta.

La realidad indígena actual en la Amazonia está caracterizada por un dinamismo muy intenso que desaconseja ofrecer una única imagen de esta diversidad social. Si comparados con otras regiones vecinas, las comunidades indígenas de Amazonia mantienen un porcentaje mayor de individuos que continúan viviendo en la tierra colectiva donde su grupo desarrolla sus propios proyectos de vida. Pero una parte cada vez mayor de personas pasa a residir, temporalmente o de forma permanente, en los diversos núcleos urbanos diseminados por la región. La presencia de población indígena en las pequeñas, medias y grandes ciudades amazónicas, fenómeno que no es nuevo y que siempre hizo parte de sus dinámicas de interacción, es una realidad concreta que abre nuevos espacios de convivencia y de reelaboración identitaria.

Al mismo tiempo, la realidad indígena en la Amazonia no es un fenómeno plenamente acotado y concluido, debido a las inferencias aún visibles del proceso colonizador. Por

ejemplo, actualmente existen en la región decenas de grupos que reivindican su reconocimiento étnico y cultural. Durante el proceso de ocupación reciente de su territorio, con las ondas de expansión del capital, algunos de estos grupos fueron desapropiados de sus territorios y muchas veces obligados a renunciar a su lengua, sus saberes y sus tradiciones. Terminaron dispersándose por zonas del interior donde el capital aún no había entrado; otros se quedaron trabajando en condiciones precarias para los nuevos ocupantes de la tierra, en *fazendas*, *seringales* o grandes plantíos de cereales para la exportación. Otros muchos se diseminaron entre los barrios periféricos de las ciudades próximas, invisibilizados y ninguneados, intentando sobrevivir en los márgenes del llamado “progreso”.

Dejaron de ser reconocidos étnicamente, y hasta hace muy poco eran identificados de otro modo, como *seringueiros*, pescadores o castañeros, entre otros. “Nos llamaban caboco. Fuimos a buscar con nuestros abuelos, con los más viejos, y descubrimos que somos Nawa”¹²⁶. En los últimos años, a partir del proceso de emergencia del movimiento indígena, estos grupos han emprendido un proceso particular de reconstrucción de su identidad como pueblo, generando un movimiento por el reconocimiento étnico y de sus derechos colectivos. “Nós povos indígenas Mura, Munduruku, Munduruku-Cara-Preta, Tupinambá, Kambeba, Cumaruara, Arapium, Maitapu, Kayabi, Chiquitano, Migueleno, Xavante, Macuxi, Apolima-arara, Nawa, Kujubim, Wayoro, Guarasugwe, Tucano, Tupaiu e Purubora, de regiões dos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso e Rondônia, em luta pelo reconhecimento étnico e territorial, reunidos no I Encontro Amazônico dos Povos Indígenas Resistentes, nos dias 08 a 10 de agosto de 2014 (...) Solicitamos que o direito ao autoreconhecimento étnico seja respeitado como critério fundamental para o reconhecimento da identidade indígena, conforme recomenda a Convenção 169 da OIT”¹²⁷.

Del mismo modo debemos hacer referencia a los grupos étnicos cuyos territorios fueron divididos por las nuevas fronteras nacionales durante el período colonial y, posteriormente, nacional: grupos como los tikuna, matsés, kokama o jawa en la región hoy compartida por los Estados de Brasil, Colombia y Perú, o como los macuxi, wapichana, taurepang, ingarikó y patamona en la triple frontera actual de Venezuela, Brasil y Guyana Inglesa, escenario de nuestro trabajo de campo. Como significativa

Por último, se calcula que en la región amazónica haya cerca de 140 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, aunque en ocasiones este fenómeno encierra en sí mismo una compleja malla de contactos interétnicos mediados a veces por la vecindad territorial o el intercambio de objetos. La Amazonia constituye uno de los espacios donde se concentra actualmente el mayor número de pueblos indígenas en aislamiento

¹²⁶ Declaraciones de representantes indígenas en el I Encuentro Amazónico de Pueblos Indígenas Resistentes, Manaus, 8-10 agosto de 2014. Notas Diario de Campo del autor.

¹²⁷ Documento Final del I Encuentro Amazónico de los Pueblos Indígenas Resistentes. En: <https://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=141794&id_pov=370>.

voluntario, particularmente en la región sudoeste, hoy compartida por Brasil, Perú y Bolivia. La existencia de estos grupos con poco contacto genera dilemas sociales, éticos y políticos muy profundos en las sociedades nacionales y en los propios Estados.

Organizaciones indígenas e indigenistas trabajan por el reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos, principalmente el derecho territorial, así como el respeto a su determinación de no-contacto, teniendo como bien principal garantizar su sobrevivencia física y cultural. El Sistema Universal de Derechos Humanos no dispone, actualmente, de una claridad ni de una jurisprudencia que pueda orientar el camino de protección e los derechos de estos grupos étnicos. La Organización de los Estados Americanos sí ha hecho una mención expresa a estos pueblos en su reciente Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo XXVI, epígrafes 1 y 2). También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH elaboró en 2013 un Informe específico que contenía recomendaciones para el pleno respeto de estos grupos en aislamiento voluntario o contacto inicial en las Américas. Sin embargo, en un escenario de intensificación de las políticas extractivas y de grandes proyectos de infraestructura, los dilemas se multiplican y no siempre son bien administrados por los Gobiernos de turno. El principal instrumento del que se han servido en los últimos años los Estados amazónicos ha sido el de la negación; un instrumento que puede ser catastrófico para los grupos aislados, vulnerables a condiciones de exterminio real.

2. Comunidades tradicionales amazónicas

Aparte de los pueblos indígenas, otros grupos sociales se establecen hoy en la región amazónica. Para nombrarlos, se ha recurrido a conceptos amplios como “comunidades”, “grupos”, seguidos normalmente de adjetivos como “tradicionales”, “originarios”, “del interior”. Con ello se ha pretendido reunir conceptualmente una diversidad de grupos muy diferentes entre sí pero que, al mismo tiempo, reúnen características e intereses en común.

Hay una amplia literatura sobre la idoneidad o la amplitud de estos conceptos. Con Little, asumimos en este trabajo los riesgos que comporta adoptar cualquier término aglutinador (Little, P., 2002: 2). Sin embargo, lo hacemos porque reconocemos que el término “comunidades tradicionales” se ha convertido en los últimos tiempos en una categoría histórica, de validez analítica, y que puede convertirse en un instrumento político no desdeñable que aglutina y visibiliza sujetos colectivos, al tiempo que configura un escenario de derechos y de posibilidades societarias diversas. En el marco jurisdiccional brasileño, esta categoría ha sido reconocida a través del Decreto nº 6.040 de 7 de febrero de 2007 (Duprat, 2013: 16), de la Presidencia de la República, que instituye la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales – PNPCT. El Decreto define a los pueblos y comunidades tradicionales como “grupos culturalmente diferenciados y que se reconocen como tales, poseen formas propias de organización social, ocupan y usan territorios y recursos naturales

como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, innovaciones originarios y transmitidos por la tradición” (traducción por el autor).

Pertenecen a este abanico de comunidades tradicionales amazónicas, por ejemplo:

- Comunidades extractivas, como los caucheros, *balateros*, *quebradeiras de côco* o castañeros, entre otros. Se trata de grupos a los que se vincula con una determinada actividad de extractivismo forestal, inserida normalmente en los círculos de mercado regional, nacional o internacional;
- Comunidades ribereñas o más relacionadas directamente con los ríos y lagos, siendo pescadores artesanales, *varzeiros* o *praieiros*. Se trata de grupos que extraen su sustento del inmenso mundo de aguas que existe en la región. Establecen sus asentamientos en las áreas ribereñas de los ríos, donde también desarrollan técnicas de plantío en las zonas inundables. Usan las vías fluviales como fuente de alimento con la pesca y también como principal vía de transporte y comunicación.
- Grupos de colonos y campesinos, agricultores familiares que ocupan pequeños lotes de tierra donde desempeñan una agricultura de subsistencia y de abastecimiento del mercado local y regional.

Si bien existen elementos de diversidad entre los grupos aglutinados como “comunidades tradicionales”, también existen elementos de confluencia que los explican como nuevo actor político en la Amazonia. Esos elementos de confluencia pasan, necesariamente, por la concepción propia de la territorialidad y del sentido de pertenencia al lugar, al territorio.

En muchos de los casos no existen fronteras identitarias rígidamente marcadas entre estos diversos grupos. Es común que estos grupos desempeñen varias actividades al mismo tiempo. Quien es cauchero también puede tener una pequeña huerta próxima a su casa, criar animales o tener en la pesca una fuente fundamental de sustento. Algunas comunidades ribereñas también pueden realizar actividades de extracción de la castaña en determinadas épocas del año.

Figura 1. Imagen de comunidad ribereña amazónica, en la orilla del Río Purus, Estado Amazonas/Brasil. Foto por el autor



Algunos de los grupos que hoy conforman el amplio campo de las comunidades amazónicas participaron, directa o indirectamente, en procesos históricos de ocupación que precisan ser comprendidos y analizados para cada situación. Pueden haber llegado en el contexto de los flujos migratorios masivos que acompañaron los ciclos extractivistas, como es el caso del caucho o del garimpo de oro y diamantes. Con el declive del ciclo expansivo, muchas de estas personas se quedaron en el territorio. Formaban familia en el local o traían a su familia desde sus regiones de origen y optaban por construir su proyecto vital en esta nueva tierra, de la que ya se sentían parte.

En otras ocasiones, estos grupos incursionaron en la Amazonia como mano de obra en las fases iniciales, de cantera, de los grandes proyectos de infraestructura – carreteras o hidroeléctricas, principalmente – o de fronteras extractivas como la ganadería, la agricultura de soja o la minería. Al concluir el tiempo de trabajo en estos emprendimientos, se instalaron en la región incorporándose a algún otro proceso extractivo, como el garimpo, ocupando alguna parcela de tierra o habitando los cinturones periféricos de las ciudades próximas.

En el último tercio del siglo XX se han producido dos transformaciones importantes en el modo de ocupación y habitación de la Amazonia (Becker, 2005: 73), debido a los impactos de las grandes obras de infraestructura y a los masivos flujos migratorios:

- De un lado, las ocupaciones se fueron articulando a lo largo de las carreteras y no más a lo largo de los ríos. Entre 1974 y 2004, la red viaria terrestre en la Amazonia brasileña pasó de cerca de 30.000 km de carretera a 270.000 km, casi diez veces en treinta años. La construcción de estas grandes carreteras permitió la ocupación maciza no-indígena de la región en muy pocos años y transformó el bioma amazónico (Carneiro y Braga, 2009: 14);
- De otro lado, y en consecuencia de lo anterior, se dio un gran crecimiento demográfico por migración y un aumento de la urbanización, ligada a la permanente expropiación de la tierra.

3. *El mundo urbano en la Amazonia*

Se calcula que actualmente el 70% de la población amazónica, como media, reside en núcleos urbanos. En el caso de la población amazónica brasileña, ese porcentaje ya era alcanzado con los datos del Censo del año 2000.

La mayor parte de los procesos de urbanización modernos se han generado a partir de los ciclos migratorios que seguían las fronteras de expansión que avanzaban sobre la región amazónica, en los diversos países (Fajardo, 2009; Ochoa, 2009; Cordeiro, 2011b). Paul Little, entre otros, va a describir la “urbanização veloz que acompanha os megaprojetos de desenvolvimento” (Little, 2014b: 408) como una de las estrategias del neo-desarrollismo amazónico actual. “No caso dos megaprojetos amazônicos, estamos diante de processos extremamente velozes de industrialização, nos quais as áreas rurais se transformam em áreas urbanas no lapso de poucos anos” (Little, 2014b: 413).

Nos detendremos en el análisis que sobre el proceso urbano amazónico en Brasil realiza Cordeiro da Trindade Jr., profesor del Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA, de la Universidad Federal de Pará. El autor recoge algunas de las propuestas analíticas y conceptuales de Milton Santos sobre los procesos de urbanización y su capacidad de configuración espacial y los aplica a la realidad amazónica, particularmente en Brasil.

El abordaje de Cordeiro prima la óptica de la *economía política de la urbanización* que piensa la ciudad en relación a la región y no tanto las dinámicas internas de organización social y productiva de los núcleos urbanos (Cordeiro, 2011b). “No hay una ciudad sin su territorio, una ciudad sin su región” (Tapia, 2004: 32). Durante las décadas 1960-1980, con la expansión de proyectos desarrollistas de infraestructura y de extracción sobre la Amazonia, los núcleos urbanos se convirtieron en factores de atracción de los flujos migratorios y como base para la organización del mercado de trabajo.

Figura 2. Imagen de barrio fluvial de la ciudad de Tapauá, en el curso medio del río Purús, Estado de Amazonas. Foto por el autor.



En el proceso que ha continuado posteriormente, la dinámica de urbanización regional ha vivido una expansión muy rápida y ha respondido a tres movimientos visibles:

- a) Proliferación de ciudades pequeñas, muchas de ellas creciendo en las orillas de los principales ríos-vías de comunicación o en las carreteras que serpentean la región. Muchas de estas pequeñas ciudades se han convertido en los últimos 25 años en sedes de municipios, concentrando algunos servicios públicos básicos y extendiendo la red de salud o educación: centros médicos de especialidades, pequeños hospitales, escuelas de enseñanza secundaria, acceso a las tecnologías de la información, etc,...
- b) Mayor presencia y consolidación de las ciudades medias. Estos son los centros urbanos que experimentan un mayor crecimiento porcentual en la Amazonia, mayor que las grandes metrópolis. Se trata en buena parte de ciudades localizadas en el entorno de grandes proyectos económicos.

Esta expansión urbana en ciudades medias parece tener su origen en las políticas de desarrollo regional iniciadas en la década de 60 y en las grandes inversiones que siguieron a la dinámica económica de frontera. Estas políticas forzaron la expropiación de los medios de producción del espacio agrario y la dispersión de polos de crecimiento económico en diversos puntos del territorio amazónico.

Ciertamente, este tipo de ciudades intermedias no era significativo antes de la década de 60 y de la expansión de las fronteras desarrollistas del capital. Hasta hoy, no obstante, se debe decir que el crecimiento de ciudades medias en la Amazonia no sigue el padrón de las ciudades medias en el resto de Brasil, en las cuales se observa una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos si la comparamos con las grandes metrópolis; al revés, en la Amazonia las ciudades medias soportan los mismos problemas de precaria calidad de vida que las grandes ciudades.

- c) Urbanización concentrada en grandes capitales de Estado o en espacios metropolitanos amazónicos, como pueden ser los casos de Manaus y Belem en Brasil. En este caso, se percibe en los últimos años un fortalecimiento de la concentración espacial metropolitana, pero en el sentido de una expansión no planificada de los límites espaciales a través de extensas áreas periféricas, reproduciéndose así las condiciones de desigualdad social y espacial.

Este tipo de ciudad-capital, según Cordeiro da Trindade Jr., se asume en la región como “centro urbano relacional”, término acuñado por Milton Santos: “(...) o centro que promove a coleta das informações, as armazena, classifica, manipula e utiliza a serviço dos atores hegemónicos da economia, da sociedade, da cultura e da política” (op. cit., en Cordeiro, 2011b).

Un elemento fundamental que Cordeiro incorpora en su análisis, siempre apoyándose en las tesis de Milton Santos, es el de la metropolización del territorio. Consiste en que determinadas metrópolis consiguen difuminar en los otros centros urbanos sus propias características en cuanto a prácticas sociales, valores y signos sociales. De este modo, las metrópolis estarían *omnipresentes* en todos los centros urbanos. Siguiendo los conceptos de Milton Santos sobre verticalidades y horizontalidades, “a metropolização dos espaços na Amazônia, que se dá de maneira pontual, revela mais verticalidades que propriamente horizontalidades” (Cordeiro, 2011b: 18).

Se puede observar que la ciudad amazónica posee un atractivo poliédrico para buena parte de la población amazónica. Por un lado, la extensión de hábitos y modos de vida relacionados con la urbe están muy presentes en la mayor parte de la población amazónica, principalmente en la juventud. Por otro lado, la espacialidad urbana como el territorio de la negociación política y simbólica ha llevado, por ejemplo, a que las principales organizaciones indígenas y movimientos socio-territoriales instalen en las ciudades sus sedes principales, atrayendo en no pocas ocasiones a sus principales líderes comunitarios políticos. Y en tercer lugar, el aumento del acceso de jóvenes a estudios universitarios los ha traído hacia la ciudad, convirtiéndolos actualmente en los referentes de apoyo para sus familiares (padres, tíos, abuelos) cuando éstos deben viajar hacia la ciudad para gestiones, compras o atención sanitaria.

En todo caso, es necesario insistir en la relación de la ciudad con la región a la que pertenece. La permanente interacción entre los núcleos urbanos entre sí, y entre estos y los territorios sociales del interior, es muy dinámica.

Al mismo tiempo, la expansión de políticas públicas universalistas en los últimos años, principalmente en Brasil, relacionadas con la vivienda o la energía¹²⁸, han contribuido significativamente para una expansión de la *grafía urbana* arquitectónica en espacios que se caracterizaban por otras lógicas de ocupación territorial. La posición de las viviendas familiares o de los espacios comunitarios en una aldea, así como el uso de los recursos naturales disponibles en el entorno, van dando paso en muchos lugares a planificaciones *semi*-urbanas de la disposición de las familias y nuevos usos/necesidades de materiales utilizados para la construcción - cemento, tejas de uralita, vigas de hierro o cerámica industrializada – desencadenando una agresiva homogeneización del espacio.

Aún podríamos destacar el papel de las ciudades-gemelas o fronterizas que se dan en diversos puntos de las fronteras nacionales dentro de la Amazonia. En el trapecio amazónico, por ejemplo, encontramos las ciudades de Santa Rosa, Leticia y Tabatinga, haciendo la triple frontera Perú – Colombia – Brasil. Al norte, tenemos la frontera Brasil-Venezuela donde se encuentran las ciudades respectivas de Pacaraima y Santa Helena, o la frontera Brasil-Guyana donde encontramos las ciudades de Bonfim y Lethem. En el caso de Tabatinga, por ejemplo, el crecimiento urbano de la ciudad ha llegado hasta las inmediaciones de territorios indígenas demarcados como tal y prácticamente anexados al cinturón urbano. En muchas de estas ciudades se observa una fuerte presencia militar, una movilidad humana permanente y un eje de atracción de las comunidades próximas hacia los puntos fronterizos.

6.1.2. La construcción social e histórica de la(s) territorialidad(es)

La cuestión territorial es la cuestión clave en la Amazonia, principalmente en relación con el goce de derechos fundamentales y con la posibilidad de pensar modelos de convivencia asociados al entorno más allá de la proyección de sus bienes a los intereses ajenos.

La diversidad social, cultural y étnica que acabamos de describir se traduce también en una pluralidad de territorialidades o actitudes hacia el territorio, en términos de Paul Little: diversidad de modos y usos del territorio y de los recursos naturales, de la que se derivan las tierras de *quilombo*, tierras indígenas, lotes agrícolas de colonización o reservas extractivistas, entre otras.

Estos territorios sociales, o territorios-asociados-a-derechos-colectivos, han irrumpido en las últimas décadas en la problemática de la tierra, construida tradicionalmente alrededor de las luchas por la reforma agraria. La perspectiva ahora se adensa mucho más, enfocando la problemática en procesos de ocupación y afirmación territorial (Little, 2002). “Una demanda de tierra no desafía las reglas y regulaciones con las que se administran los derechos a la propiedad. Una demanda territorial es una cuestión

¹²⁸ Proyecto *Minha Casa, Minha Vida* o *Luz para todos*, como ejemplos concretos.

diferente. Una demanda territorial es una cuestión de poder, de afirmación de la identidad, de autogestión y de control de los recursos naturales” (Offen, 2009: 170)

Estos nuevos territorios sociales superan la brecha del binomio tierra pública – tierra privada, que es propio de la razón instrumental del Estado y del modelo económico. Los territorios aquí reivindicados incorporan la dimensión de la tenencia comunitaria y/o colectiva de los bienes naturales, asociada a formas de organización social propias y modelos de producción con base en el lugar. Con ello, desplazan la discusión, y la lucha política, a otro escenario. De algún modo, como Dice Little, las territorialidades sociales poseen características que podrían ser vinculadas con lo público – porque se conciben como bienes colectivos y de uso común – al mismo tiempo que con lo particular – porque solo al grupo le cabe el uso de los bienes. Nuevas fórmulas van ganando espacio en los debates políticos y jurídicos en torno a lo que se ha denominado Regímenes de Propiedad Común (Little, 2002) o de tenencia comunitaria. Continúan siendo ensayos por parte de un Estado que mantiene sus dificultades para relacionarse con la diversidad.

Cada uno de los Estados amazónicos ha propuesto soluciones diversas de territorialización para atender esta diversidad en los tipos de tenencia y de uso. Así, encontramos conceptos jurídico-políticos diversos como tierra indígena (Brasil), tierras comunitarias de origen/TCO (Bolivia), tierras y hábitats indígenas (Venezuela), resguardos (Colombia) o zonas intangibles (Ecuador). Las territorialidades asociadas a otros grupos tradicionales, no indígenas, también reciben sus propias formulaciones. En Brasil, por ejemplo, se reconocieron las reservas extractivistas o las reservas de desarrollo sostenible¹²⁹.

Es posible afirmar que parte de estas categorías territoriales nacieron como instrumento de control y de acotamiento de los derechos por parte del Estado, en un ejercicio demarcatorio que, siguiendo la perspectiva ya comentada de Robert Sack, territorializa la garantía de derechos al mismo tiempo que libera los espacios circundantes para otras actividades. Se trata de categorías externas a los grupos interesados; sin embargo, éstos las transformaron, en muchos casos, en herramientas para la reafirmación social y étnica (Little, 2002: 13). Esto quiere decir que las figuras que el Estado nacional ha formulado y formalizado para definir, jurídica y administrativamente, los límites de la aplicación de los derechos territoriales de estos grupos no tienen que confundirse con la perspectiva

¹²⁹ La Reserva Extractivista es una figura jurídica que el Estado adoptó por la presión creativa del movimiento de *seringueiros* brasileños, liderado por el sindicalista Chico Mendes, que defendía que “a Reserva Extrativista era a reforma agraria dos seringueiros” (Porto-Gonçalves, 2005). Las Reservas de Desarrollo Sostenible son áreas que reúnen criterios de protección ambiental y de uso de los bienes por parte de las comunidades tradicionales, manteniendo sistemas de aprovechamiento de bienes naturales sostenibles y establecidos en Planes de Manejo comunitarios. Con sus diferencias entre sí, ambas fórmulas responden a un abordaje socioambientalista del territorio, por el cual se garantiza y protege la ocupación sostenible que esos grupos sociales venían haciendo de su territorio, vetándolo a otro tipo de presiones económicas externas.

del propio grupo sobre el territorio que verdaderamente ocupan y el modo como lo ocupan, aunque sus luchas se dirijan hacia el reconocimiento formal conforme las figuras establecidas. “A análise etnográfica, mesmo quando engajada em lutas políticas, necessita manter certa autonomia, tendo a realidade empírica em toda sua complexidade – e não só seu lado instrumental – como seu fundamento em última instância” (Little, 2002: 15).

A estos territorios sociales, debe unirse aún la multiplicidad de figuras espaciales que se han adoptado también en cada país para designar y demarcar territorios en función de la protección de su biodiversidad, siguiendo la lógica del ambientalismo conservador que ya comentamos en el Capítulo 3. Nos referimos a la creación de parques nacionales, unidades de conservación, áreas de preservación y otras figuras, que tendrían como objetivo la protección ambiental y la restricción de la intervención antrópica en ellos.

En algunos casos, más que de una política ambiental podríamos hablar de políticas de territorialización de los recursos naturales o, como lo define Paul Little, “preservacionismo territorializante” (2010: 15). En principio, se trata de delimitar áreas continuas que albergan una extraña diversidad de formas de vida con el fin de protegerlas de los circuitos de actividades económicas, disponiéndolas al mismo tiempo para la investigación científica. Dada la heterogeneidad de los sistemas de uso otorgadas a estos territorios en las diferentes legislaciones, cualquier análisis global sobre la cuestión no respondería a su complejidad.

Este tipo de espacios de la biodiversidad, si bien gestionados, pueden favorecer la preservación de nacientes, de suelos y de ecosistemas, así como del equilibrio del clima¹³⁰. En ciertas ocasiones, la creación de áreas de preservación ha funcionado como inhibidor del avance de las fronteras extractivas, si bien es cierto que queda en las manos del poder público su creación, extinción o modificación conforme la coincidencia de nuevos intereses económicos¹³¹.

Una de las principales contradicciones de esta política de territorialización de los recursos naturales es la frecuencia con la que se sobrepone a los derechos de las poblaciones que allí residen. Estas sobreposiciones a veces son reflejos de descompases entre las normativas que se aplican a la diversidad de territorios, así como a los diversos abordajes e interpretaciones que se imponen. En otras ocasiones, se deben a una descoordinación absoluta entre las diversas áreas departamentales de los gobiernos. Las Unidades de Conservación, en muchos lugares “se tornaram propícias para o surgimento de conflitos sociais que revelam as contradições e embates entre a lógica de preservação ambiental e o uso tradicional dos recursos” (Oliveira, Silva y Frank [org.], 2014: 7).

¹³⁰ Para una mejor comprensión de los territorios de la biodiversidad: Santilli, Márcio (2014); Barreto (2014); Veríssimo *et al.* (2011).

¹³¹ En 2010, tramitaban en el Congreso Nacional de Brasil más de 30 iniciativas legislativas que pretendían alterar el área de 41 Unidades de Conservación en la Amazonia (Veríssimo *et al.*, 2011).

Paradójicamente, son las comunidades locales y los pueblos indígenas que han ocupado tradicionalmente estos espacios los que ven sus sistemas de vida sometidos a limitaciones en nombre de la protección de la biodiversidad. Cuando esto ocurre, se termina descargando sobre estas poblaciones las contradicciones de la economía-mundo, que continúa avanzando sobre los bienes naturales desde la retórica de lo inevitable.

Otra de las contradicciones principales es la confluencia de estos espacios con lo que Enrique Leff ha categorizado como la nueva Geopolítica de la Biodiversidad y del Desarrollo Sustentable (Leff, 2005). La biodiversidad, como fuente de bienes o como objeto de preservación, se convierte en un dispositivo extraordinariamente funcional para la racionalidad económica, muy lejos del sistema de significados y sentidos que significa para las comunidades que habitan los territorios. Las propuestas nacidas en el entorno de la llamada *economía verde*¹³² o la mercantilización de la naturaleza, incorporando la biodiversidad como valor de capital, encuentran en los territorios ambientalizados un nuevo instrumento de apropiación de la naturaleza con fines de compensación de emisiones de carbono o de campos de observación científica privilegiados.

El conjunto de territorios sociales de derecho y de las áreas de protección ambiental, en sus diversas fórmulas y sistemas de uso, conforman lo que se ha venido a denominar convencionalmente las Áreas Protegidas. Sobre ellas concurre la titularidad o responsabilidad pública, un marco normativo propio y condiciones específicas para la instalación de actividades extractivas. Esto no ha impedido la sustentación de un contexto de frontera perenne o de amenaza constante sobre estas áreas, como detallan diversos estudios¹³³.

6.2. Tres pilares para el proyecto colonial en la Amazonia

El proyecto colonial fue adentrándose en el territorio amazónico a partir de los espacios adyacentes ya ocupados por los colonizadores y aprovechando los grandes ríos navegables. Figuradamente, se trata de una incursión de fuera hacia dentro, realizada en tiempos más o menos simultáneos desde diversos puntos del círculo exterior colonizado hacia el interior de la región.

El espacio amazónico representaba una frontera física difícil de superar y de ocupar. En gran parte debido a las características propias del ambiente, las áreas de floresta densa, el relevo accidentado y los ríos caudalosos con frecuentes e imponentes cascadas y

¹³² Servicios ambientales, financiación de la naturaleza, mecanismos REDD y REDD+, compensación por la reducción de emisión de carbono,... Las discusiones sobre “economía verde” tuvieron un palco singular en 2012 en la celebración en Brasil de la Cumbre Rio+20 y de la alternativa Cúpula de los Pueblos.

¹³³ Martins *et al.* (2012); Veríssimo *et al.* (2011); RAISG (2012);

cataratas; por la diversidad de fauna desconocida para los colonizadores, la humedad intensa; y por las reacciones de defensa y oposición de muchos pueblos indígenas. Estos elementos y otros configuraban un ambiente que era descrito por muchos viajeros y aventureros como “hostil”.

La incursión del proyecto colonial sobre el territorio amazónico, avanzado en un inicio y fundamentalmente por la agencia militar y la agencia religiosa, se construyó sobre la base de tres pilares básicos:

- a) la necesidad del control-dominio territorial;
- b) la percepción de un espacio vacío que debía ser ocupado¹³⁴;
- c) la perspectiva de una fuente inagotable de bienes naturales que debían ser explotados.

Estos tres imaginarios atravesaron el período colonial y llegaron hasta nuestros días instalados, de uno u otro modo, en la sociedad regional. Existe un componente de “tierra desconocida”, aún perfectamente vigente, que opera precisamente como motor para legitimar y mantener vivas estas tres imágenes y localizar fuera de la Amazonia la toma de decisiones sobre ella.

En primer lugar, adentrarse en este vasto territorio hacía parte del proyecto colonial en el que las diversas metrópolis intentaban imponer su dominio territorial en la mayor parte posible de las tierras encontradas. También era grande el interés por algunos productos que se podían encontrar disponibles en la región: especias, maderas, caza, frutas o piedras preciosas y otros minerales. Se hacía imprescindible tanto el dominio sobre el territorio como sobre los grupos que allí residían y que, al mismo tiempo, resultaban imprescindibles para que la empresa colonial pudiese adentrar este espacio por ser los detentores de conocimientos sobre el ambiente, como ya fue señalado en el capítulo anterior.

Las fronteras nacionales que hoy conocemos dentro de la Amazonia fueron el resultado de las disputas entre las diferentes empresas militares que españoles, portugueses, holandeses o ingleses protagonizaban con el firme propósito de demarcar su control sobre el territorio, en la perspectiva de la definición de territorialidad que nos proponía Robert Sack (1986). La mayor parte de estas fronteras artificiales, como ya fue dicho, fragmentaron la contigüidad de territorios caracterizados por la ocupación permanente de diversos pueblos indígenas. La proyección territorial de cada colonia y las (neo) identidades nacionales que vinieron después se construyeron por encima de las dinámicas socioespaciales propias de los grupos étnicos que allí se encontraban o a costa de su expulsión, reclusión o diseminación.

¹³⁴ El historiador local Jacir Guilherme Vieira afirma que el discurso del “vacío demográfico” en la región ya fue utilizado en diversas ocasiones durante el siglo XIX e inicios del siglo XX (Vieira, 2014:45).

El establecimiento de las fronteras delimitaba el territorio soberano y, por tanto, afirmaba el poder de cada empresa colonial. Afirma Berta Becker que, como las metrópolis no tenían recursos económicos ni humanos para poblar un territorio tan extenso, el principal fundamento para mantener la ocupación y las fronteras recayó en la geopolítica territorial, que fue más importante inicialmente que la economía “no sentido de garantizar a soberanía sobre a Amazônia, cuja ocupação se fez, como se sabe, em surtos ligados a demandas externas seguidos de grandes períodos de estagnação e de decadência” (Becker, 2005: 71).

En todo caso, dominio territorial y aprovechamiento económico caminaron de la mano como motores de la ocupación de la región. Y en la medida en que se iba conociendo y ocupando el territorio, las expediciones dependían enormemente de disponer de la población local, sea como guías, como colectores o como canoeros (Schmink y Wood, 2012: 77). Este era uno de los motivos de las expediciones de reclutamiento forzado de población indígena y de la institución de la esclavitud. Al mismo tiempo, la garantía del control territorial permitió a metrópolis y Estados nacionales el acceso y explotación de los bienes naturales codiciados.

En segundo lugar, la percepción de la Amazonia como espacio vacío – o semi-ocupado – encerraba en sí misma la concepción de los pueblos indígenas como *no*-sujetos, como *nadies*. Su presencia solo se reconoce por los servicios que sólo ellos podían prestar al colonizador, en régimen de esclavitud y en función de su conocimiento de la región. La empresa colonizadora parecía estar muy poco interesada por proteger la vida de los habitantes de la región (Pacheco de Oliveira, 2010) y sí por el control del territorio y de los recursos naturales ahí existentes. La persistencia en presentar la región amazónica como un espacio “virgen” y vacío traía como consecuencia la idea de un espacio sin dueño, disponible para su apropiación (Pacheco de Oliveira, 2010: 23). Esta imagen alimentó precisamente la idea de soberanía territorial, reivindicada primero por las metrópolis y, posteriormente, por los nuevos Estados nacionales que se iban conformando. Ha seguido alimentando, de hecho, los proyectos soberanistas y desarrollistas de los Estados nacionales hasta nuestros días.

Como ya hemos descrito, los sucesivos frentes de expansión del capital extractivista sobre la región amazónica durante el siglo XX arrastraron consigo grupos poblacionales de otras regiones del país. En esos desplazamientos planificados, es común encontrar la retórica reiterada del poder estatal sobre la Amazonia como un lugar de oportunidades para personas que en su tierra de origen encontraban dificultades para el sustento y la vida. El espacio amazónico era siempre un lugar vacío a ser explorado, abundante en tierra agricultable, en agua y alimentos, auténtica tierra prometida para muchos a los que se les negaba la vida en su tierra natal.

Por último, la tercera idea se refiere a la Amazonia como una fuente inagotable de recursos naturales. Las características bio-diversas de la región son superlativas e incluso

hoy se reconoce que aún se sabe muy poco de la diversidad que este bioma representa. Esta percepción ha alimentado la idea de la inagotabilidad de los recursos, una posibilidad irrenunciable para el modelo extractivo-exportador.

Diversidad abundante y extraordinaria interacción entre las múltiples formas de vida no significa ausencia de límites ni de ritmos. Mathis *et al.*, proponen el concepto de *sintropía* en referencia a las altas concentraciones de materia y/o energía localizadas en un determinado lugar y disponibles para aprovechamiento del ser humano – como puede ser un yacimiento minero o petrolífero, por ejemplo, que se convierte en una isla de sintropía – pero alertan que una de las características de una isla de sintropía es su finitud (1997: 29). Sin embargo, frente a la idea de “escasez de los recursos”, la de “abundancia inagotable” resulta mucho más atractiva para dar sentido a las políticas, coyunturales y cortoplacistas, propias de un modelo intensivo extractivo.

Este doble rostro de la Amazonia como espacio vacío a ser explorado y fuente de recursos inagotables la convierte en alegoría necesaria para la sobrevivencia del (neo) extractivismo, presentado como vía indiscutible hacia el progreso y la inserción de la región en el mercado global. Al afirmar esta imagen de la Amazonia e incorporarla al discurso de identidad nacional y de posibilidades de futuro abierto y promisor, se fortalecen en realidad dos negaciones sustanciales:

- a) se niega una *socio*-diversidad que es extraordinariamente significativa para el proyecto societario y que está compuesta por sujetos históricos detentores de derechos y de saberes propios;
- b) se niegan límites en un mar de abundancias, fortaleciendo la lógica expansiva del modelo extractivista-exportador.

A partir del siglo XIX, con la formación de los nuevos Estados independientes, nuevos elementos se incorporan en la región. Para las nuevas élites criollas y para las instituciones sociales que asumieron la tarea de la construcción del proyecto nacional, el espacio amazónico continuaba siendo muy desconocido e incierto y se mantenía bajo el concepto de *tierras desconocidas* (García Jordán, 1995: 10).

Manteniendo los tres pilares fundamentales que hemos descrito, los nuevos Estados fueron ensayando diversas estrategias que les permitiesen ejercer el dominio y apropiación de este espacio dentro, ahora, del proyecto nacional en ciernes. Interesaba tomar conocimiento de las condiciones que operaban sobre este territorio y los actores que allí confluían, de forma que la presencia de la autoridad reguladora del Estado se fuese haciendo firme. Los diversos Estados van formalizando algunas medidas: normas y decretos sobre la situación de los pueblos indígenas; regulación de las tierras y de las propiedades hasta ese momento tomadas por otras agencias, como las órdenes religiosas; control e incentivo a las incursiones hasta ahora protagonizadas por particulares.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX apreciamos, de modo general, dos dinámicas que confluyen sobre el espacio amazónico desde los diversos Estados nacionales.

La primera de ellas es que se convierte en un lugar hacia donde incentivar la ocupación a través de flujos migratorios masivos, funcionando como válvula de escape para la resolución de tensiones sociales en otros territorios o para evitar la implementación, en otros lugares, de una reforma agraria adecuada (Carneiro y Braga, 2009). En el caso específico de Colombia, los programas de colonización se dirigieron “a los campesinos desplazados por la violencia en la zona andina” (RAISG, 2012; 14). En Bolivia, el proceso de “colonización dirigida” se dio después de la nacionalización de la minería, en 1952, a través del llamado Plan Bohan, que promovió una “marcha hacia el oriente” con la implantación de centros estratégicos de producción agrícola. La demanda de mano de obra fue muy grande y un gran contingente de población de las tierras altas se desplazó hacia las tierras bajas. En Perú se produjo un movimiento similar a partir de la década de 70 con la promoción de las políticas conocidas como “colonización de la selva”, que acompañaron la frontera de expansión agrícola (Heck, 2014: 34; 180).

La segunda dinámica, relacionada con la primera, es que avanzan sobre la Amazonia algunas fronteras económicas de base nacional – como la frontera agrícola y ganadera – y otras fronteras relacionadas con las demandas generadas en la economía-mundo – como el caso del oro o del caucho. El avance progresivo de estas fronteras va a modelar sustantivamente las transformaciones sociales y territoriales que se han dado en la Amazonia.

En el caso específico y emblemático del extractivismo cauchero, una serie de descubrimientos tecnológicos ocurridos a lo largo del siglo XIX despertarían la fiebre extractiva por esta resina en la floresta amazónica. Primero, fue el descubrimiento en 1839 por parte de Goodyear del procesamiento del caucho, conservando sus características independientemente de la exposición a temperaturas extremas. A partir de ese momento la demanda del caucho evidentemente se disparó, a pesar de las dificultades para llegar a los locales de concentración de la seringa y para su transporte. En 1853, la llegada de barcos a vapor a la región mejorará este servicio y comenzarán a surcar los ríos amazónicos, disminuyendo los tiempos de transporte del producto.

Finalmente, la aplicación del caucho a la industria automovilística con la incorporación de los neumáticos con cámara - que comenzaron en bicicletas en lo que se llamó el periodo de “la locura de las bicicletas” - se produjo a partir de 1888, fecha en que John Dunlop llega a tal descubrimiento.

Estos tres hechos técnicos tendrán una causalidad directa y determinante en el *boom* extractivo del caucho amazónico. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1910, la floresta se convertirá en un surtidor clave de resina de seringa. Si en el siglo XVIII el oro y la plata latino-americana habían catapultado el desarrollo industrial de

Inglaterra, ahora el caucho amazónico impulsaba el desarrollo tecnológico e industrial de EE.UU. y Europa.

La empresa del caucho transformó profundamente la sociedad amazónica y el uso del espacio y el territorio. Significó, así, un proceso de territorialización o re-significación del territorio amazónico. Los impactos que esto supuso para el ambiente y las sociedades que vivían en este territorio no han sido suficientemente documentados y, en muchos casos, no se han incorporado a la historiografía oficial.

En Perú, el *boom* del caucho segó la vida de más de 40.000 indígenas en la región y supuso la movilización migratoria hacia las zonas bajas de selva de grupos que procedían de la floresta alta y de la costa, ocasionando una presión territorial intensa sobre las áreas donde vivían los pueblos indígenas amazónicos. El colono migrante se hizo con el control de la tierra y de la cadena extractiva en la cual indígenas y mestizos realizaban el trabajo de punta bajo condiciones de semi-esclavitud e inmovilidad. Muchos grupos étnicos se recluyeron territorialmente para evitar el contacto. Si en 1897 el caucho representaba el 9,3% de las exportaciones totales de Perú, diez años más tarde, en 1907, ya alcanzaba el 22% del volumen exportado por el país (Pinedo y Calsina, 2014: 11-12).

6.3. (Neo) extractivismo y Amazonia

Como decíamos al inicio del capítulo, buena parte de las políticas relacionadas con el (neo) extractivismo implementadas por gobiernos con territorio amazónico han tenido en esta región su palco principal. Algunos autores como Paul Little afirman que este nuevo ciclo expansivo se ha caracterizado por la perspectiva pan-amazónica o regional de los proyectos. Tanto agencias públicas como grandes empresas transnacionales habrían dotado una mayor coherencia territorial a sus inversiones alcanzando la región amazónica como una unidad integrada de expansión. Esto puede traducirse en:

- La localización de inversiones en diferentes países amazónicos por parte de los mismos agentes;
- La financiación por parte de una misma agencia de proyectos hidroeléctricos en diversas subcuencas de la región amazónica, como es el caso del BNDES;
- La formulación de proyectos binacionales o fronterizos dentro de la región amazónica, como el complejo hidroeléctrico sobre el Rio Madeira (Bolivia y Brasil), el acuerdo para la financiación y construcción de hidroeléctricas en Perú (Perú y Brasil) o la colaboración en proyectos de infraestructura viaria (Guyana y Brasil, Venezuela y Brasil);
- La asociación de proyectos inter-ligados de transporte entre varios países con las áreas de producción para la exportación, como el caso de la soja brasileña.

Como ya destacamos, este nivel de articulación y esta perspectiva territorial amazónica, del lado del modelo extractivo-exportador, encuentra una base funcional en la iniciativa IIRSA. Entre los diez Ejes de Integración y Desarrollo/EIDs formulados por IIRSA, tres de ellos se refieren específicamente a la región amazónica: el Eje Amazonas, el Eje Perú-Brasil-Bolivia y el Eje Escudo de las Guayanas.

El EID Amazonas tiene una clara vocación de consolidar una red de infraestructura física que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, salvando las exigencias ambientales de la Amazonia y la cordillera andina, para favorecer la salida de bienes naturales hacia los mercados de Europa, América del Norte y Asia. En la Visión de Negocios que se formuló sobre este EID, se destacan las ventajas para determinados sectores productivos: agropecuaria, ecoturismo, recursos forestales, actividad industrial de la Zona Franca de Manaus y actividades extractivas. El EID Amazonas tiene previstos actualmente un conjunto de 72 proyectos, de los cuales 71 se relacionan con infraestructura de transportes. Entre ellos destacan iniciativas de adecuación o construcción de puertos (Puerto Asís, El Carmen, San Lorenzo, Manta o Esmeraldas), carreteras (como la de Tarapoto-Yurimaguas, Pucallpa-Cruzeiro do Sul, o Cuiabá-Santarém) o mejoramiento de la navegabilidad en algunos tramos fluviales (ríos Putumayo, Morona, Huallaga, Marañón, Napo, Ucayali), ferrovía de integración en sentido oeste-este o terminales de embarque (como el de minerales de El Callao). El complejísimo entramado de obras inter-ligadas dibuja en la región una multitud de conexiones entre ambos océanos, cuyo principal objetivo es la mejor salida de productos primarios de la región.



Mapa 3. Mapa del EID Amazonas, dentro de la Iniciativa IIRSA.
Fuente: IIRSA

Entre ellos destacan iniciativas de adecuación o construcción de puertos (Puerto Asís, El Carmen, San Lorenzo, Manta o Esmeraldas), carreteras (como la de Tarapoto-Yurimaguas, Pucallpa-Cruzeiro do Sul, o Cuiabá-Santarém) o mejoramiento de la navegabilidad en algunos tramos fluviales (ríos Putumayo, Morona, Huallaga, Marañón, Napo, Ucayali), ferrovía de integración en sentido oeste-este o terminales de embarque (como el de minerales de El Callao). El complejísimo entramado de obras inter-ligadas dibuja en la región una multitud de conexiones entre ambos océanos, cuyo principal objetivo es la mejor salida de productos primarios de la región.

El EID Perú-Brasil-Bolivia, en la región suroccidental de la Amazonia, pretende articular una serie de proyectos d infraestructura que permitan llevar la producción de las principales zonas graneleras, mineras y petroleras de Brasil, Bolivia y Perú hasta la salida al océano Pacífico. Hacen parte de la cartera de proyectos de este EID el complejo hidroeléctrico sobre el Rio Madeira o la Interoceánica Sur.



Mapa 4. Mapa del EID Perú-Brasil-Bolivia, dentro de la Iniciativa IIRSA. Fuente: IIRSA.

Este Eje contempla la ejecución de 24 proyectos, varios de ellos de carácter binacional. Destacan las cuatro hidroeléctricas que se proyectaron dentro del complejo sobre el río Madeira, con vistas a generación de energía y ampliación de la navegabilidad del río. Al mismo tiempo hay prevista obras de carreteras (Puerto Maldonado-Inambari-Cusco o Guayamerín-La Paz), así como diversos puestos fronterizos o la construcción del Aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco. La conexión de este Eje con la Ferrovía Oeste-Este que observamos en el EID Amazonas completa su conexión hacia el océano Atlántico y su asociación con la mayor región de plantío de *commodities* agrícolas de Brasil, en los Estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. La zona sur de la Amazonia peruana, completamente afectada por las obras de infraestructura de este Eje, es una de las áreas con mayor biodiversidad, locación de pueblos indígenas con contacto limitado y contiene la mayor región de minería ilegal de oro de Perú: Madre de Dios.

Por último, el EID del Escudo Guayanés, que contempla la región donde se sitúa la escala local de nuestra investigación, persigue conectar la producción del norte de la Amazonia con el océano Atlántico, tomando como sectores económicos de interés: la abundancia



Mapa 5. Mapa del EID Escudo Guayanés, dentro de la Iniciativa IIRSA.

Fuente IIRSA.

de bienes naturales; el potencial turístico y recreativo; el potencial de producción de soja o de piscicultura; así como las actividades extractivas como la minería.

El EID guayanés contempla la ejecución de 20 proyectos, la mayor parte de ellos de carácter transnacional. Todos corresponden a obras en el sector de

transportes, por construcción o rehabilitación de carreteras (Manaus-Caracas, Lethem-Linden, Georgetown-Oiapoque), puentes sobre ríos o ferrovías.

La iniciativa IIRSA se configura, por tanto, en la estructura física funcional al avance de la frontera extractivo-exportadora en la región amazónica. Esta perspectiva ya había sido ensayada sin éxito por el Tratado de Cooperación Amazónica/TCA en 1978. Entonces, los ocho Estados independientes amazónicos acordaron¹³⁵ realizar “esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos” (art. I).

Los gobiernos firmantes ya coincidían “en la conveniencia de crear una infraestructura física adecuada entre sus respectivos países” (art. X). Entre esos esfuerzos, se destacaba la voluntad de asegurar entre los Estados “la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales” (art. III), emprendiendo, si fuese necesario, “acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el mejoramiento y habilitación de esas vías navegables” (art. VI), comprometiéndose a estudiar “las formas de eliminar los obstáculos físicos que dificulta o impiden dicha navegación” (art. VI párrafo único).

¹³⁵ Documento del Tratado de Cooperación Amazónica (1978), accesible en: <http://otca.info/portal/admin/_upload/tratado/TRATADO_COOPERACION_AMAZONICA_ESP.pdf>.

El Tratado de Cooperación Amazónica nunca llegó a tener una capacidad operativa de coordinar las políticas de los diversos países amazónicos, si bien a partir de la década de 90 se han realizado varios empeños por revitalizar y dar contenido político y operativo a este acuerdo. Nació así la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica/OTCA. No obstante, creemos que ha sido la iniciativa IIRSA, apoyada en las políticas brasileñas de aceleración del crecimiento a partir de 2006, la que ha generado el ambiente para la coordinación de las políticas de infraestructura física en la Amazonia.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada – RAISG, que reúne a siete entidades socioambientales de los diversos países amazónicos, desempeñó un trabajo sistemático de levantamiento de la información existente en los diversos Estados amazónicos (RAISG, 2012) sobre los movimientos de intensidad en la región de determinados sectores extractivos o de infraestructura inter-relacionados entre sí.

6.3.1. Agricultura y ganadería

La agricultura y la ganadería están hoy fuertemente presentes en toda la región amazónica, aunque en diversos niveles y con diferentes modelos de actividad. RAISG destaca cuatro modelos de actividad agrícola en la región.

El primero de ellos es la *agricultura tradicional* desempeñada por pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Se caracteriza por un fuerte componente de conocimientos, semillas y tecnologías propias, así como por la concepción colectiva de los recursos, la diversidad productiva o el bajo impacto ambiental. La mayor parte de esta agricultura local está orientada para el auto-consumo o para intercambios y pequeñas redes comerciales locales o regionales. Suele desarrollarse asociado a la cría de pequeños animales o rebaños en territorios de uso colectivo - como tierras indígenas o reservas extractivistas - o en pequeñas propiedades particulares.

El segundo tipo de agricultura se refiere a la *pequeña agricultura colonial*, protagonizada en su mayor parte por familias de colonos y agricultores que migraron hacia la región amazónica, por propia iniciativa o por incentivo de los Estados, como ya fue destacado más arriba. La agricultura colonial se desarrolla normalmente en pequeñas parcelas, agrupadas o no en proyectos colectivos de asentamiento rural, asociada a la cría de animales en lotes o rebaños. Este sistema de producción agrícola se incorpora con más frecuencia a las políticas gubernamentales relacionadas – cuando existen - con la asistencia técnica, la formación, el acceso a pequeños créditos o la distribución de semillas e insumos.

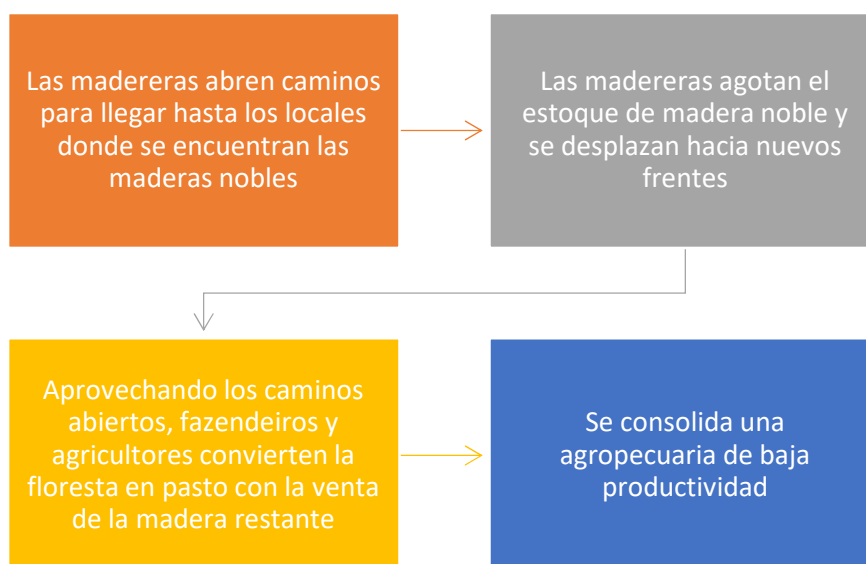
En el caso de Brasil, la concesión de tierras para una pretendida reforma agraria en la Amazonia adoleció de irregularidades y torpezas por parte de los órganos competentes desde la década de 70. A veces se concedían títulos sobrepuestos a tierras ocupadas por comunidades indígenas; en otros casos, los títulos de propiedad emitidos carecieron del

procedimiento necesario y hoy están siendo considerados nulos en procesos de pleito territorial entre pequeños agricultores y grandes propietarios o empresas.

Estas dos primeras modalidades de agricultura familiar y/o comunitaria suele complementar sus actividades económicas con la colecta de frutos y productos forestales (castañas, buriti, açai, bacaba, ...), la pesca o la caza estacional en sistemas agroforestales o silvipastoriles, principalmente cuando se localizan en áreas de floresta densa.

Se da también un tercer tipo de *agricultura de mediana y gran escala*. Se trata de iniciativas con mayor peso de actividades ganaderas, normalmente con ganado vacuno. Históricamente este régimen de propiedad y de agropecuaria vino marcado por la figura de la *fazenda* o empresa ganadera. En muchas ocasiones, el origen de las haciendas ha sido la apropiación privada de tierras públicas o la invasión consciente de territorios ocupados por pueblos indígenas u otras comunidades tradicionales. La ganadería bovina es actualmente uno de los factores más directamente vinculados con la deforestación en la Amazonia, al tiempo que la carne bovina es uno de los principales productos agropecuarios de exportación de la región. Es necesario destacar la relación entre estos sistemas de producción agropecuaria, el sector maderero y las tasas de deforestación en la región amazónica.

Cuadro 6. Secuencia de deforestación en la Amazonia relacionando el sector maderero y el sistema agropecuario. *Elaboración por el autor a partir de informaciones en Carneiro y Braga (2009)*



Por último, hay un auge de la *agricultura empresarial para exportación*. Este tipo de agricultura está relacionado directamente a las grandes cadenas agroalimentarias globales. Su interés es la alta productividad vinculada directamente a la exportación de *commodities* agrícolas que conquistaron un espacio importante en el mercado global de

inicio de siglo XXI. La soja, el maíz, la caña de azúcar o la palma aceitera son algunos de los productos fundamentales de esta economía agrario-exportadora.

Estos dos últimos sistemas de producción agrícola se han caracterizado por un nivel cada vez mayor de inversión, mecanización y especialización. Actualmente es uno de los frentes expansionistas que acumula mayor volumen de tierras. Mantienen una competencia severa con las comunidades locales por el acceso a la tierra y al agua y se ven implicados en muy diversos conflictos socioambientales. Desde el punto de vista económico, ambos sistemas agrícolas – principalmente el segundo – se incorporan a economías de escala. Generan a su alrededor una básica red comercial para hacerles llegar insumos, semillas y maquinarias de los principales polos de industrialización. Absorben la mayor parte de los proyectos de infraestructura de transportes - para salida de la producción – y de los sistemas crediticios para la agricultura. En estas propiedades se ha ido forjando una clase latifundiaría o ruralista, de carácter muy conservador, que mantiene estrechos vínculos con la política local, regional o nacional, con una capacidad de influencia importante.

Es fundamental relacionar el auge de la agricultura a gran escala dirigida a la exportación con el desarrollo de la industria de los *agro-bio-combustibles*. Cada vez mayor porcentaje de la producción de oleaginosas como la soja o la palma aceitera, o de otros productos como la caña de azúcar, se incorporan a los procesos de producción de biodiesel o etanol. Esta nueva frontera agroenergética, en expansión en toda la región y en todo el mundo, ha intensificado la presión sobre la tierra por parte del capital agrícola. Para conseguir el acceso y control de mayores extensiones de tierras son empleadas diversas estrategias:

- Estrategias más tradicionales que se refieren a la compra de tierras entre particulares, la ocupación por la fuerza, la judicialización de ocupaciones ilegales o la concesión, formal o irregular, de lotes por parte de gobiernos locales que mantienen algún tipo de alianzas políticas y económicas con estos sectores;
- Compra de varios lotes vecinos, bajo cierta presión, a sus propietarios – frecuentemente agricultores familiares de pequeña escala. Posteriormente, los lotes se anexan formando una única propiedad de medio o gran tamaño;
- Incorporación del pequeño campesinado a la cadena productiva como nuevo proletariado al servicio de la industria agroenergética. Esta estrategia está siendo desarrollada en algunos lugares de la Amazonia, principalmente por empresas dedicadas a la palma aceitera. La empresa firma un contrato productivo con el propietario de un lote de tierra. No pleitea por la propiedad del suelo, pero consigue que el productor se comprometa a plantar en una determinada extensión de su parcela, previamente acordada, la palma aceitera que será íntegramente comprada por la empresa. Además del compromiso de compra, la empresa se obliga a disponibilizar al pequeño agricultor la formación necesaria, los plántones,

fertilizantes y defensivos y otros insumos. De ese modo, la empresa se asegura la producción sin necesidad de patrimonializar la tierra, evitando conflictos pero garantizando la exclusividad del proveedor. La empresa suele crear una pequeña usina para producción del combustible en la misma región, abaratando sensiblemente todos los costes productivos. El agricultor, por su parte, compromete en parte su producción familiar y alimenticia; la garantía de la venta de la palma aceitera se subordinará, con el paso del tiempo, a que la palma mantenga un nivel alto de productividad. Se produce en encubierto una apropiación de tierras y una incorporación subordinada de la Agricultura Familiar a la cadena productiva agroexportadora.

Figura 3. Trabajador de la empresa Palmaplan, dedicada a la producción de biodiesel a partir de la palma aceitera, en la región sur del Estado de Roraima, Brasil. *Foto del autor.*

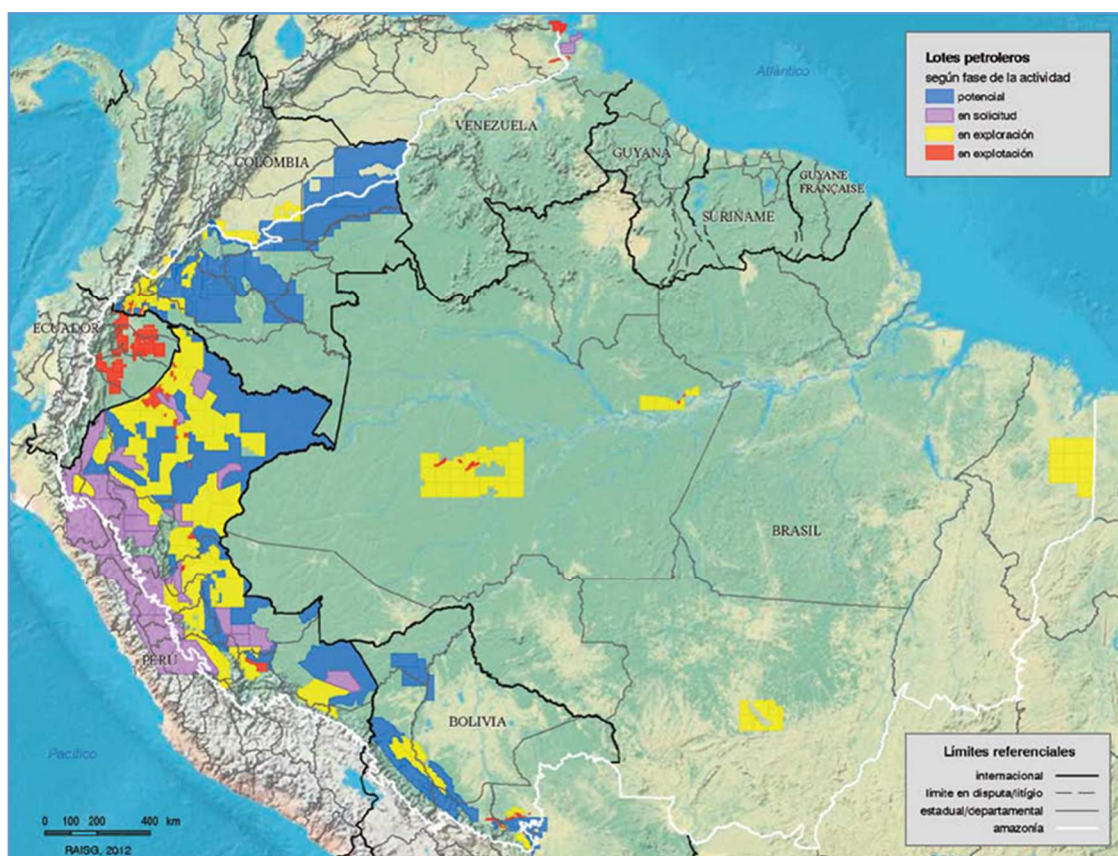


6.3.2. Combustibles fósiles: petróleo y gas natural

En el caso de los combustibles fósiles, los datos de 2012 simulan un potencial enorme de crecimiento en los próximos años. A pesar de todas las alertas lanzadas hace años por investigadores, activistas y economistas, lo cierto es que no se prevé una caída inmediata de la demanda por petróleo en el mundo. La mayor parte de los lotes petroleros y/o gasíferos están en fase de solicitud de autorización o de exploración.

Según los datos de RAISG, en 2012 existían 327 lotes petroleros en la Amazonia, los cuales ocupaban poco menos del 15% de toda la región. La mayor parte de ellos se localizan en la región andino-amazónica, caracterizada precisamente por disponer de la mayor socio-bio-diversidad del continente. Estos 327 lotes, en la metodología seguida por las entidades que hicieron el estudio, se dividen en cuatro situaciones posibles: potencial; en solicitud; en exploración; en explotación.

Mapa 6. Lotes petroleros en Amazonia por fase de actividad. RAISG, 2012



Como podemos apreciar en el mapa, los 81 lotes petroleros que ya se encontraban en explotación en 2012 se concentraban en la región central y noreste de la Amazonia ecuatoriana, en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza (Tapia, 2004: 50). Esta actividad data de mediados del siglo XX. Según las informaciones ofrecidas por Víctor López, de la entidad ecuatoriana EcoCiencia, la exploración y explotación de petróleo en la región a partir de la década de 40 del siglo pasado “significó el desplazamiento forzado, etnocidio y aculturación de pueblos ancestrales” como los tetete (extintos), sionas, secoyas o waorani.

Cuadro 7. Explotación petrolera en el Parque Yasuní, Ecuador

El *Parque Nacional Yasuni*, en la región nororiental de la Amazonia ecuatoriana, es una de las mayores reservas de biodiversidad del bioma. En su interior también se encuentra la Zona Intangible o territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane. La Zona Intangible es una figura jurídica del ordenamiento ecuatoriano cuya institucionalización es competencia del Estado. Como su propio nombre indica expresamente, se trata de una zona donde existen límites muy severos sobre las actividades que se pueden realizar o no, con la intención de proteger la biodiversidad y la integridad de los pueblos que allí residen.

Ya en la década de 90, diversas organizaciones habían solicitado una moratoria para la extracción de crudo pesado de esta región y en 2003 el Gobierno de Mahuad había decretado la denominada Zona Intangible con el propósito de excluir a perpetuidad cualquier actividad extractiva dentro de dicha área. En 2007, el Gobierno de Rafael Correa acogió estas demandas y presentó ante Naciones Unidas una propuesta por la cual renunciaba a la extracción de estas reservas - aproximadamente 900 millones de barriles de crudo - a cambio de una contribución financiera equivalente, al menos, a la mitad de los ingresos que obtendría con la explotación. La conocida como *Iniciativa Yasuni-ITT* fue muy bien acogida al comienzo. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano siempre denunció que la comunidad internacional no cumplía con su parte del acuerdo. En agosto de 2013, anunció unilateralmente el fin de esta Iniciativa y meses después abrió la XI Ronda Petrolera incluyendo las reservas de Yasuní en la licitación, delante de las protestas nacionales e internacionales.

La mayor parte de los lotes petroleros en la Amazonia aún no estaban siendo explotados en 2012: un total de 246 lotes, según las informaciones de RAISG, se encontraban en alguna de las situaciones previas a la explotación, como la exploración, solicitud o con potencial. Estos datos nos muestran la capacidad expansionista que el sector petrolífero tiene en la región amazónica si se confirma en los próximos años el auge de la demanda y si los diversos Estados no consiguieran, individual o colectivamente, imponer una serie de salvaguardas mínimas.

La mayor parte de estos lotes potencialmente explotables se localizan en territorio peruano y colombiano. El 84% de la superficie amazónica peruana está comprometida con el sector petrolero, donde actúan con especial intensidad la empresa pública PetroPerú y las transnacionales Pluspetrol y Repsol YPF. El 66% de la superficie total de los territorios indígenas reconocidos en Perú sufren la superposición de lotes petroleros.

En Colombia, en 2012 se habían demarcado 102 lotes - el mayor número entre todos los países amazónicos - que se sobreponían sobre el 13% de los resguardos indígenas. Respecto a los actores privados con intereses petroleros en la región, y siempre según los datos recogidos por RAISG, había 71 empresas petroleras actuando en la Amazonia. De ellas, solamente 24 estaban directamente trabajando en la explotación de los pozos activos y nueve de ellas controlaban el 78% de los lotes en explotación (RAISG, 2012:

26). Según los datos de 2012, entre las seis empresas con mayor espacio loteado para el sector petrolífero (en solicitud, exploración o explotación) encontramos tres empresas públicas y una privada de origen latinoamericano. Entre las empresas públicas están: la Agencia Nacional de Hidrocarburos/ANH, de Colombia; Petrobras/Brasil; y el consorcio YPFB Petroandina, formado por la estatal boliviana YPFB y la estatal venezolana PDVSA. La empresa multinacional Pluspetrol, de origen argentino, es responsable por la titularidad de lotes en una superficie de casi 37.000 km² en Colombia y Perú. Entre las empresas transnacionales destaca la española REPSOL YPF, titular en 2012 de lotes en Bolivia, Ecuador y Perú y que adquirió en 2015 todos los activos de la canadiense Talisman, con fuerte presencia en la Amazonia colombiana y peruana. Esto convertiría a Repsol en la 2ª mayor empresa petrolera con presencia en la Amazonia.

Cuadro 8. Explotación petrolera y gasífera en el Proyecto Camisea, Perú

Una de las principales áreas de explotación petrolera y gasífera en la Amazonia peruana se sitúa en el *Proyecto Camisea*, en el cual participan la argentina Pluspetrol y la española Repsol YPF. El yacimiento gasífero de Camisea se descubrió en 1980 y siete años más tarde los estudios lo confirmaban como una de las mayores reservas de gas y gas licuado del continente. También conocido como *Lote 88*, el Proyecto Camisea se sobrepone a la Reserva Territorial de los Pueblos Indígenas Kugapakori-Nahua, Nanti y otros. La actividad extractiva coloca en riesgo evidente la sobrevivencia de estos pueblos. Existen relatos de trabajadores de las obras que han “avistado” o directamente se han encontrado con individuos o grupos de estos pueblos.

En 2012, el consorcio empresarial responsable hizo pública su intención de ampliar las operaciones dentro de la reserva con apoyo del Gobierno y el Congreso peruano. En ese plan de expansión se prevé la construcción de una línea de transporte de 10 Km, la perforación de 21 nuevos pozos y la realización de pruebas sísmicas en un área de 500 Km². Las incidencias de este proyecto extractivo fueron recogidas en un Informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, titulado *“Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”*.

El Proyecto Camisea se encuentra situado en una región sobre la cual se prevén diversos proyectos de infraestructura dentro de la iniciativa IIRSA.

6.3.3. Hidroeléctricas en la Amazonia

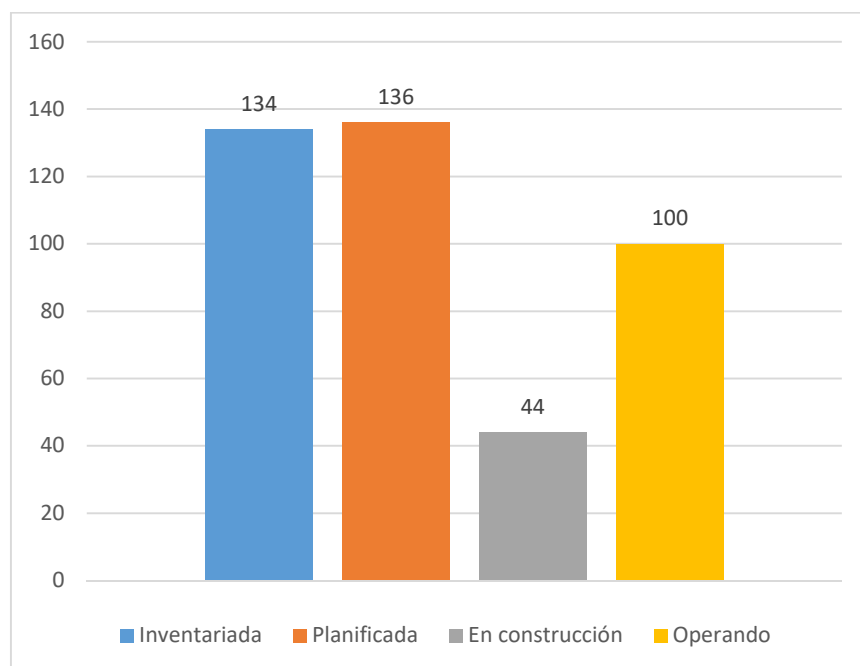
Entre las infraestructuras físicas que se están extendiendo por la región amazónica en los últimos años y con mayor intensidad encontramos las hidroeléctricas o represas para la producción de energía. Son decenas de grandes represas, y más de un centenar de pequeño tamaño, las que se están construyendo o están proyectadas a lo largo de la cuenca amazónica (Fearnside, 2015 y 2015b). Según datos de International Rivers¹³⁶,

¹³⁶ Información encontrada en: International Rivers, Fundación Proteger, y ECOA. Dams in Amazônia, <<http://www.dams-info.org/>>. Consultado 16/03/2016.

encontramos actualmente en la región amazónica 414 represas, clasificadas en cuatro tipos según el estado en el que se encuentran: planificada, operando, en construcción o inventariada.

Gráfico 1. Hidroeléctricas proyectadas en la Amazonia según fase de ejecución.

Elaboración por el autor a partir de informaciones de International Rivers.

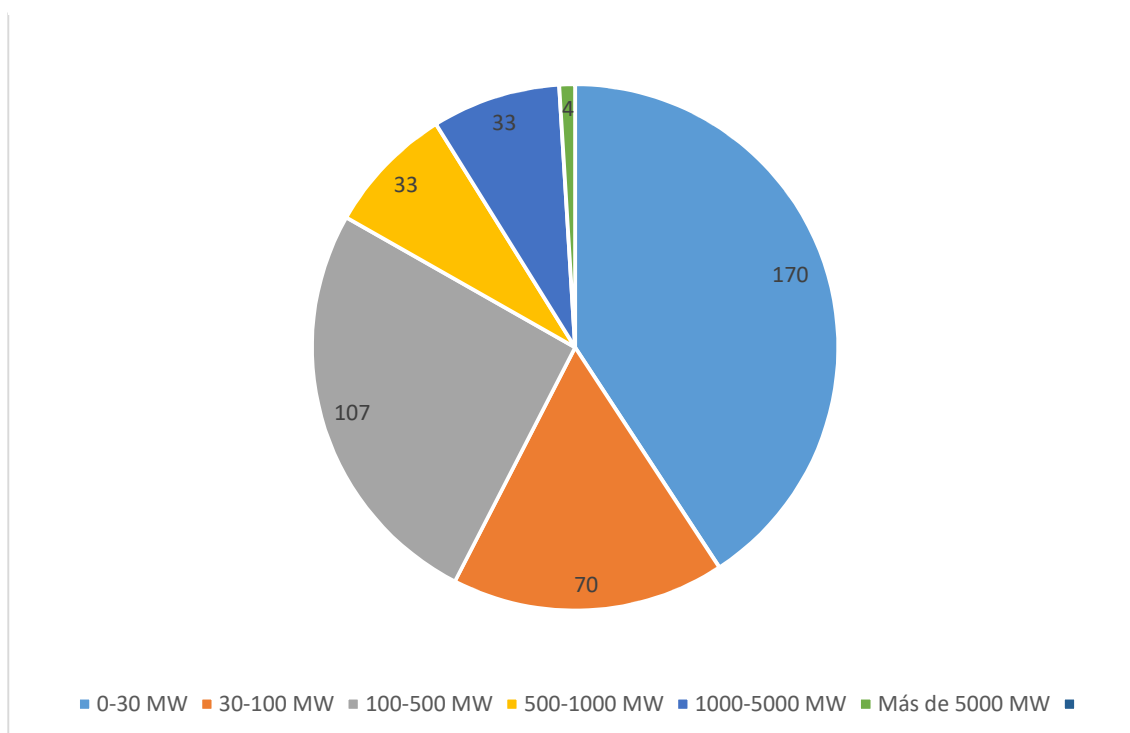


La mayor parte de las hidroeléctricas de gran tamaño, consideradas aquellas con potencial de producción energética superior a los 1000 MW, se encuentran en la región andino-amazónica, en los países de Perú (10), Ecuador (5) y Bolivia (2). En Brasil, destacan las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau – ya en funcionamiento sobre el río Madeira – Belo Monte – en plena construcción en el río Xingu – y todo el complejo sobre la cuenca del río Tapajós – en litigio y procedimientos de estudios y licencias.

Si consideramos las hidroeléctricas con potencial de producción energética mayor a 500MW, encontramos ya diez represas operando; otras seis están en construcción; 30 planificadas; y 24 inventariadas. Un total de 70 grandes hidroeléctricas, la mayor parte de ellas en estado potencial.

Hasta un total de 23 represas prevén la inundación artificial de áreas superiores a 500 km².

Gráfico 2. Hidroeléctricas en la Amazonia según capacidad proyectada de generación de energía.
Elaboración por el autor a partir de datos de International Rivers.



Las características hidrográficas (volúmenes de cuerpos de agua) y topográficas (caídas y desniveles significativos) contribuyeron a considerar la cuenca amazónica como una región de alto potencial energético. Sin embargo, otras características que ofrecerían argumentos para una perspectiva contraria – como el pulso de inundación alterno que permite el equilibrio en los ecosistemas naturales de tierras bajas o la alta sedimentación de buena parte de los grandes ríos amazónicos - no fueron igualmente consideradas. Por último, las políticas de generación de energía a partir de hidroeléctricas en la Amazonia contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero y con el cambio climático; especialistas afirman que el impacto de las hidroeléctricas sobre el cambio climático puede ser mayor incluso que el de los combustibles fósiles (Fearnside, 2015).

El aumento de los proyectos hidroeléctricos en la Amazonia responde a políticas energéticas que intentan responder a una demanda en aumento exponencial. La falta de un debate democrático sobre el uso de la energía impide valoraciones más equilibradas que puedan contemplar también, con suficiente peso, los impactos sociales y ambientales en los territorios donde las hidroeléctricas son construidas o proyectadas. Mayor es la responsabilidad si consideramos la necesidad de un balance de los impactos acumulados en las cuencas afectadas por diversos proyectos hidroeléctricos al mismo tiempo – como el caso del río Madeira o el río Tapajós – o en la macro-cuenca amazónica en su conjunto.

En 2010, los gobiernos de Brasil y Perú firmaron un acuerdo de colaboración para la construcción de seis hidroeléctricas en la Amazonia peruana, contando con capital público brasileño y con la participación de un consorcio empresarial público-privado también de origen brasileño. La implicación de Brasil en la planificación, financiación y ejecución de proyectos de infraestructura física, particularmente hidroeléctricas, en las regiones amazónicas vecinas ha sido uno de los elementos de destaque en la primera década del siglo XXI (Fearnside, 2015; Dourojeanni, 2010).

Figura 4. Área de várzea. Plantación de maíz en la orilla del río Purús. Foto del autor. *El pulso alterado de inundación de los ríos amazónicos deja áreas agricultables durante los meses de verano que volverán a inundarse en invierno. Los impactos de las hidroeléctricas sobre el comportamiento natural de los ríos podrían afectar estas áreas, fundamentales para los sistemas locales de producción de alimentos.*



Los impactos sociales y ambientales de las hidroeléctricas no siempre son abordados en su complejidad, minimizando así los efectos de una política expansiva como la que estamos viviendo en estos primeros años de siglo. Los impactos sobre el territorio afectan directamente a las poblaciones indígenas y ribereñas que se localizan a lo largo del curso del río (Fearnside, 2015 y 2015b). Es común que los estudios de impacto ambiental centren su análisis en el área que va a quedar inundada por el lago artificial, río arriba de la represa: destrucción de vegetación nativa, alteración de los espacios de vida para las especies acuáticas, acumulación de sedimentación en el fondo del lago o desplazamiento de fauna nativa de las áreas adyacentes al lago. Todos estos impactos

tienen consecuencias directas sobre las condiciones de vida de las comunidades locales, que verán afectados completamente sus hábitats. Menos atención se presta a los impactos que la hidroeléctrica genera aguas abajo, con la disminución del curso de agua, afectación a los sistemas locales de pesca o de transporte y a la fauna de las proximidades o la alteración en la oxigenación del agua. Las comunidades situadas río debajo de las represas no siempre son consideradas como población afectada.

Es fundamental considerar la asociación que existe entre la construcción de proyectos hidroeléctricos y otros sectores clave de la economía extractivista. Por ejemplo, la construcción de represas vinculada a ampliación de las condiciones de navegabilidad de los ríos amazónicos mantiene una estrecha relación con la salida por agua de toda la producción granelera concentrada en el interior de la Amazonia. La expansión de la soja en el área central Brasil-Bolivia, en los Estados o departamentos de Mato Grosso do Sul y Santa Cruz, está claramente vinculada con las posibilidades de salida de su producción hacia el océano Pacífico – a través de la navegabilidad de la cuenca del río Madeira – y el Atlántico – a través de la carretera Cuiabá-Santarém, ya mencionada en el análisis sobre IIRSA, y de la navegabilidad de la cuenca del Tapajós (Fearnside, 2015)¹³⁷. De hecho, en julio de 2016 la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de los Diputados de Brasil aprobó un Proyecto de Decreto Legislativo 119/15 que autoriza el aprovechamiento de agua en trechos de la hidrovía de la cuenca del Tapajós, objeto de varios proyectos hidroeléctricos, para permitir mayor competitividad a la economía granelera¹³⁸.

Del mismo modo, las hidroeléctricas también son asociadas con proyectos extractivos adyacentes que necesitan de una cantidad de energía disponible considerable. Es el caso de la actividad minera y de la industria electro-intensiva, como la de aluminio. En las últimas décadas, la actividad de la fundición de aluminio se ha desplazado de los países centrales a los países periféricos, entre ellos las áreas tropicales de América Latina. En particular, la industria del aluminio ha sido uno de los elementos claves para la inserción de la región en el mercado global a través de un modelo de desarrollo basado en las materias primas.

Según datos oficiales del gobierno brasileño, la energía supone el 40% del coste de la producción de aluminio (DNPM, 2013); esto demuestra que el sector va a buscar localizaciones competitivas que le ofrezcan cantidad de energía a precios menores, así

¹³⁷ Según los datos recogidos por Philip Fearnside, se estima que una producción de 28 millones de toneladas de granos de Mato Grosso y 24 millones de toneladas de Bolivia aprovechen los más de 4000 km de navegabilidad de la Hidrovía Rio Madeira, posibilitada por los proyectos hidroeléctricos. En Brasil, la Cámara de los Diputados aprobó el Proyecto de Decreto Legislativo 119/15 que autorizaba el aprovechamiento de los recursos hídricos en las hidrovías de Tapajós, Teles Pires y Juruema.

¹³⁸ En <http://amazonia.org.br/2016/07/comissao-autoriza-navegacao-em-trechos-dos-rios-tapajos-teles-pires-e-juruena/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Not%EDcias+da+Amaz%F4nia+-+14+de+julho+de+2016>. Último acceso: 13/07/2016.

como acuerdos de colaboración con el sector energético. “A relação entre mineração e energia elétrica é tão estreita que muitas mineradoras participam dos consórcios das novas usinas da Amazônia, financiando as futuras fontes de energia barata”¹³⁹.

En cierto sentido, los países centrales exportan hacia la periferia los costes sociales y ambientales de la industria electro-intensiva; al mismo tiempo, importan de ellos energía en forma de lingotes de aluminio (Berman, 2011; Fearnside, 2015b). Esta tesis fue desarrollada por Stephen Bunker (citado en Mathis *et al.* 1997), para quien las economías extractivas pierden en su interacción con las economías productivas en la medida en que exportan para ellas su propia energía: el flujo de energía reduce la fuerza de las economías extractivas y fortalece las productivas. “A argumentação de Stephen Bunker pode ser interpretada como uma reformulação da teoria de dependência na base de fluxos energéticos” (Mathis *et al.*, 1997: 27).

6.4. Minería y Amazonia

Ya hemos descrito en otros momentos cómo la búsqueda de oro, plata, diamantes y piedras preciosas, así como otros tipos de minerales metálicos o no metálicos, inspiró el proyecto de ocupación colonial de América Latina. Del mismo modo en la Amazonia, sobre la que se proyectaron muchos de los sueños quiméricos por encontrar una “ciudad dorada” o un “lago dorado”. Actualmente, además de permanecer la metáfora aurífera sobre la región, ésta se considera un territorio-cantera que esconde en su subsuelo reservas extraordinarias de *commodities* minerales como el hierro, wolframio, casiterita, tantalio, bauxita, columbita o estaño, entre muchos otros.

6.4.1. Tipos de actividad minera

La actividad minera puede asumir diversas formas y emplear técnicas y tecnologías muy desiguales. Para proponer una clasificación de los tipos de minería se pueden utilizar diferentes criterios.

Si nos atenemos al *tamaño de la explotación*, incluyendo en ese concepto tanto el área afectada por la extracción como el volumen de minerales extraídos, podemos hablar a grandes rasgos de la existencia de tres tipos de actividad: pequeña minería, media minería y minería a gran escala. Las fronteras entre estos tipos no siempre son claras ni estables y sus definiciones formales pueden variar de un país a otro. Una minería que comienza a pequeña escala puede transformarse sustancialmente y tornarse una minería de media escala. Esto puede suceder a partir de factores como la ampliación de

¹³⁹ Entrevista al geógrafo Luiz Jardim de Moraes Wanderley, en <http://amazonia.org.br/2012/10/minera%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-alvo-do-mercado-especulativo-entrevista-especial-com-luiz-jardim/>. Acceso 3/10/2012.

la actividad en un mismo local por la llegada de nuevos grupos de mineros o la incorporación de equipamientos y tecnologías que agilizan el ritmo de la extracción o consiguen afectar un área mayor que en la situación anterior.

La minería a gran escala requiere normalmente la participación de una empresa, nacional o transnacional, con fuerte capacidad de inversión. La mayor parte del material extraído es dirigido para la exportación, dejando pocos beneficios en el local y la región de extracción. En la primera fase de la minería a gran escala, en la cual se hace necesario la apertura de la cantera hasta hacerla funcionar, esta actividad moviliza un contingente grande personas que, poco tiempo después, son dispensados, generando aglomeraciones artificiales de población y problemas sociales relacionados. En las fases ya avanzadas de explotación minera, el volumen de mano de obra que se necesita es menor y requiere una mayor especialización.

La minería a gran escala se vincula a las cadenas productivas de la industria siderúrgica y metalúrgica (minería metalífera – férrica y no férrica), industria de la construcción (con rocas de aplicación y otros materiales como la grava) o del sistema agroalimentario (fosfatos, calcáreos, ...). Está asociada a obras de infraestructura – ductos, carreteras, ferrovías - funcionales a la salida del mineral hasta los locales de fundición o de venta, así como a la competencia con las poblaciones locales por el uso del agua (Svampa, 2011; Cereceda: 2007). “A água é uma questão central quando a gente está falando de conflito, porque a mineração impacta diretamente na água e porque a água é muito mais do que um bem econômico, ela é primordial à vida e um recurso que mantém a vida, não só na reprodução material mas também na reprodução simbólica e cultural”¹⁴⁰.

La minería a gran escala en la Amazonia es, mayoritariamente, a cielo abierto. Según Svampa, la minería de socavón o subterránea – igualmente conflictiva - operaba en un tiempo en el que era común encontrar los metales en grandes vetas. Actualmente, los metales están en proceso de escasez y se encuentran mucho más diseminados (Svampa, 2008; Bunker; 2007). Su extracción obliga a grandes detonaciones, uso de sustancias químicas en los procesos de lixiviación y aplicación de nuevas tecnologías.

Para Svampa el elemento central que explica el pasaje de la minería a pequeña escala a la minería “moderna” se da por la ampliación de la escala de explotación (2011). Es decir: hablamos de un proceso en el cual la demanda por minerales – en diversidad y en volumen – no deja de aumentar, mientras que su progresivo agotamiento a nivel mundial exige nuevas inversiones en la búsqueda de yacimientos y nuevas tecnologías adaptadas a tipos de extracción en lugares donde el mineral se encuentra más diseminado. Y también hablamos de un momento en el que los emprendimientos se

¹⁴⁰ Gabriela Fraga, investigadora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro – UFRJ, en declaración en el documental *Iglesias y Minería en América Latina*, producido por JUPIC-SVD/BRN y accesible en <<https://www.youtube.com/watch?v=l1Qvgctnbck>>.

caracterizan por su gigantismo, por la envergadura de las inversiones. Estas condiciones aceleran el proceso de la megaminería o minería a gran escala.

Ambos tipos de minería – pequeña y gran escala – son responsables por profundos y complejos impactos sociales y ambientales en los territorios donde se instalan. En el caso de la minería a pequeña escala, o garimpo, se han documentado y registrado claramente los efectos de esta actividad sobre la contaminación de las fuentes de agua (por depósito de mercurio), la retirada de vegetación nativa, la erosión del suelo o la acumulación indiscriminada de residuos. Desde el punto de vista social, los garimpos se convierten en muchos casos en espacios de vulneración de derechos fundamentales, explotación laboral y sexual sobre las mujeres. Y respecto a la comunidad que vive en la zona, los registros demuestran efectos de desagregación social, introducción de bebidas alcohólicas y armas de fuego, explotación sexual, aparte de los perjuicios evidentes por tener contaminadas sus principales fuentes de agua. En el Capítulo 8 de nuestro trabajo, retomaremos este tema con datos concretos.

En el caso de la minería a gran escala, los impactos afluyen con mayor transparencia por la envergadura del emprendimiento. La destrucción de ecosistemas, la contaminación de aguas y los efectos sobre los sistemas de vida de las comunidades locales son evidentes y visibles. La producción de residuos o estéril que queda en la región después de la actividad minera, los llamados pasivos ambientales, quedan sobre las espaldas de la comunidad local o, a lo sumo, de la Administración Pública. “En la mayoría de los casos, la gestión de los sitios mineros y de las diferentes contaminaciones, en particular por metales pesados y drenaje ácido de mina, quedan a cargo del Estado” (Svampa, 2011).

Tanto la pequeña como la gran minería están avanzando sobre la región amazónica en las dos últimas décadas. La minería a gran escala está siendo incentivada desde el poder público, que ve en ella una fuente de recursos a corto plazo. Las reformas legislativas se dirigen, en este sentido, a agilizar los procedimientos de concesión y tornar más leves los procesos de autorización ambiental. Al mismo tiempo, interesa a los gobiernos regular la actividad minera de pequeña escala para reducir el volumen de economía no declarada en el fisco. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en estos intentos de formalización debido, entre otros motivos, a la vulnerabilidad institucional, a falta de coherencia entre políticas públicas y la confluencia de intereses de algunos sectores de la élite política y la economía minera sumergida.

Un segundo criterio que suele ser empleado para la tipificación de las actividades mineras se refiere a los *métodos y la tecnología utilizada* para la extracción. En este sentido, y muy a grandes rasgos, se suele diferenciar entre la minería artesanal y la minería mecanizada. La minería artesanal emplea técnicas con predominancia de la fuerza de trabajo manual y el uso de equipamientos y herramientas básicas y fácilmente transportables. Este tipo de minería implica la participación directa, normalmente, de

pequeños grupos. Ya la minería mecanizada combina las técnicas y la fuerza de trabajo manual con el uso de maquinarias de mayor porte que permiten extraer mayores volúmenes de sustancias en menor tiempo. Este tipo de minería podría, a su vez, ser dividida en diversos tipos tecnológicos.

En términos generales, la incorporación de equipamientos y maquinarias es progresiva, dando lugar a diversos tipos tecnológicos intermedios, en función de los objetos incorporados al sistema manual: desde los motores-bomba de succión; las cajas y máquinas resumidoras; mangueras o tuberías; dragas, palas mecánicas o retroexcavadoras hasta llegar a niveles tecnológicos más sofisticados en la minería a gran escala. La minería mecanizada ha contribuido a densificar la red de actores implicados en la actividad minera, debido a la necesidad incorporada de mecánicos y operadores de máquinas, pilotos y compañías de aeronaves o suministradores de combustible, uno de los principales insumos consumidos por este tipo de minería.

Por último, un tercer criterio se refiere al *nivel de formalización de la actividad* y nos permite hablar de una minería formal – aquella que opera con la autorización correspondiente al marco legal del momento en cada país – y de una minería ilegal, que es aquella que actúa en la clandestinidad, sin ninguna autorización ni permiso y, normalmente, en zonas prohibidas a la actividad minera.

Todas estas categorías o tipos de minería no siempre se presentan exactamente con estos atributos en la realidad, que suele ser mucho más compleja. En numerosas ocasiones se han empleado indistintamente términos diferentes como si fuesen sinónimos. Por ejemplo, se asocian en el imaginario social la minería informal con la minería artesanal, de pequeña escala o con la minería ilegal, como si todas estas categorías estuviesen refiriéndose a la misma actividad. La minería ilegal está presente en todas las formas de actividad minera, independientemente de su tamaño o de sus características tecnológicas (Heck, 2014). Algunas actividades de minería informal podrían regularizarse, aunque los requisitos previstos para ello desaconsejan a los grupos mineros tomar este camino y prefieren permanecer en la clandestinidad.

Actualmente, algunos países amazónicos como Bolivia, Perú y Ecuador reconocen en sus marcos jurídicos una estratificación de la actividad minera permitida, clasificándola en cuatro tipos fundamentales: artesanal, pequeña, media y de gran escala.

Todas las actividades mineras, de modos diversos, son responsables por graves problemas sociales y ambientales que han sido suficientemente identificados en la región amazónica. La pérdida de bosque tropical, deforestación, contaminación de suelos, fuentes de agua y de ictiofauna, o dragado de los ríos son algunos de los impactos ambientales documentados. Al mismo tiempo, se relacionan con impactos sociales como desplazamientos de comunidades locales, explotación laboral y trabajo infantil, diseminación de enfermedades, trata de personas y otras problemáticas asociadas a la violencia, el consumo de alcohol o el abandono de economías locales sostenibles.

6.4.2. Minería ilegal: balsas, barrancos y corruptelas

En la Amazonia encontramos ejemplos de los diversos tipos de actividad minera que hemos descrito más arriba. Uno de los tipos que ha sido y continúa siendo muy frecuente es la minería de pequeña y media escala, artesanal o semi-mecanizada, identificada en Brasil con el término de *garimpo*.

Es probable que la técnica de minería de garimpo no haya cambiado sustancialmente desde los primeros momentos de la colonización. Pérez Sáenz de Urturi (1985), en su trabajo de reconstrucción histórica de la minería colonial en América Latina, afirma que en la primera mitad del siglo XVI la técnica minera más empleada era la *técnica de placeres* que, por la descripción que el autor nos hace, se asemeja a la que ha llegado a nuestro tiempo bajo la forma de garimpo. “Elegido un terreno, se limpiaba de árboles y broza; se practicaba un agujero profundo, extrayendo de él el mineral; luego se llevaba a lavar al arroyo más próximo, examinando los materiales lavados. Por cada dos personas que extraían mineral, había otras dos que lo transportaban y otras dos que llenaban las bateas de tierra y las lavaban en el arroyo. Además, había que contar con los que trabajaban la tierra para producir el alimento y con los que lo cocinaban” (1985: 99).

Actualmente, los procedimientos de explotación minera en el garimpo consisten, en términos generales, en la remoción de capas superficiales del suelo para posibilitar que los metales afluyan y puedan ser identificados visualmente con la ayuda de algunas herramientas o maquinarias y el uso de insumos químicos, como el mercurio. El garimpo en la Amazonia está asociado, fundamentalmente, a la extracción de oro y diamantes, si bien se puede dar en casos de extracción de casiterita, estaño o sustancias no metalíferas, como la arena o el cascajo para la construcción civil.

La práctica totalidad de la actividad minera de garimpo que se desarrolla en la Amazonia es ilegal. Representa una apropiación ilícita de bienes comunes sin ser declarados al erario público, no contempla los requisitos mínimos para la autorización en los términos de la legislación vigente y, principalmente, agrede con violencia los derechos de los grupos que viven en los territorios donde el garimpo opera. A pesar de su ilegalidad y de los graves impactos sociales y ambientales que genera, incluso hacia el interno de los propios grupos implicados en la actividad, en los primeros quince años del siglo XXI la minería aurífera ilegal ha aumentado en la Amazonia, respondiendo así al comportamiento alcista del precio del oro y a la fragilidad de las respuestas ofrecidas por los Estados (Heck, 2014).

El carácter de clandestinidad de la minería ilegal dificulta identificar sus conexiones con los mecanismos de economía de escala a nivel mundial, aunque éstas existen claramente. El estudio coordinado por Carmen Heck (2014) nos ofrece algunos datos que permiten dimensionar la extensión de esta actividad ilegal en la Amazonia. En Perú, por ejemplo, el 85% de los mineros ilegales se dedican a la extracción de oro. En 2006

se calcula que extrajeron un total de 24 toneladas, lo que significaba un 10% de la extracción nacional y un valor cercano a los 400 millones de dólares. En Brasil, cerca del 30% de la extracción total de oro es ilegal y no se declara. En algunas ocasiones, el oro de procedencia ilegal se vende en los circuitos formales utilizando fraudulentamente los Permisos de Labra Garimpeira de terceros, que se llevan un porcentaje en la operación, caracterizando lo que se denomina “calentar el oro”. En Colombia, el 87% de la minería aurífera es ilegal.

1. Ambiente y técnicas del garimpo en la Amazonia

La actividad de garimpo en la Amazonia puede ser desarrollada, principalmente, en dos ambientes naturales (Santilli, 2011): dentro o próximo a los cursos de agua, que caracteriza una minería de aluvión o de placeres; o en terreno seco, caracterizando una minería de socavón, de barranco o de encosta.

En el ambiente relacionado con los cuerpos de agua (ríos, arroyos, arroyuelos), la actividad garimpeira consiste básicamente en la remoción de las capas de arena y grava en los suelos aluviales que se dan en las orillas o en el fondo de los cursos fluviales.

En las zonas de orilleo, es posible encontrar actividades de minería artesanal. En ese caso, la remoción del material se realiza manualmente, valiéndose de palas, picos,



azadas y otras herramientas similares. En el caso del oro, que se encuentra en las capas más superficiales, los mineros se sirven de la *bateia* para la operación de separación o amalgama del oro. La *bateia* es una especie de bandeja cónica, de madera o de metal, sobre la que se deposita material de cascajo y arena superficial. En contacto permanente con el agua y con la ayuda de los movimientos circulares que el minero ejecuta en la *bateia*, los metales van quedando en el poso o fondo de la bandeja debido a su mayor densidad. En muchas ocasiones, los mineros utilizan mercurio para ayudar en la amalgama del metal, favoreciendo la propia exposición del minero a esta sustancia y su derramamiento en el cuerpo de agua.

Figura 5. Garimpeiro utilizando la bateia para lavar la tierra. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista - Roraima/Brasil

debido a la incorporación de algunas máquinas: motores-bomba de succión y cajas registradoras.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, algunas modificaciones fueron introduciéndose en este método de extracción, principalmente

La introducción de las balsas abrió la actividad del garimpo hacia dentro de los lechos de los ríos, inaccesibles hasta ese momento. En estos casos, se situaba una balsa - construida rústicamente con maderas y bidones de plástico - en un determinado punto del curso de agua, y sobre la balsa se instalaba la bomba de succión con una manguera que terminaba en una maraca. Uno de los mineros llevaba el extremo de la manguera hacia dentro del agua y lo depositaba en el fondo, escogiendo el mejor local posible. A partir de ahí, la bomba succionaba el material de arena y cascajo, que era lanzado hacia una plataforma de madera o metal, conocida como caja *resumidora*, que se encontraba en la parte alta y seca del margen fluvial. La caja resumidora tenía la forma de un conducto inclinado y en cuya superficie había una serie de salientes o hendiduras. Los materiales más pesados – entre ellos los metales buscados - iban quedando retenidos y acumulados en estos salientes o en la superficie de alfombra que cubre el suelo de la plataforma, facilitando posteriormente la separación de los que interesan. La deposición de todo el estéril no aprovechado se efectúa sobre el mismo lecho, contribuyendo a la contaminación de las fuentes de agua.

De un modo similar funcionaba el método de garimpo en la orilla o tierras bajantes en los márgenes de los ríos y arroyos. En este caso, la bomba succionadora se instalaba sobre una superficie fijada en tierra firme, a pocos metros del cuerpo de agua. Con la misma técnica, se posicionaba la manguera y la maraca en las capas superficiales de arena y grava de las orillas y el procedimiento continuaba con los mismos pasos.

En las actividades de minería de aluvión con uso de bomba succionadora también se empleaban las técnicas artesanales con la bateia o la suruca. En ese caso, esta tarea podía preceder al uso de la bomba y cumplía la función de verificar el potencial aurífero o diamantífero del local para evaluar la rentabilidad o no de la actividad. También se empleaban las técnicas artesanales en una fase posterior con el fin de terminar de separar o amalgamar el oro.

En todas estas actividades era común el uso de mercurio. Sin duda, éste ha sido uno de los factores más dañosos de la actividad minera en los aluviones. Se calcula que en los últimos 20 años se hayan utilizado en la minería aurífera en la Amazonia cerca de 3.000 toneladas de mercurio. Los procesos de oxidación y metilación rápida a que es sometido el mercurio en las condiciones propias del agua y de los sedimentos de los ríos le permiten entrar en la cadena alimenticia de los organismos acuáticos y, a partir de ellos, en las poblaciones ribereñas (Heck, 2014: 90). Sucesivamente, investigaciones realizadas en diversos países amazónicos han demostrado que el contenido promedio de mercurio en el cabello de las personas o en poblaciones de peces en cursos de agua afectados por la minería ilegal es superior a los límites recomendados por la OMS. Según datos de Naciones Unidas, en 2010 el consumo de mercurio para la pequeña minería y la minería artesanal en los seis países mayores de Amazonia ascendía a 480 toneladas (citado en Heck, 2014: 11).

Posteriormente, el uso de dragas o de máquinas retroexcavadoras y la sofisticación de las cajas resumidoras han favorecido un aumento de la extracción minera así como de la afectación del ambiente, dejando zonas abiertas convertidas en áreas alagadas y deforestadas. El segundo ambiente natural donde se puede dar la minería de garimpo es en terreno seco o minería de socavón. Consiste en la excavación de la superficie del suelo a través de un chorro de agua lanzado a propulsión, también con ayuda de una bomba succionadora. En este caso, la bomba succiona agua del río o arroyo y la lanza a propulsión sobre la tierra o los terraplenes, en caso de que la excavación sea grande. La grava, tierra y arena que se desprende de la superficie es igualmente transportada - manualmente o con otra manguera succionadora - hasta las mismas plataformas donde se separa el material deseado. La excavación también puede realizarse con máquinas retroexcavadoras en caso de que se disponga de ellas.

Figura 6. Minero utilizando agua a propulsión para excavación en terreno seco. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista - Roraima/Brasil





Figura 7. Minero buceador, responsable por colocar la maraca en el fondo del agua. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista - Roraima/Brasil



Figura 8. Caja resumidora. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista - Roraima/Brasil

En Bolivia, la minería aurífera de aluvión se concentra en las regiones de los ríos Madre de Dios y Beni. La categoría de los mineros organizados en cooperativas, procedentes de los procesos de nacionalización (1952) y de deslocalización después de la caída del precio del estaño (1985), mantiene actualmente una capacidad de influencia económica y política muy fuerte en todo el país, como se percibió en el reciente proceso de redacción de la nueva Ley Minera.

En Colombia, se calcula que 400 municipios (un 44% del total de municipios en el país) estén afectados de una u otra forma por la minería ilegal, con destaque para regiones como Antioquia, Bolívar, Bucayá, Cundinamarca y Santander (Heck, 2014). El actual marco legal de la minería eliminó la estratificación de la actividad; es decir, los mismos requisitos son solicitados a la pequeña, media o gran minería, ocasionando un aumento de la actividad ilegal en la pequeña minería.

En Perú destaca la situación en la región del río Madre de Dios, al sudeste de la Amazonia y en frontera con Bolivia y Brasil. A pesar de que este departamento tiene minería desde inicios del siglo XX, a partir de 2005 los datos oficiales dan cuenta de una actividad incontrolada, con unos impactos sociales y ambientales extraordinarios¹⁴¹. El inicio de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, dentro de la estrategia de integración física auspiciada por la iniciativa IIRSA, ha provocado un aumento exponencial de la actividad ilegal en la región. El 98% de la extracción aurífera peruana se dirige a Suiza, Canadá, EE.UU. e Italia (Heck, 2014).

En Venezuela, la actividad minera de garimpo se concentra en la región amazónica, en los Estados de Amazonas y Bolívar. La actividad data de las primeras décadas del siglo XIX y tiene uno de sus picos de extracción y exportación a inicios del siglo XX (Heck, 2014). La mayor parte de este tipo de minería afecta territorios habitados por pueblos indígenas.

Según Sergio Milano, fuentes no oficiales venezolanas calculan que el 40% de la retirada de oro por parte de empresas privadas, pequeñas y medianas, o de grupos informales, es objeto de evasión fiscal (Heck, 2014: 219). Es muy difícil obtener cálculos precisos. Cualquier tipo de información referente a la minería ilegal de oro y diamantes en la región de Amazonas y Bolívar debe ser tomada con cautela porque se carecen de datos estadísticos fehacientes; en parte, por el carácter de ilegalidad que es inherente a la mayor parte de los emprendimientos. Estimar el número de personas implicadas directamente, la cantidad de material retirado o incluso el número de campamentos existentes en la región no es una tarea simple por la intensa movilidad de los grupos y por las condiciones de clandestinidad y conflictividad que acompañan sus trabajos. Milano, en base a declaraciones y registros de prensa, calcula que en la actualidad el número de mineros en esta región supere las 15.000 personas. Ciudades como Upata,

¹⁴¹ En Madre de Dios, la tasa de deforestación relacionada con la actividad minera aurífera se acercó a las 300 hectáreas/año en el período 2006-2009 (RAISG, 2012)

El Callao o Tumeremo tienen la economía minera ilegal como uno de sus ejes económicos fundamentales.

En el caso brasileño, retomaremos este punto en el Capítulo 7.

2. Organización social del trabajo en el garimpo

La actividad garimpeira es realizada normalmente en grupos y no individualmente (Rodrigues, 1996; Santilli, 2011). Posiblemente esto siempre fue así, si consideramos la descripción que Pérez Sáenz de Urturi nos ha proporcionado del sistema de placeres en los inicios del siglo XVI. Aun así, las formas de organización y división social de las tareas propias de la actividad garimpeira han podido adoptar formas relativamente diversas.

Siguiendo a Schmink y Wood (2012), las relaciones que se establecieron en los garimpos iniciales giraban en torno a dos figuras: el proveedor y los garimpeiros. El proveedor era el responsable por el capital invertido y por asegurar a los mineros el suministro de bienes de primera necesidad. Los garimpeiros, por su parte, ponían su fuerza de trabajo. Los beneficios eran divididos en dos partes: la mitad iba para el proveedor y la otra mitad se distribuía entre los mineros. Este es el sistema conocido en Brasil como *meia-praça*.

Alrededor de estas dos figuras, otros actores podían interactuar con el garimpo. Entre ellos, destacaban los pilotos de aeronaves que ejercían de transportadores y, a veces, como socios, proveedores o patrones (2012: 96). El papel de las aeronaves y de las pistas de aterrizaje clandestinas jugaba un papel esencial, pues se constituían en el principal, si no único, medio de entrada y salida del garimpo, tanto para las personas como para las mercancías y los insumos asociados a la actividad. De otro lado, los comerciantes y compradores de oro, residentes en los núcleos urbanos, se iban constituyendo en una nueva clase social rica.

Schmink y Wood afirman que el sistema de *meia-praça* fue posible en algunos lugares por la preexistencia de la estructura del sistema de aviamiento o de regatão que describimos para el caso de la extracción del caucho.

Alrededor del garimpo también se formaban las llamadas *corruptelas*, que eran conjuntos precarios de casas o construcciones muy rudimentarias que hacían las veces de comercios, bares o locales empleados por redes de trata de mujeres para explotación sexual.

A medida que la actividad minera crecía y transformaba su base tecnológica, esto afectaba también a las formas de organización y división del trabajo dentro de los garimpos, introduciendo relaciones de trabajo clandestinas pautadas por la lógica capital/trabajo en la cual el minero recibía una cantidad porcentual previamente fijada. La figura anterior del proveedor se convirtió en la de “dueño del garimpo” o “dueño de la maquinaria”, roles que podían coincidir o no en la misma persona. En la mayor parte de los casos, el dueño de las máquinas o de las balsas, que encarnaba el papel

empresarial del emprendimiento (2012: 137) era la persona que más beneficio extraía de la actividad, llegando a tener una participación del 70%. Paulo Santilli (2001) habla también de la figura del administrador o gerente, delegado por el dueño del garimpo para conferir *in situ* el valor del metal extraído y efectuar allí mismo los pagos a los mineros.

Los mineros trabajaban en grupos y se dividían las tareas en función del método de garimpo, aunque también en algunas regiones se daban casos de trabajadores por día o llamados para realizar determinados servicios puntuales, así como operarios más o menos experimentados en el mantenimiento de las máquinas. En el local de extracción, en un mismo grupo de mineros se podían dividir o compartir rotatoriamente actividades como las de buceadores, cargadores, operarios de maquinaria o aquellos que lavaban el material. El grupo de mineros normalmente incluía una o dos mujeres que se hacían cargo del preparo de los alimentos.

6.4.3. El crecimiento de la minería en la Amazonia

En los países amazónicos han permanecido dos tradiciones jurídicas. Una de ellas es la del sistema de regalías heredado de la colonia, por el cual la Corona española se adjudicaba el derecho de concesión de terrenos para la extracción minera a cambio de un porcentaje de los beneficios (Heck, 2014). La segunda tradición jurídica es la de reconocer la propiedad del Estado sobre los bienes del subsuelo, independientemente del tipo de tenencia de la tierra (RAISG, 2012). Ambas tradiciones configuran hoy el marco de la acción del Estado en el sector minero.

Como ya tuvimos ocasión de analizar en el capítulo anterior, las nuevas leyes mineras en los países amazónicos como Bolivia, Ecuador o Venezuela, así como la discusión en Brasil sobre el nuevo Código Minero y los proyectos de ley para apertura de las tierras indígenas a la minería, se proponen responder a este momento expansivo de la actividad minera. La mayor parte de los textos persiguen, entre otros, dos giros: de un lado, agilizar los requerimientos para la concesión de derechos mineros; de otro lado, abrir o permear a la actividad minera aquellos territorios hasta ahora vedados. Se trata fundamentalmente de reformas legislativas para la expansión y no para la garantía de salvaguardas, lo que presumiblemente va a permitir una mayor actuación de las grandes empresas del sector. Actualmente, el enorme aumento de solicitudes de concesión para exploración o explotación minera en el territorio amazónico está generando situaciones de impasse jurídico propias de un Estado de excepción, como vimos en el capítulo anterior.

Actualmente, la minería a gran escala y a cielo abierto avanza por todo el territorio amazónico, a pesar de contar formalmente con restricciones para su expansión en el conjunto de tierras protegidas: territorios sociales y de protección y preservación ambiental. El 19% de los territorios indígenas se halla inventariado o solicitado para la actividad minera, sin contabilizar la presencia de minería ilegal en su interior. Brasil es

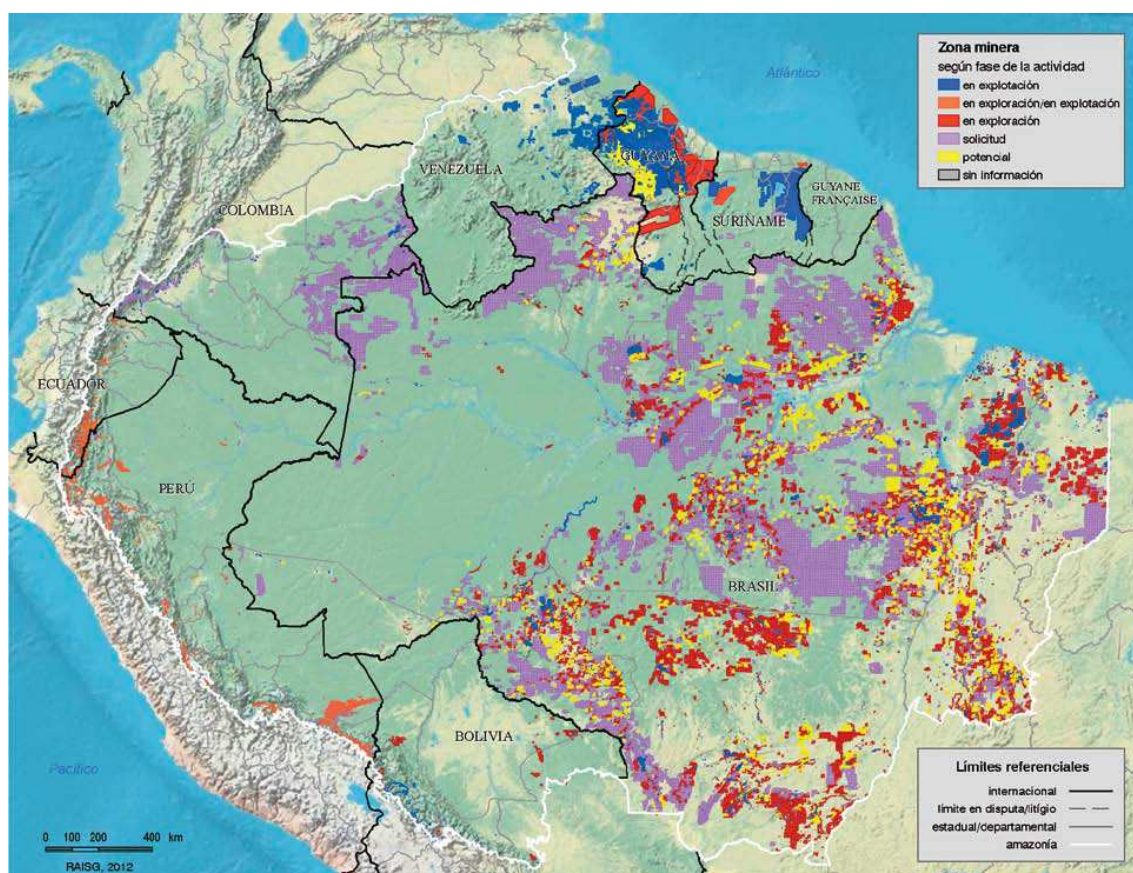
el país que concentra el mayor porcentaje de requerimientos para pesquisa minera dentro de tierras indígenas (88% del total de requerimientos), siendo que el 99% se localiza en tierras ya reconocidas formalmente (RAISG, 2012: 35). Estos datos dimensionan la relevancia de los proyectos de ley y del Código Minero que están siendo discutidos en el Congreso Nacional brasileño.

Según datos recogidos por RAISG, en 2010 existían casi 53.000 zonas con intereses mineros en la Amazonia, lo que significa un 21% de su territorio completo. Las zonas mineras se encuentran en diversas fases de ejecución. Como sucede en el caso de la explotación petrolera, es mucho mayor el índice de zonas mineras aún no explotadas pero localizadas y requeridas. Esto nos alerta, una vez más, a que el desarrollo de la economía extractivo-exportadora sobre la región amazónica va a tender a seguir creciendo mucho más de lo que ya existe hoy. Según datos de RAISG, el 60% de las zonas mineras aún se encuentran en fases denominadas como potencial y requerimiento. Tan solo el 1,6% de las áreas estaba siendo formalmente explotada en 2012.

Países como Venezuela, Bolivia, Guiana Inglesa y Surinam concentran la mayor parte de las zonas que ya están en explotación o en pesquisa de su potencial. En el lado opuesto, países como Brasil y Colombia reúnen la mayor parte de los requerimientos de pesquisa y de las áreas consideradas potenciales. Cabe suponer que un eventual crecimiento de la actividad minera intensiva en la región amazónica se desarrollará, fundamentalmente en estos dos países. Esto es lo que también se constata en el Mapa 6.

Crece, al mismo tiempo, la asociación de proyectos mineros a gran escala con las cadenas de industria electro-intensiva, la obtención de carbón vegetal para los hornos¹⁴² y la construcción de proyectos hidroeléctricos, como habíamos visto anteriormente.

¹⁴² Para análisis más detallado, ver Greenpeace (2012). Carvoaria Amazônia. Como a indústria de aço e ferro gusa está destruindo a floresta com a participação de governos. Manaus: Greenpeace.



Mapa 7. Zonas mineras en Amazonia según fase de actividad. Fuente: RAISG, 2012

6.5 La construcción de una agenda propia entre dos imaginarios externos

Del mismo modo que concluíamos el capítulo anterior, dedicamos un espacio a delinear algunas de las características de la movilización socio-territorial que se ha ido configurando en las últimas cuatro décadas en la región amazónica. “No final da década de 70 e no início dos anos 80, lutas de camponeses, seringueiros, garimpeiros, indígenas e outros grupos afetados pelas mudanças que estavam ocorrendo na região começaram assumir uma forma mais organizada” (Schmink y Wood, 2012: 156).

En el caso de las iniciativas de articulación social dentro de la Amazonia, una serie de elementos nos llaman la atención. En primer lugar, nos referimos a un conjunto de grupos sociales muy diferentes entre sí y que, en ciertos momentos del devenir histórico de ocupación del espacio ahora compartido, se han visto enfrentados. Las imágenes proyectadas desde la narrativa desarrollista en referencia a la percepción de la Amazonia como un espacio vacío a ser ocupado provocaron conflictos de expectativas y de territorialidades entre grupos que llegaban a la región y grupos que ya la habitaban.

Por otro lado, las iniciativas de movilización social en defensa de los derechos humanos en la Amazonia representan la construcción de un campo político propio que tiene que interactuar con dos imaginarios potentes que se han delineado sobre la región desde

fuera de ella: de un lado, el imaginario desarrollista, vinculado a la economía extractiva y que observa la Amazonia como una frontera de recursos a ser incorporada subalternamente a la economía nacional e internacional; de otro lado, el imaginario ambientalista conservador, preocupado por la preservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales que una región como la amazónica reserva para todo el planeta.

Ambos imaginarios se construyen y reelaboran permanentemente en el campo intermedio entre lo local y lo global. Si en determinados momentos representan perspectivas antagónicas, en otros momentos, como ya hemos destacado en este trabajo, confluyen en la lógica instrumental que los mueve y que sigue percibiendo Amazonia como un espacio inerte y vacío. Ambas lógicas se conectan, en todo caso, con las diversas escalas del sistema-mundo y participan de los debates globales que abordan cuestiones como el cambio climático, la diversidad biológica, la contribución de la ciencia biofísica o la encrucijada energética.

Para Paul Little, estas tres perspectivas – desarrollista, ambientalista y socio-territorial – convergen en lo que se ha venido a llamar el *espacio público* pan-amazónico, en el cual es preciso cotejar las escalas de poder que cada uno de los grupos de actores dispone (Little, 2014: 406). En todo caso, el desafío de los grupos sociales amazónicos es, a nuestro juicio, la construcción de un campo social y una agenda propia que modele posibilidades de convivencia a partir de y desde la Amazonia, entendiendo ésta en su complejidad social, ambiental y cultural.

La construcción de este campo social propio les exige interactuar con los otros dos campos semánticos que colocan en el centro de la discusión, desde perspectivas externas, las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el ambiente. Como dice Berta Becker, “(...) é o conflito de uma região em relação às demandas externas” (2005: 72).

La expansión de las fronteras económicas sobre la Amazonia a partir de las décadas de 60 y 70 del pasado siglo no afectó solamente la base física y material de los territorios habitados por los pueblos indígenas y sus condiciones productivas; también sus propias formas de organización social, política y simbólica se vieron impactadas (Albert, 2004). Es decir, las profundas transformaciones que operaron en la sociedad amazónica y en las múltiples agencias - estatales, privadas, religiosas, sociales, militares - que sobrevinieron sobre el territorio amazónico generaron nuevas condiciones de interacción que obligó a los grupos indígenas a intensos cambios en sus propias formas de organización y en las estrategias políticas y de afirmación étnica y territorial (Espinosa, 2014).

De modo particular a efectos de nuestro trabajo, los pueblos indígenas reaccionaron con habilidad política para conseguir actuar en ese campo de relaciones interétnicas, en el cual sus dirigentes van a ejercer un papel de mediación y traducción entre dos sistemas culturales encontrados en condiciones desiguales. Como indica Alberto Chirif, “todas las rebeliones indígenas que registra la historia (...) han implicado una madurez organizativa

(...). Sin embargo, las organizaciones de los pueblos indígenas tal como hoy las conocemos, es decir, como estructuras permanentes que tienen por objetivo central la defensa de los derechos de sus representados, es relativamente reciente” (2009, 1).

Las formas adoptadas por los Estados nacionales en su relación con los pueblos indígenas crearon, como vimos anteriormente, su propio campo semántico y jurídico incorporando términos – como el de tierra indígena – que Bruce Albert identifica como “exodefiniciones” que, lejos de dar cuenta de la compleja diversidad étnica, produce conceptos generalistas (2004, 227). Pero es en ese campo interétnico en el que los pueblos indígenas tuvieron que reformular sus propias estrategias y formas organizativas para defender sus proyectos de vida, superando la simplicidad de los exo-conceptos con la complejidad de sus relatos de autoafirmación. “La etnicidad reivindicada nunca es reductible, aquí, a la etnicidad impuesta” (Albert, 2004: 229).

Hasta llegar a las formas de organizaciones indígenas que hoy conocemos en la Amazonia, una serie de cambios tuvieron que darse en el seno de las múltiples sociedades indígenas; y lo hicieron de modos también diversos. Desde el inicio de la movilización indígena, la cuestión fundamental siempre fue claramente la cuestión de la tierra. “O principal campo da luta foi a defesa, garantia e recuperação de seus territórios” (Heck y Loebens, 2012: 61).

En la defensa de la tierra convergen las estrategias comunitarias desarrolladas en lo local con las habilidades y destrezas implementadas delante del Estado o en la articulación con organizaciones sociales a diversas escalas. Podemos decir que la defensa del territorio permitió, desde el inicio, mantener una cohesión tejida entre aquellas formas de organización social vinculadas al lugar y aquellas formas más institucionalizadas que operan en los campos de negociación y exigibilidad de derechos. Esta habilidad se desplazó después a otros campos de derecho, como el derecho a la educación o la salud diferenciada. Bruce Albert constata que, a pesar de la debilidad demográfica de estos pueblos, “es sobre todo gracias a la problemática territorial que la cuestión indígena ha adquirido el lugar, a menudo considerable, que ocupa en la escena política y mediática del desarrollo amazónico en el Brasil” (Albert, 2004: 222).

En la mayor parte de los procesos, se observa la figura de las asambleas de dirigentes comunitarios, como ya habíamos adelantado en el Capítulo 4 de la mano de Maristella Svampa. “Um dos fatos mais animadores na recente história da luta dos povos indígenas foi o rompimento do isolamento e do silêncio que o projeto colonial lhes havia imposto. A Assembleia dos Chefes Indígenas, realizada em várias edições, foi um dos fatores decisivos nesta ruptura. (...) Estas se tornaram a base de um processo de articulação, alianças e organização dos povos indígenas no Brasil” (Heck y Loebens, 2012a: 64).

Las asambleas comenzaron siendo locales y fueron ganando un ámbito cada vez más regional, para pasar después a asambleas nacionales o incluso encuentros de carácter internacional, sin abandonar hasta nuestros días la realización de las asambleas en los

propios territorios. “Formas próprias de organizações indígenas começam a ser ensaiadas e ganham corpo no processo de luta pela garantia de direitos” (Heck y Loebens, 2012a: 61).

En Brasil, algunas de estas asambleas locales de dirigentes indígenas fueron marcando el proceso de movilización en todo el país. En 1977 se suceden la Asamblea del pueblo Tapirapé, en Mato Grosso; la de las Ruínas de São Miguel das Missões, en Rio Grande do Sul; São Marcos, en Mato Grosso; o la Asamblea de *tuxauas* en Raposa Serra do Sol, Roraima (Heck *et alter* 2012b), siendo relevante en aquellos primeros momentos la articulación de esta movilización indígena con agencias como el CIMI¹⁴³.

En Perú, las primeras referencias nos conducen al año 1959, cuando “se reunieron cerca de 120 delegados indígenas para discutir el tema de sus tierras, ocupadas por entonces por la Peruvian Corporation” (Alberto Chirif, 2009: 1) en la localidad de Tsofani, en el río Perené. A lo largo de la década de 70, según los datos de Alberto Chirif, diversas organizaciones locales fueron configurándose, como la Organización Kichwaruna Wangurina/ORKIWAN, en el río Napo, o el Consejo Aguaruna Huambisa/CAH en el alto Marañón. Más abajo, la central de Comunidades Nativas de la Selva Central/CECONSEC o la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali/FECONAU.

Para la mayor parte de las sociedades indígenas amazónicas, como nos dice Oscar Espinosa (2014) y nos apuntaba anteriormente Alberto Chirif, la creación de unidades políticas supracomunales es un fenómeno muy reciente, como tampoco eran propias las lógicas de planificación estratégica que hoy permean necesariamente muchas de las organizaciones formales. Esto nos permite decir que el proceso de transformación social y política de los grupos étnicos en estas últimas décadas llevó consigo la constitución de nuevas significaciones organizativas y nuevas comunidades políticas en un movimiento que les ha permitido, con mucha eficacia, ocupar un espacio propio y situar sus demandas en relación a los dos imaginarios externos de los que hablábamos anteriormente: el desarrollista y el ambientalista.

El reconocimiento formal de los territorios indígenas incluyó, en numerosas ocasiones, estrategias de auto-demarcación o auto-delimitación, delante de la morosidad o ausencia del Estado. Las estrategias de auto-demarcación se ejercían en el terreno y con participación comunitaria. Podían incluir acciones de marcación física de límites con

¹⁴³ El Cimi tuvo un papel destacado en el apoyo a los pueblos indígenas para la realización de las asambleas que se iban multiplicando por todo el país a lo largo de la década de 70, posibilitando incluso algunos encuentros de carácter regional o nacional que permitieron intercambios entre diversos pueblos, divididos hasta entonces por distancias culturales, lingüísticas o geográficas (2012: 157). Su apoyo también fue significativo en la movilización indígena contra el llamado decreto de “emancipación” que el Estado brasileño promovió en 1978 o en la participación indígena en el proceso constituyente que desembocó en la Constitución Federal de 1988.

marcas visibles o de control de las entradas y salidas de personas extrañas a los territorios comunitarios.

En los últimos años también se han desarrollado otras estrategias vinculadas al propio mapeo del territorio por parte de la comunidad o elaboración de *contra-mapas* (Offen, 2009). Consiste en la elaboración de los propios mapas del territorio por parte de la comunidad, a partir de sus propias perspectivas y sistemas de significación del espacio. La propia elaboración del mapa ya se constituye, frecuentemente, en un proceso social de fuerte politización y conciencia de autoafirmación étnica como grupo. En el trabajo se reproducen los sistemas culturales de significación, la identificación de lugares-con-significado y la cohesión interna. Si normalmente los mapas han sido instrumentos empleados por quienes detienen el poder - para constituir realidades geográficas traspasadas por las relaciones de poder - también pueden convertirse en un instrumento de emancipación para grupos sociales en defensa de su territorio. Los *contra-mapas* se han convertido en muchas ocasiones en instrumentos para la reivindicación política y jurídica del derecho territorial, así como mecanismos de autoafirmación identitaria¹⁴⁴.

En pocos años, la movilización indígena consiguió una visibilidad internacional muy importante, superando la negación que encontraban dentro de sus propios países y la opacidad de los regímenes militares de la época. Manuela Carneiro da Cunha (1987) registra la I Conferencia Internacional de pueblos indígenas, que se realizó en Canadá en 1975, con representantes indígenas procedentes de 19 países. En dicha Conferencia, entre las conclusiones, ya se formularon claramente las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus territorios y los bienes naturales en ellos existentes, así como se instaba a todos los gobiernos a “reconhecer os direitos económicos, culturais, políticos e sociais dos indígenas, tanto como seres humanos individuais quanto como grupos” (1987: 181). Efectivamente, el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos - habiéndose garantizado los individuales - en los marcos normativos ha sido una de las principales contribuciones y conquistas de los pueblos indígenas.

El número de organizaciones indígenas va a aumentar a partir de ese momento y su naturaleza va a ir pasando de entidades reivindicativas ante el Estado y la sociedad a entidades que aspiran a asumir responsabilidades de gestión de proyectos, modificándose también el perfil de dirigencias. Las organizaciones indígenas adoptan un rol de intermediación necesaria con las nuevas exigencias de interacción con las agencias estatales y las políticas públicas, o con los nuevos actores globales interesados en las demandas indígenas, y para ello van a necesitar nuevos interlocutores que

¹⁴⁴ En la actualidad, diversas organizaciones sociales y Universidades desarrollan proyectos de mapeo junto a ‘pueblos indígenas y comunidades tradicionales en la Amazonia afectadas por conflictos socioambientales e implicadas en luchas por el reconocimiento del derecho territorial. Entre estas iniciativas, destaca el Proyecto Nova Cartografia Social da Amazônia/PNCSA, desarrollado por las Universidades Federales de Amazonas y Pará, en Brasil: <<http://novacartografiasocial.com/>>.

dispongan de mayores herramientas – técnicas, de conocimiento y de comprensión – de las nuevas exigencias.

Actualmente, el movimiento indígena en la Amazonia se configura por un entramado de organizaciones locales y regionales diversas. Una descripción exhaustiva de todas ellas a nivel amazónico excedería las posibilidades de este trabajo, principalmente en el nivel de las organizaciones locales y regionales. Podemos destacar algunas de las organizaciones que representan espacios de convergencia de entidades locales, y que asumieron un mayor peso en el llamado espacio público pan-amazónico.

En Brasil, entidades como el Conselho Indígena de Roraima/CIR, la Associação Hutukara Yanomami o la Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro/FOIRN, entre muchas otras, se asocian en la Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira/COIAB.

En Perú, ya en la década de 80 fueron surgiendo entidades como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana/AIDSEP o la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes/FENAMAD. En Bolivia destaca el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia – CONAMAQ O LA Confederación DE Pueblos Indígenas de Bolivia/CIDOB.

En Venezuela, en el Estado de Amazonas destaca la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas/ORPIA. En Colombia está la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana/OPIAC y en Ecuador se debe destacar la configuración de la Federación Shuar y su contribución con la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana/CONFENIAE y la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador/CONAIE.

La mayor parte de estas organizaciones, junto a otras, configuraron un espacio común en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica/COICA. Todo este dinamismo organizativo no está exento de divergencias internas y dificultades para la gestión política de toda la diversidad étnica que representan. A ello se le une la necesidad de lidiar con estructuras organizativas, administrativas y de gestión de recursos ajenas a las propias formas étnicas implicadas. La necesidad de articular, a diversas escalas, los relatos de afirmación étnica y territorial de los pueblos indígenas de la región amazónica y de formular identidades institucionales para los campos interculturales y multiactoriales existentes en la región, motivó la búsqueda de estas modalidades organizativas. En la última década, las organizaciones indígenas confluyen también con otros movimientos sociales y comunidades tradicionales en espacios como el Foro Social Panamazónico/FSPA¹⁴⁵, desde el cual se intenta elaborar la agenda propia alternativa en el espacio público pan-amazónico.

¹⁴⁵ En 2017 tendrá lugar la 8ª edición del FSPA, en la ciudad de Tarapoto, Perú. Información institucional en: <<http://www.forosocialpanamazonico.com/>>.

Capítulo 7

Brasil, construcción de un Estado

La tercera escala de análisis que nos proponemos corresponde al ámbito propio del Estado-nación que, en nuestro caso, se refiere a Brasil, incorporado a la independencia y al escenario moderno-europeo de los Estados territoriales soberanos a partir de los primeros años del siglo XIX, después de acoger temporalmente como colonia la sede de la Corona portuguesa. La especificidad de la empresa colonial lusa, las particularidades de los procesos históricos que permearon su desenlace como Estado y la magnitud del territorio brasileño le conceden un lugar de destaque dentro de la cartografía social de América del Sur.

Brasil es responsable por el 65% del espacio amazónico y en el seno de esa región norte se localiza la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, escala local de nuestro trabajo. Desde la lógica del análisis de sistema-mundo, el Estado brasileño ejerce así la mediación política entre las localidades y las dinámicas globales que se gestan en escalas mayores. La ecuación que se da entre la política indigenista - en el sentido de un conjunto de normas y mediaciones que regulan la relación entre el Estado y su diversidad étnica - y las políticas económicas y de uso del espacio y de los bienes, generan el marco doméstico donde se dirimen conflictos socioambientales con base territorial como el que estamos analizando. Analizar ese contexto, sin perder la perspectiva de historicidad, es el objetivo de este Capítulo 7.

Para ello, en un primer momento vamos a recoger algunos datos históricos que nos develen cómo se dieron estas relaciones, analizando la elaboración de la política indigenista y territorial. Pondremos un mayor acento en los siglos XIX y XX, en los que Brasil vive como Estado independiente, y un mayor enfoque espacial sobre la región amazónica.

En un segundo momento, analizaremos el papel privilegiado que ha jugado el Estado brasileño en la nueva fase de expansión del modelo extractivo-exportador a inicios del siglo XXI, y que ha coincidido con una de las etapas políticas más significativas de la historia del país protagonizada por los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores.

En un tercer momento, analizaremos el papel singular que ha jugado, y continua jugando, el sector de la extracción minera en el actual momento económico de Brasil y cómo interfiere, de hecho, sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

7.1. Formación del Estado brasileño, pueblos indígenas y lucha por la tierra

La historia de la formación del Estado brasileño comienza a contarse, normalmente, a partir de la llegada de los portugueses en 1500 al litoral atlántico. Poco se sabe de la historia indígena de este lugar que hoy llamamos Brasil (Carneiro da Cunha, 1992), aunque las evidencias que la arqueología nos va ofreciendo nos permiten mensurar el tamaño del impacto que sobre estas sociedades ocasionó la empresa colonial portuguesa. Epidemias, enfermedades, guerras, confinamientos y explotación como mano de obra contribuyeron a diezmar una población que en aquellos momentos se situaba en torno a los 2 millones de personas (1992: 12).

La historiografía oficial nos propone una trama tejida por tres grandes períodos a partir de la llegada portuguesa: el período colonial, el período del Imperio y el período de la República. Estas tres grandes periodicidades son atravesadas, no obstante, por una heterogeneidad mucho mayor de procesos que se dieron a lo largo y ancho de su territorio. El fenómeno de la construcción de Brasil como un Estado es, posiblemente, uno de los más densos en el conjunto de América Latina. A efectos de nuestro trabajo, nos interesa conocer y comprender el papel que en él jugaron la empresa extractiva como expresión colonial del sistema-mundo moderno y la relación de la institución Estado con los pueblos indígenas, y cómo ambas se dieron de modo particular en la región norte amazónica, donde encontramos a Raposa Serra do Sol.

Es posible identificar dos procesos diferenciados en la empresa colonial portuguesa: de un lado, el que avanzó sobre el territorio del litoral atlántico, a partir de la llegada de los portugueses a Bahía; de otro lado, el que se gestó sobre el territorio amazónico (Pacheco de Oliveira, 2010). Aunque ambas empresas fueron regidas a partir de la misma metrópolis, no siguieron cursos semejantes y reprodujeron imágenes y dinámicas diversas. “Na colônia do Brasil os sítios ocupados pelos europeus iniciavam-se como fortificações e praças-fortes,, que abrigavam enclaves comerciais e ampliavam-se para os sertões com a implantação de engenhos e plantações (...) Ao contrário a exploração da Amazônia prosseguiu sobretudo pelas vias fluviais e por expedições pontuais, privilegiando a atividade extrativista (...) Em sua quase totalidade essa produção estava voltada para a exportação, não supondo necessariamente o estabelecimento no interior de praças-fortes e núcleos urbanos (...)” (2010: 27).

Como afirma Pacheco de Oliveira, la cuestión fundamental em la colonización de la Amazonía pasó por la explotación de la mano de obra indígena. “O fator econômico fundamental para a ocupação da Amazônia, tanto para as expedições extrativistas como para o estabelecimento de aldeamentos missionários, foi o trabalho indígena, chamado

pelo padre Antonio Vieira de ‘ouro vermelho’, sobre o qual foi erigida toda a riqueza da região” (Pacheco de Oliveira, 2010: 27).

7.1.1. Claves de la política indigenista en la formación del Estado brasileño

Desde la llegada de los portugueses al territorio que hoy llamamos Brasil se produjo una descomunal destrucción de la sociedad amerindia que habitaba la región hasta ese momento. El impacto de la presión colonial sobre estos pueblos desencadenó hechos muy diversos. Como señala Manuela Carneiro da Cunha (1992), es posible que se dieran al mismo tiempo, paradójicamente, fenómenos aparentemente contrapuestos de atomización étnica – acentuación de las diferencias y fragmentación cultural – y de agregación u homogeneización de grupos lingüísticamente diversos en nuevas unidades socioculturales más o menos compactas. Muchos otros grupos desaparecieron, otros se diseminaron y otros grupos se difuminaron etnicamente asumiendo, o asignándoseles, identidades mestizas diversas. “As densas populações que outrora tinham surpreendido os primeiros exploradores haviam sido destruídas ou tinham se retirado para locais menos acessíveis” (Schmink y Wood, 2012: 78). Estamos, por tanto, ante un fenómeno intenso de reconfiguración étnica y territorial.

Durante los tres primeros siglos de ocupación colonial, el principal objetivo portugués era la captura y regimentación de mano de obra indígena que era empleada bajo condiciones de esclavitud. Los índios eran sometidos a trabajos forzados o utilizados como guías y canoeros de los colonos para adentrarse en ambientes difíciles y desconocidos para éstos. En muchas otras ocasiones, los grupos indígenas fueron empleados como “fronteras vivas” para garantizar el control de un determinado territorio frente a una terceira agencia colonial europea. Por último, alianzas entre la Corona y algunos grupos indígenas conducían a conflictos interétnicos funcionales al avance colonial. En la perspectiva europea, la discusión sobre los índios se refería a su naturaleza humana o a su capacidad para la conversión a la fe europea y se traducían en la convicción sobre la inferioridad de estos grupos y la legitimidad de su dominio y sometimiento.

La esclavización de la población indígena hasta mitad del siglo XVIII solo era permitida legalmente bajo dos modalidades (Farage, 1991):

- a) en el caso de indios hechos prisioneros en *guerras justas*;
- b) o en el caso de aquellos obtenidos a través de operaciones de *rescate*.

En el primer caso, la clave era la aceptación de un concepto muy laxo de la “guerra justa”, dentro del cual se incluían guerras contra los infieles por causa de la fe, contra grupos que habían establecido alianzas con los enemigos de la Corona o para reducir el considerado “desenfreno moral” de los hábitos y costumbres indígenas. El segundo caso, el de los “rescates”, hacía referencia a la compra de aquellos prisioneros de guerra entre pueblos indígenas. Para ello, los portugueses lanzaban expediciones armadas

conocidas como “tropas de rescate”, de carácter privado, que negociaban con grupos indígenas la compra de sus prisioneros, denominándolas expediciones de *rescate*¹⁴⁶. Los indios *rescatados* debían la vida a quien les compraba y eran obligados a devolver ese precio como mano-de-obra por tiempo indeterminado.

En la segunda mitad del siglo XVII se desencadenan dos acontecimientos que hacen referencia ya a la cuestión territorial de los grupos indígenas, hasta ese momento poco presente. El primero de estos acontecimientos tendrá lugar en 1680, con la publicación de un *Alvará Regio*, en el que se hace referencia explícita a los derechos territoriales que tendrían los pueblos indígenas, derechos que les corresponderían por ser sus “primeros y naturales señores”. A dicha norma se atribuye la figura que ha venido a denominarse como *Indigenato* y que se considera, hasta nuestros días, marco fundamental de la tradición jurídica del Estado brasileño. A diferencia de la posesión u ocupación de un territorio, que puede venir dado por un título adquirido, el Indigenato se refiere a un derecho congénito que no depende de legitimación. La enunciación del derecho territorial de los pueblos indígenas connota una dimensión histórica que precede a la propia formación del Estado, lo que deriva en su carácter originario.

El segundo elemento territorial que se desencadena, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVII, es el del confinamiento de grupos indígenas en aldeas – o aldeamento – bajo supervisión y administración de particulares, militares o congregaciones religiosas. Es en este momento cuando la presencia de la agencia religiosa dentro de la empresa colonial se adensó con la figura de los aldeamentos administrados por los jesuitas. El aldeamento consistía en la concentración de indígenas en pequeñas y medias aldeas donde eran considerados libres y no podían ser esclavizados por particulares ni por el Estado. A cambio de esta protección, permanecían en estos núcleos semi-urbanos, absolutamente diferentes a los agrupamientos comunitarios propios de sus sociedades; en ellos tenían su primer contacto sistemático e institucionalizado con la enseñanza religiosa misionera y con los oficios diversos de agricultura, ganadería y otros. La expansión de los aldeamentos funcionó también como un modo de liberar espacio para el avance colonial, así como una fórmula de adiestramiento de mano de obra. A mitad del siglo XVIII se calculaba que cerca de 12.000 indígenas estarían concentrados en más de sesenta aldeas dirigidas por la Compañía de Jesús¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Las llamadas tropas de rescate pasaron a institucionalizarse y formalizarse después de haber seguido, durante años, padrones de clandestinidad o de empresas particulares. A los tradicionales promotores de operaciones de rescate se unieron formalmente representantes de congregaciones religiosas, cuyo papel era el de juzgar la legitimidad de esos rescates. También el propio Estado pasó a ser, a partir de 1688, actor principal de la operación como financiador - a través de la Hacienda Nacional - y como proveedor de esclavos rescatados y vendidos posteriormente, negocio del cual extraía importantes sumas de dinero.

¹⁴⁷ “Nas aldeias, os indígenas foram privados de sua identidade tribal sob a influência homogeneizadora dos missionários. Compelidos a se comunicar com os brancos e outros nativos na ‘língua geral’, ameríndios

Una nueva página se va a abrir con los cambios políticos que se van a producir en la primera mitad del siglo XVIII en la región norte. El nuevo Gobernador de Belem, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, y su hermano el Marqués de Pombal, inauguraron un nuevo momento político en la historia colonial. Un conjunto de leyes, conocidas como *leyes pombalinas*, determinaron la expropiación de las aldeas misionales de los jesuitas que pasaron a manos de la Corona bajo el pretexto de que fuese el poder público quien administrase y controlase el proceso de ocupación de la Amazonia; y, evidentemente, el mercado de las *drogas do sertão* y de la esclavización de los indios.

La época pombalina se impuso durante cuarenta años en la Amazonia. Desde el punto de vista de la política indigenista, esta época dejó el llamado Diretório dos Índios, que se constituyó como una de las principales referencias de la política asimilacionista del Estado brasileño - “com a imposição do português como língua oficial e a proibição de uso de línguas nativas ou da língua geral (Pacheco de Oliveira, 2010: 29) - retomada después en el siglo XIX por el Imperio ya independiente y sus intelectuales políticos.

Los primeros compases del siglo XIX van a saludar la independencia de Brasil, primero bajo la fórmula de un Imperio real y posteriormente como República. El nuevo Estado se verá obligado a abordar, ahora ya desde el proyecto nacional, su relación con los pueblos indígenas. A pesar de que una Carta Regia de 1798 había dejado sin efectos el Directorio pombalino del siglo XVIII, sus perspectivas integracionistas aún permanecían en el imaginario de la nueva élite económica y política. Más allá de eso, no había más elementos que apuntasen la existencia de una política indigenista de carácter general.

Como en otros casos, el nuevo Estado va a tener como una de sus primeras tareas la construcción de un relato identitario que vertebrase la sociedad nacional en torno a una memoria colectiva, un presente compartido y un futuro a ser construido. En esa invención de la narrativa identitaria, la figura idealizada del indígena del pasado – nunca del indígena presente en ese momento – se va a incorporar como uno de los símbolos nacionales, apoyados en la literaturización romántica de la figura del indígena en perfecto equilibrio con el ambiente que le rodea. De ese modo, la figura idealizada del indígena se incorpora al relato nacional, mientras que la presencia del indio-real, concreto y contemporáneo, se considera un fenómeno transitorio, vinculado con la imagen del *indio bravo* (Pacheco de Oliveira 2010: 33), y se continúa explotando su mano de obra y las tierras por ellos habitadas.

A partir de la mitad del siglo XIX se evidencia que hay un desplazamiento del interés del Estado en lo que se refiere a los pueblos indígenas: si durante el período colonial, la prioridad había sido la regimentación de la mano de obra indígena, ahora se pone el acento en el control nacional sobre las tierras que habitan: “(...) com efeito, a cobiça se

de diversas tribos foram sendo, através do tempo, tratados genericamente como ‘tapuios’”. (Schmink y Wood, 2012: 77).

desloca do trabalho para as terras indígenas [cf Farage e Santilli]. Um século mais tarde deslocar-se-á novamente: do solo, passará para o subsolo indígena” (Carneiro da Cunha, 1992: 16). Interesaba al nuevo proyecto nacional poner orden en el control territorial y garantizar el acceso del Estado y del capital nacional a los bienes existentes en los territorios indígenas.

Obsérvese que entre las tierras codiciadas ahora por el Imperio estaban, de modo particular, aquellas que correspondían a las antiguas aldeas coloniales o espacios de confinamiento, que también estaban siendo reivindicadas por los grupos indígenas que las habían habitado durante el período colonial. De algún modo, como afirma M^a Regina Celestino de Almeida (2012), los grupos que habían sido aldeados pretendían mantener las condiciones de comunión étnica, para lo cual la reivindicación del espacio de las aldeas se tornaba estratégica porque sobre ellas regía el reconocimiento de derechos. “Foi principalmente em torno da ação política comum pela manutenção desses direitos que esas identidades, a meu ver, se mantiveram e até se fortaleceram nesse período, contra as pressões que se faziam no sentido de reconhecê-los como mestiços. Unificava-os a ideia de pertencer à aldeia” (2012: 31). Lo que vale a decir que la experiencia de las aldeas había configurado un espacio de contacto interétnico, claramente forzado, en el cual algunos grupos interpretaron que se garantizaban las condiciones para uso de los precarios derechos reconocidos en la normativa de la época.

En todo caso, volviendo al argumento anterior, el nuevo Estado estaba más interesado en ese momento en el control de los territorios. Una estrategia clave para ello era la política de la negación e invisibilización de los grupos indígenas en el sentido de sociedades diversas. Los indios interesaban como mano de obra nacional, lo que legitimaba una política asimilacionista e integracionista bajo parámetros paternalistas y de tutela: era lo mejor para estos grupos su incorporación progresiva a la sociedad nacional como mano de obra.

La existencia de indios, para el Imperio, era una situación histórica transitoria, pues el devenir los conducía progresivamente hacia un mestizaje étnico y una integración definitiva en el proyecto nacional; es decir, hacia su desaparición, anunciada paternalistamente por la nueva élite. Existía, no obstante, una discusión sobre si la integración necesaria y deseada debía ser promovida de modo violento o de modo pacífico. Se ofrecía a los indios que escogiesen entre el “paso a la civilización” o el “exterminio” y la desaparición. Alimentaba esta discusión la clasificación que se hacía en la época entre los indios bravos y los indios mansos.

Una de las figuras políticas fundamentales del nuevo Imperio, José Bonifacio de Andrade e Silva, se mostraba partidario de una aproximación pacífica a los indios para conseguir su integración. Esa es la propuesta que presentó a la Asamblea Constituyente en 1823 bajo el título “Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil” (Monteiro Machado, 2006: 48). La Constitución de 1824 también determinó un aspecto

que va a resultar fundamental en la configuración de la política indigenista del Imperio: la descentralización de tal política, delegando en las oligarquías territoriales la responsabilidad por la relación con los grupos indígenas.

En 1845 se formula la primera norma del Imperio dirigida sustancialmente a regular la relación con los pueblos indígenas con carácter general. Se trata del *Regulamento das Missões* que decretaba el derecho de los indios a la tierra en las antiguas aldeas coloniales. No obstante, y siguiendo la lógica de que la existencia de los indios era una condición transitoria condenada a la extinción, el propio Reglamento establecía que este derecho al usufructo de sus tierras se les reconocía “até que atingissem o ‘estado de civilização’, quando o governo imperial poderia incluí-los no pleno gozo dos direitos de todos os cidadãos” (Celestino de Almeida, 2012: 33).

Cinco años más tarde, el Estado promulgaba la Ley de Tierras de 1850, dirigida a un ordenamiento general de la tenencia y uso de las tierras en el Imperio, y donde se recogía una reserva de tierras para la “colonización indígena”. Ambos textos mantienen la perspectiva asimilacionista e integracionista que va a marcar la política indigenista brasileña desde el Directorio pombalino hasta la Constitución de 1988.

Un nuevo proceso constituyente va a tener lugar en 1890. En esta ocasión, un grupo de constituyentes, identificados como positivistas (Carneiro da Cunha, 1987), van a formular una propuesta en referencia a los pueblos indígenas. Consideran estos intelectuales a estos pueblos “salvajes” como *naciones* soberanas y libres, cuyos territorios deberían ser respetados escrupulosamente y su demarcación debería constituir una de las principales y primeras tareas de la nueva República. Finalmente, la Constitución de 1891 no recogió estas propuestas; incluso se caracterizó por la omisión general que hace de la cuestión indígena (1987: 74). Contribuyó, al contrario, a generar una confusión – que permanece en cierto sentido en nuestros días – al señalar los aldeamentos indígenas extintos dentro de las tierras *devolutas* que se entregaban a la administración de los Estados de la federación. De ese modo, los territorios aldeados no extintos y aquellos de ocupación anterior de los pueblos indígenas quedaron a la suerte de un cierto limbo interpretativo de la norma.

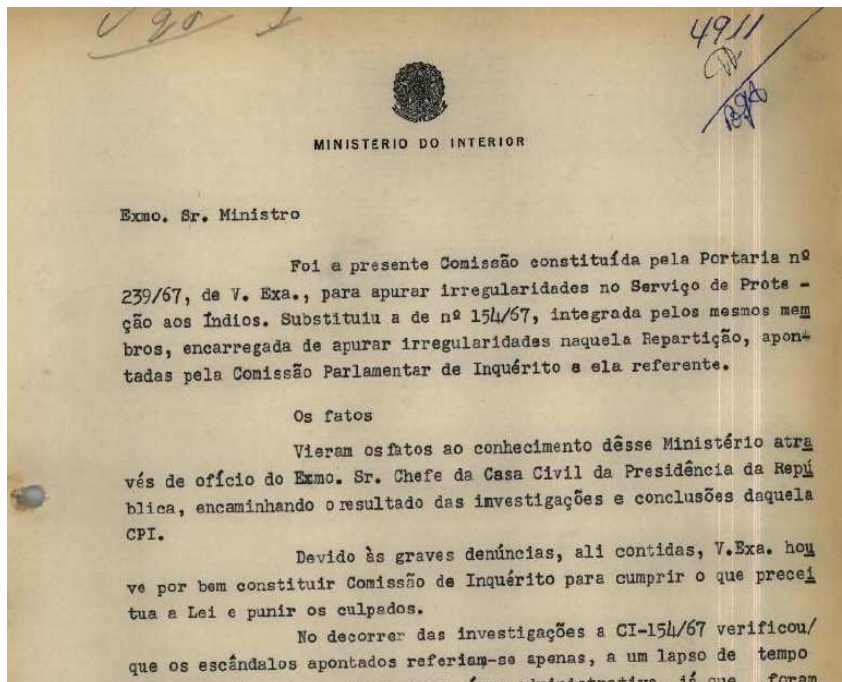
A inicios del siglo XX, en medio de convulsas discusiones sobre la actitud – violenta o amigable – que el Estado debería tomar con los pueblos indígenas, como casi cien años atrás, el gobierno brasileño crea el Serviço de Proteção ao Índio – SPI, bajo la orientación del Marechal Rondon. El SPI realizará durante las primeras décadas expediciones orientadas a contactar con los grupos indígenas ofreciendo un soporte para la demarcación física de las tierras sobre las que tenían derecho a usufruir en exclusividad. La lógica que guiaba esta actuación confirmaba, sin embargo, la percepción asimilacionista y de la tutela paternalista por parte del Estado sobre aquellos a los que se consideraba necesitados de ella. “Para o indigenismo rondoniano, o índio era um ser primitivo, que ainda desconhecia o homem branco, sendo sempre pensado como

ameaçado de extinção por sua difícil adaptação ao mundo contemporâneo. A atenção do indigenismo se dirigiu exclusivamente ao *índio bravo* (...) sobre o qual se propunha a executar uma tutela protecionista, que o viesse a incorporar como um brasileiro” (Pacheco de Oliveira, 2010: 33, destaque em cursiva em texto original).

La Constitución de 1934 va a ser la primera que aborde de un modo específico la situación de los pueblos indígenas dentro de la nueva república. Destacan en este texto constitucional dos cuestiones fundamentales. La primera es la manutención del derecho original de los grupos étnicos a los territorios que habitan. La segunda se refiere a que las cuestiones derivadas de la relación con los pueblos indígenas pasa a ser competencia de la Unión, y no más de los Estados, corrigiendo así lo determinado cien años atrás en la Constitución imperial de 1834. A pesar de todo ello, se mantiene una perspectiva integracionista y asimiladora de la diversidad étnica, legitimando desde el espacio público la misión catequizadora y civilizatoria de la sociedad nacional respecto de los grupos indígenas existentes.

En abril de 1964 se inicia un período de dictadura militar en Brasil que, evidentemente, va a marcar la realidad social, política y económica del país y, del mismo modo, la relación del proyecto nacional con los pueblos indígenas. Una de las principales medidas fue la extinción del Servicio de Protección a los Indios-SPI, que venía actuando como agencia indigenista del Estado desde inicios del siglo XX. Su ineficacia administrativa y, principalmente, la acción de violencia institucional contra los pueblos indígenas ejercida a partir de los Puestos del SPI en regiones habitadas por comunidades indígenas, se habían instalado perversamente en el modo de hacer del organismo. En 2013 se hizo público el llamado “Relatorio Figueiredo”, un informe de 1967 distribuido en 30 volúmenes, resultado de una investigación interna que había descubierto y registrado los casos de violencia institucional ejercida desde el SPI hacia los pueblos indígenas. Este Informe había permanecido reservado durante 45 años.

Figura 9. Carta de encabezamiento del Informe Figueiredo, en 1967, dirigida al Ministro de la Justicia de la época.



Una vez extinto el SPI, el gobierno militar creó en 1967 la Fundação Nacional do Índio/ FUNAI, que sigue siendo en nuestros días el órgano indigenista del Gobierno Federal, integrado en el Ministerio de la Justicia. La actitud del Estado hacia los pueblos indígenas partía de las mismas premisas que permearon el trabajo del SPI durante seis décadas: a) la idea de que la figura del indio era “transitoria” en la sociedad nacional, justificando una política neo-colonial marcada por la perspectiva integracionista; y b) la lógica de la tutela de los indios por parte del Estado.

Como veremos en el próximo capítulo, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no se pensaba incompatible ni prioritario, en el contexto del régimen militar, delante del avance de las fronteras económicas desarrollistas sobre buena parte de la región norte y nordeste del país. La orientación era la delimitación de pequeños territorios para usufructo de la comunidad indígena, en una semántica de *colonia* indígena que nos recuerda al *Regulamento das Missões* de 1845. El período de la dictadura militar va a concluir en la década de 80 con la retomada de la institucionalidad democrática en el país y la nueva Constitución Federal de 1988, aún vigente y de la que posteriormente hablaremos, abrió un nuevo momento histórico en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas donde se supera la ideología de la tutela y se reconoce a los grupos étnicos como sujetos históricos y políticos.

7.1.2. De las drogas del sertão y la madera que llora: colonización y territorialidad en la Amazonia brasileña

En el caso de la región amazónica, la colonización por parte de los portugueses solamente se inició a inicios del siglo XVII, cien años después de la llegada de Pedro Cabral al litoral atlántico brasileño. Una aproximación a cómo se dio este proceso de ocupación nos permite identificar algunas características fundamentales (Schmink, M. y Wood, Ch., 2012: 77; Pacheco de Oliveira, 2010):

- las primeras incursiones ya tuvieron como móvil la búsqueda de especias, raíces y frutos silvestres, maderas nobles, frutas y cazas (principalmente *peixe-boi*, guepardos y tortugas gigantes);
- la ocupación solo fue posible por la explotación de la mano de obra indígena como esclava conseguida en guerras o expediciones de *rescate*;
- actores diversos como expedicionarios particulares, órdenes religiosas, militares y la propia Corona tuvieron un papel fundamental en la empresa;
- hubo, a lo largo de este proceso, ciclos expansivos extractivistas claramente marcados;
- más huidizo a los análisis, los períodos inter-cíclicos o intermedios representaron tiempos de gradual transformación de algunas de las características que aún persisten en la sociedad amazónica.

Nádia Farage elaboró un minucioso y documentado estudio de la ocupación colonial de la región amazónica brasileña en el que demuestra cómo fue, precisamente, la relación de la economía extractivista unida a la mano de obra indígena lo que caracterizó la región como un “área colonial periférica” (Farage, 1991: 25)¹⁴⁸.

El proceso de ocupación del entonces Estado do Maranhão e Grão Pará¹⁴⁹ se desencadenó a partir de la segunda década del siglo XVII. Al igual que en las Capitanías Hereditarias que habían dividido el litoral brasileño en franjas territoriales, la empresa colonial de la época intentó instalar en el Grão Pará el sistema de *plantación* agrícola. El intento no dio buenos resultados. Según apunta Farage, la ausencia de inversiones importantes de capital, el interés de la burguesía metropolitana por el azúcar nordestino y las dificultades económicas para traer mano de obra esclava negra fueron las razones fundamentales para que la actividad agrícola no se implantase en la región del mismo modo que en otros lugares. Por ello, y por un cierto tiempo, la región más occidental de la Amazonia permaneció bajo un escaso interés del Estado y de los nuevos colonos. Pero Nadia Farage también apunta otro factor fundamental que terminó contribuyendo a que la actividad agrícola no se expandiese en la región: el inicio de la actividad extractiva.

¹⁴⁸ La autora toma el concepto de “área colonial periférica” de Ciro Cardoso en su libro *Economia e Sociedade em Áreas Coloniais Periféricas: Guyana Francesa e Pará, 1750-1817*,.

¹⁴⁹ Creado en 1621 por la Corona portuguesa, abarcaba toda la Amazonia portuguesa en la época, sumando los actuales estados nordestinos de Ceará y Piauí.

Los productos que podían conseguirse en el valle amazónico por extracción eran conocidos como las *drogas do sertão*. Se trataba de un conjunto de frutos y raíces silvestres entre los que se encontraban canela, cacao, raíces aromáticas, aceites de palmas, óleos naturales, zarzaparrilla, semillas, plantas medicinales, vainilla, urucum¹⁵⁰, clavo, *andiroba*, jengibre o *piçaba*¹⁵¹. Farage incluye también los productos de la pesca y de la *viração* de las tortugas, muy apreciados en el consumo interno de la colonia.

Como la actividad extractiva era estacional y no generaba bienes de troca, difícilmente se sujetaba a las exigencias de demanda estable que imponían los traficantes de esclavos negros. Por eso el flujo de esclavos negros para la región fue muy reducido si comparado con otras zonas de la colonia portuguesa. Esta situación obligaba a la sociedad colonial a centrar sus esfuerzos en el control y esclavización de la población indígena como exclusiva mano de obra. Por otro lado, ellos eran los que mejor conocían la región, siendo estratégicos para servicios que resultaban fundamentales en la cotidianeidad de los colonos, poco acostumbrados a las condiciones del entorno. Así, los indígenas eran utilizados como guías, pescadores, cazadores, barqueros o porteadores. Por tanto, el control sobre el sistema de esclavización de los indígenas fue un elemento crucial para el éxito de la empresa extractiva y la ocupación territorial. Para Nádia Farage el control de la mano de obra indígena “é o fio que tece a história política do Maranhão e Grão-Pará” (Farage, 1991:26).

En un cierto momento, los colonos civiles y militares consideraron que el control que los misioneros tenían sobre la población indígena era excesivo y que limitaba en exceso sus posibilidades de regimentar mano de obra. Además, la mano de obra esclava en el Estado de Grão Pará y Maranhão también estaba disminuyendo como consecuencia de la sobreexplotación y de la destructora epidemia de viruela que asoló las poblaciones de indígenas y negros entre 1754 y 1755.

Con la caída del sistema pombalino, del que ya hablamos anteriormente, buena parte de los grupos indígenas que habían sobrevivido y continuaban confinados en aldeas se dispersaron por los ríos y lagos de la cuenca amazónica. Las décadas de reclusión habían incorporado hábitos de consumo en muchos de los grupos indígenas que les obligó a mantener las relaciones de vínculo con el mercado. Los colonos menores se convirtieron en comerciantes de ríos, lo que dio origen a una figura que, como veremos más adelante, será fundamental en el desarrollo del auge cauchero: el *regatão*¹⁵².

¹⁵⁰ Fruto con propiedades alimenticias y utilizado normalmente como colorante natural. A su vez, es utilizado de modo muy extenso para extraer su tintura natural de color rojo o bermellón y que se aplica en tinturas de tejidos o grafía corporal por muchos pueblos indígenas.

¹⁵¹ Fibra extraída de una especie de palmera y que es utilizada actualmente para la fabricación de escobas y cepillos.

¹⁵² Este sistema de relaciones que ligaba a los grupos del interior con el mercado de las pequeñas y medianas urbes fue fortaleciendo un tipo de asentamiento pescador y extractivo en las proximidades de los grandes ríos. Quedaba establecida así la cadena necesaria que permitiría, a partir de la década de 1850, incorporar a la Amazonia definitivamente en el sistema extractivo-exportador latino-americano.

Los siglos XIX y XX se han caracterizado por la expansión de fronteras económicas que se direccionaban, por primera vez con un nivel muy sistematizado de organización, a la exportación de bienes naturales desde la Amazonia a los principales centros económicos del mundo. Entre ellas, destacamos la extracción del caucho y la expansión de la minería ilegal de oro y diamantes.

En referencia a la extracción cauchera, los pueblos indígenas ya conocían el *látex* antes del interés mostrado por la sociedad colonial-nacional. Según lo que algunos autores registran, la palabra *caucho* procede precisamente del nombre que los indígenas daban a esta goma elástica, llamándola *Cahuachu*, *Cauchu* o *Cauchuc*, que significa “madera que llora” (Pinedo y Calsina, 2014: 11). Ellos extraían esta resina de diversas plantas, no solamente de la *siringa* o *seringa*¹⁵³, que será la que protagonice el *boom* del caucho desde mediados de siglo XIX hasta finales del siglo XX.

El primer momento de expansión de la frontera cauchera sobre la Amazonia brasileña se va a producir en el último cuarto del siglo XIX. Este proceso se promovía con fuerza desde Londres y Nueva York por agentes financieros “que estabeleceram seus representantes em Belem e Manaus, cujas casas exportadoras controlavam uma miríade de rede de créditos, que se estendiam aos mais distantes seringais do Madeira, do Purus e do Alto Amazonas” (Pacheco de Oliveira, 2010: 36), próximos ya a las fronteras con Bolivia, Perú y Colombia. Este primer periodo de auge de la extracción cauchera en la Amazonia ocasionó un desplazamiento macizo de un enorme contingente poblacional. El flujo migratorio del Nordeste a la Amazonia en la segunda mitad del siglo XIX llegó a centenas de millares de familias, unas animadas por las promesas de mejoras de vida y otras huyendo de una de las mayores secas vividas en el Nordeste y que coincidió con todo el último cuarto de siglo (Schmick y Wood, 2012). Las condiciones de vida que se llegaba a tener dentro de las zonas caucheras eran de explotación - precisamente en el periodo en que Brasil abolía la esclavitud formal – impidiendo la inmovilidad de la población a través del sistema de deudas “adquiridas”.

¹⁵³ Hevea Brasiliensis, nombre científico de una especie endógena de árbol amazónico, de la familia de las euforbiáceas.

Cuadro 9. Características del sistema de extracción del caucho en la Amazonia brasileña, siglo XIX.

En Brasil, el extractivismo cauchero se asentó sobre la estructura pre-existente del *regatão*, tejiendo una cadena extractiva conocida regionalmente como *sistema de aviamento*.

El extremo de la red estaba formado por el *seringueiro*, que era el que extraía directamente la resina del árbol. En los primeros momentos, entre 1825 y 1850 (Schmick y Wood, 2012), se trataba de familias que vivían en locales próximos a los *seringales*. La mujer y los hijos mayores podían dedicarse a actividades agrícolas, de caza y de pesca suficientes para el autosustento, mientras que el hombre se dedicaba a la extracción de la *seringa*. A partir de 1850, y con el aumento de la demanda y la expansión de la actividad, la población *seringueira* se fue constituyendo por hombres que llegaban a la Amazonia procedentes del Nordeste del país, normalmente sin familia; eran obligados a dedicarse exclusivamente a la *seringa*, sin poder desarrollar otras actividades productivas. El *seringueiro* todos los días se desplazaba hasta el local que le había sido asignado y allí recorría los “senderos” de la *seringa*, dispuestos en forma circular; en un primer recorrido por la mañana hacía el corte en el árbol y dejaba en el mismo corte una especie de vasija que recogía la resina lechosa durante toda la mañana; ya por la tarde, en un segundo recorrido, el *seringueiro* iba recogiendo las vasijas, reuniendo el látex extraído y ahumándolo hasta convertirlo en una bola.

Al concluir la actividad, el *seringueiro* se acercaba con el producto al segundo escalón de la cadena, el *barracão*, una especie de puesto de abastecimiento de enseres y productos básicos que era administrado por el “dueño” del *seringal* o por algún encargado de éste. En el *barracão* se cambiaba el caucho recogido durante el día por productos básicos. El sistema de cambio no era estable, sino que dependía del patrón, por lo que se garantizaba un permanente endeudamiento entre el *seringueiro* y su responsable directo. Dado el aislamiento en que se vivía y las dificultades extremas para generar relaciones de solidaridad o de unidad entre los trabajadores, no parecía aconsejable protestar o rebelarse contra las condiciones de cambio. Al contrario, mantener una buena relación con el dueño del *seringal* era considerado como una cierta seguridad. Lo contrario solía acabar en acciones coactivas o de violencia.

El dueño del *barracão* intercambiaba las bolas de caucho con el tercer eslabón de la cadena, formado por los comerciantes de río o comercios de suministros, también llamados *aviadores* (de ahí el sistema de *aviamento*), situados normalmente en pequeñas y medias poblaciones. También esta relación se establecía sobre la base del préstamo que nunca se termina de cubrir, aumentando las deudas de uno respecto del otro a medida que se asciende en la cadena extractiva. Los comerciantes de río trataban, a su vez, con otros intermediarios hasta llegar a los señores de las Casas de Exportación en ciudades grandes como Belem y responsables de enviar el producto a comerciantes estadounidenses o europeos que, finalmente, vendían el caucho a las florecientes industrias.

Bajo esta nueva modalidad económica, muchas veces la población indígena fue considerada un obstáculo, paradójicamente casi como invasores de sus propias tierras. “O seu extermínio, através de expedições punitivas chamadas de *correrías*, representava de fato uma solução mais corriqueira para o problema” (Pacheco de Oliveira, 2010: 36, destacado em cursiva em texto original).

El declive del auge cauchero se produce en la segunda década del siglo XX. De un lado, la demanda por caucho no paraba de crecer y, aunque eso hacía aumentar también el precio del producto, el sistema de *aviamento* no conseguía responder tan rápidamente. Al mismo tiempo, comenzó la extracción de caucho en Asia y esto será el detonante para que el sistema extractivo-exportador se desplace ferozmente hacia los nuevos nichos que, por otra parte, ofrecían el caucho a un precio menor. Diversos de los factores analizados en el primer capítulo se concentraron aquí para determinar el fin del auge cauchero en la Amazonia y su inicio en Asia: desequilibrio entre oferta y demanda, descubrimiento de nuevas fuentes, fluctuaciones competitivas de precios. De un día para otro la situación se transformó en la región.

Un nuevo ciclo cauchero se desarrollaría durante las décadas de 40 y 50, acompañando los cambios en la demanda mundial condicionados por la I Guerra Mundial. Una vez más, la seringa amazónica va a entrar en la hoja de cálculos de los principales centros políticos del momento. De este nuevo ciclo del caucho en Brasil va a configurarse uno de los sujetos colectivos más importantes de las décadas de 70 y 80: el movimiento de los *seringueiros*.

En plena dictadura militar, los trabajadores de la seringa, particularmente en la región suroeste de la Amazonia brasileña - Estados de Acre y Rondonia - comenzaron a organizarse colectivamente, determinados a establecer un proyecto de vida familiar y comunitario basado en la extracción sustentable de productos de la floresta. Al calor de la emergencia política en Brasil, los *seringueiros* fueron constituyendo sus propios sindicatos y alimentaron su consciencia política junto a los nuevos actores de la época, como el Partido dos Trabalhadores - PT o la Central Única dos Trabalhadores - CUT.

Destacaba, al mismo tiempo, una mayor intensidad simbólica en su identidad colectiva como comunidades extractivas amazónicas, subordinados hasta ese momento a las ondas expansivas del capital en la misma medida que las comunidades indígenas o las ribereñas. Los conflictos por el control de la tierra se estaban recrudeciendo en esta época en la Amazonia. Los *seringueiros* sabían que mantener su proyecto de vida en la floresta pasaba por aspectos fundamentales como: organización colectiva; defensa de las tierras donde habitaban; y alianza con otros sectores, como los pueblos indígenas, campesinos, sindicatos, ambientalistas y académicos.

La figura de Chico Mendes quedará impresa en la grafía histórica de la Amazonia. Hijo de nordestinos que llegaron a Acre en el periodo entre guerras para actuar en la *seringa*, Chico Mendes se constituyó en un referente político y sindical en la segunda mitad de los 70 y casi toda la década de 80: hasta diciembre de 1988 en que fue asesinado¹⁵⁴.

¹⁵⁴ Ocho años antes habían asesinado a su mejor amigo y compañero de lucha sindical y seringueira, Wilson Pinheiro.

Fue uno de los cofundadores del Partido de los Trabajadores en la Amazonia Occidental. Participaba en las comunidades eclesiales de base-CEBs de la Iglesia Católica y lideró la organización sindical de los *seringueiros* y el dialogo de alianza que estableció con el movimiento indígena¹⁵⁵. Fueron los tiempos de los *empates*, reuniones pacíficas de hombres para impedir la deforestación; durante los empates, los *seringueiros* alertaban a los trabajadores contratados por los madereros y *fazendeiros* sobre las consecuencias de la deforestación y les invitaban a sumarse al movimiento en defensa de la floresta.

Desde la perspectiva territorial, la economía del caucho incorpora territorios hasta ese momento poco conocidos a la dinámica económica global. Los comportamientos territoriales van desde el desplazamiento de comunidades indígenas; la ocupación de pedazos de floresta; la reconfiguración espacial con las figuras de “colocaciones”, “estradas” o, finalmente, Reservas Extractivistas; la ocupación de los ríos como medios de comunicación dentro del sistema de *aviamento*. Cuando el auge cauchero entra en declive, las transformaciones ocasionadas se quedan y se convierten en las condiciones de partida para nuevas alternativas de convivencia.

Ya en referencia a la expansión de la minería ilegal de oro y diamantes, En Brasil, el inicio de la fase aguda de minería ilegal en la Amazonia se sitúa en las décadas de 1940 y 1950. Para entonces, ya se estimaba la presencia de más de 160.000 garimpeiros en la región (Schmink y Wood, 2012). La intensidad de las operaciones se habían concentrado en la zona de Rondônia, siguiendo yacimientos de estaño, pero el boom definitivo se vinculará al descubrimiento en 1958 de los yacimientos de oro en la región de Tapajós (Mathis, 1997) y la extensión moderada a otros municipios de Pará como Oriximiná, São Félix do Xingu o Altamira.

Una de las características de la minería ilegal en la Amazonia es su fuerte presencia en las zonas de fronteras nacionales. En estas regiones se da un flujo migratorio permanente de mineros de un lado a otro de las fronteras y se dan las condiciones para una mayor conexión de la minería con otras actividades ilícitas como el contrabando o la trata de personas. Al mismo tiempo, los impactos ocasionados en cursos de agua próximos a las fronteras nacionales llevan estos daños hacia el otro lado, sin que hasta el momento se hayan conseguido estrategias significativas de abordaje transnacional sobre esta realidad.

¹⁵⁵ Este diálogo se concretizó en la *Aliança dos Povos da Floresta*.

Cuadro 10. Auge de la minería ilegal en la Amazonia brasileña en la segunda mitad del siglo XX

A partir de la década de 1970, la minería ilegal de oro se expandió en la Amazonia brasileña y conectó más ampliamente con los centros económicos del país y del exterior. Algunos acontecimientos impulsaron este momento de auge garimpeiro en la región: la crisis del sistema financiero internacional; las medidas desarrollistas impulsadas por el gobierno militar sobre la Amazonia; y la progresiva mecanización del garimpo.

La construcción de la carretera Trans-Amazonica y la pretensión de inter-ligar en dirección sur-norte las ciudades de Cuiabá (Mato Grosso) y Santarém (Pará) situaba toda la región del curso del río Tapajós en conexión permanente con las fronteras económicas, particularmente la ciudad de Itaituba, que al extractivismo minero ya unía anteriormente el extractivismo forestal (Mathis, 1997: 70).

En lo referente a la mecanización del garimpo, la introducción de la balsa aumentó las áreas garimpables hacia dentro de los cursos fluviales, expandiendo así la actividad y el contingente de personas empleadas en la minería de aluvión. En 1979, un nuevo incremento del precio del oro confirmaba para muchos el sentido de oportunidad que significaba para el país la minería aurífera en la Amazonia. Tanto es así que las políticas gubernamentales comienzan a cambiar, atraídas por el volumen de ingresos que el garimpo podría suponer para las arcas públicas. La relación entre Estado y garimpo ha sido, desde entonces, bastante ambigua y poco transparente. Ambos estaban interesados en el aumento de la extracción de oro; pero al mismo tiempo ambos disputaban el control de la actividad.

Si en un primer momento, la actitud del gobierno militar se inclinó por la confrontación con la minería de garimpo, apropiándose para ello del discurso ambiental si fuese preciso y defendiendo la minería empresarial, este escenario dará un vuelco impresionante con el descubrimiento, en 1980, del yacimiento aurífero de *Serra Pelada*. Próximo al área minera de hierro de Carajás, al sur del Estado de Pará, el garimpo de barranco de *Serra Palada* se transformó en una de las imágenes más sórdidas y oscuras del avance de la frontera minera sobre la Amazonia, con el incentivo y control del gobierno militar después de constatar en muy poco tiempo la concentración de más de 30.000 personas en el local (Mathis, 1997).

El garimpo de gran escala de *Serra Pelada* atrajo millares de personas hacia la Amazonia que, durante las décadas de 80 y 90, se diseminaron por los más diversos rincones de la región, incorporándose o instalando nuevos campamentos de minería ilegal, desbordando la realidad hasta nuestros días.

7.2. Brasil en el contexto (neo) extractivista de inicios del siglo XXI

Brasil, se ha convertido en uno de los actores internacionales más activos en la primera década del siglo XXI. Ha vivido profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que contribuyeron a delinear una imagen de estabilidad y consistencia en las conquistas sociales y en el desempeño económico. En el contexto sudamericano ha

asumido un papel de liderazgo reconocido e indiscutible y también ha crecido sensiblemente su presencia como actor clave en el escenario internacional. Su participación en foros como el G-20, la estrategia de alianza política-económica Sur-Sur y su inclusión entre las cinco grandes economías emergentes del momento le concedieron un espacio poco previsible hace quince años.

De otro lado, la grave crisis económica y, principalmente, política e institucional que se venía abriendo desde 2010 y que descargó a partir de octubre de 2014 ha desestabilizado esta imagen que el país forjó durante los primeros diez años. Ambas realidades, auge y quiebra, hacen parte de un mismo momento y buena parte de la crisis actual podría explicarse por las dinámicas instaladas durante los años del *boom* económico y la buena imagen política. En todo caso, no siendo objeto de nuestro trabajo investigativo el desenlace de la crisis, nos centramos ahora en el período de crecimiento económico expansivo que el país vivió hasta 2010-2012 y que coincide con el momento de intensificación de la política extractivista en toda América Latina.

Un hito fundamental, sin duda, fue la llegada al gobierno en 2003 del Partido de los Trabajadores-PT y, muy especialmente, de su líder histórico Luiz Inácio Lula da Silva. Descrito como un líder pragmático y extraordinariamente carismático al mismo tiempo, hábil en el ejercicio de la negociación y el equilibrio, Lula viene protagonizando la vida política brasileña desde inicios de los años 80 y hasta nuestros días. Como líder sindical y político durante la retomada de la democracia, condujo uno de los principales procesos de movilización social desencadenados en América Latina en el último cuarto de siglo XX, materializados en el Partido de los Trabajadores/PT y en la Central Única de los Trabajadores/CUT. Por eso, su victoria en las elecciones de octubre de 2002 fue vivida como la toma democrática del gobierno por parte de la base mayoritaria de la sociedad brasileña, tradicionalmente excluida en un país cuya desigualdad adquiere dimensiones gigantescas.

Ciertamente Lula incorporó a la dinámica política y de gobierno una fresca discursiva y un talante en la forma de hacer que calaron en los países vecinos y también en los centros de poder en EEUU y la Unión Europea. Antes que otros líderes sudamericanos, Lula reivindicó, con sus gestos poco convencionales y con el amplio apoyo social que le sustentaba, un nuevo momento político y económico para Brasil y para América del Sur. Podemos destacar, al menos, tres de estos gestos más significativos en los primeros meses de su acción de gobierno.

El primero, la inclusión, en el corazón del proyecto de gobierno, de la lucha contra la pobreza y la exclusión social bajo el llamado Programa *Fome Zero* - sin pudor de reconocer la existencia del hambre en el país ni de llamarla por su nombre - lo que hacía suponer que ese sería uno de los ejes estructurales de su política. El segundo gesto fue el anuncio en 2003 de la quitación definitiva de todos los préstamos que el país había recibido del FMI, inaugurando un tiempo de mayor autonomía financiera, aunque en

realidad la deuda interna continuó creciendo hasta nuestros días. Y el tercer gesto, su capacidad de llamar la atención en los foros internacionales hegemónicos - como el de Davos - o de sugerir la *solución Brasil* como respuesta a algunas de las grandes cuestiones globales y dilemas del momento: la lucha contra el hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas energéticas¹⁵⁶.

Sin embargo, al mismo tiempo que deslumbraba, la figura de Lula difuminaba sus propias limitaciones. Se ocultaba así a los ojos de la sociedad civil, al menos al principio, las evidencias de continuismo que acompañaron contradictoriamente su ejercicio de gobierno y, con más fuerza, el de su predecesora, Dilma Rousseff, con las severas consecuencias que han arrastrado.

Si el cambio político en Brasil tuvo mucho que ver en su redimensionamiento a nivel regional y mundial, mucho más influyente ha sido su comportamiento económico. En los primeros diez años del siglo XXI Brasil ha vivido un crecimiento económico extraordinario que le ha llevado a ser considerada como la sexta economía del planeta. Los principales centros económicos quieren hacer acuerdos con Brasil, visto como un lugar de nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, se reconocía en los foros internacionales el argumento de que la salud de los números de macroeconomía iba de la mano de conquistas sociales. Se calcula que cerca de 20 millones de personas hayan accedido a la llamada “nueva clase media” en estos últimos años, lo cual ha disparado el consumo interno y, sobre todo, ha despertado el interés de muchos políticos, economistas, agencias internacionales y organizaciones sociales en todo el mundo. Aparentemente, Brasil representaría la materialización del Estado compensador y equilibrista que demostraría la escurridiza conciliación entre crecimiento económico y desarrollo social y ambiental. Los sucesivos gobiernos de Lula y Dilma Rousseff han hecho gala, interna y externamente, de este logro.

Incorporar un análisis crítico a todo este bagaje de gobierno petista en Brasil no parecía sencillo durante los años de esplendor económico y aprobación maciza, interna y externa, de la gestión. Más sencillo ha sido en lo que llevamos de segunda década del siglo XXI, pues han surgido evidencias de agotamiento del momento político y económico que vive el país. Sin embargo, nos interesa aquí, más que mostrar las evidencias de hoy, colocar luz sobre las principales contradicciones y dilemas del aparente éxito que se disfrutaba en pleno auge, entre 2003 y 2014.

Necesitamos encontrar en los estudios y análisis actuales respuestas a preguntas que se tornan fundamentales: ¿Cuáles son las bases de este crecimiento económico extraordinario en Brasil? ¿Cuáles son las consecuencias sociales, políticas y ambientales

¹⁵⁶ Lula, sin moderaciones, colocó el potencial productivo brasileño - de alimentos y de biocombustibles - como parte de las soluciones que todos buscaban. En 2004, Brasil ya estaba entre los cuatro primeros productores de biocombustible y esta euforia generó un nuevo ciclo para el campo brasileño, escenificado en la famosa fotografía de Lula con George Bush en EE.UU. firmando un acuerdo sobre biocombustibles que iniciaba, según el propio Lula, “un nuevo momento para la Humanidad”.

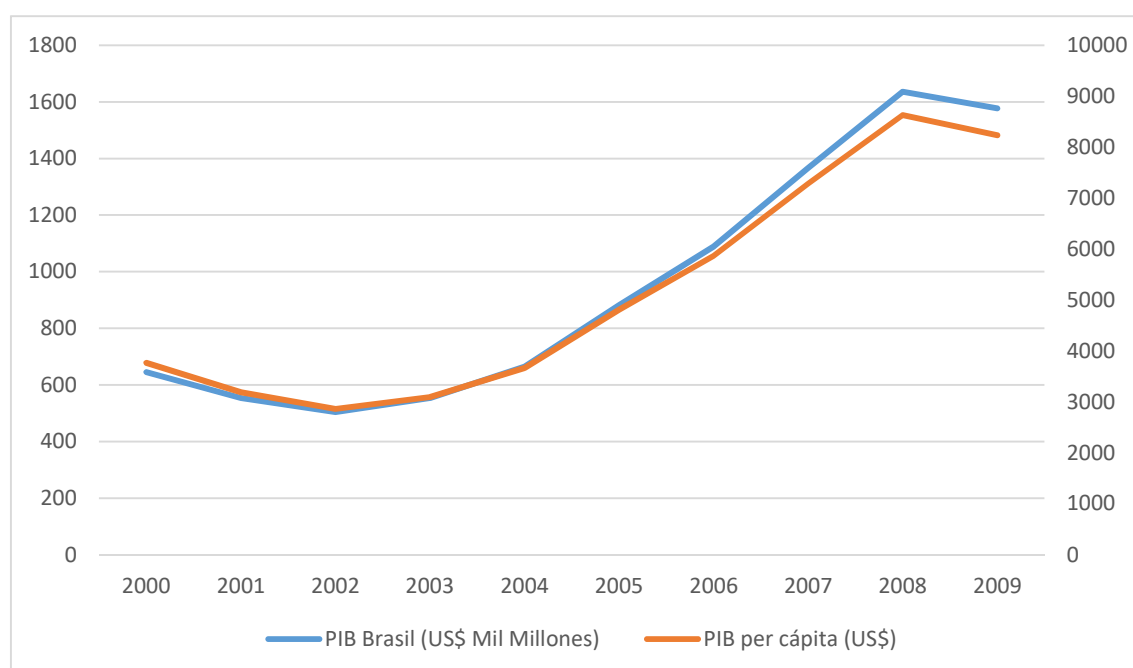
perceptibles? ¿Tiene alguna relación este modelo de crecimiento con el aumento de los conflictos socioambientales en el país y con la paralización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas? En definitiva, preguntarnos si Brasil ha respondido más a las características de un país emergente o de un país semi-periférico.

7.2.1. Brasil y la brújula del crecimiento acelerado

El crecimiento económico brasileño, como se ha dicho, ha sido extraordinario. En la primera década del siglo XXI vivió tasas anuales de crecimiento muy por encima de la media regional y mundial. La “macro-economía”, con sus lenguajes e instrumentos propios, presentaba datos atrayentes en materia de superávit público, nivel de inversión, control de la inflación, valorización de la moneda o reducción de las tasas de desempleo, entre otras. La renta per cápita, según los datos del gobierno, acompañó la misma tendencia de crecimiento que los datos estructurales.

Gráfico 3. Evolución del PIB y PIB per cápita. Brasil, 2000-2009.

Fuente: MDIC. Elaboración por el autor.



Según los datos del programa de Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios/PNAD, en el mismo período de 2000 a 2009 el Índice de Gini pasó de 0,592 a 0,543, señalando una tendencia a la disminución de las diferencias sociales. Este crecimiento económico no se acompañó, sin embargo, de un mayor desarrollo social a partir de la garantía de los derechos fundamentales o cambios estructurales: empleo digno, educación, salud,

tierra, reforma agraria, reforma fiscal, participación social, diversidad cultural, saneamiento básico, transporte público, cultura, protección ambiental, ...

En todo caso, Brasil llamó la atención del mundo por su nivel de crecimiento y su ritmo acelerado. La aceleración del crecimiento económico ha sido la bandera del gobierno brasileño a partir de enero de 2007, fecha en que inicia el segundo mandato de Lula. Nos parece importante destacar esta dimensión *acelerada* del crecimiento económico. La “aceleración” como valor, como objetivo, como decisión política, impone por sí misma ritmos y condiciones a la relación del Estado con sus ciudadanos y con otros actores, como empresas, capital financiero o Estados vecinos y no vecinos. La aceleración condiciona el crecimiento, lo dimensiona en el tiempo y en las metas y precipita decisiones que pueden marcar los tiempos venideros por su carácter de irreversibilidad¹⁵⁷.

El primer Plano de Aceleración del Crecimiento – PAC fue lanzado por Lula en 2007 y en seguida se situó en el centro de la acción de gobierno, articulando hacia sí como un movimiento centrífugo todas las otras medidas políticas, sociales, ambientales y económicas. Los grandes ejes del PAC1 (Verdum, 2012) se centraban en obras de transporte – terrestre y fluvial -, energía y de infraestructura social, relacionadas a vivienda, acceso a agua y electricidad. Según el propio programa¹⁵⁸, se contemplaban, básicamente, cinco tipos de medidas:

- Inversión e Infraestructuras. Ello incluía la reducción del coste en la construcción civil y el aumento de la inversión privada.
- Estimular el crédito y la financiación pública. Incluía inyectar capital a la Caixa Económica Federal/CEF – principal fuente de financiación de las administraciones locales; la creación de un nuevo Fondo de Inversión Pública, con recursos del Fondo de Garantías del Trabajador – para el financiamiento de obras públicas; y la reducción fiscal de las tasas de interés a largo plazo, para atraer la inversión privada.
- Mejorar el ambiente de inversión. El objetivo principal es facilitar la ejecución de proyectos e infraestructura, agilizando los procedimientos ambientales y reformulando las competencias de las diversas administraciones públicas.

¹⁵⁷ No era la primera vez que Brasil vivía un momento en el que la expansión económica se concibiese desde la perspectiva de la aceleración. A mediados del siglo XX, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, ya se defendía un crecimiento acelerado bajo el famoso Plan de Metas “50 años en 5”. Igualmente durante el régimen militar, en la década de 70, el mundo asistía al llamado *milagre econômico* brasileño, que llevó al país a sus mayores niveles de endeudamiento externo. Algo en común que se observa en las diferentes experiencias de aceleración económica es que han generado nuevos dinamismos en el mercado y la producción interna, así como aceleración de procesos incipientes de urbanización y aumento de inversión en infraestructuras de transporte y energías. Al mismo tiempo, se han caracterizado por provocar grandes movimientos migratorios internos en el país, nuevos procesos de territorialización e importantes beneficios para determinados sectores económicos, frecuentemente direccionados a la exportación.

¹⁵⁸ Informaciones recogidas de Verdum, 2012 y de la página oficial del PAC: <<http://www.pac.gov.br/>>.

- Reforma del sistema tributario, abaratando la inversión privada en sectores como la construcción civil y las telecomunicaciones.
- Políticas fiscales a largo plazo, estableciendo el control de la expansión salarial en la administración pública y comprometiéndose a mantener la política de revalorización del Salario Mínimo Interprofesional.

El incentivo a la inversión privada no solo vino por la ampliación de la financiación pública o las concesiones fiscales, sino que también se avanzó en políticas de concesión al capital privado de derechos de explotación económica cuando la obra entrase en operación: es decir, el derecho a cobro de peaje en infraestructura viaria o la comercialización de la energía eléctrica generada por una hidroeléctrica, entre otros ejemplos (Verdum, 2012: 3).

El segundo Plano de Aceleración del Crecimiento, concebido para el período 2010-2014, se presentaba desde la perspectiva del gobierno como una continuidad al trabajo iniciado en 2007, incorporando a su vez nuevos programas como el de “Minha Casa, Minha Vida”, dirigido a la construcción de viviendas sociales para familias con poca capacidad adquisitiva.

La fuerza estructural que ha tenido el PAC en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff ha sido significativamente más definitiva y determinante que las políticas de lucha contra la pobreza agrupadas, en su inicio, bajo el Programa *Fome Zero*. Este Programa, que parecía nacer en 2003 como la marca de un nuevo modo de hacer gobierno con una nueva jerarquía de valores y políticas, terminó convirtiéndose en un conjunto de medidas asistenciales y de transferencia de rentas más o menos articuladas y subordinadas al nuevo eje estructural marcado por la aceleración del crecimiento.

La opción por el crecimiento acelerado en Brasil se ha basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y no ha generado, necesariamente, una adecuada diversificación económica. De hecho, siguiendo el alerta que Burchardt coloca sobre la pérdida de competitividad de la economía doméstica en los Estados rentistas, a partir de 2011 se habla en Brasil de un proceso de desindustrialización asociado, según los analistas, a la alta tasa de cambio que valorizó el Real brasileño, derivada de la expansión exportadora. La industria local se vio perjudicada en el mercado doméstico y en el mercado mundial.

Ailton Dias dos Santos nos alerta para el hecho de que la interacción entre el mercado de capitales, el complejo agroindustrial y los sectores de energía, construcción civil e industrias extractivas había creado una percepción generalizada de una economía activa y dinámica. Sin embargo, según el propio autor, “as análises mais atentas chamam a atenção para os elementos que estão ficando de fora da equação. Um bom exemplo é a ausência de uma boa política industrial consistente e de longo prazo que possa viabilizar um parque produtivo nacional, mais extensivo em conhecimento do que em recursos naturais” (Dias, 2014: 354). En la misma línea, Julianne Malerba atenta para este

impacto en el sector industrial causado por la estrategia de inserción económica externa basada en sectores intensivos en recursos naturales (Malerba, 2014: 374).

Desde el punto de vista social, algunos analistas insisten en que se ha promovido una inserción por lo económico y no por los derechos. Es decir, una inclusión derivada de la transferencia moderada de renta y el aumento de la capacidad de compra para muchas familias, ayudando a dinamizar el mercado interno; sin embargo, esta inclusión no está acompañada de la garantía de derechos fundamentales, como educación y salud pública y próxima de calidad, saneamiento básico, vivienda o acceso a la tierra.

¿Cuál es la naturaleza y cuáles las características propias de este momento de crecimiento económico, tan extraordinario como permeable, tan acelerado como volátil, de Brasil durante la primera década de siglo XXI? Proponemos en nuestro análisis que las bases de este crecimiento han estado sustentada en, al menos, tres pilares principales que desarrollamos en las próximas páginas.

7.2.2. Expansión y especialización primaria del comercio exterior brasileño

Según diversos autores, la economía brasileña de los años 2000 se caracterizó por una fuerte expansión del comercio exterior, caracterizada en este caso por un aumento de las exportaciones de bienes primarios y una caída relativa de las exportaciones manufactureras (Costa Delgado, 2010; Malerba, 2014)). Este comportamiento se vio alimentado por el alza de los precios internacionales de determinadas *commodities* - agrícolas, minerales e hidrocarburos - y por el aumento permanente de la demanda. Los datos parecen corroborar esta tesis. Entre 1990 y 2007 el comercio exterior brasileño se disparó, pasando de U\$ 56,4 a U\$ 289,9 mil millones (Cardoso y Holland, 2010).

Si analizamos la evolución de la pauta exportadora del país en este período podremos observar cinco elementos importantes.

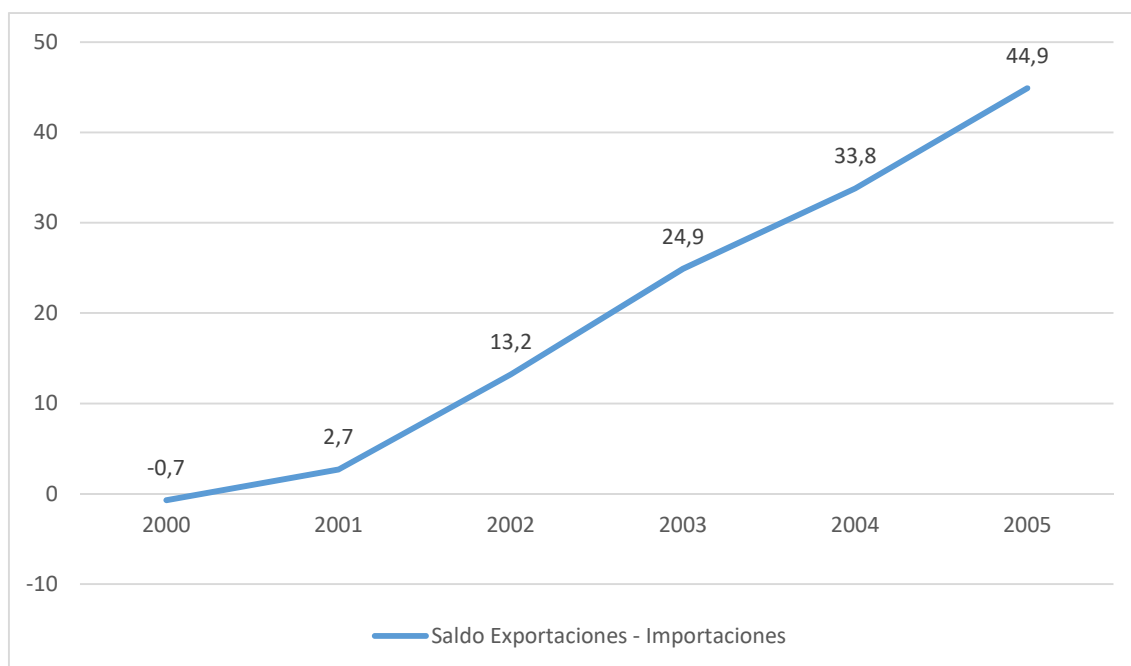


El primero de ellos se refiere a los valores de la balanza comercial. En el año 2000, según los datos del propio Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2010: 15), la balanza comercial brasileña resultaba ligeramente negativa, con un desfase de 7 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones. A partir de 2001 la tendencia da un giro de 180º: el aumento del volumen de exportación tornó la balanza comercial positiva, una tendencia que no hará sino aumentar hasta conseguir su pico más alto en 2006 con 46,5 mil millones de dólares de superávit comercial.

Lo que explica el permanente superávit primario en esta primera década del siglo XXI es la opción, como veremos más adelante, por determinadas estrategias de desarrollo vinculadas claramente a la exportación de bienes primarios. Según Julianna Malerba (2004: 369), estas opciones económicas intentaban responder a las tres metas que condujeron, realmente, la política económica de los gobiernos de Lula y del PT: administración de la deuda, estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal.

Gráfico 4. Saldo entre las exportaciones y las importaciones. Brasil, 2000-2009.

Fuente: MDIC. Elaboración por el autor

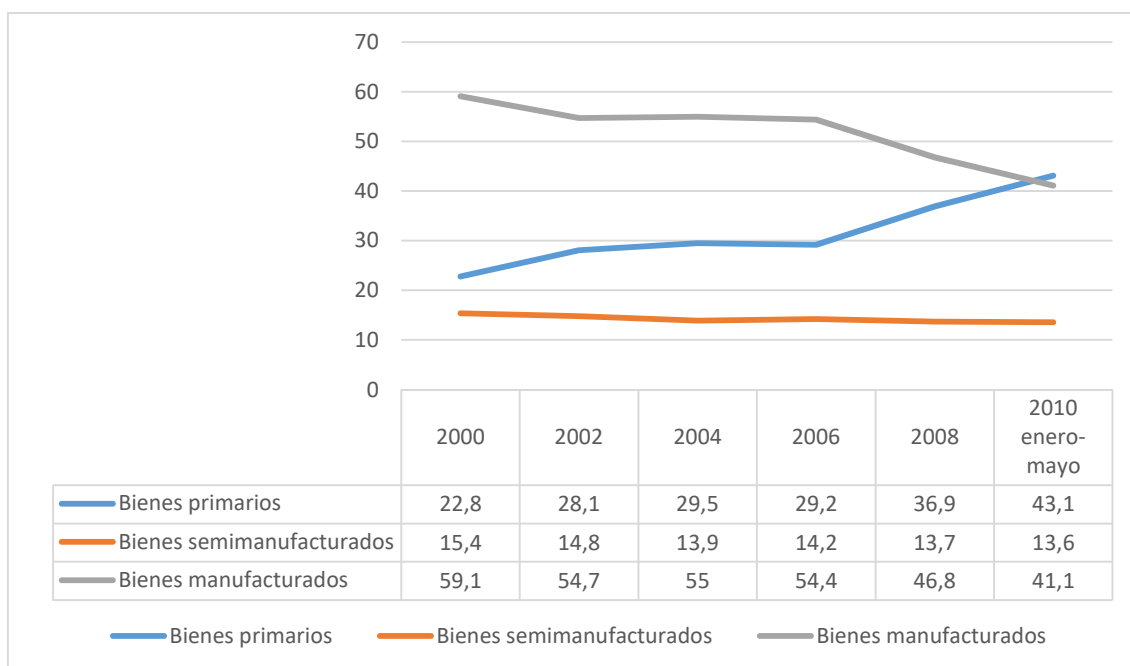


Un segundo elemento importante es que a partir del año 2000 (Cardoso y Holland, 2010), y en relación al destino de las exportaciones, se percibe una clara tendencia de disminución progresiva del comercio con las regiones hasta ese momento más convencionales - como EEUU y Unión Europea - al tiempo que se produce un aumento en el intercambio comercial con Sudamérica y China. En el período 1990-2007, el intercambio comercial pasó de 11,5 a 17,8% en el caso de Sudamérica y de 1,1% a 8,5% en el caso de China. Según datos del Gobierno, entre 2008 y 2010 el intercambio con Sudamérica sufrió un leve retroceso, mientras que el de China continuó en expansión, superando en 2010 el 26,6% del total de las exportaciones brasileñas (MDIC; 2010).

Esto no quiere decir que unos substituyan a los otros, pues EE.UU, la Unión Europea y Japón continuarán siendo socios importantes de Brasil. Lo que se ha producido es una diversificación de los destinos de las exportaciones (Berman, 2011: 35) en la cual China adopta el papel de principal comprador de bienes primarios relacionados con recursos naturales no renovables y con productos agrícolas.

Un tercer elemento se deriva de lo anterior, y muestra una tendencia clara de aumento del peso específico y relativo de los productos básicos y semi-manufacturados en la cesta exportadora, como ya vimos para el conjunto de América Latina. El comercio con China será el principal responsable por la re-primarización del comportamiento exportador brasileño. “En particular, en lo que respecta a China, Brasil ha sido un importante proveedor de productos básicos para satisfacer su mercado interior, principalmente mineral de hierro y soja.” (Berman, 2011: 32).

Gráfico 5. Composición de la cartera exportadora de Brasil, 2000-2010. (% sobre el total de exportación) Fuente: MDIC. Elaboración por el autor.



Sólo en el análisis de las *commodities* agrícolas, y siempre basándonos en datos del propio Ministerio, entre 2000 y 2008 las exportaciones de carne, soja, maíz y azúcar crecieron en tasas medias anuales de 15%, 9,8%, 10,6% y más de 15% respectivamente. En el caso del azúcar los datos se refieren al *boom* del binomio azúcar/etanol. Los datos nos confirman, entonces, una aparente tendencia real a la especialización exportadora y la re-primarización de la economía, fenómeno que será determinante en el crecimiento experimentado por Brasil en los inicios del siglo (Berman, 2011).

Este movimiento hacia la especialización ya había iniciado en el segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) como un intento de generar saldo comercial y resolver, aunque fuese coyunturalmente, los efectos de la crisis de liquidez internacional de 1998 que terminó afectando al país. Para Costa Delgado, en aquel momento se trataba de un retorno a las viejas soluciones para resolver los problemas reincidentes de liquidez.

Lo cierto es que este giro del segundo gobierno de Cardoso va a ser muy bien acogido y continuado por el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Debemos observar que ya en los inicios de la década de 2000 se percibía la demanda expansionista del desarrollo de China, la importancia que iba ganando la discusión sobre los agro-biocombustibles y el *boom* internacional por una serie de productos para los que Brasil ofrecía condiciones de competitividad: soja, maíz, caña de azúcar, carnes, celulosa, mineral de hierro, acero o aluminio.

La constatación de la re-primarización de la economía brasileña es un fenómeno reconocido y asumido por el Gobierno Federal. En el Plano Nacional de Mineração/PNM-

2030, documento de planificación del Gobierno al que le dedicaremos mayor análisis en el próximo epígrafe, se recoge que durante la primera década del siglo XXI Brasil vivió “um processo que os especialistas chamam de ‘reprimarização’ ou ‘especialização reversa’ de sua pauta de exportações, isto é, com a proeminência de bens primários em detrimento aos bens de média e alta tecnologia. Em 2000, 42% dos bens exportados estavam classificados como *commodities* e bens energéticos, enquanto que os bens de média e alta intensidade tecnológica respondiam por 36%. Em 2008, essas porcentagens passaram para 56% e 27%, respectivamente” (PNM-2030; 14).

Según los datos del Gobierno, en 2010, Brasil estaba en los primeros puestos como productor y exportador de algunas de estas *commodities* (MDIC, 2010).

- Como Estado productor: 1º lugar en azúcar y café; 2º lugar en etanol, mineral de hierro y soja en grano; 4º lugar en harina de soja, maíz y aceite de soja; 6º lugar en aluminio.
- Como Estado exportador: 1º lugar en azúcar, café y etanol; 2º lugar en mineral de hierro, soja y derivados y maíz; 6º lugar en aluminio.

Una cuarta cuestión fundamental es que la expansión exportadora y la tendencia hacia la re-primarización se van a producir a través de un aumento en términos absolutos de la explotación agrícola, mineral y de hidrocarburos. Es lo que habíamos analizado en el conjunto de toda América Latina y que ahora se confirma con datos en el caso brasileño.

Según el Ministerio de Planejamento, Orçamento e Gestão del Gobierno Federal (Belchior, 2013), el volumen de la cosecha de granos en Brasil ha pasado de 113 millones de toneladas en 2005 a 185 millones de toneladas en 2013, un aumento del 63,71% en solo ocho años. Si nos detenemos en uno de los principales Estados graneleros y exportadores del país, Mato Grosso, en 2014 se llegó a una nueva cifra récord de cosecha de granos con 48 millones de toneladas. No se trata de un hecho aislado; se trata de una especie de dinámica “recordista” en que todos los años se consigue superar el volumen de producción del ejercicio anterior¹⁵⁹.

Por último y como quinto elemento, Célio Bermann alerta que este movimiento de re-primarización de la exportación brasileña se ha caracterizado por una elevada concentración de su cesta; es decir, son pocos los bienes primarios que concentran los mayores porcentajes de productos exportados. “En 2009 los principales productos exportados por Brasil fueron: mineral de hierro y concentrados (8,7%), soja (7,5%), petróleo crudo (6,0%), caña de azúcar (3,9%), carne de pollo congelada, fresca o

¹⁵⁹ Según el Instituto Mato-grossense de Economía Agropecuaria/IMEA, la expectativa era que la cosecha del periodo 2014-2015 en el Estado de Mato Grosso aumentase en algo más del 6% respecto de la cosecha de 2013-2014; y el aumento no sería mayor, según los especialistas de este Instituto, por la falta de lluvias en el segundo semestre del año 2014. Reportaje publicado por la Rede Globo en: <<http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/12/area-de-soja-deve-ser-66-mil-hectares-maior-na-safra-1415-em-mt-diz-imea.html>>. Acceso con fecha 01/12/2014.

refrigerada (3,9%), y residuos de la extracción de aceite de soja (3,0%)” (Berman, 2011: 31).

7.2.3. Acumulación de capital en el campo como política de Estado: crecimiento y centralidad del agronegocio¹⁶⁰

El monocultivo es una técnica que sólo tiene sentido cuando se produce no para sí mismo, sino para otro, aún más cuando se lo hace en grandes extensiones territoriales. La técnica se muestra, así, parte de las relaciones sociales y de poder.

Carlos W. Porto-Gonçalves, 2008: 2

A monocultura não é só a cultura de um só produto, mas também a cultura para um só lado.

Carlos W. Porto-Gonçalves, 2008b: 40

La expansión especializada de Brasil fortaleció de modo particular el sector agro-exportador (Costa Delgado, 2010; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2014; Dias, 2014), a través de incentivos fiscales, expansión del crédito o políticas de territorialización que permitieron el acceso y la ampliación de las áreas de producción. Esta segunda característica del modelo de crecimiento brasileño supone una recapitalización de la agricultura o “proyecto de acumulación del capital” en la agricultura.

La consolidación de la hegemonía política y económica de la Agroindustria brasileña es fruto de un proceso muy enraizado y de larga duración que nos llevaría de nuevo a un análisis del proceso de colonización y control de la tierra desde sus inicios. No obstante, en una perspectiva mucho más próxima, se debe destacar el periodo de profundas transformaciones por las que este sector pasó entre 1965 y 1985, periodo del Régimen militar en Brasil (Dias, 2014: 350 ss). Estas transformaciones se caracterizaron, en la perspectiva gubernamental, por una “modernización conservadora” que buscó dotar a las grandes propiedades rurales de los incentivos económicos y los insumos tecnológicos necesarios para incorporarlos a las grandes cadenas internacionales de *commodities*. La gran propiedad será la unidad fundamental en detrimento del apoyo a las unidades familiares de producción o a las poblaciones rurales. Una década después, a partir de 1996, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso recuperó estas medidas dirigidas a las

¹⁶⁰ *Agronegócio* es el término utilizado en Brasil para designar los emprendimientos agrícolas y ganaderos caracterizados por acumulación del capital, concentración de tierras y direccionamiento de la producción hacia el mercado exportador. Representan la continuidad del modelo territorial latifundista que impregnó el proceso colonizador en el país. Constituyen una comunidad de intereses con alto nivel de cohesión y fuerte peso político y económico a nivel regional y nacional. Dentro del sector existen diversos niveles de innovación e incorporación tecnológica, intensidad productiva y de relación o no con la industria alimentaria.

inversiones en infraestructuras, el desarrollo de políticas públicas I+D a servicio del capital agrícola y los sistemas de crédito rural a través de los llamados *Plano Safra*.

Pero es a partir de la llegada de Lula y el Partido de los Trabajadores al Gobierno cuando estas medidas se sobredimensionan y alcanzan mayor profundidad. La propiedad de la tierra vuelve a ser un activo fundamental; los precios de la tierra rompen la tendencia decreciente que habían experimentado en las anteriores décadas y vuelven a subir, animados ahora por el alza de la demanda mundial de *commodities* agrícolas¹⁶¹.

Según Costa Delgado, con los gobiernos del PT se producirá un fortalecimiento intenso de los complejos agroindustriales, asociados a la gran propiedad de la tierra, y se facilitará la inserción externa de estas cadenas agroindustriales. Para ello el Estado no medirá esfuerzos, sea en la transferencia de recursos¹⁶², en la garantía de la comercialización agropecuaria o en la inversión y financiamiento de grandes obras de infraestructura y transportes.

Un ejemplo de lo que estamos analizando lo encontramos en la expansión de la soja a lo largo del llamado “arco de deforestación”, que se dibuja desde el Estado de Mato Grosso hasta el Estado do Pará, en la región amazónica brasileña. Según la organización Terra de Direitos, la soja adquirió una relevancia singular en la agroindustria brasileña a partir de la segunda mitad de la década de 90. Aunque la soja ya estaba presente, junto a otras culturas, en la región sur y sudeste del país, no conseguía expandirse mucho más en estas regiones, buscando su campo abierto en la Amazonia (Terra de Direitos, 2013; 5)¹⁶³.

¹⁶¹ Con la reconversión del capital financiero especulativo, que antes invertía en empresas de alta tecnología relacionadas al índice Nasdaq y ahora reorientan su inversión hacia las *commodities* agrícolas en auge, la especulación sobre el valor de la tierra en Brasil aumentó significativamente. Un buen análisis de este proceso se encuentra en: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos; 2014, 19-21.

¹⁶² El sistema de crédito rural fue uno de los principales instrumentos de apoyo a la Agricultura durante el régimen militar, pero desde 1982 había caído sustancialmente. A partir de 2000 se origina una nueva fase de expansión del crédito rural bancario, con un crecimiento del 162% registrado al final de la década, en 2010. Según los datos del *Plano Agrícola e Pecuário de 2013/2014*, en esta década los valores destinados al agronegocio se habían multiplicado por más de cinco veces (Rede Social de Justiça e Direitos Humanos; 2014). El aparato financiero puesto al servicio del crédito rural, dirigido fundamentalmente al capital agro-exportador, será el responsable de una transacción superlativa de recursos e incentivos fiscales al sector.

¹⁶³ En 2000 se construyó el puerto granelero de la empresa transnacional Cargill, en el municipio de Santarém, Estado de Pará. La idea de la empresa Cargill era aprovechar lo que denominó “nuevo corredor de la soja”, formado principalmente por la carretera federal Santarém-Cuiabá y el nuevo puerto; un circuito directo y claro para el transporte y la salida de la producción de soja de Mato Grosso. A pesar de las resistencias y movimientos de protesta contra el puerto granelero, la empresa obtuvo importantes facilidades por parte del Estado brasileño, en los términos que describe Costa Delgado: suministro de tecnologías por parte de la EMBRAPA, agencia estatal de investigación agrícola, apertura de créditos especiales a través del Banco da Amazônia y, finalmente, la instalación del puerto de Cargill en Santarém. El puerto operó durante 10 años sin autorización ambiental, que solo consiguieron en 2012. Según datos ofrecidos por la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT de Santarém, órgano vinculado a la Iglesia Católica,

No es posible comprender este fenómeno de fortalecimiento del agronegocio brasileño sin incluir un análisis sobre la cuestión del etanol y los *biocombustibles*. Brasil se insiere a partir de 2003 en la discusión global sobre la crisis energética y la búsqueda exasperada de nuevas fuentes de energía que permitan sustentar el nivel de consumo e industrialización de los centros de poder económico del planeta. Las sucesivas alertas sobre el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y la insostenibilidad del sistema productivo y de transporte, unido a los primeros indicadores de evidencias de cambio climático, colocaban a los países industrializados en la obligatoriedad de buscar nuevas salidas al problema energético. Las soluciones no eran pensadas por el lado del consumo, abismalmente desigual e insostenible, sino por el lado de las nuevas fuentes de energía presentadas como renovables en el discurso oficial, principalmente la hidroenergía, los *biocombustibles* y el etanol. A su carácter de tabla salvadora se le unía el atractivo de una etiqueta ambientalmente más atractiva.

Sin embargo, ya desde el inicio, analistas y organismos internacionales alertaron sobre el riesgo que un *boom* de los biocombustibles encerraba en sí: un nuevo campo para la especulación financiera con consecuencias directas en la garantía de la producción de alimentos suficientes para satisfacer la población mundial.

Brasil se colocó en la punta de lanza de esta discusión. De nuevo sus ventajas comparativas para el plantío en gran escala de *commodities* como la soja, caña de azúcar, maíz o aceite de palma (*dendê*) le concedían las condiciones necesarias para contribuir con la salida a la crisis energética. Al mismo tiempo, sería una fuente de dinamismo para la economía agraria doméstica. A partir de 2004, Brasil elaboró su política de Estado dirigida a la organización de la producción de biocombustibles, a través del Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis - PNPB. Desde entonces, la producción ha ido en claro aumento y complejos grupos empresariales, con vínculos transnacionales, se han diseminado por la geografía de Brasil.

Si atendemos a las expectativas globales sobre biocombustibles, parece ser un campo revestido de un potencial imponente. El Ministério de Minas e Energias – MME, en la Edición nº 35 del Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis (MME; 2010), presenta algunos datos del *World Outlook Energy 2010*, un estudio encampado por la Agencia Internacional de la Energía/AIE sobre las perspectivas de evolución del mercado energético mundial. Según este estudio, la demanda por biocombustibles debería continuar en un crecimiento acelerado debido a los altos precios del petróleo y a los apoyos de los Estados a energías “más limpias”. El estudio preveía que en 2035 los biocombustibles serán responsables por cerca de 8% del consumo mundial de combustibles. En ese escenario, los principales países productores y consumidores de

hasta 2010 cerca de 500 familias habían tenido que dejar sus tierras para dar paso al monocultivo de soja en la región occidental de Pará (citado en Terra de Direitos, 2013).

biocombustibles continuarán siendo EEUU (38% del consumo mundial) y Brasil (20% del consumo mundial)¹⁶⁴.

Aparte de la soja, una segunda imagen de la expansión del agronegocio se relaciona con los cañaverales o plantaciones de caña de azúcar y su uso en la fabricación de etanol. Según los datos oficiales de la CONAB, recogidos por la entidad Rede Social de Justiça e Direitos, la expansión de la agroindustria de la caña se ha retomado a partir de 2003, fecha en que el alza de los precios de las *commodities* agrícolas permitió al sector recuperar inversiones - de capital nacional y transnacional - y créditos, principalmente del BNDES.

En el período de 10 años que va desde 2004 a 2013, el área de producción de caña pasó de 5.625.300 hectáreas a 8.485.000, un aumento superior al 50%. En ese mismo período la producción total de etanol en el país casi se duplicó (Rede Social Justiça e Direitos Humanos; 2014). A pesar de estos datos, según la estatal Empresa de Pesquisa Energética/EPE, en la cosecha 2011/12 se aumentó el área de caña cosechada pero se iba reduciendo la productividad. Datos también contradictorios eran reconocidos por el gobierno en variables como el consumo doméstico e, incluso, el nivel de exportación, caracterizando una fase de agotamiento del modelo¹⁶⁵. Los factores que explican este fenómeno son diversos y complejos, pero en su conjunto nos permiten apreciar el carácter de volatilidad e inestabilidad que tienen estos mercados, presentados normalmente como motores de un crecimiento estable. Lo cierto es que, tanto los momentos expansivos como los de declive obligan a una mayor presión sobre nuevas áreas para plantío.

Como tercera y última fotografía del *boom* de los biocombustibles, destaca en los últimos años la expansión del plantío de la palma aceitera en la región amazónica¹⁶⁶. Los Estados de Pará y Roraima son casos ejemplares de esta opción. Solamente en el Estado de Pará, entre 2010 y 2012 se habían firmado 581 contratos con agricultores familiares; ya para la cosecha 2012-2013, la perspectiva era de otros 1.610 contratos nuevos (Glass, 2013).

El gobierno ha insistido una y otra vez en que no existe relación, en el caso brasileño, entre el aumento de la producción destinada a *biocombustibles* y una posible reducción de área plantada para alimentos. Jean Ziegler, ex - asesor de Naciones Unidas para temas

¹⁶⁴ Las proyecciones de la AIE se basaban en la hipótesis de que el precio del petróleo continuaría aumentando. Sin embargo, en enero de 2015 esa tendencia ya cambió sustancialmente, motivada por el exceso de producción de crudo: <http://economia.elpais.com/economia/2015/01/12/actualidad/1421093040_357783.html> (acceso en 12/01/2015). Puede ser un indicador de cómo las perspectivas elaboradas por altos organismos no siempre consideran la naturaleza extraordinariamente volátil de este mercado de bienes primarios.

¹⁶⁵ Para un análisis más profundo, ver EPE, 2012. **Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis.**

¹⁶⁶ El aceite de palma de dendê es uno de los principales componentes de la culinaria del Nordeste brasileño, particularmente en el Estado de Bahía. Sin embargo, la expansión de su plantío en la Amazonia responde a la producción de biocombustibles.

relacionados con la lucha contra el hambre, opina diferente¹⁶⁷. Según él, al ocupar millones de hectáreas para plantío de la caña de azúcar, lo que se está produciendo es una transferencia de la frontera agrícola que se asocia, además, con el desplazamiento del ganado para otros lugares, aumentando el área afectada.

A modo de conclusión, el crecimiento del capital agro-exportador en Brasil ha reproducido e intensificado las condiciones histórico-estructurales de concentración de la tierra y del poder económico y político, generando alianzas entre el sector y el Estado difícilmente imaginadas en enero de 2003, cuando Lula asumía el gobierno por primera vez. A este fenómeno, por su relevancia, le dedicaremos mayor atención más adelante.

7.2.4. Grandes obras de Infraestructura: el Estado inversor y financiador

Si la expansión del sector exportador y la acumulación del capital extractivo han sido ejes fundamentales para el crecimiento económico de Brasil, le sigue en secuencia un esfuerzo intenso de inversión en grandes obras de infraestructura, relacionadas directamente con los sectores de transporte y energía. Los grandes proyectos hacen girar, al menos, dos grandes circuitos económicos: las grandes empresas constructoras y las instituciones crediticias.

Respecto al primer gran circuito, lo que se ha producido entre 2006 y 2014 ha sido la formación de grandes consorcios empresariales con una composición plural en la que claramente conviven tres actores principales: grandes constructoras brasileñas; empresas multinacionales de origen europeo o norteamericano, principalmente; y empresas públicas. Entre las empresas estatales estaban normalmente Petrobras, Furnas o Eletrobras y entre las grandes empresas nacionales con proyección internacional, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, Camargo Correa y Vale do Rio Doce, entre otras¹⁶⁸.

En torno a estas grandes empresas nacionales se desarrollan una serie de dinámicas y mecanismos, entre los que destacamos tres:

- a) Hay una cierta omnipresencia de estos actores en la mayor parte de los proyectos de infraestructura licitados y concedidos a partir de 2007. A pesar de que de vez en cuando existen algunos litigios entre consorcios constructores, lo cierto es que se

¹⁶⁷ Entrevista a Jean Ziegler publicada en <<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519858-combate-a-pobreza-precisa-de-mudanca-de-180d-no-brasil-diz-ex-relator-da-onu>>. Acceso con fecha 06/03/2013.

¹⁶⁸ Vale la pena recordar que algunas de estas mega-empresas, como Andrade Gutiérrez, Norberto Odebrecht o Queiroz Galvão habían tenido un papel muy importante en las políticas desarrollistas del Régimen Militar en las décadas de 60 y 70. Ya estuvieron presentes en grandes proyectos de infraestructura de la época, como las carreteras que cortaban la Amazonia o las Hidroeléctricas de Balbina (Estado de Amazonas) y Tucuruí (Estado de Pará). Incluso participaron, en el caso de Norberto Odebrecht, de la construcción de la hidroeléctrica de Charcani V, en el Departamento de Arequipa (Perú), en 1979, antecediendo la actual expansión de empresas brasileñas en los países vecinos. Dias dos Santos afirma, incluso, que estas grandes constructoras brasileñas siempre tuvieron, desde sus orígenes en la década de 40, una relación orgánica con el Estado y que su crecimiento ha sido posible, en las diversas épocas, por la firma de contratos públicos (Dias, 2014: 353).

prevalecía una especie de “equilibrada distribución” de los proyectos en subasta y, por consiguiente, de los beneficiosos contratos e incentivos.

- b) En segundo lugar, estas grandes empresas de la Construcción adoptaron en los últimos años claras estrategias de diversificación, constituyéndose en verdaderos *holdings* que participaban al mismo tiempo en sectores diferentes como transporte, energía, minería, hidrocarburos o agroindustria (Dias, 2014:354).
- c) Una tercera tendencia está marcada por los procesos de transnacionalización de las grandes empresas brasileñas, tanto en la composición de su capital - convirtiéndose en empresas brasileñas con participación de un conjunto de inversores globales – como en su cartera de proyectos de infraestructura fuera del territorio brasileño. En esta segunda hipótesis participan también algunas de las empresas estatales del país y ha participado el Estado en sí como uno de sus principales estimuladores (Malerba, 2014:373).

Considerado como uno de los principales analistas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el politólogo Emir Sader afirma que una de las características exitosas de los dos mandatos de Lula fue, precisamente, la alianza con el capital productivo nacional más que con el capital financiero y especulativo. Aunque, sin duda, este tipo de alianzas entre Gobierno y capital nacional significó también una masiva transferencia de dinero público hacia el sector privado, como afirma Paul Little (2014b: 423). Esto sitúa al Estado brasileño en la posición que habíamos descrito en el Capítulo 5 de un Estado compensador en el cual el espacio público resulta ocupado, una vez más, por el poder económico.

A partir de octubre de 2014, con la reelección de Dilma Rousseff como Presidente de Brasil, se ha desencadenado una profunda crisis política e institucional estrechamente relacionada con esta realidad que estamos analizando. La llamada *Operación Lava Jato* ha puesto en evidencia esquemas de transferencia de recursos públicos a empresas que terminaban recayendo en actores del sistema político brasileño (partidos políticos, diputados, senadores, gobierno, gobernadores, órganos públicos). Las empresas implicadas en este esquema son, precisamente, estas grandes corporaciones transnacionales de origen brasileño; y fueron justamente los contratos de concesión de parte de las grandes obras de infraestructura las que permitieron este flujo de dinero público hacia intereses particulares, aparte de evidenciarse los acuerdos tácitos para la participación de todas las empresas en proyectos de envergadura, siempre que se incorporasen al esquema.

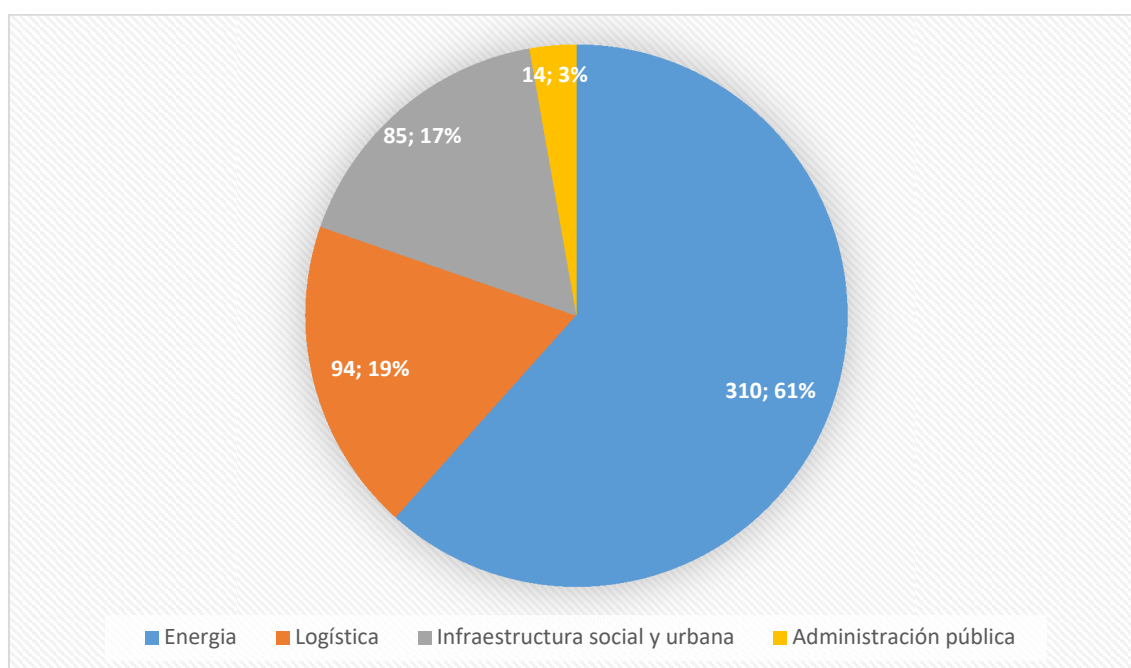
Respecto al segundo circuito que habíamos enunciado, el de las instituciones crediticias, entre 2006 y 2014 el Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico/BNDES asumió un papel fundamental en la concesión de créditos y en la financiación directa de proyectos de infraestructura, dentro y fuera de Brasil (Dias, 2014: 346). Se erigió en el principal agente de financiación de la estrategia de crecimiento del gobierno brasileño,

que fue diseñada en los dos planes de aceleración que se llevaron a cabo entre 2007 y 2014.

En 2002, el BNDES creó un *holding* de participación social para gestionar su participación en empresas públicas y privadas de sectores como papel y celulosa, etanol, carne, construcción civil, hidrocarburos o minería (Verdum, 2010: 6). Se convirtió en el principal soporte de la Hidroeléctrica de Belo Monte, asumiendo en 2010 el compromiso de financiamiento del 80% del valor total de la obra estimado en aquel momento por el consorcio constructor en 19 mil millones de reales¹⁶⁹. También en la Hidroeléctrica de Santo Antonio, en el río Madeira, se comprometió a una parte del financiamiento. En 2011 la Memoria Institucional relató la participación del BNDES en 503 proyectos valorados en total en 327 mil millones de reales, de los cuales el Banco se comprometió con el 55% (Verdum, 2010: 6).

Gráfico 6. Proyectos con participación de financiamiento por parte del BNDES en 2011.

Fuente: Verdum, 2012. Elaboración por el autor.



En América del Sur, el BNDES se convirtió en uno de los instrumentos más decisivos de la política brasileña en la región a través de la concesión de préstamos a gobiernos y empresas de la región. Según Marc Dourojeanni *et al.*, que ejerce una fuerte crítica al papel que Brasil jugó en la última década en los países vecinos por su interés particular en el desarrollo de la iniciativa IIRSA, “El BNDES ya dedica más del 10% de sus 40 mil millones de dólares anuales de préstamos a su cartera de operaciones en el exterior, mayormente en América Latina y África (...) El volumen de negocios de ese banco

¹⁶⁹ El valor total del proyecto de Belo Monte ha sido redimensionado en diversos momentos durante su construcción, llegando a superar actualmente los 30 mil millones de reales.

brasileño en 2007 fue 4 veces superior al del BIRD, BID y CAF juntos en América Latina” (2009: 116).

Según el Documento de Planificación Corporativa del BNDES para el período 2009-2014, se priorizaban las iniciativas de financiación en tres grandes áreas: innovación, desarrollo local y territorial (entorno de grandes proyectos, cuencas hidrográficas, polos industriales) y desarrollo socioambiental (en el que se situaba la financiación a energías renovables y eficiencia energética, donde encontramos el capítulo de las hidroeléctricas).

Para Paul Little, los grandes proyectos de infraestructura se convierten en el pivote donde se encuentran las políticas de financiamiento público con la internacionalización de las grandes empresas nacionales (Little, 2014b:409).

7.3. Minería y perspectivas de crecimiento en Brasil

El sector minero - que comprende las dimensiones del conocimiento geológico, la extracción minera y la industria de transformación – ha experimentado un crecimiento exponencial muy grande en Brasil en la primera década del siglo XXI. En términos globales, el 4% de los minerales que son comercializados en el planeta ha sido extraído en suelo brasileño. En 2012 era el responsable por el 96,1% de la producción mundial de niobio, el 22,6% de tantalio o el 13,4% del hierro (DNPM, 2013). Al mismo tiempo, se situaba como uno de los países líderes mundiales en reservas no explotadas de bienes como niobio (98,1%), tierras raras (16,2%), tantalio (37%), estaño (14%), mineral de hierro o manganeso.

Ya en números domésticos, en 2008 el sector minero representaba el 4,2% del PIB nacional y el 20% de la cartera exportadora de Brasil. “Nos últimos dez anos, o Brasil viveu um processo de crescimento gigantesco da mineração, o negócio da mineração cresceu um 550%” (OCMAL, 2014; Jones *et al.*, 2011). Durante toda la primera década, y principalmente después de la crisis financiera global de 2008, el sector minero ha sido el responsable por mantener en positivo la balanza comercial del país. Según el Instituto Brasileiro de Mineração/IBRAM, entre 2010 y el primer semestre de 2013, el superávit comercial de 100 mil millones de Reales habría resultado negativo sin el concurso del sector minero exportador (citado en Malerba, 2014).

Todos los datos consultados confirman un crecimiento exponencial, en términos relativos y absolutos, de la extracción minera en Brasil, motivado por el aumento de los precios de las llamadas *commodities* mineras en el mercado mundial y por la demanda expansiva de países como China. El Gobierno Federal confió en el desempeño del sector minero buena parte de su crecimiento económico y del equilibrio en la balanza comercial, sin romper con la dinámica re-primarizadora de la economía que esta opción profundizaba.

7.3.1. 2000-2030: tres décadas confiadas al subsuelo

Si la primera década del siglo XXI se caracterizó por un auge minero que acudió en la ayuda de la balanza comercial del país, las dos próximas décadas han sido proyectadas para un aumento mayor aún de la actividad minera. Sin embargo, un análisis de la estructura del sector minero actual y de las proyecciones efectuadas nos permite identificar algunas fragilidades.

1. Un gigante de hierro con la mirada hacia el Pacífico

Una de las fragilidades que se constata es la concentración de la actividad minera en una cartera reducida de bienes, a pesar de operar con algo más de 70 sustancias minerales diferentes.

El elemento principal de concentración se encuentra en la predominancia del hierro y del mineral de hierro en la actividad minera. El hierro representaba al final de la primera década el 82,6% de las exportaciones de minerales metalíferos, seguido por el oro y el 78% del total de las exportaciones mineras. Si observamos la cartera exportadora global del país, el hierro representa el 12,5% de las exportaciones totales.

Los precios del hierro tuvieron un aumento de precio que llegó a aproximarse al 100%. El valor del hierro es asociado al crecimiento de la industria del acero, estratégica en el sector de la construcción civil, sea en el ámbito de la economía doméstica como de la exportación a terceros países.

Después del hierro, el segundo bien mineral más relevante en la estructura del sector minero brasileño actualmente es el oro, que experimentó una subida de casi el 500% en su precio desde el año 2000 (Jones *et al.*, 2011). Brasil ocupa la sexta posición del mundo en reservas de oro, lo que prevé una permanente presión sobre este bien, considerado también valor refugio, en función de las fluctuaciones de la economía-mundo. Los impactos ambientales de la minería aurífera a gran escala son extraordinarios: “para cada grama de ouro extraído, é necessário remover 4 toneladas e meia de outros materiais”¹⁷⁰.

Junto al hierro y el oro, el potencial instalado en Brasil para bienes como la bauxita y el aluminio, el manganeso, el estaño, las tierras raras, el tantalio o el niobio, sitúan al país en uno de los centros de interés de la economía mundial.

Un segundo elemento que devela la naturaleza dependiente del sector minero en Brasil es la concentración de los lugares de destino de la exportación. Destaca de un modo particular la participación de China en el mercado bilateral con Brasil: en 2012, el 44,3%

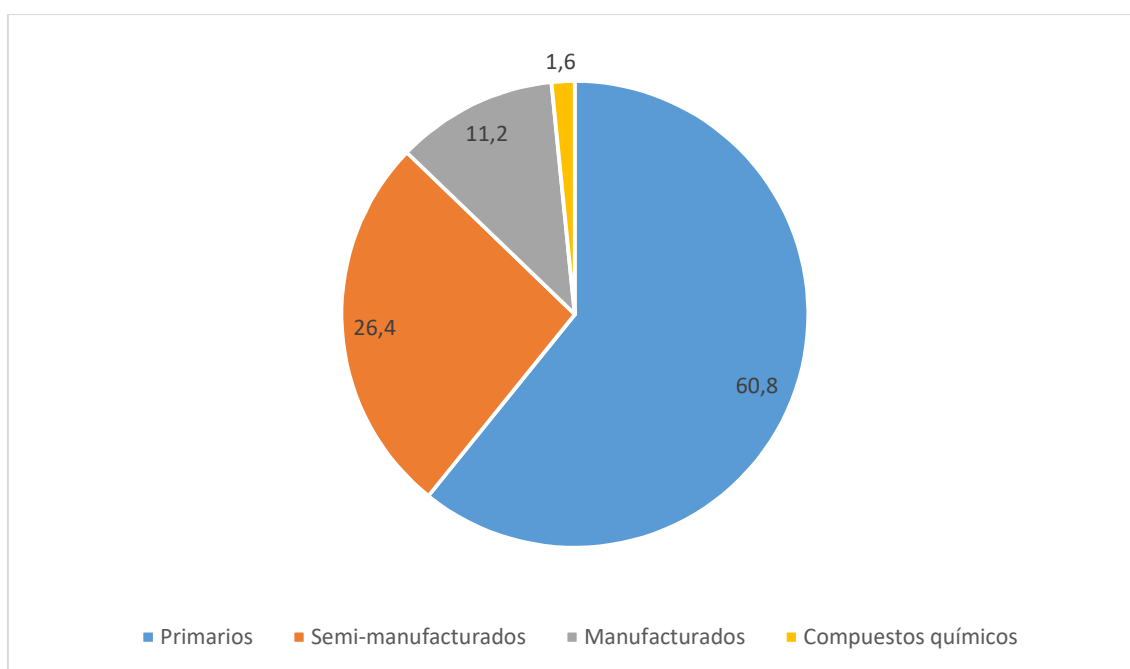
¹⁷⁰ Informaciones del documental *Enquanto o trem não passa* (2013); Mídia Ninja: <<https://www.youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA>>.

de los minerales que salieron de Brasil tenían como destino la economía china (DNPM, 2013).

Un tercer elemento hace referencia a la primarización de la pauta exportadora de Brasil en su conjunto y de la exportación minera en particular. Como hemos demostrado en el epígrafe anterior, el peso de los bienes primarios y de los productos semi-manufacturados ha crecido sustancialmente en la pauta exportadora brasileña desde el año 2000. En 2012, según datos del Gobierno, el 62% de los productos exportados eran bienes primarios o semi-manufacturados (MDIC, 2013). De esa cartera exportadora de 2012, el 21,6% de los bienes correspondían al sector minero y entre ellos también podíamos descubrir una tendencia propia a la primarización:

Gráfico 7. Composición de las exportaciones del sector minero en Brasil, 2012. (% del total)

Fuente: DNPM



Por tanto, tenemos la confluencia de tres tendencias: concentración del sector minero en un grupo reducido de bienes, en función de la demanda externa; concentración de los lugares de destino de los bienes exportados, en función de las políticas de crecimiento principalmente de China; y especialización exportadora en bienes minerales primarios y semi-manufacturados. El resultado no puede ser sino la consolidación de una economía dependiente de variables externas. Así, en 2012 la exportación de mineral de hierro supuso para Brasil una entrada de 30,9 mil millones de dólares, lo que significaba una reducción de renta del 26% respecto de 2011. Esta disminución de ingresos estuvo asociada plenamente a la caída del precio y no a la reducción de bienes vendidos (DNPM, 2013).

A ello se debe unir un cuarto elemento reductor, que es la concentración del sector minero brasileño en las manos de un grupo pequeño de empresas, no superior a quince entidades (Jones, 2011). Se produce una especie de monopolios u oligopolios empresariales para cada uno de los principales bienes minerales. Esa situación privilegiada le ofrece a cada empresa ventajas suficientemente favorables que podrían inhibir, en cierto sentido, el nivel de competitividad.

En este sentido, la Compañía Vale do Rio Doce, de origen brasileño, es actualmente la segunda mayor empresa minera del mundo y con creces la mayor productora de hierro del mundo. En Brasil, respondía en 2010 por el 79% de la extracción de mineral de hierro (Jones *et al.*, 2011), lo que prácticamente quiere decir que domina la mayor parte del mercado exportador minero del país. Al mismo tiempo, también domina el sector del manganeso (95% de la producción total), donde Brasil ocupa el segundo lugar mundial como productor.

Las empresas Alcoa, Votorantim y Norsk Hydro¹⁷¹, junto con el consorcio Mineração Rio do Norte (68%)¹⁷² se dividen la producción de bauxita y de aluminio. Votorantim se configura como la única productora de zinc de Brasil y responsable por la mitad de la producción de níquel.

La extracción y exportación a gran escala de oro está en las manos de las multinacionales AngloGold Ashanti, Yamana Gold y Kinross o de la emergente Eldorado Gold. En el caso del estaño, su extracción se localiza en los Estados de Amazonas y Rondônia. Destaca la empresa Mineração Taboca, cuya principal operación minera está en la mina Pitinga, localizada dentro del territorio del pueblo indígena Waimiri-Atroari, en el límite entre los Estados de Amazonas y Roraima. En el caso del niobio, el 60% de la actividad minera se concentra en la empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração/CBMM.

El Informe realizado en 2011 por Global Business Reports para la Revista Engineering and Mining Journal (Jones, 2011) sobre la minería brasileña permite aproximarnos a las perspectivas que el mundo empresarial volcaba sobre las posibilidades que se le abrían en el país:

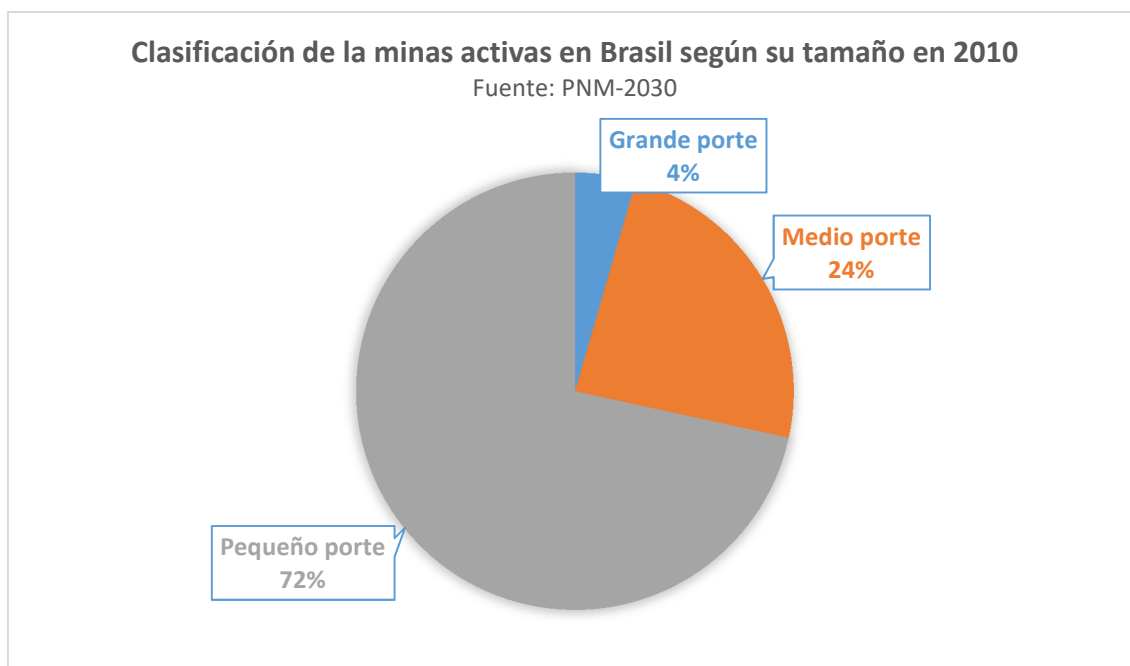
- La necesidad de más reformas políticas para mayor garantía de la inversión. Se critica el tamaño de la maquinaria pública y las políticas sociales “exageradamente generosas”, al tiempo que se reivindicaban mayores inversiones públicas en infraestructura de transporte y de energías;
- La conveniencia de mejorar el conocimiento físico de las potencialidades minerales del país, principalmente en la región amazónica;
- La atención hacia la legislación ambiental que el país había adoptado a partir de la Constitución Federal de 1988 y la narrativa de la sostenibilidad ambiental

¹⁷¹ Empresa noruega que adquirió los activos de Vale do Rio Doce en el sector de la bauxita.

¹⁷² Mineração Rio do Norte es un consorcio en el que participan las mismas empresas del sector: Norsk Hydro, Alcoa, Votorantim o Rio Tinto, acentuando el oligopolio.

relacionada con el crecimiento económico, principalmente, una vez más, en la región amazónica. Para ello, se consagran algunas experiencias dudosas como el paradigma de la relación minería – calidad de vida en la Amazonia: el caso de la mina de Jurutí, en el Estado de Amapá, gestionada por la empresa Alcoa¹⁷³.

Según el Gobierno Federal, en 2010 existían en Brasil 2.647 minas distribuidas como sigue (PNM-2030):



2. Plano Nacional de Mineração/PNM: una proyección hacia 2030

En marzo de 2011, recién iniciado el primer gobierno de Dilma Rousseff, el Ministerio de Minas y Energías publicó un Plan Nacional de Minería que pretendía orientar la política minera del Estado brasileño en las dos décadas siguientes. El objetivo era actualizar las líneas de acción estratégicas del gobierno a partir de la nueva coyuntura y

¹⁷³ Las declaraciones del presidente de Alcoa en Brasil en la época, Frank Feder, en referencia al proyecto Juruti en el Estado de Amapá, revelan las dificultades que los agentes privados tienen para lidiar con la realidad en la que se instalan y deberían levantar, al menos, preocupación: “Nós só vamos saber exatamente quão único e bem sucedido o projeto de Juruti é daqui a 75 ou 100 anos, quando as reservas de bauxita estiverem esgotadas e temos a oportunidade de descobrir se a área original voltou à sua biodiversidade e estado ambiental originais, assim como se o município encontrou um caminho de desenvolvimento independente da mina de bauxita de Juruti” (Jones *et al.*, 2011: 14). Para una mejor comprensión del proyecto minero de bauxita de Juruti, en el Estado de Amapá, y sus impactos: Wanderley, Luiz Jardim de Moraes (2008). *Conflitos e Movimentos Sociais populares em área de mineração na Amazônia brasileira. (ver bibliografía).*

de las transformaciones que se habían dado en el país y en el mundo en la última década. Entre esas transformaciones, el PNM-2030 destaca:

- La tasa media de crecimiento conseguida por el país y el nuevo escenario macroeconómico;
- La irrupción de los países emergentes, particularmente China, en el mercado mundial, influyendo significativamente en el comportamiento de la demanda;
- La evolución demográfica que el país estaba experimentando y que hacía prever una base maciza de población en edad activa, con fuerte capacidad productiva y de consumo.

El PNM-2030 avanza que la extracción y/o tratamiento de algunos minerales podrán multiplicarse por 3, 4 o 5 veces en el período 2010-2030. También estima que la inversión en el sector minero podría alcanzar al final del período los 350 mil millones de dólares entre actividad minera (70%) e infraestructuras y logísticas (30%), procedente principalmente de la iniciativa privada.

El Plan Estratégico se traza dos objetivos fundamentales: reformular el marco normativo de la actividad, para conseguir mayor “gobernanza” y ampliar el conocimiento geológico, con expectativas mayores hacia la región amazónica. En todo caso, el PNM-2030 defiende, como intencionalidad política, la transformación del sector minero hacia una mayor diversificación, menor dependencia externa y aumento del consumo doméstico.

Para todo ello, establece unas metas de extracción y transformación mineral que deberían ser logradas hasta el año 2030 y que representan, básicamente, un aumento exponencial en la actividad minera del país. Para ello, dibuja cuatro posibles escenarios:

- a) Senda de sostenibilidad¹⁷⁴. Combina una reformulación del marco institucional y normativo, una expansión y diversificación de la extracción minera – con mayor participación de los minerales direccionados a la construcción civil – y una progresiva disminución de la dependencia exterior de agrominerales para el modelo agroexportador;
- b) Desarrollo desigual. Expansión de la extracción minera con mayores inversiones públicas y privadas y un marco normativo más liberal;
- c) Crecimiento intermitente. Contexto inestable, sin conseguir superar los obstáculos actuales y los llamados “cuellos de botella”.
- d) Amenaza de estancamiento.

Los conceptos con los que el PNM-2030 nombra cada uno de los escenarios expresa, evidentemente, la intención del Gobierno Federal de proponer medidas que conduzcan hacia el primer escenario, descrito como el ideal. Sin embargo, llama la atención que las

¹⁷⁴ Los términos para definir cada posible escenario son los asignados por el PNM-2030.

probabilidades de que este primer escenario sea el camino efectivamente recorrido hasta el año 2.030 van a depender, según el PNM, de premisas difícilmente viables. Por ejemplo: un crecimiento medio anual, hasta 2.030, del PIB nacional de 5,1%; un crecimiento medio del PIB per cápita del 4,6%; un crecimiento medio de la economía mundial del 3,8%, para garantizar una demanda estable.

Por otro lado, el escenario A se caracterizaría, según el Gobierno, por “poucos e dispersos” conflictos. Pero no encontramos en el Plan Estratégico indicios de medidas que puedan conducir hacia una disminución de los conflictos, más allá de confiar en que las empresas los administrarán del mejor modo posible. Por el contrario, todo aumento de la extracción significará mayor presión sobre territorios y, por tanto, mayores conflictos. “Em termos socioambientais, a atividade extrativa mineral vincula, no geral, uma disputa por território. Normalmente já existe população nos projetos que se iniciam e, quando se fala em triplicar ou até quintuplicar a produção mineral, é a amplitude desses conflitos que estamos falando”¹⁷⁵.

En todo caso, las premisas establecidas por el PNM-2030 se han mostrado ya inconsistentes. Las tasas de crecimiento, nacional e internacional, han decrecido sustancialmente, tanto a nivel país como a nivel mundial. El propio PNM-2030 reconoce que, aunque el primer escenario le parece el ideal, el segundo es más probable: caracterizado por un desarrollo desigual, sin grandes cambios estructurales respecto de lo que ya venía sucediendo desde la década de 70 y con “muitos e agudos” conflictos.

Al mismo tiempo, es recurrente en el texto del Plan alusiones a la necesidad de superar lo que el Gobierno denomina *gargalos* u obstáculos actuales a la expansión de la actividad minera. Entre esos gargalos nombra: mejora de la infraestructura (transportes y energía), desarrollo tecnológico, conocimiento geológico más sistematizado o liberalización de políticas crediticias y fiscales. Junto a estos obstáculos explícitos, en el debate nacional sobre la minería pairan otros fenómenos, definidos como obstáculos, y que se relacionan con las salvaguardias ambientales, los procedimientos de licenciamiento o la restricción de la minería en territorios indígenas. Vistos en su conjunto, unos y otros, y no de forma aislada, los llamados obstáculos ensamblan la narrativa desarrollista y extractivo-exportadora en la cual percibimos conexiones con lógicas económicas ya ensayadas en los años 70.

En definitiva, el PNM-2030 propone un camino ideal a ser recorrido y en el cual prevé dos estaciones:

- Hasta 2.022: se superan los obstáculos internos, se incorporan nuevas tecnologías, se crea estabilidad en los precios internacionales de las *commodities* mineras, se agrega valor en la cadena productiva, se amplía el conocimiento geológico y se

¹⁷⁵ Entrevista a Rodrigo Santos, profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil. En <<http://www.brasildefato.com.br/node/10832>>. Acceso 5/10/2012.

expande la extracción de minerales estratégicos como las tierras raras o los minerales para construcción civil. Y para antes de llegar a esta estación, el Gobierno ya entiende que la minería en territorios indígenas habrá sido abierta: “A regulamentação constitucional que permite a abertura de minas em terras indígenas amplia o escopo de atuação do setor na região Norte” (PNM-2030, 2011: 78).

- Hasta 2.030, parada final: minería sostenible con menor impacto en el consumo de energía y de agua, normativas internacionales de apoyo a la “minería responsable”, nuevo marco normativo en el país, aceptabilidad de la minería por parte de la sociedad, disminución de los conflictos “pelo empenho das empresas em bem gerir seus conflitos. Dessa forma, os conflitos são, em geral, dispersos e com repercussão apenas local” (2011: 80).

Las hipótesis planteadas para cada uno de los dos momentos cruciales de la planificación estratégica entremezclan factores que pueden depender, de hecho, de opciones políticas del Estado brasileño con otros que son ajenos a su capacidad de influencia y para las cuales no hay indicios de que se puedan dar: por ejemplo, la estabilidad en los precios de las *commodities* minerales.

Describimos a continuación la proyección que el Gobierno establecía para los diversos bienes minerales. En el caso del hierro, oro y tantalio, analizaremos en gráficos las metas estimadas en extracción, exportación y consumo aparente. Posteriormente, analizaremos en otros dos gráficos las proyecciones de aumento de extracción para diversos minerales metálicos (hierro, acero, oro y tantalio) y otros minerales no-metálicos.

Gráfico 8. Previsión de producción, exportación y consumo de hierro (Mt).

Fuente: PNM-2030. Elaboración por el autor.

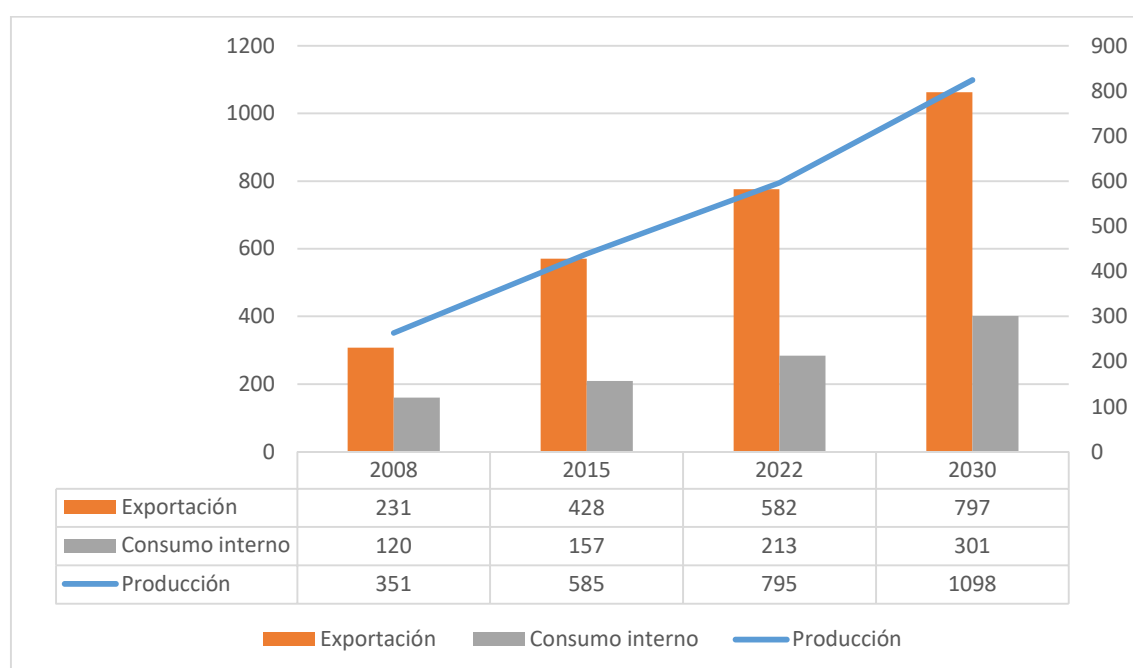


Gráfico 9. Previsión de producción, exportación y consumo aparente de oro (Mt).

Fuente: PNM-2030. Elaboración por el autor

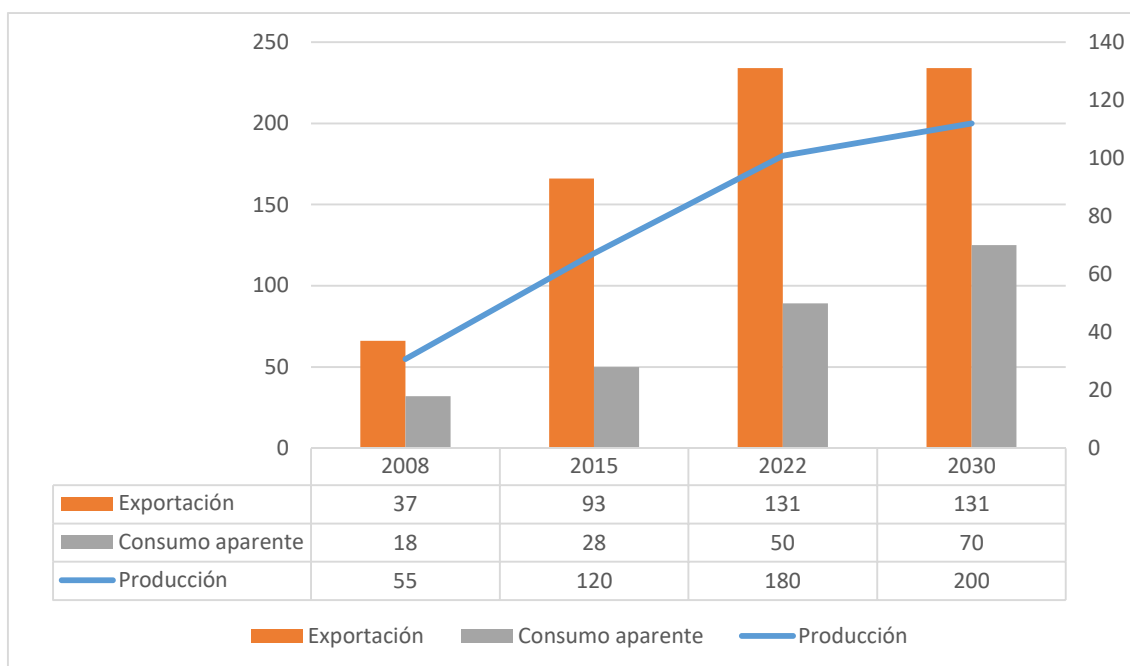


Gráfico 10. Previsión de producción, exportación y consumo de Tantalio (Mt).

Fuente: PNM-2030. Elaboración por el autor

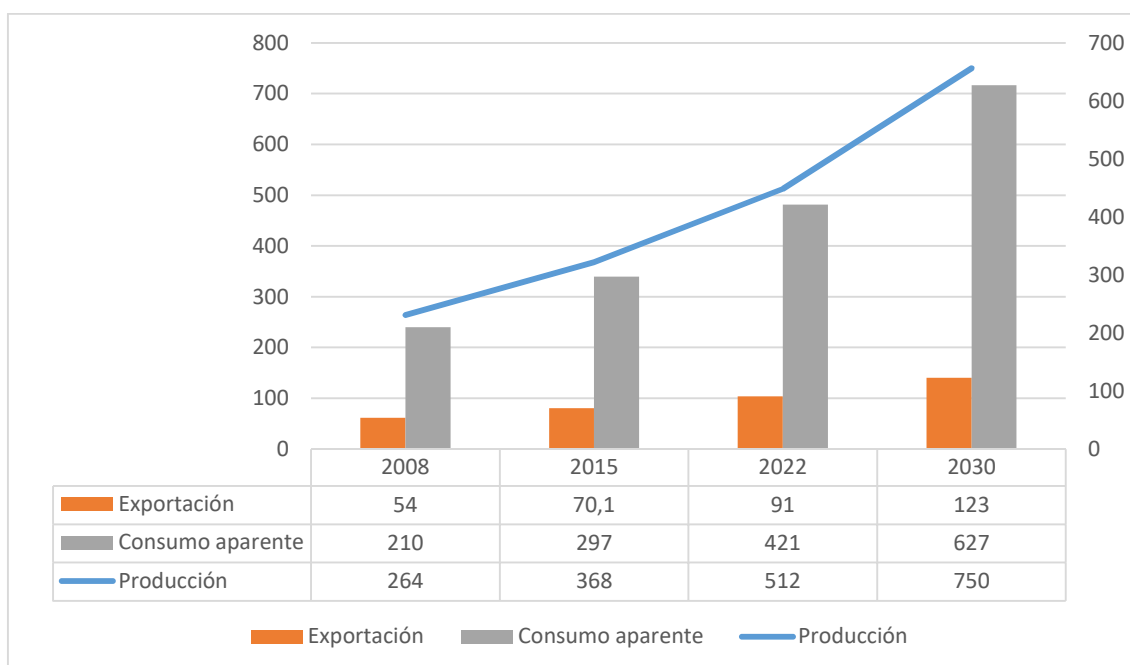


Gráfico 11. Previsión de extracción de minerales metálicos y metalurgia (Mt)

Fuente: PNM-2030. Elaboración por el autor.

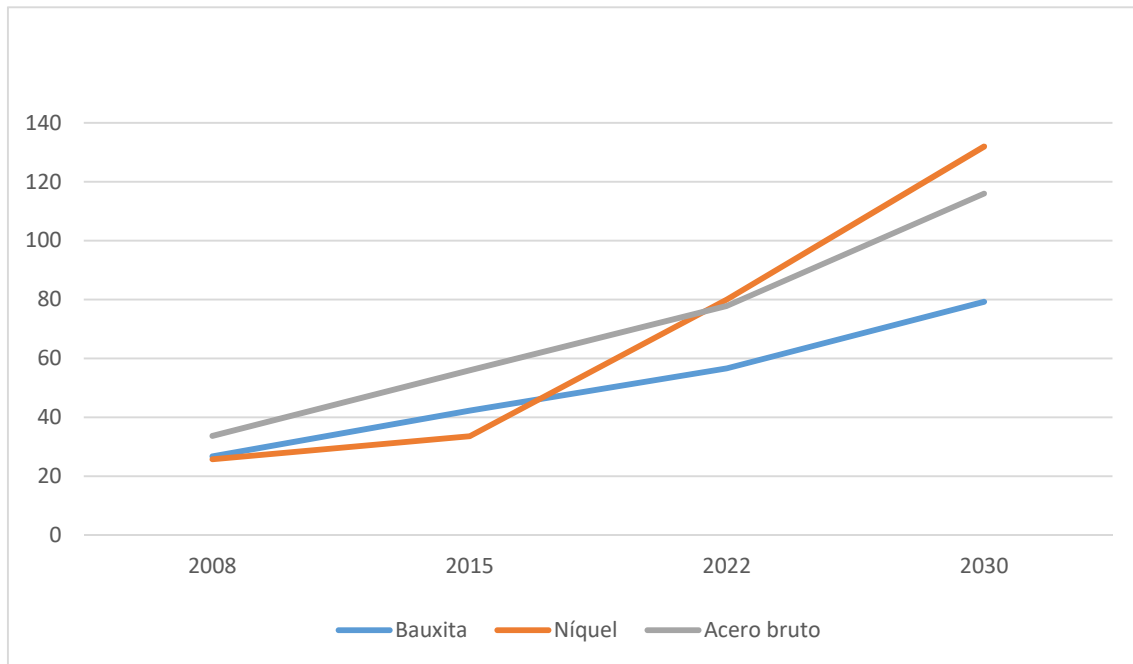
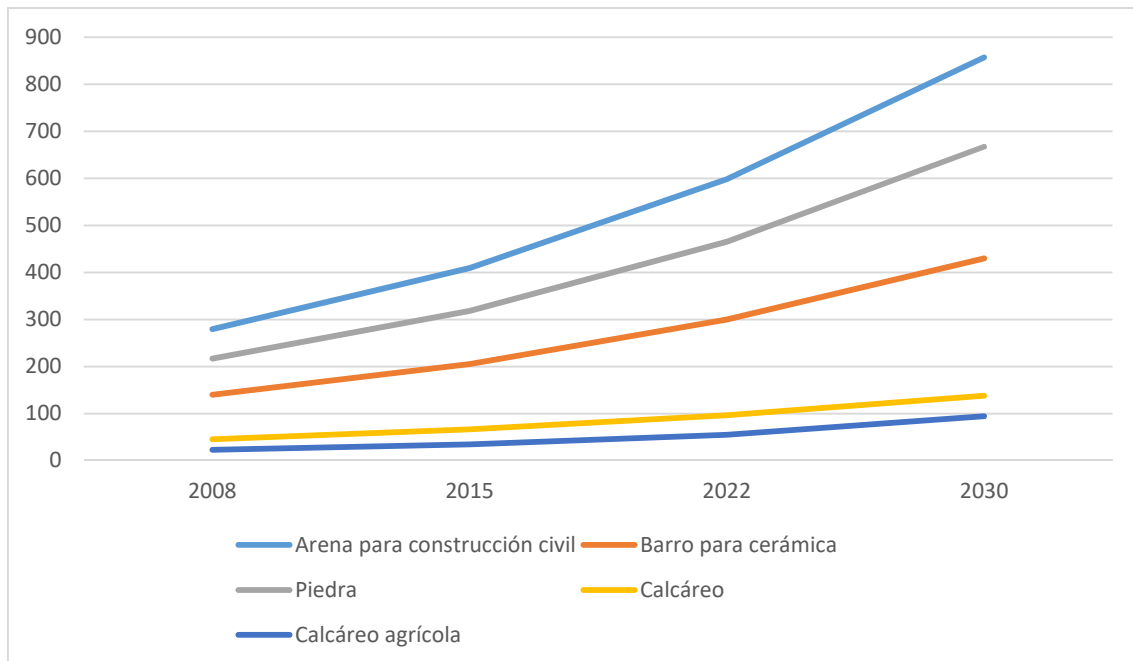


Gráfico 12. Previsión de extracción de minerales no-metálicos (Mt).

Fuente: PNM-2030. Elaboración por el autor.



El análisis de estos datos nos permite algunas constataciones:

- La perspectiva es de aumento de la extracción y/o tratamiento de los diversos bienes minerales. Este aumento puede variar, pero en todos los casos significa un crecimiento bastante intenso: hierro (312%), oro (363%), tantalio (284%) o níquel (511%).
- En los casos del hierro y el oro, principales bienes de exportación actualmente, en 2030 seguirían siendo bienes fundamentalmente para exportación, incluso aumentando el porcentaje en el caso del hierro. Es decir, si en 2008 el 66% del hierro extraído era destinado a la exportación, en 2030 será el 72,5%.
- Hay un aumento también significativo de los bienes minerales no metálicos y que hacen referencia a los sectores de la construcción civil – arena, barro, piedra y calcáreo – y la agroindustria – calcáreo agrícola¹⁷⁶.
- En definitiva, más que una diversificación de la cartera de bienes minerales que conduciría a una transformación de la estructura productiva, lo que se puede esperar de las estimaciones es un aumento generalizado de la extracción y tratamiento minero manteniendo la dependencia de determinadas sustancias, como el hierro y el oro, destinadas fundamentalmente a la exportación.
- Este aumento generalizado requerirá, forzosamente, una mayor disponibilidad de territorios para la actividad minera, generando las condiciones para el incremento de los conflictos socioambientales.

En la proyección sobre el crecimiento de la actividad minera en Brasil, la región amazónica es considerada fundamental. La mayor parte de las áreas mineras ya otorgadas en régimen de labra se extienden por el litoral sur y sudeste del país. Del mismo modo, las áreas sobre las que ya rigen derechos mineros para exploración y pesquisa se localizan, fundamentalmente, en la región centro y nordeste del país. Por último, la inmensa mayoría de las áreas que aún se encuentran en fase de requerimiento – por lo tanto, de crecimiento exponencial en el futuro – se sitúan en la región amazónica.

Las mismas conclusiones podemos extraer de la Figura X, en la que se percibe claramente que la expansión de la actividad minera en toda la región amazónica se desarrollaría, fundamentalmente, en la parte brasileña.

La actividad minera va a crecer, fundamentalmente, ocupando espacio amazónico. Desde la perspectiva empresarial, “o Brasil ainda enfrenta desafios singulares como a mineração na Amazônia e a rígida legislação ambiental vigente” (Jones *et al.*, 2011: 47). Llama la atención que para el sector privado proyectos mineros como el de Alcoa en Amapá o la Compañía Vale do Rio Doce en la Sierra de Carajás sean considerados como ejemplos de sostenibilidad y buena convivencia entre la actividad minera y la realidad

¹⁷⁶ Junto al calcáreo agrícola, se prevé el aumento de la producción de potasio (en más de 1200%) y fosfato (286%) (PNM-2030, 2011: 92).

socioambiental de la región amazónica (Jones, 2011), cuando las estimativas hablan de cerca de 3 millones de personas afectadas.

Para el poder público, la minería en la Amazonia también es uno de los principales desafíos. El Gobierno reconoce, al mismo tiempo, optimismos y preocupaciones sobre la expansión minera en la región, a la que no renuncia (PNM-2030, 2011: 57 ss). La necesidad de implementar políticas mineras diferenciadas en la Amazonia, según el Gobierno Federal, pasa por cuatro desafíos:

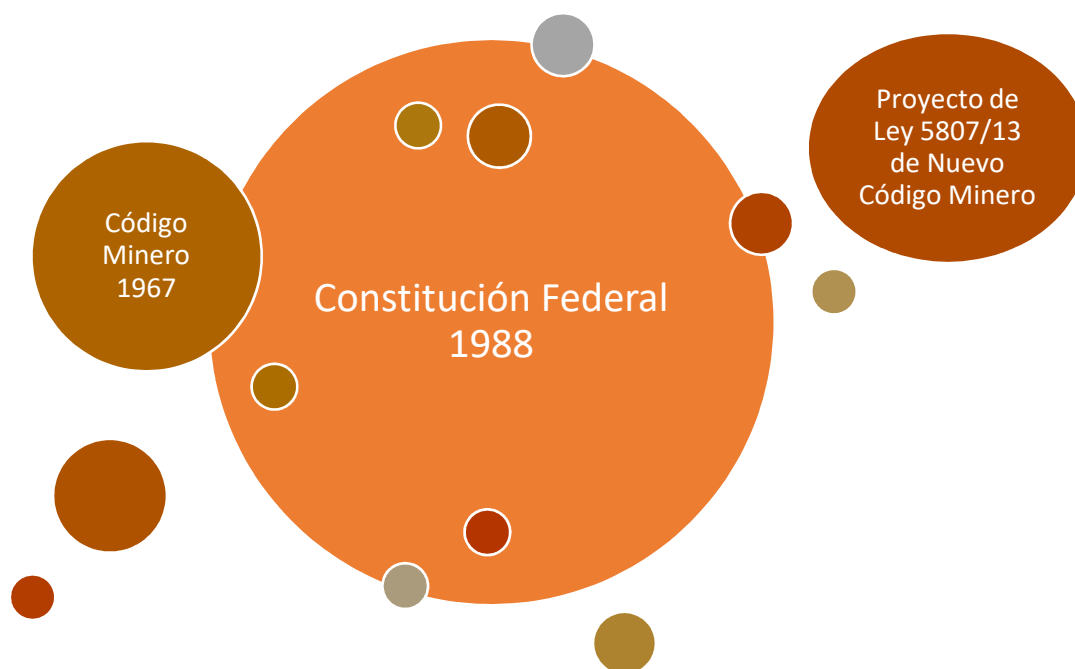
- Macro-zoneamiento Ecológico-Económico de la región;
- Considerar a la minería como un vector de desarrollo para la Amazonia, en función de las rentas generadas para Estados y Municipios amazónicos;
- Legalización de la actividad garimpeira a través del Régimen de Permiso de Labra Garimpeira;
- Liberalización de la actividad minera dentro de los territorios indígenas.

Existe una unidad de análisis entre poder público y sector privado sobre la necesidad de ampliar la actividad minera en Amazonia y sobre los cuatro desafíos que el PNM-2030 delinea. Amazonia representa, para ambos, el terreno de la expectación. La apuesta por ampliar el conocimiento geológico del país levanta expectativas principalmente hacia la región amazónica, donde “segundo o Serviço Geológico do Brasil, há uma alta probabilidade de se encontrar depósitos poli-metálicos de primeira classe (...) A região amazônica tem grande potencial para ser uma fonte de recursos minerais ainda não descobertos” (2011: 2).

Es evidente que la expansión minera sobre Amazonia comporta elementos claramente diferenciadores: la presencia de territorios de derecho (tierras indígenas, reservas extractivistas) y de territorios de protección ambiental; los conflictos por el uso del agua y de la energía; las dificultades de acceso a áreas remotas; el impacto agregado de los proyectos extractivistas; la diseminación de la minería ilegal.

7.3.2. Marco normativo de la actividad minera

Una de las claves reiteradas en el PNM-2030 es la necesidad de actualización del marco normativo vigente como condición para una mayor “gobernanza” del sector minero. El marco legal incluye un conjunto bastante amplio y extenso de instrumentos, de diversa jerarquía normativa. El Código Minero que está actualmente en vigor data de 1967 y desde 2013 circula en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley 5807/2013 para reforma de este Código; entre uno y otro, nació la actual Constitución Federal de 1988. Con esas tres referencias principales, nos proponemos un análisis de algunas de las cuestiones fundamentales sobre el sector minero.



1. La Constitución Federal de 1988

La Constitución Federal de 1988 contempla algunos dispositivos que deben enmarcar la actividad económica en términos generales y la minería en particular.

La primera cuestión sobre la que se define la Constitución tiene que ver con la propiedad de los bienes minerales. Afirma el texto que los bienes minerales, incluidos los del subsuelo, hacen parte del patrimonio de la Unión (art. 20º, IX). En el mismo artículo (20º §1) asegura a los Estados y Municipios la participación en el resultado de la explotación de los recursos minerales que tenga lugar dentro de su propio territorio.

Este primer elemento va a influir claramente en el debate; al diferenciar la propiedad del suelo de la del subsuelo (art. 176º), se abre un campo de derecho en el que muchas veces se van a tener que dirimir contradictorios. Cualquier actividad que maniobre sobre los bienes del subsuelo afectará, evidentemente, la superficie y, con ello, establecerá alteraciones al goce pleno de derechos del propietario del terreno. El debate normalmente es conducido al terreno de la política de compensación económica, asegurando al propietario de los bienes del suelo participación en la explotación de los bienes del subsuelo. Sin embargo, esta salida no agota la cuestión; menos en el caso de territorios colectivos, como el caso de las tierras indígenas, donde las condiciones de sobrevivencia física y cultural se entrelazan.

Sigue la Constitución afirmando que el aprovechamiento minero, en forma de pesquisa o labra, solamente podrá ser realizado bajo una serie de condiciones (art. 176º, §1º):

- Contar con la autorización o concesión de la Unión, a través del marco institucional y procedimental de que se dote;

- Significar una actividad económica de interés nacional;
- Ser llevada adelante por brasileños – persona física o jurídica – o empresas constituidas bajo las leyes brasileñas y con sede en el país;
- En el caso de tierras indígenas o área de frontera, requerirá el desarrollo de una ley que establezca las condiciones específicas para la actividad minera dentro de estos espacios.

La Constitución define que la exploración directa de actividad económica por parte del Estado solamente sería permitida cuando se considerase necesaria por imperativo de seguridad nacional o relevante interés colectivo, ambos a ser definidos por ley (art. 173º).

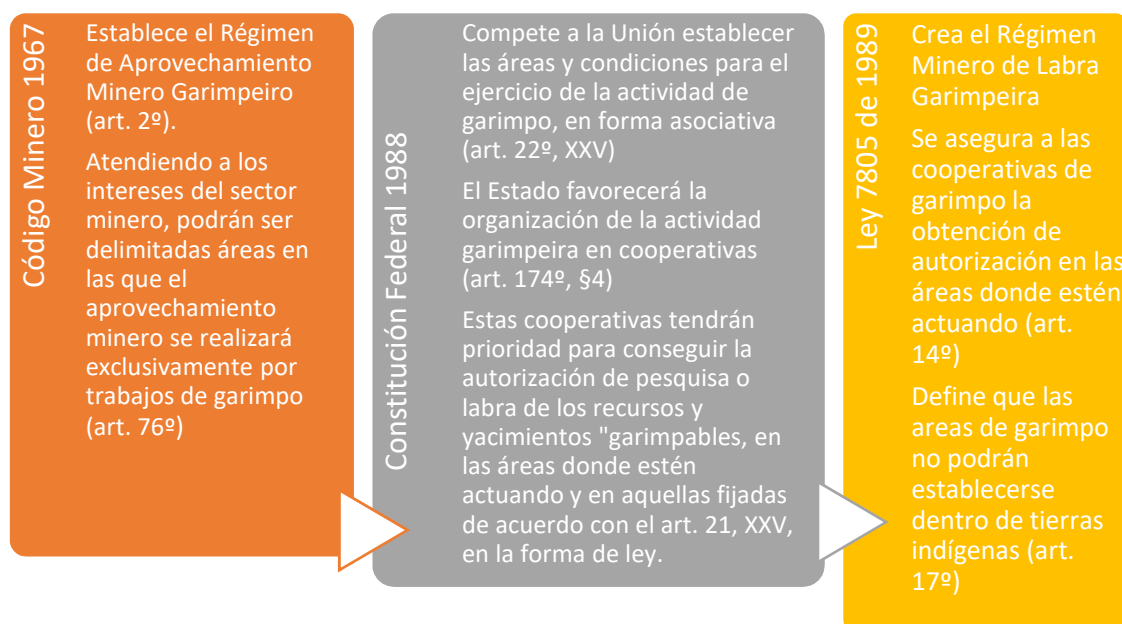
Respecto al pacto federativo – entre Unión, Estados y Municipios – ya vimos que se asegura a los tres entes la participación, en forma de ingresos, en los resultados de la actividad. Sobre la competencia legislativa, se establecen los siguientes marcos:

- Compete exclusivamente a la Unión legislar sobre yacimientos mineros, otros minerales y metalurgias (art. 22º, XII);
- Hay una competencia compartida por los tres entes federativos para registrar, acompañar y fiscalizar las concesiones de derecho de pesquisa y de exploración de bienes hídricos y minerales en sus territorios (art. 23º, XI). Esto supone un cambio respecto del Código Minero de 1967, que otorgaba la capacidad de administrar los recursos minerales exclusivamente a la Unión.
- Por último, todos los entes tienen la responsabilidad, en su ámbito, de legislar sobre responsabilidades por daños al medio ambiente (art. 24º, VIII).

En la Carta Magna se reconoce el derecho de todos los ciudadanos al medio ambiente ecológicamente equilibrado (art. 225º), responsabilizando al poder público de la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales (225º, §1). Se obliga particularmente a quienes desarrollen actividades de explotación minera a la recuperación del medio ambiente degradado (225º, §2). En el caso específico de la Amazonia, este territorio es declarado patrimonio nacional y su utilización se hará en la forma de una ley, dentro de las condiciones que aseguren la preservación del medio ambiente (225º, §4).

En cuanto a la actividad de garimpo, su viabilidad es recogida por los textos legales en los siguientes términos:

Cuadro 11. Regulación de la actividad garimpeira en la normativa brasileña.
Elaboración propia.



La Ley 7.805 de 1989 detalló los minerales considerados “garimpables”. Entre ellos, destaca el oro, diamante, casiterita, columbita, tantalita y wolframio (art. 10º, §1). Posteriormente, el Decreto 98.812 de 1990, que regula la Ley de 1989, define que será el Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM el responsable por establecer las áreas de garimpo, considerando, entre otras, razones de orden social y ambiental (art. 12º).

Por último, en lo referente a las tierras indígenas, la Constitución Federal establece que la pesquisa y labra de bienes minerales solo podrán ser efectuados dentro de estos territorios bajo tres condiciones concomitantes (art. 231º, §3):

- Autorización expresa del Congreso Nacional;
- Oitiva de las comunidades;
- Garantía de participación de las comunidades de los resultados de la labra, conforme Ley Complementaria.

Los artículos 176º §1 y 231º §3 constituyen las referencias explícitas a la minería en tierras indígenas dentro de la Constitución Federal de 1988. En el Código Minero de 1967, esta referencia no existe¹⁷⁷.

¹⁷⁷ En el artículo 10º del Código Minero de 1967 se establecen las situaciones que requerirán leyes especiales, sin hacer referencia en ningún momento a las tierras indígenas.

2. Nuevo Código Minero

Para poder analizar las modificaciones que el nuevo Código Minero pretende traer, es necesario conocer cómo funciona hasta nuestros días la normativa para acceder a títulos mineros de pesquisa y labra en Brasil

Cuadro 12. Procedimiento para la autorización de exploración y explotación minera conforme el Código Minero vigente en Brasil

El Código Mineral vigente en Brasil, que data de 1969, recoge las siguientes etapas y tipos de régimen en el procedimiento para conseguir los derechos de exploración y explotación mineral en un área.

- a) Requerimiento de Autorización de Pesquisa. Es el primer paso y puede ser solicitado por persona física o jurídica brasileña. A través de este requerimiento, se solicita permiso para identificar las características y potencialidades de un determinado yacimiento. Para ello, el titular del pedido debe confirmar antes si el área que ha identificado con potencial económico está libre de otros requerimientos similares o se encuentra dentro de la tipificación de limitaciones de uso ambiental o áreas de bloqueo. Las tierras indígenas, a pesar de que la actividad minera en su interior aún no está regulada, no se encuentran en esta tipología de áreas preservadas. Por tanto, una persona o empresa puede iniciar el requerimiento de autorización de pesquisa aun sabiendo que se trata de una tierra indígena. Todo Requerimiento es solicitado sobre lo que se denomina “área libre”.
- b) Autorización de Pesquisa. Ya configura un régimen de aprovechamiento mineral, pues implica de hecho un trabajo de campo. La Autorización es emitida por el DNPM y publicada en el Diário Oficial da União – DOU. A partir de su publicación, el titular del requerimiento tiene la obligación de realizar la exploración o pesquisa en el plazo de 60 días. En caso de necesitar autorización judicial para el acceso al área, los 60 días se contabilizarán a partir de la fecha de esta decisión del Juez. La ejecución de los trabajos deberán ceñirse a los términos del requerimiento de autorización y no podrán interrumpirse, sin justificativa, por más de 3 meses consecutivos. El resultado final de la pesquisa es un Informe, que deberá ser sometido a aprobación del DNPM.
- c) En caso de aprobación, el titular tendrá un año para requerir la Concesión de Labra o permiso para la explotación. Esta concesión ya solo puede ser requerida por una persona jurídica.
- d) Autorización de Labra en la que se concede la autorización y el derecho a la explotación de la substancia mineral considerada, estableciendo las condiciones que deben observarse.

Es fundamental comprender que los derechos otorgados para Pesquisa o Labra pueden ser cedidos o transferidos, según una serie de requisitos establecidos. Es decir, se establece la posibilidad de la transacción de derechos concedidos. Esta circunstancia podría incentivar la participación de personas físicas o personas jurídicas pequeñas en el primer tramo del procedimiento, para cesión posterior de derechos que permitan la entrada de otro tipo de actores. Al mismo tiempo, esta circunstancia contribuye a la complejidad del campo mineral y a mantener un cierto ambiente de especulación.

En julio de 2013, el Gobierno Federal presentó para consideración del Congreso Nacional el Proyecto de Ley 5.807 que significa la creación de un nuevo Código Minero. Según el Gobierno, el PL 5807 pretende, fundamentalmente, dos cosas:

- Incorporar cambios necesarios en los procedimientos de aprovechamiento mineral, con el objetivo de agilizar los dinanismos de concesión de derechos mineros;
- Introducir cambios en el aparato institucional y competencial, de modo que se asegure una participación mayor y más activa del poder público aunque se estimule la inversión del sector privado.

Con la propuesta del nuevo Código Minero, la concesión de derechos mineros solo se establecería para personas jurídicas, constituidas en forma de empresas o de cooperativas. En el Código aún vigente de 1967, personas físicas podían solicitar autorización para la pesquisa. Si les fuese concedida la autorización y desarrollasen el inventario del potencial minero del área requerida, ya no podían continuar con el pedido de concesión de labra. Sin embargo, la posibilidad regulada de cesión o transferencia de títulos – también reconocida en el PL 5807 – permitía un campo abierto para relaciones de especulación por parte de las empresas.

Otra cuestión que nos parece interesante es que se refiere al concepto de área afectada por la minería, y a la que ya nos habíamos referido con otros términos de la mano de Luiz J. Wanderley en el Capítulo 3 al hablar de la territorialización de los objetos (Wanderley, 2008: 16). En el Código Minero de 1967 se define con el término de “servidões” las áreas limítrofes a la propiedad donde se encuentra el yacimiento. Estas “servidões” serían empleadas para: instalaciones, obras secundarias o viviendas; abertura de carreteras y líneas de comunicación; captación de agua; transmisión de energía eléctrica; salida de las aguas de la mina; depósitos para estéril. En el PL 5807, el término “servidões” ya no aparece, aunque en la definición del término “mina” se dice: “área produtora do minério a partir de um depósito, a profundidades variáveis, que abrange instalações e equipamentos destinados à produção” (art. 2º, XIV).

Por último, interesa conocer el modo como el PL 5807 aborda la cuestión del llamado *derecho de prioridad*. “(...) até agora, se você encontrava uma jazida era beneficiado com um direito de prioridade para sua lavra. Isso estimulava o empreendimento em pesquisa mineral. Agora, esse direito se perde. Uma vez localizada e comprovada a jazida, ela passa a ser leiloadada em aberto. Perde-se o valor da descoberta. Quem vai estar interessado em pesquisar se isso não garante o direito de lavra por cima dos outros?”¹⁷⁸.

Algunos de los cambios que se proponen se recogen en el siguiente cuadro:

¹⁷⁸ Entrevista del autor con representante del sector minero en Roraima.

	Código Minero 1967	PL 5807 (nuevo Código Minero)
Regímenes mineros	Establecía 4 regímenes: Autorización, Concesión, Licenciamiento ¹⁷⁹ y Permiso de Labra Garimpeira ¹⁸⁰ .	Establece dos regímenes: Contrato de concesión y Autorización (destinada al aprovechamiento de minerales para empleo inmediato en la construcción civil; barro para construcción de ladrillos, tejas y afines; agua mineral; rocas ornamentales; minerales empleados como correctivo de suelo en la agricultura).
Procedimientos de autorización y concesión	Cualquier persona física o jurídica de origen brasileño, o empresa con sede en Brasil y bajo la jurisdicción brasileña: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitaba Autorización de Pesquisa. • Solicitaba Autorización para Labra mineral, conservando el derecho de prioridad. Si le fuese concebida, procedía a la fase de explotación minera. 	Los derechos mineros solo podrán ser concedidos o autorizados a personas jurídicas constituidas bajo las leyes brasileñas, en forma empresarial o de cooperativas. Para el Régimen de Concesión, se realizará primero Licitación Pública, por iniciativa del Poder Público o a demanda de cualquier interesado. El Contrato de Concesión resultante de la Licitación dispondrá sobre la pesquisa y la Labra y tendrá una duración de hasta 40 años prorrogables por períodos de 20 años. Para el Régimen de Autorización se celebrará un compromiso de adhesión.
Tasas y fiscalidad	Crea la CFEM. Crea la Tasa por Hectárea. El propietario del suelo tiene derecho a una participación en los resultados de la explotación minera por un valor correspondiente al 50% de la cantidad debida a Unión, Estados y Municipios.	Crea y cuantifica la Tasa de Fiscalización/TF a ser pagada por el titular de concesión, autorización o permiso. Establece la alícuota de 4% de los beneficios como Compensación Financiera por la Explotación Mineral/CFEM (12% Unión; 23% Estados; 65%, Municipios). Pago por la ocupación o retención del área. El propietario del suelo recibirá el valor correspondiente al 20% del total debido de CFEM.
Estructura institucional y competencias	El Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM era el responsable por el estudio de los requerimientos; la concesión o denegación de las Autorizaciones; la supervisión de la actividad minera concedida.	Crea el Consejo Nacional de Política Minera/CNPM con la atribución de proponer las directrices para la planificación y elaboración de políticas públicas sobre el sector minero, celebrar los Contratos de Concesión o expedir las Autorizaciones. Crea la Agencia Nacional de Minería/ANM, en régimen de autarquía, responsable por la regulación y gestión del aprovechamiento minero, de los contratos de concesión y de las autorizaciones. En el caso de la expedición de Autorización, podrá ser delegada en los entes federativos (Estados y Municipios)

¹⁷⁹ que hace referencia al aprovechamiento de sustancias minerales de aplicación directa en la construcción civil o en la agricultura de ámbito local o regional. Estamos hablando de arena, grava, calcáreo o diversos tipos de roca.

¹⁸⁰ Contempla la autorización para extracción de sustancias minerales con aprovechamiento inmediato que no justificarían inversiones previas en pesquisa. Estamos hablando de la figura legal del garimpo en zonas de aluvión o en tierra firme.

Se ha especulado mucho al respecto del derecho de prioridad en el caso de empresas que hubiesen iniciado requerimientos de autorización de exploración minera en tierras indígenas. La expectativa de derecho suponía que, en el caso de que la minería en tierras indígenas fuese aprobada por ley, estas empresas tendrían prioridad sobre las otras. El PL 5807, en su artículo 43º, indica que los titulares de requerimientos de pesquisa pendientes de evaluación en el DNPM tendrían hasta 90 días para manifestar su interés en el proseguimiento del proceso. Aquellos que así lo manifestasen, serán considerados como solicitantes de abertura de la licitación pública, no garantizando ningún derecho de prioridad.

El PL 5807 se tramitó en el Congreso Nacional en régimen de urgencia: Cámara de los Diputados y Senado tendrían solo 45 días cada uno para analizar el proyecto y aprobarlo. Esto generó un posicionamiento muy crítico por parte de los movimientos sociales que venían acompañando la actividad minera y sus impactos sobre la vida y los territorios de las comunidades, argumentando que el proyecto solamente había sido discutido con el sector privado minero. “Qual é a urgência em se modificar uma lei que tem mais de 40 anos (o código atual é de 1967)? O governo vem debatendo a proposta desde 2009 com os grupos econômicos, mas tratou o projeto com absoluto sigilo frente à sociedade civil, não nos permitindo conhecer e, muito menos, propor emendas ao seu conteúdo”¹⁸¹.

Otra de las principales críticas de las organizaciones sociales es la ausencia en el PL 5807 de cualquier mención a las personas y comunidades afectadas por los emprendimientos del sector. La regulación en los términos del PL 5807 podrá ampliar la cantidad y volumen de los emprendimientos mineros, así como su continuidad en el tiempo (contratos de hasta 40 años prorrogables aún por períodos de 20).

Los conflictos por el uso de la tierra, del agua y de la energía van a crecer, sin que el Código Minero aborde estas problemáticas, más allá de referencias vagas en referencia al medio ambiente, dejadas todas en las manos del actor minero privado:

- compromiso con el desarrollo sostenible y con la recuperación de los daños ambientales causados por la actividad de minería (art. 1º, V);
- el ejercicio de la actividad minera incluye la responsabilidad de la empresa por la recuperación ambiental de las áreas impactadas (art. 3º).

En ningún momento se hacen referencia a derechos fundamentales de las comunidades locales, como el derecho al territorio o el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Por otro lado, y en opinión de estas organizaciones, el régimen de concesión previa licitación, al premiar el mérito, deja el terreno muy fácil para las grandes empresas de la

¹⁸¹ Entrevista a Carlos Bittencourt, investigador de IBASE y próximo al Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. Em:

minería, que disponen de mejores condiciones de competitividad, contribuyendo con la ya crónica concentración de la actividad en manos de pocas entidades.

La participación de las grandes empresas mineras en el espacio público es cada vez mayor y más influyente. Una de las estrategias para mantener esta influencia directa es la participación en la financiación de campañas políticas, direccionando sus donaciones a las campañas de candidatos individuales - a la Presidencia de la República o como gobernadores, senadores o diputados - y a partidos políticos. O a ambos al mismo tiempo.

En las elecciones generales a la Presidencia de la República en 2010, las empresas mineras donaron hasta 45 millones de Reales a los principales partidos políticos y a las candidaturas personales de algunas de las principales figuras del escenario de ese momento¹⁸². De hecho, la victoria de Dilma Rousseff como continuadora de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, fue bien recibida por el sector de la minería (Jones *et al.*, 2011: 2).

Ya en las elecciones de 2014, con el PL 5807 en el Congreso, las empresas mineras se involucraron aún más, llegando a desembolsar más de 90 millones de reales, el doble que en la campaña anterior, consolidándose como la segunda mayor agencia financiadora de los comicios nacionales – por detrás de las empresas constructoras. Así lo reflejan los datos del gráfico Y, donde recogemos los números únicamente de las principales empresas financiadoras y que tienen como fuente las declaraciones oficiales de candidatos y partidos ante el Tribunal Superior Electoral.

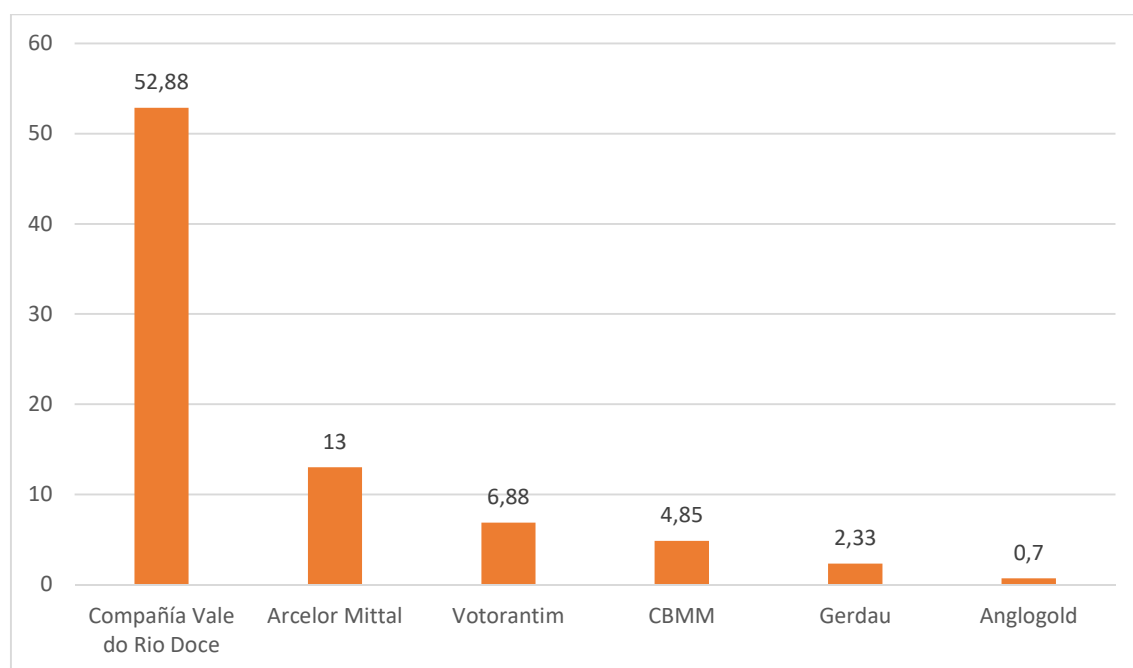
Es interesante que la financiación del espacio político por parte de las empresas mineras y metalúrgicas tienen una direccionalidad estratégica muy clara que independe de afinidades partidarias o ideológicas. Así, una misma empresa puede donar dinero para candidatos de diversos partidos políticos en función, exclusivamente, de la posición que después van a ocupar en la definición de la política minera del Estado. Por ello, los candidatos y partidos más alimentados con estas donaciones son aquellas que más posibilidades tenían de llegar al gobierno; pero, de modo particular, aquellos que iban a tener en su mano la cartera específica del sector.

Desde 2005, bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el Ministerio de Minas y Energías y todo su aparato institucional ha estado bajo la responsabilidad del PMDB. Esto hacía parte de las alianzas internas de gobernabilidad con las que el Partido de los Trabajadores intimó durante su etapa de gobierno. De ello resulta que el partido político más beneficiado con las donaciones procedentes del sector minero fuese el PMDB (24,8 millones de Reales).

¹⁸² Informaciones sobre la participación del capital minero em las elecciones de 2010 y 2014 son extraídas del Documental “Mineradoras doam mais à disputa pela Câmara”, 2014: Valor. El documental recoge datos oficiales ofrecidos levantados por la Agencia de Noticias Valor junto al Tribunal Superior Electoral. En <<https://www.youtube.com/watch?v=1Kvj5mSZ1KA>>

Del mismo modo, el PMDB fue el partido que indicó, dentro de la Cámara de los Diputados, al Relator del PL 5807, Leonardo Quintão. El diputado, miembro del PMDB, reconoció haber recibido donaciones de empresas mineras y metalúrgicas en la campaña de 2014 por un valor de 2 millones de Reales.

Gráfico 13. Donación de dinero de empresas mineras para la campaña electoral de 2014 en Brasil
(Millones de Reales). Fuente: VALOR y Tribunal Superior Electoral



Como vimos en el Capítulo 5, al describir la naturaleza de un Estado disputado y compensador, Brasil sería un reflejo de las consecuencias de la influencia del sector privado en el espacio público. De estos números, pueden detraerse dos escenarios posibles y, tal vez, concomitantes al mismo tiempo:

- Transferencia formal de beneficios económicos privados a representantes políticos, con la finalidad, tácita e implícita, de influir en las políticas públicas del sector;
- Transferencia de recursos públicos, sobredimensionados en procesos licitatorios previamente ganados por estas empresas, a representantes políticos, con el fin de mantener esquemas ilícitos de malversación e influencia política.

7.4. Tierras indígenas, derechos y minería en Brasil

En Brasil, la figura jurídico-administrativa con la que el Estado define actualmente el territorio ocupado por comunidades indígenas es el de tierra indígena. El artículo 231º de la Constitución Federal de 1988 dice que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (destaque mío). Sobre las tierras indígenas, se reconoce a las comunidades indígenas el derecho al usufructo exclusivo de sus bienes naturales, excluyendo bienes hídricos y bienes minerales del subsuelo.

La enunciación del derecho territorial de los pueblos indígenas en la Constitución Federal de 1988 encuentra amparo en la trayectoria jurídica del Estado brasileño desde la figura ya comentada del Indigenato. Las sucesivas Cartas Magnas durante el siglo XX han contemplado siempre el reconocimiento al derecho territorial, aunque no conseguían desprenderse de la carga integracionista y de tutela que se imprimía a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. La Constitución Federal rompe con la lógica de tutela y reconoce la entidad de los pueblos indígenas para representarse a sí mismos y ocupar su espacio político como sujeto colectivo de derechos.

7.4.1. Del desarrollismo del régimen militar a la Constitución Federal de 1988

En 1964, la imposición del régimen militar en Brasil generó un nuevo escenario en todo Brasil y, de un modo particular, en la región amazónica. Los primeros quince años de la dictadura militar fueron marcados por la retomada de la idea falsa de Amazonia como un “espacio vacío” a ser ocupado y la concepción de un proyecto desarrollista sobre la región, escenificado en grandes proyectos de infraestructura – carreteras e hidroeléctricas – y en el apoyo a la expansión de la frontera agrícola y minera. “Esta política de penetración se manifestó esencialmente mediante la creación de redes de comunicación y de transporte, la apertura de bases militares, la aplicación de programas de colonización, la edificación de complejos hidroeléctricos y la atracción de grandes inversiones del sector minero, agropastoril y forestal” (Albert, 2004: 321).

A este período pertenecen, entre otras, la construcción de la carretera Transamazónica o BR-230¹⁸³; la carretera BR-319¹⁸⁴ y las Hidroeléctricas de Tucuruí y Balbina, en los Estados de Amazonas y Pará. También en este período se había concebido ya la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte en el curso del Río Xingu, que ha sido retomada, planificada y construida a partir de 2006 en los últimos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

El gobierno militar se mostró particularmente activo en la Amazonia durante la década de 70, destacando la concepción estratégica de dos grandes instrumentos de planificación. De un lado, la política desarrollista sería canalizada bajo el Programa de Integración Nacional – PIN, estrategia marco del Régimen que conducía tanto las

¹⁸³ La Transamazónica tiene casi 5.000 Km de recorrido. Pretendía atravesar en sentido este-oeste toda la floresta amazónica, uniendo la región del Nordeste brasileño con el extremo occidental del Estado de Amazonas, en la frontera con Perú y Colombia.

¹⁸⁴ La BR-319 unía en sentido Sur-Norte la capital de Rondônia, Porto Velho, situada al sudeste de la Amazonia – frontera con Bolivia – con Manaus, capital del Estado de Amazonas. Esta carretera fue fundamental para conducir y diseminar los grandes contingentes migratorios de población nordestina por toda la macro-región amazónica.

políticas de infraestructura física como las de direccionamiento de fuertes contingentes poblacionales del Nordeste hacia el interior de la floresta.

Al mismo tiempo, el *Projeto Radar na Amazônia* – RADAM, levantó un conjunto complejo de datos sobre la localización y tipologías de suelos, vegetación, usos de la tierra y recursos naturales en la Amazonia. Los datos levantados por el Proyecto RADAM continúan sirviendo para estrategias regionales de planificación; por otro lado, actuó como un evidente canal de *visibilización* de áreas susceptibles de interés económico nacional e internacional. Así, buena parte del desarrollo de la actividad minera en la Amazonia va a ser una respuesta a las posibilidades abiertas por este macro-mapeo, abriendo un nuevo ciclo de conflictividad socioambiental.

Toda esta estrategia de ocupación del espacio alimentó, como decíamos, un extraordinario movimiento migratorio, incentivado y subvencionado por el Estado, que va a marcar significativamente la configuración de la sociedad amazónica en las décadas siguientes y hasta nuestros días. Bajo el lema “hombres sin tierra para una tierra sin hombres”, el Gobierno estimuló la movilización de millares de personas hacia la Amazonia, con el objetivo de servir a diversos intereses económicos y estratégicos: la expansión de la frontera agrícola y la colonización del espacio; el servicio al nuevo auge de la economía del caucho; la construcción de grandes obras de infraestructura; y la actividad minera.

Al mismo tiempo, pertenece a estas décadas de 70 y 80 la conformación del movimiento indígena en torno a la reivindicación de la tierra y que tendremos oportunidad de ver en el Capítulo 8 en relación al Estado de Roraima. Pero vale decir que es en este período cuando las asambleas indígenas se suceden a lo largo y ancho de la geografía brasileña, incorporándose a un campo de mediación interétnica en el cual tendrán que reelaborar sus propias formas organizativas para conseguir incidir en las políticas del Estado y en el reconocimiento efectivo de sus territorios. En estos primeros momentos de la movilización indígena, algunas alianzas fueron particularmente efectivas, como la que se produjo con sectores de la Iglesia Católica.

En Brasil, el papel jugado por la Iglesia católica ya venía siendo destacado desde la primera mitad de los años 70. “A Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), ligados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foram criados nos anos 70 para coordenar atividades de apoio da Igreja aos índios e às pessoas envolvidas em conflitos fundiários, basicamente na Amazônia. Através dessas organizações, a Igreja divulgava incidentes de violência, formulava sua própria crítica às políticas do governo e ajudava às populações locais a se defenderem (...) A rede de conexões entre grupos da Igreja também permitiu que as populações locais trocassem experiências” (Schmink y Wood, 2012: 157). El apoyo de agencias como el CIMI fue fundamental en determinados momentos, para salvar la “desventaja estructural: la debilidad demográfica y la dispersión geográfica de las sociedades que

representa” (Albert, 2004: 235), aunque las formas de protagonismo indígena, elemento fundamental también en la lógica de actuación del CIMI, marcaron desde el inicio el ritmo y el tono de la movilización.

En la década de 80, con la proximidad del fin del régimen militar, observamos dos momentos especialmente intensos en la acción del Estado respecto a los territorios indígenas y a la regulación de la actividad minera: el período anterior a la Constitución Federal de 1988, en el cual se intentó avanzar en la legislación minera sobre tierras indígenas; y el período constituyente que antecedió a la formulación de la nueva Constitución.

1. La regulación minera se acelera antes de la nueva Constitución Federal

En el ámbito específico de la cuestión minera, la convulsión política de los últimos años de la dictadura militar, a inicios de la década de 80, se va a reflejar por parte del Estado en una intensa agenda por delimitar y ajustar los intereses mineros frente a la realidad creciente del movimiento indígena e indigenista. El año 1983 va a ser especialmente relevante en este período.

Ese año, el todavía Gobierno militar publicó el Decreto 88.985/83 que tenía por objeto la apertura de las tierras indígenas a la explotación minera ejercida por empresas, “sob o argumento de protegê-las contra os efeitos destrutivos do garimpo”. Como ya describimos en el Cuadro 11, operaba en este momento una clara disputa, ya latente, por el acceso a los territorios indígenas que va a enfrentar a los sectores procedentes la minería ilegal del garimpo y el sector oficialista que pretende redimensionar la actividad minera con la incorporación del capital empresarial.

Ambos sectores pro-mineros, ahora en conflicto, van a adherir discursos ajenos para ganar la simpatía del imaginario político hacia sus razones. Mientras que los sectores más próximos a la actividad garimpeira reivindicaban argumentos de inclusión y justicia social con las personas que hasta ese momento se habían implicado en la actividad minera, los grupos más interesados en la intervención maciza de capital privado alertaban hacia los conflictos sociales y ambientales que el garimpo había traído a las comunidades indígenas, males que la actividad empresarial, en su perspectiva, pretendía superar.

Ese mismo año, y al calor de un debate que se estaba tensionando, el Senador roraimense Mozarildo Cavalcanti presentó en el Congreso Nacional la propuesta de Proyecto de Ley 1179/83 por la que pretendía autorizar al Poder Ejecutivo para que hiciese posible la apertura y explotación del garimpo de casiterita que había sido descubierto en 1975 por un grupo de garimpeiros en la Sierra de Surucucus, en Roraima, en pleno territorio Yanomami. La propuesta de Cavalcanti preveía un Convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno territorial de Roraima a través de la Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA y la FUNAI. En la Justificación de la

propuesta Cavalcanti asevera: “O território de Roraima atravessa atualmente uma das mais sérias crises de sua já debilitada economia, com a agricultura e a pecuária em declínio (...) A mineração, uma atividade promissora e segura, está prejudicada pela localização dos garimpos em áreas pretendidas pela FUNAI para reservas indígenas, visando abrigar as populações silvícolas. No entanto, o garimpo de Surucucus, que já foi explorado produzindo abundantemente a cassiterita, pode perfeitamente ser reativado, necessitando somente uma abertura dos entendimientos com a FUNAI (...)”.

También en 1983, el Gobernador del Territorio de Roraima de la época, Ottomar de Souza Pinto, solicitó a la FUNAI el consentimiento¹⁸⁵ para las actividades de pesquisa y extracción de casiterita en la Sierra de Surucucus, cuya responsabilidad sería confiada a la CODESAIMA. La FUNAI, en documento emitido a la Secretaria General del Ministerio del Interior, desaconseja este asentimiento, argumentando impactos sociales y ambientales severos sobre la vida y el ambiente de los Yanomami y alertando sobre la gravedad del tema: “Trata-se, portanto, de um assunto polémico, que poderá ter repercussão nacional e internacional, com acentuados reflexos na política de governo”¹⁸⁶.

En el mismo año convulso de 1983, el Ministerio de la Justicia publicó el Decreto 88.118/83 por el que retiraba de la FUNAI la competencia de la delimitación de las tierras indígenas, transfiriéndole esta responsabilidad a un grupo interministerial. Este Decreto le dio al gobierno militar “los medios para paralizar o modificar todo dossier de legalización de una tierra indígena que fuera un obstáculo para los intereses económicos públicos o privados que se quisieran favorecer (Albert, 2004: 225 [citando a Manuela Carneiro de Cunha, 1984]).

Los Decretos 88.118 y 88.985 incidían en las dos cuestiones que se van a volver fundamentales durante toda la década de 80 y hasta nuestros días: la intervención sobre la demarcación de tierras indígenas y la apertura de estos territorios a la actividad minera empresarial.

Todas estas actuaciones serán denunciadas por un grupo de organizaciones, abogados, antropólogos e indigenistas en una “Nota de Repulsa a la política indigenista del Gobierno”. “Temos assistido em 1983 ao bombardeio das comunidades indígenas por uma série de decretos governamentais e projetos de lei destinados a minar, um por um, os direitos conquistados na Constituição e no Estatuto do Índio”¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Por la legislación vigente desde enero de 1981, la pesquisa y extracción de minerales estratégicos en territorios indígenas era limitada a empresas públicas de carácter federal y dependiente del consentimiento del órgano indigenista, la FUNAI.

¹⁸⁶ Oficio nº 28/PRES/PJ/83 del Presidente de la FUNAI al Secretario General del Ministerio del Interior. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

¹⁸⁷ Nota Repulsa a la Política Indigenista del Gobierno, firmada por diversas organizaciones indigenistas. Centro de Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista/Roraima

Este escenario va a experimentar un cambio de dirección sensible en 1985, cuando el nuevo Ministro de Minas y Energías, Aureliano Chaves, publica un Orden Ministerial por la cual se paralizaba y prohibía la emisión de autorizaciones de pesquisa a las empresas que pretendiesen realizar estas tareas dentro del territorio indígena. Esta medida no fue muy bien acogida por el sector minero, como recoge un Editorial del periódico Folha de Boa Vista, de Roraima, de aquellos días¹⁸⁸. “A portaria ministerial pode representar pouco para os grandes centros do país, onde a exploração de minérios em áreas indígenas pouco representa nas receitas estaduais. Para nós, de Roraima, no entanto, representa muito, uma vez que o Território tem 45,59% de suas terras pretendidas pela FUNAI. Como então viabilizá-lo economicamente?”.

En el mismo sentido, en noviembre de 1985, el diputado roraimense João Batista Fagundes declaró que la actividad minera era la única salida con capacidad de generar renta para transformar el Estado de Roraima, pero que estaba inviabilizada por el hecho de que los minerales estaban localizados en tierras consideradas por la FUNAI como áreas indígenas¹⁸⁹. Colocaba en la FUNAI la responsabilidad por impedir el progreso económico del Estado. Afirma Fagundes que aquellos que se manifiestan contrarios a la liberación de la minería en tierras indígenas por el impacto que iría a causar “são grupos inconformados com a integração gradativa do índio à comunhão nacional”.

La tensión entre la cuestión minera y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas se va a recrudecer aún más a partir de mayo 1986, con el nombramiento de Romero Jucá Filho como nuevo presidente de la FUNAI por indicación del entonces Presidente de la República José Sarney. Creemos necesario detenernos en este punto, ya que la figura de Romero Jucá Filho en la política nacional y en la política regional de Roraima va a ser clave en esta ecuación entre derechos indígenas e intereses mineros. Es precisamente Jucá el que diez años después de su nombramiento en la FUNAI, en 1996, y ya como Senador roraimense, va a elaborar el Proyecto de Ley 1610 de Minería en Tierras Indígenas.

El paso de Jucá por la Presidencia de la FUNAI, entre 1986 y 1988, estuvo marcado por decisiones muy discutidas y episodios de gestión que concluyeron en recursos jurídico-administrativos que continúan en la Justicia hasta nuestros días. Desde el punto de vista de los derechos territoriales, Jucá reformuló los límites del entonces llamado Parque Yanomami, en el Estado de Roraima, y que habían sido reconocidos por la propia FUNAI en 1985, proponiendo ahora una fragmentación del territorio Yanomami en 19 pequeñas áreas. Esto suponía una reducción del 75% respecto de la propuesta anterior y abría el resto del territorio para reservas de extracción maderera y minera.

En 1987, bajo su presidencia, la FUNAI y el DNPM publicaron una Resolución que pretendía regular el artículo 99 del Decreto 88.985/83 que liberaba los territorios

¹⁸⁸ Folha de Boa Vista, 24 de septiembre de 1985.

¹⁸⁹ Correio Braziliense, 26 de noviembre de 1985.

indígenas para la actuación de empresas mineras, públicas y privadas. Esta medida conjunta de FUNAI y DNPM levantó ampollas en el colectivo garimpeiro, que tildó la norma de atropello a la Constitución vigente y una precipitación que iría “encender el fuego” al sector minero¹⁹⁰.

Romero Jucá, sin embargo, caracterizó la norma como “um grande avanço para aquelas comunidades que serão beneficiadas com os royalties”¹⁹¹. Jucá ponía en valor la capacidad de la resolución de conciliar la defensa de la ecología y las comunidades indígenas – puestas en peligro por la actividad garimpeira – y una normativa minera que concedía autorización exclusivamente para empresas nacionales¹⁹². En términos parecidos, el Director del DNPM en la época, Fernando Burgos, afirmaba que el principal objetivo del decreto era inhibir y prohibir la acción de los garimpeiros en las tierras indígenas¹⁹³.

Mientras partidarios del garimpo y defensores de la entrada de grandes empresas en el sector disputaban el dominio de una actividad que ambos defendían a ultranza, desde el otro lado del conflicto, Francisco Günter, Secretario Ejecutivo del Conselho Indigenista Missionário – CIMI, alertaba que con el nuevo Decreto publicado por FUNAI y DNPM las empresas mineras tendrían todo el campo abierto dentro de las tierras indígenas, lo que provocaría un genocidio. Para el CIMI, el Decreto vendría a dar legalidad a algo que ya estaba ocurriendo en la clandestinidad en diversas tierras indígenas como la de los Waimiri-Atroari, los Baniwa o los Tukano, donde empresas ya actuaban en la exploración y explotación minera¹⁹⁴.

Ya en la época, algunas entidades acompañaban y registraron los requerimientos de interés minero que se sobreponían a los territorios indígenas. El Centro Ecumênico de Documentação e Informação/CEDI, publicó diversos Informes de carácter anual con estos datos. En el primer trimestre de 1986 registraron 242 requerimientos coincidentes sobre tierras indígenas de la región amazónica con titularidad privada y 53 bajo responsabilidad de empresas estatales.

¹⁹⁰ Declaraciones de José Altino Machado, presidente de la Asociación de Garimpeiros de la Amazonia Legal, en *Jornal A Crítica*, 2 de julio de 1987.

¹⁹¹ *Jornal A Crítica*, 3 de julio de 1987.

¹⁹² Dos años después. Romero Jucá ya era Gobernador del Estado de Roraima. Preguntado en Reportaje de la TV Roraima del día 21 de octubre de 1989 sobre la decisión de la Justicia Federal de retirar todos los garimpeiros localizados dentro del territorio del pueblo Yanomami, Jucá afirmaba lo siguiente: “Essa é mais uma decisão fora da realidade da Amazônia. Nós vamos continuar nossa luta de ordenamento do garimpo, vamos continuar trabalhando para proteger o trabalho do garimpeiro (...)”. Aún sobre la decisión de la Justicia Federal sobre el território Yanomami, Jucá manifestó: “Por qué uma juíza aumenta a área indígena em mais de quatro vezes, de dois milhões de hectares ela passa para oito milhões? (...) nós vamos para a Justiça e espero que a Justiça tenha bom senso”. Transcripción de la entrevista. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

¹⁹³ *Jornal A Crítica*, 1 de julio de 1987.

¹⁹⁴ Id.

Figura 10. Tabla sobre la situación de requerimientos de pesquisa minera incidentes en tierras indígenas, enero-marzo 1986. Fuente: CEDI.

GRUPO ECONÔMICO (EMPRESA)	Nº DE ALVARÁS/UF	Alvará de pesquisa publicado no D.O.U.	Início de pesquisa em comunidades	Relatório de pesquisa enviado	Autorização de pesquisa mineral do Alvará de pesquisa publicado no D.O.U.	Decreto concessão de terra publicado	Início de terra comunicada	Relatório anual de terra apresentado	Otras
Edgar Rohnelt Min. Ltda	8/AM	8	-	-	-	-	-	-	-
ENAL - Emp. de Min. Aripuanã	6/MT	-	-	-	6	-	-	-	-
Espeng Min. e Metais Ltda	4/PA	1	1	-	-	-	-	-	2
Geoservice - Geol. e Eng. de Subsolo S/A	1/RO	1	-	-	-	-	-	-	-
Humaitã da Madeira Min. Ltda	3/RR	1	-	-	-	-	-	-	2
IMAC - Ind. Min. Alto Rio Candeias Ltda	5/RR	5	-	-	-	-	-	-	-
	1/PA	-	-	-	-	1	-	-	-
Incospal - Ind. de Conc. de São Paulo S/A	1/PA	1	-	-	-	-	-	-	-
Jangada Ind. de Mad. Ltda	1/RR	1	-	-	-	-	-	-	-
Jaruana Min. Ind. Com. Ltda	10/PA	10	-	-	-	-	-	-	-
Kilditon da Am. Ltda	6/AM	6	-	-	-	-	-	-	-
Manoel Tomaz O. Neto Cia. Ltda	4/RR	-	-	-	-	-	-	-	4
Mequinbrás - Metal Química Brasileira Ltda	1/RO	-	1	-	-	-	-	-	-

Toda esta disputa normativa y territorial se daba mientras en el Congreso Nacional se desarrollaban los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente, que también trataban específicamente de la actividad minera en tierras indígenas y de la cuestión de si el usufructo exclusivo de los recursos naturales por parte de los indios se limitaba a los bienes del suelo o se extendía al subsuelo. Es decir, podemos deducir que los sectores interesados en la regulación de la actividad minera en territorios indígenas aceleraron sus estrategias para marcar condiciones normativas antes de la conclusión de los trabajos de la Constituyente.

2. Minería, tierras indígenas y proceso constituyente

La relación entre la actividad minera y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas estuvo presente en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto fue así por la participación efectiva de los pueblos indígenas en el proceso, estableciendo alianzas con otros movimientos sociales y con entidades indigenistas y de apoyo, particularmente la Iglesia Católica.

Las propuestas que organizaciones indígenas, indigenistas y diputados constituyentes presentaron durante todo el proceso sobre la cuestión minera están enmarcadas en el conjunto de los derechos de los pueblos indígenas que se quería que la Constitución recogiese. Nos detenemos un momento en su análisis porque entendemos que ese proceso constituyente fue un espacio estratégico en el que se disputó, efectivamente, la concepción de derecho y la cuestión clave sobre la minería, que tiene que ver con la naturaleza de los bienes del subsuelo.

Vamos a servirnos de cuatro Propuestas de Enmienda al Proyecto Constitucional presentadas en 1987. Dos de ellas eran Propostas de Enmienda popular y las otras dos fueron presentadas por sendos diputados constituyentes¹⁹⁵:

- Propuesta Popular sobre “Capítulo das populações Indígenas”, de iniciativa de la Associação Brasileira de Antropologia/ABA, Coordenação Nacional dos Geólogos/CONAGE y la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/SBPC. Contaba com el apoyo más de uma decena de organizaciones indígenas, indigenistas, religiosas y profesionales.
- Propuesta Popular que “Dispõe sobre as Nações Indígenas”, de iniciativa del Conselho Indigenista Missionário/CIMI, la Associação Nacional de Apóio ao Índio/ANAI, la entidade Operação Anchieta/OPAN y el Movimento de Justiça e Direitos Humanos.
- Propuesta de Texto Constitucional para “Capítulo Das Nações Indígenas”, presentado por el Diputado Constituyente Haroldo Lima.
- Propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente del Diputado José Carlos Sabóia para incluir dispositivos en Capítulo relativo a las poblaciones indígenas.

¹⁹⁵ Fuente de estos cuatro documentos: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

Figura 11. Propuesta de Enmienda Popular al Proyecto de Constitución, Capítulo de los Pueblos Indígenas. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista - Roraima/Brasil

ABA • CONAGE • SBPC
ANAI-BA • CCPY
CDPAS • CEDI • CIB
CPI-AC • CPI-SP
CTI • IECLB • IM
INESC • IPU
PKÑ • SEESP

Agora,
a luta decisiva dos
ÍNDIOS
na Constituinte

UNI - UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS



Entidades responsáveis pelas assinaturas:
 Associação Brasileira de Antropologia • ABA: DCS/FFLCH/USP, CxP 8105, 01051, São Paulo, SP.
 Coordenação Nacional dos Geólogos • CONAGE: Rua 68, nº 727, 74000, Goiânia, GO.
 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência • SBPC: CxP 11008, 05499, São Paulo, SP.

Com o apoio de:
 Associação Nacional de Apoio ao Índio-Bahia/Comissão Pela Criação do Parque Yanomami/Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões/Centro Ecumênico de Documentação e Informação/Cenfederação Israelita do Brasil/Comissão Pró-Índio do Acre/Comissão Pró-Índio de São Paulo/Centro de Trabalho Indigenista/Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil/Igreja Metodista/Instituto de Estudos Sócio-Econômicos/Igreja Presbiteriana Unida/Projeto Kaioá-Randeva/Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo.

PROPOSTA POPULAR DE EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Capítulo das Populações Indígenas

Art.1º - A sociedade brasileira é pluriétnica.

Art.2º - Os índios gozarão dos direitos especiais previstos neste capítulo, sem prejuízo de outros instituídos por lei.

§ 1º - São reconhecidos aos índios a sua organização social, seus usos, costumes, línguas, tradições e seus di-

Art.4º - A União, no prazo de quatro anos, formalizará o reconhecimento e executará a demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas, observado o disposto no § 1º do Art. 3º.

§ 1º - O disposto no caput não exclui, do reconhecimento e da demarcação pela União, as terras de índios con-

Estas cuatro propuestas reflejan el dinamismo que el movimiento indígena y otras organizaciones sociales demostraron durante el proceso constituyente. Las cuatro propuestas inciden, con matices, en las mismas ideas:

- Reconocer el derecho de los pueblos indígenas al usufructo exclusivo de los bienes naturales del suelo, del subsuelo y de los cursos de agua.
- Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la cata, *faiscação* y actividades de minería artesanal dentro de sus tierras.
- Declarar nulos y sin efectos los actos de cualquier naturaleza que tengan por objeto el dominio, la pose, el uso, la ocupación o concesión de tierras ocupadas por los indios o de las riquezas de suelo y subsuelo.

En las propuestas presentadas por José Carlos Sabóia y las organizaciones CIMI, OPAN y ANAI se especificaba que quedaba vedada cualquier actividad extractiva de riquezas no renovables.

La propuesta presentada por las entidades ABA, CONAGE y SBPC abría una excepción en relación a la pesquisa y labra de recursos minerales en tierras indígenas: "Excepcionalmente (...) poderão ser feitas apenas pela União, em regime de monopólio, com prévia autorização dos índios que as ocupam, quando houver relevante interesse nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional para cada caso, provada a

inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno da riqueza mineral em questão em outras partes do território brasileiro”.

El Diputado José Carlos Sabóia, en un texto que recoge los argumentos de su voto a favor del proyecto de texto constitucional del Senador Almir Gabriel, y en el que se dirige a la Asamblea Nacional Constituyente, afirma que para los pueblos indígenas la mayor amenaza en el proceso constituyente estaría en las propuestas que pretenden retirar el subsuelo del principio de usufructo exclusivo. Nosotros entendemos que, efectivamente, en esta discusión de derecho estuvo una de las claves para comprender lo que hoy está sucediendo.

Se pregunta José Carlos Sabóia cómo es posible respetar el usufructo del suelo y no del subsuelo, “se a exploração desse último depende físicamente da violação do primeiro? Por acaso, alguém ignora que a exploração do subsolo pressupõe a ocupação e escavação do solo, o desmatamento, o escoamento da produção e a poluição dos rios?”.

En este tono de sentido común, creemos que Sabóia desnuda la cuestión fundamental del conflicto entre derechos contradictorios. La explotación del subsuelo reduce, limita, impide y viola el derecho al usufructo exclusivo de los bienes del suelo, dejando prácticamente sin fundamento cualquier argumento en favor de la conciliación de derechos diferentes. En el caso de los pueblos indígenas y de la relación de significación (material, social, simbólica) que establecen con el territorio, esta fractura está lejos de poder ser subsanada con lógicas compensatorias de carácter económico.

Afirma, por fin, Sabóia, que el usufructo exclusivo del subsuelo no es un mero accesorio sino un elemento orgánico “que, retirado, compromete todo o organismo”.

Otros grupos de interés en la cuestión minera ejercían su propio papel de influencia. Beneficiaba al sector minero privado la apertura plena de todos los territorios a la actividad extractiva. Al mismo tiempo, otros grupos de opinión centraban su campaña en garantizar que la Constitución restringiría la actividad minera a empresas brasileñas y, en caso de áreas de frontera y tierras indígenas, a empresas estatales de la Unión¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Jornal A Crítica, 01/06/1987. *Campanha vai defender a presença do Estado nas áreas de mineração*. [Centro Documentación Instituto Misionero Consolata, Roraima]; Jornal A Crítica, 17/07/1987. *Empresas estrangeiras com poderes limitados*. [Centro Documentación Instituto Misionero Consolata, Roraima]; Jornal A Crítica, 26/07/1987. *O minério é nosso?*. [Centro Documentación Instituto Misionero Consolata, Roraima].

Cuadro 5. Dispositivos Constitucionales sobre Minería y Tierras Indígenas, CF 1988

Art. 20. Son bienes de la Unión:

- IX – Los recursos minerales, incluso los del subsuelo.
- XI – Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios.

Art. 22. Compete privativamente a la Unión legislar sobre:

- XII – Yacimientos, minas, otros recursos minerales y metalurgia.
- XIV – Poblaciones indígenas

Art. 176. Los yacimientos, en labra o no, y otros recursos minerales y los potenciales de energía hidráulica constituyen propiedad distinta de la del suelo, para efectos de exploración o aprovechamiento, y pertenecen a la Unión.

Art. 231. Son reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes.

- §1º. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las que están habitadas por ellos en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones.
- §2º. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, siéndoles reconocido el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas.
- §3º. El aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la pesquisa y labra de las riquezas minerales en tierras indígenas solo pueden ser efectivados con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, siéndoles asegurada la participación en los resultados de la labra, en la forma de la ley.
- §4º. Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas, imprescriptibles.
- §6º. Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras a las que se refiere este artículo, o la exploración de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas, con la excepción de relevante interés público de la Unión, según lo que disponga ley complementaria, no generando la nulidad y la extinción de derecho a indemnización o a acciones contra la Unión, salvo, en la forma de la ley, en el caso de instalaciones derivadas de la ocupación de buena fe.
- §7º. No se aplica a las tierras indígenas lo dispuesto en el artículo 174, §§ 3º y 4º. *(referente a la actividad de garimpo en forma de cooperativas).*

7.4.2. De la Constitución de 1988 al (neo) desarrollismo del siglo XXI

La Constitución Federal de 1988 significó un importantísimo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Brasil, así como de sus territorios como espacios de pertenecimiento, “com configuração em tudo distinta da propriedade privada” (Duprat, 2013: 15). Abrió un escenario nuevo en el que las relaciones entre el Estado y los grupos étnicos adoptaron una nueva naturaleza, no ya marcada por la tutela sino por la configuración de los pueblos indígenas como sujetos políticos y de derecho. Además, el Decreto Legislativo 143/2002 y el Decreto Presidencial 5061/2004 amplían el marco de garantía al internalizar, dentro del derecho brasileño, lo establecido en el Convenio nº 169 de la OIT (Verdum, 2012: 11)

Tanto en los derechos territoriales como en derechos específicos sobre políticas públicas de educación, salud y medio ambiente, la capacidad política de las organizaciones indígenas e indigenistas obligó a que el Estado hiciese efectiva, en muchos casos, la garantía de los derechos reconocidos. Al mismo tiempo, todavía hay mucho por hacer. El campo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas – así como otros derechos fundamentales – continúa siendo un espacio de disputa y de permanente cuestionamiento en Brasil, en la medida en que su garantía quiebra las condiciones de otros intereses económicos. Por ello, desde la Constitución Federal, en el Congreso Nacional se han gestado diversas iniciativas que pretenden redimensionar el nivel de acuerdo alcanzado en 1988.

1. Reconocimiento de tierras indígenas a partir de la CF 1988

Desde el punto de vista territorial, el derecho de los pueblos indígenas a la pose permanente de sus territorios independe de la demarcación de las tierras (Carneiro da Cunha, 1987: 35). Es decir, tratándose de un derecho histórico, de lo que se trata solamente es de garantizar el modo como ese derecho se ejercerá, a través en este caso de la demarcación del territorio por parte del Estado. Esto es claramente comprendido por los pueblos indígenas, como demuestra esta declaración de una líder comunitária de la comunidad de Maturuca, Raposa Serra do Sol: “Antes da terra [ser] demarcada, quer dizer, já era ocupada por nós indígenas, mas como dizem os brancos que tinha que demarcar, que tinha que ter limites, tinha que ter tudo isso que eles inventam (...)”¹⁹⁷.

La CF de 1988 atribuyó al Poder Ejecutivo el deber de demarcar y homologar los territorios indígenas y para ello concedió un plazo de 5 años a partir de la promulgación de la Carta Magna¹⁹⁸. En 1996, ocho años después de la Constitución, se publicó el

¹⁹⁷ Declaración realizada por representantes de organizaciones sociales e indígenas en el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014.

¹⁹⁸ No era la primera vez que se establecía este plazo. Con la promulgación del Estatuto do Índio, en 1973, también se fijó un plazo de cinco años para la conclusión de las demarcaciones de todas las tierras indígenas del país (Carneiro da Cunha, 1987: 34). Esto llevó a algunos abogados a sugerir en 1986 que la nueva Constitución debería establecer esta obligación del Estado a través de una disposición transitoria,

Decreto 1775 cuyo objeto era la descripción del procedimiento administrativo para demarcar y homologar el reconocimiento de una tierra indígena. El Decreto fija, básicamente, las siguientes etapas:

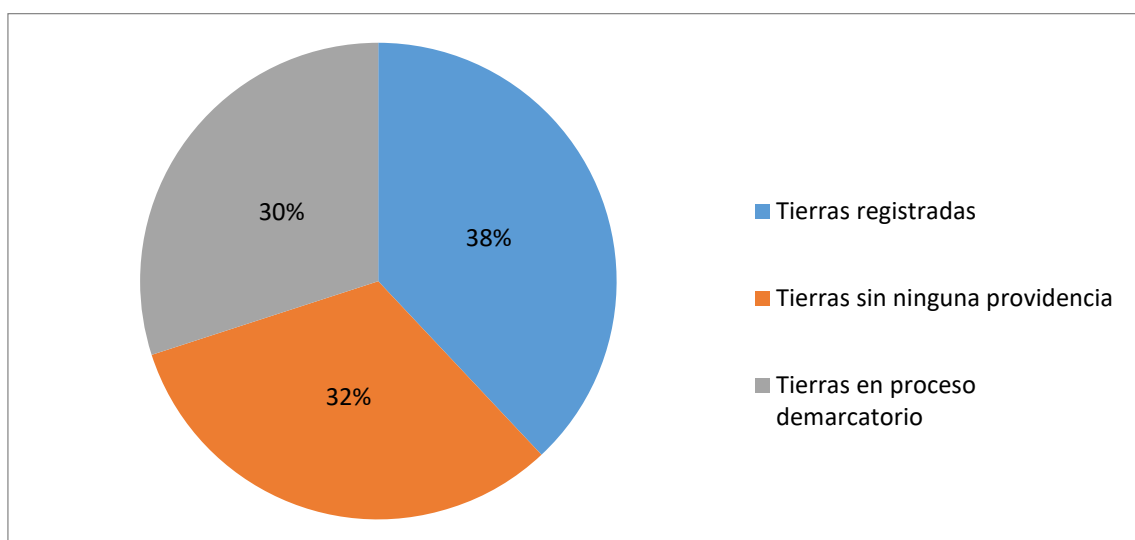
- a) Identificación y delimitación del área, a través de estudios multidisciplinarios de los cuales se responsabiliza la FUNAI, órgano dependiente del Ministerio de la Justicia.
- b) Demarcación o declaración de los límites por parte del Ministro de la Justicia.
- c) Homologación de la demarcación por parte de la Presidencia de la República.
- d) Registro de la tierra indígena en la Secretaría del Patrimonio Público.

Todas estas etapas contemplan la posibilidad de que terceros - personas físicas o jurídicas - puedan presentar recursos o reivindicar sus derechos contradictorios sobre el territorio, lo que en muchas ocasiones ha llevado a la judicialización de los procesos demarcatorios durante años.

Según el Consejo Indigenista Misionero – CIMI (2014), en 2013, sobre un total de 1047 tierras habitadas y/o reivindicadas por pueblos indígenas en todo Brasil, tan sólo el 38% había concluido todo el proceso demarcatorio y se encontraban en el registro del patrimonio público, de las cuales el 98,75% en términos de extensión territorial se localizaban en la Amazonia. En el otro extremo, aún no se había iniciado ningún tipo de providencias sobre el 32% de las tierras indígenas, mientras que el restante 30% se encontraba en alguna de las fases previstas por el Decreto 1775/96.

Gráfico 14. Situación general de las Tierras Indígenas en Brasil, diciembre de 2013.

Fuente: CIMI, 2014



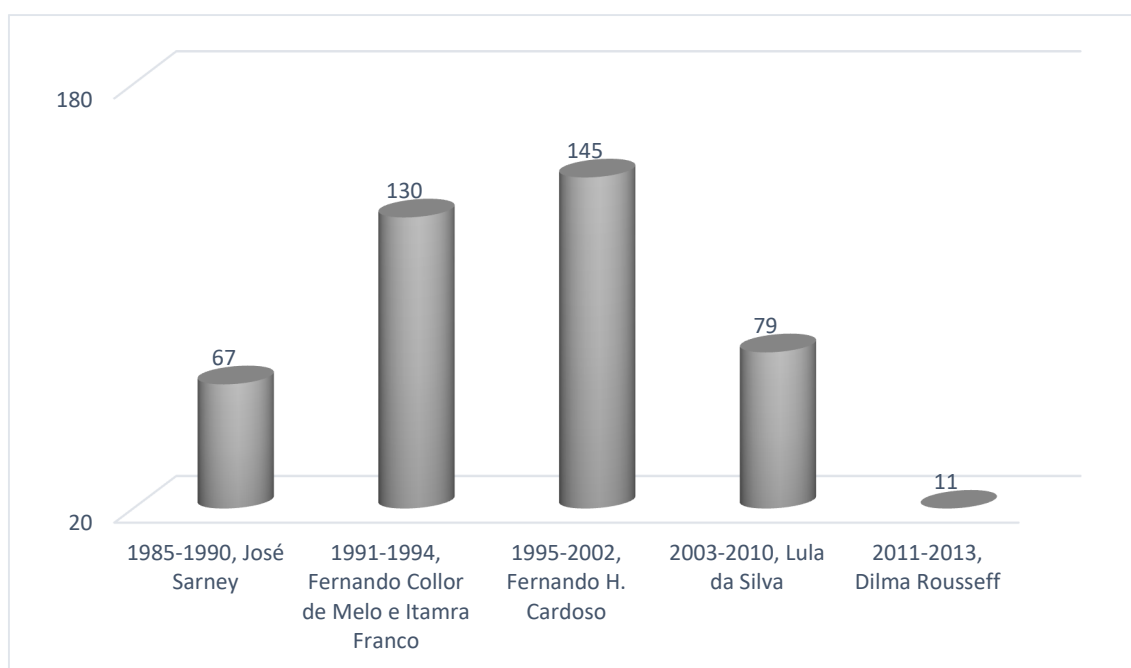
incluyendo la posibilidad de que los propios pueblos indígenas auto-demarcasen sus territorios pidiendo en seguida su homologación administrativa y judicial (citado en Carneiro da Cunha, 1987: 35-36).

Después 25 años de la promulgación de la Constitución Federal, estos datos nos revelan un desempeño cuanto menos muy ralentizado de la política pública de reconocimiento de tierras indígenas por parte del Estado brasileño.

Según datos de la misma entidad, se observa un descenso importante en el número de tierras indígenas homologadas durante el período 2003-2013, el cual hemos identificado como el de mayor expansión del modelo extractivo-exportador en el país. Esto contrarrestaría la argumentación por algunos sectores políticos y económicos relacionados con el Congreso Nacional que relacionan el aumento de la conflictividad territorial en los últimos años con el supuesto aumento de los procesos demarcatorios de tierras indígenas. Al contrario, todo indica que se ha producido una disminución de esos procesos unidos a una judicialización de los mismos a través de la interposición de recursos por terceros que se dirían perjudicados por la demarcación de la tierra indígena.

Gráfico 15. Número de Tierras Indígenas homologadas por períodos de gobierno, 1985-2013.

Fuente: CIMI, 2014. Los períodos temporales son desiguales porque corresponden a los períodos de los diversos Gobiernos que ha habido desde la Constitución Federal hasta nuestros días: 1985-1990, gobiernos de José Sarney; 1991-1994, gobiernos de Fernando Collor de Melo e Itamar Franco; 1995-2002, gobiernos de Fernando Henrique Cardoso; 2003-2010, gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva; 2011-2013, primer gobierno de Dilma Rousseff.



En sucesivos cursos presupuestarios, la cantidad asignada por el Gobierno para la política de demarcación de tierras indígenas no fue aplicada en su totalidad. En 2012, por ejemplo, tan solo fue liquidado el 37,8% de los casi 16 millones de Reales proyectados para este fin (CIMI, 2013c: 11). Un año después, en 2013, la ejecución presupuestaria en este ítem no llegó al 25%, mientras que de lo proyectado para la

política de Gestión Ambiental en las tierras indígenas solamente se ejecutó un 8,85% (CIMI, 2014:28). El CIMI caracteriza esta actitud reiterada como una negligencia y un tipo particular de violencia institucionalizada.

Es lícito establecer una relación entre la morosidad del Gobierno y su interés en desarrollar políticas de crecimiento que necesitan un control de los territorios para mayor expansión de la frontera económica. Ya en 1987 Manuela Carneiro da Cunha afirmaba que “a demora na demarcação de terras deixa patente a força dos interesses antiindígenas” (1987: 35), tesis que corroboran en la actualidad organizaciones indígenas e indigenistas, juristas y entidades de defensa de los derechos humanos.

2. Retroceso y desmonte de derechos constitucionales

Este panorama se da al mismo tiempo que circulan dentro del Congreso Nacional o a iniciativa del Ejecutivo diversas proposiciones de ley que podrían suponer una reducción, revisión o anulación de los derechos reconocidos en el marco constitucional, en lo que Márcio Santilli denomina “temporada de ataque a los territorios de la diversidad” (Santilli, 2014: 304 ss), extendiéndolo también a los territorios de otros grupos sociales. Este es el convencimiento de numerosas entidades de derecho, asociaciones y movimientos sociales, organizaciones indígenas y grupos ligados a la defensa de los derechos humanos y a la Iglesia Católica.

Entre estas iniciativas de ley se incluye la Propuesta de Enmienda a la Constitución PEC 215/00. Dicha propuesta propone modificar las reglas del juego que determinan el procedimiento legal para el reconocimiento de las tierras indígenas en el país. La propuesta continúa siendo discutida en el Congreso Nacional y, de ser aprobada, transformaría las condiciones y los procesos legales y administrativos para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre sus diversas contradicciones, queríamos detenernos en dos.

La primera de ellas es la propuesta de que la competencia de aprobación de la demarcación de una tierra pase del Ejecutivo, como está recogido actualmente en la Constitución, al Legislativo. Se trata de una inversión de funciones, dotando al Congreso Nacional de funciones ejecutivas de un derecho que ya ha sido plenamente reconocido. De este modo, la garantía de derecho para cada tierra indígena particular sería objeto de fuerte disputa parlamentaria.

Un segundo elemento de distorsión que incorpora la PEC 215 es que las Asambleas Legislativas de los diversos Estados sean obligatoriamente consultadas en caso de demarcación de las tierras indígenas en sus respectivos Estados. En la actualidad, los poderes instituidos en los Estados de la Federación tienen derecho a entrar con recursos como parte que puede sentirse perjudicada por un proceso demarcatorio en su área. Es esto lo que ocurrió con la TI Raposa Serra do Sol. Pero una cosa es tener el derecho al contradictorio en la vía judicial y otra asumir una palabra de peso en el propio proceso

demarcatorio. Se revela aquí un doble peligro perverso: de un lado, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas podría ser respetada de forma diferente en uno u otro lugar del país en función de la actuación de los gobiernos regionales; de otro lado, se abriría un nuevo escenario de posibles alianzas político-económicas entre los poderes legislativos de los Estados y el Congreso Nacional, con la interferencia de quien tiene interés económico en determinado territorio.

En los últimos años, se ha dado una compleja trama de articulaciones políticas en las cuales la PEC 215 jugó un papel singular, sea como causa que agrega adeptos entre las filas más conservadoras del Congreso – independientemente del partido o del Estado de referencia¹⁹⁹ - sea como moneda de cambio para ganar el favor de estos sectores a otras medidas políticas que precisan de su voto. Prestigiosos juristas y constitucionalistas han alertado sobre el carácter plenamente inconstitucional de la propuesta. “A Constituição não deu direito à demarcação. Deu direito à terra. A demarcação é só o jeito de dizer qual é a terra. Quando se coloca todo o direito sobre a demarcação, se retira o direito à terra, porque aí o direito à terra só irá existir se houver demarcação. É isso que está prescrito na PEC: que não há mais direitos originários sobre a terra. Aí, muda a Constituição na essência do direito colocado”²⁰⁰.

Junto a la PEC 215, fue también lanzado el Proyecto de Ley Parlamentar – PLP 227/12 que, junto a otro PLP anterior, proponen legislar lo que deba entenderse como “interés público de la Unión”. Recordemos que la Constitución Federal de 1988 determina el derecho al usufructo exclusivo de los bienes naturales por parte de los pueblos indígenas en sus territorios con la excepción de actos de relevante interés de la Unión – del país – y con carácter excepcional. Lo que sea “relevante interés de la Unión” se convierte en un concepto disputado. Este PLP 227/12, apoyado desde los sectores más conservadores del Congreso Nacional, pretende determinar a qué actos nos estaríamos refiriendo, y entre ellos propone:

- Exploración y aprovechamiento de yacimientos mineros;
- Aprovechamiento de potenciales hidráulicos;
- Uso y ocupación de tierras públicas destinadas a la construcción de oleoductos, gaseoductos, carreteras y líneas ferroviarias, puertos, aeropuertos o líneas de transmisión;

¹⁹⁹ El Congreso Nacional de Brasil está permeado por alianzas de diputados que se agregan en función de interés común en diferentes causas políticas. Así, la llamada “bancada ruralista” reúne a aquellos diputados, de diversos partidos políticos y lugares de procedencia, que se alinean en la defensa del sistema de agronegocio y de los grandes proyectos extractivos y de infraestructura. Estas formaciones de interés llegan a tener pautas de acción común muy intensas durante una legislatura, con una disciplina y cohesión interna mayor, a veces que la de los propios partidos. Ejercen una presión extraordinaria sobre el Ejecutivo y la Mesa del Congreso para que sean aprobadas medidas legislativas. Para ello, colocan en el juego de la negociación política su apoyo a otras medidas de interés del Gobierno en función de la aprobación de sus demandas.

²⁰⁰ Entrevista con Dalmo de Abreu Dallari y Carlos Frederico Marés: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=7080>>

- Núcleos semi-urbanos originados recientemente en franjas próximas a las fronteras nacionales.

Todas estas concreciones afectan gravemente a decenas de territorios indígenas. De ser aprobado en estos términos, se estaría sometiendo el ejercicio de un derecho fundamental a una serie de circunstancias no necesariamente excepcionales sino relacionadas estrechamente con el avance de la frontera económica.

En el ámbito del Ejecutivo, no han faltado en los últimos años iniciativas de ley que, si fuesen aplicadas, también resultarían en una disminución objetiva del ejercicio del derecho territorial de las comunidades indígenas. Algunas de estas medidas persiguen la “simplificación” o reducción de las condicionalidades y los plazos establecidos por ley para determinar la idoneidad o no de un proyecto de infraestructura o emprendimiento económico. Un ejemplo es la Ordenanza Ministerial 419/11, por la cual disminuyen sensiblemente los plazos que órganos públicos como IBAMA o FUNAI tendrían para manifestarse en relación a la viabilidad ambiental de un emprendimiento o la afectación de una tierra indígena.

En 2014, el Ministerio de la Justicia presentó una propuesta de Ordenanza que pretendía modificar el procedimiento administrativo para la demarcación de tierras indígenas fijado en el Decreto 1775/96. Formalmente, la propuesta perseguía el objetivo de reducir la excesiva judicialización de estos procesos.

Sin embargo, en el parecer de juristas, organizaciones indígenas e indigenistas²⁰¹, lo que significaba era una burocratización administrativa mucho más compleja y un paraguas para mayor cobertura de los intereses privados de quienes se sintiesen perjudicados por las demarcaciones. La propuesta fue rechazada por los representantes indígenas y de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Política Indigenista – CNPI²⁰². El jurista y constitucionalista Dalmo de Abreu Dallari, además de denunciar el absurdo jurídico de pretender legislar estas cuestiones a través de una ordenanza ministerial, alerta sobre esta tentativa de “emaranhado burocrático, prevendo tantas e tais interferencias nos procedimentos de demarcação que cada um deles levará muitos anos para ser concluído”.

Esta propuesta del Gobierno de Dilma Rousseff recupera el tono del Decreto 88.118 de 1983 que ya fue comentado en este Capítulo, y que también retiraba de la FUNAI el procedimiento demarcatorio delegándolo, como ahora, en un grupo técnico interministerial con el objetivo de considerar cuestiones como la vocación agrícola del

²⁰¹ *Parecer sobre Minuta da Portaria do Ministérios da Justiça*

²⁰² La CNPI fue creada en 2007 como un órgano consultivo del Ejecutivo en materia de política indigenista del Estado brasileño. Se configura como un órgano paritario, en el cual se da la representación equitativa de representantes del Gobierno Federal y de la sociedad civil, principalmente de las organizaciones indígenas. El CIMI y el CTI hacen parte de la CNPI como organizaciones indigenistas.

territorio en cuestión y su posible identificación con intereses particulares o incluso públicos de la Unión.

El escenario de permanente cuestionamiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas coincide con un período en el que estos espacios sociales soportan una fuerte presión de las fronteras económicas. “A invasão das terras indígenas por não-índios para a exploração ilegal dos recursos naturais é uma realidade que atinge quase toda terra indígena no país. Embora a Constituição Federal garanta a posse permanente aos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e o direito de usufruto exclusivo sobre os recursos naturais nelas existentes (art. 231, §2º), esses preceitos não são efetivamente respeitados, o que provoca muitos conflitos e impactos para as comunidades” (Volpato Curi, 2007: 222).

Junto a la ralentización o paralización de la demarcación de nuevos territorios indígenas, Costa Delgado define la presión “por la incorporación de nuevas áreas al espacio económico explorado” (Costa Delgado, 2010: 10). Es decir, se requiere ampliar el área de plantío para las *commodities* agrícolas o el acceso a territorios ricos en minerales hasta ahora no explotados. Se trata de una importante transferencia de tierras, particulares o públicas, al control directo de emprendimientos extractivo-exportadores, lo que exigirá reducir, limitar o anular otros derechos de posesión u ocupación que pudiesen existir sobre dichas áreas.

En 2014, el CIMI documentó un total de 519 emprendimientos de diversos tipos que afectaban directamente 437 tierras indígenas, habitadas por 204 grupos étnicos (Feitosa y Brighenti, 2014). Más de la mitad de los emprendimientos se relacionaban con proyectos energéticos. La diseminación de los proyectos extractivos, su gigantismo y volumen, unidos a la intensidad y determinación con la que empresas privadas y Estado brasileño están comprometidos con esta nueva ola de política desarrollista dibuja un cuadro en el que podemos afirmar que las tierras indígenas son uno de los principales objetivos del modelo extractivo-exportador.

Ricardo Verdum y el INESC también registran que al menos 43 grandes obras de transporte – terrestre o fluvial – previstas en 2012 sobre la Amazonia brasileña afectan directa o indirectamente territorios indígenas; al mismo tiempo que, basándose en datos de la FUNAI, alertan que veinte pueblos indígenas podrán ser afectados por la construcción de hidroeléctricas si se cumple lo programado por el Gobierno (Verdum, 2012).

En el ámbito específico de la minería, el Instituto SocioAmbiental/ISA registró en 2013 (Rolla y Ricardo, 2013) hasta 4.116 requerimientos de autorización para pesquisa protocolados en las delegaciones del DNPM e incidentes en 147 tierras indígenas. Estos más de cuatro mil requerimientos se dividían entre 379 titulares, entre personas físicas y jurídicas.

Además, registraron otros 104 procesos que ya disponen de algún tipo de permiso: autorización para pesquisa, requerimientos o concesiones de labra o permisos de labra garimpeira. Estos procesos afectaban a 29 tierras indígenas de la región amazónica.

El estudio del ISA llama la atención hacia las tierras indígenas cuya área afectada directamente por los requerimientos significaba más del 50% del tamaño total del territorio de la comunidad, haciendo prácticamente imposible las condiciones de usufructo de los bienes del suelo ni de sobrevivencia física y cultural:

- Entre las tierras indígenas con más de 1 millón de hectáreas, seis de ellas tendrían comprometido más del 50% de su área;
- Entre las tierras con extensión de 100.000 a un millón de hectáreas, 11 territorios se encontrarían en esta situación;

Y entre las menores de 100.000 hectáreas, 51 tierras indígenas tendrán afectado más del 50% de su área. 26 de ellas serían ocupadas en un 80% del territorio y 7 de ellas con más del 90%.

3. *Propuestas para regularizar la minería en tierras indígenas*

Posiblemente, uno de los indicadores más clarividentes de las dificultades que el Estado brasileño tiene para asumir las nuevas condiciones en su relación con los pueblos indígenas establecidas en la Constitución Federal de 1988 sea la manutención hasta nuestros días del Estatuto do Índio aprobado en 1973 por el régimen militar. Después de más de 40 años de ese Estatuto, y a casi 30 de la promulgación de la nueva Constitución, los diversos Congresos Nacionales y Gobiernos que asumieron responsabilidades desde 1988 no han sido capaces ni mostrado interés en modificar esta norma. La fórmula del Estatuto debería recoger y desarrollar en su articulado la naturaleza de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, siendo un instrumento de derecho sensible y fundamental.

En octubre de 1991 se presentó en la Cámara de los Diputados el Proyecto de Ley 2.057 que significaría un nuevo *Estatuto das Sociedades Indígenas*, substituyendo el anterior y actualizando la cuestión al nuevo escenario constitucional. La redacción final del PL 2.057/91 incluyó tres proyectos anteriores, uno de los cuales fue elaborado por el CIMI.

Posteriormente, fue creada una Comisión Especial para estudio de la viabilidad de este Proyecto de Ley y esta Comisión presentó hasta 1994 diversos pareceres favorables al Proyecto, una vez contempladas las más de 100 enmiendas realizadas por diversos parlamentares y los diversos proyectos de ley anexados al PL 2.057. En 1994 se paralizó la tramitación, que solamente sería retomada por la Cámara de los Diputados a partir de 1999. Desde entonces, y tras sucesivas peticiones no atendidas para que sea discutido en Plenario, el proyecto continúa sin decisión y se mantiene en vigor el Estatuto do Índio de 1973.

En 2009, a instancias de los representantes indígenas e indigenistas de la Comisión Nacional de Política Indigenista-CNPI, se desarrollaron en diversos lugares de Brasil asambleas indígenas para actualizar el PL 2057/91. Fruto de este proceso es la propuesta de nuevo Estatuto dos Povos Indígenas, aprobada por la CNPI y entregada al Gobierno y al Presidente de la Cámara de los Diputados en la época.

Las organizaciones indígenas e indigenistas han defendido siempre que la cuestión de una eventual apertura de las tierras indígenas a la actividad minera debe ser enmarcada en la discusión global sobre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas establecida en un nuevo Estatuto. Por ello, dentro de ambas iniciativas, PL 2057/91 y proyecto de la CNPI de nuevo Estatuto, encontramos propuestas relacionadas a la minería dentro de los territorios indígenas.

En una trayectoria paralela, el Congreso Nacional siempre ha pretendido regular de modo específico la actividad minera dentro de los territorios indígenas. Si en 1983, como ya explicamos, esta cuestión fue objeto del Decreto 88.985 del Ministerio de la Justicia de la época, en la década de 1990 el tema vuelve a la escena parlamentaria. En 1996 el Senado federal aprobó y elevó a la Cámara de los Diputados el Proyecto de Ley 1.610, que dispone sobre “la exploración y el aprovechamiento de recursos minerales en tierras indígenas, de lo que tratan los artículos 176 § 1º e 231 § 3º de la Constitución Federal”. El autor del Proyecto de Ley es el Senador Romero Jucá Filho, de Roraima, del que ya hablamos en su etapa como Presidente de la FUNAI entre 1986 y 1988.

Al PL 1610/96 se han anexado otros cuatro proyectos de ley que trataban de la misma materia y que fueron elaborados posteriormente²⁰³. Al mismo tiempo, se han presentado decenas de Enmiendas al texto original y al Texto Substitutivo del PL 1610/1996. El texto ha pasado por diversas Comisiones Especiales dentro de la Cámara de los Diputados. Por todos estos motivos, podemos decir que el PL 1610/96 representa el conjunto de los proyectos legislativos, pareceres y enmiendas que el Congreso Nacional ha acogido en torno a la materia, independientemente de las propuestas contempladas en los proyectos de nuevo Estatuto de los Pueblos Indígenas. La última versión de Substitutivo del PL 1610/96 ha sido redactada por el Diputado Federal Édio López, también del Estado de Roraima y miembro del PMDB, el mismo partido que Romero Jucá.

Lo que está en juego para los sectores afines a la explotación minera es la regulación de la excepción abierta por la CF 1988 en el apartado §6 del artículo 231º: “Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras a las que se refiere este artículo, o la exploración de

²⁰³ Se trata de los PL 7099/2006, 5265/2009, 3509/2015 y 5335/2016, según información de la Cámara de los Diputados, en:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_arvore_tramitacoes;jsessionid=E834BCD1A9BCD60D05760A6F89C1B86C.proposicoesWeb2?idProposicao=16969>

las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas, *con la excepción de relevante interés público de la Unión*, según lo que disponga ley complementaria, (...)”.

La tramitación del PL 1610/96 corre en paralelo, pero confluentemente, con el análisis del nuevo Código Minero. El Gobierno Federal ha manifestado en diversas ocasiones que la apertura de las tierras indígenas a la explotación minera es una medida deseable y que crearía las condiciones para un avance en el sector minero, conforme está explicitado en el PNM-2030. Si bien nunca ha manifestado adhesión al PL 1610/96, e incluso presentó diversas propuestas propias entre 2006 y 2008, su política minera pasa por la ampliación de tierras disponibles, teniendo como foco las tierras indígenas.

Este sería el campo jurídico actual en el que se disputa la cuestión de la actividad minera en tierras indígenas, atravesado por dos conjuntos de instrumentos:

- Instrumentos ya efectivos y en vigor: Código Minero (1967), Estatuto do Índio (1973), Constitución Federal (1988), Convenio nº 169 de la OIT (1989) y otros instrumentos del Derecho Internacional descritos en el Capítulo 5;
- Instrumentos en tramitación: PL1610/96; PL 5.027/91 y Proyecto de la CNPI (1989).

Nos proponemos a continuación describir los principales elementos divergentes.

Sobre la naturaleza de la ley

La Constitución Federal de 1988 estableció que la eventual regulación de la actividad minera en tierras indígenas debería ser desarrollada a través de una Ley Complementaria que debe establecer lo que, según el Congreso Nacional, es o no es “de relevante interés público de la Unión”. Según analistas, organizaciones indígenas e indigenistas, el PL 1610/96 no tiene esta naturaleza jurídica de ley complementaria, por lo que se vería necesitado de otros proyectos legislativos asociados en la misma perspectiva.

Además, en consideración de algunos analistas, cualquier ley cuyo objetivo sea complementar – no modificar – la Constitución Federal parte de la premisa de que va a regular actos que son compatibles con los derechos fundamentales ya consagrados en la Constitución. Es decir, en este caso, regulará actos que puedan ser practicados en tierras indígenas sin menoscabar sus derechos colectivos²⁰⁴. De ese modo, aunque la Constitución haya dejado abierta esta posibilidad, el tono y el sentido de una ley complementaria no podría reducir, disminuir o anular de hecho los derechos territoriales contemplados en la Constitución o aquellos procedentes de tratados internacionales que Brasil ha adoptado como norma, como es el caso de la Convención 169 de la OIT.

²⁰⁴ Cusinski, Adelar (2012). Parecer sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.610 de 1996. CIMI: Asesoría Jurídica, Documento Inédito.

Sobre el relevante interés público

Este parece ser el concepto socio-jurídico-político sobre el que se ejercerá toda la presión. Según Villas Bôas (2013: 7), en 1990 ya hubo un primer intento de regular el concepto de relevante interés público a efectos del art. 231º § 6, y fue a través del Proyecto de Ley Complementario 260/90 que establecía, entre otras situaciones, “la necesidad de exploración de riquezas naturales imprescindibles a la soberanía o al desarrollo nacional”. Sin embargo, este proyecto de ley no siguió adelante.

En 2012, más de 20 años después, fue presentado en la Cámara de los Diputados el Proyecto de Ley Parlamentar 227, al que ya nos habíamos referido anteriormente. Este proyecto de ley considera que, para efectos de demarcación de tierras indígenas, deben considerarse como actos de relevante interés público:

- Asentamientos rurales en programas de reforma agraria;
- La exploración y aprovechamiento de yacimientos mineros;
- El aprovechamiento de potenciales hidráulicos;
- El uso y aprovechamiento de tierras públicas destinadas a la construcción de oleoductos, gasoductos, carreteras y ferrovías, puertos fluviales y marítimos, aeropuertos y líneas de transmisión;
- Las ocupaciones de tierras públicas en la franja de fronteras resultantes de las formaciones de núcleos poblacionales, *vilas* y agrupamientos urbanos;
- Los campos de entrenamiento militar.

El abanico de situaciones que el proyecto de ley contempla como de relevante interés es amplísimo y recoge, precisamente, buena parte de las actividades económicas que se relacionan con el avance de la frontera extractivista sobre la región amazónica. Además, al no especificar las condiciones que se deberían dar para que estos actos constituyesen relevante interés público, parece que el PL 227 los configura como *siempre relevantes al interés público*, y, por tanto, siempre prioritarios a la demarcación de tierras indígenas. Lo que significa que definitivamente el derecho originario de los pueblos indígenas queda sometido a los intereses económicos que en cada momento puedan ser considerados por el Congreso Nacional. Hay una alteración severa de la naturaleza originaria de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus territorios y del carácter de inalienables e indisponibles que éstos gozan (CIMI, 2013).

Resta, por tanto, una crítica a la racionalidad instrumental que sigue el concepto de relevante interés público para el PLP 227. Acogemos las palabras de la Vice-Procuradora General del Ministerio Público Federal/MPF, Deborah DuPrat, cuando dice: “Nós negamos qualquer possibilidade de compreensão de que a atividade de mineração é sempre uma atividade que interessa à União porque a União não é gestora dos interesses apenas econômicos desse Estado nacional, é gestora também de vários outros interesses, como é a questão do pluralismo social étnico e cultural da sociedade

brasileira”²⁰⁵. En otro texto, Duprat recuerda que la defensa de la diversidad cultural debe ser para los Estados nacionales un imperativo ético, inseparable de la dignidad de la persona humana, a partir de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2013: 11).

La argumentación de la Vice-Procuradora afecta claramente a la discusión sobre la naturaleza del Estado, discusión que habíamos abordado en el Capítulo 5 al referirnos al Estado resultante del período (neo) extractivista. Efectivamente, el Estado no puede ser guardián de intereses exclusivamente económicos y el interés público no puede narrarse exclusivamente en esta dimensión economicista. La diversidad sociocultural, los saberes populares, la convivencia social, la coherencia institucional, la garantía de los derechos fundamentales, el medio ambiente, la memoria histórica, la sostenibilidad económica, la pluralidad ética y simbólica o las perspectivas para las generaciones futuras, entre muchas otras cuestiones, son consustanciales al relevante interés público de la sociedad. Todos ellos deben ser salvaguardados; por eso, la Constitución Federal, al referirse en el artículo 231º § 6 a ese relevante interés público, lo hacía en los términos de destacar *excepcionalidades* que se excluirían, por fuerza mayor, de lo que realmente la Constitución está determinando y que se halla explícito en la primera parte del texto: que son nulos y extintos el dominio y la pose de las tierras indígenas, o la exploración de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas. Nulidad y extinción que se determinan para mejor garantía del derecho originario de los pueblos indígenas a la tierra.

Vilas Bôas (2013: 13) alerta hacia el hecho de que el PL 5.807 del nuevo Código Minero en discusión, en su artículo 1º ya dice que “el aprovechamiento de los recursos minerales es una actividad de utilidad pública y de interés nacional”. Prosigue Vilas Bôas diciendo que esta declaración sobre la actividad minera no significa, por sí misma, que puede ser realizada de cualquier forma y a cualquier coste. De hecho, el propio PL 5.807 prevé en el artículo 20º que el poder público podrá suspender o revocar una concesión minera *en caso de relevante interés nacional*.

Sobre las salvaguardas

Otra de las cuestiones críticas en el PL 1610 se refiere a la ausencia de salvaguardas. El proyecto de Estatuto de los Pueblos Indígenas de la CNPI (2009) destaca en su artículo 90º que, en caso de permitirse la pesquisa y labra minera en tierras indígenas, no podrán nunca realizarse en determinadas situaciones que garantizarían las mínimas salvaguardas:

- Cuando inviabilicen la continuidad del modo de vida, de las tradiciones, costumbres y creencias de las comunidades afectadas;
- Cuando afectan monumentos históricos, culturales, religiosos y sagrados;

²⁰⁵ Citado en Cupsinski, Adelar (2012); Documento Inédito.

- En locales de habitación de las comunidades indígenas;

Estas salvaguardas parecen encontrar cobijo en el marco jurídico ya existente. El desplazamiento de grupos étnicos de sus lugares de habitación solo es previsto, constitucionalmente, en casos muy determinados. Por otro lado, la Constitución Federal reconoce como tierras indígenas aquellas que son indispensables para la sobrevivencia física y cultural. Los instrumentos internacionales de derechos humanos que hemos descrito brevemente en el Capítulo 5 afirman con rotundidad el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, territorio y recursos y a las formas propias de usufructo de éstos, determinando los propios caminos de desarrollo. Por último, recordemos que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establecía el derecho de estos grupos a mantener y fortalecer la relación espiritual con la tierra y la Declaración Americana (2016) reconocía el derecho a la protección de su patrimonio, tangible e intangible, y de los lugares considerados sagrados.

El Proyecto de la CNPI también define que será vedada cualquier actividad de aprovechamiento de recursos minerales en territorios donde haya indicios de presencia de grupos indígenas aislados o en aislamiento voluntario, algo sobre lo que ya incluía recomendaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en 2015. Como argumenta Adelar Cupsinski, “a análise das salvaguardas constitucionais concernentes aos povos indígenas não deve partir do pressuposto simplório de limitar a mineração em suas terras. Vai muito além e propõe assegurar a vida atual e das futuras gerações destes povos que dependem da terra para sobreviver”²⁰⁶.

Pues bien, el Substitutivo del PL 1610/96 que está en discusión en el Congreso Nacional excluye totalmente estas salvaguardas, sobre las que decreta silencio, y deja en manos del DNPM, y no de la FUNAI, la determinación de posibles impactos sociales y culturales en las comunidades afectadas por la actividad minera.

Sobre el Derecho a la Consulta previa, libre e informada

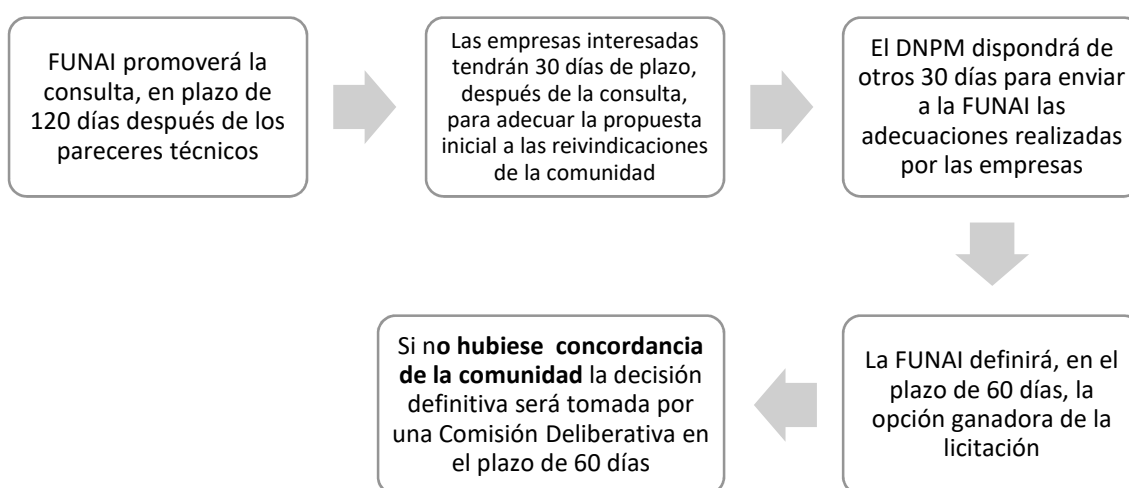
El derecho a la consulta es uno de los temas más divergentes en la discusión sobre la materia. El PL 5.027/91 de Estatuto de las Sociedades Indígenas y el Substitutivo presentado en 2009 por la CNPI se alinean con lo que está escrito en la Constitución Federal de 1988 y en los instrumentos de derecho internacional que hemos destacado en relación al derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas. El Proyecto de la CNPI, al detallar cómo se debe dar el procedimiento de la consulta, en sus artículos 95º y 96º, detalla que:

- La consulta será promovida para dar conocimiento a los indígenas de los requerimientos que existen en sus territorios y para que manifiesten su concordancia o recusa;

²⁰⁶ Id.

- La consulta será realizada en la propia tierra indígena. En ella estarán presentes representante de la FUNAI y del MPF, y *podrán* participar representantes del DNPM y del Consejo de Defensa Nacional, según lo previsto por ley;
- La concordancia de los indígenas será formalizada en documento escrito y firmado por los miembros de la comunidad y los representantes de los órganos presentes;
- Con la recusa de los indígenas el proceso será archivado. Este último punto es fundamental, pues confirma la obligación del Estado de respetar y seguir el resultado de la Consulta, así como manifestado por las comunidades indígenas.

El PL 1610/96 sigue una lógica totalmente diferente. En los artículos 8º, 9º y 10º se refiere al procedimiento sobre la consulta, en los siguientes términos:



Examinemos algunas de las contradicciones de esta propuesta, siguiendo la argumentación de Adelar Cupsinski²⁰⁷:

- Al hablar de la consulta en el artículo 8º, el PL define que el objetivo es dar conocimiento a las comunidades de la existencia del interés minero en sus territorios, sin pretender su confirmación o no. Expresa aún que en la consulta participarán representantes de la FUNAI, DNPM, IBAMA, Consejo de Seguridad Nacional. Después, *podrán* participar todas las comunidades indígenas presentes en la tierra indígena pretendida o, caso manifieste interés, el MPF. Claramente, se trata de una relativización del proceso de consulta, que se convierte en un episodio prácticamente informativo y en el que deja en papel secundario el rol del MPF, cuya función constitucional es la de defender los derechos e intereses de los pueblos indígenas.

²⁰⁷ Id.

- b) El PL 1610 deja a consideración de las empresas la adecuación de los proyectos iniciales, sin que se estipulen mecanismos de obligatoriedad o de control.
- c) El PL contempla la creación de una Comisión Deliberativa en caso de que la comunidad indígena afectada no manifieste acuerdo con el proyecto minero. Esta Comisión Deliberativa estaría compuesta, según el PL, por: representantes de FUNAI, DNPM e IBAMA; dos Diputados Federales y Dos Senadores; un representante del Consejo de Seguridad Nacional; y, una vez más, *podrá* participar un representante del MPF. No contempla la presencia de representantes indígenas.

Esta circunstancia caracterizaría, según Cupsinski, un retorno a la relación de tutela por parte del Estado hacia los pueblos indígenas, asumiendo la última palabra sin la participación expresa de las comunidades y sin que su determinación sea definitiva.

Frente a este entendimiento del PL 1610, ajeno a la opinión y decisión de la comunidad, el jurista Dalmo Dallari enfatiza la relevancia del derecho a la consulta. “Não é pura e simplesmente ouvir para matar a curiosidade, ou para se ter uma informação relevante. Não. É ouvir para condicionar a decisão. (...) Se elas (comunidades indígenas) demonstrarem que será tão violento o impacto da mineração ou da construção de hidroelétrica, será tão agressivo que pode significar a morte de pessoas ou a morte da cultura, *cria-se um obstáculo intransponível à concessão da autorização*”²⁰⁸.

Afirma el CIMI que el derecho de los pueblos indígenas a participar de las decisiones que afecten sus proyectos de vida y sus territorios no se limita a la realización de consultas previas sino que debe ser garantizado “en todos los niveles decisorios de instituciones electivas u órganos administrativos responsables por políticas o programas que les afecten” (CIMI, 2013: 3) siendo ilegítima e ilegal la propuesta de Comisión Deliberativa del PL 1610. En una perspectiva similar, el Procurador de la República en Roraima afirmó, durante encuentro sobre la cuestión, que la consulta a los pueblos indígenas es “necessária também para a aprovação da lei” y no solamente para el emprendimiento concreto. “A Convenção 169 da OIT diz que a consulta é indispensável para medidas legislativas e administrativas que afetem diretamente o povo indígena”²⁰⁹.

Las principales organizaciones indígenas de Brasil, en nombre propio y a través de sus representantes en la CNPI, han manifestado continuamente que cualquier discusión sobre la regulación de la minería en tierras indígenas debe formularse en el contexto de un nuevo Estatuto de los Pueblos Indígenas. “(...) queremos que seja discutido primeiro o Estatuto das Sociedades Indígenas, porque as palavras do nosso Estatuto já estão muito velhas”²¹⁰.

²⁰⁸ Citado en Cupsinski, 2012; Documento Inédito (destaques míos)

²⁰⁹ I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014. Notas de Campo del autor.

²¹⁰ Hutukara Associação Yanomami/HAY. Nota Pública “Posição da Hutukara sobre a Mineração em Terras Indígenas”, 20/05/2014. Accesible en: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7536>>

Capítulo 8

Raposa Serra do Sol, territorio en disputa

Concluimos con este último Capítulo el análisis del problema de investigación planteado – la ecuación entre el avance de la actividad minera sobre territorios indígenas y la garantía de los derechos colectivos de estos grupos – y lo hacemos finalmente en nivel de la escala local, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol.

Raposa Serra do Sol está localizada dentro del llamado Escudo de las Guayanas, en la medular de un amplio territorio habitado por diversos grupos étnicos y que se extiende alrededor del Monte Roraima. Actualmente, esta región está fragmentada por tres Estados nacionales fronterizos: Brasil, Venezuela y Guyana Inglesa. Para comprender mejor el proceso de territorialización de Raposa Serra do Sol creemos conveniente analizar este contexto histórico-espacial mayor en el que se insiere.

En primer lugar vamos a caracterizar la región del Escudo de las Guayanas en el área adyacente al Monte Roraima. Lo haremos desde una doble perspectiva: a) un breve recorrido histórico del proceso de ocupación de la zona durante el período colonial; y b) un análisis de la situación actual en la *región*-Guayana de cada uno de los tres países, enfocando dos cuestiones fundamentales:

- Situación jurídica de los territorios indígenas y la relación entre Estado-grupos étnicos;
- Situación de la actividad minera.

En un segundo momento, proponemos un análisis específico de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en el que intentaremos comprender esta representación étnica y territorial, así como los elementos que caracterizaron la emergencia de un movimiento indígena genuino cuyo eje motor fue la defensa de la tierra frente a las agencias económicas de la fazenda, el agronegocio y la actividad minera.

En un tercer epígrafe, haremos una reconstrucción socio-histórica de la incidencia de la actividad minera en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol a lo largo de todo el siglo XX, apuntando para las marcas sociales que el garimpo dejó en el territorio indígena y que lo vinculan, de algún u otro modo, a los dilemas del presente.

En cuarto lugar, analizaremos los datos que disponemos sobre los pedidos de concesión minera en Roraima desde 1965 hasta nuestros días, lo que nos ayudará a dimensionar las dinámicas que se abrirían ante una eventual aprobación por parte del Congreso Nacional de la actividad minero-empresarial en territorios indígenas.

Por último, describiremos la posición que las comunidades locales y el Consejo Indígena de Roraima – CIR, principal organización indígena de Roraima, han externado respecto a la actividad minera en sus territorios.

8.1. A los pies del Monte Roraima: territorialidad(es) indígena(s)

Considerando a degradação da qualidade de vida e os danos reais e potenciais existentes na região da tríplice fronteira Brasil-Guiana-Venezuela, divisor de águas no Escudo das Guianas, conhecida como Circum Roraima, um dos lugares mais antigos, ricos em sociobiodiversidade e conservados do planeta, por ser território habitado e considerado sagrado pelos povos indígenas dos três países, cujo marco comum é o Tepui Roraima, a "Mãe das Águas" ou Wazaká, lugar mitológico de origem de todas as frutas, sementes e plantas, e casa de Macunaima; (...)

Declaração de Tabalascada, 22 de maio de 2014²¹¹

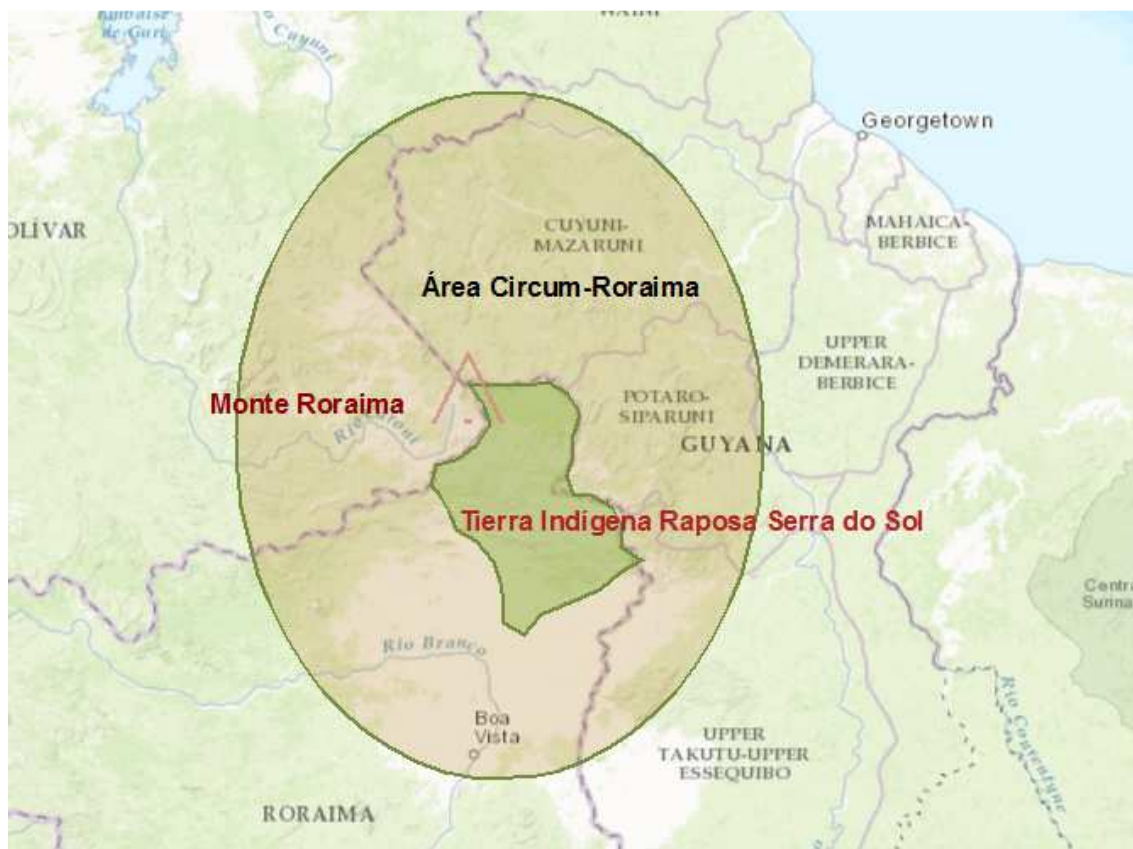
En el interfluvio que forman las cuencas del río Orinoco, Essequibo y Branco, en la región más al norte del bioma amazónico, y antes de descender hacia las orillas del Mar Caribe, encontramos el llamado Escudo de las Guayanas, uno de los ecosistemas más antiguos de la Tierra (Colson, 2013: 41) y cuna de una rica y endémica socio-bio-diversidad. Un espacio caracterizado por una variedad paisajística que incluye áreas de floresta densa, la pronunciada cordillera de Pacaraima o regiones de campos naturales y sabanas.

Destaca en el Escudo de las Guayanas un conjunto de *Tepui*, espléndidas formaciones - de las más antiguas del planeta - reconocibles por sus extensas superficies rocosas en la

²¹¹ La Declaración de Tabalascada es el documento conclusivo del I Seminario sobre Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas que tuvo lugar en la Comunidad Indígena de Tabalascada – Roraima – Brasil. El seminario reunió representantes indígenas de los Estados de Venezuela, Guyana Inglesa y Brasil y contó con la participación de otros actores como el Ministerio Público Federal, Instituto SocioAmbiental, Conselho Indigenista Missionário y Diócesis de Roraima.

cima y sus pronunciadas paredes verticales. Entre ellos, el *tepui* de mayores proporciones es el conocido como Monte Roraima o *Roraimî* (Figura 12), con una altura cercana a los 3.000 metros y en cuya cima se estableció la imaginaria triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana Inglesa.

Mapa 8. Área *circum*-Roraima. Elaboración por el autor



Adoptamos la categoría territorial de área *circum*-Roraima, propuesta por Audrey Butt Colson y también tomada por Paulo Santilli (2000), para referirnos al área territorial adyacente al *Tepui* Monte Roraima, en cuyo seno encontramos Raposa Serra do Sol (Mapa 8). El área *circum*-Roraima es una región habitada de forma continua por diversos grupos étnicos, independientemente de las fronteras nacionales que la fragmentaron en los tres últimos siglos.

Los macuxi, pueblo de filiación karib, constituyen el grupo más populoso en la actualidad. Junto a los taurepang, arekuna o kamarakoto, también de filiación karib, conforman una misma macro-unidad étnica que se auto designa, de un modo más amplio, como pemón²¹². Los pemón habitan la región noroeste, oeste y sur del área

²¹² En la región de sabanas que se extiende del lado de Venezuela, actual Estado Bolívar, es común que las comunidades indígenas sean identificadas como pemón, incluyendo en ese término los kamarakoto,

circum-Roraima, bañada por las cuencas de los ríos principales Kuyuni, Caroni, Paragua, Uraricoera, Surumu, Parimé, Majari, Cotingo, Tacutu y Rupununi (Santilli, 2000: 15).

Estos diversos grupos se localizan a lo largo de esta extensa área en espacios más o menos diferenciados, si bien es evidente la existencia de zonas compartidas. Los kamarakoto residen en la zona del río Kamarang, en las cabeceras del río Kuyuni, al noroeste del Monte Roraima. Los arekuna y taurepang se distribuyen más hacia el oeste y sudoeste del *Tepui*, descendiendo por las tierras de sabanas y la cordillera de Pacaraima - frontera actual entre Venezuela y Brasil - hasta los valles de los ríos Parimé y Uraricoera. Los macuxi, mientras tanto, se concentran en la vertiente sudeste y sur del Monte Roraima, entre el Río Uraricoera, la margen derecha del río Tacutú –los dos formadores del Río Branco- y el Río Rupununi, ya en territorio guyanés.

Diferenciados de los pemón, aunque compartiendo este espacio *circum*-Roraima, encontramos a los kapon, otra macro-unidad étnica en la que se agrupan los ingarikó [akawaio] y los patamona (Santilli, 2000). Los Kapon habitan mayormente el territorio de la vertiente norte y este del Monte Roraima, en la Cordillera de Pacaraima, siguiendo las fuentes de agua principales: Mazaruni, Potaro y Maú [Ireng].

Aun debemos destacar la presencia del pueblo wapichana, de filiación arawak, que habita el territorio adyacente a una margen y otra del río Tacutú y en la región del Rupununi, y que tienen una presencia también importante dentro de Raposa Serra do Sol.

taurepang y arekuna. En nuestro trabajo, siguiendo a Paulo Santilli, utilizamos el término pemón para designar la unidad étnica global a la que pertenecen estos diversos grupos junto con los macuxi.

Figura 12. Panorámica del *Tepui Roraimâ*, conocido como Monte Roraima. Fotografía del autor.



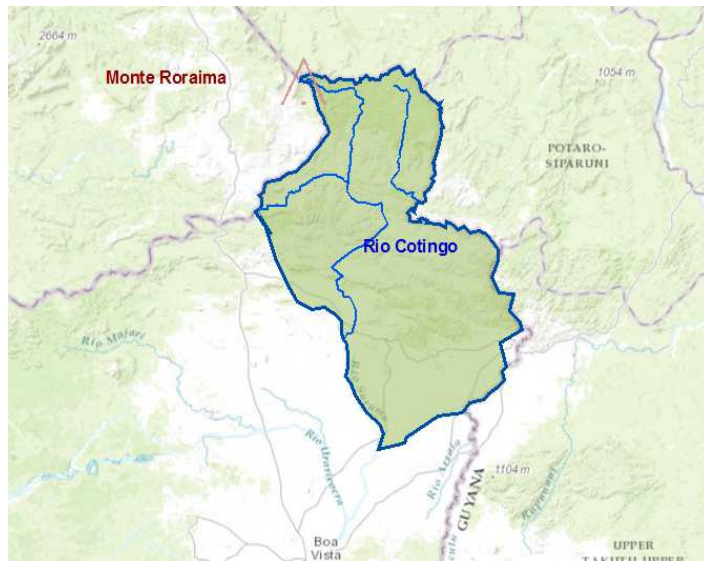
Cuadro 14. El *Tepui Roraimâ* en la narrativa mítica de los pueblos pemón y kapon.

El Tepui *Roraimâ*, comúnmente conocido como Monte Roraima, está presente en la narrativa mítica de los pueblos pemón y kapon. Con diversas versiones y matices, la narración nos transporta al tiempo antiguo en el que tuvo lugar la configuración física del espacio actual. En aquel tiempo, y según una de las versiones (recogidas en MacDonnell, 2011), uno de los héroes míticos llamado Makunaimî, intrigado por el descubrimiento entre los dientes de una *cutia* de una semilla desconocida, la siguió hasta depararse con un árbol en cuya copa se encontraba toda diversidad de frutos. Makunaimî se dispuso a cortar el árbol, de modo que la copa cayó hacia el nordeste, llenando el lugar de una vasta y frondosa floresta, abundante en frutos. De la base del tronco que quedó unida al suelo brotó una gran cantidad de agua. Esta base del tronco es el actual Monte Roraima, de donde fluyen fuentes de agua en forma de ríos caudalosos que riegan el territorio donde hoy viven los pemón y kapon.

Según el lingüista Ronaldo MacDonnell, la palabra makuxi *Wazaká* o *Wayaká* significa “árbol legendario que daba muchos tipos de frutas”. La también palabra makuxi *Roraimâ* se compone de ‘*rora*’, que quiere decir ‘verde, azul’ y el sufijo ‘*-imî*’, que es un aumentativo. Por tanto, *Roraimâ* podría referirse a algo de gran tamaño y de color verde. Posiblemente, el término *Wazaka* o *Wayaka* se refiere al árbol mitológico, lleno de frutas, que Makunaimî encontró cuando siguió a la *cutia*; mientras que *Roraimâ* se refiere a la base del tronco que quedó en la tierra y que hoy se conoce como Monte Roraima.

Julio Cesar Melatti (2011) se refiere también a las versiones del mito del gran árbol, *Wazaká*, que Theodor Koch-Grünberg publicó en su segundo volumen de “Del Roraima al Orinoco”. En la versión recogida por Melatti, al caer el árbol hacia el norte, se confirma que “o toco da árvore derrubada é o Monte Roraima”.

El Monte Roraima se configura como un verdadero divisor de aguas. En su cima se encuentran nacientes que nutren, hacia uno y otro lado, las macrocuencas de Orinoco, Amazonas y Essequibo. Hacia el lado sur del Monte cae el río Cotingo, que cruza de norte a sur Raposa Serra do Sol para entregar sus aguas en el río Surumu. El Cotingo será una de las sub-cuencas sobre las que la actividad minera se volcará a lo largo del siglo XX.



Mapa 9. Río Cotingo, en la TI Raposa Serra do Sol.
Elaboración por el autor

Desde el punto de vista geológico, el Escudo o Macizo de las Guayanas se localiza en el llamado Cratón Amazonas, una de las más extensas y menos conocidas áreas precámbricas del mundo. La evolución tectónica de la región la convierte en una de las zonas que poseen mayor concentración de rocas cristalinas y sedimentares, lo que implica una particular concentración de riqueza mineral. Este padrón lo vamos a encontrar en toda la Amazonia, si bien con especificidades regionales que llevan a diversos autores a ensayar diferentes formas clasificatorias de la región (Schneider Santos, 2003).

Para algunos es posible identificar una franja orogénica coherente que se desplaza de este a oeste desde los Estados de Maranhão, Pará y Amapá (Brasil), atravesando las tres Guayanas hasta llegar a Venezuela y el Estado brasileño de Roraima, conformando lo que se ha llamado de *Conjunto Guyanés*. También conocida como Planalto o Meseta de las Guayanas, la región siempre despertó un fuerte interés para la exploración y explotación minera, aunque especialistas destaquen las dificultades físicas, técnicas y de infraestructuras para obtener un preciso mapa de conocimiento geológico de la zona.

Podemos afirmar, en definitiva, que el área *circum*-Roraima es un espacio habitado de forma continua por un conjunto de grupos étnicos diferenciados que, a su vez, configuran una unidad socio-espacial singular (Santilli, 2000), a pesar de ser objeto de división político-administrativa entre los Estados de Brasil, Venezuela y Guyana.

Los pueblos indígenas del área *circum*-Roraima han tenido que reivindicar su derecho al territorio que habitan en función de las disímiles posibilidades de diálogo, negociación

y presión ejercidas en relación a cada uno de los Estados nacionales implicados y en función de los marcos normativos estatales y de la naturaleza del movimiento indígena en cada país. Esta circunstancia explica que la configuración territorial resultante en el conjunto del área presente características de complejidad y heterogeneidad. La acción de territorialización de cada uno de los Estados en las últimas décadas ha sido diferente - como pretendemos mostrar en este trabajo - de lo que resultan condiciones igualmente divergentes para la garantía de derechos.

Por otro lado, la división del territorio en tres Estados nacionales diferentes no ha eliminado las lógicas cotidianas de la ocupación continua del espacio y de la movilidad dentro de él, como se puede demostrar en la permanencia de las relaciones inter-comunitarias a uno y otro lado de las fronteras y que siguen pautándose por las normas propias relacionadas con sistemas de parentesco o elementos de sociabilidad indígena. En los últimos años, las distintas organizaciones indígenas de los tres países han realizado esfuerzos encaminados a la organización de eventos, intercambios y encuentros inter-fronterizos cuyo objetivo era precisamente el de mantener una unidad política y de acción frente a problemas claramente comunes.

8.1.1. “A la cual los geógrafos llaman Guyana”

Algunas de las más detalladas descripciones del ambiente amazónico durante el periodo que circula entre los siglos XVI y XIX provienen de viajeros, aventureros, expedicionarios, comerciantes, misioneros y autoridades militares que incursionaron por sus ríos con mucha más intuición que conocimiento previo de lo que irían a encontrar. En estos relatos se revelan algunos de los elementos que configurarían posteriormente el imaginario que sobre la Amazonia se instaló en las sociedades europeas, primero, y en las sociedades coloniales y nacionales después dentro de la propia América. Es común que en los relatos aparezca la exuberancia de su Naturaleza, impresionante e inabarcable, descrita a veces con una emoción superlativa y otras con detalles minuciosos sobre las incomodidades y sacrificios que requiere su recorrido. También es común en la literatura de la época la rareza del *otro*, descrito a veces con admiración y muchas otras con desprecio.

El jesuita João Daniel nos dejó dos volúmenes con una vasta descripción de lo que encontró en su expedición por el Rio Amazonas a mediados del siglo XVIII (Daniel, 2004). Se muestra fascinado y cautivado por este escenario, no extrañándose que algunos lo hayan confundido con el mismo Paraíso terrenal. Por momentos se confiesa atrapado por la exuberante verdura de los márgenes del río y la generosidad de la tierra en frutos, lo que interpretaba como signos de la extraordinaria fertilidad de sus suelos y motivo evidente para la felicidad insuperable de sus habitantes. Es esta fertilidad, según João Daniel, la que garantiza y asegura la riqueza de la tierra y de los hombres. “Há campos tão férteis (...). De tanta facilidade vem bem a nascer tanta abundancia de viver, tanta fartura de legumes, e tanto regalo de frutas, e bem se podem chamar os seus naturais,

e [habitadores] mais ricos e felizes que os mesmos egípcios, os maiores lavradores do mundo” (Daniel, 2004: 409).

Para demostrar a sus lectores que la riqueza de esta tierra no se limita a esa “grande fertilidade”, se propone dar noticia “dos seus muitos e inexauríveis *minerais de ouro, prata, diamantes e mais pedras preciosas*” (Daniel, 2004: 407, destaque em cursiva mío). Para ello, el Padre Daniel describe las “grandes serranías” que acompañan el curso del río Amazonas, desde su desembocadura hasta su nacimiento en los Andes del Imperio “do Perú Mantiqueira”. En el margen derecho del río, bien distantes de la orilla, unas altísimas sierras que conectan con los Andes; en el margen izquierdo, el autor se refiere a una cordillera que se extiende por más de mil leguas “a la cual los geógrafos llaman Guiana”. El Padre João Daniel afirma que “toda ela é um continuo mineral de ouro, prata, diamantes e muitas outras pedras preciosas, de sorte que afirmam os prácticos ser a terra mais rica de minas que até agora têm descoberto em todo o mundo” (Daniel, J.P. 2004: 410).

Mapa 10. Localización del Macizo Guayanés en relación al margen izquierdo del río Amazonas.
Elaboración por el autor



El proceso de colonización en el área adyacente al Monte Roraima se va a precipitar a partir de las primeras décadas del siglo XVIII, definiéndose en el último cuarto de ese siglo (Farage, 1991; Santilli, 2002). Sobre la región confluyeron entonces tres proyectos coloniales diversos, que van a compartir el uso y reclutamiento de la mano de obra indígena a servicio de sus intereses:

- el proyecto holandés, con una finalidad principal relacionada con el comercio y que adentra en el territorio en dirección norte-sur, desde el litoral caribe hacia los valles del Essequibo y el Rupununi en la actual Guyana;
- el proyecto español, descendiendo en dirección noroeste-sudeste, desde la cuenca del Orinoco - actual Venezuela - hacia el río Uraricoera, con la pretensión de hallar el mítico Eldorado;
- y el proyecto portugués, que sube en dirección sur-norte, desde el río Amazonas siguiendo el curso del río Negro y el Branco, y cuya finalidad principal era la presencia de la Corona y la defensa militar del territorio para evitar las otras dos incursiones.

Durante los siglos XVII y XVIII, diversos relatos de misioneros, viajeros, autoridades civiles y militares vinculados con la Corona portuguesa²¹³, registraban la presencia de artefactos y mercancías de procedencia holandesa entre los indios que habitaban la vasta región desde el río Solimões al Río Negro. No se relataban acontecimientos que contasen con la presencia de tropas o de comerciantes holandeses, sino exclusivamente la diseminación de sus productos. Este comercio holandés se habría centrado en el intercambio de manufacturas por géneros de producción artesanal indígena.

Se atribuía a los holandeses incursiones desde el litoral del Caribe adentrándose en las tierras de Surinam y la actual Guyana Inglesa, así como desde la región del Orinoco, desde las cuales seguían por el Río Branco hasta su desembocadura en el Río Negro, uno de los formadores del Amazonas. Según Farage (1991), al encontrar sus mercancías en poder de grupos indígenas, deducían las autoridades de la Corona portuguesa que los holandeses estarían sirviéndose de una compleja red de relaciones de troca y de guerras entre grupos indígenas para una expansión claramente comercial y, en una suposición no confirmada, también territorial.

Al mismo tiempo, y precisamente a través de un desertor holandés que habría llegado en 1775 a Barcelos, capital de la Capitanía São José do Rio Negro, las autoridades portuguesas tomaron conocimiento de la presencia española también en la región del Río Uraricoera (Farage, 1991:121; Rodrigues, 1996). La incursión española desde el Orinoco se relacionaba con la ansiada búsqueda de una sierra de oro en las inmediaciones del Río Parimé²¹⁴.

Afirma Farage que las incursiones de holandeses y españoles alimentaron e impulsaron la definitiva expansión portuguesa sobre las regiones del Río Negro y el Río Branco. Aunque también es cierto que esta expansión ya se había iniciado anteriormente, de modo independiente a las noticias sobre presencias extranjeras en la región. En el primer tercio del siglo XVIII tuvieron lugar expediciones particulares en busca de mano de obra indígena esclava subiendo el Río Branco hasta uno de sus formadores, el Río Tacutú. Sobre estas incursiones informales pocas noticias habían circulado en la época. Posiblemente porque se trataba de expediciones alentadas, originalmente, por proyectos particulares en busca de maderas, resinas, cacao, vainilla o zarzaparrilla.

²¹³ Nadia Farage (1991) recoge diversos de estos relatos escritos por el Padre Acuña (1639), el Capitán Antonio de Miranda e Noronha (finales de siglo XVII), Frei Vitoriano Pimentel (1705), el Governador Berredo (1719) y otros.

²¹⁴ De este modo, la región del Río Branco, actual Estado brasileño de Roraima, entraba en la historia legendaria de la búsqueda de Eldorado, mito que movió innúmeras expediciones a lo largo y ancho de la Amazonia. Sueño dorado que, aparentemente, no emocionaba a la empresa colonial portuguesa. “Os portugueses, diga-se de passagem, aparentemente mais céticos que espanhóis e holandeses quanto à existência do El-Dorado, reagiram com desdém ao argumento espanhol: o ouvidor Ribeiro de Sampaio – que se viu à época diretamente envolvido no caso (...) – afirmava que a busca de El-Dorado, naquele ‘iluminado e philosopho século 18º’ soava decididamente inverossímil, (...)” (Farage, 1991:122).

A partir de 1725, la Corona se dispuso a patrocinar expediciones oficiales en la región²¹⁵. El motivo inicial fue la disminución de la mano de obra indígena esclava en la zona del Grão Pará y Maranhão. La Corona necesitaba abrir nuevas áreas de “reserva” de mano de obra esclava, y estos lugares los iba a encontrar en las cuencas del Rio Solimões, el Rio Negro y el Rio Branco.

Sin embargo, una vez que se tomó conocimiento de la presencia española y holandesa en la región, la empresa colonial portuguesa sobre el Rio Branco amplió sus objetivos hacia una presencia militar permanente que retuviese las pretensiones de las otras metrópolis. Interesaba controlar la mano de obra esclava indígena a la vez que garantizar el dominio portugués sobre esta región. Además, ahora se hacía más factible la esclavización de mano de obra indígena como prisioneros de guerra. La supuesta participación de grupos indígenas en alianzas comerciales y territoriales con tropas españolas u holandesas constituía un motivo fundado para la declaración de guerra contra los indios, su esclavización y la ocupación de sus territorios²¹⁶.

A finales del siglo XVIII, por tanto, fecha en que la historiografía oficial sitúa el avance definitivo de ocupación portuguesa de la región del Rio Branco, el móvil de las incursiones se relacionaría más directamente con la defensa de lo que vendría a ser denominada una frontera colonial. De esta época data el Forte São Joaquim (1775), construido en la confluencia entre los ríos Uraricoera y Tacutu, donde el curso de las aguas comienza a ser llamado Rio Branco (Santilli, 2002: 490). Esta fase de ocupación militar portuguesa de la región a partir de pequeños y despoblados fuertes militares y de un complejo entramado de confinamientos indígenas forzados resultó en una permanente explosión de conflictos.

El avance de algunas fronteras económicas durante el siglo XIX va a incorporar nuevos elementos en el movimiento colonizador de la región del Rio Branco. Un ejemplo claro fue el nuevo frente expansivo de extracción vinculado al caucho en toda la región amazónica que ya describimos en el Capítulo 6 de nuestro trabajo. En Roraima, la actividad se concentró en la región del Bajo Rio Branco y los productos buscados eran tanto el caucho como la balata²¹⁷. Este nuevo emprendimiento significó la manutención de la política de reclutamiento de mano de obra indígena, llegando a la zona norte, en el área *circum*-Roraima. “Com o avanço do extrativismo na Amazônia no século XIX, promovia-se, assim, a integração da área do alto Rio Branco na economia regional, como fornecedores de mão-de-obra para a exploração da floresta” (Santilli, 2002: 493). Registros de la época ya dan cuenta de la captación de mano de obra esclava en las

²¹⁵ “A primeira tropa de resgate a entrar efetivamente no rio Branco foi a do Comandante Christovão Ayres Botelho, em 1736” (Rodrigues, 1991: 6)

²¹⁶ Este fue el móvil de la guerra declarada por la Corona contra los Manao y su principal líder, Ajuricaba, que quedó posteriormente grabada en la literatura brasileña.

²¹⁷ La balata es otro tipo de látex, con la misma funcionalidad, extraído en este caso de la savia del árbol de la balata [*Manilkara bidentata*], también frecuente en América del Sur, América Central y Caribe.

aldeas macuxi para la extracción vegetal en “la boca de Manaus”, reclutamiento del que muchos no retornaron y que quedó en la memoria de las comunidades (Santilli: 2002)

Algunas informaciones establecen una relación estrecha entre el capital originado en el extractivismo vegetal en la zona del bajo Rio Branco y la instalación en la región norte de civiles y ex-militares que trajeron la pecuaria (Santilli, 2002: 495; Farage, 1991: 79) como factor de ocupación y que contribuyeron en el siglo XIX con un nuevo escenario en el que destacó la creación de las Fazendas Nacionales²¹⁸.

La introducción de la ganadería en los campos naturales del Rio Branco, sirviendo en un principio al abastecimiento de carne de Manaus, va a transformar el padrón de ocupación del suelo roraimense y va a influenciar en el posterior proceso de configuración de la sociedad regional. Podemos afirmar que fue la primera frontera económica que avanzó de modo determinado hacia la región del Rio Branco con una vocación de implantación definitiva en el territorio, siguiendo la lógica de la regimentación de la mano de obra indígena (Farage, 1991; Vieira, 2014). La pecuaria extensiva, con el manejo del ganado en libertad, tuvo su mayor auge económico entre 1870 y 1910 (Rodrigues, 1991:7). Para entonces, la actividad ya se había ido adentrando poco a poco en el valle del Tacutú y las cabeceras del norte, en la actual Tierra Indígena Raposa Serra do Sol.

El inicio de la actividad minera, a inicios del siglo XX, pudo ser uno de los detonantes del declive de la ganadería. En todo caso, se producía en este tiempo una retroalimentación entre ambas empresas económicas: si de un lado el reclutamiento de la mano de obra indígena se desvió de la fazenda ganadera a la minería, de otro lado el capital diamantífero y aurífero era reinvertido en ganado (Rodrigues, 1991).

Otra de las agencias que se había ido instalando en la región fue la presencia misionera de la Iglesia Católica. Durante los siglos XVIII y XIX, esta presencia había sido protagonizada por misioneros de la Orden Carmelita que ya trabajaban en toda la región del Rio Solimões - hasta la frontera con Perú en Tabatinga (Ferrarini, 2013) - y en el Rio Negro, donde mantenían sus principales áreas misioneras. De allí habían subido el Rio Branco con el incentivo de la Corona portuguesa en la época y fundaron la Missão Nossa Senhora do Carmo, en el lugar donde se encuentra ahora la capital de Roraima, Boa Vista. También los jesuitas habían visitado la región del Rio Branco, aunque por la naturaleza de la presencia misionera hasta ese momento se deduce que no hubo un trabajo sistemático con los pueblos indígenas (Santilli, 1989: 58).

Ya a inicios del siglo XX, la presencia misionera en la región norte de Roraima y la frontera con Venezuela correspondió a la Orden Benedictina. La llegada de los Benedictinos a la región del Rio Branco inició un período de tensión y conflictividad entre

²¹⁸ Las primeras cabezas de ganado llegan a la región en 1787, con el impulso del entonces Gobernador de la capitanía de São José do Rio Negro, Manuel Lobo D'Almada. Las primeras *fazendas* nacionales se constituyeron en el interfluvio existente entre el Rio Branco y el Rio Uraricoera. (Rodrigues, 1991: 7).

éstos y las incipientes familias de la elite agraria, entre ellos el latifundista Bento Brasil (Vanthuy Neto, 2000: 78 ss; Vieira, 2014: 89-102; Santilli, 1989: 65; Isidoro de Moraes, 2013: 113 ss). También el reclutamiento de mano de obra indígena para los trabajos en la fazenda o en la actividad minera alimentó estos conflictos con los religiosos benedictinos, que criticaban los métodos utilizados por los fazendeiros.

De este mismo período - siglo XVIII hasta inicios de XX - nos llegan también los primeros registros sistemáticos de la localización de los diversos grupos étnicos que habitaban este territorio. A través de ellos, se puede hacer una recomposición de la sociodiversidad existente en la zona y de su distribución espacial, factor que ha resultado fundamental en nuestros días para defender la presencia antigua de estos grupos sobre el territorio pretendido²¹⁹.

8.1.2. República Cooperativa Guyana: el Essequibo como territorio indígena

En la región que se extiende al nororiente y este del Monte Roraima se encuentra la mayor parte del territorio habitado por los pueblos kapon – los ingarikó [akawaio] y los patamona. Siguiendo en dirección al sur hasta llegar a los valles del Rupununi, también encontramos territorios habitados por comunidades macuxi y wapichana (*Mapa 11*). Toda esta región pertenece hoy al territorio nacional de la República Cooperativa de Guyana, también conocida como Guyana Inglesa.

Guyana Inglesa constituye uno de los países con mayor biodiversidad de América Latina. Se extiende a partir de la falda nororiental del Macizo de las Guayanas hasta la costa del Mar Caribe y es precisamente en el litoral donde concentra la mayor parte de su población y donde se encuentra su capital administrativa y política, Georgetown. Como se observa en el mapa, el territorio guyanés es recorrido de sur a norte por los ríos Berbice, Demerara y, principalmente, el Essequibo. El Essequibo nace muy próximo de la frontera sur de Guyana con Brasil y recorre todo el país mientras va recogiendo en su margen izquierda las aguas que proceden de la región *circum*-Roraima, de las subcuencas de los ríos Cuyuni, Mazaruni, Potaro y Rupununi.

El particular proceso de colonización de la actual Guyana Inglesa le ha conducido hacia una sociedad heterogénea construida entre la diversidad étnica originaria de este territorio y los diversos contingentes migratorios impulsados por el Imperio Británico. El relativo aislamiento lingüístico respecto de sus vecinos y la concentración de sus actividades en el litoral caribeño y en la capital, Georgetown, favorecen su conexión con el mundo caribeño y anglosajón de un modo más intenso que con el conjunto de América del Sur y, particularmente, con la región panamazónica.

²¹⁹ Existe una preciosa documentación histórica que registró la presencia y distribución de pueblos indígenas en esta región desde el último tercio del siglo XVIII. Paulo Santilli (2001) y Nádia Farage (1991) recopilan de un modo sistemático y preciso las principales informaciones encontradas en registros y diarios de viaje (Rodrigues Ferreira, 1786; Lobo D'Almada, 1861; Schomburk, 1903; Koch-Grünberg,; Dom Alcuino Meyer,), con un amplio análisis también sobre la etnonimia de la región.

Mapa 11. Región circum-Roraima en la República Cooperativa Guyana. La parte sombreada, margen izquierda del río Essequibo, representa la región guyanesa del Área circum-Roraima, territorio de los pueblos ingarikó, patamona, macuxi y wapichana.



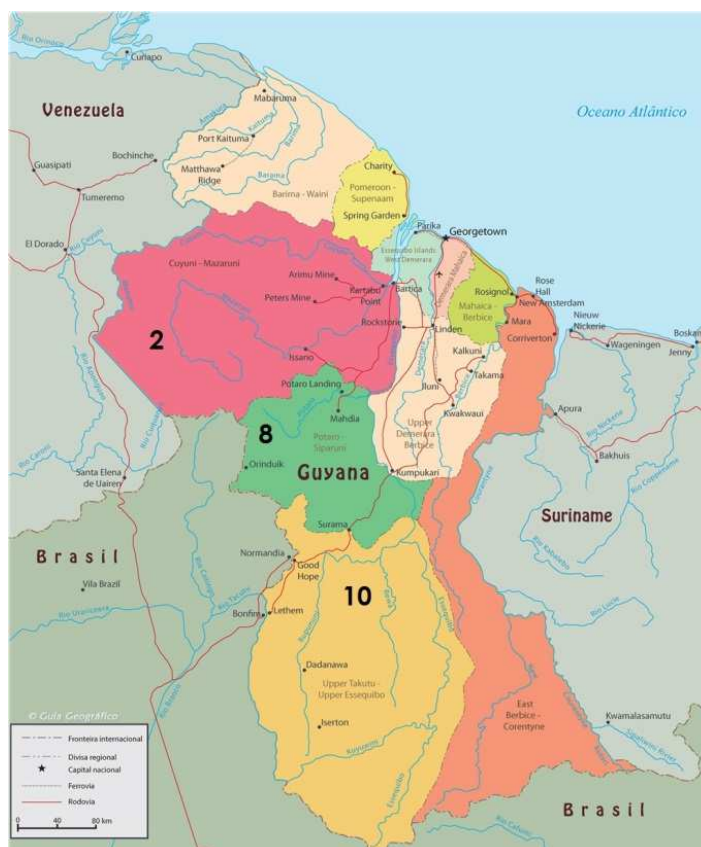
Al mismo tiempo, Guyana Inglesa posee uno de los patrimonios mineros más atractivos al interés regional y del mercado internacional. La frecuencia intensa de yacimientos de oro, diamante o bauxita – y en menor medida de otros minerales como la ilmenita, el caolín o la columbita-tantalita – ha marcado, sin ninguna duda, el interés exterior por favorecer el control y acceso a estos recursos naturales. Según un Estudio de la Revista Environmental Research Letter, el 41% de la floresta destruida en América del Sur se encuentra, precisamente, en la región de Guyana, asociada a la minería ilegal²²⁰.

El país se divide administrativamente en diez Regiones (*Mapa 12*), y cada región es identificada con un número. Entre esas diez regiones, queremos destacar las tres que se encuentran dentro del área adyacente al Monte Roraima:

²²⁰ En reportaje: <<http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cat=82&cod=75364>>. Último acceso 20/04/2016.>

- La Región Nº 2 o Región Cuyuni-Mazaruni, al norte de la Cordillera de Pacaraima, territorio de los ingarikó y arekuna;
- La Región Nº 8 o región Potaro-Siparuni, al este del Monte Roraima, territorio compartido por los pueblos Kapon y por comunidades macuxi, principalmente;
- La región Nº 10 o región Alto Tacutu-Alto Essequibo, al sudeste del área *circum-Roraima*, territorio habitado por comunidades macuxi y, principalmente, wapichana.

Mapa 12. Mapa de la República Cooperativa Guyana dividida en Regiones con destaque para las tres Regiones que pertenecen al área *circum-Roraima*.



En la República Cooperativa de Guyana se identifican actualmente nueve pueblos indígenas, localizados en seis de las diez regiones del país. El Estado no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ni hay un reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución nacional. Por otro lado, sí ha firmado la Declaración de la Asamblea de Naciones Unidas en 2007 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y como normativa específica cuenta con el llamado Acto Amerindio, de 2006, que regula las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado.

Estas informaciones fueron confirmadas por representantes guyaneses durante el I Encuentro de Pueblos Indígenas de Frontera, celebrado en el local de Caracaranã – Tierra Indígena Raposa Serra do Sol los días 25 a 27 de junio de 2013, organizado por el

Consejo Indígena de Roraima y con el tema “Una mirada a la Convención 169 de la OIT”. También fue ratificado por la delegación indígena guyanesa que participó en el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas celebrado en la comunidad indígena de Tabalascada – Roraima – Brasil en mayo de 2014. “Nosso ministro diz que o novo Ato Ameríndio já garante tudo o que queremos”, afirmó en dicho Seminario una dirigente wapichana²²¹.

El Acto Amerindio guyanés constituye un marco normativo sensiblemente más frágil y menos garantista que los existentes en los países vecinos, Venezuela y Brasil. Por el Acto Amerindio, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras en las que habitan desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, delimita las condiciones que permiten reconocer a un grupo como comunidad étnica y sujeto de derechos colectivos. Según el Estado, para que una comunidad sea identificada como indígena y sujeto de derechos debe tener más de 150 habitantes y demostrar una estabilidad en la ocupación del mismo territorio de, al menos, 25 años (FPP, 2009).

En el mismo Acto Amerindio, el Estado se reserva la posibilidad de conceder permisos para la actividad minera en territorios no titulados, aunque estén habitados por pueblos indígenas, o a adquirir tierras con ocupación indígena para establecer otro tipo de áreas protegidas sin la necesidad de un consentimiento previo de las comunidades afectadas. Según una dirigente indígena, “o Ato Ameríndio apresenta um processo demorado e crítico de como conseguir a terra. Você tem que provar a existência da comunidade. Quantos anos temos morado e quantos somos nós? O processo pode ir de cinco a dez anos. Durante esse tempo deixa a porta aberta para qualquer empresa de mineração e você não tem o que falar”²²².

Hasta el momento, la titulación de tierras de las comunidades indígenas ha sido muy reducida y bajo la fórmula de territorios pequeños que no siempre respetan ni salvaguardan las condiciones de sobrevivencia física y cultural de las comunidades. Desde hace años, los ingarikó y patamona vienen reivindicando la reforma del Acto Amerindio y la definitiva demarcación de sus tierras. En 1998, las organizaciones indígenas presentaron su reivindicación a la Corte Suprema del Estado, exigiendo que el Gobierno cumpliera con sus responsabilidades. Mientras tanto, el Estado avanza con políticas y medidas de ocupación y uso del espacio de las comunidades indígenas en las Regiones número 2, 8 y 10 a través de tres estrategias:

- proyectos de infraestructura de transportes y energía;
- política de áreas protegidas y de desarrollo bajo en emisiones de carbono;
- concesiones para exploración y explotación minera.

²²¹ Notas de Campo del autor.

²²² En el I Seminario sobre Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima – Brasil, mayo de 2014. Notas de Campo del autor.

Ninguna de estas tres estrategias ha sido consultada con las comunidades indígenas que serían afectadas. Analicemos con mayor detalle cada una de ellas.

Respecto a los proyectos de infraestructura de transportes y energía, Audrey Butt Colson (2013) documenta con detalle la pretensión del Estado de Guyana de construir dos complejos hidroeléctricos en la región. El primero de ellos se conoce como el Proyecto Amaila y se sitúa en el curso del Río Potaro, uno de los principales afluentes del Essequibo, en la región nº 8 Potaro-Siparuni. Se trata de un complejo de diversas represas construidas por fases. El proyecto estaba previsto ser iniciado en el año 2013 y contaba con el apoyo del Banco de Desarrollo de China y del Banco Interamericano de Desarrollo – BIRD.

El segundo proyecto hidroeléctrico, conocido como Proyecto Kurupung, se sitúa en la región del Alto Mazaruni, hábitat de los ingarikó y arekuna. Se trata de un proyecto que fue concebido en la década de 70 y ya entonces contó con la oposición y resistencia de las comunidades indígenas. La posible construcción de este complejo hidroeléctrico reunió ahora intereses externos de diversa procedencia: el propio Estado guyanés, la empresa rusa del sector del aluminio, RUSAL y, de modo particular, el interés del gobierno brasileño.

Brasil estaba especialmente interesado en dos proyectos en esta región. Por un lado, en la construcción de la carretera que unía Boa Vista – Roraima con la frontera y seguía desde Lethem hasta la capital guyanesa, Georgetown. Esta carretera reducía las dificultades del mercado extractivo-productivo brasileño para llegar al litoral caribeño y seguir, a partir de ahí, hacia los mercados europeos y norteamericanos. Por otro lado, los últimos gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff manifestaron también su interés en la construcción de la hidroeléctrica de Kurupung, la cual podría suministrar energía al Estado brasileño de Roraima (Colson, 2013). Para ello, ofrecieron la participación de la empresa estatal Eletrobras, la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES, así como la posibilidad de empresas brasileñas de capital privado como Andrade Gutiérrez o Votorantim.

Ninguna de estas iniciativas ha sido informada ni mucho menos consultada con anterioridad a las comunidades indígenas afectadas. Lo mismo podría decirse de las concesiones mineras a las que después nos referiremos. “The Upper Mazaruni and Potaro people have not been informed of government plans which have the potential to destroy their environment and society (...) Mining concessions have only become known when a concession holder arrives with his machinery” (Colson, 2013: v).

Respecto a las políticas de áreas protegidas y desarrollo con baja emisión de carbono, el Estado guyanés publicó en 2011 el Acto sobre Áreas Protegidas, que se convierte en el marco normativo para el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas acompañado de un fondo de recursos para su protección. La creación de este Sistema no es incompatible, y eso queda explícito en el texto, con el desarrollo de la economía

extractivo-exportadora. De hecho, según recoge Colson (2013: 50), el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Asuntos Amerindios y la Comisión Guyanesa de Geología y Minería –GGMC mantenían conversaciones en esta perspectiva de conciliación de intereses.

La política del Estado guyanés en los últimos años relacionada con la protección ambiental debe ser comprendida dentro de una iniciativa mayor encaminada a adherir a los créditos de Reducción de Emisiones de Carbono – REDD y las estrategias de desarrollo bajas en emisión de carbono – LCDS. En noviembre de 2009, Guyana Inglesa y Noruega firmaron un acuerdo por el que el Estado guyanés se comprometía a reducir las tasas de deforestación a cambio de recibir un fondo de recursos que alcanzaría los U\$ 250 millones en los cinco años siguientes (Colson, 2013: 53).

Según Informe elaborado por la organización Forest Peoples Programme (2009) es difícil que se puedan conciliar políticas de protección de áreas de bosques al mismo tiempo que se mantienen los derechos de concesión a empresas mineras y madereras y cuando muchas de las comunidades indígenas de la región aún no han conseguido el título de propiedad sobre sus tierras.

Por último, y *respecto a la política de concesión de derechos mineros*, la conflictividad es mucho más evidente. Actualmente, las tierras indígenas están afectadas por la presencia masiva de garimpeiros, procedentes de Brasil y de Venezuela principalmente, que ejercen la minería de modo artesanal o incorporando algún tipo de maquinaria en tierra firme o en el lecho de los ríos.

Según dirigentes indígenas del valle de Rupununi, la minería de garimpo comenzó en 1940 con actividades pequeñas, utilizando herramientas manuales como la *bateia*. En los últimos años, las comunidades observan que “agora, já entram escavadeiras. Destruindo a floresta, e nosso rio principal. É isso que eu quero falar, porque essas pessoas brasileiras, tem que ter mais respeito para a comunidade”²²³.

Otro testimonio destaca la situación en la región alta del río Mazaruni: “Em duas ocasiões tiveram que parar embarcações de mineração subindo o rio. O Tuxaua denunciou à Corte mas a Corte decidiu em favor da mineração e contra o tuxaua. O Ministro de Assuntos Indígenas estava de lado do garimpeiro. A cor do rio acaba sendo da mesma cor que o cartaz que vocês têm [apuntando para una pancarta de color marrón]. O Mazaruni está sendo usado como transporte, não tem como usar para consumo. Não tem peixe e quando fizeram análise na água apareceu muita frequência de mercúrio”²²⁴.

²²³ En I Seminario sobre Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima – Brasil, mayo de 2014. Notas de Campo del autor.

²²⁴ Id.

En otro evento, comunidades indígenas a uno y otro lado de la frontera Brasil-Guyana coincidían en señalar como uno de los principales problemas de la frontera la frecuencia de pasaje de garimpeiros brasileños hacia la Guayana, con la connivencia e incluso colaboración del Estado guyanés, así como la identificación de problemas de contaminación en las aguas de los ríos de la zona²²⁵. Actualmente, se desconoce el número exacto de garimpeiros brasileños en la región de Guyana en actividades mineras pero el número es creciente, apoyándose en una menor conflictividad que en Venezuela y una actitud más permisiva del Gobierno²²⁶.

La presencia de la actividad minera en la región occidental de Guyana existe desde finales del siglo XIX. Según McCormack y Kalamandeen²²⁷, en la década de 1880 ya se procedía a la explotación comercial del oro en la región. Posteriormente, en 1917 una compañía estadounidense – Reynolds Metals Company – y otra canadiense – Aluminum Company of Canada (ALCAN) – iniciaron la actividad extractiva de bauxita a través de sus subsidiarias regionales.

En 1994, el Banco Mundial y otras agencias internacionales de desarrollo aconsejaron a la Guyana Inglesa diversificar su cartera exportadora, dependiente en aquel momento de productos como el arroz, el azúcar o la bauxita, diversificando a una mayor explotación de recursos forestales y de minerales como el oro y el diamante. Se inició a partir de ese momento un nuevo boom minero en la región que atrajo, según McCormack y Kalamandeen a una decena de empresas extranjeras. En 2008, la exportación de oro y diamantes ya representaba el 30% de la cartera total de exportación de Guyana Inglesa.

8.1.3. El lugar de los Tepui: la gran sabana venezolana

En Venezuela, la región amazónica es también conocida como la Región de las Guayanas y contempla los Estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro²²⁸. Sigue todo el margen

²²⁵ En I Encuentro de Pueblos Indígenas de Frontera, Caracaranã – TI Raposa Serra do Sol – Brasil, junio de 2013. Notas de Campo del autor.

²²⁶ A través de entrevistas y conversaciones informales, no registradas, con personas implicadas en el garimpo en Guyana, el autor pudo confirmar que muchas personas mantienen su punto de apoyo y de residencia formal en la ciudad de Boa Vista – Roraima – Brasil, situada a unos 200 Km de la frontera con Guyana. Cuando el garimpeiro consigue reunir una cantidad significativa de dinero procedente de la actividad minera o cuando necesita renovar la documentación temporal que le permitió entrar en la Guyana, entonces retorna por unos días o semanas a Boa Vista donde, en muchos casos, continúa residiendo su familia.

²²⁷ Documento inédito que llegó a manos del autor. McCormack, Mike y Kalamandeen, Michelle (2013). “Life follows livelihoods”. Assessment of Impact of Mining on Amerindian Communities in Guyana.

²²⁸ Existe un contencioso territorial entre Venezuela y Guyana Inglesa por el territorio que se extiende entre la actual frontera binacional y el río Essequibo. Venezuela reclama como propio este territorio, al que llama la “Guyana Essequiba Venezolana”. A pesar de la firma del Acuerdo de Ginebra en 1965, Venezuela nunca ha reconocido plenamente los términos de este acuerdo y mantiene su reivindicación territorial. Para efectos de nuestro trabajo, no hemos colocado énfasis en este conflicto. La presencia de pueblos indígenas y los intereses mineros sobre el territorio no son, a nuestro juicio, suficientemente dimensionados en las argumentaciones de cada Estado, más centradas en la cuestión de la soberanía

derecho o margen sur del río Orinoco, desde su nacimiento hasta su desembocadura, así como el área de interfluvio entre el Alto Orinoco y el Acure, en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde se encuentra la ciudad de Puerto Ayacucho. La región de las Guayanas es la que tiene mayor presencia de grupos étnicos - más de 25 pueblos indígenas diferentes - y, al mismo tiempo, mayor conflictividad por causa de la actividad minera.

A efectos de nuestro trabajo, nuestro mayor interés está en la región más próxima al Monte Roraima y que coincide con el actual Estado Bolívar y sus municipios Gran Sabana, Sifontes y El Callao. Es caracterizada por ser una región de sabanas y campos naturales, con algunas islas de mata y numerosos saltos de agua.

En esta zona encontramos fundamentalmente comunidades pemón de los pueblos kamarakoto, arekuna y taurepang.

Figura 13. Panorámica de región de campos con islas de mata en Venezuela, a unos 20 KM del Tepui Monte Roraima.
Fotografía del autor, tomada desde la comunidad de Paraitepuy.



Sin embargo, en algunos momentos también nos referiremos al Estado de Amazonas, situado más hacia el oeste, en el curso medio y alto del Orinoco. En él residen fundamentalmente grupos Yanomami, Sanomá, Ye'kuana, Piaroa y Arawak del Sur. Las organizaciones indígenas del Estado de Amazonas se han mostrado en los últimos años más activas en la reivindicación de los derechos territoriales y en el diálogo con el Estado acerca de las actividades mineras, que también se concentran allí en mayor medida.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 significó un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Bello y Tillet: 2015; Caballero: 2007). En lo referente a la cuestión territorial, se reconocen a los pueblos indígenas sus derechos originarios sobre las tierras que ocupan (art. 119º) y se determina que cualquier emprendimiento de aprovechamiento de bienes naturales en tierras indígenas estará sujeto a la previa información y consulta de la comunidad (art. 120º). Además, se reconoce el derecho a mantener y promover sus propias formas de

nacional y la territorialidad estatal. No desconocemos el conflicto, pero consideramos que la perspectiva de nuestro análisis es diferente.

organización económica basadas en la reciprocidad, intercambio y solidaridad (art. 123º).

Las tierras o hábitats indígenas, conceptos empleados en la Constitución venezolana²²⁹, implican un sentido de propiedad específico de carácter colectivo y originario. Se atribuyó al Estado el mandato constitucional de demarcar estos territorios, estableciendo un plazo inicial de dos años a partir de la aprobación de la Constitución y siempre en diálogo con las propias comunidades interesadas.

En los años siguientes a la promulgación de la Constitución, el Estado fue suscribiendo y desarrollando nuevas herramientas para este marco jurídico de garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En 2001, adhirió al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Ese mismo año entró en vigor la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto era la reglamentación del procedimiento de la demarcación de las tierras por parte del Estado. Un paso más fue dado en 2005 con la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas – LOPCI, en sintonía con el espíritu de la Constitución de 1999.

La LOPCI reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir y asumir de modo autónomo el “uso, protección y defensa de su hábitat y tierras” (art. 5º) y afirma que cualquier actividad que pueda afectar a la vida y los territorios de estas comunidades deberá ser consultada previamente (art. 12º), prohibiéndose explícitamente las actividades que afecten “grave o irreparablemente” la integridad económica y ambiental de dichos pueblos. Finalmente, en el artículo 54º, establece que el aprovechamiento por parte del Estado de recursos naturales dentro de las tierras y hábitats indígenas deberá someterse igualmente a la consulta previa a las comunidades “la cual debe ser suficientemente informada, fundamentada y libremente expresada por dichos pueblos y comunidades indígenas”. El Estado creó también la Comisión Nacional de Demarcación y diversas Comisiones Regionales con el mismo fin.

En definitiva, Venezuela ha creado una estructura normativa y administrativa suficiente direccionada a la política demarcatoria de las tierras indígenas. Sin embargo, la realidad está aún muy distante de estos propósitos y de estas responsabilidades atribuidas al Estado (Bello, 2011 y 2015; Caballero, 2007).

Después de 17 años de la promulgación de la Constitución, la demarcación de tierras ha sido prácticamente irrelevante. Luis Jesús Bello afirma que, según los propios datos de la Secretaría de la Comisión Nacional de Demarcación, hasta 2011 habían sido tituladas solo el 3% de las 3.000 comunidades censadas por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Incluso buena parte de ese 3% había objetado el título otorgado alegando inconstitucionalidad en los procedimientos. Además, afirma Bello que en los

²²⁹ Sobre la particularidad de esta terminología y las discusiones sobre sus implicaciones jurídicas, encontramos un análisis específico en Bello y Tillet: 2015.

Estados de Bolívar y Amazonas, que reúnen la mayor parte del territorio amazónico venezolano y donde se encuentra la presencia mayor de pueblos indígenas en el país, no ha habido ninguna demarcación de tierras y hábitats indígenas.

Mientras tanto, avanzan proyectos y políticas públicas de explotación minera sobre el territorio, como tendremos oportunidad de mostrar más adelante. En referencia a esta política extractiva se afirma que “todo esto está en proyecto pero andando y mientras tanto el Estado venezolano no ha realizado la demarcación de los territorios indígenas que ordena la propia Constitución de la República. Ni siquiera hay el 10% de las tierras indígenas demarcadas. Más del 90% siguen sin demarcación y el Estado está promoviendo estos proyectos extractivistas al sur del país como una supuesta alternativa al desarrollo”²³⁰.

Caballero (2007), apunta tres hechos, al menos, paradójicos, que traban el efectivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela:

- a) La distinción en la ley entre el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la propiedad del Estado sobre los bienes del subsuelo.
- b) A pesar de que el ordenamiento jurídico exige que los procesos demarcatorios se realicen en diálogo entre el Estado y las comunidades afectadas, hasta ahora ha sido el Estado quien ha tomado las decisiones unilateralmente.
- c) El Estado no ha titulado hasta ahora grandes extensiones de tierra como propiedad colectiva de los pueblos indígenas.

En evento reciente del I Congreso del Pueblo Pemón²³¹, representantes de las comunidades aseguraron que uno de los argumentos del Gobierno para la no titulación de sus tierras es el hecho de hallarse en región de frontera, sensible a la lógica estatal de defensa de la soberanía territorial. Este mismo argumento fue utilizado durante años en Brasil en el caso de Raposa Serra do Sol. Esta lógica de territorialidad estatal camina en sentido contrario a la realidad de una región de habitación indígena continua.

Debemos decir que, junto a las fórmulas jurídico-administrativas de hábitat y tierra indígena, el Estado venezolano también ha implementado otras figuras territoriales bajo el común epígrafe de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial - ABRAE. Ya en los años 70 y bajo esa categoría, administrada directamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el Estado pretendía “conservar los recursos naturales existentes a través de figuras como parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, zonas protectoras, etc ...” (Caballero Arias, 2007: 197).

²³⁰ Declaración realizada por representantes de organizaciones sociales e indígenas en el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014. Notas de Campo del autor.

²³¹ Congreso realizado el día 10 de julio de 2016 en la comunidad indígena de Maurak, municipio Gran Sabana, Estado Bolívar. Fuente: Asesoría de Comunicación del CIR.

Sin embargo, y como ocurrirá en los otros países vecinos, muchas veces la titulación de áreas protegidas desde una perspectiva de conservación ambiental se sobrepone sobre espacios habitados por pueblos indígenas, cuyas demandas territoriales continúan bloqueadas. Estas políticas ambientales “apenas consideraron la existencia y participación de grupos indígenas” (2007: 197). En el Estado de Amazonas encontramos la reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare o el Parque Nacional Parima-Tapirapecó. En el área *circum*-Roraima encontramos el Parque Nacional La Llovizna y, fundamentalmente, el Parque Nacional Canaima.

Como detallamos en el Capítulo 6, en los Estados de Amazonas y Bolívar se concentra la minería ilegal de oro y diamantes en Venezuela. De modo particular, la frontera Brasil-Guyana-Venezuela vive desde hace décadas un permanente flujo de migración hacia las zonas de minería informal en uno u otro país. Así como ocurre en el caso de los campamentos mineros en Guyana, muchos ciudadanos brasileños realizan trabajos de garimpo en Venezuela, manteniendo relación y puntos de apoyo en Boa Vista, capital de Roraima²³².

En los tres eventos inter-fronterizos realizados entre los años 2012 y 2014 donde el autor de este trabajo pudo participar²³³, representantes de comunidades indígenas de uno y otro lado de la triple frontera confirmaron el flujo permanente de personas que iban y venían de los campamentos mineros informales, así como las actividades mineras en los lechos de los ríos fronterizos. En el caso de la divisa Brasil-Venezuela, se denunciaba el contrabando de maquinaria destinada al garimpo, utilizando una vía terrestre clandestina por la región de Suapi – antigua zona de garimpo en Raposa Serra do Sol.

Al mismo tiempo, las zonas de actividad minera se convierten en puntos de rutas de tráfico de personas con fines de explotación sexual y/o laboral, particularmente en zonas de frontera terrestre, como es el caso que nos ocupa. En 2012, una investigación

²³² Francilene Rodrigues (1996) registra los motivos por los cuales los garimpeiros brasileños iniciaron una fuerte migración hacia Guyana y Venezuela en la década de 60. El alza del coste de la vida en los campamentos brasileños y las dificultades técnicas propias de los métodos de extracción incentivaron la migración hacia otros campamentos vecinos. Según Rodrigues, datos oficiales del Gobierno brasileño de esta época registraron la presencia de 300 garimpeiros brasileños solamente en un campamento de Venezuela (Rodrigues, 1996: 24; Machado, 1971:18). Una nueva ola migratoria hacia Venezuela se va a producir a finales de la década de 80 e inicios de los 90, cuando se intensifica la presión sobre los campamentos mineros en el interior de las tierras indígenas brasileñas, como veremos más adelante. La misma información es corroborada por Luis Bello y Aimé Tillet: “La entrada de garimpeiros al territorio Yanomami en Venezuela se remonta a fines de los años ochenta (1987), cuando ocurrió la gran invasión del territorio Yanomami de Brasil por aproximadamente 40.000 garimpeiros, que se ‘desbordó’ hacia Venezuela” (2015: 60).

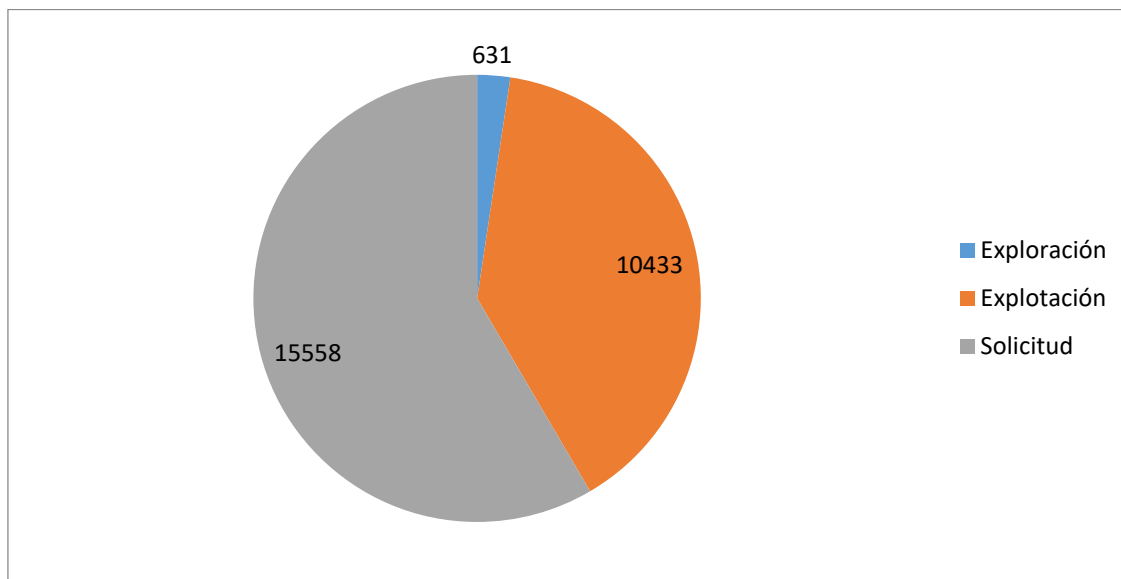
²³³ IV Encuentro de Iglesias de Frontera, Boa Vista - Roraima, febrero-marzo 2013, organizado por diócesis de la Iglesia Católica a uno y otro lado de la frontera en articulación con las organizaciones indígenas; I Encuentro de Pueblos Indígenas de Frontera, Caracaranã – TI Raposa Serra do Sol, junio de 2013, organizado por el Consejo Indígena de Roraima; I Seminario sobre Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014, organizado por el Consejo Indígena de Roraima.

realizada por la Secretaría Nacional de Justicia del Gobierno Federal de Brasil sobre el tráfico de personas levantó datos significativos que relacionan la actividad minera de garimpo en zonas de frontera con la explotación sexual de mujeres. Según la investigación, coordinada por Alline Jorge Birol, las rutas de tráfico de personas siguen los flujos de movilidad humana que acompañan las fronteras de explotación económica. En Roraima, “se observa a relação entre o fluxo de pessoas traficadas para a Venezuela, especialmente às zonas de minas” (Jorge Birol, 2012: 103). Afirma el estudio que la creación del Municipio de Pacaraima en la década de 90, fronterizo entre Brasil y Venezuela, marcó un aumento en la emigración de mujeres para trabajar en áreas de garimpo en Venezuela (2012: 124). Por último, afirma que em Roraima, “o destaque é também para o tráfico de adolescentes do sexo feminino, e mulheres que são levadas para fins de exploração sexual nos garimpos da Venezuela e da Guiana” (2012: 160).

Según datos de la red RAISG (2012), las zonas de minería ilegal en esta región afectan en su conjunto un total de 26.622 Km² pertenecientes a la cuenca del Orinoco, que se distribuyen según la fase de explotación en la que se encontraban en este período como se refleja en el siguiente gráfico. Cerca del 60% de los territorios afectados estaban en período de solicitud o exploración, lo que significa que la extracción minera en los próximos años podría aumentar expresivamente.

Gráfico 16. Áreas mineras en la cuenca del Orinoco, según fase de explotación (km²).

Fuente: RAISG, 2012



Como hemos comentado en el Capítulo 5 de nuestro trabajo, la nueva política minera del gobierno venezolano a partir de 2011 y la configuración del llamado Arco Minero transformaron las expectativas del sector en el país. En lo que concierne al territorio que a nosotros nos ocupa, el II Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019 prevé aumentar “las reservas de minerales a nivel nacional, ubicando los nuevos yacimientos mineros en el

Escudo de Guayana con la prospección geológica y la utilización de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental (...) duplicando las reservas mineras de bauxita, hierro, coltan (niobio y tantalita), níquel y carbón” (Bello y Tillet, 2015: 83).

En marzo de 2014, el Gobierno creó la Comisión Presidencial para Proteger, Desarrollar y Promover la Minería en la región de Guayana (Bello y Tillet, 2015: 112-113). Dicha Comisión, que integra los Gobernadores de Amazonas y Estado Bolívar y los alcaldes de los municipios afectados, se propone, entre otras cuestiones:

- Crear e implementar un registro de sujetos que ejercen la actividad minera;
- Promover la creación y administración de establecimientos para el expendio de suministros y equipamiento para la minería legal;
- Propiciar la utilización de métodos ecológicos o ambientalmente amigables para el ejercicio de la minería;
- Proponer la reforma del ordenamiento jurídico que regula la actividad minera, o elevar a los órganos competentes proyectos de instrumentos normativos para regular el sector.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas – COIAM ha hecho público su posicionamiento en diferentes momentos. Según recogen Bello y Tillet, en marzo de 2013 la COIAM realizó un pronunciamiento sobre la política minera del Estado venezolano. “Rechazamos la intención de implementar de manera inconsulta el denominado Arco Minero del Orinoco (...) Nos preocupa con particular cuidado el hecho de que se pretenda imponer estos proyectos, aun cuando el Gobierno nacional no ha realizado con efectividad la DEMARCACIÓN DE NUESTROS HÁBITATS Y TIERRAS” (2015: 106, destaque en mayúsculas en el texto original).

En junio de 2013, una delegación de dirigentes de la COIAM participó en Caracas en reuniones con el gobierno venezolano para la discusión sobre las políticas de explotación minera. “Nosotros estamos luchando por la demarcación, no se ha demarcado nuestro territorio. Tenemos años luchando por la demarcación de nuestras tierras y hasta ahora no hemos tenido respuesta de la Comisión Nacional de Demarcación, esa es nuestra preocupación”²³⁴.

En junio de 2014, la COIAM insistía en su preocupación por el avance de la normativa minera “sin que el Estado venezolano haya realizado la DEMARCACIÓN efectiva de los hábitats y tierras indígenas reconocida como derecho para estos pueblos y como obligación para el Estado venezolano en el artículo 119 de la Constitución”²³⁵.

²³⁴ Nota COIAM, accesible en:

<<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/07/COIAM%20en%20Caracas.pdf>>

²³⁵ Nota COIAM, accesible en: < <http://www.hutukara.org/index.php/noticias/732-segundo-comunicado-de-la-coordinadora-de-organizaciones-indigenas-de-la-amazonia-venezolana-coiam>>

Las Organizaciones de Mujeres Indígenas de Amazonas denunciaron también en 2014 la presencia de grupos armados y de campamentos militares en las tierras indígenas (IWGIA, 2015: 142). La militarización del territorio, sea con la presencia de las Fuerzas Armadas o con la existencia de grupos armados particulares, es una marca aún actual en los territorios ocupados por la actividad minera, legal o ilegal. Una de las expresiones de este contexto militarizado es la existencia de los llamados “sindicatos”, “grupos armados no estatales que extorsionan a los mineros a cambio de servicios de seguridad” (IWGIA, 2015: 147).

También en 2014, la Organización Indígena de la Cuenca del Caura “Kuyujani”, que agrupa comunidades de los pueblos Ye’kuana y Sanema, denunció la presencia de más de 3000 mineros trabajando en el río Yuruani y su desembocadura en el Caura.

Durante el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, los líderes de las organizaciones expusieron las acciones que habían llevado a cabo hasta ese momento. “COIAM desde el primer momento se pronunció a nivel del país. Eso se entregó a las instituciones, instituciones como la Presidencia, la Controladuría, la Fiscalía, la Cancillería, Defensoría,... En fin toda la estructura del poder del Estado venezolano. Nos sentamos como organización con el Ministerio de la Defensa. Le consignamos todos los procedimientos que hemos dado los pueblos indígenas. Porque hay una corresponsabilidad. Decíamos los pueblos indígenas ‘no estamos mendigando un derecho, estamos reclamando para que se cumpla la legislación venezolana, defender la cultura es defender la identidad del país y el patrimonio cultural del país’. Eso les hicimos entender.

Bajo ningún concepto estamos en contra del desarrollo del país, sino más bien queríamos fortalecer desde el desarrollo que nuestros abuelos, nuestros chamanes conocen cómo manejar el ambiente, y allí se acordó que teníamos que crear una Mesa de Diálogo y Concertación de la estructura del gobierno y el indígena. (...) De ahí vamos a trazar acciones que vayan articuladas con la institución. Si ellos rechazan la propuesta nuestra tendremos otra vía, que es la presión a nivel internacional, porque el convenio 169 es explícito.

Sabemos que los pueblos indígenas solos no podemos lograrlo. Tenemos que hacer esfuerzos conjuntamente con las entidades, con los no indígenas que tienen ese sentir y ese corazón y ese amor y esa definición que juega contra el ser humano”²³⁶.

8.1.4. Del lado de Brasil: la cuenca del Río Branco

Del lado brasileño, la región *circum*-Roraima corresponde al actual Estado de Roraima, uno de las federaciones más jóvenes del país al ser creada como tal en 1988. Desde el

²³⁶ Declaración realizada por representantes de organizaciones sociales e indígenas en el I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014. Notas de Campo del autor

punto de vista ambiental, buena parte de su territorio es cubierto por florestas, mientras que en la región central y nordeste encontramos vastas extensiones de sabanas, conocidas regionalmente como *lavrados*, uno de los ecosistemas más singulares en el conjunto del bioma amazónico y una de las áreas endémicas de América del Sur (Campos et al: 2008)²³⁷.

El territorio roraimense es vertebrado por la cuenca del Rio Branco, que desciende de norte a sudoeste hasta desembocar en el Rio Negro, uno de los formadores del Amazonas. Las nacientes del Rio Branco se encuentran en la cadena montañosa continua que se establece en la frontera norte y nordeste entre Roraima y Venezuela (Campos, 2011), coincidiendo con las tierras indígenas Yanomami, São Marcos y Raposa Serra do Sol.

Los dos principales formadores del Branco son el Rio Uraricoera – cuyo recorrido tiene lugar mayoritariamente en región de floresta – y el Rio Tacutú – que recorre la región de *lavrado* y que ejerce en parte como frontera natural entre Brasil y Guyana, junto a su afluente el rio Maú [Ireng]. El Branco cobija y ofrece sus aguas a la mayor parte de la población roraimense. En su curso medio, a la altura del actual municipio de Caracará, se dificulta su navegabilidad por la existencia de cascadas y correderas. Sobre una de sus correderas, conocida como Bem Querer, paira desde hace unos años un proyecto de construcción de hidroeléctrica, contemplada en el Plan de Aceleración del Crecimiento-PAC del gobierno brasileño.

La región del Rio Branco se caracteriza por poseer una de las poblaciones indígenas proporcionalmente más numerosas y diversas en el país. Actualmente, diez pueblos indígenas viven en el Estado de Roraima²³⁸: macuxi, taurepang, patamona, ingarikó [akawaio], wapichana, wai-wai, waimiri-atroari, saporá, ye'kuana y yanomami²³⁹.

²³⁷ Parecido con la región del Cerrado brasileño, el *lavrado* se caracteriza por la extensión de campos naturales con vegetación de matorral bajo y medio, alternando con sierras e islas de grupos de buriti²³⁷ que acompañan pequeños cursos de agua. En términos generales, la riqueza propia del ecosistema del *lavrado* no ha sido apreciada en su justa medida y actualmente se encuentra bajo la presión de fuertes intereses de ocupación económica²³⁷. Sus características atrajeron desde el inicio la actividad ganadera extensiva y, en las últimas décadas, al capital agroindustrial para el plantío de arroz irrigado, acacia *mangium* o soja para exportación. La importancia singular del *lavrado* es representada por la biodiversidad que acoge en su flora y fauna, incluyendo significativamente la diversidad de hábitats acuáticos: ríos, arroyos, correderas y lagos naturales.

²³⁸ Este número se vio alterado en diciembre de 2012, cuando la FUNAI publicó una Ordenanza restringiendo el ingreso de personas a una zona ubicada en la región del sur de Roraima, habitada por un grupo aislado identificado por los vecinos Waimiri-Atroari como sus *parentes* Pirititi o Tiquiriá. Se trataría de grupos que se habrían protegido en esta región de floresta huyendo de la abertura de la carretera BR-174 y del avance minero en la década de 70 y hasta ahora habrían preservado unas posibilidades de vida sin afectaciones por parte de la sociedad envolvente.

²³⁹ Dentro del grupo Yanomami, encontramos diversos grupos étnicos con sus propias especificidades socioculturales y lingüísticas.

Durante el proceso de colonización de la región muchos otros grupos étnicos desaparecieron o fueron exterminados.

Este proceso de colonización se caracterizó a lo largo del siglo XX por varios momentos de alto flujo migratorio, coincidiendo con la expansión de la frontera económica sobre toda la región amazónica brasileña, como tuvimos ocasión de verificar en el Capítulo 7. De modo particular, la década de 70 significó un momento de expansión migratoria singular que ha afectado profundamente la configuración social y económica de Roraima hasta nuestros días.

En Roraima, entonces Territorio Federal²⁴⁰, durante la década de 70 la población pasó de menos de 50.000 personas para prácticamente 80.000 y en el inicio de los años 80 la mitad de la población ya residía en núcleos urbanos. Varios factores contribuyeron a esto:

- La construcción y apertura de una malla viaria estratégica, con la carretera BR-174, que une Manaus con la frontera norte con Venezuela siguiendo hasta Caracas, así como la construcción de algunos ramales como la BR-210 o Perimetral Norte y la BR 401²⁴¹ (*Mapa 13*);
- La expectativa de una política de asentamiento rural que no se ha consolidado suficientemente pero que favoreció la llegada de millares de personas en un emprendimiento que prometía la accesibilidad a tierra y recursos;
- Un nuevo momento de expansión de la minería ilegal de aluvión en los garimpos, generando toda una economía volátil en el interior y en la capital alrededor del oro y el diamante.

²⁴⁰ Hasta 1943, el actual Estado de Roraima estaba bajo la jurisdicción del Gobierno Regional de Amazonas. En 1943 pasó a ser Territorio Federal do Rio Branco y, posteriormente, en 1962, Territorio Federal de Roraima. Solamente en 1988 fue instituido como Estado de Roraima, una de las 27 unidades federativas del país. En nuestro recorrido histórico, iremos haciendo mención a la condición de este territorio en función de cada época.

²⁴¹ La BR-210 o Perimetral Norte atraviesa el Estado de Roraima de Este a Oeste. Esta carretera fue estratégica para ocupar con población migrante la región sudeste de Roraima – territorio tradicional de los Waimiri Atrorai y los Wai-Wai y donde actualmente encontramos los municipios de Caroebe, São Luiz de Anauá y São João de Baliza. Hacia el lado occidental, la BR-210 incursionó en el territorio Yanomami, siendo vía de entrada para la actividad *garimpeira* y la implantación de *fazendas* y, posteriormente, pequeños asentamientos rurales. Ya la BR-401 comunica la capital, Boa Vista, con la frontera oriental con Guyana, en los actuales municipios de Normandia y Bonfim.

Mapa 13. Trazado de las carreteras BR-174 y BR-210 e impacto en los territorios indígenas Waimiri-Atroari, Yanomami y Raposa Serra do Sol. *Elaboción por el autor.*



Durante esas décadas de expansión demográfica por flujo migratorio, la economía giró en torno a la fazenda de ganado vacuno y la economía del garimpo, así como ya había sido en la primera mitad del siglo XX. Pero ahora la componente migratoria era mucho más intensa y el espacio ocupado más denso. Si hasta entonces, la ocupación foránea se había concentrado en las tierras de campos naturales, ahora se produce una presión sobre el territorio-floresta y una inmersión de millares de personas atraídos por el potencial aurífero y diamantífero de sus ríos. “Ao final da década de 1980, quando o garimpo estava no auge, cerca de 45 mil pessoas trabalhavam na extração de ouro da TI Yanomami, e a movimentação de pequenas aeronaves fazia do aeroporto de Boa Vista o segundo mais movimentado do Brasil. Estima-se que mais de 400 toneladas de ouro foram extraídas e contrabandeadas para o exterior, sem gerar divisas para Roraima” (Campos, 2012: 27).

Los principales afectados por esta expansión de la frontera económica sobre la región del Río Branco en el último tercio del siglo XX fueron, sin duda, los pueblos indígenas. Los impactos ocasionados por la ocupación - casi siempre intensa, desordenada y violenta - de los territorios en que vivían les generaron consecuencias muy severas:

- reducción de sus áreas de habitación;

- contaminación de fuentes de agua y deforestación;
- diseminación de enfermedades que causaron muchas muertes en las comunidades;
- desagregación social e interferencia en sus modelos organizativos y económicos;
- pérdida de acceso a bienes naturales necesarios para su sobrevivencia física y cultural;
- violencia;
- reclutamiento de mano de obra explotada para servicio de las nuevas actividades productivas o extractivas.

La movilización indígena frenó el avance de la economía ganadera y garimpeira, inició la retomada de la tierra ocupada y abrió una disputa jurídica en el seno del Estado por el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, hay 32 tierras indígenas que han concluido todo el proceso de demarcación, homologación y registro que se recoge en el marco jurídico del país y que representan el 46% de las tierras del Estado de Roraima²⁴².

Respecto a las tierras indígenas, destacadas en color verde en el Mapa, podemos apreciar dos padrones demarcatorios básicamente diversos: áreas territoriales amplias o continuas y áreas territoriales de pequeño tamaño.

En el primero de los casos, la demarcación de estos territorios ha contemplado la localización de aldeas indígenas y también sus modelos de utilización del espacio: áreas de movilidad, actividades productivas, locales de relevante significación simbólica, acceso a bienes naturales fundamentales y relaciones inter-comunitarias, conforme sus usos y costumbres. El territorio habitado va más allá del local donde se localiza la aldea, sino que se configura también por lo que Paul Little registra como *cosmografía*: el conjunto de saberes ambientales e identidades colectivamente construidas e históricamente situadas que un grupo utiliza para establecer su territorio. Estos territorios en espacio continuo ofrecen mayores garantías para la reproducción física y cultural de los pueblos que los habitan. En Roraima, solamente 5 de las 32 tierras indígenas homologadas responden a este modelo, entre las que destacamos:

- *Tierra Indígena Yanomami*, localizada al noroeste del Estado. Se extiende aún en forma de un brazo hacia el suroeste, ya en el Estado de Amazonas. Este territorio es habitado por aldeas del pueblo Yanomami – con sus diversos grupos – y del pueblo Ye’kuana. El territorio de ocupación tradicional del pueblo Yanomami y del pueblo Ye’kuana continúa del otro lado de la frontera venezolana.
- *Tierra Indígena São Marcos*, localizada al norte del Estado de Roraima hasta la frontera con Venezuela. Está pegada a la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol y en ella encontramos aldeas de los pueblos macuxi, wapichana, taurepang y saporá.

²⁴² No se incluye en este cálculo la interdicción en 2012 del territorio habitado por el grupo aislado Pirititi al que hicimos mención anteriormente.

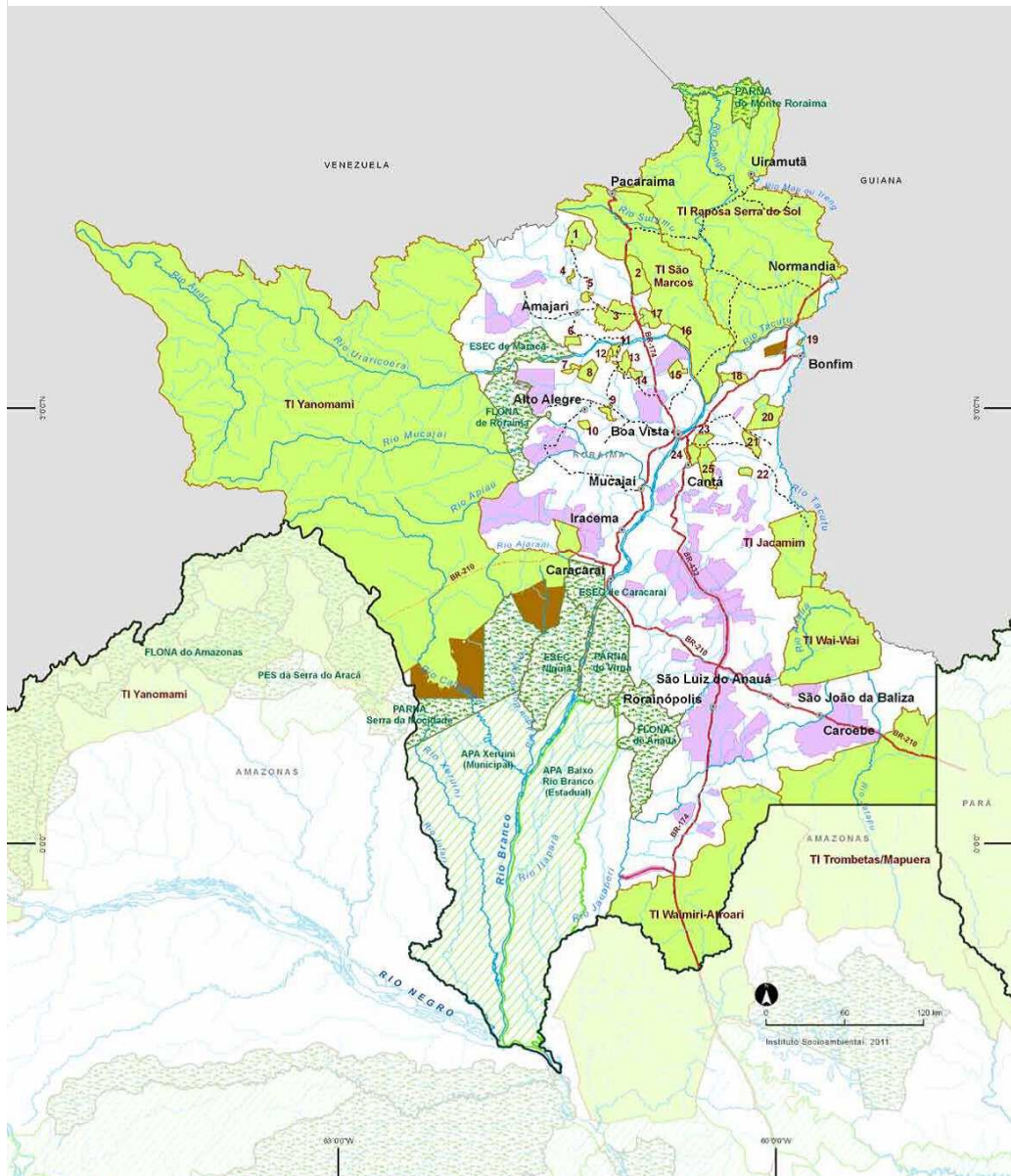
- *Tierra Indígena Raposa Serra do Sol*, espacio de interés de nuestro trabajo, y al que le dedicaremos la siguiente sección.

En contrapartida, la mayor parte de las tierras indígenas de Roraima fueron demarcadas en pequeños territorios, circunscritos muchas de las veces a la localización de la aldea. Estos espacios se ven rodeados por áreas destinadas a otros fines como: haciendas de ganado en régimen privado; áreas de plantío destinadas a propietarios individuales o grupos de capital; o incluso zonas de asentamiento para la agricultura familiar. Este modelo demarcatorio es conocido regionalmente como “tierras en isla” o aisladas. Muchas de ellas adoptaron este padrón de delimitación siguiendo una política defendida por la FUNAI a finales de la década de 70 e inicios de 80, como veremos más adelante.

El resultado fue un mosaico de pequeños territorios indígenas que acogen entre 1 y 5 comunidades vecinas y se circunscribe al área de ocupación directa de éstas. En no pocas ocasiones, la localización de bienes naturales fundamentales – fuentes de agua, *buritizais*, zonas de pesca o de caza – determinará claramente las posibilidades de manejo de los recursos y de actividades económicas y sociales del grupo. Muchos territorios indígenas fueron demarcados dejando fuera de ellos las fuentes de agua o interrumpiendo el acceso a zonas de pesca o caza. Resulta evidente que en estas circunstancias de acceso a bienes naturales la condición de sobrevivencia física y cultural del grupo puede verse comprometida. Para acceder a estas fuentes, muchas comunidades son obligadas a transitar por medio de fazendas, reproduciendo permanentemente un clima de tensión social. El previsible aumento demográfico en las comunidades va a revelar, si no lo hace ya, la ineffectividad de estos modelos de delimitación territorial, más próximos al confinamiento que a la garantía de derechos.

La composición territorial de Roraima se complementa con otros conceptos espaciales. Destacan los casi 70 proyectos de Asentamiento para Reforma Agraria, iniciados en las décadas de 70 y 80 y dispuestos en el formato de “espina de pescado”, con la apertura de caminos en paralelo a partir de una carretera principal (Oliveira, Silva y Frank [org.], 2014: 12). Estos asentamientos se dirigen a pequeñas unidades productivas relacionadas con la agricultura o la ganadería. En el mapa aparecen en un color violeta y se distribuyen alrededor del eje noroeste-sudeste, en el valle del Rio Branco y siguiendo el dibujo de la BR-174 y la Perimetral Norte o BR-210.

Mapa 14. Territorios indígenas, proyectos de asentamiento rural y áreas de preservación ambiental en Roraima. Fuente: ISA; Campos (org.) (2011)



Por último, nos deparamos con diversos territorios ambientales que ocupan el 7% del Estado de Roraima y que adoptan diferentes fórmulas en función de las competencias en su gestión divididas entre Gobierno Federal y Gobierno Estadual y en función del nivel de protección y de permisibilidad de acceso a los bienes naturales. Siguiendo a Campos (2012), encontramos en Roraima tres tipos de territorialidad ambiental:

- Parques Nacionales, destinados a la preservación de ecosistemas de gran relevancia biológica, permitiéndose actividades de investigación científica, educación y turismo ecológico. En Roraima encontramos los Parques Nacionales de Viruá, Serra da

Mocidade y Monte Roraima. Estos dos últimos fueron instaurados en sobreposición a la TI Yanomami y la TI Raposa Serra do Sol, respectivamente²⁴³.

- Estaciones Ecológicas - ESEC, destinadas a la preservación de la biodiversidad y la realización de investigaciones científicas. Encontramos en Roraima: la Estación Ecológica de Maracá – extraordinario archipiélago de islas generadas en el curso medio del Uraricoera – muy próxima a presencia de garimpos y en una zona con altos requerimientos para explotación de oro; la estación Ecológica de Niquiá; y la estación Ecológica de Caracará, actualmente sometida a la presión de la deforestación y la ocupación ilegal de *fazendas* de ganado vacuno.
- Florestas Nacionales – FLONA. Tienen por objetivo el uso sostenible de los recursos forestales y la investigación científica. Es permitida la permanencia de comunidades indígenas en su interior. Destacan la Floresta Nacional de Anauá y la Floresta Nacional de Roraima, casi totalmente sobrepuesta en su origen a la TI Yanomami.

El conjunto compuesto por las tierras indígenas y las zonas de conservación ambiental conforman lo que se denomina Áreas Protegidas, que llegan a suponer el 53% del territorio roraimense.

Visualmente, el mapa de Roraima nos devuelve una imagen en la cual la franja central que recorre de sur a norte el Estado, siguiendo la BR-174 y la región de campos y valles del Rio Branco, registra los principales núcleos urbanos y sedes de municipio, así como los proyectos de asentamiento rural y las áreas privadas, normalmente destinadas a la propiedad ganadera o agroexportadora. Los territorios indígenas y las Unidades de Conservación, donde encontramos mayor biodiversidad y menor influencia antrópica, se localizan en la zona exterior o periférica del Estado, precisamente en las áreas fronterizas con Venezuela y Guyana o con los Estados brasileños de Pará y Amazonas. Pareciese que un movimiento centrífugo desplazó estas territorialidades para el cinturón o que, al menos, el núcleo central concentró un mayor proceso de ocupación exógena y desde ahí la frontera económica se iba expandiendo hacia el exterior. Este podría ser, de cierto modo, el padrón territorial resultante del proceso de colonización intensa de la región del rio Branco impulsado de modo particular a partir de la década de 70.

²⁴³ El marco jurídico brasileño no dispone de mecanismos que regulen casos de sobreposición territorial como éstos, en los cuales los derechos de usufructo exclusivo de los bienes naturales por parte de las comunidades indígenas podrían ser limitados. Sucede también que, desde el punto de vista de la administración del Estado, se trata de dos tipos de tierras públicas diferentes, sobre las cuales vigoran marcos legislativos específicos y propios y cuya responsabilidad descansa sobre órganos administrativos diferentes, relacionados con ministerios distintos. Las comunidades indígenas, tanto en la TI Yanomami como en la TI Raposa Serra do Sol han manifestado su rechazo a la sobreposición de territorialidades diversas. La opción por parte de los organismos públicos implicados – FUNAI e ICMBio – ha sido la de intentar conciliar ambos intereses creando espacios deliberativos paritarios donde la representación de las comunidades indígenas esté garantizada en la elaboración de los Planes de Manejo de los Parques Nacionales.

Según el censo demográfico de 2010, cerca del 75% de la población roraimense se concentra en la capital, Boa Vista, con una población que ronda los 300.000 habitantes. El resto de las sedes municipales del Estado no superan los 10.000 habitantes.

8.2. De río a río. Proceso histórico de territorialización en Raposa Serra do Sol

Raposa Serra do Sol es uno de los 32 territorios indígenas homologados en Roraima. El proceso de reconocimiento de esta tierra indígena fue uno de los más emblemáticos y significativos en Brasil, arrastrándose por más de 30 años. Ha sido protagonizado por una de las experiencias de movilización indígena más importantes también en el escenario nacional, que desembocó a mediados de los años 80 en la creación, primero, del Consejo Indígena del Territorio de Roraima/CINTER, y posteriormente, en el Consejo Indígena de Roraima/CIR.

El modo concreto como las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol se organizaron para retomar el control del propio territorio y su reconocimiento legal configura uno de los procesos más genuinos de las últimas décadas. Tanto es así, que los principales dirigentes que condujeron esta causa son llamados, hasta el día de hoy, en otros diversos territorios indígenas para compartir los elementos que caracterizaron la movilización de las comunidades en la base más local.

En un primer momento, vamos a hacer una breve descripción de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol bajo una dimensión socio-ambiental. En un segundo momento, describiremos las condiciones bajo las cuales se fue configurando el concepto político y étnico de Raposa Serra do Sol para concluir, en un tercer epígrafe, con el análisis de las principales características del proceso de movilización indígena en defensa de su territorio y el desenlace final durante la década de 2000.

8.2.1. Relaciones, ambiente y organización social y política en Raposa Serra do Sol

La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol es un territorio de 1.678.000 hectáreas habitado por cerca de 200 comunidades indígenas de los pueblos macuxi, wapichana, taurepang, patamona e ingarikó.

Encontramos en su seno tres ambientes naturales diferenciados. En primer lugar, en la mitad sur del territorio destacan las áreas de sabanas, campos naturales o *lavrados*, donde hay comunidades macuxi, wapichana y taurepang, principalmente.

Figura 14. Vista panorámica de la región serrana, al norte de Raposa Serra do Sol, tomada muy cerca de la aldea Maturuca. Fotografía del autor.



El segundo ambiente natural se encuentra en la mitad norte del territorio. Se trata de una región de sierras pronunciadas y altiplanos, con abundantes fuentes de agua y un clima más frío debido a la mayor altura. La población de la región serrana es mayoritariamente macuxi. Ya en el extremo norte de la región de las sierras, en las faldas del Monte Roraima, encontramos un tercer ambiente de floresta que es habitado, principalmente, por comunidades ingarikó y patamona.

Raposa Serra do Sol es delimitada por cuatro ríos: al norte, por el río Miang, que limita con Venezuela; al oeste por el río Surumu, que limita con la tierra indígena São Marcos; al este, por el río Maú [Ireng], que limita con Guyana Inglesa; y al sur, por el río Tacutú.

La base económica actual de las comunidades indígenas tiene fuentes diversificadas:

- De un lado, se mantiene el modelo de producción agrícola familiar centrada en la *roça* o huerta principal²⁴⁴. Esta actividad es complementada con la cría de animales

²⁴⁴ La *roça* es el área de tierra plantada anualmente por la familia y de la cual obtienen buena parte de los alimentos fundamentales de la alimentación en las comunidades: yuca, arroz, pimienta, maíz, calabazas,

(gallinas, patos, cerdos y en algunos casos cabras o ganado vacuno), la colecta de productos silvestres (castaña, buriti, bacaba,...) la carne de caza y la pesca. En algunas zonas se está incorporando la cría de peces en cautiverio, en tanques cavados manualmente en la tierra o en cursos naturales de agua cercados.

- Al modelo de producción familiar, se le unieron durante las décadas de 80 y 90, en función del proceso de movilización y retomada de la tierra, proyectos productivos de carácter comunitario o colectivo: ganado, *roças* comunitarias, carpintería, transportes, motores de energía, confección textil y otras. Estos proyectos sirvieron para mantener las actividades comunitarias en los momentos de mayor implicación en la retomada de la tierra, así como también funcionaron como elementos de agregación social y organización de la comunidad.
- En las últimas dos décadas, la base económica ha vivido una transformación importante por cuenta de la monetización de la economía y la introducción de los salarios o los beneficios procedentes de las políticas sociales de carácter universal: profesores indígenas como funcionarios del sistema público de educación; agentes de salud y de saneamiento básico; reconocimiento de derechos económicos para personas mayores; beneficios sociales vinculados al nacimiento de hijos o a la declaración de bajos ingresos; y otros. El aumento de la interacción con el mundo urbano ha amplificado la relación de las economías familiares con bienes procedentes de la ciudad.



Figura 15. Imagen de la II Feria de Semillas Tradicionales en el Centro Indígena de Formación y Cultura Raposa Serra do Sol. Fuente: Centro de Documentación del Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

La diversificación de las fuentes económicas también produjo cambios en los comportamientos de consumo, con mayor afluencia de productos alimenticios de la ciudad, productos tecnológicos o vehículos de transporte individual y/o familiar. Estos cambios, aún así, no siempre han mermado la capacidad de conservación de la biodiversidad alimenticia en algunas comunidades indígenas, que continúan manteniendo una importante diversidad

de semillas y de especies alimenticias, así como procedimientos culturales de conservación de las semillas de un año para otro o de intercambio entre familias y/o comunidades.

Desde el punto de vista de la organización política de la aldea, es posible afirmar que la figura actual de *tuxaua* o dirigente comunitario ha sido en parte fruto de las nuevas

frutales o frijoles. La dimensión de las *roças* es medida a través de una unidad llamada *linha*, equivalente a 25 x 25 brazadas (brazos abiertos y extendidos al máximo) o 50x50 metros, lo que equivaldría aproximadamente a 2500 m², ¼ de hectárea.

condiciones de intermediación con la sociedad que se han dado en el último tercio de siglo XX en relación con la defensa de la tierra. Paulo Santilli (1989), en su análisis del contacto de los monjes benedictinos con algunos líderes indígenas a principios del siglo XX, acude a la categoría de la intermediación política para explicar el papel que algunas personas ocuparon en aquel momento dentro de la comunidad. Para Santilli, esta intermediación política representaría “a interlocução realizada por personagens determinados, lideranças que se constituem no cruzamento de duas ordens culturais e que, precisamente de sua capacidade de interlocução, ou seja, de tradução de um novo código cultural àquele a que pertence, deriva seu estatuto de liderança” (1989: 105). Este análisis puede ayudarnos a explicar también algunos de los cambios más importantes en la configuración política actual de las comunidades, gestados a partir de las necesidades de intermediación en un momento histórico determinado por la retomada de la tierra.

Anteriormente, tanto los relatos de los mayores como los registros registrados por etnólogos (algunos de ellos recogidos por Santilli, 1989) describen la figura del dirigente comunitario como aquel que conseguía reunir en torno a sí un grupo doméstico no excesivamente numeroso. El padrón residencial de las comunidades respondía a una lógica uxorilocal, por la cual se esperaba que los varones fuesen a vivir a la aldea de su esposa. El acento se marcaba en las relaciones suegro-yerno más que en las relaciones entre cuñados. El tuxaua, identificado con la figura del suegro, ejercería su capacidad de liderazgo en la medida en que consiguiese mantener cohesionada la comunidad en torno a él. No existían, en principio, estructuras políticas supra o trans-comunitarias.

Con el inicio de las asambleas indígenas en la década de 70, la incorporación de líderes comunitarios jóvenes y la formación de consenso en torno a la defensa de la tierra y de su retomada, el escenario político se transformó profundamente. Y también se transformaron las necesidades de intermediación política. A partir de ese momento, las personas que se destacaban en la comunidad por su capacidad de intermediación con las agencias externas que se relacionaban, de una u otra forma, con la cuestión de la tierra – FUNAI, Gobierno, Iglesia Católica - y por su habilidad en la traducción hacia la comunidad de los nuevos códigos culturales y políticos, asumieron un papel estratégico. Al mismo tiempo, la retomada de la tierra condujo a la necesidad de relaciones políticas supra y trans-comunitarias. Estos dos nuevos elementos van a configurar la nueva organización política de la aldea.

Actualmente, la comunidad elige a la persona que va a ejercer esta responsabilidad política durante un tiempo no necesariamente estipulado y delega en él/ella la representatividad de la comunidad dentro del movimiento indígena más amplio o ante terceros. El tuxaua reúne a la comunidad para la organización de los trabajos comunitarios, el repase de las informaciones, la resolución de conflictos internos o la toma de decisiones. Cualquier oportunidad puede ser aprovechada para discutir de algunas cuestiones pendientes; en otros casos, las reuniones están programadas, siendo

frecuente que los encuentros sean, al menos, semanales. Estas especificidades dependerán también del tamaño de la aldea y de los compromisos del tuxaua en la organización supra-comunitaria regional.

Junto al tuxaua, otras figuras han ido asumiendo también en las últimas décadas un papel de dirigencia, creándose así un consejo comunitario en el que se suelen encontrar representantes de los profesores de la comunidad, de los Agentes de Salud, de las mujeres, de los Catequistas o animadores religiosos en su caso, así como el *capataz* o responsable por los trabajos comunitarios.

Desde el punto de vista del territorio, las comunidades indígenas adoptaron una forma propia de organización del espacio de Raposa Serra do Sol. Dividen el territorio en cuatro grandes áreas que también denominan *etno-regiones*:

- La Región de Surumu. Se extiende por la zona oeste de Raposa Serra do Sol, siguiendo el margen izquierdo del río Surumú desde la frontera norte con Venezuela hasta su encuentro con el río Cotingo.
- La región de Baixo Cotingo, situada en el centro sur del territorio Raposa Serra do Sol, sigue precisamente el curso bajo del Cotingo en su margen izquierdo hasta su confluencia con el Surumu.
- La región de Raposa, localizada en el sudeste de Raposa Serra do Sol. Ocupa el espacio que se despliega entre la frontera con la Guyana Inglesa y el margen derecho del río Tacutu.
- La región Serras es la mayor de todas y ocupa toda la mitad norte hasta las faldas del Monte Roraima. Además de ser la de mayor tamaño geográfico y mayor concentración de población, la región se destacó durante el proceso de retomada de la tierra por una mayor cohesión interna y determinación en las acciones.

Población de la TI Raposa Serra do Sol por cada región indígena, según datos del Censo 2014 del CIR

	Población	Nº Comunidades	Grupos étnicos
Raposa	4.475	41	Macuxi, Taurepang, Wapichana
Surumú	3.182	22	Macuxi, Taurepang, Wapichana
Baixo Cotingo	3.204	40	Macuxi, Wapichana
Serras	11.804	95	Macuxi, Ingarikó, Patamona
Total	22.665	198	

La región Serras se divide, al mismo tiempo, en nueve Sub-centros que se corresponden con nueve sub-zonas geográficas (Figura 16). Cada sub-centro cuenta con una aldea principal y, en torno a ella, entre 8 y 10 aldeas menores.



Figura 16. Dibujo realizado en tejido que muestra la subdivisión territorial de la Región Serras en diversos sub-centros. El tejido se encuentra en el Centro Regional de Serras localizado en la aldea de Maturuca. Fotografía del autor.¹

Esta división territorial de carácter étnico-político se fue construyendo a lo largo del proceso de movilización en defensa del territorio y no corresponde con la división político-administrativa en municipios que el Estado brasileño dibujó en esta región²⁴⁵. Para el Estado brasileño, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol se superpone al territorio administrativo de tres municipios:

- Normandía, cuya sede se sitúa en la frontera este con la Guyana Inglesa. Creado en 1982, es el municipio más antiguo de la zona. Actualmente, las comunidades de la etno-región de Raposa quedarían bajo su jurisdicción administrativa.
- Pacaraima, creado en 1995, cuya sede se localiza en la divisa con Venezuela, al norte. Bajo su jurisdicción estarían las comunidades de la etno-región de Surumu, parte de la región de Serras y toda la Tierra Indígena São Marcos.
- Uiramutã, municipio oficializado en 2000. Localizado en el corazón de la región Serras, le es concedida la jurisdicción administrativa de toda esa etno-región.

²⁴⁵ El Estado brasileño reconoce oficialmente tres unidades federativas: los Municipios, los Estados y la Unión. Los territorios comunitarios como las tierras indígenas no configuran una unidad administrativa y se someten a la jurisdicción política de los municipios y Estados donde se encuentren.

Encontramos, por tanto, la sobreposición espacial de dos configuraciones político-territoriales divergentes. De un lado, una configuración que responde al modelo organizativo adoptado por las comunidades indígenas; de otro lado, la configuración político-administrativa que el Estado brasileño diseñó en la zona. Ambas lógicas de funcionamiento político y territorial son autónomas entre sí y poseen mecanismos, espacios y procedimientos políticos propios; si bien, al mismo tiempo, entre ambas lógicas de territorialidad y de organización política existe una relación necesaria, inevitable y compleja, marcada por dilemas y divergencias.

Las comunidades indígenas han mostrado resistencia a la creación de estos municipios y la instalación de las sedes municipales dentro de su territorio. Argumentan que los tres municipios respondieron a las dinámicas históricas de ocupación económica de su hábitat por parte de terceros y abrigan, fundamentalmente, a la población restante de las agencias de la fazenda y el garimpo. Los municipios estarían comprometidos, así, con los conflictos del pasado reciente.

Normandía, por ejemplo, es identificado en el devenir histórico como uno de los principales núcleos de apoyo a la actividad ganadera de los fazendeiros o de militarización del territorio indígena con la instalación del Cuartel de la Policía Militar. Su sede fue construida a mitad del siglo XX como una plaza de control territorial y de defensa de las fronteras para el Estado brasileño, y se acompañó posteriormente de un histórico lleno de violencias físicas e institucionales contra las comunidades indígenas vecinas. Ya Pacaraima y Uiramutã han sido creados como municipios en la década de 90, en pleno proceso de reconocimiento de la tierra indígena y con la férrea oposición de la mayor parte de las comunidades, que han cuestionado judicialmente la creación de ambas sedes y ambos municipios.

8.2.2. Fazendeiros, garimpeiros, Estado y comunidades indígenas: la defensa de la tierra

Los registros históricos a partir del siglo XVIII a los que nos hemos referido anteriormente permiten afirmar que los grupos de las familias pemon y kapon han mantenido un padrón de ocupación del territorio bastante estable. Sin embargo, la configuración y formalización de lo que hoy conocemos como la Tierra Indígena Raposa Serra de Sol va a tener su desenlace, de un modo decisivo, a partir de la década de 1970.

Siguiendo el trabajo realizado por Paulo Santilli (2000), en 1917 ya encontramos un primer acto administrativo, la Ley Estadual 941/17 del Estado do Amazonas, que delimitaba la franja de tierras entre los ríos Cotingo y Surumu para la ocupación y uso exclusivo de los indios de la región. Dos años después, en 1919, el entonces órgano indigenista Serviço de Proteção aos Índios – SPI inició una demarcación física del área que no llegó a concluir. Desde entonces y hasta la década de 70 no se encuentran nuevas providencias administrativas.

El nuevo momento que se inicia en la década de 70 viene determinado por, al menos, tres vectores:

- a) aumento de los conflictos por el control y uso del espacio entre los grupos indígenas y otros grupos externos con diversos intereses económicos;
- b) re-elaboración de las formas jurídico-administrativas que el Estado brasileño adopta para responder a territorialidades diversas y alteridades espaciales;
- c) proceso de organización social supra-comunitaria en el seno de los pueblos indígenas como fórmula política de hacer frente a un nuevo contexto relacional con el Estado y con otras agencias externas (sociales, políticas, económicas y religiosas).

En estos últimos cuarenta años, el conflicto territorial en Raposa Serra do Sol ha estado protagonizado por la acción de cuatro agencias económicas y políticas: la pecuaria, la actividad minera, la presencia del Estado y el agronegocio.

Como hemos destacado anteriormente, la incursión de la pecuaria en la región de *lavrados* y sierras de Raposa Serra do Sol data de mitad del siglo XIX. Desde entonces, la llegada de fazendeiros a la región ha sido permanente. Según el relato de las personas de más edad de las comunidades, era común que los fazendeiros llegasen a la zona estableciendo un primer contacto amigable con los indios y prometiendo ocupar un área pequeña y próxima sin que ello viniese a traer perjuicio para las comunidades. Inicialmente, y en apariencia, se trataba de relaciones de vecindad y colaboración. Sin embargo, una vez que se instalaban en la región, traían el ganado y construían algunas edificaciones básicas – casa de familia, casa del capataz, corrales y áreas cercadas –, el interés ya pasaba a aumentar permanentemente el área ocupada atrayendo a parte de la mano de obra indígena hacia la fazenda para trabajar cuidando del rebaño como vaqueros.

La fazenda desarrollaba una pecuaria bajo sistema extensivo, dejando paso libre al ganado para acceder a las áreas naturales de pasto y a las fuentes de agua. Algunos fazendeiros mantenían un lugar de referencia en Boa Vista, la capital de Roraima, donde residían formalmente y trataban de negocios con comerciantes de carne. Un mismo fazendeiro podía disponer de varias fazendas, más o menos próximas entre sí, que le generaban los recursos necesarios para ocupar una posición social relevante. No existió a lo largo de este proceso ningún tipo de regularización de las tierras, e incluso cuando se producían transferencias de propiedades entre fazendeiros éstas se ejecutaban con la única legitimidad endógena del frágil aparato político que se hacía presente en el Territorio de Roraima, normalmente dominado por un grupo pequeño de familias. La primera élite económica de Roraima será una élite agraria, como ocurría en el caso de la familia de Bento Brasil ya comentada anteriormente.

La pecuaria fue generando un conjunto de impactos sobre la vida de las comunidades indígenas. El ganado suelto del fazendeiro invadía y destruía las *roças* o zonas de plantío familiar, causando trastornos que podían repercutir durante meses en la familia

al tratarse en su mayoría de culturas anuales. Del mismo modo, el ganado invadía las áreas de las casas familiares o los espacios comunitarios.

Además, la fazenda se había ido convirtiendo en una agencia de reclutamiento de mano de obra indígena a su servicio. Retiraba jóvenes y padres de familia de las actividades económicas que hasta ahora les habían dado sustento, y recluía también niñas y jóvenes indígenas para el servicio en las fazendas o en la ciudad a cambio de la promesa de estudios. La producción de alimentos dentro de las comunidades, basada fundamentalmente en la *roça*, la recolección, la pesca o la caza, se veían reducidas o incluso abandonadas por los largos períodos de tiempo en que la mano de obra más activa quedaba al servicio de la fazenda. Como relatan algunos de nuestros informantes: “Existia caça, mas quando os brancos chegaram acabaram ... colocando o gado” (Entrevista W-PA-1).

Una vez que el fazendeiro se instalaba en la zona, pasaba a impedir el acceso a bienes naturales que hacían parte del cotidiano de las comunidades: coleccionar varas, hojas de palmera *buriti* o impidiendo que plantasen su *roça*. “Sempre quando o branco entrou, aí criou amizade, para receber. Aí depois, já diziam que não, ‘Aí, compadre, você muda sua casa para lá’ (...) Aí, começou já reclamar pela mata, pela vara. ‘Ah, não, isso aqui já está pago. Vocês não podem mais tirar aí não’ Quando o pai mandava tirar vara, aí vinha o filho do branco: ‘Não, isso já não pertence mais a vocês. Pertence à gente’” (Entrevista W-JUS-1).

Estos cambios en el uso del suelo y en las actividades económicas introdujeron también mudanzas sensibles en los hábitos alimentares de las comunidades, procedentes del nuevo espacio de la fazenda. Así, el consumo de carne vacuna, la incorporación de productos refinados como la sal, café o azúcar o la extensión de otros elementos como el arroz fueron ocupando un espacio en la alimentación indígena en detrimento de carnes de caza o diversidad de pescado.

De un modo especialmente perverso, la fazenda supuso la introducción de bebidas alcohólicas extrañas a las comunidades, provenientes de licor de la caña de azúcar²⁴⁶ de pésima calidad y, posteriormente, la cerveza. La bebida alcohólica dentro de las comunidades ha sido responsable también por el aumento de la violencia, interna o externa. “Já começou morrer gente através da bebida, da facada, da paulada. Eu tenho quatro ou cinco parentes falecidos nesse caos de Uiramutã” (Entrevista W-OR-1).

Las relaciones entre el fazendeiro y las comunidades se caracterizaban por la dominación y reproducían, al mismo tiempo, el imaginario de que la presencia del fazendeiro era beneficiosa para la comunidad porque representaría, pensaban algunos, una oportunidad para jóvenes y para adultos. Se establecían muchas veces relaciones confusas de compadreo, adopción de niños y niñas o incluso algunos casamientos entre

²⁴⁶ Fundamentalmente se trataba de *cachaça*, como es conocida en Brasil.

fazendeiros o trabajadores de la fazenda y mujeres indígenas (Rodrigues, 1991: 75). En otros casos, el fazendeiro se quedaba con niños y adolescentes indígenas en sus fazendas a cambio de un dinero que repasaba para los padres. Esto le daba derecho a tener al muchacho como mano de obra dentro de la fazenda, pudiendo mostrarle el oficio de la pecuaria desde pequeño. En una de las entrevistas con líderes comunitarios, uno de ellos relató su propia experiencia: “Meu pai me vendeu para um camarada. Ele trabalhava em negócio de compra de minério, diamante” (Entrevista W-OR-1).

Al mismo tiempo, se trataba claramente de relaciones pautadas cada vez más por la violencia. “Muitos invasores, maltratando a gente assim: mão de obra barata, nossos filhos empregados, nunca conseguimos ter nada. Impediram de trabalhar na terra, impediram de pescar, botar roça, criar, tudo era impedido. (...) Quando a gente ia pegar um peixinho nesse rego que tem assim, na hora de pegar peixe, o vaqueiro, o fazendeiro impedia. Aí nós passávamos mal!” (Entrevista 14-2013).

La explotación de la mano de obra indígena en las fazendas se refleja en testimonios que relatan cómo los indios eran “marcados a hierro” en la piel, así como el ganado, para identificar la pertenencia a un determinado propietario de tierras. “Muito tempo nós sofremos na mão do branco. Não respeitavam nosso tuxaua. Nós fomos espancar tuxaua do branco? (...) O índio respeita, mas o branco, a Polícia, não respeitam não!. Não respeita comunidade, não. Agora, o índio sabe respeitar o branco, ele respeita qualquer um (...). Mas o branco não tem respeito, não tem pensamento, só a vida dele é maltratar, [também o] parente dele, e os índios. Mal ainda ele ama o parente dele, mal ainda! Nem todos. O índio é diferente, ama todinhas as comunidades dele” (Entrevista W-CA-1).

La violencia de los fazendeiros contaba muchas veces con la connivencia o el apoyo explícito de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Esse [nombre de fazendeiro] batia muito na gente, prendia muita gente. Quando começamos fazer retiro já começava prender gente, de noventa pessoas, cem pessoas. Levavam para Boa Vista. Ele pagava muito Policial Militar, aí era direto. Ele usou muita polícia, cem policiais (...) Não tinha quartel não, era tudo na fazenda, trazia na fazenda, pagando. O irmão dele também muito violentado” (Entrevista 4-2012-B).

En algunos momentos, se propagó la idea de que el número de fazendeiros dentro de Raposa Serra do Sol era muy grande. Este argumento fue utilizado por el Gobierno Estadual de Roraima y por grupos económicos para oponerse al reconocimiento formal de la tierra indígena, aduciendo que el perjuicio afectaría a un número importante de personas. Sin embargo, la realidad era diferente. Cuando el fazendeiro poseía varias fazendas, reconocía una de ellas como su residencia y en las otras dejaba personal de confianza a su cargo. En la década de 70, el número de fazendeiros dentro de lo que hoy se conoce como Raposa Serra do Sol rondaba el número de 50, de entre los cuales tres eran los mayores propietarios. Como afirma uno de los líderes indígenas entrevistados, “diziam que dentro da Raposa Serra do Sol tinha 300 fazendeiros; na verdade não tinha.

Tinha uns 50, só que, por exemplo o Jair, tinha nove fazendas, então [diziam que] aqui dentro tinha nove fazendeiros (...) para aumentar a população deles” (Entrevista 4-2012-B).

Junto a la fazenda, el conflicto por el control del territorio a inicios de los 70 también estaba protagonizado por el garimpo, al que le dedicaremos un epígrafe particular en las páginas siguientes por hacer parte del foco principal de nuestra investigación. La presencia del garimpo en Raposa Serra do Sol data de inicios del siglo XX y a lo largo de las sucesivas décadas había ido regimentando moradores de la región e indios para este trabajo, que aún era manual, de búsqueda de oro y diamantes.

Lo que nos interesa destacar ahora es que estas dos agencias, el garimpo y la fazenda, compartieron elementos comunes y causaron impactos socioambientales que se retroalimentaban:

- Desagregación social en la vida de las comunidades indígenas;
- Reclutamiento de mano de obra indígena, afectando las actividades productivas tradicionales;
- Ocupación del territorio, reduciendo la libertad de movimientos y de acción de los indios;
- Violencia contra la vida y el patrimonio de las personas y las comunidades indígenas²⁴⁷;
- Introducción de nuevos hábitos de consumo, con especial destaque para la introducción de la bebida alcohólica²⁴⁸ que, en seguida, se relacionó con problemáticas de abuso sexual, violencia intra-comunitaria e intra-familiar, abandono de responsabilidades y de actividades económicas.
- Impactos sobre la calidad del ambiente, con contaminación de fuentes de agua, compactación del suelo, destrucción de *roças*, destrucción de los ambientes de tierra firme próximos a los lechos de río con aumento de la erosión, ...
- Creación de pequeños núcleos semi-urbanos dentro de la tierra indígena que les sirviesen como puntos de abastecimiento y de comercialización, al tiempo que locales de diseminación de la bebida alcohólica y fijación de la población foránea dentro del territorio. Estos núcleos poblacionales eran denominados *villas*.

²⁴⁷ En diciembre de 2001, el Consejo Indígena de Roraima publicó un “Informe de los casos de violencia” contra las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, con base en las denuncias presentadas por las comunidades directamente en el CIR y por los registros anteriores de la propia organización indígena, en el período comprendido entre enero de 1981 y abril de 2001. El Informe relata un total de 235 casos de violencia – verbal, física, amenazas, destrucción de patrimonio, robo, discriminación y muerte – recogidos, registrados y denunciados por las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol.

²⁴⁸ “Todo fim de semana garimpeiro vinha a Maturuca, embebedava, abuso de mulher, a filha, ... era uma bagunça” (Entrevista 1-2012).

Una tercera agencia protagonista del conflicto territorial en Raposa Serra do Sol ha sido la propia presencia del Estado en sus diferentes formas, principalmente de las esferas públicas relacionadas con el gobierno regional del Estado de Roraima. En muchas ocasiones éstas han servido como apoyo a los intereses económicos que pretendían la ocupación y explotación de los bienes naturales de Raposa Serra do Sol.

Una de las estrategias del Estado ha sido el estímulo al crecimiento de los núcleos semi-urbanos o *vilas* dentro de Raposa Serra do Sol. Se trata de núcleos que sirvieron como puntos de apoyo de fazendeiros y garimpeiros, a modo de *corruptelas*, y llegaron a representar puestos de avanzada administrativa. Allí se destinaban algunos funcionarios del Estado y se instalaban pequeñas obras de infraestructura y edificios públicos - electrificación en las *vilas*, aplanamiento de carreteras no asfaltadas, pequeñas escuelas iniciales, mínima atención básica de salud - que servían a los intereses de fijación de fazendeiros y garimpeiros, a la vez que atraían a las comunidades más próximas.

A lo largo de las décadas de 80 y 90, el Gobierno regional de Roraima intentó también implementar políticas de infraestructura en la región que se dirigían claramente a intereses ajenos a la población indígena. Una de las medidas más destacadas fue la propuesta de construcción de una hidroeléctrica en el curso medio del Rio Cotingo, en las correderas de Tamanduá, con el objetivo de generar energía para la población del Estado y para subsidiar eventuales proyectos mineros de mayor envergadura en la región de Cotingo. La propuesta de construcción de la hidroeléctrica viene siendo defendida desde la primera mitad de la década de 90 y el Gobierno Estadual aún no ha renunciado a ella.

El senador roraimense Mozarildo Cavalcanti protocoló en el Senado Federal el Proyecto de Decreto Legislativo 2540-A/2006²⁴⁹ que pedía la autorización del Congreso Nacional para la construcción de este proyecto. Aunque la hidroeléctrica de Cotingo no ha llegado a entrar en los planes de infraestructura del Gobierno Federal, particularmente en el Plan de Aceleración del Crecimiento-PAC, la permanencia del Proyecto de Decreto Legislativo dentro del Congreso Nacional y su aprobación en algunas de las Comisiones temáticas del Senado generan una preocupación permanente en el seno de las comunidades y de la organización indígena.

En la 37ª Asamblea General de los Tuxauas, celebrada en la comunidad indígena de Barro /TI Raposa Serra do Sol en marzo de 2008, se afirma: “Outro ponto crítico é a proposta de construção de uma usina hidrelétrica no rio Cotingo, no interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Tal projeto é inconstitucional, tem teor político de desmobilizar a demarcação da terra, acarretará em novas invasões e impactos ambientais e, portanto, não é de nosso interesse (...) Por que os povos indígenas têm

²⁴⁹ Al que fue anexado una propuesta anterior en los mismos términos, la del Proyecto de decreto Legislativo 2367/2006, cuya autora fue la entonces Diputada federal Suely Campos, actual Gobernadora del Estado de Roraima.

que ser sacrificados? (...) Os povos indígenas têm direito à consulta, que deve ser respeitado por todas as esferas do governo”²⁵⁰ (Nota do CIR).

Junto a este proyecto, el Gobierno pretendía también extender la malla viaria dentro de Raposa Serra do Sol de modo a facilitar el acceso a los puntos de garimpo, a las *vilas* y al área donde se pretendía construir la hidroeléctrica de Tamanduá. “Essa ponte [señalando hacia um pequeno puente sobre el río Cotingo] foi Gutierrez²⁵¹ que fez exatamente para chegar no Tamanduá. Tamanduá tá na ponta daquela serra aí, ô (...) Aí ele [um fazendeiro] mantinha-se dando comida para essa firma, que era gado. Vendia gado para a firma” (Entrevista 10-2013). Este testimonio nos permite identificar la interrelación que se daba entre las diversas fronteras de expansión sobre el territorio: fazenda, garimpo, infraestructuras públicas.

Otro elemento destacado en la acción del Estado, principalmente durante la década de 80 y 90, fue la militarización progresiva de la zona, con la creación de Comisarías con pequeños batallones de la Policía Militar – con el objetivo de mantener el orden – y la construcción de Cuarteles del Ejército – con el argumento de la defensa de las fronteras.

Como ya fue apuntado, y según los relatos registrados en las entrevistas con dirigentes indígenas, la presencia de la Policía Militar dentro del territorio indígena representó un apoyo a los intereses de fazendeiros y garimpeiros, así como una fuerza de control de los movimientos de organización de las comunidades indígenas. “Até polícia, Exército, não têm respeito” (Entrevista W-CA-1). A medida que la violencia de los fazendeiros aumentaba contra las comunidades indígenas, la Policía Militar actuaba como fuerza de seguridad privada, utilizando incluso las propias fazendas como locales de reclusión de moradores locales cuando los fazendeiros sentían que estaban ocupando su espacio o instigando sus rebaños. Muchas veces la Policía Militar desplazaba grupos de indígenas hasta los pequeños cuarteles en Vila Pereira o en Normandía, o incluso hasta Boa Vista.

Incluso hay relatos en que los indígenas flagraban a garimpeiros en sus campamentos y los detenían para llevarlos a la Policía, pero terminaban siendo ellos mismos retenidos en los Cuarteles. “Eu fui preso aí no Uiramutã por causa dos garimpeiros que nós prendemos. Fomos presos, passamos a noite aí. Deitados, derramando água acima de nós” (Entrevista W-PA-1).

Ya en la década de 90, una nueva frontera económica se introdujo en las tierras indígenas del valle del Tacutú. Un pequeño grupo de seis empresarios del sector agroindustrial, procedentes en su mayoría de la región sur del país, ocuparon extensas áreas en la región de *lavrado*, en las confluencias de los ríos Tacutu, Surumu y Cotingo.

²⁵⁰ Documento Final de la 37ª Assembléia Geral dos Tuxauas, 2011. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

²⁵¹ Se refiere a la firma Andrade Gutierrez, una de las principales empresas de la construcción civil de origen brasileño, con intereses ya localizados en otros países. Esta firma ya tenía presencia en Raposa Serra do Sol desde la década de 80, como titular de requerimientos de pesquisa minera. Evidentemente, la construcción de la carretera le era también funcional a sus propios intereses mineros.

La principal actividad productiva que implementaron en estas tierras fue el plantío de arroz para exportación a mercados suprarregionales, aunque consorciado con la ganadería extensiva y el plantío de soja. Esta nueva frontera económica agrícola se caracterizó por los siguientes elementos:

- Ocupación de amplias extensiones de tierra adyacentes a los cursos de los ríos, impidiendo el libre tránsito y acceso de las comunidades;
- Alto nivel de mecanización en la producción y red propia de transporte terrestre para llevar el arroz y la soja hacia las usinas localizadas en Boa Vista, la capital;
- Retirada de vegetación nativa;
- Amplio uso de agrotóxicos en la tierra, aplicados a veces desde el aire con avionetas, ocasionando el esparcimiento de buena parte del producto hacia otros lugares por la acción del viento;
- Desvío de los cursos naturales de los ríos y construcción de canales adyacentes para regadío permanente durante la época de verano;
- Aumento de la violencia contra las comunidades indígenas;
- Migración de decenas de trabajadores procedentes de otras regiones del país que se instalaban en las propiedades agrícolas o en las *villas* próximas, aumentando la interferencia en la vida de las comunidades y la expansión de la bebida alcohólica;
- Estrecha relación entre los productores y la clase política regional, llegando al caso de que uno de los productores de arroz haya asumido sucesivos cargos de responsabilidad pública – alcalde de municipio, diputado del Congreso Nacional y actual Vice-Gobernador regional – que emplea al servicio de los intereses particulares de este pequeño grupo y en oposición a la demarcación de tierras indígenas²⁵².

8.2.3. Estrategias de organización comunitaria y emergencia de Raposa Serra do Sol

El proceso de retomada de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol es uno de los más significativos de la historia reciente de Brasil. Se debió a un fenómeno que consiguió agregar, con éxito, capacidad organizativa a partir de las comunidades de base con una operabilidad política que le aseguró una interlocución directa con el Estado brasileño y una articulación con otras organizaciones sociales en escalas regionales más amplias e internacionales. Se puso en juego una pericia propia para la traducción étnica de las lógicas de funcionamiento de las agencias externas junto con una habilidad para diseñar estrategias de acción que circulaban desde lo local hasta lo internacional con gran coherencia y unidad.

²⁵² Los productores de arroz llegaron a obtener del Gobierno Estadual de Roraima una exención de impuestos como estímulo a la inversión, aunque nunca llegaron a tener títulos legales de propiedad de la tierra que ocupaban.

Dicho de otro modo, el reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, conseguido después de más de 30 años de reivindicación y movilización, ha sido fruto de una interacción compleja que reunió:

- la movilización local, retomando palmo a palmo el territorio;
- la habilidad política y de interlocución con las más diversas agencias sociales y políticas, destacando la solidez de su alianza con la Iglesia Católica y círculos próximos de defensa de los derechos humanos;
- la determinación de unidad del movimiento, que ayudó a superar los momentos más frágiles;
- la validez de intuiciones concretas como el proyecto de ganado comunitario;
- y la batalla jurisdiccional librada en la más alta Corte del país entre 2005 y 2009, significando una confirmación del marco jurídico brasileño de garantía de los derechos, marco que había sido y continúa siendo permanentemente disputado²⁵³.

1. De la 1ª Asamblea de Tuxauas, la reunión de Cantagalo y la creación del CIR

Quando foi 1971, aí já começou Assembleia (...) Primeira Assembleia eu não fui, foram outros (...) Se chegou a conclusão, aceitou a Assembleia, se podia acontecer todo ano. Com certeza. E na segunda eu fui, eu vou lá. Eu não era nada, falei com o tuxaua: 'Tuxaua, eu vou com o senhor'. Quero conhecer lá também.

Jacir José de Souza. Entrevista 1-2012

A inicios de la década de 70, un grupo de líderes de comunidades indígenas comenzaron a mantener encuentros entre ellos y con el apoyo de algunos equipos misioneros y dirigentes de la entonces Prelacia del Rio Branco, circunscripción de la Iglesia Católica. El primer encuentro se produjo en Boa Vista, en 1971. El núcleo inicial de líderes que participaba de estas reuniones procedía, en su mayoría, de las regiones de campos y sierras de los valles de Tacutú, Cotingo y Surumu, la actual Raposa Serra do Sol²⁵⁴.

El diálogo entre ambas entidades durante estos encuentros versaba sobre los problemas que indígenas y misioneros estaban encontrando en la vida de las comunidades. El análisis compartido apuntaba a las consecuencias que las aldeas vivían por causa de la presencia de la fazenda y el garimpo dentro de su entorno. Las cuestiones clave, por tanto, circulaban en torno a la cuestión de la tierra, la producción familiar y los

²⁵³ A efectos de este trabajo, vamos a presentar una breve descripción de este genuino proceso de movilización indígena en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. No obstante, conseguimos recoger un material de campo significativo, que nos sugiere e invita a un análisis más específico y detallado en posteriores trabajos investigativos.

²⁵⁴ En otro momento de este trabajo hemos indicado que aún permanece una deuda investigativa e histórica que consiga reconstruir los itinerarios que condujeron a este grupo de dirigentes indígenas en los primeros años de la década de 70.

problemas sociales ocasionados por los impactos del alcohol y la desagregación comunitaria.

El encuentro de 1971 ha sido marcado en el movimiento indígena como el primer paso del proceso actual de organización social en defensa de la tierra y de sus derechos colectivos. Así lo refiere el hecho de que las Asambleas Estadales de Tuxauas, que no han dejado de celebrarse ningún año, han mantenido 1971 como el año cero de la movilización. Es por ello que en 2016 los Tuxauas celebraron su 45ª Asamblea.

A falta de un trabajo más detallado y minucioso, proponemos la identificación de dos fases que marcaron el proceso de movilización y organización política en las comunidades indígenas de Roraima a partir de la 1ª Asamblea y hasta la Constitución Federal de 1988 y la consolidación del Consejo Indígena de Roraima-CIR.

Localizamos la primera fase en el período entre 1971 y 1976. Sobre estos primeros años existen algunos registros escritos, a modo de actas de los encuentros que se estaban produciendo, aunque representa un período precioso desde el punto de vista histórico y sobre el que aún existe una deuda de investigación y reconstrucción de los acontecimientos. Creemos que en estos primeros cinco años se sentaron las bases necesarias para el tipo de movilización por la tierra que impregnó la lucha de los pueblos indígenas de Roraima durante las cuatro décadas siguientes. Posiblemente, estos primeros años caracterizaron más un momento de gestación de lo que posteriormente vino a desencadenarse como un proceso articulado de retomada de la tierra y de estructuración de la organización indígena. Así lo inferimos de algunos datos que tuvimos la oportunidad de consultar²⁵⁵, que nos permiten intuir que en estos primeros años de movilización se fueron gestando los elementos reivindicativos fundamentales y se fue dando, también, la transición hacia una nueva forma de actuar por parte de las nuevas dirigencias indígenas.

Situamos una segunda fase de la movilización indígena entre 1976 y 1986, fecha en la que se crea el Consejo Indígena del Territorio de Roraima- CINTER, antecedente del actual Consejo Indígena de Roraima - CIR. Es una fase creativa desde el punto de vista político y de consolidación de un movimiento que viene con fuerza desde la organización comunitaria de base, principalmente a partir de la región serrana de la actual Raposa Serra do Sol, y con un eje principal de sus reivindicaciones: la lucha por la tierra. Algunos acontecimientos van a desencadenar esta segunda fase.

²⁵⁵ Durante la Asamblea de Tuxauas de 1979, uno de los principales líderes indígenas de estos primeros momentos, el Tuxaua Terêncio Macuxi, de la comunidad de Cumanã – Surumu, se expresaba así: “Faz 5 ou 6 anos que fazemos reuniões e estamos aprendendo muito”. En *Memória Reunião Geral dos Tuxauas de Roraima, 9 a 11 de janeiro de 1979*. Fuente: Centro Documentación Instituto Misionero de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

Uno de los acontecimientos de los que estamos hablando será, sin duda, la Asamblea de Tuxauas de enero de 1976²⁵⁶ realizada en el local de la Misión de Surumu²⁵⁷. En el encuentro, junto a decenas de líderes comunitarios estaban participando diversos representantes de la Iglesia Católica, entre ellos dos Obispos y miembros del Conselho Indigenista Missionário/CIMI, en apoyo a las reivindicaciones de las comunidades indígenas. En un determinado momento de la Asamblea, se hizo presente un equipo de la Policía Militar acompañado por funcionarios de la FUNAI y exigieron la paralización del encuentro, la retirada de los religiosos y el retorno de los indígenas a sus comunidades. “Os fazendeiros, os garimpeiros, viram que a gente estava formando essa força, essa união, ..., o que é que eles fizeram? Passaram um rádio para o Delegado da FUNAI, em Boa Vista. Quando nós estávamos a reunião, aí nós chegamos um dia e no outro dia de manhã começamos, a cabo de seis horas chegou o delegado da FUNAI suspendendo toda nossa reunião (...) Aí fiquei muito chateado” (Entrevista W-OR-1). Estos hechos hicieron que esta Asamblea de Tuxauas, aunque no fuese exactamente la primera vez que se reunían, marcara un antes y un después en la movilización indígena.

Un segundo acontecimiento que marcó esta segunda fase de la movilización fue la progresiva incorporación de líderes indígenas muy jóvenes, procedentes de la región serrana, que van a asumir posteriormente un protagonismo fundamental para el trabajo de recuperación de la tierra que las comunidades indígenas desarrollaron en las décadas de 80 y 90.

Finalmente, uno de los acontecimientos significativos de este momento fue la llamada “Decisión” tomada por la comunidad indígena de Maturuca-Serras el día 27 de abril de 1977. Aquel día, la comunidad estuvo reunida desde la mañana hasta la noche debatiendo los problemas que les abatían: la pérdida del trabajo en las *roças*, los impactos de la bebida alcohólica y la fragmentación social eran evidentes e implicaban a jóvenes, adultos y a los propios dirigentes comunitarios. Al final del encuentro, la comunidad apuntó como nuevo Tuxaua al joven Jacir José de Souza, dirigente que protagonizará de un modo singular la movilización indígena durante las tres décadas siguientes.

²⁵⁶ En los primeros años, todas las asambleas se realizaban en el mes de enero, que es el mes más seco del verano y que facilitaba el desplazamiento de los *tuxauas*, que venían de lugares muy distantes entre sí y normalmente a pie o a caballo.

²⁵⁷ Se trata de una edificación construida como Misión católica por los religiosos benedictinos en 1910, y a partir de la cual fijaron su presencia misionera en la región de *lavrado* y parte de la región serrana. La Misión de Surumu, localizada al margen izquierdo del río Surumu, muy próxima a las comunidades de Barro y São Jorge, tuvo diversas finalidades a lo largo de su existencia. Nacida como fazenda de los religiosos y punto de apoyo de éstos en sus desplazamientos por la región de campos naturales, también funcionó como Internado de niños y como Escuela. En la década de 70, comenzó a acoger los encuentros y asambleas de tuxauas indígenas y a organizar cursos de formación y capacitación dirigidos a las comunidades. Actualmente, es la sede del Centro Indígena de Formación y Cultura Raposa Serra do Sol. En 2005, la Diócesis de Roraima reconoció la propiedad de este patrimonio a la organización indígena, renunciando a cualquier derecho que le pudiese asistir en términos de indemnización después de la homologación de la tierra indígena.

Ese mismo día la comunidad tomó también una decisión simbólica con consecuencias prácticas: *“No a la bebida alcohólica, sí a la comunidad”*. La decisión suponía la prohibición de entrada, distribución y consumo de bebida alcohólica en la aldea como un paso fundamental para concentrar los esfuerzos colectivos en proyectos comunitarios y en la retomada de la tierra. Esta decisión fue asumida públicamente por cada uno de los miembros adultos de la comunidad y continua siendo confirmada a cada año en una celebración especial que se realiza en los últimos días de diciembre.

La decisión *“No a la bebida alcohólica, sí a la comunidad”* fue diseminándose en la medida que las comunidades vecinas iban acogiendo y adhiriendo a ella, hasta configurarse en uno de los motores simbólicos y políticos más fuertes en el proceso de lucha por la tierra. La fecha del 27 de abril quedó inscrita en la memoria de la movilización indígena, principalmente en la región Serras, como el detonante del proceso de movilización por la tierra que después se dio en las comunidades indígenas del Estado de Roraima.

Entre 1977 y 1979, los primeros pasos de las comunidades indígenas de la región serrana, donde pertenecía Maturuca, se direccionaron a organizar trabajos comunitarios relacionados con plantíos colectivos, pequeños rebaños de ganado, estructuración de los centros de las aldeas y otras actividades similares. El diálogo entre tuxauas vecinos, algunos jóvenes y otros con más experiencia, van apuntando hacia estas claves de trabajos cooperativos entre diversas comunidades. La prohibición de más fiestas con presencia de garimpeiros en comunidades como la de Maturuca suponen gestos que terminarán siendo estratégicos y van a ir elaborando un mensaje que fácilmente se extiende más allá de la aldea: la comunidad está en otro momento organizativo, más centrado en las propias fuerzas, y la relación con fazendeiros y garimpeiros comienza a entrar en un escenario totalmente diferente. La formulación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, como un territorio identificado, delimitado y reivindicado pasa a ser la pauta principal de la reivindicación indígena.

La FUNAI había instituido en 1977 un Grupo de Trabajo Interministerial/GTI que debía presentar la propuesta de delimitación de las tierras de ocupación de los macuxi. Este acto administrativo volvió a repetirse en 1979 y en 1984, sin que ninguno de los tres Grupos de Trabajo llegase a concluir con una propuesta de delimitación del territorio. El último de ellos llegó incluso a proponer la fragmentación del área en cinco territorios, lo que encontró la resistencia de las comunidades indígenas²⁵⁸.

A finales de los años 70 e inicios de los 80, la política de territorialización impulsada por el gobierno militar y ejecutada por la FUNAI en Roraima consistía en convencer a los indios para delimitar sus territorios en pequeños espacios, sin crear incompatibilidad

²⁵⁸ Incluso más adelante, en 1988, aún dentro del Proyecto Calha Norte y antes de la nueva Constitución Federal, un nuevo Grupo de Trabajo de la FUNAI concluyó con una nueva propuesta de fragmentación del territorio que tampoco llegó a su fin.

con otros proyectos de ocupación territorial como la fazenda, los asentamientos rurales o las pequeñas *villas* que ya venían concentrando servicios públicos y población no indígena. “A FUNAI sempre falava assim: ‘Olha, para sair a demarcação rápida, vocês têm que marcar um tamanho da área para vocês demarcar logo, né?’ Eu, sem muito entender mesmo, eu dizia não” (Entrevista 2-2012).

La principal argumentación empleada por la FUNAI en la época era la conveniencia de aceptar este tipo de delimitaciones de pequeños territorios para conseguir que la demarcación y homologación fuesen realizadas en seguida. La FUNAI desaconsejaba a las comunidades pretender áreas muy extensas y, principalmente, que ya estuviesen ocupadas por otras personas, afirmando que eso nunca sería aceptado y burocratizaría excesivamente los procedimientos. En el fondo, permanecía en el imaginario político del Gobierno Militar la idea de que los grupos étnicos representaban una realidad transitoria, dirigiéndose hacia una integración efectiva en el proyecto nacional, reproduciendo, como ya vimos en el capítulo anterior, los esquemas y máximas de la política del siglo XIX. Pero el hecho es que fue así que se delimitaron y demarcaron varias de las tierras indígenas de Roraima en la década de 70.

En aquellos momentos, la propuesta gubernamental defendía, para cualquier región del país, la institución de dos tipos diversos de territorialidad: “colonia indígena”, donde se concebía la convivencia entre población indígena y no-indígena; y “área indígena” (Santilli, 2000: 118). Las propuestas de la FUNAI para las comunidades de Raposa Serra do Sol eran muy similares. Proponía demarcar pequeñas áreas indígenas sin necesidad de generar un conflicto con los fazendeiros que allí se encontraban instalados y salvando también los principales núcleos semi-urbanos establecidos en la región como puntos de apoyo para fazendeiros y garimpeiros. El proyecto inicial de la FUNAI hablaba de “colonias indígenas”, acogiendo un término que se usaba para la política de asentamientos rurales de familias agricultoras. Los relatos recogidos con algunos de los principales líderes indígenas de la época nos describen este escenario.

“Fui com FUNAI, na época do Dinart, ele veio comigo, um mapa assim [gesticula abriendo los brazos]. ‘Chama tua comunidade’, e [Dinart] mostrou o mapa: ‘Olha aqui o mapa, e agora é o seguinte. Aqui tem muito fazendeiro, muito garimpeiro, muito branco, e é difícil tirar esse pessoal, só cheios de dinheiro e a FUNAI não tem recurso, não tem nada, para indenizar. Eu trouxe aqui uma proposta para você. Para sair rapidinho aqui seria essa [mostrando en el mapa]. E outra coisa: o nome seria colônia indígena. Aqui dentro seria colônia indígena’. Aí perguntei: mas o que é que é isso de colônia? Não estou entendendo ... Eu acho que não. Eu posso morrer mas eu não vou aceitar tua proposta. Nós vamos ter reunião e vamos decidir o tamanho da área que nós queremos. Eu não vou decidir aqui também não, não vou decidir ... tem que sentar. ‘[Dinart dice] Mas Jacir, chama os tuxauas mais velhos, eles vão te orientar, vão explicar para ti para sair logo a demarcação’. Pelo que eu estou sentindo, colônia é dos brancos” (Entrevista 4-2012-B).

Según los relatos de los líderes indígenas de la época, la propuesta de la FUNAI no terminaba de convencerles pero tampoco disponían de mucha información acerca de cómo se había dado ese proceso en otros lugares. “Agora vamos buscar os limites mesmo de nossa terra, porque ninguém está sabendo por onde é mesmo a nossa terra. Aí fazendeiro está dizendo que isso aqui é dele, garimpeiro tá dizendo que isso aqui é dele. Aí nós não temos limites, né? (...) As outras regiões eu não sei como é que está” (Entrevista 4-2012-B).

A través de estos relatos podemos deducir el modo como el Estado conducía un verdadero proceso de territorialización que pretendía mantener el control sobre la movilización de las comunidades indígenas sin reducir el área sobre la cual ya habían avanzado las diversas fronteras económicas (fazenda, garimpo y otras). En dirección opuesta, líderes indígenas de las regiones de *lavrado* y sierras de las cuencas Surumu, Cotingo y Tacutu – actual Raposa Serra do Sol – apoyados en un proceso ya maduro de asambleas indígenas, configuraban de modo autónomo el concepto territorial de Raposa Serra do Sol, inapreciable en ese momento para el Estado.

Durante los primeros años de la década de 80²⁵⁹, una serie de conversaciones entre diversos tuxauas de las regiones de *lavrado* y sierras van a ir conduciendo el proceso de delimitación territorial. En un principio, algunos líderes reconocidos a nivel regional tenían ya en sus manos mapas elaborados que solamente delimitaban el territorio más próximo a sus respectivas aldeas. “Os tuxauas já tinham picotado aqui. Por exemplo, Raposa queria cortar aqui mais um pedaço, o Surumu também podia ser outro pedaço, a região Serras poderia ser também outro pedaço, mas deixar [deixava] o melhor lugar para os fazendeiros (...)” (Entrevista 1-2012).

Fue en los diversos encuentros mantenidos entre líderes comunitarios de diversas regiones que se gesta la idea de un área territorial continua. Finalmente, en una reunión que tuvo lugar en la comunidad indígena de Cantagalo – situada en el interfluvio Surumu-Cotingo, en la región de *lavrado* – el grupo de representantes indígenas llega a la fórmula territorial que hoy conocemos como Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. “Tivemos uma reunião no Cantagalo. Aí discutimos bastante, explicando, começaram entender. Então, por onde é? Pega o rio Tacutu, rio Cotingo, Surumu, Miang, rio Maú. Já [es]tá cortado pela natureza. ...O pessoal não falava de Raposa Serra do Sol não. Falava assim: Qual [é] o limite de vocês? Rio Maú, subindo aí, Monte Roraima, rio Tacutu, a Venezuela, ... depois que aprovaram aí já falavam de Raposa Serra do Sol, né? Então foi assim o acordo da gente” (Entrevista W-JA-1). “Não tinha nem identificação de terra ainda. Nossa organização foi, bora demarcar nossa área. E vamos identificar agora por onde vai ser a nossa área. Pelo Maú, Tacutu, muito bem ... foi a briga de novo com

²⁵⁹ Los relatos recogidos entre los tuxauas de la época son precisos en los detalles de las conversaciones, pero no en la identificación de fechas exactas.

os brancos, ..., até a fronteira com Venezuela, o Miang. É por aí mesmo". (Entrevista W-JU-1).

En definitiva, la idea de Raposa Serra do Sol como un territorio continuo emerge como una propuesta *alter*-nativa - porque concebida a partir de otras lógicas territoriales - a la fragmentación en colonias indígenas que la FUNAI presentaba y como fruto del proceso de madurez de la nueva dinámica de movilización que las comunidades indígenas estaban asumiendo.

2. Los Consejos Regionales, el ganado y la retomada palmo a palmo

En estos mismos años de la década de 80, la movilización indígena se fue adensando apoyada en otros procesos sociopolíticos que se estaban dando en la región y que fueron determinantes para la consecución del objetivo de retomar la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Destacamos tres de estos fenómenos: la intuición del Proyecto Gado y el apoyo de la Iglesia Católica; la configuración de la red organizativa a partir del concepto de región; y las estrategias de retomada del espacio por parte de las comunidades. Pasamos a describir muy brevemente cada uno de ellos.

El llamado Proyecto Ganado es fruto de un acuerdo entre las comunidades indígenas y la entonces Prelacia de Roraima²⁶⁰. Por el acuerdo, la Iglesia Católica hacía entrega a la comunidad indígena de un rebaño bovino formado por cincuenta vacas y dos toros, lo que representaba un potencial reproductor importante. Al mismo tiempo, la comunidad indígena asumía algunos compromisos: la administración del rebaño era de responsabilidad comunitaria; la comunidad garantizaba las instalaciones mínimas necesarias para la cría del ganado; y elegía una persona como responsable del cuidado del rebaño. Durante cinco años, la comunidad debía asegurar un correcto manejo del rebaño, de modo que pudiese repasar para otra aldea, al término de ese período, un nuevo rebaño con las mismas características. Quedaba en su propiedad definitiva el número de reses que hubiese conseguido aumentar durante ese tiempo.

El ganado había sido una de las fronteras económicas responsables por la ocupación del territorio indígena hasta ese momento. La estrategia del Proyecto Ganado perseguía la apropiación por parte de las comunidades indígenas de la misma herramienta de invasión para tornarla, en este caso, oportunidad para la retomada del territorio. El Proyecto Ganado trabajaba, al mismo tiempo, sobre tres factores socioeconómicos y políticos:

- Posibilitaba una fuente de renta y de alimento, si bien el uso de las reses era seriamente direccionado para actividades de carácter colectivo;

²⁶⁰ Los primeros acuerdos se establecían directamente entre la comunidad indígena y una de las Misiones católicas establecidas en la región del Rio Maú, en la aldea de Maturuca.

- Ejercía de elemento estructurador de la organización comunitaria, apropiándose de figuras como la del vaquero, normalmente al servicio del fazendeiro, y colocándolas al servicio de un proyecto territorial opuesto.
- El ganado ayudó significativamente a la retomada del territorio ocupado.

Figura 17. Proyecto-Ganado bovino de la comunidad. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.



Si el ganado de los fazendeiros había actuado como avanzada de ocupación del espacio, ahora era el ganado comunitario el que ejercía la misma función en un sentido territorialmente opuesto, pues perseguía la retomada del territorio por parte de las comunidades. Al mismo tiempo, el Proyecto Ganado representó durante las siguientes décadas la alianza más firme que las comunidades indígenas tuvieron con una agencia externa durante todo el proceso de retomada de la tierra; en este caso, la Iglesia Católica.

La segunda estrategia sociopolítica que se fue consolidando durante los primeros años de la década de 80 fue *la creación de los Consejos Regionales de Tuxauas*. La idea surgió en la zona de las sierras y se fue diseminando en otras zonas. A medida que las comunidades indígenas iban consiguiendo una articulación cada vez mayor en un espacio territorial más amplio, surgió la necesidad de adensar su propia estrategia organizativa. En principio, se delegó en un grupo de líderes comunitarios, procedentes de diversas comunidades, la tarea de realizar visitas a las diversas aldeas con el objetivo

de informar a los líderes locales y a toda la comunidad del trabajo de articulación que se estaba creando para recuperar el territorio perdido.

Estas visitas fueron exigiendo cada vez una mayor dedicación, pues se hacían normalmente a pie o a caballo y obligaba a los líderes visitantes a permanecer fuera de sus aldeas durante semanas. Nació de este proceso la idea de crear, en la región serrana, un Consejo Regional. La idea del Consejo Regional llevaba implícita, evidentemente, la idea de región. La tendencia sería la de ir liberando a estos líderes de sus responsabilidades en la aldea de origen para poder asumir, con mayor dedicación, las exigencias de la articulación regional. En el ámbito del Consejo Regional se discutían las problemáticas comunes y las estrategias colectivas.

La región serrana llevó a una de las Asambleas Estadales de Tuxauas la propuesta del Consejo Regional, que suponía una novedad organizativa. La propuesta fue asumida por otras aldeas y regiones y fueron así surgiendo los diversos Consejos Regionales. Para ello, la región serrana dispuso también un grupo de líderes comunitarios con experiencia que fueron visitando las otras regiones indígenas para explicar mejor la propuesta organizativa regional.

Esta cuestión es fundamental, pues la organización indígena resultante de este proceso va a asumir la forma de Consejo de Consejos Regionales; es decir, la articulación de los diversos Consejos Regionales es lo que da forma, primero, al Consejo Indígena del Territorio de Roraima/CINTER, y posteriormente al Consejo Indígena de Roraima/CIR.



Figura 18. Comunidad Indígena de Maturuca preparándose para Asamblea. Fotografía del autor.



Figura 19. Panorámica de la comunidad Maturuca preparándose para acoger la Asamblea Estadual. Fotografía del autor.

Por último, queríamos destacar algunas de las *estrategias locales* que las comunidades fueron desarrollando en el territorio y que resultaron absolutamente imprescindibles en la retomada del espacio.

Una de estas estrategias fue la ocupación del espacio adyacente a las fazendas para conseguir la retirada “por asfixia” de los fazendeiros. La estrategia seguida por las comunidades consistía en la creación de retiros comunitarios para la cría de ganado en las inmediaciones de las fazendas. Estos retiros quedaban bajo el cuidado de una familia.

Las primeras reacciones de los fazendeiros, aprovechando la fragilidad de la presencia de una sola familia en el retiro, se caracterizaron por las amenazas, quema de retiros y robo de ganado comunitario. Las comunidades cambiaron su estrategia y en lugar de crear retiros pasaron a crear nuevas comunidades en el espacio adyacente a las fazendas. Esa nueva comunidad era formada por un grupo de familias procedente de otra comunidad y a ellas se les entregaba un Proyecto Ganado como patrimonio comunitario inicial. Se construían las casas familiares necesarias, el corral y otras dependencias, se escogía un nuevo tuxaua y se solicitaba el reconocimiento oficial de la FUNAI. Con esas premisas, resultaba mucho más difícil que el fazendeiro actuase con violencia o pretendiese expulsar una comunidad constituida.

La idea de la formación de comunidades en los espacios próximos a las fazendas perseguía dos objetivos: impedir la ampliación de área ocupada por el fazendeiro y favorecer un ambiente de asfixia y agotamiento que terminaba con la decisión del fazendeiro de abandonar el local. A veces, para acelerar esta retirada del local, la comunidad aceptaba adquirir parte del rebaño del fazendeiro, evitando eventuales

impases generados por la demora de la FUNAI en ofrecerle indemnización. De este modo, se consiguió que un buen número de fazendeiros abandonase la región.

Otra estrategia similar se refiere a la retirada de campamentos de garimpo por la acción de la comunidad. En una cada vez mayor articulación con la Policía Federal, FUNAI y Ministerio Público Federal, las comunidades organizaban avanzadas de grupos hacia los campamentos de garimpeiros, forzando su retirada. Algunas veces, las comunidades se organizaban para montar barreras de fiscalización que cortaban por tiempo indefinido las vías terrestres de acceso a garimpo y fazendas. Grupos organizados de personas de diversas comunidades cortaban la carretera en un determinado punto y fiscalizaban los vehículos que pretendían acceder al territorio portando bebidas alcohólicas o materiales (alimenticios y maquinarias) de apoyo al garimpo y a la fazenda. El material confiscado era entregado a la Policía Federal.

Queremos destacar de un modo particular como una de las estrategias fundamentales de las comunidades el sistemático registro escrito de los acontecimientos. Actos de violencia contra las personas o el patrimonio de las comunidades indígenas (amenazas, robos de ganado, destrucción de roças o de casas, muertes, venta de bebidas alcohólicas,...) o eventos de la propia organización indígena (actas de asambleas y reuniones, decisiones tomadas, registro del ganado,...), todos los acontecimientos eran motivo de un registro escrito. Profesores indígenas y jóvenes, aquellos que dominaban la escritura en lengua portuguesa, acompañaban los movimientos de las comunidades y las asambleas y reuniones, registraban las exposiciones de unos y otros y terminaban elaborando documentos conclusivos o cartas dirigidas a las autoridades que, después de una lectura colectiva, eran firmadas por todos los presentes. El valor de esta vasta y compleja documentación escrita, recogida hoy en centros de documentación organizados o en fase de organización, en las sedes de las organizaciones indígenas o incluso en dependencias improvisadas en las mismas aldeas indígenas, ha sido fundamental en la movilización en defensa de la tierra y en la denuncia de los actos de violencia cometidas. Constituyen hoy, también, la principal memoria escrita del proceso de organización indígena en Raposa Serra do Sol y una de las principales fuentes primarias, si no la principal, de comprensión del fenómeno Raposa Serra do Sol. Particularmente, a efectos de este trabajo de investigación, han sido absolutamente imprescindibles.

3. Constitución Federal de 1988, consolidación de la organización indígena y desenlace del proceso demarcatorio

A partir de 1988 podemos decir que se abrió una nueva fase, definitiva, en la demarcación y homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, que se ha extendido hasta 2009.

Por un lado, este es el período en que la organización Consejo Indígena de Roraima – CIR adopta un protagonismo, dentro y fuera de Roraima, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Fue una de las co-fundadoras de la Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, en 1989. A partir de los primeros años de 1990, el CIR se posiciona como mediación reconocida en la interlocución con el Estado brasileño y con otras organizaciones sociales y religiosas. Comienza a sistematizarse un ejercicio de discusión y reflexión en las comunidades sobre los derechos colectivos que habían sido reconocidos en la nueva Constitución Federal de 1988, así como un acompañamiento más incisivo y directo de los nuevos procedimientos administrativos que la Constitución había determinado para el reconocimiento de las tierras indígenas.

Del mismo modo, la capacidad de articulación del CIR con organizaciones sociales de dentro y fuera del país posicionó la situación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en foros de carácter nacional, regional e internacional. Diversas campañas de sensibilización se formalizaron durante la década de 90 con el objetivo de dar visibilidad, dentro y fuera del país, de lo que estaba sucediendo en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, de la exigibilidad de derechos ante el Estado y de la necesidad de una presión pública necesaria. Se conseguía, de este modo, una compleja y cohesa malla de estrategias que circulaban desde:

- las acciones en las comunidades y en el territorio, manteniendo las actuaciones de ocupación del espacio, cortes de carretera, aumento del proyecto de ganado;
- las acciones de formación y discusión sobre los derechos y sobre el funcionamiento y competencias de cada uno de los niveles del Estado;
- articulación con otras organizaciones indígenas, organizaciones sociales y religiosas;
- interlocución directa con diversos estamentos del Estado, desde el Gobierno Federal, Congreso Nacional, Poder Judicial y, en menor medida por el clima de tensión, con las autoridades locales;
- visibilidad a nivel internacional.

La nueva Constitución había marcado un plazo de cinco años, hasta 1993, para la conclusión de todas las demarcaciones de tierras indígenas en el país. Es obvio que este plazo no se cumplió, ni siquiera hasta nuestros días, pero la pericia de las nuevas organizaciones indígenas y la calidad de las alianzas que iban construyendo con otros agentes sociales, dibujó un ambiente de permanente interlocución directa entre Gobierno Federal y movimiento indígena.

Durante las décadas de 90 y 2000, el Estado brasileño fue recorriendo muy lentamente, los pasos previstos en la legislación brasileña a partir de la Constitución Federal de 1988. Este proceso de casi veinte años exigió de las comunidades y organizaciones indígenas, así como de las organizaciones que les apoyaban, un esfuerzo permanente y perseverante de presión política. En 1993, el Estudio de Delimitación de Raposa Serra

do Sol - Parecer nº 036/DID/DAF/93 - de la FUNAI concluyó con la definición de un área continua de 1.678.000 hectáreas, como la conocemos actualmente, y dio paso a la propuesta de delimitación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol a través de la publicación de la Ordenanza 1141. La siguiente fase administrativa consistía en la demarcación de esos límites identificados, competencia que le correspondía al Ministro de la Justicia. Pero el proceso se había detenido en esta mesa, bajo el argumento del interés del Ministro Nelson Jobim en escuchar a todas las partes, ya que el Gobierno Estadual de Roraima y diversos representantes de grupos de poder político y económico del Estado habían manifestado su plena oposición al reconocimiento de la tierra indígena sobre la cual proyectaban otros destinos vinculados, por ejemplo, a la minería.

Finalmente, en 1996, el propio Ministro publicó el Despacho nº 80 por el cual decidía sobre los límites de Raposa Serra do Sol. En su decisión, el Ministro rechazaba algunas de las pretensiones del Gobierno de Roraima, como la de fragmentar el territorio permitiendo corredores libres para el garimpo. Por otro lado, contraviniendo el estudio de la FUNAI de 1993, y siguiendo lo que denominó de “conciliación de intereses concurrentes”, el Ministro excluyó de la tierra indígena algunos lugares, entre los que destacaban las sedes de las *vilas* que habían servido como refugio y sustento a la empresa ganadera y minera.



Figura 20. Escultura que representa el mapa de la TI Raposa Serra do Sol, en el centro de la aldea Maturuca. *Foto del autor.*

En diciembre de 1998 el Ministerio de la Justicia publicó la Ordenanza 820/98 que significaba la demarcación de este territorio y en abril de 2005, el Presidente de la República firmó el Decreto de Homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol,

nuevamente contestado en la Justicia por el Gobierno de Roraima y algunos parlamentarios roraimenses. Finalmente, en 2009, la Corte Suprema del país decidió por la validez del decreto presidencial de homologación, incorporando 19 condicionantes al usufructo exclusivo de los bienes naturales por parte de las comunidades indígenas.

Se ha tratado de uno de los procesos político-jurídicos más complejos hasta el momento de reconocimiento del derecho territorial de los pueblos indígenas en Brasil.

8.3. Actividad minera en Raposa Serra do Sol. Reconstrucción socio-histórica

La presencia de la actividad minera en el territorio de Raposa Serra do Sol se ha dado hasta nuestros días bajo el régimen de garimpo, con diversas fases históricas y características sociales y tecnológicas. Actualmente, el garimpo es prácticamente inexistente dentro de la TI Raposa Serra do Sol, aunque las comunidades continúan denunciando presencia esporádica en algunos locales. “Da mesma forma vem ocorrendo no rio Mau na TI Raposa Serra do Sol, onde garimpeiros se aproveitam a ausência de fiscalização na área para explorar minérios dentro de nossa terra”²⁶¹.

A pesar de ello, entendemos que la actividad minera continua impactando de diversa forma en la actual dinámica socio-territorial de Raposa Serra do Sol. Para comprender esto, nos proponemos en este momento elaborar una reconstrucción social e histórica del garimpo en Raposa Serra do Sol, aunque ello nos conduzca en algunos momentos a una necesaria contextualización de la minería en Roraima.

8.3.1. Del Tacutú a Santa Rosa: el recorrido de la minería hasta la década de 80

Las primeras noticias que tenemos sobre la minería en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol datan de inicios del siglo XX. En 1911, cuando Theodore Köch-Grunberg embarcó en el navío que le conduciría desde Manaus hacia la cuenca del Rio Branco, registró en su Diario de Viaje esta observación: “Meus planos de viagem interessam a todos, naturalmente, e são discutidos com entusiasmo, com os mapas à mão. Alguns passageiros não acreditam muito em minha missão até os índios bravos e estão firmemente convencidos de que quero procurar ouro e minérios nas serras inexploradas. Dizem que há muitos cristais bonitos no Tacutu”. Las noticias sobre hallazgos de oro y cristales preciosos en la región de Tacutú, por tanto, ya eran conocidas en Manaus en esta época. Cabe imaginar que las informaciones viajaban a bordo de los barcos que hacían el trayecto entre Manaus y el curso medio del Rio Branco, a la altura de la actual Caracaraí.

²⁶¹ Carta de la 35ª Asamblea General de los Pueblos Indígenas del Estado de Roraima, febrero de 2006.



Figura 21. Garimpo de diamante.
Fuente: Centro Documentación
Instituto Misioneros de la
Consolata, Boa Vista-
Roraima/Brasil

1. La ocupación del garimpo de diamante sobre los ríos Quinô, Cotingo y Maú

Paulo Santilli recoge el registro del monje benedictino Dom Alcuino Meyer (Santilli, 2001: 99), que cita la presencia en los primeros años del siglo XX de un paraibano²⁶² conocido como Severino Pereira da Silva, en la región de las comunidades de Socó²⁶³ y Uiramutã. Según el religioso benedictino, Severino sería la persona que inició la actividad de extracción de diamante en esta región. Este registro coincide con el testimonio oral de los indios. No existen otros registros o relatos que hablen de otros períodos de extracción minera anteriores a esta época.

Desde el inicio, Severino Pereira da Silva - que se casó con una mujer indígena posteriormente y cuya descendencia aún vive en la región - atrajo a numerosos moradores indígenas de la zona para el trabajo en el oro y el diamante. No se habla en estos momentos de la llegada de un gran número de personas para trabajar en el incipiente garimpo. Más tarde, el propio registro de Dom Alcuino recogido por Santilli hablaba de cerca de 700 personas las que en la década de 30 ya trabajaban en la extracción de oro. Una de las personas mayores que entrevistamos en nuestra investigación nos relató cómo se produjo un incremento progresivo de personas venidas desde fuera y que se iban incorporando a la actividad. Nos contó, por ejemplo, sobre la apertura de una pista de poso de avionetas en el centro de la aldea de Uiramutã, donde vivían en ese momento 14 familias. El objetivo de esta pista, según el testimonio de esta persona, era “para o branco começar cair aqui dentro” (Entrevista OR-01).

²⁶² Natural del Estado de Paraíba, en la región nordeste de Brasil.

²⁶³ Socó es el nombre de una aldea indígena. La presencia y la influencia de Severino Pereira y de la actividad minera fueron convirtiendo este núcleo poblacional en una pequeña *villa*, donde era frecuente la bebida alcohólica, las fiestas y los negocios que llevaban a cabo los *fazendeiros* de la región. Se convertía así en uno de los puntos de apoyo para la frontera expansiva del capital del momento. A inicios de la década de 2000, el Consejo Indígena de Roraima registraba 50 moradores no-indígenas en Socó frente a 9 casas de familias indígenas. En los últimos años, las comunidades consiguieron retomar el control de la aldea y devolverle una dinámica social más próxima a la de la comunidad indígena.

Según Francilene Rodrigues (1996) y Elaene Machado (1971), entre 1912 y 1930 se descubrió la presencia de diamantes en el río Urucá – entre los ríos Maú y Cotingo, frontera con Guyana -, y en los arroyos de Carangueijo y Suapí, corrientes de agua que forman parte de la subcuenca del río Cotingo. Para Rodrigues, la actividad minera de la primera mitad del siglo XX se concentró fundamentalmente en la extracción de diamante, más frecuente y cotizado. Esta afirmación es corroborada en una de las entrevistas con moradores de la actual región de Uiramutã: “[Naquele tempo] não se falava tanto em ouro, era diamante” (Entrevista OR-01).

Unos años más tarde, el descubrimiento del yacimiento diamantífero en la Sierra de Tepequém en 1937 marcó un hito en la historia de la actividad minera en todo el territorio del Rio Branco. Aunque Tepequém no se encuentra en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol²⁶⁴, sin duda significó un punto de atracción evidente para la inmigración y un motor del crecimiento de la minería diamantífera en toda la región. De este modo, a mediados del siglo XX los ríos Quinô, Cotingo y Maú – todos ellos dentro de Raposa Serra do Sol – y la sierra de Tepequém constituían los cuatro grandes frentes de minería (Rodrigues, 1991: 21).

Cada uno de estos focos fue creando en sus proximidades nuevos núcleos semi-urbanos o *vilas* que servían como puntos de apoyo al garimpo. En Raposa Serra do Sol nos referimos a las *vilas* de Cajú y Uiramutã – por el río Cotingo – y Mutum – por el río Maú²⁶⁵. “Meu pai, minha mãe me levaram para o Mutum. Lá já tinha garimpeiro. O Mutum era uma aldeia também, só que ... não sei, eu não cheguei ver bem ali, ... mas ali do Cajú para aqui assim, era uma aldeia de dez pessoas, quinze pessoas, aqui e aculá (...) então no Mutum já tava cheio de garimpeiro, tava lá” (Entrevista OR-01).

En locales como la aldea Uiramutã, cuyo espacio fue invadido poco a poco por la *vila* o *corruptela* también llamada de Uiramutã, los impactos se apreciaron en muy poco tiempo. Uno de nuestros informantes relata que, después de pasar tres años en Mutum y dos en la región de Orinduk, volvió a su aldea y percibió como todo había cambiado: “Quando voltei tinha já cinco comércios aqui em Uiramutã. (...) Aí já começou aparecer garimpeiro, começou aparecer a festa, começou a bebida, a garimpagem, e os parentes lá, os comerciantes lá dentro, e teve gente que abandonou suas roças, abandonou suas casas (...) foram sumindo os legumes, ...” (Entrevista OR-01).

En 1946, el mercado de diamantes representaba más del 70% de la exportación total del entonces Territorio Federal de Rio Branco (Rodrigues, 1991: 12). En agosto de 1948, un

²⁶⁴ La Sierra de Tepequém se encuentra en el valle del río Amajari, afluente del curso medio del Rio Branco. Para un estudio más detallado del garimpo en esta región, ver Machado Vieira, E., 1971.

²⁶⁵ Según informaciones del CIR en 2003, a inicios de la década de 2000 aún había presencia de moradores no indígenas en la *villa* de Mutum. La mayor parte de ellos sin residencia fija “pois são garimpeiros que exercem suas atividades ilegalmente dos dois lados da fronteira”. Documento del CIR bajo el título “Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Agressões aos direitos constitucionais dos povos indígenas decorrentes da presença do Município e do Quartel na aldeia de Uiramutã. Documento-base, Parte I, de junio de 2003. Copia en Centro de Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

registro de viaje escrito en el avión por un religioso Misionero de la Consolata presenta sus primeras impresiones sobre el territorio del Rio Branco, donde a partir de aquel momento irían a realizar su labor misionera. Mientras sobrevuela la región de campos naturales, se refiere a la existencia de fazendas esparcidas por el territorio que acogen personas aventureras o fugitivos de la ley y explotan la mano de obra indígena. Sin embargo, continúa el texto, ahora el tiempo cambió: “Maggiore é il movimento, provocatto specialmente dal maggiore sviluppo dato alle *miniére di diamanti presso la frontiere con la Guiana Inglese* e con la costituzione del vecchio municipio in territorio federale”²⁶⁶(destaque en cursiva mío).

Constatamos, por tanto, que durante la primera mitad del siglo XX la actividad diamantífera había marcado la economía regional en el valle del Río Branco, más específicamente en sus cabeceras pertenecientes a la actual Tierra Indígena Raposa Serra do Sol – ríos Cotingo, Quinô y Maú. Siguiendo a Rodrigues (1991:23), a pesar de que en algunos casos la actividad podía ser realizada de modo individual, ya era común una mínima estructura organizacional del trabajo. Después de haber realizado el desmonte del área y conseguir acceso a la grava, ésta era lavada y cribada en la *suruca*. El financiador de la actividad podía ser un fazendeiro de la región, que se quedaba con el 50% del valor en lo que se conocía como sistema de *meia-praça*. En los grupos podía haber un responsable del trabajo a modo de gerente y también era usual la figura del comprador directo del diamante que se desplazaba hasta el garimpo para adquirir las piedras.

Muchos moradores indígenas se habían incorporado a la actividad *garimpeira*, con las consecuencias ya destacadas de abandono de sus actividades productivas tradicionales. Muchos de ellos eran engañados en los propios puestos de intermediarios donde debían entregar el oro o diamante encontrado para recibir el dinero correspondiente. “Na época ninguém sabia do preço do minério (...). Os comerciantes que sabiam do preço do minério, eram só eles e o patrão deles lá em Boa Vista, vamos dizer. E aqui nós chegava[mos] com a mão cheia de diamantes e um tanto de ouro, e era um preço bem rasoado ...” (Entrevista OR-01).

²⁶⁶ Carta de un Misionero de la Consolata, datada en 20 de agosto de 1948. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima, Brasil.

En las décadas de 50 y 60, la fazenda y el garimpo ya habían instalado sus lógicas de apropiación del espacio en Raposa Serra do Sol y habían establecido relaciones con las comunidades indígenas marcadas por el dominio y la explotación. “Eu vi a morte de meus parentes, dessa região do garimpo, morreu muito índio, assassinado, afogado (...). Eu vi a miséria que já estava chegando, já estava havendo, a



Figura 22. Lavando la grava en el garimpo. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

humilhação, ..., eu senti muita humilhação, gente escravo do dinheiro, escravo da bebida, escravo ... Já tinha mãe, pai, mulheres, envolvidos em bebida, gente que era a coisa mais triste. A gente fazer roça, a gente caçar, a gente pescar, já estavam proibindo, dizendo que a terra é deles que estão pagando impostos (...)” (Entrevista OR-01).

El auge de la minería y la pecuaria en la región del Rio Branco y sus consecuencias sobre la población indígena y sobre la soberanía nacional habían llegado también al Congreso Nacional, en Rio de Janeiro. Había una preocupación en el país relativa a las denuncias de contrabando de diamantes en la frontera entre Brasil y Guyana Inglesa, presuntamente conducido por misioneros protestantes del lado guyanés con apoyo de los indígenas de la región. Esto revelaría un vacío de la presencia del Estado brasileño en una región importante desde el punto de vista de la soberanía. En septiembre de 1959, el diputado rio-branquense Valério Caldas de Magalhães se refirió a esta problemática en un discurso proferido ante la Comisión Parlamentar de Investigación – CPI creada para “constatar a extensão da devastação de nossos recursos naturais”. Sus palabras nos demuestran que para la sociedad nacional el garimpo y la fazenda eran los símbolos de desarrollo y soberanía sobre los ríos Cotingo, Quinô, Tacutu y Maú, obviando los impactos en la vida de las comunidades indígenas. “(...) nada menos de 175 campos e pistas se acham distribuídos na zona dos campos gerais e alguns na orla fronteiriça, na região montanhosa [sierras de Raposa Serra do Sol]. (...) Cerca de 12 dessas pistas se prestam ao tráfego de aviões bi-motores do tipo bitscraft que efetuam as ligações entre Boa Vista e as fazendas ou a zona de garimpo (...). A construção dessas pistas representa esforço do homem rio-branquense, dos fazendeiros e garimpeiros (...)”²⁶⁷.

²⁶⁷ Discurso proferido en 24 de septiembre de 1959. Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

Así mismo, en la defensa de la actuación del gobierno regional frente a las denuncias de contrabando de diamantes en la frontera, el discurso del Diputado Magalhães nos muestra la estrategia del gobierno regional a través de la instalación de puestos policiales o militares en *villas* y garimpos de la actual Raposa Serra do Sol. “(...) o governo criou alguns postos de fronteira em Vila Pereira [Surumu], Tepequém e Normandia, mantendo ainda vigilância policial no garimpo, zona fronteiriça, nos lugares Mutiry, Yramutã, Orinduc, Aylã e Araí, não dispondo de recursos e de autoridade para aumentar o efetivo da Guarda”²⁶⁸.

Figura 23. Placa en la céntrica Praça das Águas, Boa Vista, honrando a aquellos que “modelaron con sudor y sangre el perfil” de la sociedad roraimense. Fotografía por el autor.



Desde aquella época, la figura del garimpeiro va a quedar asociada en el imaginario de la sociedad roraimense como aquellos desbravadores que abrieron el camino al desarrollo y al crecimiento de Roraima. En este relato identitario, los pueblos indígenas no aparecen o lo hacen de un modo periférico, nunca protagónico y mucho menos como víctimas del avance de la frontera económica. Además, según personas vinculadas al sector minero en el Estado, “(...) devemos reconhecer que o perfil social da pessoa que chegava em Roraima para entrar no garimpo era o de pessoas foragidas, habituadas a condições difíceis de sobrevivência e pouco interessados em serem monitorados e fiscalizados. Por isso vão para as terras indígenas, depois vem o fenômeno da ‘fofoca’ que vai atraindo mais e mais garimpeiros para esses lugares”²⁶⁹.

²⁶⁸ Id.

²⁶⁹ Entrevista escrita del autor a un empresario del sector minero.

Con el crecimiento poblacional extraordinario que Roraima vivió a partir de la década de 70 con flujos migratorios procedentes de muy diversos lugares del país, la situación obligaba a la construcción/invencción de un relato identitario, en el cual las figuras del fazendeiro y del garimpeiro van a tener un destaque simbólico. En el Centro Cívico de la capital Boa Vista encontramos hoy un Monumento al Garimpeiro (*figura 24*) y en otra plaza muy próxima una placa (*figura 23*) en la que se les sitúa como uno de los colectivos formadores de la sociedad roraimense. Ambos símbolos expresan el modo como se ha construido, en una sociedad local extraordinariamente heterogénea y desenraizada, la propia idea de sociedad roraimense. Como dice la placa de la Figura 24, en la invención identitaria fueron los fazendeiros, los extractivistas de la balata, la madera y la castaña y, finalmente, los garimpeiros, los que “modelaram com suor e sangue o perfil desta sociedade, deste povo”.



Figura 24. Monumento al Garimpeiro, localizado en la Praça do Centro Cívico, en Boa Vista. *Fotografía del autor.*

2. El avance de la minería bajo el Régimen Militar

Según Elaene Machado (1971), el primer Plano Decenal del gobierno militar, concebido para el período 1965-1974, incluía la extracción minera como factor clave para el desarrollo nacional. Solamente para el período de enero a abril de 1969, los datos del Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM publicitaban la producción diamantífera en la región de Raposa Serra do Sol en los siguientes términos (1971: 27):

- Suapi (Arroyos Suapi y Cariri): Retirada de 200 quilates de diamante y presencia de 70 garimpeiros.
- Maú (Canã, Capim, Cachoeira do Aparelho, Mutum, Cachoeira do Apertar a Hora, Vidal de Negreiros, Cascavel y Pedra Branca): Retirada de 3.531 quilates de diamante y presencia de 159 garimpeiros.
- Quinô y Cotingo (Puxa Faca, Bandeira Branca, Vila Pires, Cajú, Arroyo Morável y Arroyo Azul): Retirada de 193 quilates y presencia de 44 garimpeiros.

Según Rodrigues, la incipiente mecanización de los garimpos introdujo cambios en la dinámica de trabajo y en el modo cómo se organizaba el trabajo (1991, 26). El “dueño del garimpo” se veía obligado a hacer una mayor inversión económica y prefería

también contar con mano de obra con un mínimo nivel de especialización. Los porcentajes en las ganancias, hasta ahora medidos por el sistema de *meia-praça*, sufrieron algunos ajustes, aumentando la parte que quedaba con el dueño.

El hecho fundamental que aceleró las transformaciones sociales, políticas y económicas en Roraima fue la construcción y apertura de la carretera BR-174 en la primera mitad de la década de 70. Y esto va a tener sus repercusiones en la cuestión minera en los diversos territorios indígenas de Roraima. La carretera BR-174, según los informes oficiales, fue concebida con la intención de unir la ciudad de Manaus con la frontera norte entre Brasil y Venezuela. Con ello se alcanzarían dos objetivos, según las versiones oficialistas: unir Manaus con Boa Vista, la capital del Territorio de Roraima, superando su aislamiento por vía terrestre; y abrir una vía que permitiese una mejor comunicación comercial de la Zona Franca de Manaus con Venezuela. La BR-174 atravesó el territorio tradicional del pueblo Waimiri-Atroari²⁷⁰, cuya población fue diezmada por causa de la obra y los impactos sobre el ambiente de esta carretera.

²⁷⁰ Para un análisis más detallado de las consecuencias sobre la vida de los Waimiri-Atroari de la construcción de la BR-174, la apertura de la Mina de Pitinga y la construcción de las Hidroeléctricas de Pitinga y Balbina, ver e Bibliografía: Comit  Estadual de Direito   Verdade,   Mem ria e   Justi a do Amazonas (2014); Baines (1991, 1993 y 1994); y Schwade (2015).



Figura 25. Construcción BR-174 entre Manaus y la frontera con Venezuela. *Fuente: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil*



Figura 26. Carretera BR-174 en la actualidad, atravesando el territorio indígena Waimiri-Atroari.
Fotografía por el autor

Cuadro 15. Minería, BR-174 e hidroeléctricas en el territorio de los Waimiri-Atroari

Aunque la justificativa oficial del Gobierno para la construcción de la BR-174 pasaba por la idea de conectar Roraima al territorio nacional y Manaus con Venezuela, los intereses iniciales también incluían la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.

Según registra el Comité Estadual de Direito à Verdade, à Memória e à Justiça do Estado de Amazonas, em 1967 um membro del Gobierno Estadual de Amazonas, Coronel Mauro Carijó, escribió a la PETROBRAS y “solicitou ‘informação sobre o potencial minero do Estado em vista da elaboração de um Plano Diretor de Transportes para o Estado do Amazonas’. Pouco depois o mesmo Coronel iniciou a construção da BR-174” (2014:54).

Con el inicio de las obras, el interés de empresas mineras se abrió paso y fue el Grupo Paranapanema – posteriormente Taboca - el que en 1979 invadió el territorio Waimiri-Atroari para iniciar actividades de exploración y explotación minera en la región de Pitinga. La incursión de la empresa minera y el inicio de la explotación de casiterita motivaron sucesivas reducciones del tamaño de la tierra indígena Waimiri-Atroari, que ya había sido delimitada en 1971. Con la nueva delimitación, un área del territorio Waimiri-Atroari fue declarada de utilidad pública para la construcción la Hidroeléctrica de Balbina y para ocupación con proyectos de colonización agrícola. Al mismo tiempo, se determinó la construcción de una carretera interior para acceso a la cantera de la mina y la construcción de una Hidroeléctrica en el río Pitinga para abastecer las necesidades de la empresa.

El Informe conclusivo del Comité Estadual de Direito à Verdade de Amazonas, dirigido a documentar los crímenes practicados por la dictadura militar contra el pueblo Waimiri-Atroari por ocasión de la apertura de la BR-174, atesta que entre 1972 y 1977 más de 2.000 indígenas murieron asesinados o por enfermedades traídas por los invasores de su territorio (2014). Supuso, además, una de las primeras y principales incursiones de la megaminería empresarial de exportación en la región limítrofe entre los actuales Estados de Amazonas y Roraima y sobre el territorio de un pueblo indígena.



Figura 27. Área del territorio Waimiri-Atroari inundada por impacto de Hidroeléctrica construida en la década de 70. Foto del autor de este trabajo



Figura 28. Área de Minería Taboca, iniciada en la década de 70 en el interior del territorio Waimiri-Atroari. Foto del autor de este trabajo.

De otro lado, la década de 70 va a significar el inicio de la ocupación garimpeira en el territorio Yanomami. En 1975 un grupo de garimpeiros descubre un yacimiento de casiterita en la sierra de Surucucus, territorio habitado por los Yanomami. Aunque el grupo de garimpeiros que inició su explotación fue retirado unos meses después por la Policía Federal, la visibilidad de la presencia de casiterita en la región va a funcionar como un reclamo permanente durante los años siguientes, sea como atracción de garimpeiros o como foco de interés para la explotación empresarial. A partir de 1975, el DNPM registra ya los primeros requerimientos de autorización de pesquisa de casiterita en la tierra de los Yanomami.

Por último, en 1979 se descubre el garimpo de oro de Santa Rosa, en el curso bajo del río Uraricoera. Un año después, se hablaba de 5.000 personas trabajando en este *garimpo* del oro, muchos de ellos sin experiencia en la actividad minera (Rodrigues, 1991: 28).

8.3.2. Décadas de 80 y 90: invasión garimpeira en Raposa Serra do Sol

La etapa definitiva de la ocupación del espacio de Raposa Serra do Sol a través de garimpos se va a dar a lo largo de las décadas de 80 y 90. Se trata de un período político especialmente intenso en Brasil, con el agotamiento del Régimen Militar, la mayor densidad de la movilización social, el retorno a la democracia y la nueva Constitución Federal de 1988. Precisamente, va a coincidir con las mayores ondas de invasión garimpeira dentro de Raposa Serra do Sol y la consolidación del movimiento indígena en la defensa de la tierra.

“Em poucos anos a garimpagem passou ao status de atividade econômica dominante na Amazônia, ocupando cerca de meio milhão de garimpeiros e produzindo, em 1987, aproximadamente cento y veinte toneladas de ouro, colocando o Brasil em terceiro lugar na produção aurífera mundial” (Albert, 2002: 244). El aumento del precio del oro en el mercado mundial a partir de 1979 va a alimentar una maciza movilización de millares de personas hacia los garimpos de aluvión y de tierra firme en todo el territorio amazónico y, también, en Roraima, donde la noticia del precio del metal precioso había coincidido además con el descubrimiento del yacimiento de Santa Rosa.

La incursión masiva de garimpeiros durante la década de 80 se va a producir, en primer lugar, dentro del territorio Yanomami y posteriormente se va a desplazar hacia la región de los ríos Quinô, Cotingo, Uailã e Maú, en la actual Raposa Serra do Sol. Los registros de la época van a relacionar este segundo desplazamiento con las operaciones de retirada de garimpeiros que el Estado había puesto en marcha en la Tierra Indígena Yanomami (Santilli, 2001: 100).

Cuadro 16. Minería en el territorio Yanomami

Sin duda, la Tierra Indígena Yanomami ha sido la más castigada por la actividad garimpeira. Sobre ella también se acumulan más del 50% de los requerimientos de autorización de pesquisa actualmente activos en el Registro del Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM.

Si bien la incursión de grupos garimpeiros había iniciado durante la década de 70, favorecidos por la construcción de las carreteras BR-174 y BR-210, la década de 80 va a ser especialmente violenta por la presencia del garimpo dentro de la tierra habitada por los Yanomami y los Ye'kuana.

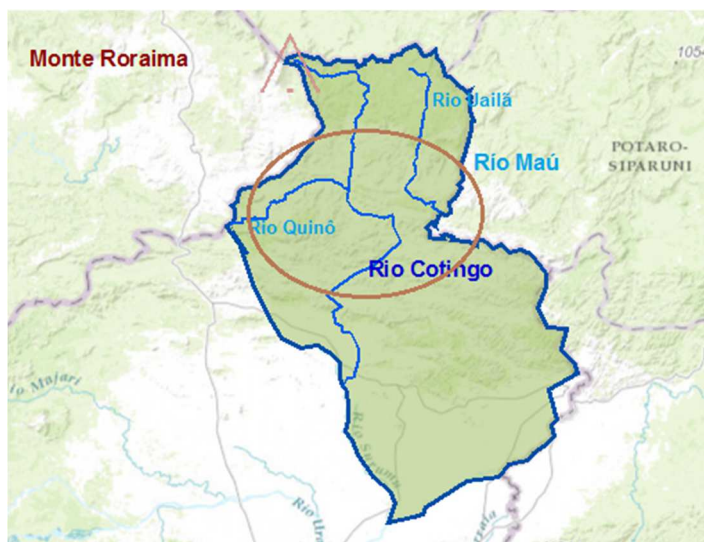
En 1986, la ocupación garimpeira explotó en el corazón del territorio Yanomami, en la región de Paapiú. En agosto de 1987, un grupo de garimpeiros asesinó a cuatro líderes indígenas que intentaban bloquear su acceso a los yacimientos de oro de la región y a partir de ahí la invasión maciza y violenta aumentó (Albert, 2002). Se calcula que en 1989, cerca de 40.000 garimpeiros se encontraban dentro del territorio Yanomami, operando en cerca de 152 garimpos. Se localizaban en ese momento 82 pistas clandestinas de poso para avionetas, el principal transporte utilizado entre el garimpo y la ciudad.

La Tierra Indígena Yanomami fue definitivamente homologada en 1992. Sin embargo, la invasión garimpeira ha continuado aconteciendo de modo permanente hasta nuestros días. A lo largo de los últimos 20 años se han producido algunas grandes operaciones de retirada de los garimpeiros de la zona, incluyendo la quema de los equipamientos. Cuando se producía una retirada masiva, estos contingentes se desplazaban hacia otros locales, como la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol o hacia los garimpos de Venezuela – algunos dentro aún del territorio de ocupación Yanomami - y Guyana Inglesa. La mayor parte de las veces, los garimpeiros vuelven al territorio Yanomami.

Como se puede apreciar en el Mapa 15, el área de mayor invasión de campamentos garimpeiros dentro de la TI Raposa Serra do Sol se va a situar en la zona centro-norte o región serrana. Las comunidades indígenas, cada vez con una organización interna más apurada, presentaban resistencia al avance del garimpo.

Frente al discurso de los parlamentares de que la minería y la integración de los indios eran un camino real e irreversible, incluso beneficioso para las propias comunidades, el *Diário do Povo* recogía en noviembre de 1985²⁷¹ la denuncia realizada por representantes de las comunidades indígenas de Maloquinha, Piolho, Serra do Sol y región de Suapi contra la actuación en la zona de la empresa estadual CODESAIMA, la estatal Companhia de Pesquisa dos Recursos Minerais – CPRM y la empresa privada Andrade Gutiérrez. Según los moradores, la actividad de las empresas estaba causando reducción de la caza y la pesca, contaminación de las fuentes de agua, así como diseminación de enfermedades y de bebida alcohólica. “Antigamente, existia peixe, caça. Hoje já não tem, porque a bomba joga areia e barro no rio, sufocando os peixes. Até a água o índio está bebendo suja”.

²⁷¹ *Diário do Povo*, 24 de noviembre de 1985.



Mapa 15. Área de mayor invasión garimpeira en las décadas de 80 y 90, TI Raposa Serra do Sol. *Elaboración propia.*

Igualmente expresiva resulta la descripción que el Tuxaua Jacir José de Souza relata en un Informe elaborado en 1993 y que hace una retrospectiva de la expansión del garimpo sobre Raposa Serra do Sol en la década de 80. “Em 1985, centenas de garimpeiros invadiram a nossa área. No rio Maú, Cotíngo e Quinô (...) Consigo trouxeram bebidas alcoólicas, prostituição, drogas, doenças contagiosas, malária, etc ...A confusão aumentou cada vez mais. Mortes de índios, espancamento de pessoas. Os líderes e as comunidades estavam sendo ameaçados de morte, furto de gado da comunidade, as mulheres eram agredidas quando as mesmas iam para suas roças”²⁷². Uno de nuestros informantes confirmo la presencia masiva en la época de millares de garimpeiros, distribuídos em muchos acampamentos a lo largo del rio Quinô, siguiendo las comunidades de Maloquinha, Volta Redonda, Pedra Preta y otras (Entrevista 4-2012-A).

“Fomos enfrentando já os garimpeiros. Eles já estavam no garimpo mesmo, eles tinham comércio lá. No Maú e o Cotíngo também, todo espalhado. Só que eles vinham no final de semana, sábado e domingo, aí é que eles vinham para fazer festa, né? E isso já vinha acontecendo de antes da Decisão, abusar das filhas, da própria mulher, aquele negócio, todo mundo bêbedo” (Entrevista 2-2012).

Las comunidades iban incorporando nuevas estrategias de presión y movilización. Entre ellas, una vez más, destaca el registro escrito y fotográfico de los incidentes y conflictos emergentes en el territorio, como dijimos anteriormente, y la emisión sistemática de documentos dirigidos a las autoridades competentes - principalmente al Ministerio Público federal, Ministerio de Justicia, FUNAI y Delegados de la Policía Federal. Gracias a esta sistemática tarea de registro, hoy tenemos acceso a una buena parte de los acontecimientos que sucedieron durante las décadas de 80 y 90 según el testimonio directo de las comunidades afectadas. Así mismo, este registro sistemático subsidió,

²⁷² Copia del Informe en Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

años después, acciones judiciales diversas emprendidas por las organizaciones indígenas denunciando y documentando agresiones, amenazas y muertes.

A inicios de 1986, las comunidades iniciaron un bloqueo en una de las nuevas carreteras que daba acceso a la *villa* de Socó y al conocido como *Garimpo da Onça*. Una vez más, el Diputado João Batista Fagundes, denunció en el Congreso Nacional que estas maniobras estarían siendo manipuladas por intereses extranjeros, implicando a religiosos católicos en la región. “Agora mesmo, a estrada municipal que está sendo aberta ligando Socó ao Garimpo da Onça e que servirá a uma região das mais importantes para a economia roraimense, foi bloqueada por grupos indígenas mediante alegação de que colocará em risco a sobrevivência das comunidades”²⁷³.

Entre 1988 y 1991, una nueva oleada masiva de garimpeiros invade la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Las inmediaciones de los ríos Maú, Quinô y Cotingo se vieron invadidas por millares de personas que instalarán allí sus campamentos improvisados para la extracción de oro y diamantes, mientras que las *corruptelas* de Uiramutã, Água Fría, Socó, Vila Pereira (Surumu) o Mutum crecerán como puntos de apoyo al garimpo y espacios de conflicto y violencia.

En marzo de 1991, un Informe sobre la minería en Raposa Serra do Sol va a dar una medida aproximada del estado de la cuestión. El autor del Informe²⁷⁴ argumenta que, a pesar de la participación indígena en los garimpos encontrados a inicios de los 90²⁷⁵, esto no podría confundirse con la idea de que el garimpo ha traído beneficios a la comunidad (MacMillan, 1997): “(...) a presença dos garimpeiros está prejudicando o modo de viver dos índios, causando doenças e trazendo cachaça, drogas e violência para a região”. Entre los impactos socioambientales levantados por el Informe destacan:

- El aumento de la erosión en las márgenes de los ríos afectados, la apertura de grandes barrancos en estas zonas sensibles y el desvío de cursos de agua²⁷⁶;
- La contaminación del agua por residuos, plásticos y oleo diésel, obligando a las comunidades a desplazarse a fuentes más distantes para captación de agua para consumo;
- Diseminación de alcohol y frogas;

²⁷³ Diário Tribuna de Roraima, 18 de abril de 1986.

²⁷⁴ A pesar de que la primera página del Informe recoge en su cabecera, en manuscrito, el nombre de Gordon J. MacMillan, el texto no tiene una firma que nos permita confirmar con seguridad su autoría y preferimos no sentarla como premisa, aunque posiblemente sea él el autor, como parte de su trabajo de investigación en la región. El documento se encuentra en el Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

²⁷⁵ Como empleados de los garimpeiros o proveedores de *farinha de mandioca* para éstos.

²⁷⁶ Gordon MacMillan (1997) afirma que los impactos del garimpo en los ecosistemas acuáticos son más severos que en las superficies terrestres. Entre los impactos en el medio acuático destacan el aumento de la erosión, la sedimentación y la contaminación del agua y de la ictiofauna. MacMillan afirma que se calcula que 2 m3 de sedimentos son incorporados al agua por cada gramo de oro extraído.

- Epidemia de malaria que se extendió en las comunidades y causó la muerte de 7 personas en dos comunidades durante los meses anteriores al Informe, en una región “que não tinha quase nada de malária antes de 1989”.

Al final del Informe, el autor detalla los datos de cuatro muertes por violencia contra moradores indígenas, sucedidas entre junio de 1990 y enero de 1991 en las *villas* de Água Fría y Uiramutã.

En 1992, el escritor Patrick Tierney, colaborador de un programa de salud entre la población indígena en la zona de Raposa Serra do Sol, registró en un Informe las anotaciones que había hecho en sendos viajes a los ríos Quinô y Maú²⁷⁷ para conocer la situación del garimpo en ese momento. Las informaciones recogidas en estos viajes son suficientemente expresivas y descriptivas de la intensa ocupación del espacio social y físico por parte del garimpo en los inicios de la década de 90. Solo junto al río Quinô, Tierney recoge estos datos:

- Durante 1991 se habían dado en las comunidades próximas hasta 600 casos de malaria y 12 personas habían fallecido por este motivo;
- En la región se localizaban 130 garimpos mecanizados y 25 con extracción manual. Entre unos y otros, se calculaba la presencia de más de 1.000 personas trabajando en los garimpos;
- Existían 5 pistas improvisadas de aterrizaje para pequeñas aeronaves que trasladaban hasta la zona a los compradores de oro y diamantes directamente desde Boa Vista;
- Se detectaron al menos 20 locales de venta de bebidas alcohólicas y evidencias de trata de mujeres para explotación sexual;

Ya en la zona del río Maú, Tierney registró:

- Contaminación visible en las aguas del río Maú;
- Presencia de 20 *jangadas*²⁷⁸ y 126 balsas en el río;
- Numerosos bares, 75 campamentos improvisados y más de 100 casas de garimpeiros entre las *villas* de Uiramutã y Mutum;
- Aproximadamente 700 garimpeiros actuando directamente en la región.

²⁷⁷ En el viaje a la región del río Quinô, Tierney fue acompañado por el Tuxaua Severino, de la comunidad indígena de Cajú. El viaje tenía el apoyo del Conselho Indígena de Roraima – CIR y de las comunidades locales de Cajú, Pedra Preta, Bananal y Maloquinha. Posteriormente, Tierney se desplazó hasta la región del río Maú y, con el apoyo de la comunidad, visitó la zona de Maturuca, Mutum y Uiramutã. Copia del documento en: Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

²⁷⁸ Tipo de embarcación utilizada para fijar la bomba succionadora en medio del curso de agua.

Tierney también registró la cuestionable intervención de la Policía Militar intentando consolidar la presencia del garimpo en la región y persuadir a las comunidades indígenas para aceptarlo, renunciando a sus reivindicaciones territoriales²⁷⁹.

En el Informe redactado por el Tuxaua Macuxi Jacir, en marzo de 1993, relata el trabajo de la comunidad para la retirada de los garimpeiros “do trecho do rio Maú próximo à Maloca de Maturuca até a maloca de Tabatinga e Camararém, que eran nº de 450 garimpeiros e 150 balsas”.

En marzo de 1994, un año más tarde, el Consejo Indígena de Roraima emite una Nota Pública en la cual informa sobre la acción de la comunidad de bloqueo de la carretera que daba acceso a los garimpos de los ríos Maú, Quinô y Cotingo, a la altura de la comunidad de Machado, en la región de Surumu. “A área indígena continuará aberta para os órgãos públicos que prestam assistência de saúde e educação, à FUNAI, à Polícia federal e ao Exército, mas não será aceita a presença de policiais civis e militares, devido ao fato de que estes, ao defenderem o interesse de fazendeiros e garimpeiros, estão sempre cometendo inúmeras violências dentro desta área”²⁸⁰.

La denuncia y visibilización de las violencias que estaban siendo cometidas contra las comunidades indígenas era uno de los objetivos del bloqueo y de esta Nota Pública del CIR. Al mismo tiempo, detalla los impactos sociales y ambientales causados por los garimpos ilegales en los ríos Maú, Quinô y Cotingo, así como la connivencia con ellos por parte de las autoridades del Estado de Roraima y por la Alcaldía del municipio de Normandía.

En junio de 1997, la situación vuelve a producirse. En este caso, las comunidades bloquearon el camino de acceso a los garimpos de la región de la *villa* Água Fria. En la Nota de Prensa elaborada por el CIR, la organización indígena lamenta que, a pesar de haber estado registrando sistemáticamente las denuncias sobre el garimpo ilegal en los últimos seis años, “nenhuma ação eficaz foi tomada pelas autoridades. É incompreensível e inexplicável a falta de atuação do IBAMA e da Polícia Federal”²⁸¹.

Después de un sobrevuelo de la zona por parte del Ministerio Público Federal, junto con la FUNAI y con dirigentes indígenas, por encima de las regiones de Cajú, Mutum y Uiramutã, se procedió a una serie de operaciones para la requisición de los garimpeiros. Según uno de nuestros informantes, las acciones requirieron la articulación y participación de las comunidades indígenas del lado de Guiana y de la Policía de este país, ya que los grupos de garimpeiros circulaban por la zona e iban huyendo en cada

²⁷⁹ Particularmente, registra testimonios de las comunidades que informan que en el mes de marzo de 1992, un equipo de la Policía Militar se personó en las comunidades de Cajú y Maloquinha presionando para que los indios desistieran de sus reivindicaciones sobre la tierra y aceptasen la presencia garimpeira.

²⁸⁰ Nota Pública CIR. Copia en Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil.

²⁸¹ Nota Pública CIR de 22 de abril de 1997. Copia en Centro Documentación Instituto Misioneros de la Consolata, Boa Vista-Roraima/Brasil

momento de la presencia de la Policía Federal. “Lá [refiriéndose a toda la región, próxima al río Maú] tinha uns 2.000 garimpeiros” (Entrevista 5-2012-A). Los equipamientos fueron retirados, pero las personas no salían del área, sino que quedaban concentrados en *villas* como Mutum, Água Fría o Uiramutã.

De hecho, la actuación de las comunidades indígenas dentro del territorio – registro de violencias, construcción de retiros y comunidades, adquisición del ganado de los fazendeiros y cortes de carretera para impedir el suministro – tuvo una influencia fundamental en la retirada final de los fazendeiros, incluso antes de la demarcación y homologación de la tierra. Sin embargo, lo mismo no puede decirse respecto a la salida de los garimpeiros. “A gente se enganou com os garimpeiros. Que é mais ilegal, garimpeiro, [e foram] os que ficaram. Os que estão hoje aí no Uiramutã. Não saíram, né? Estão aí. Foi concentração né? vieram de Mutum, de Agua Fria. Estão todos aí no Uiramutã (...) Já depois que foi fechado o garimpo, não estão mexendo, estão mexendo com comércio. Cada um tem loja grande que não tinha isso no movimento da garimpagem, né? Mas já depois, trouxeram bando, todo esse negócio lá” (Entrevista 5-2012-A).

Esta sensación de que el garimpo se quedó, de algún modo, dentro del territorio, llegó a tener su máxima expresión con la creación del Municipio de Uiramutã y la posterior exclusión de su sede del territorio indígena efectivamente homologado.

8.3.3. La implantación del Municipio de Uiramutã o la herida abierta del garimpo

A TI Raposa Serra do Sol foi homologada com uma ferida, que é a sede do Município do Uiramutã.

Carta de la 37ª Asamblea General de los Tuxauas al Presidente de la República

El municipio de Uiramutã ocupa la mayor parte de la región serrana de Raposa Serra do Sol. Toda la población del municipio es indígena, si exceptuamos los pocos moradores no-indígenas que se mantienen en la sede o en algunas de las *vilas*.

La sede del municipio está construida sobre el mismo espacio de la comunidad indígena de Uiramutã, significando una sobreposición territorial no ausente de conflictos. Se construye a partir de la presencia de casas residenciales y comercios regentados por personas que se quedaron en la región después de tener estrechos vínculos con la fazenda o el garimpo.

Según informaciones del Consejo Indígena de Roraima/CIR, el primer asentamiento de garimpeiros en el local de la aldea indígena Uiramutã tuvo lugar en la década de 50, introduciendo en la vida de la comunidad y de las aldeas vecinas problemas sociales como el alcoholismo, la explotación sexual de mujeres, la explotación de la mano de obra indígena y actos de violencia. Así como otras *vilas* – Mutum, Água Fría, Socó – Uiramutã se fue constituyendo en un espacio de ocupación física y de dominio con

evidentes vínculos con la actividad garimpeira. Además de funcionar como local de apoyo y de compra-venta de los suministros necesarios para el garimpo, en él se concentraban las relaciones de dominación y la ocurrencia de fiestas, abusos y diseminación de bebida. En Uiramutã los actos de violencia contra indígenas, entre indígenas o entre garimpeiros eran cada vez más frecuentes.

La invasión maciza de la región por parte del garimpo a partir de 1985 ocasionó una nueva y más intensa ocupación del local de la aldea Uiramutã. A la reproducción de los anteriores problemas sociales, se unió ahora la extensión de una epidemia de malaria sobre la región.

El local donde se situaban tradicionalmente las casas de los moradores indígenas se encontraba en una franja de tierra firme entre dos arroyos que se unían al final. Esta franja fue siendo ocupada por moradores no-indígenas relacionados con el garimpo, llegando en el año 2000 a contabilizarse 30 familias de ocupantes. De este modo, se iba consumiendo un proceso de reconfiguración del espacio local de Uiramutã: a pesar de que la comunidad indígena se mantenía dentro de sus casas, el local en su conjunto iba transformándose e instalando las dinámicas relacionadas con la ocupación garimpeira, principalmente en lo que se refiere a la venta y diseminación de bebida alcohólica.

Las comunidades indígenas decidieron entonces construir nuevas casas de moradores en las márgenes externas de ambos arroyos con el objetivo de impedir, al menos, la ampliación del área ocupada por los nuevos inquilinos no-indígenas. Podemos apreciar esta re-configuración del local en la figura 30, un dibujo realizado por los propios indígenas de la zona. En él apreciamos cómo el centro de la antigua aldea y la sede del nuevo municipio quedaron mezclados entre los dos arroyos, mientras que las áreas externas fueron ocupadas por las comunidades indígenas con nuevas casas. Esta estrategia fue contrarrestada con la posterior construcción del nuevo Cuartel del Ejército.

Tiene sentido, a efectos de nuestro trabajo, detenernos brevemente en analizar el proceso que condujo a la institucionalización del municipio, con su sede, y a su exclusión del territorio indígena Raposa Serra do Sol y las consecuencias que esto genera²⁸².

En 1991, la FUNAI había iniciado una nueva fase de estudio de la territorialidad indígena en Raposa Serra do Sol. El objetivo era la emisión de un nuevo Informe de delimitación física del territorio, instrumento fundamental para continuar el proceso demarcatorio. La Constitución Federal de 1988 había establecido el plazo de cinco años para la efectiva

²⁸² Un análisis más detallado lo podemos encontrar en Santilli, P (2000). Pemongon Pata: Território Macuxi, rotas de conflito. São Paulo: UNESP.

homologación de todos los territorios indígenas en el país, por lo que 1993 era el plazo administrativo del que se disponía, en principio.

Figura 29. Mapa de Uiramutã, dibujado por los indígenas macuxi en 2003.



Al mismo tiempo, el Gobierno Estadual y la Asamblea Legislativa del Estado de Roraima estaban interesadas en la creación de nuevos municipios en el Estado a partir de la subdivisión de algunos de los ya existentes. En 1992, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 002/1992 que disponía sobre el asunto y a partir de ese momento no ahorró esfuerzos para la creación de los municipios²⁸³. En el caso de Uiramutã, se trataba de la división en dos del entonces Municipio de Normandia. No es difícil percibir que este acto administrativo incorporaría un nuevo elemento distorsionador en el proceso de demarcación de la tierra indígena. “Tanto empenho aponta, evidentemente uma estratégia: a intenção da elite política local, à revelia da Constituição e do processo administrativo de demarcação do patrimônio da União no Estado, era a de criar o ato consumado de municípios incidentes sobre as terras indígenas, inviabilizando na prática, o próprio processo administrativo de demarcação” (Santilli, 2000: 122).

El Consejo Indígena de Roraima/CIR, en Nota Pública del mes de marzo de 1994, ya denunciaba la intención de la Asamblea Legislativa roraimense respecto a los municipios de Pacaraima y Uiramutã: “(...) a Assembleia Legislativa através de alguns de seus deputados, ao arrepio da Lei, está acelerando o processo de criação de dois novos municípios dentro das terras indígenas São Marcos, homologada, e Raposa-Serra do Sol,

²⁸³ Estos esfuerzos incluyeron la realización de sendos plebiscitos fraudulentos en los eventuales municipios de Pacaraima y Uiramutã, que no reunieron el quorum mínimo de participación. Estos plebiscitos se realizaron en 1995.

em demarcação” (Nota CIR). La organización indígena recurrió al Ministerio Público Federal y tanto éste como la FUNAI entraron con procesos contra las actuaciones del Estado de Roraima para la creación de los municipios. Finalmente, el Gobierno Estadual de Roraima instaló el municipio de Uiramutã a través de la Ley nº 98 de 17 de octubre de 1995.

Como ya dijimos anteriormente, los límites actuales de Raposa Serra do Sol se definieron en un Estudio de Delimitación elaborado por la FUNAI en 1993. En ese estudio se afirmaba que las pequeñas *vilas* existentes dentro del territorio de la comunidad, y entre las que se incluía Uiramutã, “funcionam como ponto de apoio e de abastecimento para os ocupantes da área, em especial os vaqueiros das fazendas, garimpeiros e funcionários públicos”. La vinculación, por tanto, de estas pequeñas aglomeraciones semi-urbanas con las agencias de la fazenda y el garimpo resultaban evidentes incluso para el Gobierno Federal.

Posteriormente, el entonces Ministro de la Justicia Nelson Jobim, en el Despacho nº 80 al que ya nos referimos, decidió dejar fuera de la Tierra Indígena las sedes de las *vilas* de Uiramutã, Surumu, Água Fria, Socó y Mutum. En su justificación, decía que se trataba de áreas de ocupación pública, con órganos de administración y de prestación de servicios, lo que obligaba a su preservación por tratarse de un hecho social consolidado. Justificaba también su decisión en que estos núcleos urbanos ya no reflejaban una ocupación tradicional indígena y no cumplían los requisitos establecidos por la Constitución Federal en su artículo 231 § 1º. “O fato incontestável da existência de tais aglomerados e do longo tempo a que remontam demonstra a sua não inclusão nos círculos constitucionais definidores das terras indígenas” (Despacho nº 80/MJ).

A efectos de nuestro trabajo no nos interesa detenernos en los detalles del Despacho ministerial o en contestar su conciliación con el texto constitucional²⁸⁴. Lo que sí nos interesa, desde la perspectiva de la política de territorialización del Estado, es el modo en que quedó legitimado, con la creación del municipio de Uiramutã y su exclusión de la tierra indígena, el proceso de ocupación territorial avanzado por la agencia del garimpo. “Os ‘núcleos populacionais consolidados’ o ‘vilas’ – Uiramutã, Socó, Surumu, Mutum e Água Fria – a que se refer o despacho, não passam de estabelecimentos, conhecidos regionalmente como *corruptelas*, incrustados em e entre aldeias, que abrigam garimpeiros em trânsito e pequenos comerciantes que fornecem para os garimpos. O despacho ministerial vem, assim, preservar a garimpagem, atividade, como se sabe, ilegal” (Santilli, 2000: 125).

²⁸⁴ Para un análisis más detallado, sugerimos el documento “Análise Jurídica do Despacho nº 80/96 do Ministro da Justiça”, elaborado por la Asesoría Jurídica del CIMI, y accesible en <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=323>>

“O município de Uiramutã na verdade foi a estratégia do interesse econômico mineral de junto com os militares dar base para qualquer empreendimento que futuramente poderá ser implementado”²⁸⁵.

La principal consecuencia práctica de esta propuesta es que no pesarán sobre la sede semi-urbana de Uiramutã las salvaguardas propias que se reconocen al territorio indígena – como el uso exclusivo de los bienes naturales, el reconocimiento a la organización social propia, el control de acceso y tránsito de personas extrañas a la comunidad o la prohibición de bebidas alcohólicas, entre otras - dando amparo legal al tejido comercial presente en Uiramutã, con personas vinculadas al garimpo, y a la red administrativa municipal y estadual, con la presencia del Gobierno del Estado y la presión sobre la administración municipal.

El entendimiento político y jurídico del Despacho nº 80 de 1996 se va a mantener en el acto de Demarcación de diciembre de 1998, firmado por el entonces Ministro de la Justicia Renan Calheiros, y en el Decreto Homologatorio de 2005 firmado por el Presidente Lula da Silva.

La formalización administrativa del municipio de Uiramutã y el reconocimiento de su sede por parte del Estado brasileño conecta las tensiones del pasado marcado por la ocupación garimpeira con los dilemas del presente, en el cual los conflictos se redimensionan. Esto es lo que nos permite comprender la sensación, explicitada por varios de nuestros informantes, de que Uiramutã se quedó como una herida dentro de Raposa Serra do Sol.

Por otro lado, el nuevo Municipio de Uiramutã es, como veremos en el siguiente epígrafe, el territorio de Raposa Serra do Sol sobre el que más procesos mineros han sido solicitados. Si la actividad minera un día fuese permitida, como se pretende desde el Congreso Nacional, esto haría de Uiramutã una plaza administrativa fundamental por la cantidad de recursos que podrían circular.

La creación del municipio dentro situó a su población delante de, al menos, dos desafíos:

- a) la disputa por el control político de estas esferas municipales;
- b) su papel administrativo como canalizador de políticas públicas.

En cuanto al primer desafío, este dilema se ha reflejado sobre todo en las sucesivas elecciones municipales, que suelen generar procesos de mucho desgaste en la población. Las comunidades indígenas optaron en un primer momento por abstenerse de una posición política electoral para manifestar así su oposición a la continuidad del municipio, en litigio judicial, esperando que la falta de apoyo de la población municipalizada terminase por anular la propia creación del ente federativo. En otros momentos, se ha intentado por parte de la organización comunitaria local incorporarse

²⁸⁵ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

a la máquina electoral de los partidos políticos para escoger, mayoritariamente, representantes de confianza de la comunidad que pudiesen asumir cargos públicos en el municipio. “Um dos pontos positivo que deve ser bem discutido que o município é um ente publico que com uma boa gestão, com participação de fato da população indígena que é majoritaria, poderá implementar as políticas publicas de fato”²⁸⁶.

Actualmente, varios de los *vereadores* o parlamentares del municipio han sido indicados por la organización indígena regional y obtenido el voto mayoritario de las comunidades. Al mismo tiempo, esta segunda estrategia ha traído, en cada período electoral, no pocos desgastes al interno de la vida de las comunidades. Los partidos políticos nacionales han intentado instrumentalizar la representatividad indígena en beneficio propio, generando divisiones y fragmentación social al interno de la sociedad indígena. De otro lado, el imaginario de que el control de la máquina administrativa municipal permitiría el control del uso de los recursos públicos, posicionó a las comunidades indígenas en dinámicas de gestión e interacción política ajenas a los modelos propios de organización.

En cuanto al segundo desafío, vinculado con la administración pública, algunas políticas públicas federales sensibles como las de transferencia de rentas (Bolsa Familia, Auxilio de Maternidad, Pensiones, ...) son canalizadas a través de los municipios. Este hecho ha incentivado la afluencia permanente de la población indígena desde sus aldeas hasta las sedes de municipio para gestionar y recibir estos beneficios sociales. Buena parte de los recursos, terminan quedándose en la malla comercial de la propia sede municipal, sin revertir en la vida de la comunidad e impactando seriamente en los procesos productivos propios. Al mismo tiempo, el efecto perverso de este fenómeno termina siendo el fortalecimiento de las sedes municipales, algo que no era pretendido por las comunidades.

8.4. La presión de la minería empresarial sobre los territorios indígenas de Roraima.

Como hemos analizado hasta el momento, la actividad minera sobre el territorio Raposa Serra do Sol y sobre el resto de las tierras indígenas en Roraima adoptó la figura del garimpo, ejerciéndose como minería ilegal.

Al mismo tiempo que el garimpo se diseminaba sobre Roraima e instalaba sus lógicas de territorialidad y los impactos sobre la vida de las comunidades y su entorno, otros actores de la minería han intentado a lo largo de todo este tiempo conseguir autorización para pesquisa o labra en tierras de Roraima, incluyendo los territorios indígenas.

²⁸⁶ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

Se trata fundamentalmente de actores empresariales, pero también personas físicas²⁸⁷, que a lo largo de las cinco últimas décadas protocolaron en el Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM sus pedidos en polígonos muchas veces situados dentro de los territorios indígenas. Titulares de los pedidos y funcionarios del DNPM eran conscientes de que, en los casos en que los requerimientos se sobreponían a tierras indígenas, la continuidad del proceso estaba comprometido por inexistir regulación de este tipo de actividades. Lo que hacía el DNPM era que, una vez que cotejado que el territorio indígena estaba demarcado u homologado, orientaba al titular del requerimiento a solicitar una consulta a la Fundación Nacional do Indio/FUNAI. La totalidad de los requerimientos que se encuentran en activo dentro de las tierras indígenas se encuentran e actualmente en esta fase.

El protocolo de estos requerimientos podía responder a la perspectiva de que una eventual regulación de la actividad otorgase posición de prioridad a los requerimientos ya existentes; es lo que se ha venido a llamar “expectativa de derecho”.

El Ministerio Público Federal de Roraima comprobó en 2011 que más de 1.200 requerimientos protocolados en ese momento en el DNPM se localizaban dentro de tierras indígenas de Roraima; particularmente en el caso de la TI Yanomami, casi el 55% del territorio indígena era objeto de requerimientos documentados, protocolados y oficializados, a la espera de una regulación normativa de la actividad. Con base en estos datos, el mismo año de 2011 formuló una Recomendación dirigida al DNPM y al Ministerio de Minas y Energías/MME para que, en ausencia de marco normativo, todos los títulos que hubiesen sido protocolados con anterioridad al eventual proyecto de ley complementaria fuesen anulados, desinhibiendo precisamente cualquier expectativa de derecho. Los órganos competentes acogieron la recomendación pero no la siguieron, lo que motivó que el MPF/RR entrase en octubre de 2012 con una Acción Civil Pública en el Tribunal Regional Federal para que la Justicia determinase la efectiva nulidad y cancelación de estos títulos que caracterizaban, según el MPF/RR, una situación ilegal que traía presión sobre las comunidades indígenas²⁸⁸. En conversación del autor de esta investigación con un funcionario del DNPM en Boa Vista, Roraima, semanas después de esta Acción Civil Pública, nos confirmaron que mientras no viniesen órdenes del Ministerio, la Superintendencia del órgano en Roraima no iba a seguir la Recomendación.

Según uno de nuestros informantes, relacionado con el sector minero, “quanto aos requerimentos em terras indígenas, a maior parte deles datam de antes da CF 1988. Os

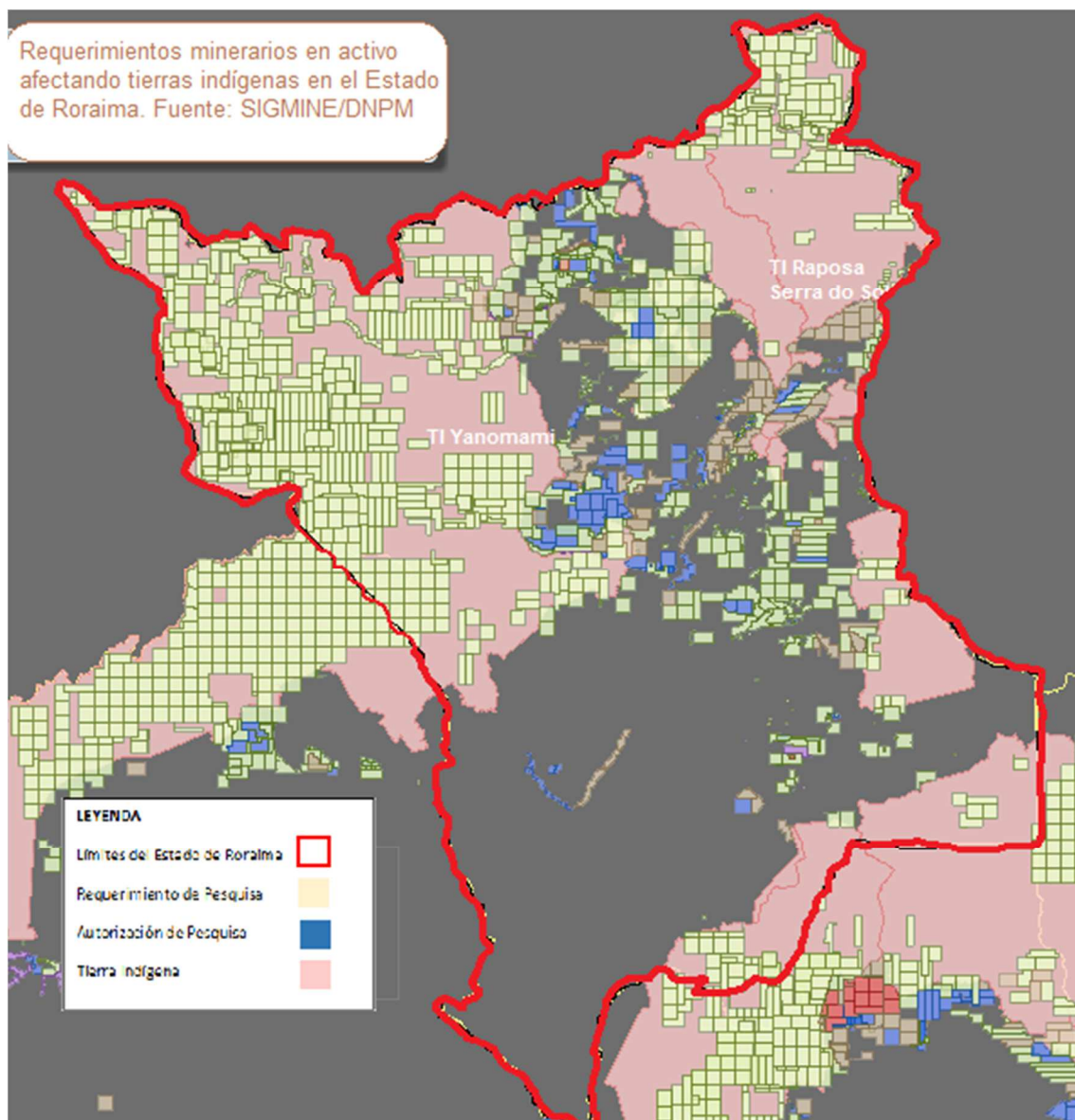
²⁸⁷ “No caso dos atores empreendedores, muitas das vezes estamos falando de pessoas. Podem ser ex garimpeiros que decidem investir em uma jazida. Entra como pessoa física mas deve se tornar no processo uma pessoa jurídica” (Entrevista del autor con representante del sector minero en Roraima).

²⁸⁸ Informaciones recogidas en: I Seminario de Minería e Hidroeléctricas en Tierras Indígenas, Tabalascada – Roraima, mayo 2014 (notas de campo del autor); noticias en <<https://pib.socioambiental.org/es/noticias?id=118176>>.

requerentes mantiveram os processos, e o próprio DNPM continuou recebendo e protocolando, na expectativa de garantia de direito quando a exploração fosse regulamentada. Eu já aconselhei a algumas empresas a não entrar com esse tipo de requerimentos, e de fato me neguei em um caso. Todos esses requerimentos vão desaparecer. Ajudam a especular, mas não têm nenhuma expectativa de direito sobre eles”²⁸⁹.

Nos proponemos ahora analizar en detalle los requerimientos que se han protocolado en el período 1965-2014 para la realización de pesquisas mineras en Roraima y específicamente en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Nos interesa saber el perfil de los actores que presentan estos protocolos y su comportamiento a lo largo de todo el proceso de retomada de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Para ello, hemos recogido y analizado los datos oficiales del Registro Minero del DNPM y de su Sistema de Informaciones Geográficas de Minería-SIGMINE.

²⁸⁹ Entrevista del autor con representante del sector minero en Roraima.



Mapa 16. Requerimientos mineros en activo afectando tierras indígenas en el Estado de Roraima.
Fuente: SIGMINE/DNPM

8.4.1. Cincuenta años de avance minero sobre Roraima

El Sistema de Registro o Cadastro Minero del DNPM es público y a través de él se puede acceder a todos los pedidos ingresados en cualquier Estado del país. Las informaciones que este Sistema ofrece varían desde la fase en la que se encuentra un determinado proceso, los pasos dados hasta el momento, el titular del pedido, las características geotécnicas del requerimiento o su localización exacta. Puedes combinar estas informaciones con una serie de filtros como: unidad estadual, fecha de inicio del procedimiento, substancia pretendida, finalidad y estado activo o inactivo. Con estas coordenadas, es posible realizar un levantamiento de los requerimientos iniciados en un determinado lugar y en una determinada fecha. Es lo que nosotros hemos hecho para

el período enero de 1965 a diciembre de 2014 en el Estado de Roraima. Y son los resultados que ahora pretendemos analizar.

En este período de los últimos 50 años, el DNPM ha registrado 5.271 requerimientos para pesquisa y exploración/explotación minera en el actual Estado de Roraima. El número de requerimientos ha ido creciendo permanentemente, destacando la primera mitad de la década de 80 y la segunda mitad de la década de 90 como dos momentos particularmente intensos.

De los 5.271 procesos abiertos en el DNPM en estos últimos 50 años, solamente 1235 procesos se mantienen activos y la mayor parte de ellos afectan tierras indígenas ya demarcadas y homologadas. Este número de procesos en activo, independientemente de que la perspectiva de derecho se materialice o no, configura un dato que es funcional al conjunto del mercado minero: sirven a los inversores como indicadores de áreas susceptibles de interés. Si la actividad minera fuese regulada en los términos del Proyecto de Ley 1610/96 y otras iniciativas parlamentarias actuales, es lícito pensar que el número de requerimientos podría multiplicarse exponencialmente.

En entrevista con un empresario minero y abogado para asuntos mineros, nos confirmaba que, en los términos normativos actuales, la expansión de la minería formal en Roraima está muy limitada y principalmente relacionada con la Construcción Civil, un sector que tiene sus propias limitaciones. Durante la entrevista fueron contemplados dos posibles escenarios: a) aprobación del nuevo Código Minero y no aprobación del PL 1610 de minería en tierras indígenas; b) aprobación de ambos textos normativos. Preguntado sobre lo que se podría esperar en uno u otro escenario, las respuestas fueron las siguientes:

- a) En el escenario A, el sector minero tendría una expansión muy lenta en Roraima, orientada fundamentalmente a la extracción de oro y de tierras raras.
- b) En el escenario B, con las tierras indígenas disponibles para la actividad minera, el sector tendría un crecimiento muy grande. Principalmente atraería a grandes empresas, que disponen del capital para acceder a esas áreas. Seguramente, empresas canadienses, francesas y chinas estarían interesadas en trabajar en Roraima “e já têm informações e algumas parcerias”.

A continuación, haremos un primer análisis de los datos en función de los períodos temporales de 5 años destacados en los gráficos anteriores.

Gráfico 17. Evolución de los requerimientos mineros en Roraima, 1965-2014. Fuente: DNPM.
Elaboración por el autor

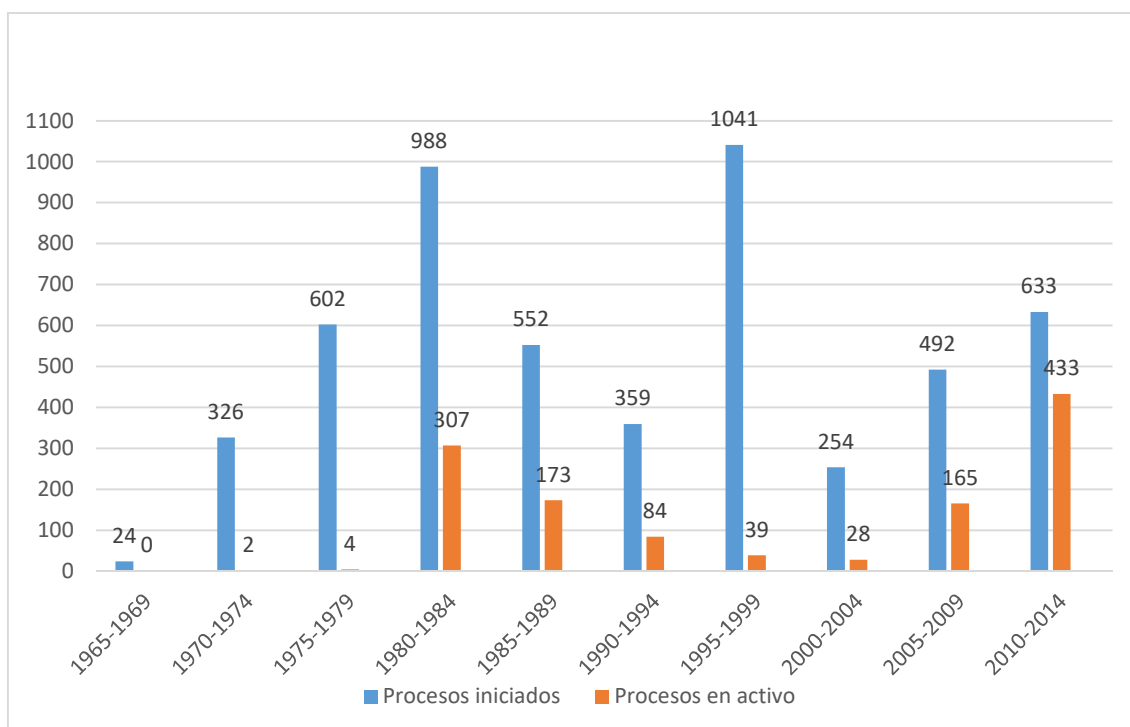
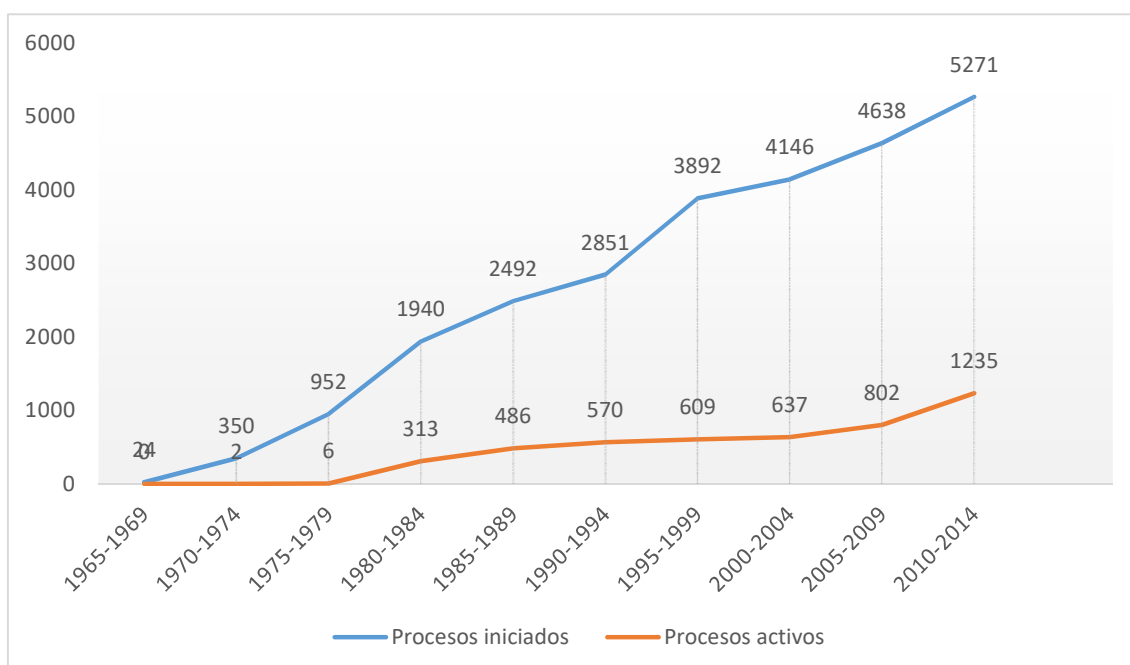


Gráfico 18. Crecimiento acumulado del número de requerimientos mineros en Roraima 1965-2014.
Fuente: DNPM. Elaboración por el autor.



Período 1965-1969

Este período histórico coincide con los primeros años de la Dictadura militar iniciada en abril de 1964. Se trata del período en el cual el Gobierno Militar aprobó el Código Minero vigente y sentó las bases del proyecto desarrollista que avanzará posteriormente sobre la región amazónica. Además creó la FUNAI como órgano indigenista del Poder Ejecutivo. En este período aún no se disponía de datos y registros precisos sobre la riqueza mineral del subsuelo amazónico.

Según el DNPM, en este quinquenio se registraron 24 requerimientos de pesquisa y labra minera en el entonces Territorio del Rio Branco. Todos estos procesos ya están inactivos. Nos interesa, en todo caso, el tipo de minerales que se buscaba explotar en la región del Rio Branco ya en aquella época. Al oro y el diamante, cuya frecuencia ya era sobradamente conocida en la región, interesaba a los responsables por los pedidos de pesquisa la frecuencia de columbita²⁹⁰ y tántalo²⁹¹.

Período 1970-1974

En esta primera mitad de la década de 70, el Gobierno militar ya había emprendido la política desarrollista sobre la Amazonia. Además, en 1973 se aprueba el Estatuto do Índio, vigente hasta nuestros días. En el contexto más doméstico del Rio Branco, destaca el inicio de las obras de la BR-174 que comunicaría Manaus con la frontera norte con Venezuela y que significó la vía de acceso para uno de los mayores flujos migratorios que Roraima conoció.

En estos cinco años, el número de requerimientos presentados ante el DNPM ya llegó a 326 procesos. De ellos, 157 procesos (48,15% del total) se van a registrar sólo en 1974 y 144 procesos (44,17% del total) hacen referencia a intereses mineros en el municipio de Caracarái²⁹². Los intereses mineros por parte de grupos empresariales o de personas físicas se concentran en este primer momento, por tanto, en la mitad sur del Estado de Roraima.

De los 326 procesos que se registraron en estos cinco años, actualmente sólo encontramos dos en activo. Ambos pertenecen a la Compañía NorPel – Petrolização do Norte y su interés está en la explotación de Titanio en la confluencia entre el río Parima y el río Surucucus, en la Tierra Indígena Yanomami.

La cartera de minerales buscados en Roraima con intención de explotación se diversificó mucho en estos cinco años. A los ya procurados anteriormente – oro, diamante,

²⁹⁰ Columbita, uno de los principales minerales de Niobio y uno de los dos componentes básicos, junto a la Tantalita, del llamado “oro azul” o coltán.

²⁹¹ Muy requerido en la industria siderúrgica por sus capacidades de evitar la oxidación del acero y mejorar sus características mecánicas. Sus características lo convierten en un material estratégico para el uso de dispositivos electrónicos de reducido tamaño.

²⁹² En esta época solamente existían dos municipios en Roraima: Boa Vista, que ocupaba toda la región central y norte del Estado; y Caracarái que ocupaba la mitad sur.

columbita y tántalo – se fueron añadiendo otros minerales como el wolframio²⁹³, molibdeno, niobio²⁹⁴, titanio, manganeso, tantalita²⁹⁵, cobre y la casiterita²⁹⁶, que finalmente sería encontrada en 1975 por un grupo de garimpeiros en el territorio Yanomami.

En este período también aparece ya un número significativo de empresas de minería venidas de diversos lugares del país. Algunas de ellas, como Mineração Jaraucu, Mineração Itamaracá, Mineração Rio Marmelos o Mineração Tapajós mantienen aún, en nuestros días, intereses mineros en Roraima y en toda la región amazónica.

Período 1975-1979

La segunda mitad de la década de 70 fue muy intensa en Roraima. Las obras de la carretera BR-174 y la Perimetral Norte-210 concluyeron. Roraima había recibido millares de personas procedentes del Nordeste del país y se iniciaban algunos procesos de asentamiento rural en los municipios del sur del Estado. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas, principalmente las del norte de Roraima, en los territorios de la actual Raposa Serra do Sol, comenzaban a dar pasos en firme y reunir decenas de Tuxauas en torno a la reivindicación territorial. La apertura de la BR-210 y las incursiones del garimpo sobre el territorio yanomami estaban sembrando aquel espacio de enfermedades y de contaminación de fuentes hídricas, causando la muerte de centenares de yanomami.

En estos cinco años, el número de requerimientos registrados en el DNPM dobló al quinquenio anterior y se disparó hasta 602 procesos abiertos. Prácticamente, dos de cada tres procesos abiertos en la década de 70 lo hicieron en la segunda mitad. Los años de 1975 y 1976 fueron los de mayor número de requerimientos protocolados.

De los 602 procesos iniciados en estos cinco años, hoy solamente cuatro de ellos están en activo. Los cuatro se refieren a intereses en la explotación de oro y de casiterita en la Tierra Indígena Yanomami.

Un análisis más detallado de los titulares de los requerimientos nos permite ver que, especialmente a partir de 1977, entra en juego un nuevo perfil empresarial. Actores como la Compañía de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, Jatapu, Mineração Santarém, la Companhia Vale do Rio Doce o la empresa Andrade Gutiérrez entran en la escena. La CPRM es un órgano del Gobierno Federal, dependiente del Ministerio de Minas y Energía y responsable por el levantamiento de la información de ocurrencia mineral en el subsuelo nacional. La Companhia Vale do Rio Doce era una empresa

²⁹³ Sinónimo del Tungsteno, se aplica en la fabricación de aceros de alta dureza o en filamentos de lámparas incandescentes. Es una sustancia estratégica debido a su escasez.

²⁹⁴ Metal raro, se encuentra en las llamadas tierras raras.

²⁹⁵ Es una mena de los minerales raros tantalio y niobio.

²⁹⁶ Es la principal fuente de estaño y el estaño es utilizado en múltiples aplicaciones; entre ellas, todo el menaje de acondicionamiento y conserva de alimentos.

pública en aquel momento y posteriormente fue privatizada en una convulsa operación a finales de la década de 90. Actualmente, es una de las mayores empresas mineras transnacionales del mundo, con operaciones en decenas de países. Por último, Andrade Gutiérrez es una de las mayores empresas de capital brasileño. Ha estado vinculada siempre a los sectores de la construcción de infraestructura civil, la minería y la generación de energía. Su participación en el proceso desarrollista del gobierno militar en la década de 70 fue reactivada recientemente en el proceso desarrollista de los gobiernos de la década de 2000, vinculando Andrade Gutiérrez a las mayores obras de infraestructura de los últimos 15 años.

A la cartera de minerales ya consolidada, los nuevos requerimientos añadían interés por otro tipo de minerales como la ilmenita, estaño²⁹⁷, cobalto o el hierro. En todo caso, había un claro foco de atracción por la presencia de casiterita en el territorio Yanomami.

Período 1980-1985

En este período de cadencia del régimen militar, como ya hemos analizado, una serie de medidas legislativas intentaban establecer las condiciones para la explotación masiva de minerales en los territorios indígenas. A este período pertenece también el Proyecto de Ley del Senador roraimense Mozarildo Cavalcanti para la explotación de la casiterita en el territorio Yanomami.

En Raposa Serra do Sol, mientras las comunidades definían el tamaño del área reivindicada, se asistía a una de los primeros desplazamientos masivos de garimpeiros hacia la región de los ríos Quinô, Cotingo y Maú. En 1982 se había creado el municipio de Normandía, en la frontera entre Brasil y Guiana, afectando todo el territorio de Raposa Serra do Sol.

En esta primera mitad de la década de 80 se van a registrar en el DNPM 988 nuevos requerimientos de pesquisa y labra en Roraima, de los cuales hoy encontramos 307 procesos aún en activo.

Debemos destacar que 847 del total de los requerimientos (86%) de estos cinco años se van a registrar en los años 1983 y, sobre todo, 1984. Entendemos que es posible vincular este aumento expresivo de requerimientos a la aprobación del Decreto 88.985/83 que pretendía regular la explotación minera en territorios indígenas del país.

La mayor parte de los requerimientos se localizan en los municipios de Boa Vista, Caracaraí y Alto Alegre, que representaban en ese momento la práctica totalidad de la mitad occidental de Roraima, coincidente en buena parte con el territorio Yanomami.

²⁹⁷ La multifuncionalidad del estaño y su capacidad de aleación con otros metales, como hierro, cobre o plomo, lo convierten en una sustancia muy requerida. También es utilizado para las soldaduras blandas en dispositivos móviles y, en general, circuitos electrónicos.

En la región de Normandía y Bonfim, nuevos municipios situados en la región nordeste de Roraima, encontramos más de 90 requerimientos

En este período, se incorpora la Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, órgano vinculado al gobierno estadual hasta nuestros días y que nació como instrumento público para el desarrollo territorial en Roraima²⁹⁸. Entre 1980 y 1985, CODESAIMA será responsable por 83 requerimientos (8,4% del total) de los cuales 29 aún están en activo. Entre ellos, el pedido de pesquisa y labra de tántalo en la confluencia del Arroyo Cadecuni con el río Awaris, en la Tierra indígena Yanomami²⁹⁹ y otros pedidos sobre presencia de columbita en el mismo territorio Yanomami.

Otra empresa que se incorpora en este período a la disputa por la autorización para la actividad minera es la Mineração Monte Roraima, con sede actual en Manaus y una carta de minerales de interés muy diversificada. Es la responsable por 31 procesos que aún están en activo.

Los principales minerales sobre los que se hicieron los requerimientos continúan siendo el oro, wolframio, columbita, niobio, tántalo y casiterita. En cuanto a la casiterita, uno de los minerales que más interés despertó en aquella época, se iniciaron 115 requerimientos en este período, de los cuales 39 aún permanecen en activo.

Además, otros muchos minerales engrosaron la cartera de intereses en Roraima. A los ya referidos en los quinquenios anteriores, se sumaban la salgema, plata, mineral de hafnio, litio, fosfato o monocito.

En estos primeros cinco años de la década de 80 podemos llamar la atención a algunos elementos de análisis:

- El área de interés minero se extiende hacia la mitad norte de Roraima, con mayor concentración siempre en el lado occidental, territorio del pueblo Yanomami.
- Hay una mayor intervención del poder público regional en la disputa por el control de la actividad minera. La presencia de CODESAIMA o la actuación en el Senado de Mozarildo Cavalcanti son algunas de las señales que se observan.

Período 1985-1989

La segunda mitad de la década de 80 va a ser especialmente intensa. De un lado, la movilización indígena iniciada en la década de 70 va a dar un paso decisivo con la constitución del Consejo Indígena del Territorio de Roraima –CINTER, antesala del actual

²⁹⁸ En 1979, Roraima aún era territorio Federal, por lo cual los actos administrativos eran de responsabilidad del Gobierno Federal. La entidad CODESAIMA es creada por la Ley 6693/79 y se le concede la competencia, entre otras, de elaborar y ejecutar proyectos relativos a la colonización, minería, agropecuaria y agroindustria (art. 2º, I). Se convierte en uno de los principales mecanismos en manos del Gobierno local.

²⁹⁹ En aquel tiempo, el responsable por la formulación del requerimiento a nombre de CODESAIMA era Fernando López, actual Superintendente del DNPM del Estado de Amazonas.

Consejo Indígena de Roraima. Además, los líderes indígenas de Roraima van a jugar un papel fundamental en la formación de la Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, con lo cual comienzan a participar muy activamente en una escala regional y nacional.

Estos cinco años van a coincidir también con la ocupación maciza de los territorios Yanomami y Raposa Serra do Sol por parte de miles de garimpeiros, con todos los impactos sociales y ambientales que ya han sido destacados.

En 1988 se aprueba la nueva Constitución Federal del país y con ella Roraima pasa a ser nuevo Estado de la Federación, con un nuevo Gobierno Regional y con todas las competencias constitucionales. En ese sentido, destaca en este quinquenio claramente la irrupción de la figura de Romero Jucá, primero como nuevo Presidente de la FUNAI y después como primer Gobernador del Estado; en ambos casos nombrado por el Presidente de la República en la época, José Sarney.

En este escenario, se protocolaron en el DNPM 552 nuevos procesos mineros, de los cuales 173 se mantienen en activo a día de hoy. Entre 1986 y 1987 se protocoló el 80% de los requerimientos que se mantienen en activo dentro de Raposa Serra do Sol en nuestros días.

La cartera de minerales requeridas continúa adensándose, llegando a una cartera básica de cerca de 30 sustancias diferentes.

Período 1990-1994

Las incipientes instituciones del Estado de Roraima, Gobierno Estadual y Asamblea Legislativa, asumen un claro papel de oposición a la eventual homologación de los territorios indígenas. Promueven un proyecto desarrollista propio que debía pasar, en sus planes, por la legalización del garimpo y la regulación de la minería empresarial, la construcción de la hidroeléctrica de Cotingo y la creación de nuevos municipios.

Mientras tanto, la FUNAI había concluido un nuevo estudio sobre Raposa Serra do Sol que fijó los límites territoriales actuales. En ese mismo período, la TI Yanomami es homologada en 1992 por el Presidente Collor de Melo, lo que no significó la retirada de los campamentos garimpeiros de la región. Un año más tarde, en 1993, todo el mundo tendrá conocimiento de la masacre de un grupo de Yanomami en Haxumi a manos de fazendeiros.

En este período, se registran en el DNPM 359 nuevos procesos mineros para Roraima, de los cuales 84 se mantienen activos hasta hoy. Cerca de la mitad de los nuevos requerimientos en este período se concentran en la pesquisa de casiterita y oro. En este periodo destacan requerimientos solicitados por personas físicas, algunos de los cuales se mantienen vigentes en Raposa Serra do Sol, a nombre de personas como Kurt Itamar Kettenhuber o Antonio Mauricio Castelo Branco.

Período 1995-1999

Período determinante en el histórico de Raposa Serra do Sol. Es en 1998 cuando el Ministerio de la Justicia publica la Demarcación del territorio, después del contencioso presentado por las instituciones roraimenses y de la exclusión del municipio de Uiramutã de las condiciones del territorio indígena. Justo dos años antes, en 1996, el entonces Senador Romero Jucá presentó el Proyecto de Ley 1610/96 que pretende regular la actividad minera en los territorios indígenas.

Es uno de los momentos de mayor afluencia de requerimientos mineros en Roraima, un total de 1041 procesos nuevos, de los cuales 39 se mantienen en activo. Es posible vincular este aumento de pedidos con la disputa política y jurídica entablada por el Estado de Roraima contra las comunidades indígenas y contra la Unión, así como con el nuevo proyecto de ley de Romero Jucá. Es decir, podemos intuir que el escenario fue percibido como oportunidad por algunos actores mineros o que se procedió a un incentivo disimulado por parte de la élite política de Roraima para crear nuevos hechos consumados que interfiriesen en el ya complejo proceso de reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas.

Por otro lado, el 83% de los requerimientos de esta época se relacionan con la pesquisa de oro y los requerimientos están más concentrados que en otros períodos en manos de pocos actores. El hecho de que solamente el 3,8% de los requerimientos de este quinquenio se mantengan activos veinte años después nos puede indicar que hubo un pequeño grupo de empresas que calentaron el ambiente. Uno de estos ejemplos es la Companhia Vale do Rio Doce – en pleno proceso de privatización en esa época – que realizó casi 200 pedidos de pesquisa de oro en el municipio de Bonfim de los cuales ninguno está activo en nuestros días. La empresa Ouro Brasil Mineração entró con 445 pedidos de pesquisa de oro en el sur del Estado y ninguno de esos procesos queda en pie.

Período 2000-2004

Estamos en el período del cambio de gobierno con la llegada en enero de 2003 del Partido de los Trabajadores y las expectativas que existían, de uno y otro lado, de que la homologación de Raposa Serra do Sol sería inminente y la cuestión indígena ganaría seguridad.

En este período hubo 254 nuevos procesos protocolados en el DNPM, de los cuales 28 quedan en activo. Destaca en este período la incorporación de pedidos de pesquisa de agua mineral, con empresas como Bebidas Monte Roraima. Otras sustancias como la arcilla, el granito, la arena o la gravilla, más próximos a la construcción civil incluso local, también ganan un espacio. En lo concerniente a Raposa Serra do Sol, la empresa Mineração Florália Ltda. va a entrar con diversos procesos dentro de este territorio que aún se mantienen en vigor.

Período 2005-2009

Este quinquenio comenzó con la Homologación de Raposa Serra do Sol en abril de 2005 y concluyó con su confirmación por parte del Supremo Tribunal Federal en febrero de 2009. Un período de intensa conflictividad jurídica y política. Al mismo tiempo, un periodo en el que los requerimientos sobre Raposa Serra do Sol comienzan a disminuir, señal de que el escenario, siendo convulso, comienza a decantarse para las comunidades indígenas y los inversores particulares son conscientes.

En Roraima, 492 nuevos procesos se protocolan en estos cinco años, de los cuales 165 están activos. Empresas como Rio Grande Mineração S.A., Joari Sociedade de Mineração Ltda. o SGM entran en la escena, aunque destaca el aumento de personas físicas que son titulares de nuevos procesos.

El 75% de los nuevos pedidos se concentran en seis sustancias minerales: ilmenita³⁰⁰, mineral de titanio, mineral de oro, mineral de cobre, oro y cobre. Casi el 20% se refieren a pesquisas sobre granito y arena.

Período 2010-2014

Último período considerado en nuestro análisis y primer período sin la conflictividad de la disputa territorial en Raposa Serra do Sol. Aparentemente concluido, el proceso ha reconocido el derecho de las comunidades indígenas a su territorio y al uso exclusivo de los bienes naturales, si bien con algunas condicionantes.

En este período encontramos 633 nuevos procesos mineros en Roraima, de los cuales 433 permanecen en activo. Empresas como SGM se van haciendo un hueco importante en el conjunto del sector y aparecen también algunos requerimientos de labra garimpeira – principalmente relacionada con oro - cuyo titular es una persona física o una cooperativa.

8.4.2. Requerimientos mineros en Raposa Serra do Sol

Para el análisis de los procesos mineros actualmente activos dentro de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol hemos analizado los datos volcados en la herramienta del Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, del Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Los motivos que nos han llevado a esta decisión metodológica han sido dos:

- En la herramienta SIGMINE aparecen exclusivamente los procesos que están en vigor, que es lo que nos interesa ahora;
- En la herramienta del Registro Minero los pedidos se protocolan con referencia al Municipio donde se encuentra el área pretendida. Como en el caso de Raposa Serra do Sol los municipios de Uiramutã y Pacaraima solo fueron creados en la década de

³⁰⁰ Óxido de titanio y hierro.

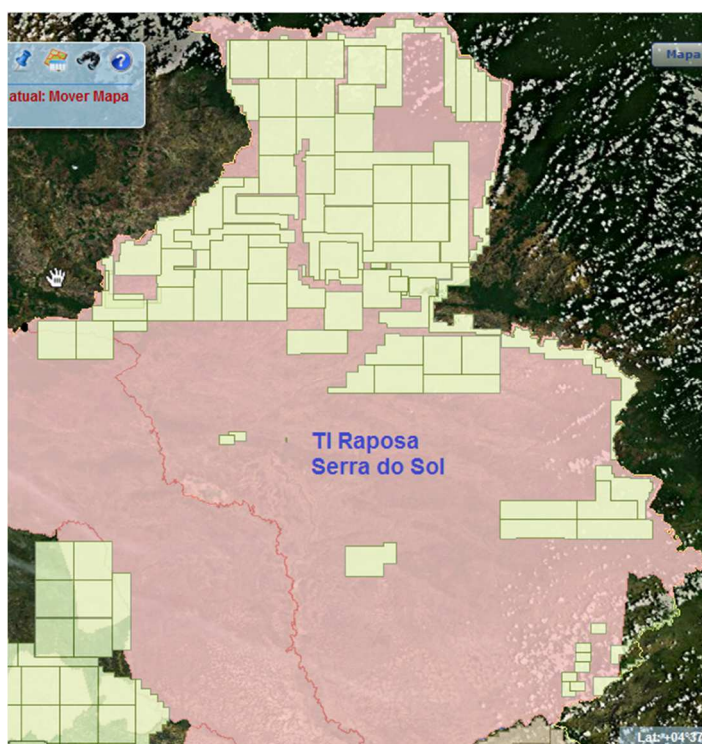
90, los procesos protocolados con fecha anterior hacen referencia a los municipios de Boa Vista o Normandia. Esto suponía un riesgo de precisión en la información, pues nos obligaría a rastrear, cartográficamente, los miles de procesos abiertos en Boa Vista y Normandia para averiguar cuáles de ellos se situaban o no en la actual Raposa Serra do Sol. La herramienta SIGMINE, si bien requiere un trabajo mucho más artesanal, también es mucho más precisa para nuestro interés en este momento de la investigación.

Según los datos consultados el día 1 de julio de 2016, existen actualmente 100 procesos activos dentro del territorio indígena Raposa Serra do Sol, todos ellos en la fase de Requerimiento de la Autorización de Pesquisa. Un análisis detallado de estos procesos nos permite identificar algunos elementos de interés. (Ver Anexo I).

Un primer elemento es que el 80% de los procesos activos se localizan en la región norte de Raposa Serra do Sol, coincidente con la etno-región de Serras y con el municipio de Uiramutã. Se trata de la región más poblada de Raposa Serra do Sol, con un total de 95 aldeas y 11.804 personas según los datos censales de 2014. La región limita, a través del río Maú [Ireng] con las regiones 2 y 8 de la Guiana Inglesa, una de las áreas más castigadas del país vecino por causa de la minería ilegal y los proyectos de gobierno.

Fue esta zona donde el garimpo operó con mayor intensidad desde la década de 1920 y hasta la década de 1990. En esta región encontramos el curso alto del río Cotingo, el río Quinô y el río Uailén, aparte de la mayor parte del curso del río Maú [Ireng].

La sobreposición del distrito municipal de Uiramutã sobre esta zona le puede conceder un papel de destaque en las negociaciones ante una eventual apertura de la tierra indígena para la actividad minera, lo que lo convertiría en un local políticamente aún más disputado.

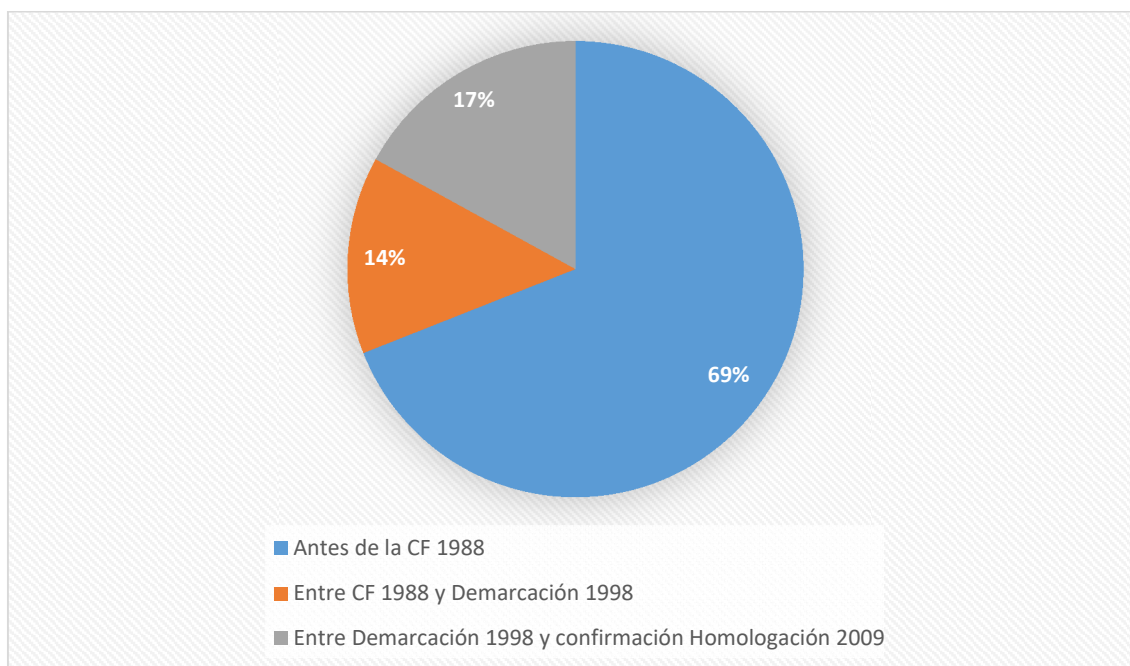


Mapa 17. Localización de requerimientos mineros en la TI Raposa Serra do Sol. Fuente: DNPM.

Un segundo elemento de análisis es que el volumen total del área requerida, si sumamos los 100 procesos activos, asciende a 652.419 hectáreas, lo que representa un 39,47% del conjunto de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. Según información que recogimos de un empresario del sector minero, el tamaño del área requerida no necesariamente debe coincidir con la eventual explotación, sino que normalmente se establece un tamaño más o menos estandarizado para garantizar el hallazgo del yacimiento buscado. Aun así, podemos afirmar que, de concederse estos requerimientos, el 39,47% del territorio de Raposa Serra do Sol estaría bajo control de las empresas mineras ejecutoras de la actividad de pesquisa minera. Si aislásemos la etno-región de Serras, al norte, podríamos afirmar que entre un 75% y un 80% de la zona estaría pretendida por agentes externos.

Un tercer elemento de análisis hace referencia a que el 69% de los procesos actualmente activos dentro de Raposa Serra do Sol se iniciaron antes de la promulgación de la Constitución Federal de 1988, sobre todo en el período 1983-1987. Después, se observa un salto importante hasta 1993. A priori, se podría pensar que la madurez del movimiento indígena en la época y la promulgación de la Constitución Federal, con la perspectiva de homologar los territorios indígenas en el plazo inicial de 5 años, habría desestimulado nuevos requerimientos de autorización para pesquisa minera. Sin embargo, es cierto también que durante estos cinco años, la actividad garimpeira continuó y se acentuó, pudiendo convivir con una cierta precaución del sector empresarial.

Gráfico 19. Distribución por fecha de protocolo de los requerimientos mineros actualmente en activo dentro de la TI Raposa Serra do Sol. Fuente: DNPM. Elaboración por el autor.



El 83% de los requerimientos actualmente activos en Raposa Serra do Sol tienen como titular una empresa. Un grupo de 15 empresas se dividen la titularidad de todos estos procesos abiertos, destacando una cierta concentración entre algunas de ellas. Ahora bien, un análisis más exhaustivo de esta información nos deparó datos relevantes. Detengámonos en las principales empresas responsables por los pedidos dentro de Raposa Serra do Sol.

Destaca por ejemplo la firma *Mineração Serra Morena Ltda.* como titular de 14 procesos dentro de Raposa Serra do Sol. Todos estos procesos fueron protocolados en 1983. El interés de Mineração Serra Morena se concentró en minerales como el rutilo, diamante industrial, platina o columbita. El área pretendida por esta empresa llega a 113.690,33 hectáreas, condensadas de modo particular en la zona más próxima al Monte Roraima, siguiendo el curso alto del río Cotingo. Esta empresa posee la titularidad, además, de otros 61 procesos activos en todo el Estado de Roraima.

Sin embargo, según los datos de inscripción del Ministerio de Hacienda, esta empresa causó baja en el Registro Nacional de Personas Jurídicas el 17 de enero de 1998, acusando extinción por encontrarse en liquidación voluntaria. Actualmente, con el mismo nombre empresarial actúa una nueva firma creada en 2009, con un nuevo CNPJ y que es titular de cuatro Requerimientos de Autorización de Pesquisa en el Estado de Mato Grosso; pero no tiene ningún proceso abierto directamente en Roraima. Esto nos haría suponer que, automáticamente, los 14 procesos activos a nombre de la empresa anterior y dentro de Raposa Serra do Sol podrían ver alterada su validez³⁰¹, o que al menos, en una eventual regulación de la actividad, su procedimiento se suspenda; obviamente, el DNPM no podría emitir una Autorización de Pesquisa a una persona jurídica no existente.

También destaca la empresa *Mineração Florália Ltda.*, una empresa con sede en Rio de Janeiro y que cuenta con la participación de dos socios: Frank de Luca y Eco Amazon Resources Ltda. Mineração Florália aparece como titular de 13 requerimientos de autorización de pesquisa dentro de Raposa Serra do Sol, todos ellos relacionados con el oro. Suman un área total de 103.152,81 hectáreas, localizadas en su mayoría en el margen norte del río Quinô hasta la frontera con Venezuela. Lo destacable en este caso es que esta empresa carioca solamente es titular de 24 procesos mineros en todo Brasil, de los cuales 21 se localizan en Roraima. Es decir, se trataría de una empresa reciente cuyo foco de negocio quiere concentrarlo en Roraima – al otro lado del país – y particularmente en Raposa Serra do Sol.

La empresa *Mirage. Mineração. Indústria e Comércio Ltda.* es la titular de 11 requerimientos de autorización de pesquisa dentro de Raposa Serra do Sol. Su interés

³⁰¹ Sobre regulación del Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: Instrução normativa RFB nº 1634, de 06 de maio de 2016.

se centra en el cobre, la platina y, en uno de los casos, niobio. El total del área requerida por la empresa asciende a 71.930,53 hectáreas. Buena parte de estos requerimientos se localizan en el extremo nordeste de Raposa Serra do Sol, territorio de los ingarikó.

La empresa Mirage comenzó a operar en 1985. Al año siguiente, en 1986 realizó el protocolo de todos los requerimientos que mantiene activos en Raposa Serra do Sol. Mirage es responsable por 48 requerimientos en todo el país, 22 de ellos en Roraima. De este total de operaciones solo los 14 procesos abiertos en Raposa Serra do Sol están en activo. Sin embargo, y según los datos del Ministerio de Hacienda de Brasil, esta empresa también causó baja del Registro Nacional de Personas Jurídicas en febrero de 2015, por motivos de “omissão contumaz”, lo que hace imaginar que hacía bastante tiempo que estaba inoperativa. Todos estos procesos, teóricamente, al igual que en el caso anteriormente descrito, deberían ser considerados nulos.

Otra de las empresas destacadas en Raposa Serra do Sol es *Cabixis Brasileira de Mineração*, que inició en 1986 los 10 requerimientos que aún mantiene activos. Los intereses de Cabixis, aunque a nivel nacional destaca por su trabajo con bauxita y casiterita, en Raposa Serra do Sol se centran en el níquel, el titanio y un proceso con wolframita. Pretende pesquisar un área de 98.034,23 hectáreas. Algunos de sus requerimientos se localizan en la región del río Uailã, cerca de la frontera con la Guiana. Cabixis es una empresa de São Paulo con subsedes en Rondonia y llegó a ser titular de 150 requerimientos mineros en todo el país, con una atención particular al Estado de Roraima y el municipio amazonense de Presidente Figueiredo³⁰². Sin embargo, una vez más se trata de una empresa que ha sido dada de baja en el Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda del gobierno brasileño; de esta vez fue en diciembre de 2008 al ser declarada inapta.

Por último, destaca la empresa *Saga Mineração Ltda.*, titular de 9 requerimientos de autorización de pesquisa de manganeso e hierro dentro de Raposa Serra do Sol en un área total de 26.241,43 hectáreas. Todos los pedidos se protocolaron en 1987. Sus requerimientos se sitúan en las inmediaciones del curso medio del Río Maú [Ireng], en una zona anteriormente ocupada de modo macizo por el garimpo y donde encontramos las comunidades de Maturuca o Mutum.

Saga Mineração Ltda. es titular de 112 procesos mineros en todo el país, de los cuales solamente los 9 procesos de Raposa Serra do Sol se mantienen activos. Al igual que las empresas anteriores, Saga Mineração fue declarada inapta y causó baja en el Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda en diciembre de 2008.

En definitiva, en al menos 44 de los 100 procesos en activo dentro de Raposa Serra do Sol, la persona jurídica titular del requerimiento ya no existe, con lo cual se trataría,

³⁰² Presidente Figueiredo es el municipio situado al norte del Estado de Amazonas, haciendo frontera con el Estado de Roraima. En el distrito de este municipio se encuentra la Hidroeléctrica de Balbina, la Mina Pitinga y parte del territorio indígena de los Waimiri Atroari, que fue atravesado por la BR-174.

aparentemente, de procedimientos de imposible continuidad en una eventual regulación de la actividad minera. Al menos en estos casos, si había una “perspectiva de derecho”, se extinguió por propia descomposición.

A esto debemos sumarle aquellos procesos cuyos titulares son personas físicas y que ascienden a 17 requerimientos. Como ya hemos destacado anteriormente, estos titulares, en caso de recibir una hipotética Autorización de Pesquisa, no podrían continuar con el pedido de Concesión de Labra, procediendo a constituirse en persona jurídica o ceder los derechos adquiridos a alguna empresa. Esto según las normas del Código Minero vigente; si se aprobase el nuevo Código, solamente personas jurídicas podrían participar de los procesos de licitación.

La interpretación de estos datos puede sugerirnos diversas hipótesis. En todo caso, la más objetiva es que, ante una eventual regulación de la actividad minera, en Raposa Serra do Sol el escenario que se generaría sería muy diferente al que actualmente informan los datos del DNPM. En los términos en que se formulan tanto el nuevo Código Minero como el PL 1610/96, se generarían las condiciones para que el Estado ofreciese en licitación una buena parte de la región norte de la tierra indígena, apetecible tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas.

8.5. Posición de las organizaciones indígenas sobre el avance de la minería en sus territorios

Ya hemos descrito como en la TI Raposa Serra do Sol se desencadenó un proceso organizativo de las comunidades indígenas que contribuyó, significativamente, a la retirada de los ocupantes de fazendas en el interior de la tierra indígena y la paralización de las actividades de garimpo que se diseminaron por la región principalmente a partir de la década de 80. Esta paralización de las actividades de garimpo implicó, en numerosas ocasiones, la participación activa de las comunidades, impidiendo el acceso al garimpo o la entrada de víveres o desalojando campamentos instalados. Ese mismo proceso frenó el proyecto de instalación de la Hidroeléctrica del río Cotingo, cuya principal intención era poder ofrecer energía a eventuales actividades mineras en la región.

La mayor parte de las *corruptelas* que surgieron en la TI Raposa Serra do Sol durante el período de ocupación fazendeira y minera del territorio, a lo largo del siglo XX, han sido retomadas y ocupadas por las comunidades indígenas parcial o íntegramente. La excepción más significativa la constituye el núcleo poblacional que hoy es la sede del municipio de Uimarutã.

Estas acciones, concebidas en el proceso de retomada de la tierra desde los años 70, ya develan la posición que las comunidades indígenas mantuvieron en las últimas cuatro décadas contra la presencia de la minería ilegal en su territorio. En ninguno de los planes

comunitarios o proyectos de trabajo colectivo el garimpo ha aparecido como una de las principales alternativas para las comunidades, incluso pudiendo ejercerlo de manera formal y bajo determinadas condiciones.

Esta oposición a la minería ilegal del garimpo se reitera cuando se habla en términos de regulación de la actividad y entrada de empresas mineras dentro del territorio. Tratándose siempre de una *eventual* posibilidad, los posicionamientos se construyen más en las narrativas políticas que las comunidades y organizaciones indígenas desarrollan cuando son preguntados por esta cuestión.

A lo largo de las últimas décadas, comunidades indígenas y organizaciones indigenistas han realizado un esfuerzo permanente e intenso en la formación de dirigentes comunitarios, jóvenes y comunidades en general respecto a sus derechos, a los mecanismos de relación con el Estado y a las principales amenazas que siempre pairaron sobre la tierra indígena. La formación y capacitación comunitaria sobre promoción, defensa y exigibilidad de derechos fue una de las principales y más exitosas estrategias del movimiento indígena en Roraima. Así lo confirma uno de sus principales dirigentes en la actualidad: “Desde a sua fundação, o CIR tem focado incansavelmente a luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas em Roraima e no Brasil (...) Para isso, diariamente estão sendo feitas várias atividades de formação e informação conjunto sobre a legislação do Brasil com foco nos direitos socioambientais (...) é fundamental a formação e informação para o debate igual sobre temas que o Estado brasileiro sempre coloca como interesse nacional”³⁰³.

En los últimos años, diversos encuentros fueron organizados en Roraima para discutir, específicamente, la cuestión minera en las tierras indígenas. El I Seminario sobre el tema que fue realizado en la comunidad de Tabalascada reunió dirigentes indígenas de Brasil, Venezuela e Guiana. En su Declaración Final, las organizaciones indígenas manifiestan que “os benefícios alegados por quem defende a mineração e as hidrelétricas não são os benefícios que queremos ter. Para nós o que tem importância é a terra, a vida, as florestas, os animais, a cultura, a tranquilidade e nossa forma de vida garantida para nossas futuras gerações”.

Particularmente, en esta declaración final, los dirigentes indígenas elevan una serie de reivindicaciones a cada uno de los tres Estados nacionales que confluyen en esta frontera y a los tres en su conjunto:

- Que el Estado brasileño adopte medidas para rechazar el PL 1610/96, de autoría edil Senador Romero Jucá, que regula la minería en tierras indígenas y no permita la minería y las hidroeléctricas en tierras indígenas en la Amazonia;

³⁰³ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

- Que el Estado venezolano proceda a la demarcación de las tierras indígenas y respete las deliberaciones y propuestas de las organizaciones indígenas que son presentadas en las Mesas de Diálogo;
- Que el Estado de Guiana adhiera al Convenio 169 de la OIT, sumándose al conjunto de países de la comunidad internacional en el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas;
- Que los Estados de Brasil, Guiana y Venezuela respeten y cumplan las obligaciones adquiridas con el Convenio 169 de la OIT, garantizando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho de consulta libre, previa e informada ante cualquier proyecto de minería e hidroeléctricas que se proyecten sobre nuestros territorios.

Para concluir la Declaración, escriben: “Por fim, declaramos que somos contra a Mineração e Hidrelétricas nas terras indígenas da Amazônia”. En el mismo sentido, uno de los actuales dirigentes del movimiento indígena afirmó en la entrevista: “A decisão coletiva é sempre é pela vida de todos e principalmente pela mãe Terra. [O CIR] é contra qualquer tentativa de pesquisa que venha futuramente agredir a vida dentro do território indígena”³⁰⁴.

En el mismo encuentro fue presentada también una Declaración de la Associação Hutukara Yanomami, en la cual afirman estar muy preocupados con aquellas personas que defienden la regulación de la minería empresarial en los territorios indígenas. “(...9 não entendem o que vai ocorrer. A mineração não é como o garimpo, não são pessoas que entram na floresta e degradam apenas algumas regiões. A mineração precisa de estradas para transportar minérios, precisa de grandes áreas para guardar a produção, precisa de locais para alojar os funcionários, fará grandes buracos na terra que não deixarão a nossa floresta voltar a se recuperar. Entendemos como as mineradoras atuam, não pensem que confundimos seu trabalho com os dos garimpos. Conhecemos muito bem a diferença, morremos muitos na época do garimpo ilegal em nossa terra, sabemos as diferenças. (...) Quando os minérios mais valiosos terminarem e as mineradoras forem embora, o que acontecerá com os trabalhadores que forem até a terra indígena?”. La Declaración concluye diciendo: “Nós Yanomami não queremos mineração, não queremos que ela seja feita em nossa terra”³⁰⁵.

A falta de una práctica gubernamental de consulta a las comunidades indígenas, las organizaciones ya van manifestando su posición en los diversos espacios deliberativos que protagonizan. El Convenio 169 de la OIT, al hablar de la consulta establece que los Estados deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados “y en particular a través de sus instituciones representativas”. Como hemos

³⁰⁴ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

³⁰⁵ Hutukara Associação Yanomami/HAY. Nota Pública “Posição da Hutukara sobre a Mineração em Terras Indígenas”, 20/05/2014. Accesible en: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7536>>

descrito en nuestro trabajo, las formas organizativas que los pueblos indígenas recrearon para interactuar con otras agencias en el nuevo campo político intercultural que se dio a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se expresan a través de asambleas, encuentros de dirigentes, niveles organizativos comunitarios y supra-comunitarios y espacios de deliberación como el Seminario de Tabalascada.

Cuestionados por el imaginario social y la narrativa desarrollista *omnipresente*, los dirigentes indígenas insisten en superar la dicotomía desarrollo/no-desarrollo en que se instala normalmente el debate para conducirlo a otra perspectiva diferente. “O povo indígena não é contrário ao desenvolvimento e sim ao enriquecimento ilícito de alguns sacrificando vidas humanas e da natureza. Não se pode desenvolver um lugar se o próprio lugar não poder ser desenvolvido (...) primeiro precisamos da terra e depois do desenvolvimento do nosso jeito”³⁰⁶.

³⁰⁶ Entrevista escrita del autor a un dirigente de organización indígena en Roraima.

Conclusiones

Iniciábamos este trabajo acogiendo las palabras de Milton Santos en las que el geógrafo brasileño decía que lo que debe estar en el fundamento de la descripción es la voluntad de explicación. En el caso de conflictos socioambientales que afectan la tierra y los derechos de muchas personas y comunidades, casi siempre anónimas, y al mismo tiempo develan las contradicciones del modelo insostenible en el que nos hemos instalado, la voluntad de explicar es un intento de ir más allá del hecho de comprender los fenómenos sociales con los que convivimos. Mantiene la intención de contribuir, con muchas otras voces, a identificar aquellos elementos que pueden ayudar al discernimiento político.

Las problemáticas asociadas a la expansión de la minería sobre los territorios sociales, particularmente los territorios indígenas, están presentes en la cotidianeidad de muchos rincones de América Latina y de otras regiones del mundo. Responden a dinámicas globales que, a pesar de ello, requieren anclajes locales, porque en realidad necesitan nacer de la materialidad concreta, y finita, del subsuelo y de la tierra. El proceso económico no comienza con la creatividad productiva, sino con la retirada de bienes naturales. Por eso, aunque nos fuese posible describir teóricamente el metabolismo que mueve la economía-mundo y la lógica que lo conduce, conocer cómo esas fracturas socioambientales se encarnan en el territorio concreto y afectan a las personas y comunidades que lo habitan es un ejercicio insustituible. La experiencia de los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol nos ofrece elementos que ayudan a comprender no solamente la realidad más próxima a ellos, sino el engranaje del modelo como un todo.

Cuando en el título de nuestro trabajo anunciamos ya la problemática de la minería dentro de los hábitats indígenas como una *disputa por el territorio* pretendíamos ir más allá de la dimensión material del mismo. Es verdad que estamos delante, a veces fundamental y principalmente, de una batalla por la ocupación física del territorio y de los bienes que en él se encuentran. Pero al mismo tiempo, y sin separarse de lo primero – porque no son divisibles – se trata también de una disputa por las formas como significamos el mundo. Se trata de un litigio por el lugar que reivindican, en nuestro

tiempo homogeneizador, los diversos pueblos y los muchos saberes, por el derecho-a-ser-con-el-mundo desde la alteridad. Una demanda por el lugar de la diversidad y de las *alter*-nativas, por el lugar de la naturaleza y por la naturaleza del lugar. En definitiva, un debate acerca de la narrativa sobre el mundo y sobre la acción política posible, sobre la oportunidad de que haya muchas más posibilidades de convivencia que las que se nos aparecen como *uni*-formes.

Hemos estructurado y presentado nuestro trabajo en dos grandes tiempos. En el primero, que reúne los primeros cuatro capítulos, nos propusimos recoger un proyecto teórico alimentado por diversos marcos de pensamiento: de la Ecología Política a la Geografía nueva de Milton Santos y de la Geopolítica Crítica a la Antropología de la Territorialidad. Desde el inicio nos propusimos sonar en los campos *trans*-fronterizos de estas áreas de conocimiento para llegar al espacio de confluencia teórica que buscábamos y que, en nuestro caso, identificamos con las categorías territorio-territorialidad-territorialización. Es en esa *ágora* común, formada por esta tríade conceptual, donde las diferentes fuentes teóricas desembocaban al explicar las relaciones de conflictividad que se dan entre la experiencia de la vida en lo local y las dinámicas económicas globales, concebidas a partir de un modelo que mundializa los territorios en la misma medida en que pretende *des*-territorializar las personas, los pueblos y los saberes.

Asumimos también el desafío de construir una investigación desde la perspectiva que propone la ecología política, conciliando las dinámicas de la multiescalaridad, la historicidad y la diversidad de agentes. Por ello, en la segunda parte de nuestro trabajo, en los capítulos 5 a 8, describimos y explicamos el avance de la economía extractivo-exportadora, contexto de la actividad minera, en las escalas de América Latina, Amazonia, Brasil y Raposa Serra do Sol, nuestro terreno de campo y de convivencia.

Para la presentación de las conclusiones de nuestro trabajo, vamos a hacerlo también en tres tiempos. En primer lugar, describiremos de qué modo hemos conseguido responder a cada una de las cinco preguntas centrales que habíamos formulado al inicio del trabajo y, a través de ellas, a las preguntas secundarias que también nos habíamos planteado. En un segundo momento, nos proponemos enunciar algunas conclusiones generales que los datos de la investigación nos ofrecen en referencia al problema central: la relación de conflictividad que se establece en América Latina entre el avance del extractivismo minero y la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por último, en tercer lugar, intentaremos delinear algunas de las conclusiones en relación a la escala local de nuestro trabajo, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol.

La respuesta de la investigación a las preguntas directrices

En ese ejercicio de circular por las diversas escalas, con una perspectiva histórica y espacial al mismo tiempo, fuimos respondiendo a las cinco preguntas directrices que nos habíamos planteado inicialmente en la investigación.

1. ¿De qué modo se desarrolló el modelo de economía extractivo-exportadora a lo largo del proceso de colonización y cuáles son las características del nuevo ciclo expansivo de esta economía en las diversas escalas espaciales consideradas en la investigación: América Latina, Amazonia, Brasil y Raposa Serra do Sol?

A partir del análisis histórico del modelo extractivo-exportador como expresión del sistema-mundo, hemos confirmado que se trata de una dinámica global que tiene una larga historia en América Latina (Gudynas) y su expresión en nuestros días no sería sino una “actualización del hecho colonial” (Zibechi).

Es decir, se constata la existencia de una contigüidad en el tiempo y una presencia constante de la dinámica extractivo-exportadora en la región, ocasionando una permanente reconfiguración de las relaciones sociales y territoriales en América Latina.

Durante el período colonial, el avance sobre los bienes naturales por parte de las metrópolis – de modo particular sobre bienes minerales como el oro y la plata – se produjo a través del control territorial y del intento de dominación sobre las sociedades indígenas. Esta dominación se expresaba bajo diferentes formas:

- a) exterminio y genocidio de grupos enteros;
- b) esclavización de la mano de obra;
- c) utilización de los grupos étnicos como *fronteras vivas* en las disputas territoriales con otras metrópolis;
- d) incentivo a las disputas inter-étnicas en función de alianzas implementadas con una u otra empresa colonial.

En la región amazónica, la empresa colonial avanzó a partir de dos imaginarios que, de uno u otro modo, permanecen hasta nuestros días: Amazonia como espacio vacío y como fuente inagotable de bienes naturales. Como las metrópolis no tenían condiciones para explotar económicamente un territorio tan vasto y desconocido, a veces tan difícil de sondear para ellos, se centraron inicialmente en el control territorial y la demarcación de fronteras respecto de las otras metrópolis, ocasionando la división de los espacios ocupados de modo continuo por sociedades indígenas, la dispersión de algunos de estos grupos y la permanente reconfiguración social e identitaria que nos apunta Manuela Carneiro da Cunha (1992). Las expediciones dirigidas a la captura de mano de obra indígena para servir al proyecto extractivo develan que el control sobre estas poblaciones se constituyó en uno de los pilares del proyecto colonial sobre la región amazónica. Interesaban los indios como mano de obra esclava, como guías y canoeros en el ambiente de la floresta o como *fronteras vivas* frente a otras metrópolis o a otros grupos hostiles.

En Brasil, la disputa por el control de la mano de obra indígena entre particulares, militares y agencias religiosas, con diversos intereses, se convertiría también en la cuestión estratégica. Mientras que particulares requerían el dominio sobre la mano de obra indígena para mantener el nivel de explotación y extracción de maderas, especias y minerales, los militares representaban el intento de la Corona de controlar esa economía extractiva y vincularla al dominio sobre el territorio disputado. Al mismo tiempo, los aldeamentos religiosos, pretendiendo frenar los excesos cometidos sobre las poblaciones indígenas, ofrecían a estas una situación de semi-libertad que se traducía en su confinamiento en pequeñas aldeas donde tenían su primer contacto con oficios diversos – agricultura, ganadería – y con la enseñanza religiosa europea. La irrupción en la segunda mitad del siglo XVIII de la reforma del Marqués de Pombal, la expropiación de las aldeas misionales y su control por la Corona desencadenaría el decaimiento de los confinamientos y una nueva dispersión espacial de los grupos étnicos bajo un nuevo padrón relacional ya establecido con la sociedad colonial que se configuró bajo la forma del *regatão* o red comercial que vinculó los territorios del interior con las urbes y centros coloniales.

En el caso de lo que hoy conocemos como Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, el proceso colonizador va a llegar con fuerza a lo largo del siglo XVIII. La región de las Guayanas y las cuencas de los ríos Essequibo, Orinoco y Branco fue un espacio disputado por las empresas coloniales de España, Holanda y Portugal. En esa disputa, el establecimiento de alianzas y relaciones de intercambio con los diversos grupos étnicos fue una de las estrategias claves de sendas metrópolis. Interesaba en esta región la existencia de madera, resinas y especias, así como la promesa de una mítica *ciudad de oro*. A partir de 1725, la Corona portuguesa asumió una mayor intervención en la zona, subiendo el río Branco desde sus posiciones en el río Negro, afluente del Amazonas. Uno de los móviles era el control de las expediciones de captura de mano de obra indígena para suplir su disminución en las zonas de Grão Pará y Maranhão. El otro móvil era el control militar para lo cual se estableció el Fuerte São Joaquim en 1775.

La formación de los nuevos Estados independientes a lo largo del siglo XIX no va a significar una ruptura con la lógica que venimos describiendo y que relaciona la economía extractivo-exportadora con el control del territorio y con la relación de los nuevos Estados con su diversidad étnica.

Es posible, no obstante, identificar un cambio en la relación con los pueblos indígenas: si durante el período colonial, el interés se colocaba en el control de estos grupos como mano de obra esclava, ahora el interés se centra en el control de las tierras que ocupan y de los bienes que en ellas se encierran. Para los nuevos Estados, los grupos indígenas – considerados como sociedades inferiores – representaban un estadio transitorio que tendía a su desaparición. El único camino posible parecía ser la asimilación o integración plena en el nuevo proyecto nacional, de forma amigable y pacífica o de forma violenta y forzada; los pueblos indígenas debían escoger entre la integración o la desaparición.

Se confiaba en que la máquina arrolladora del nuevo proyecto nacional convertía en transitoria y temporal la condición indígena de estos grupos, los cuales comprenderían, más tarde o más temprano, con más o menos coacción y violencia, que el único camino viable sería su incorporación a la sociedad naciente. La mano de obra indígena continuaba interesando como fuerza de trabajo en el proyecto de nación. .

Pero lo que interesaba era regular la situación de las tierras, lo cual se convertía, dicho sea de paso, en una de las tareas generales de los nuevos Estados. Se hacía necesario ordenar los regímenes de tenencia, pose y propiedad sobre el territorio nacional y la cuestión de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas era una de las principales pendencias. El control de la tierra importaba a los nuevos Estados precisamente en la perspectiva de una mayor inserción en las dinámicas globales de la economía-mundo a través de una economía extractivo-exportadora. Esto se va a ver con dos ejemplos muy clarividentes que se extendieron sobre la región amazónica y sobre Brasil: el avance de las fronteras del caucho y de la minería de oro y diamantes.

Ambas fronteras económicas van a vincular de un modo sistemático y claramente periférico la región amazónica, y su parte brasileña de modo particular, a la economía-mundo. La extracción de caucho responderá inicialmente, por ejemplo, a la incipiente industria automovilística en los principales centros económicos del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que resulta fundamental para nosotros es destacar que estas nuevas fronteras económicas, vinculadas directamente a las dinámicas globales de la economía-mundo, terminaron reconfigurando profundamente las relaciones sociales en los territorios locales. La institución de los sistemas de *regatão* y de *aviamento* en el caso de la extracción cauchera y del sistema de *garimpo* en la minería ilegal de oro y diamantes contribuyeron a delinear una economía informal de escala que conectaba con los centros económicos globales y representaba un sistema claro de salida de bienes naturales para satisfacer demandas globales externas. Además, estos sistemas resignificaron los territorios donde operaban y transformaron profundamente las relaciones sociales que en ellos se daban. De un lado, incorporando a parte de la población indígena a las actividades extractivas; de otro lado, desplazando contingentes de población de otras regiones de los nuevos Estados hacia el interior de la región amazónica, transformando la formación social e histórica de la región. A las fronteras del caucho y la minería, se unió con frecuencia el desplazamiento de mano de obra campesina hacia la región amazónica para “colonizar” agrícola y liberar tensiones sociales en otras zonas del país.

Las iniciativas legislativas que, en el seno de los nuevos Estados, reconocían el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras – como el *Regulamento das Missões* (1845) o la *Lei de Terras* (1850) en el caso brasileño – no renunciaban a la comprensión de que la condición indígena era transitoria dentro de los proyectos nacionales y sus derechos sobre la tierra no podían colisionar con los intereses nacionales en la explotación de los bienes naturales. Es ilustrativa la expresión de Manuela Carneiro da Cunha (1992: 16)

cuando afirma que la codicia de las nuevas sociedades nacionales se desplazó del trabajo indígena - mano de obra esclava – hacia las tierras indígenas y, posteriormente, hacia el subsuelo indígena.

En el caso de nuestra escala local, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, diversas fronteras económicas han avanzado desde finales del siglo XVIII y hasta nuestros días. En primer lugar, la presencia de la *fazenda* ganadera, concebida inicialmente para suministrar carne y cuero a la ciudad de Manaus y para consolidar la ocupación del territorio del río Branco por “nacionales”, más allá de la presencia militar. Durante el siglo XIX también se produjo un desplazamiento forzado de mano de obra indígena del área que hoy llamamos Raposa Serra do Sol hacia la región del Bajo río Branco para servir en la extracción de la *balata*, variedad del látex. La frontera minera del diamante y el oro se instaló en la región de Raposa Serra do Sol desde inicios del siglo XX y ha permanecido, con diversos ciclos de intensidad y declive, hasta los últimos años del siglo. Por último, a partir de la década de 1990, la frontera del capital agroexportador avanzó sobre Raposa Serra do Sol con la ocupación de grandes áreas para la monocultura del arroz o la soja.

En el último tercio del siglo XX, la economía-mundo adoptó un nuevo metabolismo en América Latina bajo la lógica de funcionamiento del *Consenso de Washington* y el proyecto neoliberal. Los Estados latinoamericanos, como afirman Composto y Navarro (2014: 52) competían por radicar en sus territorios porciones del capital global. La llegada de corporaciones transnacionales a los territorios locales y la conectividad de los territorios a través de grandes proyectos de infraestructura física para facilitar el flujo de los bienes extraídos caracterizan este nuevo tiempo de la economía global en la región. La realidad política de buena parte de los Estados latinoamericanos en este período se caracterizará por la presencia de dictaduras militares (década de 70) y los esfuerzos sociales por la recuperación de la institucionalidad democrática (décadas de 80 y 90), al ritmo de un profundo y permanente endeudamiento externo que condicionó las posibilidades de crecimiento y aumentó la brecha – que se convirtió en abismo - de las desigualdades sociales.

En Amazonia y en Brasil, particularmente, este nuevo tiempo se expresó con una exploración más intensa del subsuelo en busca de bienes minerales e hidrocarburos, fundamentalmente y con la expansión de grandes obras de infraestructura física y de nuevas formas de ocupación territorial: una compleja trama de carreteras federales que atravesaron el territorio amazónico, llegando también a las puertas de Raposa Serra do Sol; un conjunto de grandes hidroeléctricas que favorecieron la implantación de proyectos mineros y núcleos siderúrgicos; desplazamiento masivo de millares de personas hacia la región amazónica para atender las necesidades de mano de obra en la extracción del caucho y minerales, en la ganadería extensiva, en las obras de infraestructura o para “colonizar” agrícola y ganadería la región.

En la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, el último tercio del siglo XX coincide precisamente con la fase definitiva de lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas sobre ese lugar. Al mismo tiempo que la discusión sobre la homologación de la tierra indígena avanzaba, impulsada por un proceso de organización comunitaria genuino y por la transformación en el marco normativo de derechos a partir de la Constitución Federal de 1988, también avanzaban algunas fronteras económicas sobre el territorio. Particularmente, las agencias de la *fazenda* ganadera, la minería ilegal de oro y diamantes – que desplazó a la región a miles de personas a finales de la década de 80 e inicios de los 90 - y el capital agroexportador relacionado con las monoculturas del arroz y la soja. A su vez, la élite política regional intentó orquestar una trama de políticas de infraestructura física en el territorio indígena a través de proyectos como: la consolidación de *vilas* o pequeñas concentraciones semi-urbanas que habían servido de apoyo a los terratenientes ganaderos y a los mineros; la expansión de una línea de carreteras regionales, no asfaltadas, que conectaban los lugares de *fazenda*, garimpo y nuevas *vilas* para favorecer la ocupación del territorio; y el proyecto de construcción de una hidroeléctrica sobre el curso medio del río Cotingo. Si todo este conjunto de medidas – funcionales a las élites políticas y agrarias de Roraima y a las dinámicas globales de la economía-mundo – no avanzaron más ni se consolidaron, fue por el permanente esfuerzo organizativo de las comunidades indígenas en defensa de su tierra y en exigibilidad de los derechos reconocidos constitucionalmente. Raposa Serra do Sol se convierte, así, en uno de los espacios sociales donde la primacía del derecho se impuso, aunque no definitivamente aún, sobre la lógica expansiva de la economía de escala.

Asistimos, no obstante, a un ***nuevo ciclo expansivo de la economía extractivo-exportadora*** en América Latina – que situamos en los primeros quince años del siglo XXI - que ha conducido, una vez más, a la primarización de sus economías domésticas, confiando el crecimiento en las demandas ajenas. Hemos mostrado que el auge de los precios de bienes primarios - agrícolas, mineros y energéticos – y la expansión de economías como la de China, India y otros países, ha hecho que el conjunto de países de América Latina retomasen la senda del extractivismo: mayor dependencia de las rentas extractivas, mayor peso de los bienes primarios en la cartera exportadora, ampliación de las áreas explotadas y del volumen de bienes extraídos.

Este período de (neo)extractivismo, imbricado en los gobiernos “populares” o llamados “de izquierda” que coincidieron en buena parte de los países latinoamericanos (y principalmente amazónicos), ha generado un tiempo de contradicciones en la región. Si, de un lado, se han dado dinamismos de inclusión y participación social desconocidos en los últimos 30 años, de otro lado ha resultado en un modelo de Estado compensador y equilibrista, funcional a la razón instrumental y proclive a las medidas de excepción y de hecho consumado. No ha sido, finalmente, el tiempo de las reformas estructurales que muchos vieron más cercanas que nunca.

Este ciclo se ha dado de un modo particularmente intenso sobre la región amazónica, donde en los últimos 15 años ha crecido el número de conflictos socioambientales, la proyección de proyectos de infraestructura física – conectados en la fábula territorial de la iniciativa IIRSA - los pedidos para exploración y explotación de hidrocarburos y minerales y la ocupación de grandes áreas de tierra para el cultivo de las nuevas *commodities* agrícolas.

Brasil ha sido uno de los protagonistas de ese ciclo expansivo. Los datos sondeados nos demuestran que su crecimiento acelerado a partir de 2004 se asentó sobre pilares estructurales poco novedosos: reprimarización de su política exportadora, con daños al sector industrial; crecimiento del agronegocio como política de Estado; alianza público-privada para un nuevo ciclo expansivo de grandes proyectos de infraestructura física, que está en el epicentro de la crisis institucional que se desencadenó en el país desde 2014; proyección de expansión de la minería y paralización de las garantías de derechos territoriales; y ampliación de su influencia, económica y política, sobre los países vecinos, particularmente en la región amazónica. Se vive actualmente en Brasil una situación de claro retroceso en lo referente a la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, expresado en las diversas iniciativas legislativas que circulan en el Congreso Nacional o a partir del propio Ejecutivo y que pretenden, en la práctica, reducir, condicionar, limitar o anular derechos ya consagrados.

En nuestra escala local, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, el período de este nuevo ciclo expansivo de la economía extractivista ha coincidido con el reconocimiento formal, finalmente, de la tierra indígena por parte del Estado brasileño. La homologación firmada por la Presidencia de la República en abril de 2005 y confirmada por el Supremo Tribunal Federal en febrero de 2009, después de que el Gobierno de Roraima y la élite política local contestase jurídicamente el acto del Gobierno Federal, ha significado, como decíamos, la conclusión de una fase decisiva que comenzó en la década de 70 por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades Macuxi, wapichana, Taurepang, Patamona e Ingarikó que habitan este espacio.

Con la homologación del territorio, entra en pleno vigor el derecho de las comunidades indígenas al usufructo exclusivo de los bienes naturales, procediéndose por tanto a la salida de otros emprendimientos económicos que pudiesen afectar ese territorio, como fue el caso de las monoculturas del arroz y la soja. No obstante, este escenario de aparente garantía de los derechos constitucionales convive con dos hechos que mantienen a Raposa Serra do Sol como un territorio *visible* a los intereses de la economía de escala, nacional e internacional.

Uno de esos hechos se refiere a que la homologación de Raposa Serra do Sol no impidió el reconocimiento del municipio de Uiramutã y su sede urbana – tradicional punto de apoyo para la *fazenda* y el garimpo - dentro del territorio indígena, funcionando como un distorsionador interno de las relaciones sociales y como un actor político-

administrativo a partir del cual los intereses políticos y económicos pueden continuar operando.

El otro hecho fundamental es que el nuevo ciclo expansivo de la economía extractivo-exportadora ha alentado y dinamizado en Brasil la discusión política y jurídica sobre la regulación de la actividad minera dentro de las tierras indígenas. La Constitución Federal de 1988 determinó que la eventual actividad minera dentro de los territorios indígenas solamente podría ser efectiva después de una regulación *ad hoc*, a través de Ley Complementaria y en función de relevante interés del país. Durante los casi treinta años que nos separan de la Constitución, grupos políticos y económicos han intentado incidir, insistentemente, para que el Congreso Nacional regule, definitivamente, la posibilidad de la actividad minera dentro de las tierras indígenas. Esta posibilidad significaría, objetivamente, un condicionamiento absoluto para el ejercicio de sus derechos por parte de las poblaciones indígenas, ya que cualquier intervención sobre el subsuelo determinaría las condiciones de uso del territorio en su conjunto. En algunos territorios indígenas, como es el caso de Raposa Serra do Sol, esta constatación es evidente porque afectaría a una parte sustancial de su territorio.

Lo cierto es que el nuevo ciclo extractivo-exportador, que situó a Brasil como una de las principales potencias minerales de la economía-mundo y a la minería como uno de los principales soportes de crecimiento económico para el país, despertó el interés por esta regulación. En el Congreso Nacional circulan diversos proyectos de ley relacionados con la temática, asociados todos al PL 1610/96 desde el punto de vista parlamentario. Al mismo tiempo, el Plan Nacional de Minería-PNM 2030, de autoría del Gobierno Federal, incentiva la definitiva regulación de esta materia. Consideran Ejecutivo y Legislativo que la apertura de las tierras indígenas al capital minero es una medida estratégica para garantizar el crecimiento del sector y una más intensa inserción de la economía nacional en la economía global.

Este escenario sitúa a las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, así como a todos los pueblos indígenas de Brasil, en la necesidad de disputar, en el presente, un futuro con o sin minería en sus territorios.

Por tanto, y concluyendo este punto, los datos recogidos en la investigación nos han permitido describir la condición de *frontera perenne* (Little, 2002) que el modelo extractivo-exportador ha adoptado en América Latina y en las escalas de Amazonia, Brasil y Raposa Serra do Sol desde el inicio del proceso colonial.

2. ¿Cuál es la naturaleza del espacio político y del estándar de derechos colectivos consolidado en América Latina y en Brasil a partir de la acción de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios?

La consolidación de un marco de derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel nacional, regional e internacional ha transformado profundamente el escenario y las posibilidades de interacción política de los diversos actores para resolver problemáticas socioambientales y dirimir conflictos de intereses sobre un mismo territorio.

La defensa de la tierra por parte de los pueblos indígenas y de otros grupos sociales ha dinamizado el espacio político, identitario y epistémico en América Latina. La promoción de los regímenes de propiedad comunitaria y la recuperación de la dimensión simbólica en la acción política atravesó un campo territorial que hasta ese momento se había circunscrito a la propiedad pública o privada o a la reforma agraria como reparto del suelo productible y libre.

Hemos explicado cómo las formas de organización social y reivindicación territorial que los pueblos indígenas configuraron a partir de los años 70 se explican por la naturaleza de los nuevos campos interétnicos de negociación política, en el que otras agencias - Estados, empresas, ecologistas, defensores de derechos – se debatían sobre la cuestión de la producción, la tierra, el desarrollo y el ambiente. Apropiándose de *exodefiniciones*, como “tierra indígena”, las organizaciones indígenas y otras comunidades tradicionales consiguieron formular sus reivindicaciones colectivas en el seno de esos campos sociales, principalmente en relación a los Estados. Las Constituciones nacionales que se aprobaron en el último tercio del siglo XX han recogido, con más profundidad que anteriormente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el respeto por sus formas propias de organización social, política, económica y simbólica.

Entendemos que el tejido de derechos colectivos que ha sido reconocido en los diversos niveles escalares debe ser comprendido en su conjunto, con interdependencia e indivisibilidad; con coherencia interna y no de forma aislada. Destaca, de hecho, el capítulo del reconocimiento de los derechos territoriales, principal eje reivindicativo de las organizaciones indígenas y cuestión clave en relación a los conflictos socioambientales. Destaca, así mismo, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de buena fe, con carácter previo, libre y bien informado, de cualquier medida política o emprendimiento económico que venga a afectar sus territorios y la vida de sus comunidades; también este derecho se vuelve nuclear en su relación con los conflictos socioambientales y el avance de la economía-mundo – en su expresión de actividad minera – sobre los territorios. Sin embargo, ambos derechos, siendo sustanciales por sí mismos, adquieren aún mayor solidez y coherencia si los comprendemos en el conjunto de los derechos que hacen referencia explícita a la libre determinación de su condición política, la libre decisión sobre los mejores caminos de

desarrollo, el usufructo sobre los bienes naturales de los territorios donde habitan, el respeto a sus propias formas de organización social y política o a los conocimientos y saberes propios, entre muchos otros. Es la lectura de conjunto la que nos permite comprender que la naturaleza fundamental del estándar de derechos consolidado en el último tercio del siglo XX y los inicios del siglo XXI se refiere al reconocimiento de la diversidad y la alteridad como bases para la construcción del proyecto social.

Desde el punto de vista de los territorios, en el caso de Brasil hemos identificado la tradición jurídica conocida como *Indigenato*, que deriva desde el Alvará Regio de 1680 y que caracteriza el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras como un derecho congénito y originario, anterior a la llegada de los europeos y a la formación del Estado, radicado en que son los pueblos indígenas “los primeros y naturales señores”. Esta formulación del derecho a la tierra le reconoce una condición que le es intrínseca: la condición de ser un derecho originario. De aquí se desprende algo fundamental: el Estado brasileño no concede ese derecho, sino que simplemente lo reconoce y garantiza, pues la existencia del derecho es anterior a él.

Esta concepción es fundamental para comprender la relación del Estado con los pueblos indígenas en Brasil. Sin embargo, a pesar de que la tradición del *Indigenato* se ha mantenido como marco jurídico desde sus orígenes, su posterior regulación y reconocimiento en las sucesivas normas, leyes y Constituciones se vio sustancialmente condicionada por el imaginario político que condujo el proyecto colonial – siglos XVI a XVIII – y el proyecto nacional – siglos XIX y XX – y que se traducían en las siguientes concepciones: los grupos indígenas son grupos inferiores y su dominio [militar, cultural y religioso] y tutela son medidas legítimas; la condición de indígena es una condición transitoria, tendente necesariamente a su desaparición e integración definitiva en la sociedad nacional; por tanto, sus derechos sobre la tierra son también transitorios [*hasta alcanzar el estado de civilización*] y no pueden colisionar con el avance territorial y económico del proyecto nacional y la economía-mundo.

Podemos decir que la Constitución Federal de 1988, en cierto sentido, ha supuesto un giro sustancial en esta trayectoria. Superando formalmente la lógica de la tutela, y reconociendo la sociodiversidad indígena, deja atrás la percepción de transitoriedad de la realidad indígena y retoma sustancialmente el carácter originario de los derechos sobre las tierras que ocupan.

Al mismo tiempo, un conjunto de instrumentos normativos internacionales - Convenio 169 OIT, Declaración Naciones Unidas 2007, Declaración de la OEA e Informes y recomendaciones elaborados por la CIDH - recogieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de nuevo con destaque para el derecho a la tierra y a la consulta previa y asociándolos al derecho a determinar libremente sus propios caminos de desarrollo.

En estos instrumentos de derecho internacional encontramos una de las cuestiones fundamentales que interesan a nuestro trabajo y a nuestro problema de investigación. El Informe de la CIDH sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas de 2015 lo explicita textualmente, pero se recoge de la tradición normativa que se va consolidando, y se refiere al hecho de que la garantía de los derechos humanos no puede ser comprendida como un obstáculo o impedimento al desarrollo, sino como una condición previa. Esta reordenación de los factores, como tendremos oportunidad de argumentar un poco más adelante, delinea uno de los marcos necesarios para el discernimiento político.

3. ¿Cuáles son las dinámicas de los conflictos socioambientales ocasionados por la actividad minera en territorios indígenas y cuál es la posición de los diversos actores implicados?

Los conflictos socioambientales con base territorial se producen a partir de la expansión de las fronteras del modelo extractivo-exportador. Este avance del primer impulso productivo, el de la extracción de los bienes naturales, requiere el control sobre el territorio, entrando en colisión con otras significaciones territoriales pre-existentes y con los derechos colectivos de los grupos que allí habitan.

Los conflictos socioambientales con base en el territorio y relacionados con la minería se han multiplicado en América Latina y en la Amazonia en los últimos quince años. La madurez de la movilización de las comunidades locales y de sus habilidades en la articulación con otros grupos sociales en las diversas escalas funcionó como resistencia al avance de la frontera minera en la región. Al mismo tiempo, las acciones de incidencia jurídica y exigibilidad de derechos están consiguiendo ralentizar las medidas legislativas que pretenden abrir aún más los territorios sociales a la actividad minera.

Es común que Gobiernos y empresas confluyan en los intereses sobre la explotación de los bienes naturales, agrupando sus estrategias fundamentalmente en tres ámbitos: a) de legitimidad, actuando sobre los marcos legales y de ordenamiento eco-territorial del espacio, así como sobre la concepción del interés público o interés nacional; b) de contención, actuando sobre los mecanismos de movilización social con disuasión, disciplinamiento o delegando en la empresa (responsabilidad social corporativa) el control de los campos de negociación en territorio; y d) de conflictividad directa, a través de la represión, la criminalización y la militarización de los territorios.

Pueblos indígenas y comunidades locales, en su diversidad rebelde a la uniformidad, recrearon, en alianza con otros, estrategias que iban de la movilización comunitaria en las bases a las campañas internacionales, pasando por negociaciones directas con el Poder Público.

El caso específico de Raposa Serra do Sol nos ayuda a comprender el metabolismo de estos conflictos. Las agencias de la *fazenda* y el garimpo, primero, y del agronegocio, después, significaron una re-configuración social y espacial del territorio indígena. Entre los principales impactos, observamos:

- Desagregación social en la vida de las comunidades indígenas;
- Reclutamiento de mano de obra indígena, afectando las actividades productivas tradicionales;
- Ocupación del territorio, reduciendo la libertad de movimientos y de acción de los indios;
- Violencia contra la vida y el patrimonio de las personas y las comunidades indígenas³⁰⁷;
- Introducción de nuevos hábitos de consumo, con especial destaque para la introducción de la bebida alcohólica³⁰⁸ que, en seguida, se relacionó con problemáticas de abuso sexual, violencia intra-comunitaria e intra-familiar, abandono de responsabilidades y de actividades económicas.
- Impactos sobre la calidad del ambiente, con contaminación de fuentes de agua, compactación del suelo, destrucción de *roças*, destrucción de los ambientes de tierra firme próximos a los lechos de río con aumento de la erosión, ...
- Creación de pequeños núcleos semi-urbanos dentro de la tierra indígena que les sirviesen como puntos de abastecimiento y de comercialización, al tiempo que locales de diseminación de la bebida alcohólica y fijación de la población foránea dentro del territorio. Estos núcleos poblacionales eran denominados *villas*.

En este caso, las agencias de la *fazenda* y el garimpo representaban la parte de una cadena de aprovechamiento económico que vinculaba el uso del territorio, en un extremo, con el proceso de acumulación en lugares muy distantes. La relación estrecha entre estos grupos de poder y las instituciones representantes del Estado de Roraima fueron evidentes, sostenida por una élite agrario-política que mantiene el control de las instituciones.

Del otro lado, las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol protagonizaron un proceso de autoorganización y resistencia desde lo local con una gran creatividad política, caracterizada por:

³⁰⁷ En diciembre de 2001, el Consejo Indígena de Roraima publicó un “Informe de los casos de violencia” contra las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, con base en las denuncias presentadas por las comunidades directamente en el CIR y por los registros anteriores de la propia organización indígena, en el período comprendido entre enero de 1981 y abril de 2001. El Informe relata un total de 235 casos de violencia – verbal, física, amenazas, destrucción de patrimonio, robo, discriminación y muerte – recogidos, registrados y denunciados por las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol.

³⁰⁸ “Todo fim de semana garimpeiro vinha a Maturuca, embebedava, abuso de mulher, a filha, ... era uma bagunça” (Entrevista 1-2012).

- la movilización local, retomando palmo a palmo el territorio, con estrategias como la organización comunitaria y de los Consejos Regionales, la ocupación de espacios adyacentes a las *fazendas* y a las *vilas* para impedir que éstas continuasen expandiéndose, los cortes de carreteras de acceso a las zonas de garimpo, el sistemático registro escrito y la dinámica asamblearia y descentralizada;
- la habilidad política y de interlocución con las más diversas agencias sociales y políticas, destacando la solidez de su alianza con la Iglesia Católica y círculos próximos de defensa de los derechos humanos;
- la determinación de unidad del movimiento, que ayudó a superar los momentos más frágiles;
- la validez de intuiciones concretas como el proyecto de ganado comunitario;
- y la batalla jurisdiccional librada en la más alta Corte del país entre 2005 y 2009, significando una confirmación del marco jurídico brasileño de garantía de los derechos, marco que había sido y continúa siendo permanentemente disputado.

4. ¿Cómo se relaciona la realidad de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en cuanto escala local, con los procesos políticos y económicos que se dan en las escalas de Brasil, Amazonia y América Latina?

El histórico de ocupación del territorio que hoy llamamos Raposa Serra do Sol se ha enmarcado, siempre, en el contexto de los procesos regionales de colonización del espacio amazónico, en el contexto de la política indigenista del Estado brasileño y en las dinámicas de la economía.

En el marco del control territorial y de la mano de obra indígena que movía a la empresa colonial portuguesa durante el siglo XVIII, la Corona comenzó a financiar expediciones que subían el río Branco desde las posiciones en el río Negro y en el Solimões, con diversos objetivos. Uno de ellos era el de capturar mano de obra indígena para remediar su disminución en las regiones de Grão Pará y Maranhão. La esclavización de la población indígena era una de las estrategias fundamentales de parte de la agencia colonial. Normalmente, las iniciativas pioneras en este sentido eran tomadas por particulares, dando paso posteriormente al interés de la Corona en poner orden y controlar este comercio de esclavitud indígena. Otro de los objetivos era tantear la veracidad de las incursiones españolas y holandesas desde las cuencas de Orinoco y Essequibo respectivamente. El control del territorio y el establecimiento de fronteras delimitadas que “contuviesen” dentro de ellas el espacio legítimo de dominio colonial era fundamental para el éxito de la empresa portuguesa. Por ello, en 1775 se instaló el fuerte militar de São Joaquim, en la confluencia entre los ríos Uraricoera y Tacutú, muy próximo al territorio de lo que hoy llamamos Raposa Serra do Sol. A partir del fuerte se

controlaba esa parcela del territorio colonial y se tomaban iniciativas, no muy exitosas, de reclutamiento y confinamiento indígena en torno al fuerte.

Durante el siglo XIX, que se inicia con la formación del Estado brasileño independiente de la colonia bajo la fórmula inicial de Imperio, preocupaba a los nuevos intereses nacionales la ocupación económica de la región del río Branco y el aprovechamiento de sus bienes naturales. El avance de la frontera extractiva del caucho, que respondía a dinámicas globales sobre el territorio amazónico, desencadenó la integración de esta región en la economía regional en dos sentidos: la extracción de la *balata* en el curso bajo del río Branco y el reclutamiento y desplazamiento de mano de obra indígena para la explotación de la floresta. Ya en este tiempo se tienen noticias de la captura de mano de obra en las aldeas Macuxi que fue desplazada hasta la región de la *balata* y de la cual muchos no volvieron.

El capital procedente del extractivismo vegetal y la voluntad del Estado por ocupar de modo permanente los campos y sabanas del valle del río Branco contribuyeron a la expansión de la *fazenda* ganadera, que ya había llegado al local en la segunda mitad del siglo XVIII. El último tercio del siglo XIX supuso el auge de la economía bovina en los campos del río Branco, comenzando a adentrar en el territorio de Raposa Serra do Sol. Inicialmente, los dos grandes objetivos eran la ocupación territorial por parte de “nacionales” y de emprendimientos económicos permanentes y el suministro de carne y cuero a la ciudad de Manaus.

A partir de los primeros años del siglo XX, como hemos podido demostrar, una nueva frontera económica avanza de modo decisivo sobre Raposa Serra do Sol: la actividad minera de extracción de diamantes y oro. Esta actividad, localizada fundamentalmente en la mitad norte de Raposa Serra do Sol, en el curso alto y medio del río Cotingo y en otras sub-cuencas menores, se va a instalar en la región, con sus momentos de mayor o menor auge, hasta la década de 70. La actividad minera, bajo el sistema de garimpo, va a establecer una interacción con la agencia de la *fazenda*: si de un lado, la mano de obra se desplaza de la fazenda al garimpo, por otro lado el capital extraído del oro y del diamante se reinvierte en el ganado. Ambas agencias, así, reconfiguran permanentemente los padrones de ocupación del espacio y dejan serios impactos en la vida de las comunidades y en el ambiente que ocupan. En este tiempo, una vez más, la relación economía extractiva – control territorial – explotación de las comunidades indígenas, se muestra bajo las determinadas condiciones sociales, ambientales e históricas de la época.

No obstante, será a partir de la década de 70 cuando la región del río Branco se integra definitivamente a las dinámicas económicas que se instalaban en Brasil y en la región amazónica con la intención de insertar, a su vez, estos espacios en el seno de la economía-

mundo. La apertura de carreteras federales y el descubrimiento de importantes yacimientos mineros en la región activan una política de colonización dirigida que desplazó hasta Roraima a millares de personas procedentes, fundamentalmente, de la región nordeste de Brasil. La ocupación de la cuenca del río Branco adquiere una dimensión enorme, tanto por la cantidad de personas movilizadas como por la aceleración de este proceso migratorio. La colonización agrícola, el fortalecimiento de la *fazenda* bovina y, fundamentalmente, la fiebre del oro, el diamante y la casiterita desencadenan un proceso violento de ocupación de las tierras indígenas. La estructura económica que se pretende instalar en la región con el apoyo del Estado brasileño y de la élite agraria roraimense tiene como base, una vez más, la ocupación del territorio – liberando las tensiones sociales de otras regiones del país – y la explotación económica de bienes naturales en una economía de escala cuya demanda se localiza fuera de la región. Es importante destacar que la cadena extractivo-productiva de esa economía de escala que se posiciona en Roraima, y en Raposa Serra do Sol, tiene un carácter informal e ilegal: el oro y el diamante que sale de Roraima lo hace, mayoritariamente, de forma ilegal.

Estos acontecimientos alimentaron en la élite agraria y política local la idea de construir el crecimiento económico de Roraima sobre la base de configurarlo como territorio-cantera: provincia minera, exportadora de bienes primarios – entre los que se incluía la madera y el potencial pesquero – y de bienes agrícolas de exportación. Ello conducía, una vez más, a garantizar para la élite económica el control y ocupación territorial y el sometimiento de las comunidades indígenas. Requería, por tanto, una firme oposición al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, una política de atractivo para la inversión de capital minero y agrario y la proyección de proyectos de infraestructura física y energética, como era el caso del proyecto de Hidroeléctrica del río Cotingo, dentro de Raposa Serra do Sol.

Por último, debe ser destacada la actuación de los diputados y senadores roraimenses en el Congreso Nacional. La mayor parte de los proyectos legislativos que se han presentado en el Congreso Nacional después de la Constitución Federal de 1988 y que pretenden, por diversos motivos, condicionar, reducir o anular derechos territoriales de los pueblos indígenas, han tenido en los parlamentarios roraimenses sus principales mentores. Tomando solamente como ejemplo el Proyecto de Ley 1610/96 de regulación de la actividad minera dentro de las tierras indígenas, su proponente inicial fue el senador roraimense Romero Jucá Filho y su relator actual en la Cámara de los Diputados es el también roraimense Édio Lopes. Algo similar sucede con la Propuesta de Enmienda a la Constitución-PEC 215/00 que pretende pasar al Congreso Nacional la decisión por la demarcación y homologación de las tierras indígenas.

Todos estos datos nos permiten vincular, efectivamente, el proceso de ocupación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol por agencias externas dentro de las dinámicas

económicas de escala nacional e internacional, lo que equivale a decir que participó, en los diversos momentos históricos, del proceso de mundialización del territorio.

5. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto entre la actividad minera y el proceso histórico de reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol?

La actividad minera se comporta como una frontera perenne en el territorio de Raposa Serra do Sol desde la primera década del siglo XX.

Hasta la década de 90, la actividad minera se dio bajo la forma de minería ilegal de oro y diamantes y el sistema de garimpo, con la ocupación maciza de millares de personas extrañas al local y la regimentación, principalmente hasta la década de 70, de mano de obra indígena.

La ocupación más intensa de Raposa Serra do Sol por el garimpo se dio en las décadas de 80 y 90, en el curso alto del río Cotingo y en los cursos de los ríos Uailã, Quinô y Maú, principalmente, todos ellos localizados prácticamente en la región norte de Raposa Serra do Sol. Este tiempo coincidió con momentos de auge de la minería aurífera en toda la región amazónica, respondiendo a aumento en los precios internacionales del oro.

Durante el período más intenso de actividad minera, entre 1983 y 1998, la minería ilegal se relacionó con impactos severos como: ocupación del territorio, contaminación de los cursos de agua, formación de *corruptelas*, violencia contra la población indígena, exploración sexual de mujeres, diseminación de bebida alcohólica, epidemias de malaria, instalación de un sistema de comercio fuera del control de las comunidades, ...

Los campamentos de garimpo fueron disminuyendo por la acción de las comunidades de retomada de su territorio, con cortes de carretera y desalojo de grupos garimpeiros, en acción cada vez más coordinada con la FUNAI y con la policía federal. La herida del garimpo, no obstante, se quedó impresa en el territorio Raposa Serra do Sol cuando el Gobierno Federal, primero en 1996 y después en la demarcación definitiva de 1998, dejó dentro de Raposa Serra do Sol la sede del reciente municipio funcional de Uiramutã.

La sede semi-urbana de Uiramutã, que se construyó en sobreposición a la presencia de una aldea indígena con el mismo nombre y como una de las principales *corruptelas* de los tiempos del garimpo, actúa desde entonces como sede administrativa municipal y representa la continuidad con algunas de las prácticas propias de la actividad minera del garimpo. A Uiramutã se asocia aún la presencia de moradores no-indígenas, la manutención de relaciones económicas con remanecientes de las agencias de la fazenda y el garimpo, así como las lógicas comerciales no controladas por la comunidad y que permiten la diseminación de bebidas alcohólicas y la desestructuración de la economía regional propia.

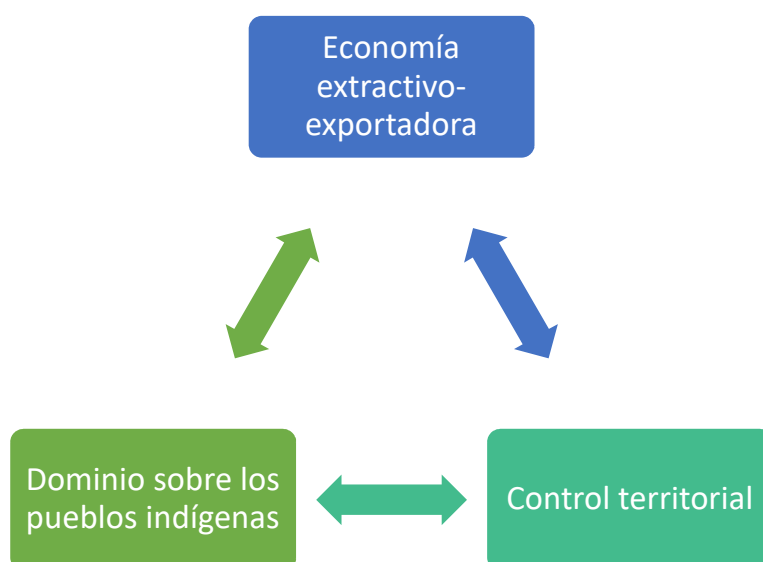
Por otro lado, existen actualmente en el Departamento Nacional de Producción Mineral de Roraima cien requerimientos activos de autorización de pesquisa minera en Raposa Serra do Sol. La mayor parte de ellos se encuentran en la región norte de Raposa Serra do Sol y pertenecen a empresas que ya han causado baja en el Registro General de la Administración Pública. No obstante, la certeza de la existencia de minerales en el subsuelo de Raposa Serra do Sol y la expansión de la minería en los territorios adyacentes en Venezuela y Guyana, hacen presagiar que una eventual regulación de la actividad minera en territorios indígenas va a atraer los intereses de medias y grandes empresas hacia el territorio. En este momento, Congreso Nacional, Gobierno Federal y élite regional de Roraima confluyen en estos intereses, restando a las propias organizaciones indígenas y sus aliados una actitud de resistencia local y de disputa jurídica y política en el ámbito de los derechos constitucionales y del marco internacional.

Conclusiones generales que se desprenden de la investigación

Presentamos a continuación algunas conclusiones de carácter general que proponemos a partir del análisis de los datos que ha producido la investigación.

- a) Una de las formas políticas que se muestra constante en el proceso histórico del sistema-mundo sobre América Latina es la relación orgánica entre: i) economía extractivo-exportadora; ii) control de los territorios; y iii) dominio sobre los pueblos indígenas.*

La expansión del sistema-mundo en América Latina se asentó y caracterizó, en el tema que nos ocupa, por una relación permanente entre tres elementos: la economía extractiva de bienes naturales en beneficio de los centros económicos, el control sobre los territorios y el dominio sobre los pueblos indígenas. Estos tres elementos van a aparecer de modo claro en las diversas escalas espaciales y se van a mantener, bajo formas diversas, después de la formación de los Estados independientes y hasta nuestros días.



Esta constatación constituye un primer marco explicativo sobre el problema que nos habíamos propuesto investigar: la relación de conflictividad entre la expansión del extractivismo minero y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Podemos decir que la relación que se construye entre el proyecto colonial, primero, y el Estado-nación, después, con los pueblos indígenas y con las diversas territorialidades que éstos representan es una relación marcada por las dinámicas de una economía-mundo de escala y su consecuencia intrínseca que se refiere al control del territorio como fórmula para la espacialidad del poder.

Esto ha sido así en las diversas fases del sistema-mundo en América Latina, desde el período colonial hasta el nuevo ciclo expansivo del modelo extractivo que hemos identificado en los primeros quince años del siglo XXI. Se muestra como una tendencia constante, permanente.

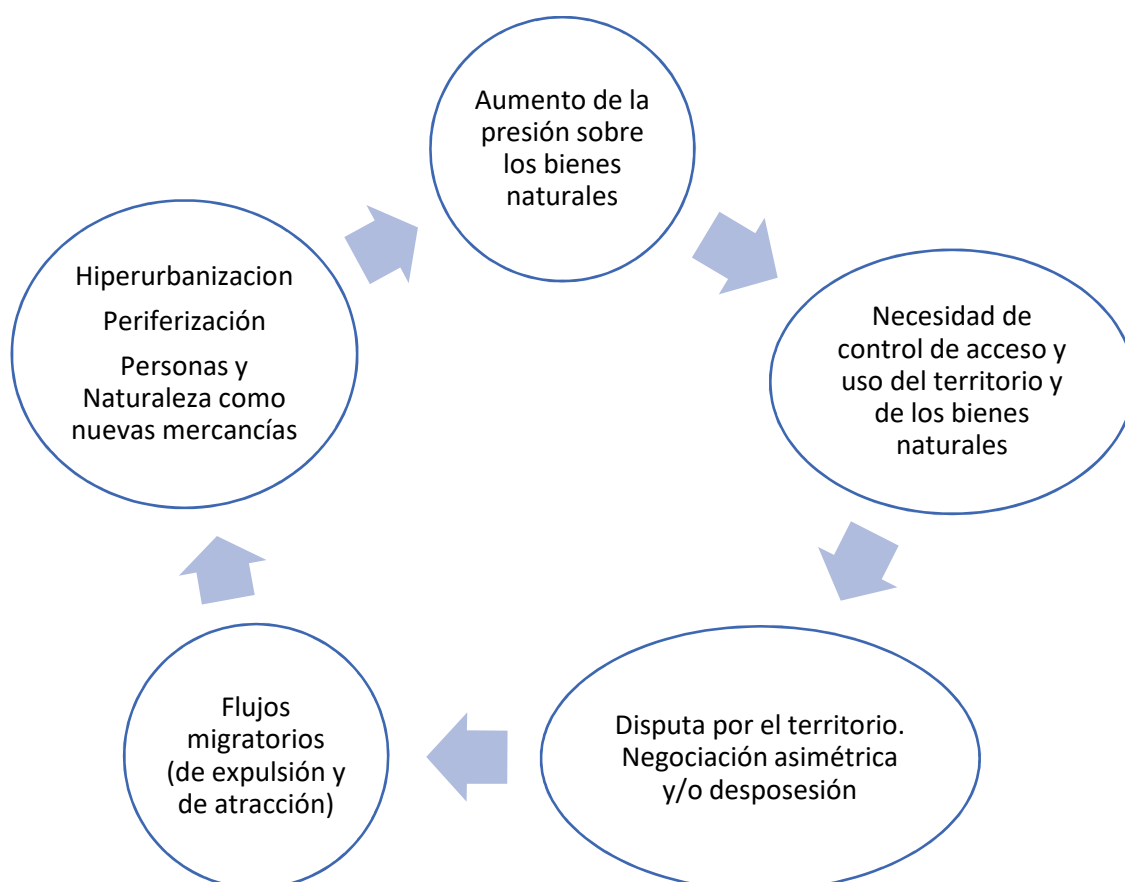
Esta tendencia de ámbito general explica igualmente el contexto histórico concreto de la escala local de nuestra investigación, la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. La relación que la Corona portuguesa desde el siglo XVIII y el Estado brasileño a partir del siglo XIX establecen con los pueblos indígenas de la región del río Branco, y de modo particular con las comunidades que habitan el espacio *circum*-Roraima donde se localiza Raposa Serra do Sol, ha sido construida sobre la base de dos elementos:

- Control territorial de la región como frontera política y como frontera económica al servicio de los intereses primero de la Corona y posteriormente de la economía nacional y su inserción en la economía global;
- La explotación de la mano de obra indígena, desde la empresa extractiva de la *balata* a inicios del siglo XIX hasta la empresa ganadera y garimpeira a lo largo del siglo XX;

De este modo, podemos decir que el reconocimiento definitivo del derecho territorial de las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol – la primacía del derecho - se hace realidad por la capacidad política de las comunidades y de sus alianzas con otros sectores, pero solamente después de enfrentar los intereses de la economía minero-agro-exportadora y sus intereses sobre el territorio.

b) La economía extractivo-exportadora desencadena un proceso de acumulación necesariamente relacionado con la desposesión, funcionando como un ciclo de retroalimentación.

Hemos identificado que la dinámica de “acumulación por desposesión”, como la define Harvey, es inherente a la economía extractivo-exportadora. Se trata de una actividad que acumula en la medida en que desposesiona, porque requiere dominar y apropiarse del territorio concreto – en el sentido que le da Lefebvre – sea como espacio para la extracción, para la producción o para la circulación de bienes. Esta dinámica de acumulación por desposesión funciona, en nuestra opinión, como un ciclo que reflejamos, durante la investigación, con el siguiente esquema:



El análisis del complejo y acelerado proceso de urbanización en la región amazónica, vinculado a los grandes proyectos – extractivos y de infraestructura – como nos recordaba Cordeiro da Trindade, nos demuestra el funcionamiento de este ciclo.

Los conflictos socioambientales se localizan, dentro del ciclo, en la fase de la disputa por el territorio – identificada en el dibujo como la tercera etapa. Ahora bien, el caso de Raposa Serra do Sol nos demuestra que la negociación asimétrica y/o la desposesión no son las únicas salidas posibles, sino que la primacía del derecho, derivada de un proceso de movilización permanente, organizado y sistemático, consigue frenar y romper la circularidad del ciclo, abriendo nuevas posibilidades. Esto nos lleva a la siguiente conclusión.

c) En el último tercio del siglo XX e inicios del siglo XXI, la expansión de la actividad minera, en particular, y de la economía extractivo-exportadora, en general, se ve confrontada por un nuevo escenario que articula eficazmente tres elementos: la resistencia de las comunidades en el territorio; su capacidad de articulación política con otros actores y en otras escalas; y la consolidación de un estándar de derechos colectivos en los niveles nacional, regional e internacional.

Estas tres dimensiones, articuladas entre sí, componen un cuadro que escala los conflictos socioambientales y las dinámicas globales de la economía-mundo a un campo complejo donde interactúan actores de diversa naturaleza, abriendo posibilidades de resolución de conflictos que anteriormente no se daban. La homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol es un ejemplo de lo que estamos diciendo.



El análisis de los tres factores en su interacción e integralidad nos puede ayudar a explicar las posibilidades de acción de las comunidades locales en el nuevo ciclo de

conflictos socioambientales que vivimos en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, se supera así el escenario en el cual la tensión entre la dinámica global – frontera extractiva – y la comunidad local se resolvía directamente en el territorio con una relación desigual de fuerzas, que normalmente pasaba por la coacción, la violencia, la negociación desigual o la delegación de políticas públicas fundamentales – educación, salud – en la cuenta de la empresa. Ahora, en cada conflicto socioambiental median otras dinámicas intermedias que contribuyen a visibilizar el conflicto y activar otros mecanismos en las diversas escalas nacional, regional e internacional.

La resistencia en el territorio establece hoy relaciones sinérgicas de articulación con otros sectores sociales, movimientos, organizaciones y entidades que actúan a escalas más amplias que el territorio. Y el estándar de derechos consolida un escenario en el cual los Estados tienen obligaciones específicas y por su omisión pueden ser denunciados conforme los mecanismos establecidos. Podemos decir que el escenario actual ha incorporado mayor protección a los territorios y establece mayores responsabilidades a Estados y grupos económicos.

Es cierto que la realidad cotidiana nos devuelve un tapiz formado por el aumento de los conflictos socioambientales con base territorial, lo que vendría a describir un período de precario o nulo cumplimiento de las garantías de defensa y protección de los territorios y de los derechos consagrados. No obstante, los mecanismos de protección ya existen y la pericia política cada vez más creativa de los movimientos sociales ya ha demostrado que la primacía del derecho puede prevalecer sobre el interés estrictamente económico.

d) Es posible delinear claves de discernimiento político en situaciones de conflictividad socioambiental a partir de dos condiciones sociohistóricas ineludibles: i) la relación de la actividad minera y la economía extractivo-exportadora con la crisis socioambiental que se evidencia en las diversas escalas del sistema-mundo; ii) la concepción de la garantía de los derechos como condición previa al desarrollo

Los conflictos socioambientales son frecuentemente representados como un dilema, más o menos legítimo, entre intereses antagónicos que deben conciliarse. Estos intereses se presentan de un modo explícito entre aquellos que pretenden operar económicamente sobre el territorio – grupos económicos – y aquellos que defienden el lugar donde habitan, trabajan, existen y se reproducen social y culturalmente – las comunidades indígenas, por ejemplo. También los intereses pueden presentarse de un modo implícito, relacionados con campos semánticos como el de interés general, el progreso o el desarrollo que han sido apropiados y significados por la economía-mundo.

Es en este campo donde opera el Estado equilibrista y compensador que hemos analizado en el Capítulo 5.

Presentado así, el conjunto parece conducirnos a un escenario complejo de dirimir por parte de los Estados o a aquello que algunos llaman el terreno de lo “indecidible”. Sin embargo, a nuestro juicio, dos condiciones históricas – evidenciadas y presentadas en este trabajo – pueden y deben actuar como marcos donde encontrar claves de discernimiento para la decisión y la acción política.

La primera condición histórica hace referencia a la relación que existe entre la expansión de la frontera extractivo-exportadora, particularmente la minera, y la compleja crisis socioambiental que hemos enunciado en el Capítulo 3. Las evidencias sobre la fractura del relato moderno del progreso y el desarrollo, el crecimiento ilimitado y la autosuficiencia de la tecnocracia ponen delante de nosotros un ineludible desafío ético, político y epistemológico, que pasa necesariamente por la necesidad de una nueva racionalidad ambiental y de un diálogo de saberes con otras matrices culturales y epistémicas. El actual modelo económico, excesivamente dependiente de los hidrocarburos y que ha imprimido a la tierra un ritmo extractivo acelerado, presenta señales evidentes de desgaste y de insostenibilidad.

Bajo esta perspectiva, la discusión que se presenta en Brasil, por ejemplo, sobre una eventual apertura de territorios sociales – como las tierras indígenas – a nuevas fronteras económicas – como la minera – y que vendría a afectar sustancial e irreversiblemente a la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, parece encaminarse en una dirección claramente opuesta a donde nos apuntan todos los indicios y evidencias de los últimos cuarenta años. Profundizar un modelo económico en función del crecimiento acelerado de la demanda por bienes naturales – que es una de las dinámicas globales actuales – no puede ser un camino apropiado en el escenario actual. Y aquí residen, a nuestro juicio, elementos para el discernimiento político.

La segunda condición histórica, a la que ya nos hemos referido antes, hace referencia a la consolidación de los derechos colectivos como derechos fundamentales, comprendidos desde su coherencia y conjunto. El conflicto entre la actividad minera y las comunidades indígenas no confronta solamente la pretensión de derechos que diversos actores disputan sobre el control de las mismas bases materiales – suelo y subsuelo – como si fuesen intereses y derechos igualmente legítimos. Se trata de cuerpos de derecho con naturalezas sensiblemente distintas. Mientras los derechos de los pueblos indígenas mantienen un carácter originario y se relacionan con sus posibilidades de continuar-siendo, los intereses económicos responden a estrategias coyunturales, específicamente económicas y que no benefician del mismo modo al conjunto de la sociedad.

Desde un punto de vista práctico, parece claro que cualquier operación minera en el subsuelo condiciona, limita, reduce e impide el ejercicio pleno de las comunidades

indígenas al usufructo exclusivo de los bienes naturales existentes en su territorio. Esto problematiza cualquier debate sobre la posibilidad de conciliar intereses, pues uno de ellos simplemente acaba con las condiciones del otro.

Al mismo tiempo, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas se asocia, inseparablemente, a sus derechos a determinar libremente los propios caminos de desarrollo, a garantizar las propias formas de organización social, política y económica y a mantener sus sistemas culturales en permanente interacción con los otros grupos sociales; el derecho a escoger lo que es mejor para ellos. En definitiva, el derecho-a-ser-con-el-mundo a partir de la alteridad y la diversidad.

Haciéndonos eco de uno de los documentos citados en este trabajo y de autoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la garantía de los derechos humanos no puede ser considerada como un obstáculo al desarrollo – ni como una adenda, ni como una moneda de trueque, añadimos nosotros – sino como una condición previa. Dicho de otro modo, lo que convengamos en llamar desarrollo e interés común solo puede construirse a partir de la garantía de los derechos fundamentales y no a pesar de ellos o contra ellos o independientemente de ellos. Esto sitúa la acción política más cerca de la nueva racionalidad ambiental necesaria para buscar nuevos caminos posibles de convivencia que necesariamente deberán ser construidos a partir del territorio – en su sentido social – y no sobre él. Esta es la cuestión clave para la decisión política de los agentes obligados: en este caso, de los Estados. Y aquí encontramos nuevamente, en nuestra opinión, elementos para la decisión política.

Conclusiones a partir de la escala local, Raposa Serra do Sol

1. Hemos constatado en nuestra investigación que la actividad minera se presenta como una *frontera perenne* en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol desde las primeras décadas del siglo XX. Hasta la década de 90, la extracción ilegal de oro y diamantes en el territorio indígena bajo la forma de garimpo generó un fuerte impacto social, cultural, económico y ambiental. Particularmente en las décadas de 80 y 90, cuando el garimpo atrajo hacia dentro del territorio indígena a millares de personas extrañas, la minería ilegal interrumpió violentamente la vida de las comunidades indígenas y su derecho al usufructo exclusivo de los bienes naturales y el derecho a vivir en paz y en un ambiente natural sano.

Las heridas del garimpo han quedado grabadas y aún permanecen en la institucionalización de la antigua *vila* o *corruptela* de Uiramutã como sede de un nuevo municipio. Dicha sede queda dentro del territorio indígena como espacio de

interferencia externa y de especulación política, aparte de albergar aún a grupos que restaron de los antiguos garimpos.

Finalmente, el presente de Raposa Serra do Sol se caracteriza también como el momento de disputar políticamente un futuro con o sin minería. La eventual regulación de la actividad minera en territorios indígenas por el Congreso Nacional afectaría gravemente la integridad de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, particularmente en su región serrana localizada al norte donde ya se han localizado las potencialidades mineras a través de los pedidos de autorización para pesquisa.

Situaría esta zona en la perspectiva del proceso de mundialización de los territorios, por el cual: la significación económica del lugar se determinará por decisiones tomadas en lugares muy distantes y ajenos a la comunidad que habita el territorio; aumentará su especialización productiva, vinculada necesariamente a suministrar bienes minerales; aumentará la tecnificación del espacio natural; y la intervención maciza sobre el subsuelo limitará, reducirá o directamente impedirá el pleno goce de derechos por parte de las comunidades indígenas.

2. Hemos constatado en el estudio que existen actualmente 100 requerimientos en activo de autorización para pesquisa minera dentro de Raposa Serra do Sol dentro del Departamento Nacional de Produção Mineral. Los titulares de buena parte de ellos han causado baja en el Registro como personas jurídicas, lo que aparentemente invalidaría cualquier perspectiva de derecho. En todo caso, la simple existencia de estos requerimientos como un procedimiento administrativo abierto ya es un hecho funcional al sector minero porque actúa como una fuerza de *visibilización* de Raposa Serra do Sol, en el sentido que hemos trabajado en el capítulo 1 de nuestro trabajo: un territorio puede ganar visibilidad para el modelo económico hegemónico en la medida en que pasa a representar el acceso a determinados bienes naturales.
3. Por otro lado, hemos presentado la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol como un espacio perteneciente a un territorio mayor al que nombramos con la categoría de *circum-Roraima* (Colson y Santilli), y que describimos como un contínuum de ocupación de diversos grupos étnicos a pesar de estar dividido, actualmente, por tres Estados nacionales. Este espacio territorial mantiene actualmente una condición de *visibilidad* para la economía-mundo por su riqueza mineral e identificamos en él la coexistencia de las dos metáforas territoriales que nos propone Milton Santos con los conceptos de *horizontalidad* y *verticalidad*.

De un lado, la conexión espacial entre comunidades indígenas de uno y otro lado de las fronteras nacionales, manteniendo la lógica de ocupación continua del espacio, caracteriza la territorialidad *circum-Roraima* por sus dinámicas de *horizontalidad*: vecindad, parentesco, solidaridad, alianza. De otro lado, la incidencia de las dinámicas globales vinculadas a la actividad minera, representadas de formas

diversas en el territorio en función de las diversas institucionalidades políticas de los Estados nacionales implicados – Venezuela, Guyana y Brasil - presentan las dinámicas *verticales* que se dan sobre el territorio: extracción, exportación, proyectos hidroeléctricos, presencia de empresas transnacionales, ...

Por último, la inclusión del territorio *circum*-Roraima, y Raposa Serra do Sol dentro de él, en el Eje de las Guayanas de la iniciativa IIRSA consolida sobre este espacio la semántica que la economía-mundo quiere instalar en él: un territorio proveedor de bienes primarios – minerales, madera, commodities agrícolas – y un territorio de flujo, de tránsito, de los bienes que proceden del interior amazónico y se dirigen hacia el balcón comercial del Atlántico.

4. Al mismo tiempo, Raposa Serra do Sol representa también uno de los conflictos socioambientales con base en el territorio en el cual las comunidades locales consiguieron retomar el control sobre el espacio propio a través de estrategias multisituadas – desde las acciones en la base a campañas internacionales, pasando por una intensa actividad política en las esferas regional y nacional - y de relaciones articuladas a diversas escalas. Es uno de los espacios del '*¡Ya basta!*' que define Ana Esther Ceceña, representado en el caso específico de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol por la decisión de abril de 1977 como desencadenante político y la determinación por la autodemarcación que las comunidades protagonizaron a lo largo de las décadas de 80 y 90.

El proceso histórico de Raposa Serra do Sol simboliza, así mismo, uno de los fenómenos exitosos de re-configuración de las formas étnico-políticas a partir de la necesidad de interactuar en campos de negociación nuevos, como los que se abrían a partir de la década de 70. Nos referimos a la habilidad para articular un proceso movilizador de base y supracomunitario con una nueva gramática organizacional y narrativa, encarnada en la organización CIR, que permitió llevar la defensa de los derechos de las comunidades indígenas a los más diversos espacios políticos con una capacidad admirable. Sobre todo teniendo en cuenta que la homologación de Raposa Serra do Sol tenía entre sus opositores a toda la élite agraria y política de Roraima, a buena parte del Congreso Nacional, a las pretensiones desarrollistas de los sucesivos gobiernos y, en muchas ocasiones, a sectores importantes de la sociedad regional más próxima.

Concluimos aquí, por tanto, nuestro trabajo. La historia de la retomada de la tierra por parte de las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol, delante de una *frontera minera* que insiste en avanzar, nos puede conducir a una comprensión más precisa de las dinámicas y actores que operan en los conflictos socioambientales con base en el territorio que se dan en América Latina. Lo local encierra en su especificidad los mecanismos que actúan en las escalas nacional, regional y global. Si las dinámicas

globales pueden explicar lo que sucede en cada lugar, la concreción de lo local devela con la misma transparencia el funcionamiento del sistema en su conjunto.

La economía-mundo, hija de la modernidad, enfrenta en los últimos años señales evidentes de desgaste debido a las marcas que deja en los ecosistemas de los que depende y a las graves desigualdades sociales que continúan creciendo. La región amazónica es uno de los espacios donde estas heridas están más abiertas, explorada en su suelo y en sus entrañas. La necesidad de una nueva racionalidad y una nueva forma de conocimiento sobre el mundo, que se geste en el diálogo con los *alter*-saberes protagonizados por la diversidad de pueblos, comunidades y grupos, se configura hoy como uno de los principales desafíos para la acción social y la decisión política.

Los territorios concretos, como el caso de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, acogen las contradicciones de una economía-mundo que acumula mientras despoja, explora mientras deja espacios inertes para la vida. Pero también son los territorios concretos los espacios de la solidaridad y del conocimiento, de la diversidad y de la posibilidad, de la r-existencia (Porto-Gonçalves) y las *alter*-nativas.

Anexos

ANEXO Nº 1. Titulares de los requerimientos de autorización para pesquisa minera dentro de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol y que se mantienen en activo en la oficina del DNPM con fecha 1 de julio de 2016

Nº proceso	Solicitante	Bien material para el que solicita la pesquisa	Área (hectáreas)
880283/80	CODESAIMA	Ouro	9990
881188/83	Mineração e Fazenda Vila do Principe Ltda.	Columbita	2432
881189/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Columbita	7066,88
881190/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Columbita	8712
881191/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Platina	4530,64
881192/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Platina	2548,46
881193/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Platina	8631,15
881196/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Diamante Industrial	10000
881197/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Diamante Industrial	10000
881198/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Diamante Industrial	10000
881199/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Diamante Industrial	10000
881200/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Diamante Industrial	10000
881201/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Rutilo	9983,95
881202/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Rutilo	9139,85
881203/83	Mineração e Fazenda Vila do Principe Ltda.	Rutilo	9827,55
881204/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Rutilo	5349,4
881205/83	Mineração Serra Morena Ltda.	Rutilo	7728
881753/83	CPRM	Scheelita	10000
881754/83	CPRM	Scheelita	7418,75
881761/83	Companhia Industrial Amazonense	Berilo	925
881294/84	Hexágono Minerações Ltda.	Ouro	8778,09
881295/84	ADH Mineração Ltda.	Ouro	2000
881837/84	Tratex Mineração Ltda.	Arsenio	10000

881838/84	Tratex Mineração Ltda.	Arsenio	10000
881839/84	Tratex Mineração Ltda.	Arsenio	10000
881840/84	Tratex Mineração Ltda.	Arsenio	9999
881841/84	Tratex Mineração Ltda.	Arsenio	9449
881996/84	Tratex Mineração Ltda.	Niobio	9999
881997/84	Tratex Mineração Ltda.	Niobio	9990
882070/84	Cometa-Mineração e Indústria Ltda.	Ouro	10000
882071/84	Cometa-Mineração e Indústria Ltda.	Ouro	10000
882142/84	Internacional Industria, Mineração e Comércio Ltda.	Salgema	7864,09
882143/84	Internacional Industria, Mineração e Comércio Ltda.	Salgema	7211,74
882144/84	Internacional Industria, Mineração e Comércio Ltda.	Salgema	9849,53
882145/84	Internacional Industria, Mineração e Comércio Ltda.	Salgema	9983,76
880356/85	ADH Mineração Ltda.	Ouro	376,9
880528/85	CPRM	Zinco	6693,51
882528/85	CPRM	Zinco	6693,51
880413/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Níquel	10000
880414/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Níquel	10000
880415/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Níquel	9969,2
880416/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Níquel	9961,67
880429/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Titânio	10000
880430/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Titânio	10000
880431/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Titânio	10000
880432/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Titânio	9996,91
880433/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Titânio	9289,4
880444/86	Cabixis Brasileira de Mineração	Wolframita	8822,05
880491/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Niobio	5935,32
880510/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Platina	6367

880511/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Platina	879,2
880512/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Platina	7679,02
880513/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Platina	10000
880514/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Platina	10000
880515/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Cobre	7493,8
880516/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Cobre	6776,19
880517/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Cobre	6740
880518/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.		5640
880519/86	Mirage. Mineração, Industria y Comércio Ltda.	Cobre	4420
880529/86	CPRM	Zinco	9969,72
880140/87	Saga Mineração Ltda.	Manganês	9992
880141/87	Saga Mineração Ltda.	Manganês	10000
880142/87	Saga Mineração Ltda.	Manganês	10000
880143/87	Saga Mineração Ltda.	Manganês	10000
880144/87	Saga Mineração Ltda.	Ferro	482,19
880145/87	Saga Mineração Ltda.	Ferro	94,21
880146/87	Saga Mineração Ltda.	Ferro	5752
880147/87	Saga Mineração Ltda.	Ferro	41,03
880148/87	Saga Mineração Ltda.	Ferro	9880
880147/93	Cremilda Byrro Fonseca	Diamante Industrial	1000
880239/93	Antonio Mauricio Castelo Branco	Minério de ferro	693,6
880240/93	Antonio Mauricio Castelo Branco	Minério de ferro	97,62
880244/93	Antonio Mauricio Castelo Branco	Minério de ferro	139,6
880253/93	Antonio Mauricio Castelo Branco	Minério de ferro	116,08
880670/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880675/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880679/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000

880682/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880685/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880688/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880689/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	990
880690/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Calcário	1000
880691/95	Kurt Itamar Kettenhuber	Ouro	900
884027/99	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9967
884028/99	Mineração Florália Ltda.	Ouro	8568,99
884029/99	Mineração Florália Ltda.	Ouro	6844,86
884030/99	Mineração Florália Ltda.	Ouro	393,57
884024/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9706,24
884025/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9887,13
884026/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	2955,99
884027/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9649,15
884028/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	8858,77
884029/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9670,87
884030/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9800
884031/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	9925
884032/00	Mineração Florália Ltda.	Ouro	8925,24
884015/02	Paulo Pereira Rebouças	Bauxita	2396,14
884019/02	Maria de Fátima Neves Lopes	Diamante	1742,5
884011/03	Maria de Fátima Neves Lopes	Diamante	2778,5
884095/08	Tringulo Comércio e Representação Ltda.	Granito	49,9

ANEXO Nº 2 - DECLARAÇÃO DE TABALASCADA

Nós, lideranças indígenas Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Ye'kuana, Yanomami do Brasil, lideranças indígenas Arauak, Wapichana, Akawaio da Guiana Inglesa, e lideranças indígenas Ye'kuana, Uwottuja, Yanomami, Yabarana e Baré da Venezuela, juntamente com nossas organizações indígenas Conselho Indígena de Roraima – CIR, Hutukara Associação Yanomami – HAY, Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos – APITSM, Conselho do Povo Ingarikó – COPING, Organização Regional dos Povos Indígenas do Amazonas – ORPIA, Horonami – Associação Yanomami da Venezuela, Organização de Mulheres de Aisharatoon, organizações aliadas como o Instituto Socioambiental – ISA e Conselho Indigenista Missionário – CIMI, e demais convidados, reunidos no Seminário sobre Mineração e Hidrelétricas em Terras Indígenas realizado nos dias 20 a 22 de maio de 2014 na Comunidade Indígena Tabalascada, região Serra da Lua, Roraima – Brasil, afirmamos que a Mineração e Hidrelétricas atingem a vida dos povos indígenas e que Mineração e Hidrelétricas andam juntas! Sem Hidrelétricas não tem Mineração.

Os benefícios alegados por quem defende a mineração e as hidrelétricas não são os benefícios que queremos ter. Para nós o que tem importância é a terra, a vida, as florestas, os animais, a cultura, a tranquilidade e nossa forma de vida garantida para nossas futuras gerações.

Considerando o significativo número de pedidos de pesquisa e lavra que incidem nas terras indígenas no Brasil;

Considerando que 68% do território da Guiana pode ser afetado por projetos de mineração e hidrelétricas, e na Venezuela se avançam as concessões para exploração mineral de vastas áreas no Estado Bolívar e Amazonas por empresas chinesas, sendo que 90% das terras indígenas sequer foram demarcadas como estabelece a Constituição Venezuelana;

Considerando que as regiões fronteiriças na Amazônia estão fortemente afetadas por garimpeiros e empresários de garimpo brasileiros que, muitas vezes operam ilegalmente, principalmente nas Regiões 7 e 9 na Guiana Inglesa;

Considerando que o Governo Brasileiro tem acordos com o Governo Guianense para construção de hidrelétricas, estradas e outras grandes obras, e que estes acordos precisam incluir a necessidade de ter os direitos dos povos indígenas daquele país assegurados;

Considerando que os grandes projetos visam beneficiar as empresas que os constroem e as que vão consumir a energia gerada, causando maior concentração de riqueza, e que desconsideram a participação e os planos de desenvolvimento dos povos indígenas que afetam;

Considerando os grandes impactos no meio ambiente e na sobrevivência física e cultural dos povos indígenas causados pela mineração e pelas hidrelétricas;

Considerando a degradação da qualidade de vida e os danos reais e potenciais existentes na região da tríplice fronteira Brasil-Guiana-Venezuela, divisor de águas no Escudo das Guianas, conhecida como Circum Roraima, um dos lugares mais antigos, ricos em sociobiodiversidade e conservados do planeta, por ser território habitado e considerado sagrado pelos povos indígenas dos três países, cujo marco comum é o Tepui Roraima, a "Mãe das Águas" ou Wazaká, lugar mitológico de origem de todas as frutas, sementes e plantas, e casa de Macunaima;

Considerando a existência de propostas no Congresso Nacional Brasileiro que visam restringir os direitos indígenas à terra e ao uso dos recursos naturais, comprometendo desde a autonomia até a sobrevivência física e cultural;

Considerando que os Estados Brasileiro, Venezuelano e Guianense não estão cumprindo com a obrigação de consultar os povos indígenas sobre os projetos e programas de desenvolvimento nacionais;

Convocamos as organizações indígenas e de apoio a se mobilizarem contra a Mineração e Hidrelétricas em Terras Indígenas na Amazônia:

Que o Estado Brasileiro adote medidas para a rejeição do PL 1610/96 de autoria do Senador Romero Jucá que regulamenta a mineração em terras indígenas, e medidas para proteger o direito fundamental dos povos indígenas, ou seja, a vida, a cultura, a justiça, e não permita a mineração e hidrelétricas em Terras Indígenas na Amazônia;

Que o Estado Venezuelano proceda à demarcação das terras indígenas e respeite as deliberações e propostas das organizações indígenas que são apresentadas nas Mesas de Diálogos;

Que o Estado da Guiana assine a Convenção 169 da OIT, somando-se ao conjunto de países e da comunidade internacional no respeito e garantia dos direitos dos povos indígenas;

Que os Estados do Brasil, Guiana e Venezuela respeitem e cumpram as obrigações adquiridas com a Convenção 169 da OIT, garantindo o direito de livre determinação dos povos indígenas e o direito de consulta livre, prévia e informada diante de quaisquer projetos de mineração e hidrelétricas que se projetem sobre nossos territórios.

Por fim, declaramos que somos contra a Mineração e Hidrelétricas nas terras indígenas da Amazônia.

Comunidade Indígena Tabalascada - Roraima, 22 de Maio de 2014.

Abaixo Assinamos

ANEXO Nº 3 - SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.610, DE 1996

Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, De que tratam os arts. 176, §1º, e 231, § 3º, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui regime especial para aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, inclusive na modalidade de extrativismo mineral, em consonância com o disposto nos arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 2º As atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas reger-se-ão pelo disposto nesta Lei e, no que couber, pelas legislações mineral, indigenista e ambiental pertinentes.

Parágrafo único. Não se aplica ao regime previsto no art. 1º o direito de prioridade previsto no Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 3º As atividades referentes ao aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas serão autorizadas apenas nas terras indígenas cuja demarcação já tenha sido homologada por decreto presidencial.

§ 1º Nas terras indígenas que estejam em processo administrativo de demarcação, somente será permitida exploração de minérios estratégicos relacionados com a segurança nacional, por iniciativa do Poder Executivo.

§ 2º A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas somente poderão ser realizadas por empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País.

§ 3º O aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas por meio de extrativismo mineral ou garimpagem será privativo das comunidades indígenas ocupantes das áreas afetadas pela atividade, desde que organizadas em cooperativas e observadas as demais exigências previstas nesta Lei e nas legislações mineral, indigenista e ambiental aplicáveis.

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 4º O procedimento administrativo para a pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas poderá ser iniciado por ato do Poder Executivo, ou a requerimento de qualquer interessado, por meio de requerimento encaminhado ao Departamento

Nacional de Produção Mineral (DNPM), ou ao órgão que o venha a suceder no desempenho de suas funções.

Art. 5º Publicado o ato do Poder Executivo, ou recebido o requerimento de interessado, nos termos do art. 4º, o DNPM fará publicar edital para que, no prazo de sessenta dias, a contar dessa publicação, qualquer interessado possa encaminhar a esse órgão propostas para pesquisa e lavra de recursos minerais na área requerida, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 2º desta Lei.

§ 1º As propostas dos interessados na exploração de recursos minerais nas terras indígenas objetivadas deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos de instrução:

I – memorial descritivo da área pretendida;

II – extensão superficial da área objetivada e indicação da área indígena, Município e Estado em que se situa;

III – no caso de empresas interessadas, prova de sua constituição sob as leis brasileiras, inclusive endereço de sua sede, razão social, número de seus atos constitutivos no órgão de registro de comércio competente e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, bem como sua respectiva situação cadastral;

IV – relação dos documentos que permitam comprovar a capacidade técnica, a idoneidade financeira e a regularidade jurídica e fiscal dos proponentes;

V – no caso de extrativismo mineral ou garimpo, prova da constituição da cooperativa de comunidade indígena habitante da área objetivada e de seu registro junto ao órgão federal responsável pela gestão e regulação das atividades relativas à exploração dos recursos minerais do país e demais comprovantes de sua regularidade jurídica e fiscal;

VI – no caso de êxito da atividade de pesquisa mineral, percentuais sobre os resultados da lavra a serem pagos, observado o disposto no art. 15 desta lei, investimentos em infraestrutura, compensações econômicas e sociais a serem oferecidos às comunidades indígenas afetadas.

§ 2º O DNPM dará ciência à Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre a instauração do procedimento administrativo para pesquisa e lavra de recursos minerais na reserva indígena objetivada.

Art. 6º Findo o prazo previsto no art. 5º, e no prazo subsequente de cento e oitenta dias, o DNPM fará a verificação da regularidade das propostas e, simultaneamente, serão elaborados pareceres técnicos preliminares:

I – sobre a potencialidade geológica dos recursos minerais presentes na área e seu aproveitamento;

II – sobre prováveis restrições ambientais e condições para a realização de atividade de pesquisa e lavra na área pretendida;

III – sobre possíveis impactos da exploração mineral na cultura e tradições da comunidade indígena.

§ 1º Os pareceres técnicos de que trata o caput resultarão, respectivamente, em três laudos: geológico, ambiental e antropológico.

§ 2º Os pareceres técnicos de que tratam os incisos I a III do caput serão elaborados por comissões compostas por, no mínimo, três técnicos, devendo ser submetidos à aprovação, respectivamente, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional do Índio (Funai).

§ 3º Admitir-se-á o aerolevanteamento para balizar o parecer técnico previsto no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Decorrido o prazo de noventa dias, o DNPM encaminhará à Funai os pareceres técnicos mencionados no caput para a convocação de consulta pública das comunidades indígenas interessadas.

Art. 7º Dentro do prazo de cento e vinte dias após recebidos os pareceres técnicos mencionados no art. 6º, a Funai promoverá consulta das comunidades indígenas ocupantes das áreas pretendidas para aproveitamento de recursos minerais.

§ 1º Na consulta pública, será dado conhecimento às comunidades indígenas interessadas, em linguagem que lhes for acessível, da existência de interessados na exploração de recursos minerais nas terras por eles ocupadas, bem como das implicações da execução dessas atividades.

§ 2º Da consulta pública deverão participar os seguintes membros:

I – um representante da Funai, que a presidirá;

II – um representante do DNPM;

III – um representante do Ibama.

§ 3º Da consulta pública mencionada no caput poderão participar todas as comunidades indígenas presentes na terra indígena objetivada pela exploração de recursos minerais.

§ 4º Caso manifeste interesse, poderá o Ministério Público Federal indicar um representante para compor a comissão mencionada no § 2º.

§ 5º É também facultada a presença de um representante de cada empresa interessada na realização das atividades de aproveitamento de recursos minerais nas terras indígenas objetivadas.

Art. 8º Concluída a oitiva das comunidades indígenas afetadas, os interessados na exploração dos recursos minerais, habilitados nos termos do art. 5º desta Lei, terão o prazo improrrogável de trinta dias para, caso o desejem, adequarem suas propostas

iniciais às reivindicações feitas pelas comunidades indígenas na consulta pública mencionada no art. 7º.

§ 1º Findo o prazo previsto no caput, o DNPM terá o prazo de trinta dias para encaminhar à Funai as alterações realizadas nas propostas originalmente apresentadas.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no § 1º, a Funai, no prazo de sessenta dias, declarará vencedora a proposta que oferecer às comunidades indígenas afetadas a maior participação percentual sobre os resultados da lavra e as maiores compensações sociais e econômicas.

Art. 9º Caso não haja a concordância das comunidades indígenas na realização das atividades de exploração mineral nas terras por elas ocupadas, o processo será encaminhado a uma Comissão Deliberativa, que, no prazo de sessenta dias após o prazo previsto no § 1º do art. 8º, decidirá, dentre as propostas apresentadas, qual a melhor para as comunidades indígenas afetadas.

§ 1º A Comissão Deliberativa prevista no caput será formada pelos seguintes membros:

I – um representante da Funai;

II – um representante do DNPM;

III – um representante do Ibama;

IV – dois Deputados Federais, indicados pela Câmara dos Deputados;

V – dois Senadores, indicados pelo Senado Federal.

§ 2º Caso manifeste interesse, poderá o Ministério Público Federal indicar um representante para compor a comissão deliberativa mencionada no § 1º.

§ 3º Dentre os critérios a serem observados para a definição da melhor proposta, constarão, obrigatoriamente, os seguintes:

I – maiores valores de participação sobre os resultados da lavra mineral;

II – maiores compensações sociais e econômicas oferecidas às comunidades indígenas afetadas;

III – maiores investimentos em infraestrutura para as comunidades indígenas;

IV – melhores incentivos à preservação das tradições e da cultura das comunidades indígenas;

V – utilização das melhores tecnologias de aproveitamento da jazida mineral, com menores impactos ambientais.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 10 A proposta vencedora, escolhida nos termos do art. 8º ou do art. 9º desta Lei, será encaminhada pelo Poder Executivo, no prazo de quinze dias após a escolha, para a análise do Congresso Nacional.

§ 1º Recebida a proposta, o Congresso Nacional constituirá Comissão Mista de Deputados Federais e Senadores, que terá o prazo de quinze dias para emitir seu parecer.

§ 2º O parecer da Comissão Mista deverá ser encaminhado, por meio de projeto de decreto legislativo, para a apreciação, no prazo de trinta dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional.

§ 3º Caso a autorização seja negada, o Congresso Nacional fará publicar o respectivo decreto legislativo, comunicando ao Poder Executivo o encerramento do processo de autorização.

§ 4º Caso seja autorizada a exploração mineral nas terras indígenas, o Congresso Nacional fará publicar o respectivo decreto legislativo e, no prazo de cinco dias após a conclusão da votação, encaminhará o processo ao Poder Executivo para que tenha continuidade o processo de exploração mineral em terras indígenas.

Bibliografía y documentación

Acosta, Alberto y Machado, Decio (2012). Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina. *Revista del Observatorio Social de América Latina*, año XIII, nº 32, 67 – 94.

Acselrad, Henri (2010). Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambiental. São Paulo: *Revista Estudos Avançados* [IEA-USP], vol. 68, nº 24, 103 – 119.

Aguirre Baztán, Ángel (coord.) (1995). *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria.

Aguirre Rojas, Carlos Antonio (2007). Immanuel Wallerstein y la perspectiva crítica del “análisis de los sistemas-mundo”. Florianópolis: *Textos de Economía*, vol. 10, nº 2, 11-57.

Aichino, Gina Lucia *et al.* (2015). Geografías con Carlos Walter Porto-Gonçalves. *Revista del Departamento de Geografía* [FFyH – UNC – Argentina], año 3, nº 4, 230-263.

Albert, Bruce (2002). O ouro canibal e a queda do céu. En Bruce Albert y Alcida Ramos. *Pacificando o branco*. São Paulo: Editora UNESP, 239-263.

Albert, Bruce (2004). Territorialidad, etnopolítica y desarrollo: a propósito del movimiento indígena en la Amazonia brasileña. En IWGIA. *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhague: Editores Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro. Documento nº 39, 221-258.

Albert, Bruce y Milliken, William (2009). *Urihi a. A terra-floresta Yanomami*. São Paulo: Ed. ISA e Instituto de Recherche pour le Développement – IRD.

Alberto Chirif, Pedro García (2009). *Logros y desafíos de las organizaciones indígenas de la Amazonia peruana*. Publicado en fecha 23/01/2009, en: <<http://www.cetri.be/Logros-y-desafios-de-las?lang=fr>>.

Alianza Cívica por la Democracia-ACD (2009). Demanda social por una nueva Ley de Minería. En CIDSE. *América Latina: Riqueza privada, pobreza pública*. Quito: Agencia Latinoamericana de Información - ALAI, 84-103.

Anaya, James (2010). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la Declaración. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y*

futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Copenhague: IWGIA, 194-209.

Antonelli, Mirta Alejandra (2009). Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. En Maristella Svampa y Mirta Alejandra Antonelli (ed.). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Editora Biblos, 52-56.

Antonelli, Mirta Alejandra (2014). Megaminería transnacional e invención del *mundo cantera*. En *Revista Nueva Sociedad*, nº 252, 72-86. Buenos Aires.

Aranibar, Ana M^a et al. (2011). La industria extractiva en América Latina y el Caribe y su relación con las minorías étnicas. Santiago de Chile: Publicación de Naciones Unidas/CEPAL. *Serie Recursos Naturales e Infraestructura*, nº 156.

Assadourian, C. Sempat et al. (1980). *Minería y espacio económico en los Andes*. Siglos XVI-XX. Lima: IEP Ediciones.

Bäckström, Caroline (2013). Evolución y tendencias del rentismo petrolero en el Ecuador 2001-2010. Madrid: Universidad Complutense de Madrid/UCM. *Papeles de Europa*, vol. 26, nº 2, 1-32.

Baines, Stephen Grant (1991). 'É a FUNAI que sabe': A frente de atração Waimiri-Atroari. Belém: MPEG/CNPq/CST/PR.

Baines, Stephen Grant (1993). Censuras e memórias da pacificação waimiri-atroari. Brasília: Departamento Antropologia, Universidade de Brasília. *Série Antropologia* nº 148.

Baines, Stephen Grant (1994). A usina hidrelétrica de Balbina e o deslocamento compulsório dos waimiri-atroari. Brasília: Departamento Antropologia, Universidade de Brasília. *Série Antropologia* nº 166.

Barreto Filho, Henyo Trindade (2014). Áreas protegidas/territórios da diversidade. En Paul Little, (org): *O novos desafios da Política Ambiental brasileira*. Brasília, IEEB, 274-303.

Becker, Bertha (2005). Geopolítica da Amazônia. São Paulo: *Revista Estudos Avançados* vol. 19, nº 53, 71-86.

Becker, Bertha (2012). Reflexões sobre hidrelétricas na Amazônia: água, energia e desenvolvimento. Belém: *Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi*, vol. 7, nº 3, 783-790.

Bello, Luis Jesús y Tillet, Aimé (2015). *Minería en la Amazonia Venezolana: derechos indígenas y ambientales. El caso del pueblo Yanomami*. Caracas: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia – Wataniba y Red Jurídica para la defensa de la Amazonia – RAMA.

Berman, Célio (2011). Notas sobre la energía incorporada en la exportación de bienes primarios en Brasil. *Revista Energía y Equidad. Reflexión y acción para la sustentabilidad en América Latina*, año 1, nº 1, 31-39.

Bosque Maurel, Joaquín (1996). La obra científica del profesor Milton Santos. Madrid: *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, nº 16, 203-223.

Brotton, Jerry (2014). *Historia del mundo en 12 mapas*. Barcelona: Ed. Debate.

Bunker, Stephen G. (2007). Os fatores espaciais e materiais da produção e os mercados globais. En M^a Célia Nunes Coelho y Maurilio de Abreu Monteiro (org.) (2007). *Mineração e reestruturação espacial na Amazônia*. Belém: NAEA.

Burchardt, Hans-Jurgen (2014). Logros y contradicciones del extractivismo. Bases para una fundamentación empírica y analítica. Buenos Aires: *Nueva Sociedad*. Disponible en: <http://nuso.org/media/documents/Logros_y_contradicciones_del_extractivismo._Bases_para_una_fundamentaci%C3%B3n_emp%C3%ADrica_y_anal%C3%ADtica__Febrero_2014.pdf>. Último acceso 21/07/2016.

Caballero Arias, Hortensia (2007). La demarcación de tierras indígenas en Venezuela. Caracas. *Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol 13, nº 3, 189-208.

Cairo Carou, Heriberto (1993). Elementos para una geopolítica crítica: tradición y cambio en una disciplina maldita. En *Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía*, nº 32, 195-213. Oviedo: Revistas de la Universidad de Oviedo.

Cairo Carou, Heriberto (2001). Territorialidad y fronteras del Estado-nación: Las condiciones de la política en un mundo fragmentado. En *Revista Política y Sociedad*, vol. 36, 29-38. Madrid: Ediciones Complutense.

Cairo Carou, Heriberto (2003). Panregiones: viejas y nuevas ideas geopolíticas. En Alberto Rocha Valencia *et al.* *La integración regional de América Latina en una encrucijada histórica*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, 31-48.

Cairo Carou, Heriberto (2009). Territorialidad. En Román Reyes (dir). *Diccionario crítico de Ciencias Sociales*. Madrid: Coedición Plaza y Valdés Editores y Universidad Complutense de Madrid. Acceso el 15 de julio de 2015 en: <<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/territorialidad.htm>>.

Cairo Carou, Heriberto y Bringel, Breno (2010). Articulaciones del Sur Global: afinidad cultural, internacionalismo solidario e Iberoamérica en la globalización contrahegemónica. En *Geopolítica (s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, vol. 1, nº 1, 41-63. Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid.

Campos, Ciro; Pinto, Flavia; y Barbosa, Reinaldo Ambrosio (2008). *O Lavrado de Roraima: importância biológica, desenvolvimento e conservação na maior savana do Bioma Amazônia*. Boa Vista – Roraima: Ed. INPA.

Campos, Ciro (org.) (2011). *Diversidade socioambiental de Roraima: subsídios para debater o futuro sustentável da região*. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Cardoso, Eliana y Holland, Márcio (2010). *¿Sudamérica para los chinos? Un análisis basado en el comercio*. Madrid: Cuadernos CealCI. Fundación Carolina.

Carneiro da Cunha, Manuela (1987). *Os Direitos do Índio. Ensaio e documentos*. São Paulo: Editora Brasiliense.

Carneiro da Cunha, Manuela (org.) (1992). *História dos índios no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2ª ed.

Carneiro Filho, Arnaldo y Braga de Souza, Oswaldo (2009). *Atlas de pressões e ameaças às terras indígenas na Amazônia brasileira*. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Carozzi, Maria Julia (1995). La observación participante en Ciencias Sociales: en busca de los significados del actor. En *Boletín de Lecturas Sociales y Económicas*, año 3, nº 13, 40-49 [UCA – FCSE].

Carvalho, Guilherme (2015). *O PT nos levou às cordas*. Publicado en Blog <<http://macareuamazonico.blogspot.com.es/>> con fecha 16/03/2015.

Casas, Bartolomé de las (1956). *Historia de las Indias*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Casas, Bartolomé de las (1985). *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*. Madrid: Sarpe.

Castanha Gil, Izabel (2004). Territorialidade e desenvolvimento contemporâneo. En *Revista NERA*, ano 7, nº 4, 5-19. São Paulo: Universidade Estadual Paulista.

Ceceña, Ana Esther (coord.) (2008). *De los saberes de la emancipación y de la dominación*. 1ª Ed. Buenos Aires: CLACSO.

Celestino de Almeida, Maria Regina (2012). Os índios na História do Brasil no século XIX: da invisibilidade ao protagonismo. En *Revista História Hoje*, vol 1, nº 2, 21-39. Rio de Janeiro.

Cereceda, Enrique (2007). Agua y minería: una industria sedienta. En *Mining: Intelligence Series*. Editado por Mining and Metals y auspiciado por Business News Americas.

Charters, Claire y Stavenhagen, Rodolfo (ed.) (2010). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA.

Charters, Claire (2010b). La legitimidad de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA, 300-325.

Chicaiza, Gloria (2014). *Mineras chinas en Ecuador. Una nueva dependencia*. Quito: Ed. Elizabeth Bravo.

CIMI-Asesoría Jurídica (2013). Parecer sobre Projeto de Lei Complementar nº 227/2012.

CIMI (2013b). Mineração. Caminho para a riqueza ou para a destruição? Brasília: Edição especial de *Revista Mensageiro*.

CIMI (2013c). *Relatório de Violência contra os povos indígenas no Brasil: dados de 2012*. Brasília: CIMI.

CIMI (2014). Natureza à venda. Brasília: Edição Especial *Revista Porantim*.

CIMI (2014). *Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil: dados de 2013*. Brasília.

Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA.

CNBB (2013). *O Estado que temos e o Estado que queremos. Estado para que e para quem?*. Brasília, Edições CNBB. Brasília.

Colson, Audrey Butt (2013). *Dugout, dried out or flooded out? Hydropower and mining threats to the indigenous peoples of the Upper Mazaruni district, Guyana*. Survival international.

Comegna, María Angela (2006). Comunidades locais e conhecimentos tradicionais na Bolívia. En *Revista Diálogos* [DHI/PPH/UEM] vol. 10, nº 3, 145-166.

Comisión Pastoral Paz y Ecología (2009). La consulta comunitaria: estrategia de lucha contra el atropello y la imposición. En CIDSE. *América Latina: Riqueza privada, pobreza pública*. Quito: Agencia Latinoamericana de Información - ALAI, 19-33.

Comitê Estadual de Direito à Verdade, à Memória e à Justiça do Amazonas (2014). *A ditadura militar e o genocídio do povo Waimiri-Atroari: “por que kamña matou kiña”?* Campinas, SP: Curt Nimuendajú.

Composto, Claudia y Navarro, Mina Lorena (comp.) (2014). *Territorios en disputa, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México DF. 1ª ed. Bajo Tierra Ediciones.

Cordeiro da Trindade Jr, Saint-Clair *et al.* (2011). Espacialidades e temporalidades urbanas na Amazônia ribeirinha: mudanças e permanências a jusante do Rio Tocantins. En *ACTA Geográfica*, edição especial Cidades na Amazônia brasileira, 117-133. Boa Vista: Universidade Federal de Roraima-UFRR.

Cordeiro da Trindade Jr, Saint-Clair (2011b). *Grandes projetos, Urbanização do território e Metropolização na Amazônia*. Publicación digital en: <<http://www.ceap.br/material/MAT21092011193332.pdf>>. Último acceso 21/07/2016.

Cordeiro da Trindade Jr, Saint-Clair (2011c). *Cidades médias na Amazônia oriental: das novas centralidades à fragmentação do território*. Comunicación presentada en el XI Encuentro Nacional de ANPUR. Rio de Janeiro, Brasil. Accesible en: <<http://www.ceap.br/material/MAT21092011193332.pdf>>. Último acceso 21/07/2016.

Costa Delgado, Guilherme. Especialização primária como limite ao desenvolvimento. Em Revista *Desenvolvimento em debate*, vol. 1, nº 2, 111-125. Universidade Federal Rio de Janeiro.

Dallari, Dalmo de Abreu (2014). *Terras indígenas: ameaça ministerial*. Publicación digital con fecha de 13/01/2014: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=7339>>.

Daniel, João (2004). *Tesouro descoberto no Máximo Rio Amazonas 1722-1776, vol. I*. Rio de Janeiro: Contraponto Editora.

Del Cairo, Carlos *et al.* (2014). Naturalezas, subjetividades y políticas ambientales en el Noroccidente amazónico: reflexiones metodológicas para el análisis de conflictos socioambientales. En *Boletín de Antropología*, vol. 29, nº 48, 13-40. [Universidad de Antioquia, Medellín].

Delgado Ramos, Gian Carlo (2013). ¿Por qué es importante la ecología política?. En *Revista Nueva Sociedad*, nº 244, 47-60. Buenos Aires.

Deustua, José (2004). La minería en las Américas en el siglo XIX: el desarrollo de economías sociales. En *Revista Historias*, nº 58, 83-96. [Revista de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, México].

Dias dos Santos, Ailton (2014). Os Megaprojetos, o BNDES e o Tema das Salvaguardas Socioambientais. Em Paul Little (org.). *Os novos desafios da Política Ambiental brasileira*. Brasília: IEEB, 344-366.

Domingues, José Mauricio (2012). *Desarrollo, periferia y semiperiferia en la tercera fase de la modernidad global*. Buenos Aires: CLACSO, Colección Sur-Sur.

Dourojeanni, Marc (2009). Hidroeléctricas en la Amazonia peruana. En *La Revista Agraria*, nº 109, 4-6.

Dourojeanni, Marc *et al.* (2009b). *Explotación de recursos naturales e infraestructuras: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que significan para el futuro?*. Lima: Pro Naturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.

Duprat, Deborah (2013). “O direito sob o marco da plurietnicidade / multiculturalidade”. En Duprat, Deborah (org.). *Pareceres jurídicos: direito dos povos e comunidades tradicionais*. 3ª Ed. Manaus: UEA Edições, 9-20.

Escobar, Arturo (2005). O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-desenvolvimento?. En Edgardo Lander (org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires, CLACSO, Colección Sur-Sur, 133-168.

Escobar, Arturo (2005b). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Daniel Mato, Daniel (coord.). *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 17-31.

Espinosa, Oscar (2014). Los planes de vida y la política indígena en la Amazonia peruana. En *Revista Anthropologica*, año XXXII, nº 32, 87-14.

Fajardo Montana, Dario (2009). *Territorios de la agricultura colombiana*. Universidad Externado de Colombia/Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social-CIDS. Cuadernos del CIDS/Serie 1, vol. 12.

Farage, Nádia (1991). *As muralhas dos sertões. Os povos indígenas no Rio Branco e a colonização*. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra; ANPOCS.

Fatheuer, Thomas (2014). *Nueva economía de la naturaleza: una introducción crítica*. México DF: Fundación Heinrich Böll. Serie Ecología, vol. 35.

Fearnside, Philip M. (2015). *Hidrelétricas na Amazônia. Impactos ambientais e sociais na tomada de decisões sobre grandes obras. Vol. 1*. Manaus: INPA.

Fearnside, Philip M. (2015b). *Hidrelétricas na Amazônia. Impactos ambientais e sociais na tomada de decisões sobre grandes obras. Vol. 2*. Manaus: INPA.

Ferrarini, Sebastião Antonio (2013). *Encontro de civilizações – alto Solimões e as origens de Tabatinga*. Manaus: Editora Valer.

Ferreira Feitosa, Saulo y Brighenti, Clóvis Antônio (org.) (2014). *Empreendimentos que impactam terras indígenas*. Brasília: CIMI-Conselho Indigenista Missionário.

Floriani, Dimas (2004). *Conhecimento, meio ambiente e globalização*. Curitiba: Editora Juruá.

Forest Peoples Programme/FPP (2009). *Guyana: los pueblos indígenas, los bosques y las iniciativas climáticas. Serie de informes sobre derechos, bosques y clima*. Accesible en: <<http://www.forestpeoples.org/es/topics/redd-and-related-initiatives/image/guyana-los-pueblos-indigenas-los-bosques-y-la-iniciativas>>. Último acceso el 21/07/2016.

Frank, André Günder (1965). *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. Texto completo en <<http://www.eumed.net/cursecom/textos/>>.

Furtado, Celso (1974). *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana*. 5ª Edición. Madrid: Siglo XXI Edit.

Galeano, Eduardo (2003). *Las venas abiertas de América Latina*. Madrid: Editorial Siglo XXI.

García Jordán, Pilar (coord.) (1995). *La construcción de la amazonia andina (siglos XIX-XX). Procesos de ocupación y transformación de la Amazonia peruana y ecuatoriana entre 1820 y 1960*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Glass, Verena (2013). *Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará*. Belem: Reporter Brasil. Accesible en: <<http://reporterbrasil.org.br/documentos/Dende2013.pdf>>.

Granovsky, Martín (2014). Entrevista a Boaventura de Sousa Santos. En *Revista Latinoamericana de Investigación Crítica*, año I, nº 1, 239-254. Buenos Aires: CLACSO.

Greenpeace (2012). *Carvoaria Amazônia. Como a indústria de aço e ferro gusa está destruindo a floresta com a participação de governos*. Manaus: Greenpeace.

Guber, Rosana (2011). La observación participante como sistema de contextualización de los métodos etnográficos: la investigación de campo de Esther Hermitte en los Altos de Chiapas, 1960-1961. En *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, vol. 1, nº 2, 60-90. [Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata).

Gudynas, Eduardo (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Varios: *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: Centro Andino de Acción Popular/CAAP y Centro Latinoamericano de Ecología Social/CLAES, 187-225.

Gudynas, Eduardo (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Publicado en *Revista Nueva Sociedad* nº 237, 128-146. Buenos Aires.

Haesbaert, Rogério (2004). *Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade*. Porto Alegre, 2004. Disponible en: <<http://www.ufrgs.br/petgea/Artigo/rh.pdf>>. Último acceso 21/07/2016.

Haesbaert, Rogério (2007). *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Harvey, David (2004). El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión. En *Revista Socialist Register: El nuevo desafío imperial*, 99-130. Accesible en: <<http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14997/11983#.V5HkqaITFd8>>

Heck, Carmen (coord.) (2014). *La realidad de la minería ilegal en países amazónicos*. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Heck, Egon Dionisio y Loebens, Günter Francisco (2012). 40 anos de resistência indígena passados a limpo. Em Egon Dionisio Heck (org.). *Povos Indígenas: aqueles que devem viver – Manifesto contra os decretos de extermínio*. Brasília: CIMI – Conselho Indigenista Missionário. 61-64.

Herrera Wassilowsky, Alexander (2009). *La recuperación de tecnologías indígenas. Arqueología, tecnología y desarrollo en los Andes*. Buenos Aires: CLACSO.

IHU On-Line (2010). Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Teko Porã. O Bem Viver. *Revista do Instituto Humanitas Unisinos*, año X, nº 340.

Isidoro de Moraes, Vângela Maria (2013). *Filhos de Deus e Netos de Makunaima: apropriações do catolicismo em terras Makuxi*. Fortaleza: Tesis Doctoral presentada por la autora en el Programa de Post-Graduación en Sociología de la Universidade Federal de Ceará.

Jara, Alvaro (1966). *Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana*. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones de Historia Americana.

Jones, Alisdair *et al.* (2011). A mineração brasileira. Um relatório da Global Business Reports. Em *Revista Engeneering & Mining Journal*.

Kawulich, Barbara (2005). La observación participante como método de recolección de datos. En *Forum: Qualitative Social Research*, vol. 6, nº 2, art. 43.

Kill, Jutta *et al.* (2012). *O Comércio de Carbono. Como funciona e por que é controvertido*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll. Reino Unido: FERN.

Koch-Grunberg, Theodore (2006). *Do Roraima ao Orinoco. V. 1: observações de uma viagem pelo norte do Brasil e pela Venezuela durante os anos de 1911 a 1913*. Tradução Cristina Alberts-Franco. - São Paulo: Editora UNESP.

Kofman, Diego (2011). Biodiesel: La consolidación y profundización del agronegocio en el contexto de la crisis del modelo energético neoliberal. En *Revista Energía y Equidad. Reflexión y acción para la sustentabilidad en América Latina*, año 1, nº 1, 39-54.

Krause, Mariane (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. En *Revista Temas de Educación*, nº 7, 19-39.

Leff, Enrique (2000). Complexidade, interdisciplinariedade e saber ambiental. En Arlindo Philippi Jr. (org.). *Interdisciplinariedade em ciências ambientais*. São Paulo: Signus, 309-335.

Leff, Enrique (2001). La insoportable levedad de la globalización: la capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales de la sustentabilidad. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 7, nº 1, 149-160.

Leff, Enrique (2004). *Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. México DF: Siglo XXI Editores.

Leff, Enrique (2005). La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En *Seminario Internacional Alternativas Globalización*. Rio de Janeiro. Disponible en: <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf>>.

Leff, Enrique (2006). La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En Héctor Alimonda (org.): *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO, 21-40.

Leff, Enrique (2007). Complejidad, racionalidade ambiental y diálogo de saberes. En *Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente*, nº 16, 11-17. [Editora UFPR].

Little, Paul (2002). Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. *Série Antropologia* nº 322, [Departamento de Antropologia. Instituto de Ciências Sociais. Universidade de Brasília-UNB].

Little, Paul (2002b). Etnodesenvolvimento local: autonomia cultural na era do neoliberalismo global. En *Revista Tellus*, vol. 2, nº 3, 33-52. Campo Grande-MS.

Little, Paul (2006). Ecologia Política como etnografia: um guia teórico e metodológico. En *Horizontes Antropológicos*, vol. 12, nº 25, 85-103. Porto Alegre.

Little, Paul (2013). *Megaproyectos en la Amazonia. Un análisis geopolítico y socioambiental con propuestas de mejor gobierno para la Amazonia*. Ed. Red Jurídica Amazónica, Articulación Regional Amazónica y DAR.

Little, Paul (org.) (2014). *Os novos desafios da política ambiental brasileira*. Brasília: IEB Mil Folhas.

Little, Paul (2014b). O novo espaço público pan-amazônico: construindo caminhos para a governança socioambiental. En Paul Little. *Os novos desafios da política ambiental brasileira*. Brasília: IEB Mil Folhas, 404-433.

Loebens, Güenter Francisco y Neves, Lino João de Oliveira (org.) (2011). Povos indígenas isolados na Amazônia – Uma luta pela sobrevivência. *Serie “Nova Antropologia da Amazônia”*. Manaus: Editora de la Universidad Federal de Amazonas – EDUA y Consejo Indigenista Misionero – CIMI.

López Bárcenas, Francisco y Eslava Galicia, Mayra (2011). *El mineral o la vida. La legislación minera en México*. México DF: COAPI.

López Soria, José Ignacio (2013). Plenitud en vez de desarrollo. En revista *Reflexión. Ciencias Humanidades Arte*, año I, nº 1, 30-37. Lima/Perú.

MacDonnell, Ronaldo (2011). *Onças, antas e raposas. Mitos do povo makuxi registrados pelo monge beneditino Dom Alcuíno Meyer, O.S.B., entre 1926 e 1948*. Brasília: Diocese de Roraima.

Machado Aráoz, Horacio (2011). El auge de la minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo. En Héctor Alimonda (coord.). *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería e América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Machado Vieira, Elaene (1971). *A exploração de diamantes em Roraima de 1939 a 1970*. Santa María/RS: Universidade Federal de Santa María.

Malerba, Julianne (2014). Reordenamento normativo e nova política mineral. En Paul Little: *Os novos desafios de política ambiental brasileira*. São Paulo: Ed. IEB Milfolhas, 368-402.

Marañón Pimentel, Boris (2014). Crisis global y descolonialidad del poder: la emergencia de una racionalidad liberadora y solidaria. En Boris Pimentel Marañón (coord.): *Buen Vivir y Descolonialidad: crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*. México, UNAM, 21-60.

Martínez, Mario *et al.* (2013). *La normativa minera en Colombia*. Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia.

Martínez Alier, Joan (2005). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. 3ª ed. Barcelona: Icaria Editorial.

Martins, Heron *et al.* (2012). *Áreas Protegidas críticas na Amazônia Legal*. Belém: IMAZON.

Matthes, Sebastian y Crncic, Zeljko (2012). O extrativismo. En *Dicionário online, social e política. Termos-chave das Américas: Política, as desigualdades e as relações Norte-Sul, versão 1.0*. Accesible en: <http://elearning.uni-bielefeld.de/wikifarm/fields/ges_cias/field.php/Main/Unterkapitel53>.

Mathis, Armin *et al.* (1997). *Riqueza volátil. A mineração de ouro na Amazônia*. Belém: Cejup.

Mauro, Víctor Ferri (2011). Territorialidade e processos de territorialização indígena no Brasil. En *IV Seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade: saberes tradicionais e formação acadêmica, 2011, Campo Grande*. Accesible en: <http://elearning.uni-bielefeld.de/wikifarm/fields/ges_cias/field.php/Main/Unterkapitel53>.

McMillan, Gordon J. (1997). Os impactos ambientais e sociais da mineração informal na Amazônia. En Reginaldo Barbosa *et al.*: *Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima*. Manaus: INPA.

Melatti, Julio Cesar (2001). *A grande árvore*. Accesible en: <<http://www.juliomelatti.pro.br/mitos/m08arvore.pdf>>

Mikkelsen, Cæcilia (org. y ed.) (2015). *El Mundo Indígena 2015*. Copenhage: Ed. IWGIA.

Monteiro Machado, Marina (2006). *A trajetória da destruição. Índios e Terras no Império do Brasil*. Tesis de Máster presentada el Programa de Post-Graduación em Historia Social de la Universidad Federal Fluminense.

Montgomery, Alexandra y Lyons, Amanda (2015). “¿Por qué acudir a instancias internacionales? La importancia del litigio doméstico en sintonía con el litigio internacional”. En Zagallo, Guilherme *et al.*: *Senderos de la justicia. Instrumentos de litigio y defensa de comunidades afectadas por la minería*. São Paulo: Fundación Rosa Luxemburgo, Justiça Global y Justiça nos Trilhos.

Moraes Muniz, Lenir (2009). Ecologia Política: o campo de estudo dos conflitos sócio-ambientais. En *Revista Pós Ciências Sociais*, vol. 6, nº 12, 181-196, [Programa Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão].

Neves, Eduardo Góes (2006). *Arqueologia da Amazônia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Nunes Coelho, Mª Célia y Monteiro, Maurilio de Abreu (org.) (2007). *Mineração e reestruturação espacial na Amazônia*. Belém: NAEA.

Observatorio de los Conflictos Mineros en América Latina/OCMAL (2015). *Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión – estado de situación en 2014*. Ed, Equipo OCMAL.

Ochoa Zuluaga, Germán Ignacio (2011). Ciudades, ambiente y diversidades urbanas en la Amazonia. En: *Amazonia Colombiana: Imaginarios y realidades*

Offen, Karl (2009). O mapeas o te mapean: mapeo indígena y negro en América Latina. En *Tabula Rasa*, nº 10, 163-189. Bogotá.

Oliveira Lima, Frederico Alexandre de (2014). *Soldados da borracha – Das vivências do passado às lutas contemporâneas*. Manaus: Valer.

Oliveira Souza, Arlene; Silva Lima, Carmen Lúcia; Frank, Nelita (org.) (2014). A luta dos trabalhadores rurais e pescadores de Caracaraí (RR) em defesa de seus direitos. Manaus: UEA. [Caderno Nova Cartografia Social como Instrumento de Gestão Territorial contra o Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de povos e comunidades tradicionais, nº 9]

Oxfam International (2016). *Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe*. Editora Búho.

Pacheco de Oliveira, João (2010). “Narrativas e imagens sobre povos indígenas e Amazônia: uma perspectiva processual da fronteira”. Em *Revista Indiana*, nº 27, 19-46.

Padilla Ormeño, Cesar (2009). La expansión de las industrias extractivas y los desafíos para las organizaciones en América Latina. En CIDSE: *América Latina: Riqueza privada, pobreza pública*. Quito: Agencia Latinoamericana de Información - ALAI, 7-18.

Pereira Oliveira, Marcus Vinicius y Carvalho de Moraes, M^a Dione (2012). Povos, territórios e águas do sertão. Trabajo presentado en *X Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste e Pré-ALAS Brasil*, 4 a 7 de septiembre de 2012, Teresina-PI, Brasil. Accesible en: <<http://www.sinteseeventos.com.br/ciso/anaisxvciso/resumos/GT28-25.pdf>>. Último acceso 21/07/2016.

Pérez Sáenz de Urturi, Juan-Eusebio (1985). La minería colonial americana bajo la dominación española. En *Boletín Millares Carlo*, nº 7-8, 53-120.

Pinedo Macedo, Donaldo y Calsina Holgado, Marko (2014). *Extracción de madera, oro y gas en la Amazonia Sur del Perú: Impactos y controversias*. Madrid: Selvas Amazónicas y Centro Cultural José Pío Aza.

Pitta, Fábio et al. (2014). *Empresas transnacionais e Produção de Agrocombustíveis no Brasil*. São Paulo: Ed. Outras Expressões. Disponible en <www.social.org.br>, [Rede Social de Justiça e Direitos Humanos].

Ponce García, Andrea (2013). Ecología política y minería a gran escala. Estudio del proyecto “Mirador” en Ecuador. En: Gian Carlo Delgado Ramos (coord.). *Ecología política del extractivismo en América Latina. Casos de resistencia y justicia socioambiental*. Buenos Aires: CLACSO, 233-250.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2001). *La reinvencción de los territorios*. Publicado en: América Latina en Movimiento nº 445: <<http://alainet.org/publica/445.phtml>>.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2002). Da geografia às geografias. Um mundo em busca de novas territorialidades. En Ana Esther Ceceña y Emir Sader: *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*. Buenos Aires: CLACSO, 217-256.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2005). *Legado político e moral de Chico Mendes*. Publicado con fecha 30/07/2015 en Red de Ecología Social: <<http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/PortoGonLegadoChicoMendes.htm>>.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2008). *Del desarrollo a la autonomía. La reinvencción de los territorios*. Publicado en América Latina en Movimiento, nº 445: <<http://alainet.org/publica/445.phtml>>

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2008b). De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-americana. En Ana Esther Ceceña (coord.): *De los saberes de la emancipación y de la dominación*. Buenos Aires, 1ª Ed.: CLACSO, 37-52.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009). *De soberanía, de proteccionismo e de territórios*. Publicado en América Latina en Movimiento: <<http://alainet.org/active/29613><=es>. Último acceso en 21/07/2016.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009b). *As consequências sociais e ambientais da prioridade ao monocultivo*. Publicado en América Latina en Movimiento: <<http://alainet.org/active/31211><=es>. Último acceso en 21/07/2016.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2010). *A luta pela reapropriação social da natureza*. Publicado en América Latina en Movimiento: <<http://alainet.org/active/39738><=es>. Último acceso en 21/07/2016.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2010b). *De Sabores, de Saberes e de Poderes*. Publicado en América Latina en Movimiento: <<http://www.alainet.org/pt/active/39084>>. Último acceso en 21/07/2016.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2012). A Ecologia Política na América Latina: reapropriação social da Natureza e reinvenção dos territórios. En *Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis*, vol. 09, nº 1, 16-50. Florianópolis.

Prebisch, Raúl (1987). Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo. En *Revista Comercio Exterior*, vol. 37, nº 5. México DF.

Preciado, Jaime (2008). América Latina no Sistema-Mundo: questionamentos e aliança centro-periferia. Publicado en *Caderno CRH*, vol. 21, nº 53, 9-23 [Universidade Federal de Bahia/UFBA – Brasil].

Preciado, Jaime y Uc, Pablo (2010). La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional. *Geopolítica (s)*.

Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 1, núm. 1, 65-94. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Preciado, Jaime y Uc, Pablo (2010b). *La(s) autonomía(s) en América Latina. Una expresión socio-espacial del Estado novísimo y sus efectos en el proceso de integración regional*. Toulouse: Axe IX, Symposium 37: VI Congreso CEISAL. En: <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00502206/document>>.

Puerta Silva, Claudia (2010). El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el Estado colombiano. En *Boletín de Antropología*, Vol. 24, nº 41, 149-179. [Medellín, Universidad de Antioquia].

Queixalós, Francisco y Renault-Lescure, O. (org.) (2000). *As línguas amazônicas hoje*. São Paulo: IRD/ISA/Museu Paraense Emílio Goeldi.

Quijano, Aníbal (1998). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*. Lima: Sociedad y Política Ediciones.

Raffestin, Claude (2013). *Por una geografía del poder*. Coedición Fideicomiso Felipe Teixidor y Montserrat Alfau de Teixidor.

RAISG, 2012. *Amazonia bajo presión*. Accesible en <www.raisg.socioambiental.org>.

Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (2014). *Empresas Transnacionais de Agrocombustíveis no Brasil*. São Paulo: Ed. Outras Expressões.

Regino Montes, Adelfo y Torres Cisneros, Gustavo (2010). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: base de la nueva relación entre los pueblos indígenas, los Estados y las sociedades. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA, 146-177.

Rodrigues, Francilene dos Santos (1996). *"Garimpando" a sociedade roraimense: uma análise da conjuntura sócio-política*. Dissertação de Mestrado. Curso de Mestrado Internacional em Planejamento do Desenvolvimento do NAE da Amazônia da UFPA. Belém.

Rodríguez-Piñero, Luis (2010). "Cuando proceda": vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas según la Declaración. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.). *Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA, 336-365.

Rolla, Alicia y Ricardo, Fany (org.) (2013). *Mineração em Terras indígenas na Amazônia Brasileira 2013*. São Paulo: ISA.

Sack, Robert Davis (1986). *Human Territoriality: Its Theory and History*. Cambridge: University Press.

Santilli, Márcio (2014). Temporada de Ataque aos Territórios da Diversidade. En Paul Little, (org): *O novos desafios da Política Ambiental brasileira*. Brasília, IEEB, 304-340.

Santilli, Paulo (1989). *Os Macuxi: historia e política no século XX*. Campinas: Tesis de Post-Grado en Ciencias Sociales presentada por el autor al Departamento de Ciencias Sociales, Instituto de Filosofia y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas.

Santilli, Paulo (2002). Trabalho escravo e brancos canibais. Uma narrativa histórica Macuxi. En Bruce Albert y Alcida Rita Ramos: *Pacificando o branco*. São Paulo: Editora UNESP, 487-502.

Santilli, Paulo (2011). *Pemongon Patá: Território Macuxi, rotas de conflito*. São Paulo: Ed. UNESP.

Santos, Milton (1993). Los espacios de la globalización. En *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, nº 13, 69-77. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense.

Santos, Milton (1995). A questão do meio ambiente: desafios para a construção de uma perspectiva transdisciplinar. En *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, nº 15. 695-705. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense.

Santos, Milton (1996). Los nuevos mundos de la geografía. En *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, nº 16, 5-27. Madrid: Servicio de Publicaciones Universidad Complutense.

Santos, Milton (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: 1ª Ed. Editorial Ariel, S.A.

Santos, Milton (2005). O retorno do território. En *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, año 6, nº 16. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos.pdf>>. Último acceso el 21/07/2016.

Santos Haum, João y Bastos dos Santos, Cleison (2013). Impactos socioambientais da dendeicultura em comunidades tradicionais na Amazônia paraense. En *ACTA. Geográfica, Boa Vista*. Ed. Esp. Geografia Agraria, p. 63-80.

Schmink, Marianne y Wood, Charles H. (2012). *Conflitos sociais e a formação da Amazônia*. Belém: Editora UFPA.

Schneider Santos, João Orestes (2003). "Geotectônica dos Escudos das Guianas e Brasil Central". En Bizzi, Luis A. et al.: *Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil*. Brasília: CPRM. Disponible em: <http://www.cprm.gov.br/didote/pdf/geologia_tectonica.pdf>.

Schwade, Egydio (2015). *Amazônia: velhos e novos instrumentos de saque*. Disponible en: <<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=8117>>. Último acceso en 21/07/2016>

Serrano Mancilla, Alfredo y Martín Carrillo, Sergio (2011). *La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina*. Quito: Fundación Friedrich Ebert, FELS-ILDIS.

Silva, Priscila Luiza da (2010). A discussão do território no âmbito dos grupos indígenas. En *Anales XVI Encontro Nacional dos Geógrafos*. Porto Alegre, 2010.

Svampa, Maristella (2008). La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. Versión ampliada y actualizada de artículo publicado en Maristella Svampa (coord.): *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Svampa, Maristella (2011). *Los perversos versos de la minería*. Disponible en <<http://www.servindi.org/actualidad/50155>>. Último acceso el 21/07/2016.

Svampa, Maristella (2012). Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial e pensamiento crítico en América Latina. En *OSAL-Observatorio Social de América Latina*, año XIII nº 32. CLACSO.

Svampa, Maristella (2013). “Consenso de los *Commodities*” y lenguajes de valoración en América Latina. En *Revista Nueva Sociedad*, nº 244, 30-47.

Tapia, Luis (2004). *Territorio, territorialidad y construcción regional amazónica*. Quito: Ediciones Abya Yala.

Taylor, Peter J. y Flint, Colin (2000). *Geografía Política. Economía-mundo, Estado-Nación y Localidad*. Madrid. Trama Editorial, S.L.

Teixeira, Neiza (2012). *Para alguém ou para além de nós*. Manaus: Ed. Valer.

Terena, Marcos (2013). O movimento indígena como voz de resistência. En Venturi, Gustavo y Bokany, Vilma (org.): *Indígenas no Brasil: demandas dos povos e percepções da opinião pública*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 49 – 64.

Terra de Direitos (2013). Direitos Humanos, desenvolvimento e luta social. Curitiba: *Cadernos da Amazônia*. Disponible en: <<http://terradedireitos.org.br/wp-content/uploads/2013/07/Cadernos-Amaz%C3%B4nia.pdf>>. Último acceso 21/07/2016.

Todorov, Tzvetan (1982). *La conquista de América. El problema del otro*. México DF: Siglo XXI Editores.

Tuan, Yi Fu (1983). *Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência*. São Paulo: Difel.

Vanthuy Neto, Raimundo (2000). *Dirigir almas e servir ao jeito de muitos. A missão dos beneditinos junto aos povos indígenas de Roraima – 1909/1948*. Tesis de Especialización en Teología Dogmática, presentada por el autor en la Pontificia Faculdade de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, São Paulo.

Veloso dos Santos, Sergio (2011). *Os BRICS e a Economia Verde: Rumo à Rio+20*. Rio de Janeiro: Instituto de relações Internacionais, 9. [BRICS Policy Center].

Veloso dos Santos, Sergio (2012). *A Integração Amazônica ao Capitalismo Global: do regionalismo fechado ao aberto*. Dissertação (mestrado) – PUC Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais.

Ventura Fernández, Luis (2012). Territorialidades e integração: o Escudo Guianês no contexto da Iniciativa IIRSA. Publicado em *Revista Textos & Debates*, nº 21, 37-58. Boa Vista/Roraima.

Verdum, Ricardo (2012). *As obras de infraestrutura do PAC e os povos indígenas na Amazônia*. Observatório de Investimentos na Amazônia/INESC, Nota Técnica 9.

Veríssimo, Adalberto *et al.* (org.) (2011). *Áreas protegidas na Amazônia brasileira: avanços e desafios*. Imazon/ISA.

Vieira, Jaci Guilherme (2014). *Missionários, fazendeiros e índios em Roraima: a disputa pela terra – 1777 a 1980*. 2ª Ed. Boa Vista: Editora UFRR.

Villas Bôas, Hariessa Cristina (2013). *Mineração em terras indígenas. A invisibilidade do direito à consulta prévia como um processo e a visibilidade ao flagrante desrespeito de ouvir e consultar os verdadeiros titulares desses direitos*. Comunicación presentada en evento ocurrido los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Rio de Janeiro. Texto accesible:

<http://www.cetem.gov.br/images/palestras/2013/sustentabilidade/artigos/hariessa_boas.pdf>

Viveiros de Castro, Eduardo (2004). Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. En IWGIA: *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhagen: Editores Alexandre Surrallés y Pedro Garcia Hierro. Documento nº 39, 37-81.

Volpato Curi, Melissa (2007). Aspectos legais da mineração em terras indígenas. En *Revista de Estudos e Pesquisas*, vol. 4, nº 2, 221-252. Brasília: FUNAI.

Wallerstein, Immanuel (1979). *El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*. Madrid. Siglo XXI Editores.

Wallerstein, Immanuel (2006). *Análisis de Sistemas-Mundo*. Una introducción. Madrid. Siglo XXI Editores.

Wanderley, Luiz Jardim de Moraes (2008). *Conflitos e Movimentos Sociais Populares em Área de Mineração na Amazônia Brasileira*. Rio de Janeiro: UFRJ/PPGG. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Geografia, curso de mestrado em Geografia.

Wessendorf, Katherine (org. y ed.) (2011). *El Mundo Indígena 2011*. Copenhagen: Ed. IWGIA.

Zibechi, Raúl (2014). El estado de excepción como paradigma político del extractivismo. En Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (comp.): *Territorios en disputa, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México DF. 1ª ed. Bajo Tierra Ediciones, 76-88.

Textos jurídicos

(1967) Decreto-Ley nº 227 de 28 de febrero de 1967 que da nueva redacción al Código Minero vigente desde 1940.

(1973) Ley nº 6001 de 19 de diciembre de 1973, que dispone sobre el Estatuto do Índio.

(1983) Decreto 88.985/83 del Ministerio de la Justicia del Gobierno de Brasil, que dispone sobre la apertura de las tierras indígenas a la actividad minera empresarial.

(1983) Decreto 88.118/83 del Ministerio de la Justicia, que dispone de los procedimientos para la demarcación de las tierras indígenas.

(1983) Proyecto de Ley Nº 1179/1983 del Sr. Mozarildo Cavalcanti, que autoriza al Poder ejecutivo la apertura y explotación de garimpo de casiterita de Surucucus.

(1988) Constitución Federal de Brasil, de 5 de octubre de 1988.

(1989) Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo/OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

(1989) Ley 7.805 de 18 de julio 1989, que crea el Régimen de Permiso de Labra Garimpeira.

(1990) Decreto 98.812 de 9 de enero de 1990, que regula la Ley 7.805/89.

(1990) Proyecto de Ley nº 260/90 que define la hipótesis de 'relevante interés público de la Unión' para fines del artículo 231 de la Constitución.

(1991) Proyecto de Ley nº 2.057/91, que dispone sobre el Estatuto de las Sociedades Indígenas.

(1996) Decreto nº 1775 de 8 de enero de 1996, que dispone sobre el procedimiento administrativo de demarcación de las tierras indígenas.

(1996) Proyecto de Ley nº 1610/96 que dispone sobre la exploración y aprovechamiento de recursos minerales en tierras indígenas.

(2000) Propuesta de Enmienda a la Constitución/PEC nº 215/00 que propone añadir a las competencias exclusivas del Congreso Nacional la de aprobación de la demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios.

(2000) Ley nº 9.985 de 18 de julio de 2000 que crea el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza.

(2007) Decreto nº 6.040 de 7 de febrero de 2007 que crea la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales.

(2012) Proyecto de Ley Complementar nº 227/12, que regula los bienes de interés público de la Unión a fin de demarcación de tierras indígenas.

(2012) Orden nº 303, de 16 de julio de 2012, que dispone sobre salvaguardas institucionales a las tierras indígenas.

(2015) Orden Interministerial nº 60 de 24 de marzo de 2015 que establece procedimientos administrativos que disciplinan la actuación de órganos y entidades de la Administración Pública Federal en procesos de licenciamiento ambiental.

(2015) Ley nº 13.123 de 20 de mayo de 2015 que dispone sobre el acceso al patrimonio genético, la protección y acceso al conocimiento tradicional asociado y sobre la repartición de beneficios para conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

(2015) Decreto Legislativo 119/15 que autoriza el aprovechamiento de agua en trechos de la hidrografía de la cuenca del Tapajós.

(2016) Proyecto de Ley del Senado nº 169/2016, que dispone sobre el Estatuto de los Pueblos Indígenas.

Documentos de organismos oficiales

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012. Publicación de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2012.

Belchior, Miriam. (2013). Comissão Mixta de Orçamento. Brasília, 28 de maio de 2013. Presentación de Informe del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gesti3n a la Comisi3n Mixta de Presupuesto.

CEPAL (2008). Renta petrolera y minera en pa3ses seleccionados de Am3rica Latina. *Colecci3n Documentos de proyectos*. [Divisi3n de Recursos Naturales e Infraestructura/CEPAL]. Santiago de Chile.

CEPAL (2013). Rentas de recursos naturales no renovables en Am3rica Latina y el Caribe: evoluci3n y participaci3n estatal, 1999-2010. Santiago de Chile. *Serie Seminarios y Conferencias*. Publicaci3n de las Naciones Unidas. ISSN 1680-9033.

CIDH (2013). Pueblos ind3genas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Am3ricas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser. L/V/II. Doc. 47/13.

Clavero, Bartolom3 (2009). Cometido del Foro Permanente para las Cuestiones Ind3genas a la luz del valor vinculante y con vistas a la mayor eficacia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [Encuentro Grupo de Expertos Internacionales – Secretariado del Foro Permanente de Asuntos Ind3genas/Divisi3n de Pol3ticas Sociales y Desarrollo/Departamento de Asuntos Econ3micos y Sociales].

DNPM –Sum3rio Mineral 2013.

EPE- Empresa de Pesquisa Energ3tica/MME, (2012)). An3lise de Conjuntura dos Biocombust3veis. S3o Paulo, 2012.

International Energy Agency-IEA, 2010. World Energy Outlook 2010.

Jorge Birol, Alline Pedra (coord.) (2012). Pesquisa ENAFRONA. Diagnóstico sobre tráfico de pessoas nas áreas de fronteira. Brasília: Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, Ministério da Justiça, Governo Federal Brasil.

MDIC / MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2010. Conhecendo o Brasil em números. Secretaria de Comércio Exterior. Brasília, 2010.

MME/Ministério de Minas e Energias, 2010. Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis. Edição nº 35, novembro 2010.

MME/Ministério de Minas e Energias (2011). Plano Nacional de Mineração 2030. Geologia, Mineração e Transformação Mineral.

PNUMA, 2012. GEO 5. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Resumen para responsables de políticas. Publicado por Naciones Unidas. 2012.

Saade Hazin, Miryam (2013). Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú. CEPAL – *Serie Macroeconomía del Desarrollo* Nº 137. Santiago de Chile, 2013.

Documentos audiovisuales

Conferencia "Economía política y ecología política del extractivismo", a cargo de Eduardo Gudynas. Facultad de Ciencias Económicas/Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 18/04/2013. Centro Investigaciones del Desarrollo. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=geAtIA4Y71M>>. Último acceso, 11/10/2014.

Documental "Enquanto o trem não passa". Mídia Ninja, 2013. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=cEorAlteUWA>>.

Documental "Mineradoras doam mais à disputa pela Câmara". Valor, 2014. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=1Kvj5mSZ1KA>>.

Documental "Iglesias y Minería en América Latina". JUPIC-SVD/BRN, 2015. Accesible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=l1Qvgctnbck>>.

Entrevistas grabadas en audio

- (1-2012). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Boa Vista, 26/06/2012
- (2-2012). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Boa Vista, 01/07/2012
- (4-2012-A). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Maturuca, 27/09/2012
- (4-2012-B). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Maturuca, 27/09/2012
- (5-2012-A). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Maturuca, 28/09/2012
- (10-2013). Entrevista con dirigente indígena Raposa Serra do Sol, Tabatinga, 21/01/2013.
- (14-2013). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Tabatinga, 21/01/2013.
- (W-PA-1). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Willimon, 22/01/2013.
- (W-JU-1). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Willimon, 22/01/2013.
- (W-CAN-1). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Willimon, 22/01/2013.
- (W-JA-1). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Willimon, 22/01/2013.
- (W-OR-1). Entrevista grupal con dirigentes indígenas Raposa Serra do Sol, Willimon, 22/01/2013.